

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Sociología y Estudios de Género

Convocatoria 2011-2014

Tesis para obtener el título de Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en
Estudios Andinos

Los Límites de la Revolución en el Socialismo del Siglo XXI: Las Élités Empresariales en las
Luchas por la Hegemonía en los Gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa

Jorge Orlando Blanco Suárez

Asesora: María Cristina Cielo

Lectores: Ana Carolina Teixeira, Jorge Luis Acanda González, Francisco Durand y Felipe
Burbano de Lara

Quito, enero de 2023

Dedicatoria

En memoria de mi madre, María E. Suárez, quien se desvaneció mientras estaba en este proceso. Todo mi amor y gratitud para una mujer luchadora y comprometida con su familia.

A mis hijas, Sara Victoria y María Emilia, la felicidad está en el brillo de sus ojos

A Marcela, el Amor, la compañía y la comprensión

A mis hermanas y hermanos por su solidaridad de siempre

A los pueblos de América Latina que persisten en la búsqueda de alternativas a los modelos dominantes

Índice de contenidos

Resumen	10
Agradecimientos.....	12
Introducción	13
Justificación y Pertinencia de la Investigación	19
Apuesta teórica, hipótesis y estructura del documento	21
Capítulo 1. Perspectivas teóricas sobre las relaciones entre Estado y Elites empresariales en América Latina.....	30
1.1. Elección racional en los estudios sobre empresarios y Estado.....	30
1.2. Estructuralismo y estructural funcionalismo	32
1.3. Empresarios y lucha por la hegemonía	34
1.4. Hacia una síntesis teórica: Elites empresariales, Estado y Hegemonía.....	38
Capítulo 2. Estado, hegemonía y élites empresariales	42
2.1. Estado y Hegemonía.....	42
2.2. Teorías de la Hegemonía y Estado. Del postmarxismo al marxismo Gramsciano	45
2.3. Un necesario retorno a Gramsci	52
2.4. Hegemonía y Estado en los aportes del marxismo y las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX	62
2.5. Reflexiones para América Latina. Las élites empresariales en los procesos hegemónicos	75
Capítulo 3. Élités económicas y estado en Bolivia y Ecuador en el periodo “desarrollista” ...	84
Introducción	84
3.1. El caso boliviano. Acumulación de capital político y económico en el nacionalismo desarrollista	87
3.2. El caso ecuatoriano. Desarrollismo elitista y revolución nacionalista frustrada.....	108
Capítulo 4. Estado y élites empresariales en el neoliberalismo	140
Introducción	140
4.1. Ecuador: Fragmentación política, corporativismo y gradualismo neoliberal	141
4.2. Bolivia: Vicisitudes del neoliberalismo radical y bloque hegemónico político-empresarial	158
4.3. Conclusiones	177
Capítulo 5. Debilitamiento de los proyectos neoliberales en Bolivia y Ecuador.....	182
5.1. Economía política del colapso de la “democracia pactada”	185

5.2. Incremento de las tensiones sociales y construcción de nuevos proyectos hegemónicos en Bolivia.....	197
5.3. Tras las rutas de la crisis ecuatoriana. Fragmentación, inestabilidad política y depredación del Estado en las disputas contrahegemónicas.....	201
5.4. La erosión de la “partidocracia”, demagogia y depredación desde el Estado.....	202
5.5. Degradación de las condiciones de vida en Ecuador y fragmentación de alternativas políticas al neoliberalismo.....	211
Capítulo 6. Las élites empresariales en la reconfiguración del Estado de la Revolución Ciudadana.....	228
6.1. Hacia un nuevo Estado sin hegemonía. La propuesta de Correa y sus críticos.....	229
6.2. Las élites empresariales frente a la emergencia de la Revolución Ciudadana.....	250
6.3. El nuevo gobierno en ejercicio: el combate contra el Estado corporativizado.....	260
6.4. La reconfiguración del poder empresarial ecuatoriano en el marco del Proceso Constituyente.....	266
6.5. Las elites empresariales en la “Consolidación” de la Revolución Ciudadana.....	287
6.6. Elites empresariales ecuatorianas. Entre el rentismo y el combate ideológico.....	289
Capítulo 7. Economía Plural, hegemonía y élites empresariales en el gobierno de Evo Morales.....	335
7.1. Evo Morales, el proyecto hegemónico del gobierno de los movimientos sociales y el capitalismo andino amazónico.....	336
7.2. De la polarización a la hegemonía desde el Modelo Económico Plural.....	348
7.3. Elites empresariales en la consolidación de la hegemonía del MAS y Evo Morales ¿hacia la articulación hegemónica?.....	390
Conclusiones. Las élites en las luchas por la hegemonía en Ecuador y Bolivia.....	416
Referencias.....	425

Lista de ilustraciones

Tabla 3.1. Fuga de Capitales durante el gobierno de Banzer y la transición a la democracia	101
Tabla 3.2. Bolivia. Entrada neta de capitales privados a corto plazo 1970-1977	102
Tabla 3.3. Bolivia. Evolución de la Deuda Pública Externa 1951-1979.....	103
Tabla 3.4. Desigualdad del ingreso en América Latina 1961-1962.....	116
Tabla 3.5. Crecimiento del crédito por sector de la economía.....	123
Tabla 3.6. Exportaciones e importaciones de bienes y equipos (a).....	125
Tabla 3.7: Evolución del PBI y el crédito por ramas de actividad (a).	126
Tabla 4. 1. Bolivia. Inversión Extranjera directa Neta 1992-2000	174
Gráfico 7.1. Bolivia. Evolución de las exportaciones 1980-2019.....	347
Gráfico 7.2. Bolivia. Evolución de las Exportaciones 1980-2019.....	347

Lista de Abreviaturas

ABPE – Asociación de Bancos Privados del Ecuador

AC – Asamblea Constituyente

ADN – Acción Democrática Nacionalista

AGD – Agencia de Garantías de Depósitos

ANC – Acuerdo Nacional por el Cambio

ANFAB – Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas

ANAPO – Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas

ATPDEA – Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga

BCE – Banco Central del Ecuador

BEDE – Banco de Desarrollo Ecuatoriano

BM – Banco Mundial

BNF – Banco Nacional de Fomento

CAE – Corporación Aduanera Ecuatoriana

CAINCO - Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz

CAO – Cámara Agropecuaria de Oriente

CCC – Cámara de Comercio de Cuenca

CCEA – Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana

CCG – Cámara de Comercio de Guayaquil

CCPS – Comité Cívico Pro Santa Cruz

CCQ – Cámara de Comercio de Quito

CEE – Comité Empresaria Ecuatoriano

CEPB – Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

CEPSC – Confederación de Empresarios Privados de Santa Cruz

CEPC - Confederación de Empresarios Privados de Cochabamba

CFN – Corporación Financiera Nacional

CI – Conservación Internacional

CIG – Cámara de Industrias de Guayaquil

CIP – Cámara de Industriales de Pichincha

CNI – Cámara Nacional de Industrias de Bolivia

CNT - Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

COB – Central Obrera Boliviana

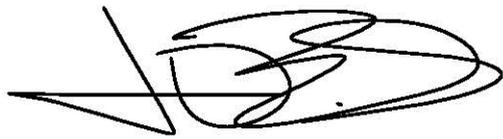
COMEXI - Consejo de Comercio Exterior e Inversiones
COMIBOL - Compañía Minera Boliviana
COMSUR – Compañía Minera del Sur
CONADE – Comité Nacional de Defensa de la Democracia
CONAIE – Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
CONARTEL - Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión
CONDEPA – Conciencia de Patria
CORPEI - Corporación de Promoción de Exportaciones
CPE - Constitución Política del Estado (Bolivia)
CPIG – Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil
CPIP – Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha
CPIG – Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil
CREO – Movimiento CREO, Creando Oportunidades
FAES – Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
FCCE – Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador
FEINE – Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador
FMI – Fondo Monetario Internacional
FSB - Falange Socialista Boliviana
ICE – Impuesto a Consumos Especiales
IESS – Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
INEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos
JC – Junta Cívica
MAS – Movimiento Al Socialismo
MIR – Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MPD – Movimiento Popular Democrático
MVR – Movimiento Nacionalista Revolucionario
NCPCyP – Nuevo Código de la Producción, Inversión y Comercio
NCPE – Nueva Constitución Política del Estado
ONG – Organización No Gubernamental
OPEP – Organización de Países Exportadores de Petróleo
PDC – Partido Demócrata Cristiano
PDVSA – Petróleos de Venezuela
PIB – Producto Interno Bruto
PK – Pachakutik

PRE – Partido Roldosista Ecuatoriano
PRIAN – Partido de Renovador Institucional Acción Nacional
PSC- Partido Social Cristiano
RC – Revolución Ciudadana
RED – Red Ética y Democracia
RED-ID - Red Ética y Democracia y la Izquierda Democrática
SEMPLADES - Secretaría Nacional de Planeación y Desarrollo
SRI – Servicio de Rentas Internas del Ecuador
TLC – Tratado de Libre Comercio
TSE – Tribunal Supremo Electoral
UCS – Unidad Cívica Solidaria
UDC – Unión Democrática Cristiana
UDP – Unidad Democrática y Popular
UE – Unión Europea
UNE – Unión Nacional de Educadores
UNO – Partido Unión Nacional

Declaración de cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Jorge Orlando Blanco Suárez, autor de la tesis titulada: “Los límites de la revolución en el socialismo del siglo XXI: Las Elites empresariales en las luchas por la hegemonía en los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa”, declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en Estudios Andinos, concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución, divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en el repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no se obtener beneficio económico.



Jorge Orlando Blanco Suárez

Quito, enero de 2023

Resumen

Desde una perspectiva centrada en el estudio de las disputas por la hegemonía, la investigación interpreta las relaciones entre las élites empresariales y los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales. Entendiendo la hegemonía como un modo particular de interpretar los procesos políticos, que tiene en cuenta tanto los elementos discursivo-ideológicos de los actores políticos, como los estructurales-institucionales dentro de los cuales se lleva a cabo la lucha política, se estudian las apuestas revolucionarias contemporáneas de Bolivia y Ecuador y la manera en que estas son contestadas por las élites económico-empresariales.

La hipótesis central de la investigación es que, estos procesos son significativamente distintos. En Bolivia, la emergencia del gobierno de Evo Morales y el MAS, es el resultado de dos procesos convergentes: a) Una profunda crisis de la hegemonía neoliberal y, por tanto, de los actores que la sostuvieron (las élites empresariales y los partidos políticos dominantes) y; b) una progresiva articulación de fuerzas contra hegemónicas de origen popular que, pese a la resistencia feroz de las élites económicas y políticas, particularmente del oriente boliviano, logra hegemonizar a estas élites y construir un proyecto colectivo nacional, popular. En Ecuador, por el contrario, la histórica fragmentación social y política, no deriva en la configuración de un proyecto hegemónico fuerte. Las fuerzas populares, de hecho, van a ser víctimas de esta histórica fragmentación. En este escenario, las élites conservan un poder estructural e instrumental considerable que, en el momento en que el gobierno del *outsider* Rafael Correa emerge, estas se constituyen en una fuerza de contención que limita los alcances de las apuestas políticas y económicas del nuevo gobierno. A esto hay que agregar que, contrario al proceso boliviano, la Revolución Ciudadana, se caracteriza por su débil capacidad de articulación política de los sectores sociales subalternos, así como por una apuesta que privilegia la gestión de la economía. Esta forma de orientar los procesos políticos por parte de Rafael Correa se derivaría de la constitución del propio movimiento que impulsa la Revolución ciudadana. Intelectuales de clase media y alta, sin experiencia política que, en un momento de crisis de la acción política organizada tanto de las élites políticas, como de los sectores subalternos, logra ganar reconocimiento y visibilidad.

Estos elementos explicarían lo que puede considerarse una más exitosa construcción de hegemonía por parte del gobierno de Evo Morales en Bolivia, así como la debacle de la Revolución Ciudadana. Mientras en Bolivia se logra articular a las élites dentro del modelo de *Economía Plural* y del “*capitalismo andino amazónico*”, en Ecuador, el gobierno no logra construir un proyecto que articule lo nacional popular, dentro del cual “se reconozcan” las

élites económico-empresariales. Estas, a la vez que se benefician de las políticas económicas del gobierno, sin contrapartida, mantendrán la crítica permanente al “estatismo” y la defensa de la economía de libre mercado, como discurso dominante y hegemónico.

Agradecimientos

Este proceso formativo no hubiese sido posible sin financiación recibida de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del programa de apoyo a la formación posgradual de docentes. Gracias a los recursos recibidos pude desarrollar mi formación doctoral y mi trabajo investigativo. Espero poder retribuir y seguir contribuyendo con el fortalecimiento de la universidad pública de Bogotá. Del mismo modo, expreso mi agradecimiento a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Quito-Ecuador y su programa de becas para formación doctoral de extranjeros. Agradezco a la profesora María Cristina Cielo, por el apoyo dado para la culminación satisfactoria de este trabajo. Sin su respaldo y acompañamiento, hubiese sido más difícil lograr sacar adelante esta investigación. A los compañeros del Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en estudios Andinos, particularmente a Raúl Moncada Landeta, por abrirme las puertas de su casa y hacer más fraternal mi estancia en Ecuador. Nelson Nogales, porque este proceso continúe y se fortalezca el necesario diálogo sobre nuestras sociedades. A Esperanza Hurtado, de la Cámara de Comercio de Quito, quien me facilitó el importantísimo archivo periodístico y me abrió las puertas para poder conversar con los directivos de esta asociación empresarial. Finalmente, a Carol Narváez, quien contribuyó con el procesamiento de información estadística y a la organización de fuentes periodísticas. Agradezco finalmente a mis colegas del proyecto curricular de ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por mantener vivo esta apuesta por la formación de docentes, con el compromiso cotidiano y con la apuesta por ofrecer a nuestros estudiantes y a nuestro país, una formación comprometida con la transformación de la educación.

Introducción

En las últimas décadas América Latina ha experimentado importantes transformaciones en sus sistemas políticos y en sus modelos de desarrollo. Distintos movimientos de izquierda lograron conquistar el poder de Estado en buena parte de nuestro continente. Los matices, características y evaluaciones sobre estos movimientos son confusos y, para algunos, contradictorios (V. gr. Castañeda 2006, Panizza, 2009; Murillo, Oliveros y Vaishnav, 2010, Flores A, 2006-a, Petras y Veltmeyer, 2009). Dentro de los gobiernos de izquierda, los de los presidentes Hugo Chávez + (Luego Nicolás Maduro), Evo Morales y Rafael Correa, se caracterizan por un discurso de confrontación, el impulso de la idea del socialismo del siglo XXI y el haber puesto (nuevamente) sobre la arena política latinoamericana la idea de una revolución sociopolítica, económica y cultural. En estas nuevas revoluciones, el Estado “volvió al primer plano” y sus promotores manifestaron la intención de construir nuevos tipos de democracia: una democracia participativa y “protagónica”; una democracia “plural”, o una “revolución ciudadana”, como superación de los límites de la democracia representativa. Así, los gobiernos del “socialismo del siglo XXI” incrementaron el poder económico y la capacidad de intervención y control social y político de sus respectivos Estados. Impulsaron la nacionalización de algunos recursos o renegociaron los contratos para la producción los hidrocarburos, en los tres países. Fortalecieron también los sistemas de seguridad social, ampliando cobertura en educación, salud, vivienda y promoviendo el aumento del empleo, sobre todo con base en un fuerte incremento de la inversión pública en infraestructura, entre otras medidas, pero con éxitos desiguales.

En los casos específicos de Ecuador y Bolivia, de los que trata la presente investigación, la emergencia de gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa ha sido entendida como parte de los resultados de un convulsionado final del siglo XX y un no menos tormentoso comienzo del siglo XXI. En los dos casos, una profunda crisis económica y, sobre todo política, trastocó la estabilidad tanto de los sistemas políticos y de partidos como las posibilidades de reforma dentro de los mismos modelos neoliberales imperantes en América Latina hasta finales de los años 90. Distintos actores sociales y dentro de estos, los movimientos indígenas, ganaron protagonismo. Los partidos políticos y los modelos económicos por estos instaurados desde los años 80 en los dos países, fueron convertidos en el blanco de ataques intensos. Se les acusó de ser los responsables de la pobreza, la desigualdad y de la inestabilidad económica que habían pretendido resolver con una orientación neoliberal de la economía. El modelo

económico neoliberal, de este modo pareció colapsar, así como las estructuras políticas que los habían sustentado e impulsado.

En medio de la crisis, líderes políticos como Evo Morales y Rafael Correa, a través de procesos diversos, lograron articular los anhelos de millones de bolivianos y ecuatorianos y esta articulación los llevó la presidencia en 2006 y 2007 respectivamente. Desde el comienzo de sus mandatos, la polarización no se resolvió, sino que cambió de matices. El temor por las implicaciones económicas de la reconfiguración del Estado como actor protagónico en la economía, que los nuevos liderazgos impulsaron, se hizo visible en algunos sectores. Las élites económicas y políticas tradicionales, así como analistas liberales de los dos países, se manifestaron en muchas ocasiones, sobre lo nefasto que podría ser el “estatismo”, justo cuando se impulsaban reformas que buscaban profundizar el neoliberalismo por la vía de tratados de libre comercio. En los dos casos se manifestó temor por la democracia liberal y por la posibilidad de que se establecieran gobiernos autoritarios -como fueron catalogados desde el principio- dirigidos por líderes “populistas”. Se argumentó que el Estado no era competente para ser el motor y actor central de la economía, pues ya había probado su ineficiencia durante el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones de los años 50 al 70. De muchas maneras, los defensores del neoliberalismo y la democracia liberal-procedimental se resistieron a ser desplazados de las esfera económica y política

Ahora bien, pese a la radicalidad de los discursos de que hicieron gala estos gobiernos en contra del neoliberalismo y capitalismo y, en algunos casos en contra de la empresa privada en particular y, a pesar de las críticas de los defensores de la “ortodoxia” neoliberal, los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa no produjeron la debacle económica augurada por sus críticos. Por el contrario, el crecimiento económico que ya experimentaban estos países a comienzos del presente siglo continuó e incluso se fortaleció. Tanto algunos de sus críticos como sus defensores reconocen que los ingresos de los dos países durante estos gobiernos son considerablemente superiores a los obtenidos por cualquier gobierno anterior. Si bien hay críticas a las gestiones de la economía, pues se ha llegado a considerar que estos gobiernos habrían reproducido errores del pasado, lo que haría de sus éxitos, nada más que beneficiarios del “boom” de los *comodities*, la estabilidad política y, relativamente también la estabilidad económica, en un contexto internacional muy inestable, es una marca de sus trayectorias en el poder de Estado (Murillo, Oliveros y Vaishnav 2010). Desde esta mirada se ha destacado, sobre todo el caso boliviano, como un éxito en reducción de la pobreza, la desigualdad y, también, como un caso excepcional en crecimiento y estabilidad económica.

En este marco, el poder económico de las élites y grandes grupos económicos, pese a reconfigurarse, también se incrementó en los dos países. Fueron beneficiarios del importante crecimiento que estas sociedades vivieron; incrementaron sus utilidades de manera significativa, en parte gracias a la multiplicada capacidad de los Estados para intervenir en la economía y el consiguiente incremento de la inversión pública en servicios sociales e infraestructura. De este modo, el poder económico privado parece no haber sufrido cambios importantes. No ha sucedido así, al parecer, con el poder político y la capacidad de influencia de las élites económicas, en el diseño e implementación de políticas públicas y en general, en las decisiones del Estado y en la orientación general de las sociedades.

Esto último representaría una gran diferencia con lo sucedido en los años 80 y 90, cuando actores importantes del sector privado, pertenecientes a los gremios empresariales más importantes de cada país lideraron directamente el impulso de las políticas neoliberales. Podría decirse que, el liderazgo económico corporativo de los empresarios asumió, en aquellas décadas, el liderazgo político. Líderes político-empresariales como León Febres Cordero en Ecuador y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, por ejemplo, llegaron a la presidencia bajo la bandera del neoliberalismo como único remedio a la grave crisis económica que atravesaban estas dos sociedades (Conaghan 1994, 1997). El impulso de este modelo económico implicó, en los dos países, el progresivo debilitamiento de las ya de por sí débiles estructuras partidistas, pero también debilitó a las también débiles estructuras estatales, en su capacidad de integración y articulación social. Pronto se vieron los efectos sociales, económicos y políticos del modelo neoliberal. Desde el punto de vista social y político, una creciente movilización social se tomó las calles y carreteras a lo largo y ancho de los dos países. En el contexto de procesos de descentralización política y administrativa, a finales de los años 80, nuevos actores sociales y políticos comenzarían a ocupar, por vía electoral, instancias de poder estatal en ámbitos regionales y locales (Kohl y Farthing 2006). Los modelos de partidos que fueron el soporte de la transición a la democracia, así como del cambio de orientación económica, comenzaron a colapsar en Bolivia y Ecuador a fines de los años 90, con la consiguiente pérdida de la capacidad de influencia de las élites empresariales, particularmente en Bolivia.

Lo anterior mostraría unas sendas comunes en los dos casos de estudio. Sin embargo, lo que planteamos en esta investigación es que hay, históricamente, relevantes diferencias que hay que considerar para comprender el papel de las élites económicas en los procesos de lucha por

la hegemonía. En primer lugar, en Bolivia, el impulso de las políticas neoliberales fue el resultado de un consenso entre élites económicas y políticas dentro de lo que se conoció como la “*democracia pactada*”, al interior de la cual las asociaciones empresariales jugaron un importante rol dirigente. Las reformas, tanto políticas como económicas, implantadas por la “*democracia pactada*” fueron mucho más orgánicas en Bolivia. En Ecuador, por el contrario, el neoliberalismo se hizo a pesar y en contra de los partidos políticos, como estructuras de agregación de intereses. Las élites empresariales y sus asociaciones fueron protagonistas también, pero la relación con los grupos políticos (e incluso ciertos grupos económicos) dirigentes fue ambigua y muy conflictiva. Esto condujo a que las reformas neoliberales se desarrollaran también de manera ambigua y con menos soporte institucional que en el caso boliviano. La más débil organicidad del caso ecuatoriano explica una menor capacidad de articulación social y política por parte de las élites político/económicas, frente a sus pares bolivianas (Burbano de Lara 2002). También daría cuenta de lo que varios analistas han notado en el caso ecuatoriano: su tremenda fragmentación social y política y el establecimiento de alianzas entre los actores sociales y políticos, que no van más allá del corto plazo (Pachano 2010; Burbano de Lara 2004).

En segundo lugar, las estructuras políticas y económico-políticas que colapsan son considerablemente distintas y esto afectaría, como se argumenta en este trabajo, los modos en los que, en un nuevo contexto de reconfiguración estatal, actúan los diversos actores sociales, económicos y políticos que se disputan la orientación del Estado y la de la sociedad en su conjunto. Entre estos, las élites empresariales y sus asociaciones dominantes. Así, a pesar de que los dos países son históricamente primario-exportadores y con economías dependientes, la formación del Estado ha sido muy diferente. En el caso boliviano, el haber vivido un importante proceso revolucionario a comienzos de los años 50 del siglo XX, liderado por el MNR, configuró una imagen social y popular del Estado como una instancia relativamente autónoma de las fuerzas económicas dominantes. Un Estado que se configuró como un “instrumento” capaz de impulsar procesos de democratización política, social y económica (Tapia, 2009). En el Ecuador, aunque hubo intentos de desarrollar una revolución nacionalista en los años 40, estos fracasaron tempranamente y el Estado permaneció bajo el dominio de las oligarquías serranas y costeñas, quienes lo usaron para su propia modernización y diversificación económica, limitando considerablemente la democratización política y social. El denominado “velasquismo” y el personalismo heredado de éste se convirtió en un fuerte obstáculo para el desarrollo de procesos de articulación hegemónica. Las fuerzas contra

hegemónicas (movimientos de izquierda, movimientos obreros), que pretendieron fortalecer la autonomía del Estado para reorientar el desarrollismo, particularmente en los años 70, cayeron por la presión de estas oligarquías que usaron su poder político y económico, para frenar los proyectos contrahegemónicos desde el campo popular. Estas élites fueron las que impulsaron una forma particular de retorno a la democracia. La comprensión de esta trayectoria larga, se sostiene, es imprescindible para comprender los procesos de lucha por la hegemonía en las dos sociedades.

Dentro de este marco, importantes investigaciones se han desarrollado sobre las transformaciones de los sistemas políticos; sobre el proceso de transición a la democracia y el papel que en este jugaron los partidos y líderes políticos; se ha estudiado también el protagonismo de nuevos actores sociales, como los indígenas y campesinos. Se ha debatido sobre las causas y consecuencias de la inestabilidad política y económica de los años 90 y sobre la emergencia de los liderazgos de Evo Morales y Rafael Correa, que varios investigadores no dudan en calificar de populistas o neopopulistas. No obstante, reconociendo algunas excepciones, el papel de las élites económico-empresariales ha sido dejado de lado. Esta investigación le apunta a ampliar la comprensión del cómo las élites empresariales y sus asociaciones más representativas, que otrora fueron protagonistas de las transformaciones políticas y económicas, afrontaron las vicisitudes vividas por estos dos países, teniendo como base una perspectiva centrada en las disputas por la hegemonía.

En este complejo panorama, ¿Cómo puede comprenderse el comportamiento de unas élites empresariales que, a comienzos de los gobiernos, lideraron una férrea oposición a dichos gobiernos y hoy parecen acomodarse “pacíficamente”, sobre todo en Bolivia? ¿Cómo interpretar los procesos de transformación política vividos en estas sociedades y el papel que jugado por las élites empresariales?

Es un hecho, constatado por distintas declaraciones de los líderes de las principales asociaciones empresariales de nuestro periodo de estudio, que se edificó una gran diferencia en los modos en que los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa se relacionaron con el poder económico privado. Si en Bolivia la oposición al gobierno de Evo Morales durante sus primeros años fue muy radical, con el tiempo fue cada vez más visible el diálogo, la “confianza mutua”, las alianzas y el consenso sobre los avances del “*modelo económico plural*” agenciado por el gobierno de Evo Morales. Los líderes empresariales de asociaciones tan importantes como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que articula a las más importantes asociaciones empresariales de este país, o de organizaciones tan

“radicales” en la defensa de las “libertades económicas”, como la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Santa Cruz (CAINCO) o la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), mostraron, de manera cada vez más frecuente, su beneplácito con las políticas económicas del gobierno “revolucionario” y, de hecho, manifestaron su compromiso con la estabilidad económica y política de un régimen que en algún momento llegaron a acusar de “totalitario”.

No sucedió lo mismo en Ecuador. Si bien es cierto produjeron diálogos, alianzas y consensos entre algunos empresarios, particularmente representantes del sector industrial y representantes de grandes grupos económicos (especialmente de Pichincha, Cuenca y Guayaquil) y el gobierno de Rafael Correa, las relaciones estuvieron marcadas más por la mutua desconfianza y la inestabilidad, que por una aparentemente comunión de intereses, como parece darse en Bolivia. ¿Cómo explicar estas diferencias? ¿Cómo dos gobiernos que se autodenominan revolucionarios pueden conducir a relaciones tan contradictorias con las élites empresariales? ¿Cómo se logró en Bolivia esta convivencia pacífica entre actores inicialmente muy contradictorios?

La presente investigación responde un doble cuestionamiento: ¿Cuál fue la participación de las élites empresariales, específicamente las grandes asociaciones empresariales,¹ en los procesos de transformación política y económica, impulsados por los gobiernos de Bolivia y Ecuador, particularmente en lo relativo a la reconfiguración de Estado y la democracia? ¿Qué factores nos ayudan a comprender las similitudes y diferencias de los dos procesos de transformación en términos de las relaciones entre élites empresariales privadas y Estado? El objetivo general, es Interpretar el papel de las élites empresariales en las luchas por la hegemonía en el marco de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa. Este objetivo se despliega en cuatro **objetivos específicos**, 1. Caracterizar las trayectorias históricas de las relaciones entre élites empresariales y actores estatales en Bolivia y Ecuador en el marco de las luchas por la hegemonía en cada país; 2. Analizar los discursos sobre la democracia y lo público-estatal que desplegaron estos gobiernos y los modos en que han entrado en contradicción con las élites económico-empresariales; 3. Identificar las principales transformaciones de la institucionalidad estatal agenciadas por los nuevos actores estatales y

¹ Para el Caso boliviano, tendremos en cuenta fundamentalmente el papel de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. En el caso ecuatoriano, nos interesan, fundamentalmente las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, así como las cámaras de Industrias de Guayaquil y la de Pichincha. No obstante, el marco general de las acciones de los empresarios, es clave para comprender las interacciones entre organizaciones empresariales y gobiernos.

la forma como las élites empresariales han reaccionado frente a estos procesos en términos de conflictos, acuerdos pactos, desde el momento en que llegan al poder Evo Morales y Rafael Correa; finalmente, 4. Determinar las estrategias y tácticas de movilización social, política y económica desarrolladas por las grandes asociaciones empresariales (y sus contrapartes, los actores estatales), con el fin de incrementar o conservar su poder político

Justificación y Pertinencia de la Investigación

En términos generales, la inquietud por el estudio de las élites empresariales obedece, en primer lugar, a una preocupación política y académica personal del autor, por comprender la configuración del Estado y la democracia en América Latina, desde hace por lo menos unos 18 años, cuando culminaba mi formación de pregrado. Ha sido desde entonces, un interés permanente el problema de los discursos y las prácticas políticas de los actores sociales, políticos y económicos y cómo estos impulsan la configuración y materializan formaciones institucionales particulares a partir de dinámicas de conflicto y correlaciones de fuerza cambiantes. El estudio de estas problemáticas me ha llevado a estudiar movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones sociales, entre otros. En tal sentido, la investigación se desarrolló como parte de mi formación académica y profesional y como una oportunidad para profundizar en el estudio de las luchas por el poder en nuestras sociedades. Desde este lugar, se asume un compromiso con la comprensión de la complejidad del poder, de la configuración del Estado y la democracia en América Latina, como una forma de contribuir a encontrar caminos que fortalezcan a nuestras sociedades y democracias.

En segundo lugar, se parte de la consideración de que el estudio de las élites empresariales (y de cualquier actor socio-político) permitiría comprender los sentidos y lógicas que han venido entrando en conflicto en el momento en que comienzan a darse procesos de reforma política, específicamente referidos a una nueva centralidad del Estado opuesta a la idea del “libre mercado” que imperó en América Latina desde mediados de los años 70 y con más intensidad desde los años 80. Vivimos una coyuntura crítica en América Latina, cuya adecuada interpretación nos permitiría comprender cómo distintos actores asumen la democracia y lo público-estatal, en un contexto en el que se había declarado la derrota del Estado en manos de la economía de “libre” mercado. La presente investigación de hecho cuestiona esta supuesta derrota del Estado y plantea que es necesaria una nueva lectura de este, a partir de una lógica hegemónica.

En tercer lugar, para el caso concreto de nuestro estudio, se parte de la consideración de que los acercamientos hechos hasta el momento a las relaciones Estado-élites empresariales tienen

algunas limitaciones interpretativas, que es necesario subsanar para comprender de manera más precisa su complejidad y cómo estas relaciones contribuyen al desarrollo de perspectivas hegemónicas sobre democracia y del Estado en nuestras sociedades. Se propone que un enfoque centrado en el estudio de las luchas por la hegemonía permite comprender mejor estos procesos. En relación con los casos de estudio, argumentaremos que estos permiten ver, cómo las élites empresariales han jugado un papel importante tanto antes de los nuevos gobiernos, como frente a los proyectos político que estos adelantan o adelantaron.

En cuarto lugar, partiendo de la consideración de que, en los dos casos, las élites empresariales regionales han sido claves en el desarrollo de la estructura del Estado en el ámbito de sus funciones y su territorialización regional o nacional (Del Campo 1978; Conaghan 1990, 1992; Burbano de Lara 2002, 2008, 2014; Mansilla 2007; Rea 2005; Rojas, Tapia y Bazoberry, 2000)². ¿Cómo explicar los desenlaces distintos de los conflictos contemporáneos?

Finalmente, con el estudio de la participación de las élites empresariales y, particularmente de las grandes asociaciones de empresarios, se espera contribuir a aclarar el panorama en el que han operado los gobiernos de izquierda y cómo los conflictos que han enfrentado, en este caso con las élites empresariales, contribuye a limitar un poder de Estado que se ha asumido, desde sus agentes, como revolucionario, plural y con poder ciudadano y, desde sus detractores, como populista y autoritario. Las mismas construcciones discursivas con las que han sido interpretados estos procesos, de hecho, pueden ser vista como parte de estas disputas por la hegemonía de ciertas formas de entender el poder y las relaciones sociales de poder. Solo que en el contexto contemporáneo el mito de la economía de “libre mercado”, como la

² Sobre estos dos casos, los trabajos de Felipe Burbano de Lara (2002, 2008, 2014), aportan elementos importantes para comprender la importancia de las luchas regionales en los casos de Ecuador (Burbano de Lara 2002) y Bolivia (Burbano de Lara, 2008, 2014) y la participación de los empresarios por más autonomía para las regiones, sobre todo a partir de finales del siglo pasado y comienzos del presente. De sus estudios sobre los empresarios y la política en Ecuador en la crisis del estado ecuatoriano (2002) y sobre las luchas por las autonomías regionales de Santa Cruz en Bolivia y Guayaquil en Ecuador (2014), en los que da cuenta de la participación de las élites empresariales en los procesos políticos contemporáneos, es importante resaltar cómo estas contribuyen a configurar la institucionalidad del Estado y ayudan a comprender la importancia de las políticas de identidad, articuladas a lo político-institucional y lo económico en los procesos políticos contemporáneos. Si bien Burbano de Lara considera que no puede hablarse de los empresarios como actores hegemónicos, pues en las experiencias históricas de estos dos países, los mismos habrían sido incapaces de constituirse en tales, se puede afirmar que estos, han contribuido de manera significativa a la producción o reproducción de un orden político y económico dominante y constituyen, con otros actores socio-políticos bloques históricos, para la disputa por el poder de Estado y para delinear sus contornos. El repliegue a lo regional y local de los grupos empresariales de Santa Cruz y Guayaquil, que el autor analiza (particularmente Burbano de Lara, 2014), podría considerarse estratégico o pragmático y temporal, pero su participación como actores políticos protagónicos, sigue estando ahí no sólo para configurar lo regional, sino también lo nacional. De hecho, pues lo nacional, en los dos casos, pasa por la configuración de lo regional.

llamaría Polanyi (1989), continúa siendo hegemónico, particularmente en Ecuador, por lo que la construcción de un mundo posneoliberal, se enfrenta con muchos actores que la han incorporado dentro de sus propias concepciones de mundo como “sentido común”.

Apuesta teórica, hipótesis y estructura del documento

La investigación pone en primer plano a los actores sociopolíticos como sujetos colectivos que, si bien están estructurados dentro de procesos históricos concretos, son también agentes estructurantes de las relaciones sociales de poder y dominio y de sus concreciones institucionales. Las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales (dentro de las cuales el Estado viene jugando un papel central desde hace siglos), pueden entenderse como resultado del conflicto entre distintos actores y las formas en que este conflicto se resuelve o se tramita: de la imposición o de la articulación hegemónica.

Desde este marco general, el presente documento se organiza en siete capítulos. En el primero, discutimos las perspectivas teóricas y algunos trabajos empíricos, que han buscado explicar o comprender las relaciones entre élites empresariales y Estados haciendo énfasis en América Latina. Allí defendemos la idea de que el concepto de hegemonía permite comprender mejor estas relaciones pues estas se enmarcan en las luchas por la producción y reproducción de la lógica del capitalismo como ordenamiento social y político. Se argumentará que los actores sociales que se movilizan políticamente, que buscan afectar la organización política de una sociedad y sus instituciones, no lo hacen al margen de proyectos políticos, sino enmarcados en ciertas formas de comprensión y construcción ideológica del orden social, que es lo que define su particular racionalidad. Así, pese a que, en un momento determinado, ciertos actores no asuman un papel directo de liderazgo, el conjunto de sus acciones está orientado a la producción o reproducción de lo que en términos gramscianos (Gramsci 1980) sería “cierto sentido común”, cierta forma de “orden natural” de las cosas y, por tanto, ciertas relaciones de poder y de producción. Cuestionamos en este capítulo la reducción del concepto de hegemonía, al mero liderazgo articulador, discursivamente construido, por parte de un actor/sujeto o clase social (v gr, Laclau y Mouffe 2006). Si bien se tiene en cuenta el papel del discurso en la construcción y desarrollo de los procesos de disputa hegemónica, se le da valor también a las estructuras sociopolíticas y económicas, que limitan la estabilización de estos proyectos hegemónicos.

En un segundo capítulo, discutimos ampliamente el problema del Estado en las luchas por la hegemonía. Planteamos allí que, contrario a lo que ciertas perspectivas posestructuralistas y

posmarxistas³ exponen sobre el poder de Estado en las sociedades contemporáneas, éste sigue siendo un “lugar” privilegiado de poder, a partir del cual los actores sociales y políticos proyectan la construcción del orden social, económico y cultural. Se argumenta que el estudio del Estado como construcción institucional y discursiva y de sus transformaciones históricas, que son resultados de luchas por su formación y orientación, aporta significativamente a la comprensión de las estructuras de reproducción del capitalismo tanto en el plano ideológico-cultural, como en lo estructural-económico. De este modo, revisamos en este capítulo el concepto de hegemonía y el lugar que en éste ha ocupado el problema del Estado. Esto a partir de un recorrido que va desde el presente, dominado en buena medida por perspectivas “discursivistas”, hacia uno de los más importantes exponentes de la reflexión marxista: Antonio Gramsci. Desde este y algunos de sus lectores, defendemos la centralidad del Estado en las luchas por la hegemonía, sin desconocer los aportes de otras perspectivas teóricas desarrolladas en las ciencias sociales a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad.

Para la adecuada comprensión de los conflictos por la hegemonía entre los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa se presenta, en los capítulos tres y cuatro, el análisis de la configuración de los Estados en Bolivia y Ecuador, desde la segunda mitad del siglo XX y el papel que jugaron las élites económico-empresariales en estos procesos, en dos momentos claves. 1. La configuración del desarrollismo “estado-céntrico” de los años 50 a 70 y; 2. el neoliberalismo, entre finales de los 70 y mediados de los 90. En el primer momento se argumentará que, en el caso boliviano, las élites económico-empresariales fueron a la vez beneficiarias y críticas de desarrollismo revolucionario. De hecho, podría decirse que las élites empresariales actualmente dominantes en Bolivia son constituidas y fortalecidas, por el modelo de desarrollo “estado-céntrico” que se impulsó entre los años 50 y 70; que el fortalecimiento del peso político de estas organizaciones fue subsidiado por unos actores estatales que, siguiendo la ideología dominante en este periodo (El desarrollismo-industrialismo) vieron la necesidad de constituir burguesías nacionales. Por el contrario, en el caso ecuatoriano, las élites económico-empresariales oligárquicas, tuvieron la fuerza suficiente para limitar el estado-centrismo. Se precisan en el capítulo tres las diferentes trayectorias del desarrollismo en Ecuador y Bolivia y los impactos de estas diferencias en la estructura de relaciones de poder entre el poder público-estatal y el poder privado-empresarial. En el caso ecuatoriano se argumentará que el desarrollismo fue agenciado

³ Una buena síntesis de las perspectivas a las que nos referimos puede encontrarse en Williams (2005).

directamente por oligarquías costeñas y serranas que ocuparon el Estado y que vieron en esta ideología, el soporte para su propia diversificación y adaptación a las transformaciones económicas de los años 50 hacia adelante. Mientras tanto, en Bolivia el desarrollismo fue impulsado por actores políticos que reclaman autonomía frente a poderes económicos y buscaron su adecuación a los dictámenes del discurso nacionalista revolucionario. Este hecho marca una fundamental diferencia en los dos casos. En Ecuador, el desarrollismo es, fundamentalmente, el mecanismo que usan las élites económicas oligárquicas para reproducir su propio poder, diversificar inversiones y consolidarse como élites indisputadas, limitando las funciones sociales y económicas de la institucionalidad estatal. Ocuparon el Estado, para limitar su poder. En este caso, a pesar de que algunos militares reformistas instauran algunas bases de democratización socioeconómica y política, no lograron revertir el dominio oligárquico de unas élites económicas que usan el poder del Estado para su propia modernización y para el fortalecimiento de su poder político y económico.

El análisis del establecimiento del neoliberalismo constituye el capítulo 4. Mostramos allí cómo este fortaleció a las oligarquías constituidas (o modernizadas) en el desarrollismo. Esta tesis es contraria a las perspectivas idealistas del neoliberalismo, en las que se asume que los grandes poderes sucumben ante el peso de un mercado abierto y una economía “libre” gracias a la magia de la competencia. De hecho, lo que se argumentará es que el neoliberalismo sirvió (sigue sirviendo) para el fortalecimiento de oligopolios y con esto, del poder estructural de las élites económico-empresariales oligárquicas. Explicaremos allí las diferencias de los procesos de establecimiento de las políticas neoliberales y el modo en que estas reconfiguraron al Estado en cada país. Se evidenciará el carácter orgánico (y las razones de este carácter) que asumió el establecimiento de la hegemonía neoliberal en Bolivia, mientras que, en el caso ecuatoriano, dada la fragmentación sociopolítica de las élites, este se desarrolló a partir de patrones distintos. Condicionamientos estructurales y coyunturales serán claves entonces para comprender este proceso de desarrollo del neoliberalismo en cada país. Se considera este análisis imprescindible, pues es precisamente frente a estas estructuras de poder (y gracias a sus fisuras particulares y específicas en cada sociedad) que se levantan los distintos actores sociales, que configuran los nuevos gobiernos de izquierda. Frente a estas estructuras desarrollarán sus acciones, buscando transformarlas. Son estas estructuras la “realidad” sobre/contra la que operan los nuevos actores políticos y estas mismas servirán de límites para sus acciones, proyectos y formas de intervenir lo social, político, económico y cultural.

En el capítulo 5, se interpretan los efectos sociales, políticos y económicos de las políticas neoliberales (exclusión social y política, pobreza y desigualdad) como base de la legitimación de actores y movimientos políticos que comenzaron a plantear alternativas a estas políticas, durante la década de los 90 y comienzos del presente siglo. Analizamos allí la crisis del neoliberalismo y cómo, mientras en Bolivia los actores que impulsaron las políticas neoliberales afrontan una verdadera crisis de hegemonía, en Ecuador los que condujeron al colapso de la economía ecuatoriana a finales de los años 90, terminan saliendo más o menos ilesos de esta o, incluso, fortalecidos. Así, mientras los partidos políticos, son responsabilizados de manera casi exclusiva del colapso de la economía, las élites económico-empresariales mantendrán un poder instrumental considerable, aunque también fragmentado. Nuevamente, en cada caso, las estructuras políticas y económicas, las trayectorias de cada sociedad, condicionan el rumbo de los conflictos que emergen y las formas en que estos son tramitados. Argumentamos que la mayor profundidad de la crisis de hegemonía del neoliberalismo en Bolivia sentó las bases para que, una vez se resuelven los intensos conflictos con el gobierno, se logre la configuración de un nuevo pacto hegemónico entre éste gobierno y las élites empresariales lideradas por la CEPB, la CAINCO y la FEPC. Esto al final, contribuirá a darle más estabilidad al gobierno de Evo Morales, desde el punto de vista político y económico. Algo distinto ocurre en Ecuador.

Los capítulos 6 y 7 describen, analizan e interpretan los procesos de transformación del Estado en los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente. Mostramos allí cómo esta formación se construye teórica y empíricamente de manera distinta y cómo los actores que sustentan esta reconfiguración del Estado son también sustancialmente diferentes, tanto en su constitución “orgánica” o sociopolítica, como en sus perspectivas del cambio. Esto es, analizamos las características de los movimientos que condujeron a la caída de la “partidocracia” en Ecuador y de la “democracia pactada” en Bolivia. Argumentaremos que, en el caso boliviano se configuró un proceso de articulación hegemónica de distintos movimientos y organizaciones sociales, a partir del Movimiento al Socialismo, desde comienzos del presente siglo, mientras en el caso ecuatoriano, lo que se produjo fue una más profunda fragmentación social y política que llega al paroxismo entre finales de los noventa y 2005. En medio de profunda fragmentación política, quienes van a impulsar la reconfiguración del Estado serán unos verdaderos “outsiders” que, ante la ausencia de un proyecto colectivo nacional popular, logran captar (con dificultades inicialmente) a un electorado hastiado de todos los liderazgos tradicionales que pide “que se vayan todos”. En

tal sentido, mientras en Bolivia Evo Morales venía participando en la política electoral, desde el año 2000 o, incluso desde antes, en el caso ecuatoriano, Rafael Correa, se “topa” con la política institucional y electoral, de manera más bien azarosa. Mientras en Bolivia se va configurando un proyecto político de articulación hegemónica de movimientos y organizaciones sociales, en Ecuador un *core group*, constituido en menos de un año liderará una “revolución inorgánica”. Estos condicionamientos estructurales y coyunturales, así como las características de los agentes que impulsan las transformaciones políticas y económicas en cada país, marcarán el tipo de relaciones que establecen con otros actores sociopolíticos y económicos, entre estos, las élites económico y empresariales. En una segunda parte mostramos las dinámicas de los conflictos que se produjeron una vez Evo Morales y Rafael Correa llegan al poder, centrándonos siempre en los conflictos con las élites empresariales. La construcción de nuevas constituciones, marcarán estos procesos y los conflictos que se presentan en cada país. Las características de los movimientos, sus apuestas y la dinámica de lucha y/o articulación entre estos y las élites empresariales constituirán la tercera parte de cada capítulo.

Expondremos en estos capítulos, cómo se reconfiguró el poder estructural del Estado por parte de unos nuevos actores estatales, en su conflictiva relación con el poder también estructural e instrumental de las élites económico-empresariales (Durand y Campodónico 2010; Fairfield 2015; Wolf 2016). Así, describimos cómo se produjo el incremento del poder económico del Estado en el marco de los gobiernos “socialistas”, cómo se hace la gestión de este incrementado poder económico y político, cuáles fueron las transformaciones impulsadas por estos gobiernos y cuáles sus impactos en términos del poder económico y político de las élites empresariales, en términos de la construcción de una nueva hegemonía.

La interpretación que realizamos nos permite determinar los modos en que la reconfiguración de los respectivos estados fue enfrentada, por las asociaciones empresariales más importantes de cada país (CEPB, CAINCO y FEPC en Bolivia y Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, en Ecuador⁴) y comprender las tácticas y estrategias de los actores y analizar las disputas discursivas por el tipo de Estado y democracia que los gobiernos “socialistas” agenciaron.

⁴ Pese a que nos centramos en estas asociaciones empresariales, permanentemente revisamos el papel de otras organizaciones empresariales, tales como las Cámaras Nacional de Comercio e Industria de Bolivia y las Cámara de Industria de Quito y Guayaquil. Del mismo modo, reconocemos la importancia de otras organizaciones empresariales en Ecuador, tales como las Federaciones de Cámaras de Comercio e Industrias de Ecuador y el Comité Empresarial Ecuatoriano.

En la parte final presentamos las conclusiones que el estudio arroja sobre los procesos políticos contemporáneos de los dos países en términos de la reconfiguración del estado y la hegemonía y el lugar de las élites económico-empresariales en estos procesos. En esta dirección, contrario a la manera en que algunos analistas y teóricos han estudiado las transformaciones del Estado de los dos países, no asumimos estos procesos desde la lógica de “retorno” del Estado, sino de reconstrucción de sus funciones y de sus prácticas, como escenario desde el cual se impulsa una nueva hegemonía. Intentaremos sintetizar allí las respuestas a nuestras preguntas de investigación.

Como puede evidenciarse en esta presentación, el problema central que nos planteamos es el de la construcción del Estado y, de modo más general, la institucionalidad política, a partir del estudio de las luchas de actores sociales por la hegemonía: Nuevos gobiernos de izquierda y asociaciones empresariales. Una pregunta teórica más amplia que subyace al desarrollo de esta investigación está relacionada con las posibilidades de llevar a cabo transformaciones profundas, diríamos revolucionarias, en el contexto de países periféricos y cómo las estructuras económicas y de poder (y los andamiajes discursivos que los sustentan) se pueden constituir en serios obstáculos para superar el capitalismo como modo de producción y organización social. La pregunta es ¿cuáles son las posibilidades de transformación que la izquierda puede agenciar en las sociedades contemporáneas y, particularmente, en las sociedades latinoamericanas?

La hipótesis central es que habría fuertes obstáculos estructurales dentro de los cuales está el poder, también estructural e instrumental de las élites empresariales y sus asociaciones ¿cómo usan el control de capital económico o poder estructural, para eventualmente aumentar su poder político o poder instrumental? (Fierfield 2015; Wolff 2016); ¿Cómo deciden o no invertir en el desarrollo industrial y en la transformación de las estructuras productivas o de los modos de desarrollo? De otro lado ¿Cómo juegan como actores políticos que, a través de sus discursos buscan y logran influenciar el desarrollo de políticas públicas y las prácticas de los actores estatales en particular, así como las formas de entender el Estado y la democracia por parte de las sociedades en general? En los dos aspectos, estas élites hacen uso del poder estructural, como beneficiarios de los contextos de crecimiento económico más o menos sostenidos, en los casos de estudio, pero como defensoras de ciertas formas de entender el papel del Estado y la democracia en estas sociedades que terminan por ser contradictorias con los proyectos que los nuevos gobiernos agencian.

Ahora bien, así como las estructuras económicas y políticas juegan un papel muy importante en el condicionamiento de las relaciones entre élites empresariales, Estados y gobiernos, también es importante el modo en que estos gobiernos impulsan las reformas y los alcances que a estas le dan en la estrategia de reconfigurar al Estado y a las sociedades. Así, podría decirse que el Estado es instrumento y objeto de reconstitución del orden social, pero este tendría algunos límites a la hora de definir o determinar la profundidad de esta reconstitución, en las sociedades contemporáneas. Los actores estatales, de este modo, delimitan sus campos de acción y la profundidad de las transformaciones que se proponen, transformaciones guiadas por la lectura técnica y política que hacen de sus contextos, pero también, por su propio carácter y personalidad, y por los modos de hacer política, históricamente constituidos.

Para finalizar esta ya larga introducción, algunas consideraciones metodológicas. En primer lugar, es un trabajo centrado en la manera en que los actores configuran escenarios sociales e institucionales y, cómo desde estos impulsan ciertas formas de asumir la democracia y el Estado y, en términos generales la organización social en su conjunto. En este sentido, se trata de una investigación crítico-interpretativa sentada sobre lo que podríamos ubicar disciplinariamente, como sociología política. En segundo lugar, con base en las preguntas y objetivos específicos propuestos, esta investigación requirió de un acercamiento a la configuración histórica de los Estados en los casos de estudios y de la relación de estos con las élites empresariales. Esto implicó un análisis documental (trabajo con fuentes secundarias y primarias) que nos permitieron comprender, los grandes trazos de las relaciones estado/empresarios, sus rupturas y continuidades a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Para esto fue fundamental el trabajo a partir de documentos históricos, análisis políticos de coyuntura de cada momento histórico, análisis de transformaciones económicas y sociales, etc. El resultado de este trabajo es lo que se presenta en los capítulos 3 y 4. Este trabajo nos permitió entender las estructuras de los sistemas sociopolíticos y económicos en Ecuador y Bolivia. A partir de este acumulado, nos dimos a la tarea de rastrear las relaciones, muchas veces conflictivas, entre los actores estatales y empresariales de élite, en los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa. La lectura de prensa, comunicados oficiales y discursos de los gobiernos, así como de las organizaciones y líderes empresariales se consideró fundamental para esta tarea. A través de estos documentos identificamos los temas que se ha generado conflicto o la movilización social y de recursos y los modos en que estos se han tramitado, dentro de la búsqueda de alterar las relaciones de fuerza y concretar el diseño e implementación de políticas, leyes y decretos de orden estatal. Paralelo a la revisión

documental, se pudo interactuar con algunos dirigentes gremiales de Bolivia y Ecuador, así como con algunos periodistas, intelectuales y formadores de opinión. El desarrollo del trabajo documental, y la revisión de documentación histórica se hizo entre los años 2013 y 2015. Las entrevistas se desarrollaron en los años 2013 y 2014. Empero, para el rastreo de las transformaciones de las relaciones entre actores y estatales, se hizo seguimiento de prensa digital, a lo largo de los últimos 3 años (2015-2017).

Específicamente, para nuestro segundo objetivo, que tiene un carácter más interpretativo, al buscar los discursos de la democracia y del Estado, que los actores ponen sobre el tapete, fueron importantes las entrevistas con los líderes y representantes de los gobiernos y de las asociaciones empresariales, acompañado de la lectura de prensa y comunicados oficiales tanto de los empresarios como de los actores gubernamentales. Para el caso de Bolivia, se buscó entrar en contacto con representantes de la CEPB y CAINCO, así como con líderes sociales y políticos vinculados con las élites empresariales fundamentalmente, ya que han sido actores protagónicos en las relaciones entre gobierno y empresarios. Para los dos casos, fueron importantes sus discursos sobre la democracia y el Estado, así como el desarrollo de la economía de cada país. Para el caso del Ecuador, se hicieron entrevistas a representantes de las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, así como de las Cámaras de Industrias de las dos ciudades y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Se entrevistó, del mismo modo a periodistas y políticos vinculados directa o indirectamente con el discurso empresarial. De este modo, más que partir de una idea prefijada de la democracia, lo público y el Estado, de lo que se trata es de entender cómo los actores construyen estas categorías como, diríamos, “los tipos ideales” sobre los que operan, qué tipo de Estado y democracia proponen para sus sociedades; qué límites y alcances tiene cada concepto dentro de la perspectiva de cada actor y cómo estas distintas formas se encuentran o se oponen.

Finalmente, el desarrollo de nuestro cuarto objetivo, que intenta acercarse a las estrategias y tácticas de movilización social, política y económica de las élites empresariales, se desarrolló a partir del análisis de movilización social y política-electoral, así como un seguimiento de las actividades empresariales en la promoción de sus demandas. Del mismo modo, el análisis de las editoriales y columnas de opinión de los principales diarios (y entrevistas con columnistas y periodistas políticos y económicos), nos dieron claves para entender las dinámicas de apoyo y rechazo de las iniciativas empresariales, desde el punto de vista político, social y económico. Buscamos en esto, aproximarnos a las redes de poder y a su funcionamiento en procesos de movilización social, político-electoral y económica y la constitución de bloques

de poder. Por tanto, eventos como las elecciones, las campañas por las nuevas constituciones, los conflictos generados por estas iniciativas legislativas, las protestas y movilizaciones sociales fueron muy importantes.

Capítulo 1. Perspectivas teóricas sobre las relaciones entre Estado y Elites empresariales en América Latina

A pesar de que en América Latina, el papel de los empresarios en el desarrollo político y económico fue una preocupación ya desde la teoría de la dependencia (V.gr Castillo 1967; Cardoso 1968), estudios sistemáticos sobre el comportamiento político de los empresarios y su capacidad de influencia en el Estado no se desarrollan, con la excepción de México⁵, sino a partir de los años 70 cuando, precisamente, el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, entra en crisis o comienza a mostrar evidentes signos de agotamiento. En el presente capítulo haremos la presentación de tres grandes corrientes teóricas e investigaciones empíricas a partir de las cuales se ha estudiado al empresariado como actor político, las cuales se han clasificado como enfoques de *elección racional*, Estructuralismo y estructural-funcionalismo y de marxista). A partir de esta exposición delineamos algunas orientaciones para la comprensión de las luchas por la hegemonía en los países objeto de investigación y en general de las relaciones entre el poder empresarial privado y el Estado.

1.1. Elección racional en los estudios sobre empresarios y Estado

Una primera gran corriente de investigación que se desarrolla proviene de la ciencia política y específicamente se va a centrar en los problemas de la acción colectiva desde una perspectiva comparada. Dentro de este campo, autores como Ben Ross Schneider (1995, 1998-a, 1998b, 1999, 2002, 2004, 2005, 2010), Alicia Ortiz (2002), John Lucas (1997) Aníbal Viguera (1994, 1998), buscan comprender los procesos organizativos de los empresarios y cómo la capacidad de estos de organizarse contribuye a una mayor influencia en la orientación de las políticas de los Estados. Estas investigaciones buscan explicar las causas de una mayor o menor capacidad de organización. Los autores plantean que esta es el resultado de incentivos directos o indirectos por parte de los gobiernos en distintos momentos de la historia de cada país. Se afirma que, entre mayor y más sistemática exclusión de las élites de las instancias de toma de decisiones política y económicas, mayores presiones o estímulo recibirán estas para organizarse, articular sus intereses y presionar a los gobiernos en función de sus intereses. Una fuerte exclusión, como en el caso mexicano, impulsaría mayores niveles de organización y, a la postre, mayor capacidad de presión, a diferencia de otros países, como Argentina o

⁵ En este país la búsqueda de teorizar sobre el papel de las élites en la política y sus relaciones con el estado y los gobiernos, se desarrolla de manera más o menos sostenida desde los años 60. En los años 70, empieza a romperse en México la idea de unas élites homogéneas y subordinadas y empieza a verse cómo estas se constituían en actores políticos decisivos, a partir de la crisis económica de comienzos de esta década (Luna y Valdés 1990).

Brasil (Ross Schneider, 1995; 1998 a; 1998b; 1999; 2002; 2004; 2005; 2010) Mediante el estudio de las experiencias históricas de cada país, esta perspectiva, estudia los patrones de inclusión y exclusión y cómo estos afectan el comportamiento de las élites empresariales, particularmente su mayor o menor articulación

Este tipo de estudios comparativos son corroborados y fortalecidos por estudios de caso. Una buena cantidad de estos se concentran en países como Chile (Huneus 2001; Flores 2006-a, 2006-b), México (Arriola y Galindo 1984; Rueda 1993; Ortiz 2002; Ross Schneider 2002; Alba 1996, 2010), Brasil (Ross Schneider, 1995), Argentina (Heredia, 2003) y Colombia (Rettberg 2002, 2005). En estos trabajos se estudian los conflictos, pactos y acuerdos entre las élites empresariales y entre estas y los gobiernos, en los procesos de transformación institucional. Para esta corriente, es en los momentos de transformación institucional donde se puede ver cómo sería el comportamiento del poder Ejecutivo el Estado, lo que genera una reacción de las élites empresariales, sea para una mayor articulación de intereses diversos o para una mayor fragmentación. La ecuación básica es que, a mayor articulación, mayor capacidad de intervenir en la toma de decisiones gubernamentales y viceversa, entre más fragmentados estén los empresarios menor capacidad tendrán (pese a que haya miembros de las élites empresariales beneficiados por una u otra decisión de los gobiernos) de influir en los gobiernos. Así el Estado se establece como agente central que, por acción u omisión, determina la articulación o fragmentación de los empresarios y, en consecuencia, su fortaleza o debilidad. Puede decirse en este sentido que se piensa en una lógica de un Estado (poder ejecutivo) que logra constituirse como actor autónomo frente a los actores económicos y sociales, lo que representaría una perspectiva estado-céntrica un tanto idealista. La acción política de las élites empresariales, de este modo, no sería más que reactiva, ante la acción de las élites estatales.

entro de esta misma mirada, otro elemento que permitiría comprender la acción colectiva del empresariado, como grupo de interés, tendría en cuenta el tamaño tanto del sector privado como del sector público, tal como lo expone Angelika Rettberg para el caso colombiano (2002). Desde este lugar, parte fundamental del poder de los empresarios frente a los gobiernos nacionales, pasa por su capacidad de control y movilización de recursos económicos y por el peso relativo que los grupos empresariales, en relación con el tamaño de las economías, medidos por su PIB. En tal sentido, se establece una división entre dos actores empresariales: Los grandes grupos económicos y las asociaciones de empresarios. Un mayor peso relativo de los primeros regularmente bloquearía la constitución de agendas comunes

con las asociaciones empresariales y es ahí donde se debilita la acción concertada y, por tanto, la capacidad de influencia, particularmente de las organizaciones empresariales en favor de los grandes grupos económicos. Ahora, en este caso, nuevamente sería el poder del Ejecutivo el determinante de la constitución histórica de un poder desigual entre asociaciones empresariales y grupos económicos.

1.2. Estructuralismo y estructural funcionalismo

La perspectiva anterior es cuestionada por autores como Alexander (1982) y Gates (2007, 2009) para quienes las relaciones entre empresarios y Estado tanto en estudios comparados, como en estudios de caso no pueden ser comprendidas centrándose únicamente los procesos nacionales, sino que estos están inscritos en los desarrollos de la economía mundial. Así Alexander (1982), y Gates (2009), siguiendo a Wallerstein y su concepto de economía-mundo, asumen que, para comprender el poder de los empresarios, deben tenerse en cuenta dos elementos: a) el tamaño de las economías nacionales y b) su peso relativo en la economía mundial y las variaciones históricas de ésta última. Desde esta mirada, no podrían equipararse las relaciones entre los Estados y los empresarios de los países desarrollados con los de la semiperiferia o la periferia. La dependencia del capital extranjero se entiende como elemento que explicaría de la debilidad de los Estados periféricos y de fortaleza del poder del empresariado privado en términos de su capacidad de presión. De este modo, una mayor necesidad de inversiones extranjeras, junto a una mayor desconfianza de los grandes capitalistas en los momentos de crisis económica, genera un mayor poder en manos de los empresarios nacionales de los países de la semiperiferia, en la medida en que su propio capital se hace más importante para los gobiernos nacionales, lo que no sucedería en los países centrales por una mayor autonomía de sus Estados en términos económicos. Procesualmente se considera que, en el contexto de apertura de mercados y de creciente demanda de inversión extranjera, las élites empresariales nacionales se verían fortalecidas y ganarían capacidad de influencia en la determinación de las políticas públicas. De modo general, Gates (2009) afirma que los escenarios de crisis económica tienden a hacer más vulnerables a los Estados periféricos y esto hace que los grandes empresarios incrementen su poder frente a aquellos. Este sería el caso de la crisis de los años 80 y la consiguiente apertura de mercados donde los empresarios (grupos económicos y asociaciones empresariales) fueron protagonistas.

Dentro de esta perspectiva, otro enfoque (aunque no tiene en cuenta esta división entre países centrales, semi periféricos y periféricos, ni la dependencia, en los dos últimos, frente a los intereses del capital transnacional) está representado por autores que postulan que las

relaciones entre empresarios y gobiernos (independiente si son de izquierda⁶, derecha o centro) dependen de las grandes corrientes históricas de la economía y la política mundial y asumen que la acción política de los empresarios se desarrolla de acuerdo a estas variaciones y, por tanto, resulta reactiva y coyuntural. Su activismo o “pasividad”, se responderían a los escenarios y marcos globales de la acción (Viguera 1996, 1998). Así, se establece que entre los años 50 y mediados de los años 70, las relaciones entre el Estado y el sector privado estaban signadas por la centralidad del primero y la dependencia del segundo o, por la idea de un Estado corporativo que, dominado por una burocracia “weberiana” (Canak 1991), subordina a las elites empresariales para el impulso de proyectos nacionales de desarrollo o estabilización económica. Con esto, en el marco del modelo del Estado de bienestar y del Estado desarrollista en América Latina, los gobiernos habrían subordinado a los empresarios privados y habrían implementado, autónoma y planificadamente, los programas de desarrollo económico y los procesos de modernización.

En los años 80, lo anterior se habría invertido, haciendo de los grandes empresarios privados nacionales o transnacionales, los agentes políticos centrales del desarrollo económico. (Huneus 2011; López 2008; Montero 1997, 1999; Imbert y Morales, 2008)⁷. Con base en este tipo de postulados, puede evidenciarse cierta afinidad con el modelo de interpretación centrado en la acción colectiva de los empresarios. No obstante, esta última perspectiva no establece diferencias entre países con mayor o menor poder organizado de las élites empresariales y enfatiza en el carácter heterogéneo de estas y en su conflictividad interna, lo que dificultaría de hecho, la acción colectiva de los empresarios o se asume que esta es sólo posible de manera coyuntural y no está determinada por la “historia” de cada país.⁸

⁶ Estudiando específicamente las relaciones entre empresarios y gobiernos de izquierda, Anselmo Flores (2006-a, 2006-b, 2006-c) considera que el comportamiento tanto de los empresarios como de los nuevos gobiernos de izquierda está dominado por los cambios en las lógicas de funcionamiento de la economía mundial. Abandonado el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, que le daba protagonismo al Estado y veía la intervención del mismo en la economía como algo fundamental para lograr procesos de industrialización competitiva en el mercado mundial y con el establecimiento de la hegemonía ideológica neoliberal y de la economía de mercado, se plantean dos cambios significativos. En primer lugar, se genera un escenario que lleva a los empresarios a buscar un creciente protagonismo tanto político como económico y, en segundo lugar, impone algunas transformaciones de los líderes de izquierda. Estos últimos, una vez en el gobierno, o incluso durante las campañas electorales terminan por sacrificar (o moderar) sus ambiciones reformistas o sus orientaciones revolucionarias en favor del mantenimiento de niveles aceptables de gobernabilidad.

⁷ Lo interesante de estas miradas es que son contradictorias con las lecturas estado-céntricas más liberales de los años 80, que plantean que, de hecho, el neoliberalismo habría dado mucha mayor autonomía a los estados frente al poder empresarial, tales como las de Evans, Rueschmeyer y Skocpol (2002). Sobre esto ampliaremos la discusión en el capítulo 2.

⁸ Sobre nuestros casos de estudio en particular, desde esta perspectiva, se pueden consultar los trabajos de Conaghan, Malloy y Wolfson, (1990, 1997); sobre Ecuador, Bolivia y Perú y Conaghan (1992), para el caso de Bolivia exclusivamente. En estos documentos se describe la manera específica en que los empresarios comenzaron a ganar poder al interior de los estados, en su capacidad de presión frente a Estados debilitados económicamente

1.3. Empresarios y lucha por la hegemonía

El estudio de las relaciones entre gobiernos de izquierda y poder empresarial privado, desde perspectivas distintas a las anteriores, es más reducido, al menos para las sociedades latinoamericanas de nuestros días. Estas investigaciones, han sido desarrollados desde enfoques descriptivos y explicativos por Rose Spalding (1991, 1994). Aunque el objetivo inicial de Spalding es dar cuenta de las variaciones de las relaciones entre los gobiernos de izquierda y las élites empresariales (Allende en el Chile de 1970-1973; Cárdenas en el caso mexicano de 1934 a 1940; Velasco en el caso peruano de 1968 a 1975 y el caso del Salvador, entre 1979-1989), en relación con la capacidad de articulación de éstas últimas para influir en los gobiernos, la autora va más allá. Para esta Spalding el problema central a estudiar es la correlación de fuerzas entre los actores empresariales y estatales a partir de cuatro factores: a), el grado en que la hegemonía de clase es ejercida por una oligarquía tradicional; b), el nivel de organización autónoma alcanzado por las élites empresariales; c), la percepción de una amenaza de clase a partir de la consolidación política del régimen adversario y, finalmente d), por la viabilidad del modelo económico introducido por el régimen reformista (Spalding 1994, 2).

Como puede verse, esta mirada se edifica a partir del reconocimiento de un dominio que no es sólo estructural-económico, sino que se configura a partir de las relaciones históricas entre los actores, con la agencia de estos. No se trata simplemente de una dependencia de las corrientes de la economía mundial (Anderson 1995), sino de la dinámica misma de las luchas por el poder entre actores específicos; esto es, tanto al interior del empresariado, como entre los empresarios y otros actores sociales y políticos. Si bien tiene en cuenta el problema de la acción colectiva y del carácter reactivo frente a las políticas estatales, no se limita a esto.

y deslegitimados políticamente. La perspectiva de estos autores, puede enmarcarse dentro de las perspectivas estructuralistas desde la ciencia política, que buscan comprender los efectos de los cambios en la estructura de la economía mundial en los procesos nacionales y, particularmente la manera en que estos cambios generan alianzas (acomodos) para el control del poder estatal entre distintos actores sociales; en este caso, entre políticos y empresarios para el impulso de las reformas económicas tanto antes como después de las dictaduras. Resalta, el trabajo de Leslie Gates (2009), sobre la financiación de la campaña de Hugo Chávez por parte de importantes empresarios privados venezolanos. La autora explica que esta financiación obedeció, en primer lugar, a las dinámicas tradicionales de financiar al ganador y las posibilidades de que el discurso proteccionista del entonces candidato (1998), podría terminar beneficiando a los empresarios. El marco teórico de esta autora, como en otros de sus trabajos es la perspectiva de la economía mundo y el estudio de las sociedades periféricas. Sobre este mismo país, está el trabajo de Rita Giacalone (1997), desde una perspectiva de las relaciones internacionales que estudia la participación de los empresarios en el desarrollo y ejecución de las políticas de integración en Colombia y Venezuela. Particularmente analiza el importante papel de Fedecámaras de Venezuela y la ANDI, de Colombia en el desarrollo del pacto andino y de la integración binacional. Por tratarse de documentos descriptivos que no amplían mucho el debate presentado en las líneas anteriores se reduce su mención a este pie de página. En nuestro próximo capítulo ampliaremos la manera en que Cohaghan, en los años 80, interpretó las relaciones entre las élites económicas y los gobiernos en el retorno a la democracia.

Plantea el problema de las percepciones de los sujetos y el de la viabilidad de los modelos impulsados por los gobiernos reformistas. En estos casos, aunque no se desarrolla en profundidad el problema de la hegemonía, es importante reconocer que se trata de una mirada que termina por articular distintas corrientes teóricas y que contempla elementos tanto estructurales, como subjetivos y de coyuntura, de considerable importancia para nuestra investigación. En primer lugar, al reconocer que el poder de las élites depende de los procesos históricos de su constitución como actores políticos (unificación/fragmentación), se establece que este poder es estructural. Pero, además, se reconoce que el poder de las élites empresariales y la manera en que reaccionan frente a gobiernos reformistas, no dependerían únicamente de corrientes mundiales o de estructuras económicas mundiales (nuestra segunda perspectiva), sino de la capacidad de los mismos gobiernos de desarrollar proyectos políticos económicamente viables en los contextos específicos; viables y beneficiosos para la mayoría de estas élites y para el resto de la sociedad. Las acciones de las élites, orientadas a acomodarse o enfrentarse a las políticas reformistas, dependería así de cómo estos gobiernos plantean e implementan las reformas y cómo esto puede amenazar, no solo los intereses económicos de una élite económica en particular, sino el dominio de sus valores y creencias y, por tanto, su dominio como clase unificada en la lucha por el poder de Estado. Esto significa que estos pueden actuar unificados, dependiendo del nivel de ocupación del poder de Estado por parte de sus agentes o por la presión sobre sus actores. En síntesis, para la Spalding, los empresarios confrontan a los gobiernos o se adecúan a estos, dependiendo de su propio poder, históricamente construido y de la relación de fuerzas que se desarrolle con los líderes reformistas; esto es, de acuerdo con la viabilidad de los proyectos económicos que estos impulsen, así como al grado de amenaza (de clase) que ven en las reformas planteadas por estos líderes.

Una mirada cercana a la anterior, la encontramos en los trabajos de Valdés (1988), Valdés y Luna (1990), Durand y Campodónico (2010) y, hasta cierto punto Heneus (2001). Pese a ciertas diferencias analítica entre sí, estos autores plantean de manera explícita el problema de la hegemonía y entienden que el estudio de los empresarios no debe centrarse únicamente en los intereses meramente económicos, sino que estos se entienden como actores con modelos particulares de sociedad; modelos en los que soportan ideológicamente su dominio económico. El caso de Francisco Valdés (1988), que estudia las relaciones entre los empresarios y el gobierno en México, es relevante dentro de esta perspectiva, por la importancia que da a los procesos de articulación social y política que impulsaron sus élites

empresariales, particularmente desde 1973, momento en el que los empresarios promueven el derrumbe del modelo estado-céntrico y ayudan a configurar el modelo de economía de mercado en la sociedad mexicana. Este autor, desde una perspectiva gramsciana explícita, asume las relaciones entre élites empresariales y Estado, como el resultado de las relaciones de fuerza y de poder en la pugna por darle forma a un tipo de organización social y estatal. Valdés argumenta que, en México, estas relaciones de poder son favorables al empresariado desde los años 70. En esta década, los empresarios no solo buscaron imponer políticas liberales, sino la constitución de un soporte institucional para el dominio privado, y el establecimiento de una cultura política que privilegia al mercado sobre el Estado y constituye un nuevo sujeto y una nueva ideología capaz de sostener el neoliberalismo "a la mexicana" (Valdés 1988, 18-20). Como veremos, este sería un caso muy parecido a los procesos hegemónicos que agencian las élites bolivianas desde finales de los años 70.

Para Valdés (1988) el Estado mexicano habría sido ocupado progresivamente por los ideólogos del neoliberalismo y se habrían usado distintas instancias institucionales público-estatales para promover la configuración de subjetividades coherentes con este dominio de la lógica privada y del poder del mercado, sobre lo público-estatal. Ahora bien, esta progresiva ocupación del Estado se edificó para Valdés, sobre el progresivo incremento del poder económico de las élites frente a un Estado cada vez más debilitado económicamente. Con esto, el poder de negociación de las élites terminaría también por incrementarse. Al incrementarse lo que podría denominarse desde otras miradas, el poder estructural (Durand y Campodónico 2010; Fairfield 2015; Wolf 2017), el discurso privatizador neoliberal de las élites gana relevancia e influencia frente a los actores estatales y frente a la sociedad en su conjunto. Se configuró así lo que Valdés denomina un *poder pastoral* de las élites empresariales. En Palabras del autor, este proceso no sólo le apunta a un cambio en la vida económica de México, sino también cambios sustanciales en la estructura política:

En los contenidos del discurso empresarial hay dos de gran importancia para la evaluación de las estrategias destinadas a consolidar su poder pastoral: la democracia política y la participación cívico-política. La facción radical propone una alternativa al modelo político vigente que consiste en la instauración de un régimen "pluralista" que neutralice el "absolutismo" presidencial y disuelva el corporativismo "político" que surgió en los años treinta. También propone un modelo democrático bipartidista con alternancia del PRI y el PAN en el gobierno (Valdés 1988, 15).

Con este discurso, los empresarios buscan ampliar las bases sociales, por un lado, pero a la vez, establecer las condiciones para, en el mediano y largo plazo, configurar una nueva estructura política y social en la que no hay más alternativa que el dominio de lo privado individualista sobre cualquier alternativa colectivista. Así, la función redistributiva del Estado desarrollista debía abandonarse y promoverse la apropiación privada como valor y principio fundamental de toda redistribución económica. En consecuencia, se articularían en el proceso mexicano, el poder estructural, con el poder discursivo. Un proceso en el que el papel dirigente de las élites empresariales habría echado raíces en distintos actores sociales, particularmente en sectores medios urbanos.

Dinámicas similares podrían leerse en otros contextos de América Latina y, como lo plantean Heneus (2001) y Durand y Campodónico (2010), los procesos de privatización de algunas instituciones y funciones estatales, agenciados por grupos de poder económico, multinacionales y nacionales y gobiernos neoliberales, van más allá de la enajenación o privatización de la propiedad pública. De lo que se trató fue de la constitución de un nuevo orden social, cultural, político, económico y jurídico; esto es, la constitución de una nueva hegemonía en la que los agentes del mercado regulan las relaciones sociales en general y en la que se establece el dominio de la idea de que todos pueden ser empresarios. Las reformas económicas impulsadas por los empresarios directamente (como actores políticos vinculados al poder estatal en calidad de ministros, por ejemplo, o indirectamente a través del uso de su poder estructural e instrumental, para la determinación de las políticas públicas, no se quedan únicamente en la alteración de las estructuras institucionales, sino que edifica un conjunto de discursos y prácticas en las que el gran empresario se convierte en modelo de individualidad y su ideología en discurso hegemónico. Desde esta mirada además de implementarse reformas institucionales, se logra el dominio de los discursos empresariales y el establecimiento de la lógica de un necesario dominio del poder privado sobre el público como motores de desarrollo individual y colectivo (Evans 2010,17-18).

A pesar de lo anterior, las dinámicas de desarrollo del poder empresarial, no serían homogéneas, por lo que habría que tener en cuenta lo que, en términos gramscianos, sería la cuestión nacional (Gramsci 1999 TIV, 353-373). Así, en la lectura de procesos contemporáneos de reforma del Estado y las sociedades en América del Sur, Durand y Campodónico (2010), dividen este subcontinente en tres grupos de países con relaciones distintas entre el Estado y el poder empresarial-privado. En primer lugar, están los países neoliberales (Chile, Colombia y Perú); en segundo lugar, estarían los países socialdemócratas,

(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y, finalmente los radicales, representados por Venezuela, Ecuador y Bolivia. Para los primeros la lógica del mercado es la única lógica válida en el contexto de la globalización y las políticas de los Estados deben orientarse a atraer capitales extranjeros como motor de crecimiento a partir de la eliminación de todo tipo de “restricciones” tributarias, arancelarias, laborales y en general, de todo tipo de procedimientos que desincentiven la inversión privada nacional y extranjera. Para los segundos, aunque no se oponen al capital privado, desarrollan políticas sociales compensatorias de los efectos negativos de los procesos de liberalización económica (en lo social, laboral, etc.). Finalmente, los últimos (dos de ellos, objeto de estudio de esta investigación), serían evidencia de intentos de resistencia al poder económico e ideológico del capital privado, de los grandes grupos económicos y del neoliberalismo en general, impulsando la constitución de nuevos regímenes políticos y nuevos modelos de desarrollo.

1.4. Hacia una síntesis teórica: Elites empresariales, Estado y Hegemonía

Los aportes de las perspectivas señaladas y, particularmente de esta última mirada, son importantes para la presente investigación, en la medida en que las relaciones entre el Estado y los actores empresariales son problematizadas más allá de lo meramente estructural o de la racionalidad de los actores empresariales y se abren posibilidades de discusión sobre el papel de lo ideológico y lo político y, específicamente sobre la tensión entre estructura y acción, que la teoría de la hegemonía aporta (Gramsci 1980, 1999 TV y VI; Mouffe 1994, 1999, 2009; Laclau y Mouffe, 2004). En primer lugar, vemos que estos últimos elementos, aunque son tenidos en cuenta por nuestra última perspectiva, son señalados de modo muy general y no permiten ver la densidad de los procesos de lucha por la hegemonía entre actores políticos y económicos (y la relación entre economía y política) en contextos específicos y es allí hacia donde se dirige la presente investigación. De lo que se trata, por tanto, es de escudriñar, a través de los casos de estudio, cómo operan estas lógicas (prácticas y discursos; estrategias y tácticas) del poder empresarial en la configuración institucional y simbólica de los Estados y las democracias.

En segundo lugar, en relación con la perspectiva de elección racional, aunque los procesos organizativos y de agregación de intereses de las élites empresariales son importante, centrarse únicamente en esto (y ubicar al Estado, como poder ejecutivo, como el determinante en última instancia de los procesos organizativos de los empresarios privados de élite) no nos permite comprender la agencia de los empresarios y los proyectos que desde estos se configuran, los cuales, como plantea una perspectiva centrada en la hegemonía, son centrales

para entender cómo se estructura el poder del Estado en su densidad interna y en sus relaciones con los procesos históricos de las sociedades específicas en los que estos se constituyen y reconstituyen permanentemente. De hecho, al considerar el comportamiento colectivo de los empresarios como dependiente (en última instancia) de la acción estatal, termina por adjudicarle unos grados de autonomía al Estado insostenibles empíricamente, y esto, en el caso latinoamericano, termina siendo problemático (Centeno 2002; Migdal 2011). No se trata de ver el Estado como “actor” dependiente o subordinado de los poderes económicos, sino de comprender cómo el poder de este es el resultado (cambiante) de la lucha por la hegemonía, por el agenciamiento en la construcción, producción y reproducción del orden social capitalista y de su institucionalidad social y política. Una lucha de la que participan distintos actores sociales, con capacidades desiguales pero dinámicas, de movilización y articulación.

Así, entendemos la hegemonía como un proyecto (y un proceso) de articulación social y una práctica política (cuyo resultado siempre es contingente y parcial), que se materializa en las formas particulares de la estructura estatal y socio-institucional; esto es, en la organización, funciones y limitaciones entre lo público y lo privado (Gramsci 1980, 1999 TV y VI; Poulantzas 1973, 1987). Esto se asume en la presente investigación como el resultado, no únicamente de la racionalidad de los actores, sino de las luchas por establecer marcos de referencia cultural, política e institucional, desde lo ideológico (Gramsci 1980, 1999 TV y VI; Mouffe 1994, 1999, 2009; Laclau y Mouffe 2004; López-Alves 2003), pero contando con la comprensión de las estructuras económicas y políticas desde la que se construyen las agendas de los actores.

En tercer lugar, tal como se planteó en su momento, si bien es cierto los contextos globales de la economía y la política sirven de escenarios para la acción sociopolítica, derivar de estos escenarios, adecuaciones mecánicas de los actores, es restarles capacidad de participación en la configuración de la estatalidad y de la organización social en general en contextos nacionales específicos (Buci-Glucksman 1978). Por otro lado, estas miradas, que podrían definirse en términos de comprensión de la democracia, como pluralistas (Gonzalo y Requejo, 1998), desconocen los contextos de desigualdad en el marco de los cuales se dan las relaciones de poder entre distintos actores (Durand y Campodónico, 2010). Así, una mirada desde la economía política (Wolf 1994; Roseberry 1994, Gramsci, 1980) y desde la hegemonía, ubica el reconocimiento de estas desigualdades como factores fundamentales para

dar cuenta de la configuración de nuestros Estados y democracias y esto se contempla en la presente investigación como base central de interpretación.

En cuarto lugar, bajo este marco, puede decirse que los académicos han descuidado (contadas excepciones), un campo importante de reflexión y es el modo en que el poder económico limita o posibilita los procesos de democratización, tanto en el plano discursivo como en el plano institucional; esto es, el modo en que el poder económico es al mismo tiempo poder político y base desde el cual se constituye la hegemonía del capitalismo y la democracia liberal (Castoriadis 2002, 2005). En este sentido, si bien hay aportes interesantes, particularmente desde nuestra tercera perspectiva, todavía falta profundizar más la comprensión sobre cómo operan esos discursos y prácticas institucionales desde el poder económico-empresarial y desde las relaciones de poder que éste establece con otros actores sociales y políticos; particularmente frente a gobiernos que cuestionan la legitimidad del mismo y, al menos discursivamente, impulsan alternativas al modelo económico e ideológico dominante: el neoliberalismo.

En quinto lugar, esta forma de comprender las relaciones entre el Estado y los empresarios, como relaciones de poder y luchas por la hegemonía, abre posibilidades para pensar los límites de concepciones liberales del Estado, como espacio público (y de la democracia como procedimiento), en el que los actores (particularmente políticos) negocian, de manera racional, los intereses particulares para constituir el interés general (V. gr. Habermas 1982). Esto en la medida en que, las perspectivas consensualistas de la democracia (dentro de las que se podrían inscribir la elección racional y la estructural-funcionalista), parten del principio de que todo es negociable, a partir de una razón instrumental. Frente a estas formas de entender la configuración del Estado, como espacio público, se considera en la presente investigación, que este es el lugar donde se materializan, más que el interés general, los intereses que, al constituirse en intereses hegemónicos, se aceptan como intereses generales (Gramsci 1980, 1999: TT V y VI; Mouffe, 2009).

Finalmente, al centrarse en el estudio de los empresarios de élite y específicamente en las grandes asociaciones empresariales, no se quiere decir que sean los únicos actores que participan del juego político. Otros estudios se dedican al estudio de los partidos y élites políticas; al estudio de los movimientos y organizaciones sociales y su participación en la configuración institucional y simbólica del Estado y la democracia, pero la presente investigación considera importante comprender también, las dinámicas de configuración del poder desde el estudio de actores que ya de por sí son poderosos: las élites empresariales y los

actores estatales, en este caso representados por las grandes asociaciones empresariales y los gobiernos de izquierda, respectivamente.

Capítulo 2. Estado, hegemonía y élites empresariales

El presente capítulo busca establecer orientaciones interpretativas que complementen la comprensión de los procesos de reforma del Estado que vive América Latina desde hace un poco más de dos décadas. Si el capítulo anterior presentó una visión panorámica de los estudios sobre las relaciones entre élites empresariales y Estado, el presente capítulo ahondará en las teorías de la hegemonía y el lugar que en estas puede tener el problema del Estado.

Para el desarrollo de este propósito, en primer lugar, planteamos una discusión sobre el Estado, como problema teórico y cómo su configuración es el resultado de las luchas por la hegemonía. En segundo lugar, nos acercamos a los modos en que, desde algunas críticas contemporáneas autodenominadas como postmarxistas y postestructuralistas, se ha pensado el concepto de hegemonía y al lugar que dentro de estas se le ha dado al Estado.

Específicamente haremos una lectura crítica de los planteamientos de autores como Laclau y Mouffe (1985)⁹ En un tercer momento, consideramos importante volver a Gramsci y al marxismo de la segunda mitad del siglo XX en la búsqueda de ampliar el debate sobre hegemonía y Estado que esta primera perspectiva expone, de manera un tanto simplista. En cuarto lugar y dentro del marco de la crisis de las ciencias sociales de los años 70 hacia adelante, se analiza el problema del Estado y sus relaciones con los procesos hegemónicos. Terminamos con una breve discusión sobre algunas implicaciones de estos debates para el análisis e interpretación de los procesos latinoamericanos contemporáneos lo que, se espera, de bases para acercarnos a algunos de los procesos de reforma del Estado en América Latina y el lugar de las élites económicas en estos procesos.

2.1. Estado y Hegemonía

Siguiendo a Mitchels (1999) y Bourdieu (2005) hablar del Estado es construir el Estado; definir sus contornos, sus funciones, sus límites y capacidades, contribuye a problematizar su lugar y sus características. Intentar definir el Estado es participar su construcción teórica y en su proyección empírica. No obstante, los efectos de las discusiones y los discursos sobre el Estado, están mediados por el lugar que ocupan quienes discuten sobre este problema en la estructura de las relaciones sociales de poder, de su capacidad de movilizar las ideas que

⁹ No centramos en este documento dado el impacto que ha tenido en las discusiones sobre el concepto de hegemonía desde su primera publicación. Así, revisando el buscador google académico, encontramos que dicho texto es citado en su versión en español, por 1900 trabajos. ver: <https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=%22hegemon%C3%ADa+y+estrategia+socialista%22&btnG=&lr=>, Fecha de consulta: 20 de marzo de 2015. En su versión en inglés, las citas se multiplica casi por 6, siendo referenciada por 11320 trabajos (Ver: https://scholar.google.es/scholar?q=%22Hegemony+and+socialist+strategy%22&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5, Fecha de consulta, 20 de marzo de 2016. En lo que sigue, usaremos la edición de 1987

construyen sobre el Estado, de alterar o reproducir ciertas concepciones sobre el mismo y por la desigualdad de estas capacidades. De este modo, el estudio del Estado pasa por el estudio de las fuerzas que han participado en su construcción, como idea y como un conjunto de dispositivos e instituciones; por el estudio de los conflictos por su construcción y por la construcción del orden social en general. Decir que un Estado es fuerte o débil, que es autónomo o subordinado a fuerzas externas (nacionales o extranjeras) es una forma de dar cuenta de este a partir de ciertas concepciones sobre el poder y sobre las estructuras de las relaciones sociales de poder; sobre el orden social en general.

La debilidad o fortaleza de un Estado estaría medida así (juzgada y estudiada), desde las lógicas dominantes que determinan la fortaleza o debilidad de los estados a partir de “tipos ideales”. En tal dirección, discutir sobre el Estado se constituye en una discusión política que muchas veces tiende, más que a describir un estado de cosas, una “realidad”, a prescribir, a partir de ciertas concepciones de mundo, lo que este debe o puede ser, o lo que le faltaría para ser un “verdadero” Estado.

En el desarrollo de las sociedades modernas capitalistas, la discusión sobre el Estado ha contribuido a darle sus perfiles; a legitimar ciertas formas de organización social y, sobre todo, ciertas concepciones de mundo. Desde los comienzos de su proceso de formación ideológica e institucional, se intentó definir al Estado como el resultado de un proceso de civilización, de ordenamiento racional de las actividades humanas, que requería de la fuerza impersonal para “apaciguar” los conflictos entre los individuos (Hobbes 1982). En este desarrollo, pronto se vio al Estado como el escenario en el que se dirimían y tramitaban los conflictos sociales, como escenario de la razón absoluta, síntesis de la conflictividad social, superación de los conflictos entre distintos grupos sociales, entre las sociedad civil; ya no a partir de la violencia (únicamente), sino sobre todo a partir de la imposición de una razón superior; una razón que es capaz de sintetizar, positivizar las negatividades; de superar lo múltiple y contradictorio (Hegel 1985).

En oposición a esta última mirada, el Estado fue explicado como escenario desde el que se sintetizaban no los conflictos y tensiones de la sociedad civil, sino la dominación de una clase sobre otras. De este modo, la historia no es vista ya como la constitución y progresión de un agente trascendente (la razón), sino como el desarrollo de relaciones de fuerza y conflicto concretas, entre actores (clases sociales) que disputaban la construcción el orden social. El capitalismo así, es entendido como la base sobre la cual, al amparo de las contradicciones y desigualdades que este impone, se configura un tipo de institucionalidad que asegura la

dominación de una clase sobre otra; de la burguesía sobre el proletariado, del capital sobre el trabajo (Marx y Engels 1980).

Por otro lado, decir, que el Estado es una institución político administrativa que ejerce el poder sobre un territorio determinado dentro del cual pretende el monopolio de la violencia legítima (en tanto racional-legal); el resultado de un proceso de racionalización progresivo del orden social (Weber 2002), dentro del cual el éste jugaría el papel de regular las relaciones sociales a partir de la racionalidad, es dar cuenta de una forma de entender las relaciones sociales de la modernidad, una construcción ideológica (Adams 1999). En este sentido, decir también que, aparte de ser el escenario desde el cual se pretende el monopolio de la violencia legítima (legal), es el escenario de monopolio de la violencia simbólica es complementar esta idea (Bourdieu 1997). De alguna manera, tal como lo plantea ésta última perspectiva, al hablar del Estado corremos el riesgo de quedar atrapados en los discursos que sobre este se han construido históricamente; quedar atrapados en un discurso en el que el Estado, como depositario último del poder simbólico, ha generado o termina por legitimar.

Desde una perspectiva más, afirmar que el Estado es el escenario de articulación de fuerzas contradictorias en el capitalismo, desde una perspectiva liberal; escenario de producción de la hegemonía, soporte de la reproducción de las relaciones capitalistas de producción, aunque relativamente autónomo frente a una clase o fracción de clase (Poulantzas 1973) o inclusive absolutamente autónomo (Evans, Reuchemeyer y Scokpol 2002) son otras formas de comprenderlo, que parten del supuesto de que éste se ha estructurado como ese espacio dentro de un marco global de poder y/o de dominación. Hablar del Estado, por tanto, es hablar de estas formas del poder institucionalizado y de sus estructuras en el desarrollo de la sociedad moderna capitalista y de los conflictos permanentes por reconfigurar estas estructuras.

Así, el Estado, como concepto y como conjunto de instituciones, termina siendo un objeto en disputa, por lo que comprender su proceso de construcción, pasa por comprender la manera en que quienes participan de su construcción actúan, construyen sus discursos y sus prácticas, así como por comprender la estructura de relaciones sociales de poder dentro de las cuales se dan estas disputas y desde las cuales hablan y actúan los actores sociales, políticos y económicos. Esto es, analizar al Estado implica estudiar los contextos desde los cuales se producen los discursos sobre el mismo, lo que implica el establecimiento de unos principios, unos presupuestos desde los cuales hablar del Estado y sus procesos de desarrollo histórico. Estudiar al Estado, como fenómeno histórico, por tanto, parte de la discusión sobre los procesos de producción, reproducción y transformación de las sociedades capitalistas.

Dentro estas sociedades, una característica central, es precisamente la desigualdad en las posibilidades de participar de esta construcción y de todo el andamiaje económico, político, ideológico e institucional. Si partimos de este supuesto, vemos entonces que los discursos sobre la igualdad en el acceso al poder no pasan de ser más que parte de la ideología que busca legitimar ese orden como potencialmente igualitario y que oculta las tremendas desigualdades en las posibilidades de orientar lo que este “es” o “hace” (Mitchell 1999). Esto nos lleva, nuevamente a la necesidad de estudiar a los actores que participan de la construcción del Estado, los contextos, marcos de acción y los conflictos dentro de los cuales actúan discuten, propone y buscan establecer e institucionalizar los discursos sobre el Estado mismo y sobre las relaciones sociales.

Con base en lo anterior, estudiar al Estado es, para la presente investigación, determinar y comprender sus manifestaciones concretas, ejercicio que pasa por delimitar sus funciones, sus actividades, sus alcances en materia económica, social, cultural, así como territorial y poblacional, pero, sobre todo, por comprender cómo estas delimitaciones se producen en la disputa por la orientación general de cada sociedad. Proceso que no se da por la impostura del investigador, sino de su capacidad de comprender los procesos a partir de los cuales, los actores sociales involucrados, lo definen y buscan que su propia definición se establezca como la lectura “natural”, “objetiva” del mismo; esto es, a partir del estudio de los procesos de disputa por la hegemonía. De aquí que se considere que hablar del Estado, es parte central de la comprensión de los procesos hegemónicos, pues se ha constituido en una de las instituciones centrales que regulan la vida social, cultura, y política. Algo que, no obstante, como veremos, fue dejado de lado por la teoría social, particularmente de orientación marxista.

2.2. Teorías de la Hegemonía y Estado. Del postmarxismo al marxismo Gramsciano

De acuerdo con los planteamientos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987, 15 y ss.), el concepto de hegemonía emerge de la incapacidad del marxismo de las primeras décadas del siglo XX para comprender y enfrentar efectivamente las dificultades que la creciente heterogeneidad y fragmentación del proletariado (en las sociedades del capitalismo avanzado) desencadenaban para el desarrollo de una revolución socialista. Con este concepto, lo político habría ganado un mayor reconocimiento y se ampliarían los horizontes de reflexión sobre los procesos revolucionarios, hasta ese momento dominados por el determinismo economicista.

Pese a estos avances, continúan los autores, las primeras décadas del siglo XX ofrecerían apenas una lectura embrionaria de la hegemonía y de lo político, pues la gran debilidad del

marxismo, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, estaría en su incapacidad para comprender la complejidad del mundo social más allá de todo esencialismo de clase, error en el que habría caído incluso Gramsci (Laclau y Mouffe 1987, 76 y ss.) Como respuesta a estas deficiencias, los autores proponen una lectura postmarxista, fundada en el psicoanálisis, las teorías del discurso y del sujeto. (Laclau y Mouffe 1987; Mouffe 1994).

Así, los procesos revolucionarios son entendidos como la articulación, a través del discurso, de distintas luchas democráticas y la hegemonía se define como la práctica que busca articular estas luchas. Ya no habría sujetos privilegiados de la revolución, ni estructuras determinantes “en última instancia” de las luchas revolucionarias, como en las teorías marxistas, sino una multiplicidad de discursos, posiciones de sujeto y luchas democráticas (feministas, de género, ambientalistas, etc.) que, si los socialistas todavía aspiraban a un lugar en la historia, deberían articular para el impulso de una *democracia radical*: la nueva tarea del socialismo (Laclau y Mouffe 1987; Mouffe 1991, 1994, 1998).

Con esta mirada de la hegemonía, se genera un desplazamiento de los actores centrales de la revolución (de las clases a los sujetos) y de los supuestos y mecanismos que sustentaban esta centralidad (de las estructuras económicas y sociales a los discursos). De ahora en adelante, para los autores, una adecuada comprensión de los procesos revolucionarios y de la hegemonía implicaba la negación de todo tipo de determinismo (social, político, económico) y la afirmación de la capacidad de los sujetos para articular, desde el discurso y de manera autónoma, sus propias identidades y las de los otros en nuevos proyectos de sociedad (Mouffe 1994). Así, ni las estructuras económicas o políticas (V.gr el capitalismo y el Estado) serían explicaciones suficientes de la dominación, ni escenarios exclusivos de la liberación.

En palabras de los autores, la hegemonía se entiende entonces como una práctica articuladora que establece “una relación tal entre elementos, que la identidad de estos resulta modificada como resultado de esa práctica. A la totalidad estructurada resultante de la práctica articuladora la llamaremos discurso” (Laclau y Mouffe 1987, 119). Así las cosas, los sujetos no se reconocen como constituidos de una vez y para siempre, sino como atravesados por procesos identitarios que sólo logran “suturas” parciales, a través del discurso.

En este sentido, el mismo Gramsci, pese a cuestionar la existencia de las clases por fuera de procesos de articulación política; es decir, como resultado de la mediación de un agente articulador, no habría comprendido que no hay clases por fuera del discurso y que no se trataría de reagrupar una “unidad perdida” de las mismas, sino de construir esta unidad

(parcial) a través del discurso. De hecho, todo el marxismo, al centrarse en la identificación de un sujeto privilegiado de la revolución (el proletariado), terminaría por simplificar lo social y su inabarcable complejidad. (Laclau y Mouffe 1987, 130- 150).

Como se ve, el discurso se constituye en la base para interpretar (y articular), las identidades individuales y colectivas; unas identidades que, no obstante, se precisa no se construyen de cualquier manera, sino que tienen un soporte en rituales e instituciones que las encarnan (Laclau y Mouffe 1987, 125). Así, la hegemonía como *práctica articuladora* (estaría orientada a la) *construcción de puntos nodales que fijan parcialmente el sentido; y el carácter parcial de esa fijación procede de la apertura de lo social, resultante a su vez del constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud del campo de la discursividad*" (Laclau y Mouffe 1987, 131).

En toda práctica articuladora así entendida, no hay una lógica de necesidad intrínseca a los sujetos que los conduzca, de manera ineludible, a orientarse políticamente de tal o cual manera, y esto lleva a la negación de fundamentos últimos que puedan ser ubicables en cualquier ámbito de la vida social, como lo económico o lo político-institucional. Al no considerar ámbitos privilegiados desde los cuales fijar las identidades, la hegemonía sería el resultado de los procesos de articulación conflictiva, más allá de cualquier lógica dialéctica. Con esto se afirma, no habría un conflicto central o más importante, sino múltiples escenarios de subordinación que impedirían el desarrollo autónomo de las identidades de los sujetos y esto posibilitaría, una vez que la subordinación se experimenta como opresión, la activación de la lucha política (Laclau y Mouffe 1987, 145-147).

Desde este punto de vista se cuestiona la misma dialéctica como lógica del conflicto, al no reconocer a las clases sociales como los sujetos privilegiados del cambio social y ser potencialmente cualquier sujeto el encargado de impulsar los procesos de transformación hegemónica (Laclau y Mouffe 1987, 149). Ahora bien, para los autores este proceso sólo es posible si las relaciones de opresión se transforman en relaciones de exterioridad, lo que implica oposición explícita a los sentidos instaurados dentro de un ámbito particular de lo social (Laclau y Mouffe 1987, 156). Con esto, múltiples escenarios se constituyen en fuente de conflicto, pero su articulación es sólo potencialmente posible; es decir, no hay una regulación subyacente que suponga que una relación de subordinación implique,

necesariamente, resistencia y unificación de luchas dispersas (Laclau y Mouffe 1987, 151-152)¹⁰

No obstante lo anterior, los autores terminan por reconocer, aunque desde un punto de vista descriptivo “*impresionístico*”(sic) , la existencia de lo que podría llamarse formaciones sociales, las cuales generarían tipos particulares de conflictividad. Habría entonces sociedades con una mayor heterogeneidad de conflictos, aquellas pertenecientes al capitalismo avanzado y sociedades cuyos conflictos revestirían una mayor homogeneidad, las sociedades del “tercer mundo” o periféricas. Para los autores:

... en las primeras, la proliferación de los puntos de antagonismo permitiría la multiplicación de las luchas democráticas; pero estas luchas, por su misma diversidad, no tenderían a ... construir un ‘pueblo’, es decir, a equivalerse y a dividir el espacio político en dos campos antagónicos. En los países del Tercer Mundo, en cambio, la explotación imperialista y el predominio de formas brutales y centralizadas de dominación tenderían desde el comienzo a dotar a la lucha popular de un centro, de un enemigo claramente definido y único. Aquí la división del espacio político en dos campos está presente desde un comienzo, pero la diversidad de luchas democráticas es más reducida. Podríamos llamar 'posición popular de sujeto' a la que se constituye sobre la base de dividir el espacio político en dos campos antagónicos, y 'posición democrática de sujeto' a la que es sede de un antagonismo localizado, que no divide a la sociedad en la forma indicada (Laclau y Mouffe 1987, 152).

A lo anterior agregan que la lucha en los países del “tercer mundo” ni siquiera alcanza a desarrollarse como lucha por la hegemonía, sino por la mera dominación (Laclau y Mouffe, 1987: 158). Pese a esto (que es muy problemático y reduccionista), en los mismos países centrales, para los autores, las articulaciones hegemónicas triunfantes conducirían a relaciones de dominio de lo que se resista al establecimiento de una nueva hegemonía (Laclau y Mouffe 1987, 160).

En relación con los escenarios dentro de los cuales son pensadas las luchas hegemónicas, estas se desarrollarían para Laclau y Mouffe, en el ámbito de la sociedad civil, donde se produciría la construcción de un bloque heterogéneo, capaz de disputar la hegemonía de lo social, siempre entendida como parcial y contingente (Laclau y Mouffe, 1987: 162, 173; Mouffe, 1994).

¹⁰ Pese a esto, los autores ven en la Revolución Francesa y en el desarrollo del movimiento ilustrado del siglo XIX, el motor que impulsa una gran cantidad de luchas democráticas que, con el transcurso del capitalismo se hacen cada vez más complejas y heterogéneas. Las luchas por la autonomía individual y colectiva, fundadas a partir de estos procesos, se convierten en la base de las distintas luchas democráticas de las sociedades contemporáneas.

En esta dirección, al asumir que los campos de lucha son múltiples y heterogéneos, la tarea de la izquierda sería buscar la articulación de esas distintas manifestaciones de lucha por la democratización de la vida social. Para esto se debería partir de la búsqueda de una relación de equivalencia entre las distintas luchas democráticas, en un proceso en el que cada sujeto político tendría que renunciar a todo esencialismo, para poder lograr la articulación necesaria que sea capaz de desarrollarse hacia luchas de mayor envergadura, lo que no supone la negación de la autonomía de cada lucha, ya que esta, por definición estaría definida por su condición relacional (Laclau y Mouffe 1987, 206; Mouffe 1994). Sólo así, consideran, podrían darse procesos de lucha hegemónica que cuestionen las formas de constitución del individualismo posesivo del capitalismo, así como las ideas liberales de que la libertad sólo se juega en el campo de la ciudadanía ya que esta misma se jugaría en el campo de la producción (Laclau y Mouffe 1987, 209). Todo esto, no obstante, sin que se avance en la identificación de los procesos y mecanismos a partir de los cuales las luchas hegemónicas se resuelven y sin dar explicaciones, a partir de procesos históricos concretos, de la manera en que ciertas pretensiones de “suturación” de lo social, logran o han logrado establecerse hegemónicamente y a partir de qué procesos o mecanismos han logrado ser incorporadas por los sujetos en sus identidades individuales y colectivas. De esta manera, más que comprender los procesos hegemónicos del capitalismo, se le apunta a la puesta en evidencia de los fracasos de la izquierda en su pretensión de una nueva hegemonía.

Como puede verse hasta el momento, los planteamientos de Laclau y Mouffe, reducen la hegemonía a un proceso de articulación a través del discurso, única estructura (inestable) que se reconocen. Las menciones que hacen de otros campos estructurados de la vida social (v gr. capitalismo, Estado, sociedad civil, ritos, instituciones), se asumen como campos de lucha, más o menos equivalentes o como el resultado de los procesos de estructuración de formaciones discursivas hegemónicas.¹¹ No obstante, es aquí donde hay que ampliar un poco el panorama de la discusión sobre la hegemonía y el Estado volviendo a Gramsci y a otros teóricos marxistas.

Ahora bien, antes de pasar a esta reflexión, es importante considerar que, aunque los autores le dan importancia a Gramsci como punto de quiebre en el desarrollo del concepto de

¹¹ En los momentos en que se discute el problema del Estado en las perspectivas marxistas, se acusa a estas de instrumentalistas, economicistas o de no reconocer el carácter contingente y no necesario de sus funciones, de sus sentidos y lógicas. Ideas como “autonomía relativa del estado” estarían, desde estas críticas, limitadas por una lectura de lo social como algo suturado y estructuralmente definido, perspectiva en contra de la que están de manera radical; pues para los autores, no son más que discursos sobre lo social que intenta simplificar su complejidad.

hegemonía, reducen los planteamientos del mismo, cuando consideran que para éste se mantendría el esencialismo de las clases y terminan por ubicarlo dentro de las limitaciones del “marxismo tradicional”.¹² En otros textos (particularmente Mouffe 1991, 1998; Laclau 1981), se analizará de manera un poco más detallada cómo Gramsci asumió el problema del Estado y el papel que éste jugaría en los procesos hegemónicos, especialmente la idea gramsciana de “Estado integral”.

Las reflexiones de Mouffe sobre lo que podríamos considerar las dimensiones estructurales de la hegemonía, se desarrollan a partir de la discusión con Louis Althusser¹³ y su texto *Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado* (1988). En este debate, se acusa al marxismo de construir una mirada instrumentalista del Estado y, de hecho, Althusser, a pesar de sus intentos de superar esta mirada, habría terminado por construir una mirada ampliada del mismo, al considerar que la única forma de impulsar una revolución socialista sería a partir de la toma del poder de Estado y, a partir de éste, reorientar sus aparatos ideológicos: familia, escuela, sindicato, iglesia, etc. (Mouffe, 1998: 126).

En tal sentido Althusser, se mantendría dentro de los rangos de un marxismo reduccionista que instrumentaliza al Estado, que fuera ya cuestionado por el mismo Gramsci. De este modo, la concepción gramsciana de la hegemonía que Mouffe rescata en este caso, es aquella que la considera como “dirección política, intelectual y moral” y está compuesta por dos elementos. Uno, de articulación de diversos grupos sociales, por parte de la clase dominante y que la constituye en directora de la voluntad colectiva y dos, la construcción de esta voluntad colectiva, a partir de ciertas condiciones morales e intelectuales sobre la base de las cuales se crearían nuevos sujetos, logrando así la aceptación activa de la hegemonía (Mouffe 1998, 129-132).

Con esto, una construcción hegemónica desde una perspectiva revolucionaria, no se lograría haciendo tabula rasa de la ideología burguesa. Esto en la medida en que para Gramsci el

¹² Frente a esto, tal como lo plantea Jorge Luis Acanda (2002: 40), sería muy importante puntualizar que, contrario a lo que hacen Laclau y Mouffe, no puede hablarse de un marxismo, sino de múltiples manifestaciones del mismo. De ahí que la reducción de todo marxismo a algunos postulados generales termine por oscurecer el desarrollo de sus múltiples manifestaciones.

¹³ En su texto, “Teorías marxistas del Estado. Debates y perspectivas” Laclau (1981, 25-59), debate de manera más amplia el problema del estado en el marxismo. Allí se discute la manera en que se ha pensado el Estado, pasando del instrumentalismo a las lecturas estructuralistas, y las lecturas de Gramsci y Poulantzas, particularmente. Se rescatan los aportes de éstos últimos autores y del “gramsciamismo” italiano que reconoce la constitución de un campo popular que va, aunque no del todo, más allá del esencialismo de clase. No obstante, se llega al mismo punto: es necesario descentralizar la mirada y reconocer la amplia variedad de luchas democráticas para buscar las formas de hegemonizarlas. No se reconoce así la centralidad de este dentro de la estructura política de las sociedades capitalistas modernas, tanto del capitalismo avanzado, como periférico

proletariado debería ser capaz de constituirse en clase hegemónica, incluso articulando los valores producidos por la sociedad burguesa, a partir del combate ideológico. Este combate, se desarrollaría como una “guerra de posiciones” dentro de la sociedad civil y terminaría por constituir un “Estado integral”; por devenir Estado. Dicha forma de Estado debería superar las formas de las luchas anteriores y las demandas meramente corporativas (incluidas las de clase), para lograr constituir un bloque histórico capaz de una verdadera dirección moral e intelectual en una nueva sociedad. No se trata así de un momento final de la lucha hegemónica, sino de la constitución de un escenario en el cual se evidencie la politización (en el sentido de lucha permanente por los sentidos de lo social y de las relaciones sociales en sus múltiples dimensiones) tanto de la sociedad civil como de la sociedad política (Mouffe, 1991: 186-188; Mouffe 1998, 134-136).

Pese a estos reconocimientos, las miradas de Mouffe y Laclau, continúan atrapadas en lo meramente discursivo e incluso se reusan a considerar el problema de cómo las ideologías llegan a estructurarse más allá del discurso. Así, para Mouffe, "... si por un lado es cierto que las ideologías necesitan una inscripción institucional, no pueden ser reducidas a ella, ya que las ideologías no son segregadas por las instituciones en las cuales se encarnan y es por esta razón precisamente, que la hegemonía no puede limitarse al control de los aparatos ideológicos" (Mouffe 1998: 142).

Frente a esta forma de plantear la perspectiva teórica y epistemológica sobre lo social y sobre la constitución de los sujetos y la hegemonía, podríamos decir que los autores aciertan, aunque también parcialmente. Diríamos en un campo de “macroteoría”, la no fijación del sentido de lo social; la no existencia de la sociedad como totalidad estructurada y suturada de manera definitiva, lo evidencian los procesos históricos de transformación social, como fue expuesto insistentemente por Marx y Gramsci; pero lo que esta mirada no explica, es cuáles son los mecanismos que hacen que ciertas formaciones discursivas prosperen y otras no; qué es lo que hace que unos sentidos se fijen (así sea parcialmente) y otros no. Los autores han hecho referencia a la manera en que las formaciones discursivas se estructuran en instituciones, rituales y prácticas sociales, pero esto no se despliega en una explicación más amplia que dé cuenta, precisamente de porqué unas apuestas institucionales, diríamos unos proyectos de institucionalizar ciertos sentidos se fijen y otros no.¹⁴ ¿Puede decirse que los

¹⁴ Como se mencionó antes (c fr. 3) Para los autores, la “revolución democrática” de occidente se habría convertido en la base de la mayoría de los discursos democráticos y en la propulsora de las distintas formas de antagonismo en las sociedades del capitalismo avanzado, al develar, precisamente la ausencia de un sentido subyacente último de toda identidad y la ausencia de una sutura definitiva de todo orden social (Laclau y Mouffe 1987: 175 y ss) .

distintos ámbitos institucionales, rituales y prácticas sociales que sirven de soporte estructural para las “formaciones discursivas” son más o menos equivalentes? ¿Qué papel puede jugar el Estado, en el desarrollo de los procesos hegemónicos y contrahegemónicos en las sociedades contemporáneas, y latinoamericanas en particular? Y lo que también queda sin responder, ¿Qué es lo que hace que el capitalismo como formación discursiva también estructurada en instituciones, rituales y prácticas sociales, se mantenga como formación hegemónica y dominante, pese a la revolución democrática de occidente, que los autores reivindican como la fuerza propulsora de las distintas luchas democráticas contemporáneas?

Lo que se intentará mostrar más adelante, es cómo el problema de la hegemonía, no puede reducirse a lo meramente discursivo, sino que los mismos discursos y las posibilidades de producirlos y proyectarlos están condicionados por relaciones y prácticas sociales estructuradas. Lo que se argumenta a continuación es que, con todo, el análisis sociológico puede aportar elementos a la reflexión filosófica y en este análisis la comprensión de los procesos de estructuración de lo social es clave y, este análisis es importante en la mirada de Gramsci sobre la hegemonía, al menos como indicio.¹⁵

2.3. Un necesario retorno a Gramsci

De acuerdo a lo anterior, podemos comenzar diciendo que Gramsci, contrario a los teóricos posmarxistas o posestructuralistas antes referenciados, reconoce de entrada la importancia teórica e histórica de lo que podemos llamar elementos estructurales del desarrollo del capitalismo, e identifica la hegemonía burguesa como el resultado de un proceso de estructuración de su poder y liderazgo, en los distintos ámbitos de la vida social, dentro del marco de las relaciones sociales de producción capitalista, más allá de lo meramente discursivo-ideológico. Esto es, no asume lo estructural como un elemento derivado y subsidiario de la hegemonía política burguesa, sino como la contracara del mismo proceso de estructuración de la sociedad y el Estado capitalista. Así, el tránsito del antiguo régimen a las

No obstante, habría que ver cómo pese a esto, una estructura dominante impide la materialización de los objetivos de estas luchas y el abandono de orientaciones esencialistas dentro del mismo capitalismo avanzado, al establecerse como algo que no es susceptible de discusión, como es el mismo sistema capitalista de producción, sea como discurso dominante o como prácticas y relaciones estructuradas; en síntesis, lo que esta mirada no permite reconocer o explicar es la manera en que un discurso llega a ser eficaz, por lo que teorías como esta, comienzan a tener problemas. Para una crítica de los límites de las perspectivas discursivas ver: Balsá 2006: 16-36.

¹⁵ Como ya ha sido planteado por varios autores, existen dificultades en la lectura de Gramsci, y específicamente de sus *cuadernos de la cárcel* (v gr. Carnoy 1985, 65-68; Steinmetz 1999, 13-15). En este documento se reconocen estas dificultades y, por tanto, se asumen los planteamientos del autor italiano como indicios, como fuentes abiertas de reflexión, pues algunos de sus planteamientos fueron sometidos a una revisión permanente, que no concluyó en un conjunto de textos definitivos. En este apartado nos basamos en la lectura de *los cuadernos de la cárcel* editados por Gerratana (1999 [1975]) y marginalmente en el texto temático *notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el estado moderno* (Gramsci 1980)

sociedades modernas capitalistas, configuró no sólo un nuevo modo de producción, sino que este constituye una nueva estructura social, nuevas relaciones sociales de poder, nuevos marcos institucionales y unos sujetos que lo sustentan en el plano político-institucional, ideológico y moral. La burguesía se estableció en este proceso como el agente articulador de las fuerzas que buscaban romper con el *antiguo régimen*, construyendo discursos, plataformas ideológicas y un complejo sistema de valores y creencias que organizan, reglamentan y regulan el nuevo mundo que se va constituyendo e institucionalizando. Este liderazgo se lee como soportado en el control privilegiado de lo que Gramsci llamó aparatos de hegemonía, así como de los medios de producción (Buci-Glucksman 1978). La configuración del modo de producción capitalista, es entonces el resultado de fuerzas que se asocian y se articulan políticamente, pero bajo el sustento del creciente poder estructural-material (político-institucional y económico) de la burguesía que termina por disminuir el potencial revolucionario de las fuerzas subalternas, precisamente al estructurar e institucionalizar (y ser beneficiarias de) las relaciones desiguales de poder y producción capitalista y de las prácticas sociales que estas determinan.

Este proceso de estructuración de la hegemonía burguesa se despliega gracias al desarrollo de todo el andamiaje institucional, ideológico (axiológico y ontológico) de las sociedades modernas. Así, la hegemonía burguesa no sólo se produce mediante la toma del poder de Estado, sino que, de hecho, esta “toma” del poder es el resultado de su proceso precedente, de constitución, como clase dominante al interior de la sociedad civil y de la constitución progresiva de este nuevo Estado, al devenir Estado. Las instituciones del Estado, dentro del capitalismo, contribuyen así a consolidar este poder hegemónico burgués, en tanto el conjunto de valores, creencias y sentidos de lo social que sustentan este poder, progresivamente se instauran en distintos ámbitos de la vida social y se refuerzan con la coerción que éste desarrolla.¹⁶

En tal sentido, tanto al interior de la sociedad civil como del Estado, los valores capitalistas adquieren progresivamente el rango de “sentido común” y esto facilita su predominio y liderazgo, lo que viabiliza el dominio de las instituciones políticas y económicas modernas, su producción y reproducción material. Al respecto, Gramsci critica las formas esencialistas y

¹⁶ Una lectura sobre el proceso de constitución de la hegemonía burguesa, desde el punto de vista sociológico-institucional, que puede ser complementaria con la perspectiva gramsciana, puede encontrarse en la *Historia y crítica de la opinión pública* de Jürgen Habermas. En esta obra el autor da cuenta del desarrollo de las instituciones y discursos que sirven de soporte estructural para la constitución del discurso burgués-liberal, sobre la igualdad, la libertad, el Estado, lo político, lo público y lo privado, etc. Ver. Habermas 1981, 37-171.

mecanicistas de los campos de producción ideológica y de reproducción de las relaciones de poder, tanto “propias” del Estado como de la sociedad civil. Esto es, cuestionó la idea de un Estado como mero instrumento de dominio y coerción de una clase sobre las demás. Para él, tanto la sociedad civil, como el Estado y de modo general, todo desarrollo ideológico y material del capitalismo, se constituyen mutuamente y poseen facultades educativas que posibilitan la reproducción del capitalismo tanto en los planos ideológicos y morales como materiales (Gramsci 1999 TV, 22-25)¹⁷

La mirada gramsciana sobre lo que aquí se ha llamado configuraciones estructurales del capitalismo, por supuesto reconoce el papel de su construcción política o, en términos de Laclau y Mouffe, discursiva; sólo que no se queda ahí, pues tiene en cuenta cómo estas construcciones terminan por estructurarse en las prácticas sociales y aparecer como dotadas de trascendencia histórica; como si estuvieran más allá de cualquier consideración política o ideológica. Una apariencia que debía ser combatida, precisamente, desde la filosofía de la praxis.¹⁸

Las formaciones estatales, las diversas formas de estatalidad y en general, las distintas instancias y espacios de la vida social, son consideradas como constituidas políticamente, pero estructuradas en las prácticas y en la vida material de los sujetos. Estas se instituyen en sus propias subjetividades (en lo ideológico y lo moral), incluidas las de algunos de quienes pretendían su transformación, pero no alcanzan a comprender la profundidad y complejidad de estas formaciones institucionales (Gramsci 1999 T V, 41).

En esta dirección, Gramsci reflexiona sobre el Estado y las dimensiones de la hegemonía y la dominación, siguiendo a Marx (1973), para quien precisamente el capitalismo se estructura históricamente a partir de las relaciones sociales de producción que, tal como son leídas acertadamente por William Roseberry (1994) o Jorge Luis Acanda (2002, 214), son a la vez un problema económico-material, cultural e ideológico.¹⁹ De este modo, habría dos

¹⁷ Esta mirada sobre el derecho, es retomada por Poulantzas, a fines de los años 60. Ver: Poulantzas, 1973,

¹⁸ Así, para Gramsci, “La innovación fundamental introducida por la filosofía de la praxis en la ciencia de la política y de la historia es la demostración de que no existe una ‘naturaleza humana’ abstracta, fija e inmutable (concepto que ciertamente deriva del pensamiento religioso y de la trascendencia) sino que la naturaleza humana es el conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas, o sea un hecho histórico averiguable, dentro de ciertos límites, con los métodos de la filología y de la crítica. Por lo tanto, la ciencia política debe ser concebida en su contenido concreto (y también en su formulación lógica) como un organismo en desarrollo...” Gramsci, 1999 TV, 49.

¹⁹ Aquí sería importante recordar la manera en que se entiende la producción de la vida material para Marx y decir que dicha producción es tanto material como ideológica; que esta producción es inseparable, que en el plano ideológico, lo material adquiere sentido, y que en este plano, se produce, precisamente el combate permanente por legitimar o cuestionar y transformar los distintos modos de producción. Marx 1973, 1999).

dimensiones para pensar la hegemonía. Una, como proceso de articulación política (esto es, de algún modo, discursiva) de fuerzas dispersas,²⁰ pero también como procesos de constitución de nueva institucionalidad y nuevas relaciones y prácticas sociales que terminan por estructurar y materializar esa articulación política. Esto se desarrollaría en los procesos revolucionarios, a través de la “guerra de posiciones”, que no es sólo guerras por el control, sino por la construcción y orientación de instancias de producción ideológica dentro de una sociedad determinada y le apuntaría a la configuración de una nueva sociedad y de nuevos individuos y devenir Estado y nueva formación social (Gramsci 1999 TII, 187-188). En tal mirada, sería también una guerra por la construcción y dirección de los espacios de producción discursiva y orientación ideológica, sin desconocer las necesarias transformaciones de la vida material y de las relaciones sociales de producción.

Los actores implicados en la construcción y orientación de los aparatos de hegemonía son, para Gramsci,²¹ los intelectuales. Así, más que las clases en general o actores sociales preconstituidos por las meras relaciones de producción capitalista, son los intelectuales, como organizadores de la vida social y de las relaciones sociales, en el orden político, económico, social y cultural, los que construyen y ayudan a configurar las clases sociales y la hegemonía y, por tanto, todo el aparataje institucional, ideológico y de manera más profunda, moral, desde el cual una hegemonía se produce y reproduce.

Es por esta razón que para Gramsci son tan importantes los “aparatos de hegemonía”, su desarrollo histórico y su lugar en cada formación social nacional. El estudio de estos, parte del supuesto de que cada formación social nacional, produce diversos tipos de intelectual, así como diversos escenarios de producción ideológica e intelectual y diversas gradaciones, tanto de escenarios como de los mismos intelectuales; esto es, diversas estructuras de las relaciones sociales de poder y de producción material e intelectual (Gramsci 1999 TIV, 353-373).

Desde esta mirada, las ideologías, más que ser el resultado mecánico de lo que podría llamarse la condición de clase y más que ser mera apariencia de la realidad, serían el resultado de la reflexión de los sujetos sobre si mismos en sus relaciones sociohistóricas y por tanto tendrían un carácter también histórico, es decir, cambiante (Como bien es reconocido en Laclau 1981). Las clases sociales (y hoy diríamos, diversos actores sociales), su existencia objetiva y subjetiva son para Gramsci uno de los resultados del desarrollo del capitalismo

²⁰ Sus reflexiones sobre los partidos políticos son particularmente importantes al respecto. Ver. Gramsci, 1980.

²¹ Como bien lo argumentaron Buci-Glucksmann (1978 [1975]), Portantiero (1999) y, desde otra perspectiva teórica, Habermas (1981)

como modo de producción, una producción/creación histórica y, podría decirse, gnoseológico-ideológica dentro de éste, y no el mero reflejo de ciertas relaciones sociales de producción, en la medida en que éste se constituye también diversificando los espacios y procesos de socialización de los sujetos.

De este modo, en cada formación social se desarrollan ciertas clases y así mismo, ciertos tipos de intelectuales que son los encargados de organizar el pensamiento, justificar y legitimar ciertas formas de dominación y de poder y, en general, ciertas formas de organización social, pero también de transformarlas. Todo lo que se pueda decir de cualquier formación social, es que es una producción intelectual, es decir ideológica y es por esto que el análisis histórico-político, es también importante para Gramsci, pues permitiría comprender los contextos en los cuales los sujetos se piensan a sí mismos y dan cuenta del mundo en que viven.²² Las formas de enunciar la vida social y las características que llegan a constituirse en “sentido común”, son las que representan el modo dominante-hegemónico de pensar y de vivir.

Es en este marco que se entiende la importancia que Gramsci le dio al estudio del desarrollo de la sociedad italiana, así como de los procesos de desarrollo de las sociedades modernas en general; estudio que le sirve para comprender cómo se configuró históricamente la hegemonía de la burguesía (en el caso de la sociedad italiana, de manera limitada) y cómo esto se manifiesta en cada sociedad en particular. Un proceso que se ve no como el resultado inmediato de las revoluciones burguesas, sino como un proceso de desarrollo progresivo, antes y después de devenir Estado (Gramsci 1999 TV, 34). Esta forma de entender los procesos hegemónicos conduce al autor italiano, al estudio de diferentes tipos de sociedad y al reconocimiento de la especificidad de los procesos históricos de las mismas, para identificar las particularidades de las estructuras sociales, así como los tipos de intelectuales, diríamos preponderantes, dentro de los tipos de relaciones sociales de poder y de producción de cada sociedad (Gramsci 1999 TII, 186-190).

La comprensión del quién y del contexto de la producción de la hegemonía, es ampliada por Gramsci a partir del análisis de las dinámicas de los conflictos específicos que cada formación social supone. Ahora, para Gramsci, el sentido de estas luchas por la hegemonía es la

²² Esta aquí donde puede evidenciarse cierta contradicción en los discursos postmarxistas de Laclau y Mouffe, en el sentido en que, pese a contradecir la existencia de estructuras sociales que condicionan o determinan la formación de ciertos conflictos por el poder (sociedades avanzadas, sociedades del “tercer mundo”, terminan por aceptar que estas estructuras existen y efectivamente definen ciertas formas de conflictividad social. No obstante, no explican esta supuesta menor heterogeneidad del campo político en las sociedades del “tercer mundo”. Es tal vez Laclau quien ha intentado explicar esta mirada dicotómica del poder particularmente en América Latina, a través de sus reflexiones sobre el populismo. Ver al respecto, Laclau (2005).

orientación global de la sociedad y no de ciertas prácticas sociales en particular, pese a que es en estas en las que la hegemonía capitalista se despliega hasta devenir Estado, así como también serían posibles nuevas formas de articulación contrahegemónicas. Es en este marco que Gramsci distingue una “gran política” de una “pequeña política” y considera que el problema de la hegemonía se orienta hacia la gran política; esto es, hacia la configuración de proyectos globales de sociedad que se entienden como superación y elevación de las condiciones materiales de existencia y del espíritu humano (Gramsci 1999 TV, 20 y ss.). De este modo, todo proyecto de orientación o reorientación global de la sociedad puede ser entendido como proyecto hegemónico o contrahegemónico y esto pasa, necesariamente, por la configuración de las instituciones económicas y políticas sobre las que se despliega cada formación social histórica.

El desarrollo de la burguesía, entendido desde el estudio de la hegemonía burguesa y del capitalismo como modo de producción (cultural y económico) dominante, y de sus distintas manifestaciones, nos lleva a pensar en los distintos lugares donde se desarrolla la lucha política, tales como el Estado y la sociedad civil (Gramsci 1999 TIV, 171 y ss.) Este estudio se relaciona, a la vez, con los tipos de intelectuales que se constituyen, tales como administradores, los periodistas, los economistas, políticos-burócratas profesionales **y los empresarios** en sus distintos tipos; pero también, con el estudio del desarrollo de intelectuales subalternos como los líderes sindicales y de la prensa popular y con las distintas formas que adquiere la sociedad y el Estado (Gramsci 1999 TV, 188).

Tener en cuenta los contextos históricos del desarrollo de los intelectuales, se relaciona de este modo con los tipos de institucionalidad política, económica, social y cultural, que se desarrollan en cada sociedad, pues es en estos espacios donde, al amparo de la ideología burguesa capitalista (la ideología del individualismo, de la supremacía del mercado y del capitalismo como modo de producción, del Estado como “vigilante nocturno” dentro la hegemonía y el dominio liberal, etc.) se configuran las orientaciones sociales globales, culturales, morales y políticas de los intelectuales, así como sus contradicciones (Gramsci 1999 TVI, 195). El peso específico de cada tipo de intelectual dentro de la estructura de relaciones sociales de poder y de producción, está definido por la configuración global del poder y por los marcos institucionales (formales e informales) que los estructuran, tanto a

escala nacional como internacional. Sobre la comprensión de estas configuraciones es que los intelectuales lograrían impulsar procesos radicales de transformación social.²³

Para Gramsci, en tal sentido, son claramente diferentes los procesos de constitución de las clases dominantes en la Europa desarrollada (teniendo en cuenta las diferencias de cada país), frente a la Europa más atrasada, de la cual hace parte la Italia que él mismo vive, estudia y padece. Del mismo modo, Gramsci diferencia los distintos procesos de configuración de la dominación y la dirección política en Estados Unidos o la Unión Soviética. En cada sociedad habría ciertos espacios con mayor peso relativo de producción de la hegemonía (en la tensión permanente entre Estado y sociedad civil) y, por tanto, ciertos tipos particulares de intelectuales encargados de esta dirección moral, cultural, ética y política, tanto para su reproducción como para su transformación (Gramsci 1999 TV, 186 y ss.). Todo esto va, con seguridad, más allá de la diferenciación “*impresionística*” de Laclau y Mouffe, entre sociedades de capitalismo avanzado y sociedades del “tercer mundo”; diferenciación que simplifica la complejidad y heterogeneidad de las sociedades del denominado “tercer mundo”.

El desconocimiento de las particularidades de cada sociedad (de las cuales derivaba su posición relativa frente a otras sociedades), representaba para Gramsci, el peor error de cualquier proyecto revolucionario, en tanto se desconocerían las bases sociales sobre las cuales se proyecta construir una nueva hegemonía, una nueva dirección moral y cultural y desde esto, una nueva lógica de las relaciones sociales en su conjunto.

Dentro de esta mirada, si se hace énfasis en las clases como actores políticos centrales, no es por pura ceguera reduccionista o clasista, sino porque, desde la óptica y el contexto en la cual se desarrolla este pensamiento, la división fundamental que, no sólo se lee, sino que está inscrita en las prácticas sociales tanto de los revolucionarios y de buena parte de los actores sociales y políticos de las sociedades occidentales en general, es una división de clases sociales o, para ponerlo en términos actuales, de clasificaciones sociales, materialmente sustentadas por el modo capitalista de producción y las relaciones sociales desiguales que este impone (Bourdieu 2001, 101-130). Todo esto, sin desconocer algunos intentos de la ciencia política positivista de principios del siglo XX, de negar la existencia “objetiva” y “subjetiva” de las clases sociales (Miliband 1970: 24-49). Lo que aporta Gramsci, es una lectura ampliada de cómo se configuran estas clases, desde el punto de vista político y cómo se dan los

²³ En el Tomo III de los Cuadernos de la cárcel (1999) abundan las referencias sobre el problema de los intelectuales y su papel en la construcción de lo nacional-popular, sobre todo a partir de una lectura del desarrollo de la sociedad italiana y los intelectuales de este país.

desarrollos específicos en cada sociedad; una lectura que no desconoce el peso de las estructuras sociales, económicas y políticas dentro de las cuales actúan los sujetos (Gramsci 1999 TII, 175-176; Gramsci 1999 TIV, 184-201)²⁴

Es este análisis el que, a mi juicio, conduce a Gramsci a plantear la importancia de la sociedad civil como el campo de lucha por la construcción de una nueva hegemonía, sin desconocer la importancia del Estado dentro de este proceso. No se trataba simplemente de ganarle los espacios de dirección ética y moral a la burguesía, sino de constituir, en las prácticas políticas, nuevos escenarios que permitieran a los socialistas ir construyendo un nuevo Estado; devenir *Estado integral*. La conquista y construcción de estos espacios era central para Gramsci en tanto permitirían, no sólo ir ganando terreno en el plano ideológico y cultural sino conformar al intelectual colectivo que se haría cargo de la nueva organización social y de las transformaciones imprescindibles de la vida material. Ahora bien, el análisis de la sociedad civil como escenario de la “*guerra de posición*”, allí donde esta estuviera desarrollada y fuera importante política y materialmente, es complementado por Gramsci, entendiéndola también como escenario de la acción del partido político revolucionario, como sujeto colectivo de la revolución en las sociedades modernas, como el *príncipe moderno* (Gramsci, 1999 TV, 30-46; 1980).

A partir de lo anterior, se establece que tanto sociedad civil como sociedad política están intrínsecamente articuladas y los intelectuales que asumieran la lucha por esta paulatina conquista de las estructuras establecidas, así como de la construcción de nuevas estructuras y prácticas sociales, no podrían establecer relaciones de exterioridad frente a estas luchas, sino que debían establecerse como articuladores internos a las mismas. La constitución de los intelectuales orgánicos de las luchas revolucionarias era la tarea del partido político y sus conquistas deberían apuntarle a la constitución de un nuevo Estado, tal como lo habían hecho históricamente los partidos e intelectuales de la burguesía (Gramsci 1999 TV, 30-49; 1980).

El sustento de esta mirada se edifica sobre la comprensión de los distintos espacios de la

²⁴ Aquí, es importante la discusión gramsciana de la manera en que los sujetos construyen su conciencia de sí mismos en el terreno de las ideologías. Para Gramsci, las ideologías no son “apariencias”, errónea lectura de algunos marxistas de su tiempo y de algunos críticos reduccionistas del marxismo, sino representaciones históricamente condicionadas, es decir, con un asidero práctico para los individuos, sobre su propia vida; su pasado, su presente y su porvenir. Esta reducción del marxismo, según la cual las ideologías serían meras apariencias o, para otros, una falsa conciencia, es el resultado de la no comprensión de los planteamientos de Marx. Para Gramsci, la ideología es una lectura, más o menos objetiva de la realidad por parte de los individuos. De lo que se trataría, por tanto, es de dar un combate por la hegemonía ideológica desde el marxismo o más específicamente desde la filosofía de la praxis, que daba cuenta de la no existencia de una naturaleza humana, así como del carácter histórico de todo pensamiento, de ahí su potencial democrático, pues, precisamente lo que se combatiría es el cierre de sentido que la hegemonía capitalista pretende.

estructura social capitalista, de sus funciones de reproducción, pero también de sus potencialidades para la transformación social, lo que aleja a Gramsci del funcionalismo que algunos terminan por adjudicarle (v. gr. Cohen y Arato 2000)²⁵

La lectura del Estado, dentro de este contexto, no se reduce para Gramsci a los aparatos de gobierno y de represión, sino que sus formas específicas darían cuenta de los modos globales de organización de la vida social en cada sociedad nacional, pues en éste se condensan (Buci-Glucksman 1978, 90 y ss). El Estado, así entendido, está determinado por el desarrollo de las luchas de clases y de las distintas luchas en su interior lo que, por otro lado, significa que las clases no son sujetos hechos, por su “condición de clase”, sino construcciones condicionadas por su construcción/creación intelectual. Su propia configuración institucional, no se ve como construcciones autónomas, sino como el resultado de la confrontación por las formas de esta institucionalidad y sus materializaciones políticas e institucionales. El Estado sería entonces, la síntesis del desarrollo de la lucha de clases y de la capacidad de estas de establecer regímenes de dirección política, ética, moral, cultural y, por supuesto, económica; esto es, síntesis de la hegemonía. La separación entre Estado-sociedad civil y sociedad política, planteará Gramsci, no es más que analítica, pese a que se establezcan fronteras institucionales más o menos marcadas (Gramsci 1999, TVI, 181-186; Buci-Glucksman 1978; Fontana 2001, 18; Maya 1982).

En resumen, puede decirse que el Estado es para Gramsci, en primer lugar, un conjunto de dispositivos político- institucionales que buscan asegurar la articulación social y su proyección en el tiempo, gracias a sus capacidades de coerción política y sus funciones normativo-educativas. En segundo lugar, y de manera más general, el Estado es también el resultado de un “estado de cosas”, una forma particular de concreción de ciertas formas de organización social y de hegemonía; en tanto sus manifestaciones específicas dan (o pretenden dar) cuenta del orden social en general y de las múltiples luchas por su orientación al interior de cada sociedad. Por tanto, el Estado como la sociedad civil se entienden como complejas formas de organización social que implican normas, acciones, valores, relaciones de poder y dominio, creencias y espacios en los que los sujetos colectivos constituyen sus miradas del mundo, pero también, en los que entran en conflicto por la orientación global de la sociedad.

²⁵ Para un desarrollo más amplio de esta mirada crítica de la sociedad y sobre la manera en que desde Gramsci se concibe la misma ver: Acanda (2002).

Así, dentro de las sociedades modernas los mismos partidos políticos, son más que organizaciones políticas para la toma o mantenimiento del poder de Estado; más que aparatos de agregación de intereses, como en la ciencia política contemporánea. Se constituyen en aparatos de hegemonía; esto es, escenarios desde los cuales se impulsan ciertas formas de organización social y de relaciones sociales. Ahora bien, la especificidad de los partidos no puede ser entendida únicamente a partir de sus etiquetas, sino de los proyectos globales de sociedad que impulsan o defienden y a los que responden los actores individuales y colectivos, consciente o inconscientemente. De esto se deriva la manera en que Gramsci entiende a la prensa, las iglesias, los gremios y sindicatos, la escuela y los escenarios de producción intelectual en general (aparatos de hegemonía), como “representantes” de ciertos partidos, pese a que bajo ciertas circunstancias, sus representantes se declaren autónomos, independientes o, incluso, a-políticos, frente a las etiquetas de los partidos (Gramsci 1999 TV, 20-46; Gramsci, 1980).

En coherencia con lo anterior, las formaciones estatales buscarían estabilizar, aunque siempre lo logren parcialmente, un orden social hegemónico; es decir, un conjunto de valores, creencias, prácticas y relaciones de poder, normas, concepciones del sujeto, individualidad, etc. Así mismo, estas formaciones estatales se reconocen como escenarios de su propia producción y reproducción. Por tanto, pensar la hegemonía, sin pensar los aparatos desde/hacia los cuales se despliega, es desconocer los procesos y espacios concretos en los cuales los individuos o los sujetos configuran sus miradas del mundo y sus propias identidades o, en términos actuales, sus discursos. Con esto no se afirma, como cuestionan Laclau y Mouffe, que las instituciones segreguen ideologías, o de construir un Gramsci institucionalista o funcionalista, sino de reconocer que, precisamente, los sujetos están anclados histórica, social, estructural e institucionalmente, y actúan en estos marcos estructurados; por la reproducción de estos o por su transformación.

De esta manera, se establece la hegemonía como un proceso en el que, ciertas ideas, valores, creencias, etc., logran constituirse en las bases de la dirección política, cultural, ética y moral desde un plano estratégico de ciertos actores o clase sociales; pero también como una herramienta de análisis de las formas en que esta dirección (y dominación) se produce y reproduce históricamente en los distintos escenarios en los que se desarrolla (Escuela, prensa, iglesias, familias, Estado, empresas, etc.)

Un punto de partida, de todo este análisis es, claro está, el reconocimiento de la existencia, material e ideológica de un modo de producción (el capitalista), con ciertas estructuras socio-

institucionales e ideológicas, cuya superación se edifica a partir de la comprensión de su propio funcionamiento. Este reconocimiento, no significa que la sociedad se vea como algo “suturado” de manera definitiva, sino precisamente, como algo que pretende suturas definitivas, al establecer sentidos y significados que se asumen como supra históricos.

Finalmente, frente a las críticas a las perspectivas de clase sobre la hegemonía, podríamos aceptar hoy la no existencia de sujetos “universales” de los procesos de transformación social, pero sí que hay sujetos privilegiados cuyo poder se encuentra condicionado por las relaciones desiguales y las posiciones desiguales en la estructura de relaciones de poder y producción. Esto no quita la necesidad de reconocer el papel que las luchas orientadas por lecturas clasistas contribuyeron y siguen contribuyendo a la estructuración de la sociedad capitalista, así como a la complejización de la conflictividad social y siguen siendo hoy, pese a su marginalidad en algunos contextos, sustento de la orientación política de una amplia variedad de actores sociales y políticos. Las mismas luchas con fundamentos clasistas, pugnan todavía por la hegemonía-articulación de distintas luchas sociales en la búsqueda de transformaciones radicales de la sociedad capitalista, incluso en América Latina, donde la presencia del movimiento obrero como agente articulador de la heterogeneidad política y económica ha sido más bien marginal en algunos casos.

2.4. Hegemonía y Estado en los aportes del marxismo y las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX

Como es sabido, los aportes de Gramsci a la comprensión de los procesos de transformación social y de las relaciones sociales de poder dentro del capitalismo, no adquieren relevancia sino a partir del comienzo de las publicaciones de sus escritos de la cárcel, desde 1948 hacia adelante. Esto inicialmente mediante la compilación de textos organizados temáticamente y luego, a mediados de los años 70, gracias a la publicación integral de sus *cuadernos de la cárcel* (Gerratana 1999). A partir de este momento se generaron importantes debates sobre las ideas de Gramsci frente a las teorías revolucionarias, pero también al pensamiento social en general.²⁶

²⁶ Si se revisa el desarrollo del pensamiento social posterior a la segunda guerra mundial, puede evidenciarse que es sobre todo en Italia y Francia, desde donde se va desplegar el pensamiento gramsciano. Durante los años 60 y 70, el reconocimiento se extiende a otros contextos y a distintos campos de reflexión disciplinar. Pero, tal como lo plantea Miliband (1970, 8), en el público anglosajón, lo que se evidencia es el desconocimiento de los planteamientos de Gramsci y sus aportes a la teoría política en general y a las teorías del estado en general. La teoría crítica, por ejemplo, que se desarrolla en Alemania y Estados Unidos, ni siquiera hace menciones indirectas al pensamiento gramsciano. Para una lectura de la expansión del pensamiento de Gramsci en algunos países de América Latina ver: Kanoussi (comp. 2000); Thwaites (1994); Para una lectura de la influencia del pensamiento gramsciano en Colombia ver: Foro Nacional Por Colombia (1991).

Algunas de estas discusiones han resaltado la importancia de ciertos conceptos, así como las fuentes de las que bebe el Gramsci para la construcción de sus perspectivas teóricas y políticas. Se discuten así problemas como el de la sociedad civil (Bobbio 1977, 150-176; Cohen y Arato 2002, 174-189; Ancada 2002), el problema del bloque histórico (Portelli, 1977), su marxismo, historicismo o leninismo (Althusser 1977, 243-279; Buci-Glucksman 1978; Portantiero 1999); los aportes o, mejor, su intrascendencia frente al marxismo ortodoxo para América Latina (Cueva 1984), entre otros temas.²⁷ Algunas de estas discusiones, no obstante, se dan buscando el Gramsci más útil (o inútil), para justificar o legitimar ciertas posiciones políticas y teóricas y por momentos enseñan poco sobre sus aportes a las teorías revolucionarias y a la teoría social en general, tal como lo han planteado algunos autores (V.gr. Fernández 1977, 7-35; Buci-Glucksman 1978; Portantiero 1999; Gerratana 1999, 11-35; Acanda, 2002).²⁸

Ahora, el contexto global de emergencia del pensamiento de Gramsci no es el mismo en el que éste se ha producido y esto va a marcar los modos en que este pensamiento es recibido. Particularmente a partir de los años 60 y 70, hasta la publicación integral de los cuadernos de la cárcel, mucha agua ha pasado bajo el puente. En estos años se vive una de crisis en la teoría social occidental y se cuestionan cada vez más las formas de ver lo social desde perspectivas globales o totalistas (Deleuze y Guattari 1985; Foucault 1979; Laclau y Mouffe 1987; Marchart 2009). Esta crisis es vista también como un proceso de des homogenización y deshegemonización de occidente (Friedman 2003). Hay una creciente crítica de la ciencia y de su capacidad para ofrecer respuestas a las crisis sociales, económicas, políticas y culturales en las que las sociedades occidentales se han sumido desde la primera guerra mundial. Hay crisis de paradigmas, cuestionamiento de los “meta-relatos” omniabarcadores, de las miradas macrosociales que lejos estaban, para sus críticos, de explicar la complejidad social (Lyotard 1987; 1998, 32-43), pero también defensas radicales del pensamiento científico que en este

²⁷ Dentro de este marco es que se desarrollan las posturas que se auto definen como postmarxistas, así como también posthegemónicas de lo político y lo económico, pretendiendo con esto establecer nuevas lecturas de lo político en las sociedades contemporáneas en las que este concepto no aportaría mucho para comprender su complejidad ni, por tanto, para transformar las actuales condiciones del poder y de la dominación capitalista (Artiditi 2010).

²⁸ En algunas de estas miradas que se van configurando sobre Gramsci, de hecho, se asume su pensamiento como acabado, o estático, y se desconoce el hecho de que, por las propias circunstancias en las que Gramsci escribe en la cárcel, su pensamiento es supremamente dinámico, abierto, un pensamiento que se revisa permanentemente. Sus conceptos, del mismo modo son planteados y replanteados, una y otra vez. En este sentido puede leerse a Cospito (2000, 243-256), quien muestra cómo, por ejemplo, conceptos centrales de la reflexión de Gramsci como Estructura y superestructura fueron revisados y replanteados en varias ocasiones en sus *cuadernos de la cárcel*.

momento ha encontrado fortaleza en los desarrollos teóricos del estructuralismo.²⁹ Una crisis de la ciencia en la que la misma no se ve como la salida para enfrentar las implicaciones de la tecnología y de las sofisticadas formas de control social desarrolladas a partir de “racionalización” de las relaciones sociales (Marcuse, 1993; Arendt, 2005). Se produce en este marco un cuestionamiento de los regímenes autoritarios y totalitarios, algunos de ellos derivados de lecturas mecanicistas del marxismo; se cuestionan las formas de entender a los sujetos y a las subjetividades como entidades totales y centradas (desde perspectivas clasistas o esencialistas) y en general a las perspectivas teóricas “fundacionalistas” (Marchart 2009). Se produce en este contexto, emergencia de estudios de la cultura y la subjetividad a partir de críticas feministas o de género, así como una creciente importancia del psicoanálisis; se desarrollan lecturas constructivistas, que se oponen a lecturas estructuralistas omniabarcadoras. La lectura de Gramsci, por tanto, en este nuevo escenario, no podía estar exenta de los condicionamientos de este nuevo contexto social, cultural, político y económico. No obstante, dentro del mismo marxismo, algunos autores buscaron profundizar las reflexiones del autor italiano sobre la hegemonía y, para nuestros propósitos, sobre la relación entre hegemonía y Estado, en el marco de algunas pretensiones anglosajonas por abandonar este último concepto como categoría científica, debido a su supuesta imprecisión (Miliband, 1970; Carnoy 1985; Steinmentz 1999, 10-12; Mitchel 1999, 76-97). Así, si bien se puede cuestionar el instrumentalismo del Estado por parte de autores como Althusser (1980), tal como lo hacen Laclau y Mouffe (1985), hay que resaltar que Nicos Poulantzas³⁰ intentó superar estas miradas planteando una lectura estructural, pero crítica, tanto de la dominación y del Estado capitalista como de la misma hegemonía (Poulantzas 1973, 1987).

²⁹ Dentro de este marco, es importante señalar la manera en que dos tendencias del pensamiento social se oponen y, diríamos, luchan por la hegemonía intelectual a partir de la segunda postguerra: estructuralismo y constructivismo. El primero vinculado con la lingüística, la etnología y el psicoanálisis (Levi-Strauss, 1997, Foucault, 1968: 334-375), pero también un estructuralismo marxista que se nutre de los debates de estas disciplinas, pero que lo vincula con la economía; un marxismo estructuralista (Althusser, 1977; Poulantzas; 1973, 1987). Un constructivismo que, vinculado también con la lingüística, la etnología y el psicoanálisis, no obstante, cuestiona los supuestos estructuralistas a partir de la filosofía política (Laclau y Mouffe, 1987, Marchart, 2009). Como se ha visto hasta el momento, estos debates van a afectar la manera en que se asume el concepto de hegemonía y su utilidad para la comprensión de lo social y del papel del Estado en los procesos hegemónicos.

³⁰ Sin desconocer la diversidad de orientaciones marxistas que se desarrollaron a partir de los años 50 y 60, nos centramos en este autor, pues es quien de manera más sistemática retoma el problema de la hegemonía desde el punto de vista estratégico y analítico para comprender el desarrollo del capitalismo, así como la relación entre los procesos hegemónicos y el Estado de manera explícita. Para una ampliación de los debates al interior del marxismo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, puede consultarse el texto de Pablo Míguez (2010), quien expone específicamente cómo es pensado el Estado en las sociedades de la segunda postguerra, incluyendo a Poulantzas. El mismo Poulantzas cuestiona en sus últimos trabajos la marcada primacía de las estructuras en el análisis político del capitalismo y reconoce cada vez más la importancia de las luchas sociales en los procesos de transformación del capitalismo y en una eventual superación del mismo. Sobre los tránsitos del pensamiento de este autor, visto por él mismo, puede consultarse Poulantzas (1975, 63-83)

Para este autor, el Estado vendría siendo un conjunto de dispositivos institucionales, el lugar donde entran en conflicto y se negocian los intereses de clase y se establecen pactos intercalases (entre fracciones de clase), así como entre las clases, lo que constituye la base de la hegemonía burguesa capitalista. Poulantzas asume la mirada gramsciana de la hegemonía y precisa que esta no es el resultado de la imposición de los intereses de la clase dominante en general, sino de la articulación, por parte de una de sus fracciones, en un momento determinado, de las demás fracciones, así como de los intereses complejos y contradictorios de las clases subordinadas. El Estado es, como para Gramsci, la síntesis de la lucha de clases y el ejercicio del poder desde el mismo, el resultado de la negociación entre estos intereses contrapuestos o incluso contradictorios. No se trata, por tanto, de clases cuyos intereses están únicamente determinados por su posición dentro de las relaciones sociales de producción, sino por la lucha entre las mismas. No obstante, dentro de la estructura de dominación capitalista, el alcance de estas luchas estaría limitado por una contradicción fundamental que se edifica, aunque no de manera mecánica, a partir de las desigualdades intrínsecas a las relaciones de producción capitalistas (Poulantzas 1973).

Ahora bien, el pensamiento de este autor se desarrolla en dos momentos que pueden ser rastreados en dos de sus textos. En un primer trabajo de fines de los años 60, discute las relaciones entre Estado y hegemonía y cuestiona las miradas subjetivistas e ideologicas de ésta, para este tiempo ya muy difundidas, particularmente en Italia y Francia. Para Poulantzas, la hegemonía tendría dos formas de abordaje. Por un lado, la asociada a lo estratégico y por otro, a la comprensión de la estructuración de la hegemonía capitalista y el lugar que en esta ocupa el Estado como formación institucional. (Poulantzas 1973, 43-46; 63-64). De estas dos formas le interesa la segunda ya que permite comprender mejor cómo se configuran las superestructuras, cuyo significado Poulantzas descarta como mero reflejo de los intereses de las clases. Para el autor, no existen clases por fuera de las luchas de clases y serían las luchas por el poder dentro del capitalismo, las que constituirían los intereses de las clases y a las clases en sí y para sí. En estas luchas el Estado asume, como espacio de interacción entre clases y fracciones de clase, el rol de organizador de los intereses de estas y de regulador de los conflictos, pero siempre dependiente de la estructura de las relaciones sociales de producción propias del capitalismo. De este modo, las luchas de las clases sociales conducen a la configuración de ciertas formaciones estatales (V. gr. liberal o monopolista), como manifestaciones diferenciadas, pero dentro de la misma estructura capitalista de producción.

El Estado así, tendría una relativa autonomía frente a las clases en particular, pero sobre todo frente a las relaciones de producción capitalista.³¹

La pretensión de Poulantzas es determinar “científicamente” cómo opera lo político en las sociedades capitalistas. Para esto, el concepto de hegemonía permitiría estudiar la articulación social, por parte de una fracción de clase, frente a las demás clases o fracciones de clase. Entendida así la relación entre Estado y hegemonía, esta última sería el recurso político que aseguraría la reproducción del sistema capitalista de producción y de sus relaciones sociales de poder desde el plano ideológico, pese a que se reconoce cierta autonomía del Estado frente a estas relaciones.³²

No se trata, nuevamente, de una dependencia mecánica de las relaciones de poder frente a las relaciones de producción, sino que las segundas se configuran políticamente a partir de las luchas de clases. Luchas que son entendidas por Poulantzas, como el resultado de las limitaciones y contradicciones de este modo de producción. La contradicción fundamental estaría dada por la promoción de una idea de libertad e igualdad que estaría limitada, en su ejercicio, a los miembros de las clases dominantes. Esta desigualdad llevaría a las clases dominadas a luchar por acceder a esas libertades e igualdades formales, legalmente establecidas y a su ampliación, a través de la búsqueda de alterar el modo de producción capitalista y sus estructuras políticas, entre estas, el mismo Estado capitalista (Poulantzas 1973, 24-28).

Como resultado de la lucha por ampliar (o limitar) libertades y derechos, se producirían pactos entre clases y fracciones de clase que, sin embargo, estarían siempre condicionados por la estructura de la sociedad capitalista que se fundamenta, precisamente, sobre la desigualdad en el acceso a recursos, tanto materiales como políticos y culturales. Dentro de este marco, el Estado se entiende como el espacio en el que se regulan los conflictos y contradicciones sociales, propios del modo de producción capitalista y donde se limitan los alcances de las

³¹ Una lectura crítica de la perspectiva de Poulantzas, sobre la “relativa autonomía” del Estado puede verse en Gaggero, 2005.

³² Para una buena parte de las lecturas germanas y parte del marxismo anglosajón, el Estado, más allá de ser el escenario de trámite de conflictos entre clases y fracciones de clases, de ser un escenario parcialmente autónomo frente a las clases y fracciones de clase, cumpliría un rol fundamental como agente político de reproducción del sistema capitalista de producción. Así, lejos de ser parcialmente autónomo, estaría subordinado a la función de asegurar la reproducción de dicho sistema, en tanto el reconocimiento de demandas de las clases subalternas o incluso la promoción de ciertos niveles de bienestar social de estas, dentro del Estado monopolista, lejos de debilitar el capitalismo, lo fortalecería, al lograr, precisamente, en términos gramscianos, una subordinación activa útil al mismo capitalismo como modo de producción. Al respecto ver: Carnoy, 1985: 128-152

demandas de las clases dominadas y, de hecho, donde a estas luchas se les reduce su potencial revolucionario y se asegura la hegemonía burguesa (Poulantzas, 1973: 40).

Sin embargo, la hegemonía burguesa no se ve como la unificación absoluta de esta clase, sino como la unificación parcial, temporal y conflictiva de la misma, pues esta se entiende también como constituida por grupos con intereses económico-políticos heterogéneos y conflictivos. La existencia de estos grupos como clase dominante unificada, no es algo que se dé por sentado, sino como el resultado del análisis externo, que la identifica en sus similitudes estructurales (Poulantzas, 1973: 45).

Así, el Estado, como espacio de interacción y regulación de los conflictos y contradicciones sociales, lejos estaría de ser un agente pasivo al servicio de las clases dominantes, un mero apéndice coercitivo de las mismas y se define mejor, como el lugar en la que estas logran unificarse, así sea coyunturalmente, para la reproducción de capitalismo como modo de producción. Esto, debido a que una característica del capitalismo es, precisamente, a ojos de Poulantzas, su inestabilidad y la debilidad de las alianzas y pactos entre fracciones de clase dominante y fracciones de las clases dominadas.

Estaríamos de este modo, ante al reconocimiento de la heterogeneidad de la sociedad capitalista y de las formas en que las clases (sus facciones y fracciones) luchan por articular esta heterogeneidad, bajo el supuesto de que esta articulación conduce a la construcción de los intereses universales o generales de una sociedad determinada. El Estado, dentro de esta perspectiva, sería el lugar de formalización de esos universales (aparentes o temporales), dentro de la sociedad capitalista, lo que implicaría, por parte de las clases dominadas, la búsqueda de realización de esa apariencia, en una práctica revolucionaria que alteraría el Estado y el modo de producción en general.

Ahora, ¿qué es lo que le da al Estado esa función de regular los conflictos? Para Poulantzas, esto se da debido al proceso de institucionalización y relativa autonomización de lo político en la sociedad capitalista. Institucionalización en dos sentidos: por un lado, de su poder de coerción y, por el otro, de su poder hegemónico o directivo (Poulantzas, 1973: 45-60). La ruptura de este modo de producción-dominación-hegemonía, implicaría la hegemonización de las clases dominadas, la constitución de un aparato de lucha que articulara a las fuerzas dispersas de estas clases y construyera un nuevo Estado y una nueva sociedad. Esto, pues el alcance de las demandas y luchas de las clases subordinadas, dentro del Estado capitalista estarían siempre limitados a lo económico-corporativo, que aseguraría de hecho, la

reproducción de la hegemonía de las clases dominantes, mediante alguna de sus fracciones (Poulantzas, 1973: 60-72).

Con esto llegamos a un planteamiento interesante sobre la relación que propone Poulantzas entre Estado y hegemonía: Ésta última aseguraría la dirección política, al ser una práctica articuladora de fuerzas dispersas; mientras que el primero es el escenario en el que se articulan las clases dominantes (sus fracciones) y, mediante el reconocimiento estratégico de demandas corporativas de las demás clases y fracciones de clase, se produce la aceptación activa del modo de producción capitalista, y la reproducción de ideologías que se presentan así mismas como representantes del interés general-universal (Poulantzas, 1973: 75-105). El poder institucionalizado, en sus distintas ramificaciones conduciría, estructuralmente, a la reproducción del modo de producción capitalista, como modo de producción corporativista. Sin embargo, la articulación hegemónica, dentro del capitalismo, estaría limitada por las contradicciones y desigualdades sobre las que se edifica el mismo, de ahí la inestabilidad de sus articulaciones coyunturales.

Algunos de los anteriores argumentos serán revisados y ampliados por Poulantzas, en un trabajo posterior, teniendo en cuenta las discusiones que, particularmente en la filosofía francesa de los años 70, cuestionaron la centralidad del Estado y la existencia de lo que podrían llamarse escenarios privilegiados de poder. En *Estado, poder y socialismo* (1987), el autor expone que, pese a que el desarrollo del capitalismo ha implicado una separación formal entre distintas instancias de la vida social, hay una relación de reciprocidad entre las mismas. La sociedad civil, por ejemplo, no puede entenderse como algo separado del Estado, sino como un conjunto de escenarios complejos que establecen relaciones de dependencia recíproca con aquel. Con esto problematiza las miradas que asumen el poder como un conjunto de fuerzas dispersas, pues restarían importancia a la capacidad que desarrollan ciertos actores para, desde ciertas instancias de poder, como el mismo Estado, concentrar capacidades de intervención global en la sociedad (Poulantzas, 1987: 35-38)³³

Desde la lógica de Poulantzas, a pesar de la dispersión de las fuerzas, de luchas no articuladas, la concreción de sus demandas, como demandas de clases se daría al interior del Estado. Esto gracias a la capacidad de éste de convertir estas demandas en políticas y en configuraciones institucionales, legales y jurídicas y, de modo general, a su capacidad para orientar a la sociedad de manera global, no sólo en lo político, sino en lo económico, particularmente

³³ Esta crítica va a ser compartida posteriormente por Bourdieu (2005), aunque con un enfoque teórico distinto.

dentro del contexto en el que el autor vive, dominado por el estado monopolista interventor, también denominado como Estado de bienestar (Poulantzas, 1987: 167 y ss.)

Así, Poulantzas reafirma la importancia del Estado, como escenario de articulación y postula que un nuevo Estado sólo sería posible mediante la articulación política del proletariado, eso sí, evitando caer en el burocratismo o el tecnocratismo autoritario en el que había caído. Se reconoce con esto que las clases dominadas no están por fuera del Estado, sino que de hecho han contribuido, mediante sus propias luchas a la configuración de este; sólo que los alcances de estas luchas, nuevamente, dentro del capitalismo, no pueden ser más que corporativos. Las formas particulares de los Estados serían así, la condensación de luchas, contradicciones, conflictos entre clases y fracciones de clase; la materialización de acuerdos, tácticas y estrategias de distintos grupos políticos de clase, bajo la idea de que este representa, nuevamente, los intereses generales de una sociedad determinada o; en últimas, la manifestación concreta de la hegemonía de una clase o fracción de clase.

Dentro de la idea de la autonomía relativa del estado de Poulantzas, se argumenta que la mera toma del poder de Estado por una fuerza de izquierda no aseguraría la alteración del modo de producción capitalista y concentrarse en este objetivo, como suficiente para lograr el cometido fundamental de construir una sociedad socialista, conduciría al estatismo autoritario. El gobierno del Estado, por sí mismo, sólo serviría como un frente entre otros. La autogestión obrera y distintas formas de organización popular autónomas, deberían ir construyendo un nuevo Estado desde afuera y limitando sus alcances en términos de uso de la fuerza y la coerción, sin caer con esto en una satanización del poder, como algunas perspectivas de los años 70 hacían (Poulantzas, 1987: 170-250). Así, el Estado no se ve dentro del mismo marxismo, como Laclau y Mouffe aseguran, como el único ámbito de las luchas por la hegemonía, ni las clases se ven como existentes más allá de su producción político-ideológica, si bien se reconocen a estas como los actores centrales del combate político.

De acuerdo con lo discutido hasta aquí, tendríamos dos lecturas de lo político que, para los propósitos de la presente investigación no son leídas como mutuamente excluyentes, sino complementarias. La interpretación de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, entre otros, al darle mayor valor al discurso, desconocen o no desarrollan cómo estos discursos, configuran estructuras que sirven para su propia reproducción, más allá del discurso como práctica articuladora consciente y explícita; del discurso que articula discursos. Las críticas al marxismo, aunque precisarían la carencia de fundamento de la existencia de las clases como algo por fuera de su construcción discursiva, desconocen que las clases, como categorías de

clasificación, son el resultado de la estructuración, en los actores y en sus prácticas, de estas mismas formas de entender su acción política en las sociedades capitalistas avanzadas (Bourdieu, 2001).

De ahí que sea importante considerar que las distintas formas de clasificación identitarias dentro de las cuales los actores sociales se constituyen como sujetos políticos, no dependen únicamente de su capacidad de articular discursos sobre sus propias identidades, sino que estas estarían instituidas, dentro de (por) las mismas estructuras, campos y relaciones sociales en las que son socializados. Estas identidades y los proyectos políticos que construyen tienen así limitaciones, tal como lo dirá Bourdieu, en la objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales (Bourdieu, 2011:10-27).

Los planteamientos expuestos hasta ahora nos permiten afirmar que la construcción del Estado y su relación con la hegemonía, debe ser considerada a partir del estudio de los procesos históricos en los que el primero es construido a la vez intelectual, culturalmente y socio-institucionalmente y teniendo en cuenta que su significado y estructuras, se construyen a partir de disputas por establecer sus dimensiones (institucionales, territoriales, económicas) así como sus sentidos y significados, esto es, su dimensión ideológica, tal como lo entiende Gramsci (Balsá, 2006)³⁴

Los planteamientos de Nicos Poulantzas, en este sentido aportan en la medida en que se resaltan la importancia del Estado en la estructura capitalista de poder y de producción, como escenario (privilegiado) de lucha por el poder entre distintas clases o fracciones de clase y hoy, diríamos, entre actores sociales y políticos heterogéneos, incluidos, claro está, quienes se autodefinen como actores de clase. Todo esto no implica caer en un estado-centrismo, tan caro a otras corrientes del marxismo (v. gr. Althusser, 1977), y del institucionalismo liberal (Skocpol, et al, 2002 [1985]). No obstante, no logra dar cuenta de los mecanismos y fundamentos que conducen a la constitución de esta centralidad, más allá de su capacidad de coerción y de ser escenario en el que se produce la hegemonía, como dirección política, de las clases y sus fracciones.

Frente a este vacío, afirmamos que el poder, sus formas y escenarios particulares de ejecución, dentro de los que está de manera importante el Estado, son consecuencia de

³⁴ Para este autor, en Gramsci hay una diferencia sustancial entre la hegemonía desde el plano ideológico, que conduce a la lucha por el poder desde distintos proyectos políticos y la hegemonía cultural o moral, cuya alteración es mucho más difícil, debido a que su incorporación se da a partir de la socialización primaria y se arraiga profundamente en los valores y creencias de los sujetos.

procesos de estructuración en las que las clases y demás actores sociales, estructuran y son estructurados por las relaciones de poder y de producción, en el sentido más amplio posible. En esta dirección, para comprender tales procesos, en el caso de la formación del Estado moderno, habría que recurrir a Bourdieu, (2005: 43-70), quien plantea que éste se configura (como de alguna manera para Gramsci) a partir de un combate intelectual, en la que un modelo del poder es sustituido progresivamente por otro.³⁵

La hegemonía, dentro de esta mirada, pasaría por el modo en que se concibe y construye el Estado, en tanto entidad a la que termina por otorgársele (así sea idealmente), la regulación del orden social, económico, político, cultural y moral. De alguna manera, tal como lo plantean distintos autores, los procesos hegemónicos se despliegan de manera desigual y diferenciada en los distintos escenarios e instancias de la vida social, así como en las distintas sociedades. Son así, el resultado de conflictos entre distintos actores por edificar estas instancias y sus prácticas, tanto por reproducir, como por subvertirlas.

Siguiendo esta línea de reflexión, desde el mismo marxismo gramsciano, una perspectiva que, en el estudio de la hegemonía y el Estado resalta el énfasis en el plano ideológico presente en la obra de Gramsci, es la de Buci-Glucksman (1978). Para esta autora, la construcción de ciertas formas de estatalidad está marcada por un combate ideológico en el que participan distintos tipos de intelectuales. La hegemonía se logra, cuando ciertas perspectivas sobre el poder, lo humano, el sujeto, los individuos o sobre lo que el Estado “es”, logran constituirse en los puntos de referencia socialmente aceptados y acatados, así como institucional y legítimamente reconocidos.

La producción intelectual sobre el Estado, sus perfiles y funciones son producto del trabajo de los intelectuales en los procesos organizativos (de producción de una nueva sociedad o de reproducción de la sociedad existente). De esto se deriva la importancia del estudio de estos para comprender al Estado y a los aparatos de hegemonía. Esto en la medida en que el control de estos aparatos aparece como control intelectual y la lucha por este control se da en todos y cada uno de los escenarios de la vida social; tanto en la sociedad civil como en el mismo Estado, sólo que la importancia relativa de cada escenario y de cada grupo de intelectuales,

³⁵ Bourdieu expone cómo *la casa* como modelo de orden social y político (así como administrativo, jurídico y económico) y sustento de la razón personal del rey, fue sustituido por un modelo de poder en el que la idea de una razón impersonal (burocrática) se hizo dominante. Un modelo en el que, conceptos como racionalidad, democracia, libertad, individuo, ciudadanía política, legalidad, entre otros, se establecieron como los legítimos fundamentos del orden político, social y económico. En palabras de Gramsci, como sentido común.

estaría dada por las particularidades del desarrollo de cada sociedad (Buci-Glucksmann, 1978: 118-119)³⁶

Para complementar lo anterior, Buci-Glucksmann, considera que el problema de la hegemonía es mucho más amplio que el de la ideología dominante del marxismo tradicional o de la legitimidad weberiana, así como también el de la violencia simbólica de Bourdieu:

(...) En realidad, en el caso de una **hegemonía establecida**, una clase hace avanzar al conjunto de la sociedad (función nacional). La ‘atracción que ejerce sobre las clases aliadas (e incluso enemigas) no es **pasiva**, sino **activa**. No depende solamente de los simples mecanismos administrativos de **coerción**, pero tampoco se agota en los ‘mecanismos de imposición ideológica, de sujeción ideológica’ (Althusser), ni en los de legitimación por una violencia simbólica (Bourdieu) (Buci-Glucksmann, 1978: 76)

En tal sentido, para Buci-Glucksmann, el concepto de hegemonía sería la respuesta de Gramsci a conceptos de integración y de consenso social del estructural funcionalismo, pero iría más allá de estos, ya que la lógica de conflicto permitiría comprender los procesos de cambio permanente, aunque también los límites de los cambios dentro del modo de producción capitalista. Esto gracias a que no habría hegemonía sin crisis de hegemonía, y las clases o las fracciones de clase, pueden llegar a ser relativamente hegemónicas, pero también viven periodos de crisis orgánicas, en las cuales un tipo de Estado entra en crisis y se abre la posibilidad para la constitución de uno nuevo. No es meramente violencia simbólica, imposición ideológica sino, potencialmente, articulación y consenso social que puede materializarse en nuevas formas de Estado y nuevas prácticas y relaciones de poder.

Con lo anterior, se resalta en el pensamiento gramsciano y en algunos de sus sucesores, una perspectiva dinámica del desarrollo de las sociedades y de sus distintas formas de estructuración, al considerar que estas son a la vez material e ideológicamente constituidas. No obstante el hecho de que las reflexiones sobre la articulación entre Estado y hegemonía perdieron relevancia durante algún tiempo. Como se mencionó antes, el mismo problema del Estado fue durante los años sesenta y setenta, salvo algunas excepciones, considerado como un problema ambiguo e impreciso con poca utilidad teórica (Steinmetz, 1999, Carnoy, 1985, Mitchell, 1999), mientras algunas perspectivas marxistas se debatían entre un crudo

³⁶ Para Buci-Glucksmann, el desarrollo del concepto de hegemonía en Gramsci está marcado por su propia experiencia tanto antes como durante sus textos de la cárcel. Habría así una continuidad en la dispersión de los textos gramscianos, una continuidad en la que lo estratégico está articulado al estudio sistemático de las formas de producción y reproducción materiales e ideológicas del capitalismo en su desarrollo histórico. El estudio de la hegemonía, como dirección ética, moral, intelectual y política, no se puede desligar, desde esta mirada, del estudio de la producción y reproducción material del modo de producción capitalista.

economicismo o estado-centrismo (Carnoy 1985). En esta dirección es desde finales de los años 70 hacia adelante que el Estado nuevamente se convierte en objeto de reflexión teórica y de estudios empíricos en distintos contextos y desde distintas corrientes teóricas.

Así, en esta reemergencia del Estado como problema teórico o empírico se ha indagado sobre lo que el Estado *es o ha sido*, sobre sus dimensiones institucionales, políticas o jurídicas y sus relaciones con otras instancias sociales; sobre sus significados y sentidos en las sociedades modernas o en sociedades periféricas, entre otros temas. Se ha llegado a definir como el depositario del poder simbólico; como banco de este tipo de poder, debido a su capacidad para constituirse en el referente último de legitimidad de cualquier forma de violencia, tanto simbólica como física (Bourdieu 1999). Al mismo tiempo se han considerado sus funciones y capacidades y características dentro de un marco global de poder (Meyer 1999); los modelos de organización que se han estructurado como históricamente dominantes, sus capacidades de articulación de distintas fuerzas y relaciones de poder dispersas (Mitchel 1999). No obstante, su relación con el problema de la hegemonía ha quedado un tanto en el olvido.

Sin embargo, como se ha planteado hasta el momento, el Estado es una construcción histórica, cuyos contornos, funciones, dimensiones y sentidos están determinados por la lucha entre distintos actores, por dotarlo de sentidos y significados, así como de una materialidad institucional que asegure su reproducción o posibilite su transformación. Puede entenderse como un conjunto complejo o incluso contradictorio de instituciones e instancias de poder, pero esta forma en sus manifestaciones concretas llevaría a estudiar en cada caso particular, cómo se han configurado estas instancias e instituciones de poder en su relación con otras y con estructuras globales de poder (Meyer 1999; Migdal 2011). Se trataría entonces de explicar cómo se configuran históricamente los Estados y sus formas hegemónicas, a qué sentidos y lógicas responden sus estructuras institucionales y cuál es el marco de acción que los actores partícipes de su construcción tienen para contornear sus dimensiones materiales, así como para establecer sus puntos de vista como los legítimos sentidos de este.

En tal sentido, el desarrollo del Estado de bienestar en Europa y el desarrollista en América Latina y otros contextos, así como del Estado neoliberal, con sus múltiples manifestaciones, sería el resultado de su resignificación y redefinición en las crisis del capitalismo central y periférico, no obstante, el hecho de que esta resignificación y reconstitución institucional, ha resultado funcional para estabilizar temporalmente al capitalismo, tal como lo planteara Polanyi alguna vez (1989).

Con esto volveríamos a considerar el problema de la hegemonía, al plantear que las mismas formas del Estado, sus significados y la capacidad de imponer sus orientaciones, son objeto de disputa entre diversos actores sociales y políticos, aunque con poder desigual. Esto significa que hay unas estructuras de poder en las que ciertos actores sociales tienen una mayor capacidad para hacer que sus sentidos, significados, creencias y valores se establezcan como el “sentido común” y a que estos se materialicen en estructuras institucionales. Así, si bien se puede decir que el Estado es una construcción ideológica cuya unidad no es más que supuesta, su materialización, depende de la manera en que ciertos actores sociales puedan o no, hacerse partícipes de esta construcción ideológica y de su concreción institucional y material (Mitchel 1999).

De este modo, si entendemos las luchas hegemónicas como las disputas por el establecimiento del orden social en general, en sus distintas manifestaciones ideológicas, morales, culturales y económicas, el mismo Estado (sus sentidos, significados, dimensiones institucionales y territoriales, normativas, jurídicas) se constituye en un objeto de estas luchas. Dado el establecimiento de la institución estatal como eje central de las determinaciones políticas y normativas, el control de su poder y la delimitación de sus funciones, es un elemento también central para reorientar la vida social, así sea de modo relativo. Frente a este último, es importante considerar, que tales construcciones, son sólo potencialmente progresistas o, tal como pensaba Gramsci, pueden contribuir al “progreso” o al avance de las sociedades, en términos de libertad, igualdad o justicia de las distintas sociedades (Fontana 2001; Bucu-Glucksman 1978; Zabaleta, 1985). En buena medida, el carácter corporativo del capitalismo, o las desiguales distribuciones de las distintas formas de capital, tal como lo expone Bourdieu (2011), limitan esta mirada positiva del Estado y de las luchas hegemónicas en el plano ideológico. Poderes estructuralmente muy fuertes, tanto en el plano económico como moral y cultural, continuamente se oponen al reconocimiento o ampliación de derechos y libertades de amplios sectores sociales y este poder estructural, sustentado en el control de recursos económicos, mediáticos, políticos, religiosos o incluso militares, mantiene su dominio incluso por encima de estados ocupados hoy por sectores que afirman buscar la ampliación de estas igualdades y libertades, como es el caso de algunos países de América Latina. Esto nos pone, nuevamente, frente a la tensión entre estructuras sociales, institucionales (en lo económico, lo político y cultural) y actores sociales. Estos últimos actúan, dentro de marcos de acción que se refieren, precisamente a esas estructuras materiales y simbólicas, frente a las cuales entran en

tensión bien para su reproducción o “perfeccionamiento” o para su transformación parcial o “total”.

2.5. Reflexiones para América Latina. Las élites empresariales en los procesos hegemónicos

Por lo dicho hasta aquí, nuevamente cabe la pregunta: ¿cómo pensar el Estado en los procesos hegemónicos y contrahegemónicos? ¿Cómo pensar la relación entre Estado y hegemonía en las sociedades latinoamericanas? Y, para nuestro caso específico, ¿Cómo ubicar en estas disputas el papel de ciertos actores como las élites empresariales? En el contexto europeo y norteamericano, el problema del Estado y la hegemonía tienen un resurgimiento a partir de finales de los años 70, en un momento en el que se cuestiona la legitimidad de esta institución para garantizar una organización social racional, el progreso y la estabilidad económica. Por su parte, en América Latina no hay una pretensión de teorizar el problema del Estado, sino hasta los años 80 o 90. Tal como lo plantea Cynthia Lujano (2008), si bien es cierto el Estado en América Latina fue un problema central de la reflexión sobre los procesos de modernización y desarrollo, particularmente a partir de los años 50, no existe una reflexión teórica específica que intente comprender las particularidades de los estados latinoamericanos. Tampoco habría una reflexión sólida sobre cómo operan los procesos hegemónicos en contextos en los que las instituciones sociales, políticas y económicas tienen un desarrollo desigual (Kaplan 1983).

Las lecturas de las sociedades latinoamericanas están marcadas entre los años 50 y 70, por la lógica del desarrollo y la modernización, que partía de considerar a estas sociedades como centros de pobreza, violencia, marginalidad y atraso (Escobar 1999, 2007). Dentro de las teorías de la dependencia, de hecho, esta misma lectura era acompañada por la idea de la fragilidad institucional en los planos económicos, políticos, sociales y culturales. Había que promover el desarrollo y buscar a los actores sociales y políticos que pudieran impulsar las necesarias transformaciones de las sociedades latinoamericanas para que siguieran el rumbo trazado por los países desarrollados, y las orientaciones de los organismos multilaterales como Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y organismos de cooperación de Estados Unidos y Europa (Escobar 1999, 2007). El desarrollo se realizaría a partir, primero, de la modernización de las estructuras estatales y luego de la intervención de estas, pues las mismas debían canalizar los recursos, planificar las acciones y estrategias para llevar a las economías y sociedades latinoamericanas por la senda del crecimiento auto sostenido y la autonomía industrial y

productiva en general. El Estado es visto así, como el agente que, mediante las orientaciones necesarias y adecuadas, cambiaría las estructuras sociales, económicas y políticas para la modernización capitalista. Su fortalecimiento institucional, técnico y financiero era la tarea principal entonces de los gobiernos de los años 50 hacia adelante.

De este modo, en cada país se impuso una lógica del desarrollo, pero pronto fue evidente que aquel actor “imparcial” no era tal, ni lograba articular a las heterogéneas y conflictivas sociedades latinoamericanas para el logro del crecimiento económico y la transformación de las estructuras económicas. El Estado fue puesto en cuestión, tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Las clases políticas que lo habían ocupado; las fuerzas militares que, allí donde las clases políticas eran débiles, habían sido los encargados del desarrollo, fueron vistos como los responsables de este fracaso; otros militares y otra clase política fueron necesarias ahora para sustituir a las viejas y promover una nueva articulación hegemónica.

Dentro de este marco, no obstante, no hay reflexiones sistemáticas y específicas sobre la constitución estructural del Estado, ni sobre sus contornos específicos en América Latina, ni puntualmente, sobre los actores sociales que han buscado darle contornos a esta “constitución estructural”. Sólo hasta finales de los años 70, con trabajos pioneros como los de Oscar Oszlak (2007 [1978]), comienza a problematizarse las características de los estados latinoamericanos, e incluso a buscar periodizar su desarrollo. En este contexto se analizan las distintas formas de la estatalidad, de acuerdo a los patrones de dominación y a las orientaciones ideológicas de los actores que lideran cada momento histórico. Se discute así mismo la participación de las distintas fuerzas en su constitución y reconstitución progresiva; su autonomía o dependencia; el carácter de las economías latinoamericanas y su dependencia de las economías industrializadas y los impactos de esta dependencia en la constitución de los Estados latinoamericanos.

Desde el punto de vista histórico, se ha estudiado también cómo participan los actores económicos, cómo construir un tipo de burguesía moderna que fuera capaz de contribuir al desarrollo industrial en América Latina, entre otros problemas. Dentro de todo esto se ha destacado la debilidad de las estructuras estatales y la escasa materialización de la idea del Estado moderno como espacio público impersonal, como escenario del imperio de la ley y como actor que busca y logra en gran medida el monopolio de la violencia legítima, en tanto legal, siguiendo el modelo weberiano (Migdal 2011).

Diríamos en consecuencia que ha sido hegemónica una teoría liberal del Estado, en la que, al comienzo se prescriben sus tareas, pero luego se discute a los actores que deben cumplirlas y el marco político en el cual deben realizarse. Desde este lugar el fracaso o la debilidad de los estados latinoamericanos, se define a partir de los marcos teóricos ideales del desarrollo de las sociedades del capitalismo central, evidenciando una clara lógica neocolonial. De este modo, las discusiones sobre democracia y autoritarismo se convierten en orientaciones centrales de la reflexión sobre el Estado en América Latina en los años 80 y 90 (O'Donnell 1993). Se discute el problema de la autonomía del Estado para el impulso de políticas de desarrollo (Evans 2007, Mann 2007, Evans, Reuschmeyer y Skocpol, 2002) y las distintas formas de articulación social promovidas por los actores estatales que explicaran el fracaso o éxito de la búsqueda de promover el crecimiento económico y el desarrollo social. Perspectivas institucionalistas o neoinstitucionalistas se hacen hegemónicas, haciendo abstracción de los poderes fácticos que ocupan las instituciones estatales (particularmente el poder ejecutivo) a lo largo y ancho de América latina y de las luchas entre actores sociopolíticos, nacionales y extranjeros que, precisamente se juegan el “éxito” o el fracaso del poder estatal.

A partir de fines de los años 70 y comienzos de los años 80, coincidiendo con la reorientación del Estado y su papel en la economía, el Estado, como institución cuya racionalidad serviría de base para el impulso del desarrollo económico de América Latina, fue cuestionado como el responsable de la debacle de las economías latinoamericanas y de su atraso. Pero el Estado, nuevamente como idea y como institución central de los procesos de desarrollo y de articulación social “progresista” emerge nuevamente como el escenario desde el cual los actores políticos proyectan nuevos modelos de sociedad y de articulación social, con mayor intensidad en algunos países de América Latina. De este modo, se repetiría el proceso según el cual, de acuerdo a Peter Evans (2007: 17-18), el Estado es visto a la vez como problema y como solución. El problema estaría así en la racionalidad de los actores que lo dirigen y, por tanto, un cambio en las élites sería suficiente para resolver estos problemas de racionalidad. De la racionalidad política, se pasaría así a la racionalidad económica y allí, las élites empresariales comienzan a hacerse protagónicas.

No obstante, habría que precisar algunos elementos de los procesos de formación del Estado en América Latina que nos sirvan de base para comprender los alcances de los procesos hegemónicos y contrahegemónicos en la región. Así, en primer lugar, habría que decir que las evaluaciones que se han hecho del Estado en América Latina resaltan la debilidad del mismo para constituirse en espacio de articulación social y en punto de referencia de las actividades

de los distintos y heterogéneos actores sociales que constituyen estas sociedades. Esta debilidad se caracterizaría, tal como lo ha planteado Centeno (2003), por la incapacidad de los actores estatales para lograr establecer instituciones estables y legítimas en el largo plazo. Los sistemas de seguridad social y ciudadana; los sistemas de justicia, las políticas fiscales, así como el logro de la pretensión del monopolio de la violencia legítima habrían sido débiles y los ejemplos de esta debilidad podrían encontrarse en todos los países de América Latina. Lo que llevaría a cuestionar la validez de las críticas neoliberales al Estado latinoamericano como un gran Leviatán. Ahora bien, tal como lo plantean distintos autores, el marco de referencia desde el cual se juzga esta debilidad, que podría llamarse estructural, afectaría el juicio sobre la manera en que estos Estados se han desarrollado. Así, el carácter periférico de las economías latinoamericanas, el carácter colonial a partir del cual se desarrollaron estas sociedades y sus instituciones políticas y económicas, habría producido esta debilidad estructural del Estado.

Por otro lado, habría que considerar el carácter heterogéneo de los desarrollos económicos de América Latina, tanto desde el punto de vista económico, como social, cultural y político. Esta heterogeneidad, se habría constituido en un obstáculo para la agregación de intereses desde el punto de vista político, así como para el impulso de procesos de inserción exitosos en el marco de una economía crecientemente integrada a nivel mundial. Distintos factores podrían de este modo citarse para explicar la debilidad de los estados y en general, de los marcos institucionales, pero, nuevamente, el marco de referencia, el modelo a partir del cual se juzgan estos procesos es el europeo y norteamericano. En estas sociedades, por el contrario, se habrían desarrollado procesos de larga duración dentro de los cuales las instituciones estatales se habrían convertido en marcos de referencia legales y legítimos para la orientación de sus ciudadanos individual y colectivamente considerados. Allí se habría constituido la imagen de un estado “ideal” fuerte, en el que éste es, efectivamente espacio público-público; esto es, espacio a partir del cual se constituyen, a través del diálogo y el consenso los intereses colectivos y se proyectarían, de manera articulada, las instituciones y proyectos de vida deseables individual y colectivamente.

Desde este lugar, se ha analizado también la imposibilidad de la constitución de procesos de constitución hegemónica del capitalismo y de las distintas orientaciones por las que este ha pasado históricamente en el “tercer mundo”. El carácter dependiente y heterogéneo de las sociedades latinoamericanas, dificultaría la constitución de procesos hegemónicos, al estilo de los procesos europeos y norteamericanos, pues, de hecho, las sociedades latinoamericanas no

se habrían constituido como sociedades de clase. En los años 80, por ejemplo, Alain Touraine (1989), planteó la imposibilidad de hablar de clases sociales en América Latina, pues, desde su mirada, en este continente, la mayor parte de la población no era ni siquiera explotada, sino excluida. Esta característica haría que, más que clases sociales, habrían sido actores sociales con orientaciones ideológicas y políticas contrapuestas, los protagonistas de las luchas políticas en la constitución histórica y política de América Latina. Habría así sociedades en las que el peso de lo indígena habría marcado el desarrollo político y social y la búsqueda de constituir identidades nacionales, al estilo de las sociedades europeas y norteamericanas, fracasarían por desconocer la heterogeneidad y fragmentación de las poblaciones, desde el punto de vista cultural, social y político. También habría sociedades con vocación revolucionaria, sociedades liberales, sociedades conservadoras, etc. De este modo, los actores de clase no serían los encargados de impulsar proyectos hegemónicos, sino que estos estarían constituidos por fuerzas heterogéneas. Tal como lo plantearon Laclau y Mouffe, sólo sería posible la lucha por la dominación, pero no la hegemonía

Sin desconocer lo anterior, también puede decirse que el carácter clasista de las relaciones sociales del capitalismo periférico, no debe leerse desde los marcos de referencia de las sociedades centrales, sino que hay que considerar cómo se constituyen actores de clase, que se autoidentifican con esta categoría, a partir de relaciones con el capital, tales como clases oligárquicas, clases populares, clase obrera, etc. (Múnica 1998). Si bien es cierto la misma dinámica de desarrollo del capitalismo en América Latina, haría que amplios sectores sociales no pertenecieran “objetivamente” a la clase obrera (por el peso de la economía informal y de subsistencia, que muchas veces sobrepasa el 60% de la población), esto no elimina la posibilidad que grupos organizados se hayan definido y actuado como actores de clase y hayan buscado impulsar proyectos revolucionarios o reformistas desde esta autoidentificación. En este sentido, si bien es cierto es necesario reconocer la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas en sus distintas dimensiones, también es cierto que esta heterogeneidad no impide, necesariamente el impulso de proyectos hegemónicos que han conducido a la formación de cierta institucionalidad y de ciertas prácticas políticas y de dominación, así como de liberación. El mismo discurso liberal sobre América Latina, ha logrado permear a distintos actores sociales, y los han impulsado por la senda del desarrollo, entendido únicamente como crecimiento económico auto sostenido de acuerdo con las dinámicas del capitalismo.

Para entender entonces la configuración de procesos hegemónicos en América Latina y la configuración de corrientes de estatalidad, se puede seguir a Ozslak, para quien las formaciones estatales latinoamericanas habrían pasado por distintos momentos, derivados de la acción de ciertos grupos y actores sociales. Así, habría un Estado oligárquico, propio del siglo XIX y principios del siglo XX, en la mayor parte de países de América latina; luego un Estado liberal o proto-liberal, en el que sectores vinculados a una economía emergente, industrial y comercial, comienzan a disputar el dominio político de las oligarquías exportadoras del periodo anterior, y habrían buscado la constitución de proyectos de modernización capitalista con distintos logros en América Latina. Este habría seguido por la constitución de un Estado desarrollista que busca ampliar o profundizar la modernización capitalista por la vía de buscar mayores niveles de autonomía económica y política frente a las potencias mundiales, pero, curiosa y a la postre contradictoriamente, con su ayuda. Dentro de este proyecto, se impulsan procesos que pueden ser considerados como hegemónicos, en la medida en que se busca articular a una población dispersa y heterogénea dentro de la economía moderna capitalista. La industrialización sería la base para la constitución de sociedades modernas y con esto la configuración de sociedades también políticamente modernas. Campesinos, indígenas y poblaciones marginales se convierten en objeto de intervención, para participar de la constitución de un capitalismo industrial y urbano. Este proyecto se habría desarrollado a partir de los años 50, sobre todo, con distintos matices y logros en cada sociedad (Ver también, Escobar, 2007).

Un cuarto momento, que Ozslak no alcanza a analizar por el momento en el que escribe, sería el impulso de un Estado y una economía neoliberal, en la que, contando con el fracaso del modelo anterior, no busca una modernización capitalista por la vía de la promoción y planeación del desarrollo industrial dirigido o coordinado desde el Estado, sino a partir de la liberación de los actores económicos cualquier intervención estatal.

Esta reconfiguración del Estado y de su centralidad, expresa el carácter histórico de las formaciones estatales, pero no nos diría mucho más sobre las particularidades que esta formación adquiere en cada sociedad particular. De ahí que sea importante considerar cómo son impulsados estos procesos permanentes de configuración y reconfiguración de Estado, desde una perspectiva que reconoce, de entrada, el carácter indisociable del Estado y el capitalismo. Así, habría que analizar cómo éste es formado en América Latina, a partir de las particularidades de las sociedades que componen este continente. Tendríamos que plantear entonces, el carácter colonial, dependiente y heterogéneo de las sociedades latinoamericanas y

las implicaciones de esta condición para la constitución de sus estructuras económicas y políticas, reconociendo de paso las tremendas diferencias que caracterizan la conquista y colonia en América Latina y en sus distintos territorios (Zabaleta, 1985).

Desde otra perspectiva, es importante considerar cómo se ha producido una resistencia considerable desde distintos actores sociales a las dinámicas y procesos desarrollados por los actores políticos hegemónicos y/o dominantes, desde el punto de vista político de dirección (Balsá, 2006). Si bien es cierto, los actuales gobernantes de algunas de nuestras sociedades han llegado al poder a través de mecanismos democrático-electorales; es decir, han sido capaces de usar estos mecanismos como herramientas de acceso al gobierno, movilizándolo a considerables y heterogéneos grupos sociales (lo que daría cuenta de su capacidad de liderazgo o hegemonía política), la profundidad de las transformaciones sociales se limita, nuevamente, no sólo desde el punto de vista económico, esto es, del control de los recursos y del capital, sino desde el punto de vista moral y cultural. Tal como lo plantea Balsá (2006), el triunfo del neoliberalismo no sólo se debió a la iniciativa de los poderosos desde el punto de vista económico para controlar al Estado y limitar sus funciones en este campo; esto es, para constituir una economía y un estado neoliberal; sino en la capacidad para establecer los valores del individualismo, el mercado y el capitalismo en general, como valores universales, sinónimos de racionalidad y eficiencia. De ahí que el combate contra el neoliberalismo y contra la forma de Estado que este ha supuesto, no termina con el control de las instituciones del Estado, tal como se había visto ya por Gramsci y Poulantzas y algunos de sus críticos; sino que se sigue librando en los distintos escenarios de la sociedad civil, como las escuelas, universidades y distintos tipos de organizaciones e instituciones sociales.

Con todo esto, para finalizar, se pone de relieve la complejidad de los procesos hegemónicos. Si bien estos pasan por el plano discursivo-ideológico y, en este sentido por el control o construcción de los escenarios desde los cuales (contra los cuales) se da la lucha hegemónica; la hegemonía ideológica, así sea meramente formal, resultado del uso exitoso de los procedimientos democrático-liberales, choca con el control del poder económico-estructural (Poulantzas 1989). Esta hegemonía, choca así mismo con valores y creencias heterogéneos profundamente arraigados (y no siempre del todo coherentes), a través de procesos sociales y culturales históricos, esto es, como consecuencia de las estructuras socioculturales específicas y heterogéneas de nuestras sociedades, o como el resultado del triunfo de los modelos de organización social, derrotados a través del uso de esos mecanismos de la democracia liberal (Balsá 2006). Todo esto pone de relieve los distintos niveles en los cuales se juega la

hegemonía y su estudio, cuando pasa por el Estado y su proceso de formación siempre inacabado, (Steinmetz 1999), requiere de analizar las dinámicas que adquiere en cada escenario y en cada actor.

Desde este lugar, pensar el poder de las élites empresariales en los procesos de construcción del Estado y la hegemonía implica, en primer lugar, tener en cuenta las dinámicas específicas del desarrollo económico de cada país, pues sus patrones de conducta no responden de manera mecánica a lógicas “universales”, aunque estén condicionadas por estas (Valdés 1997). Los marcos de acción son también los marcos nacionales, regionales, locales o sectoriales y es dentro de estas que los actores empresariales se juegan también sus apuestas políticas y económicas, pese al desarrollo de iniciativas de articulación nacional, como las grandes asociaciones empresariales. Pese a estas iniciativas, pues su fuerza relativa también depende de su posicionamiento político y económico frente a actores empresariales individuales como aquellos constituidos por grandes grupos económicos. La pregunta que quedaría es: ¿son estos actores empresariales, protagonistas de las luchas hegemónicas y contrahegemónicas en América Latina? Tal como lo vimos en el capítulo anterior, en buena parte de las teorías sobre las élites empresariales, se sigue una lógica liberal, funcionalista (Ross-Schneider 1995, 1999, 2002, 2004). Allí, estos actores habrían sido subordinados a las lógicas de las élites políticas y, entonces, podríamos afirmar, no sólo una relativa, sino una absoluta autonomía-hegemonía de los actores políticos dominantes. Pero aquí entra un problema, debido a la tremenda indiferenciación entre élites económicas y políticas, en buena parte de la historia de América Latina.

¿Cómo pensar entonces las relaciones entre Estado y élites empresariales, en un marco de acción caracterizado por la heterogeneidad política, económica y cultural? La acción de los empresarios, no puede verse como aislada de los procesos de constitución de las estructuras estatales y de los actores políticos, pues estos han estado presentes desde el mismo momento de la constitución de estos Estados, en la medida en que los actores empresariales, muchas veces son también actores políticos y han impulsado directamente, procesos muy significativos de privatización de los Estados; esto es, han ocupado el Estado para beneficios particulares y, de hecho, han logrado instrumentalizarlo para sus intereses corporativos. Con esto, nuevamente, para pensar el lugar del Estado en los procesos hegemónicos, es necesario tener en cuenta esta misma heterogeneidad y fragmentación de las sociedades latinoamericanas. Esto no implica desconocer que se hayan impulsado procesos hegemónicos, diferenciados y con éxitos diferenciados también, desde distintos actores sociales. En los

siguientes capítulos, mostraremos entonces cómo es que se han configurado las estructuras del poder político frente a las que se levantaron los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa cómo estas estructuras condicionan las posibilidades de acción de estos gobiernos, pero también cómo los actores gestionan de manera distinta sus propias apuestas políticas en la búsqueda de establecer nuevos marcos de estatalidad y nuevos proyectos hegemónicos.

Capítulo 3. Élités económicas y estado en Bolivia y Ecuador en el periodo “desarrollista”

Introducción

El presente capítulo analiza las relaciones entre las élites económicas en general, y el proceso de desarrollo del Estado en Bolivia y Ecuador desde mediados del siglo XX hasta finales de este siglo. Partimos del supuesto de que las élites económicas han sido actores protagónicos en proceso de formación del Estado en América Latina y, específicamente en sociedades como la ecuatoriana y la boliviana. Si en América Latina se ha hablado de Estados fallidos; de Estados débiles, siempre se ha planteado esto desde una perspectiva liberal en la que este se asume “idealmente” como agente de articulación social, como escenario desde el cual se construyen regímenes de igualdad y justicia a través de la supuesta deliberación racional, regularmente poniendo entre paréntesis los regímenes de desigualdad material y las diferencias culturales, dentro de las cuales los actores sociales participan de la construcción de los sistemas políticos e instituciones de gobierno. En oposición a esto, argumentaremos que dada la desigualdad en la construcción del estado y las formas de establecimiento de la hegemonía de ciertos actores políticos, el estado juega un papel muy importante en la producción y reproducción de formas corporativas del poder en el capitalismo periférico y dependiente.

Afirmamos así que el Estado dentro de la sociedad capitalista, ha sido estructurado de tal manera que difícilmente los actores que pugnan por su ocupación y orientación pueden romper con formas de constitución corporativistas de la sociedad y del mismo Estado (Poulantzas 1973, 1987). Las distintas élites que se desarrollan dentro de las sociedades capitalistas, al buscar su propia reproducción y fortalecimiento, contribuyen a darle perfiles a los Estados y esto tanto en las sociedades del capitalismo avanzado, como en las sociedades periféricas, aunque sus posibilidades sean desiguales y diferentes. Sus luchas siempre pasan por la definición de las “fronteras” de los Estados; por la discusión sobre sus funciones y alcances. No son actores aislados, por supuesto, sino que entran en disputa con actores diversos, entre ellos, movimientos y organizaciones sociales populares, así como agremiaciones de trabajadores, empresarios y políticos profesionales, que no siempre, o casi nunca, logran articulaciones internas sólidas y estables, pese a que se dan procesos de articulación hegemónica en su interior, con duraciones desiguales, con éxitos también desiguales.

Dentro de este marco, la búsqueda de realizar el ideal de un estado “integral”, tal como lo denominó Gramsci (1980, Buci-Glucksman 1979) chocha ineludiblemente con las formas

corporativas de poder de la sociedad capitalista. De ahí la necesidad de comprender cómo los distintos actores (y entre éstos las élites empresariales) participan (desde qué lógicas y en el marco de qué estructuras de relaciones de poder y producción), de la construcción del Estado.

Para el estudio de nuestros casos, dos elementos entran en juego en este proceso. En primer lugar, la primera mitad del siglo XX es el escenario de emergencia de actores sociales y económicos que van a buscar la transformación de estructuras sociopolíticas y económicas oligárquicas, lo que lleva al desarrollo de una creciente conflictividad social y política. En segundo lugar, la emergencia de actores sociales tiene fundamento en un proceso de modernización socioeconómica que posibilita el desarrollo de actores de clase media, sobre todo, que van a impulsar la idea de una revolución social. Bajo la idea de la revolución, estos actores disputaron la orientación del Estado, su reconfiguración institucional y la apuesta por una mayor democratización social, política y económica.

Tenemos así, un momento significativo para comprender a los actores que van a luchar por la orientación del Estado y las sociedades en Bolivia y Ecuador. Un momento en el que, de hecho, las élites económicas son constituidas como protagonistas de la modernización capitalista, así como de las estructuras institucionales estatales. Un protagonismo que asumen, pero que en principio es producido “desde afuera” por la agencia política; esto es, bajo el impulso de las élites políticas modernizadoras, tanto en el plano ideológico, como en el plano económico material.

Desde este marco, tratamos de comprender cómo han actuaron las élites económicas en los dos casos, cuál fue su relación con la orientación de las políticas de estos Estados y con la formación de los estados en sí; qué mecanismos usaron para intervenir en lo que estos Estados hicieron o dejado de hacer en sus procesos de formación; cuáles fueron sus relaciones con los actores políticos y sociales; en últimas, cómo participaron de las luchas hegemónicas en estas sociedades. Desde este lugar, tal como lo plantean algunos autores (V. gr Steinmetz), se asume el Estado no como una entidad acabada, sino como una institución (unos discursos, unas prácticas) que se reconfiguran permanentemente, pero cuya centralidad en el desarrollo de las sociedades capitalistas (periféricas) es incontestada, tal como se intentó demostrar en el capítulo anterior.

El estudio de estas sociedades choca siempre por su configuración política y, dentro de esta, pese a algunas críticas a visiones estado-céntricas, el Estado ha jugado y juega un papel muy importante, incluso hoy, en contextos de globalización donde la centralidad de este ha sido

reconfigurada (Sassen 2010). El estudio de las relaciones entre élites económicas y Estados en el periodo definido tiene en cuenta que las primeras son, de hecho, construidas, generadas, por los agentes estatales, o a través de la ocupación de las estructuras estatales por parte de estas élites. La promoción de la modernización capitalista que se impulsa desde los años 50 hacia adelante, que implicaba el desarrollo de procesos de acumulación de capital privado, como paso fundamental para el desarrollo capitalista, es clave principal de la relación entre élites y Estados.

Con base en las anteriores consideraciones, en primer lugar, analizaremos la configuración de los Estados en Bolivia y Ecuador, en el periodo desarrollista; esto es, desde mediados del siglo XX hasta la emergencia del dominio y la hegemonía política neoliberal y los modos en que las élites económicas participaron de estos procesos de formación de los dos Estados

Para el desarrollo de estos problemas nos centramos particularmente en la literatura que sobre estos países se ha producido y, específicamente sobre el lugar que las élites económicas han ocupado en esta literatura. De entrada, reconocemos una desigualdad considerable en la producción bibliográfica sobre este tema, lo que limita las afirmaciones que se puedan hacer sobre cada caso, pero que también da cuenta del relativamente desconocimiento de estas relaciones, para comprender procesos más complejos.

En este marco, un recorrido por la historia boliviana y ecuatoriana desde mediados del siglo XX, cuando se instala Estado-nacional, o una orientación política “estado-céntrica” (Tapia 2009, Pachano 2007) hasta la emergencia del neoliberalismo como orientación política dominante, nos muestra algunas semejanzas, pero también diferencias significativas que es necesario revisar para comprender la complejidad de los procesos de formación del Estado en sociedades dependientes.

Expondremos a continuación cómo el nacionalismo desembocó en las políticas neoliberales en los dos casos y cómo las diferenciadas trayectorias permiten comprender el mayor peso, la mayor articulación de las élites políticas y económicas en el caso boliviano, frente al caso ecuatoriano, donde el personalismo/populismo configuró unas relaciones, diríamos mucho menos institucionalizadas que en el caso boliviano. Así mismo se tiene en cuenta la profundidad de la crisis económica que atraviesa la sociedad boliviana a finales de los años 70, pero, sobre todo en los primeros años 80, como un elemento que permite explicar la mayor articulación de las élites económicas bolivianas y su potenciamiento como actores decisivos en el impulso, gestión y desarrollo del neoliberalismo boliviano.

3.1. El caso boliviano. Acumulación de capital político y económico en el nacionalismo desarrollista

Bolivia inaugura la década de los 50 con lo que algunos han denominado una de las revoluciones sociales más emblemáticas del siglo XX (Knight 1990, 2003; Klein 2003). Esta revolución estuvo orientada por sectores de la clase media urbana, formados académicamente y con orientaciones nacionalistas, articulados alrededor del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); partido constituido en los años 30 del siglo XX. A partir de esta revolución se nacionalizaron los hidrocarburos, la producción minera y se implementó una reforma agraria con impactos muy profundos en la democratización y modernización de la participación política, así como de producción agropecuaria. Estas medidas, de igual manera, buscaron superar lo indígena y lo campesino, considerado como sinónimo de atraso. Se destaca de esta revolución el hecho de que reivindica lo popular-mestizo como la base de la identidad nacional y soporte sociocultural del Estado boliviano. Con esta revolución se profundiza la ruptura de más de un siglo de exclusión política de campesinos e indígenas y establece el voto universal sin distinciones de etnia o clase social para los mayores de 21 años. (Withehead 2003, Knight 2003, Dunkerley, 2003).

Desde el punto de vista sociocultural y político, este momento va a ser muy importante, sobre todo porque reinstala en el pueblo boliviano, lo que Tapia, (2009) y Polet (2009), llaman la memoria de mediano alcance (habría una memoria larga, que da cuenta de la resistencia indígena a los procesos de colonización española y al dominio blanco-mestizo republicano), y en esta, el protagonismo de los sectores populares bolivianos en la constitución del Estado-nación. Esto, pese a la sustitución progresiva de estos sectores por el partido revolucionario y, luego, a la “traición” de los mismos por parte de los líderes más importantes del MNR, con la implementación de una “contra revolución” neoliberal, a mediados de los años 80.

Acorde con la orientación nacionalista, la revolución de 1952 buscó, más que una orientación socialista, la modernización capitalista de la sociedad boliviana, tanto desde el punto de vista político, como económico (Conaghan, 1994, Arze, 2002, Tsolakis, 2009, 98). De ahí la importancia de, para los revolucionarios, ampliar los niveles de participación y la transformación del aparato productivo; objetivo, éste último, en el que no tuvo tanto éxito como en las transformaciones políticas, a pesar de la tremendísima inestabilidad institucional que se desencadena años después de la revolución nacionalista.

La precariedad y aislamiento de la economía boliviana, su fragmentación territorial, junto con la implementación de unas políticas económicas que generaron caos financiero, inflación y

desajustes estructurales, dificultaron el logro de las más importantes transformaciones propuestas por la revolución nacionalista. Esto sirvió de base para la progresiva deslegitimación del proyecto nacionalista y una creciente y paradójica dependencia de la ayuda externa, específicamente los Estados Unidos. (Morales 2003; Sanjinés 2010, V. 2; Tsolakis 2009, 101).

La revolución boliviana, agenciada por el MNR, de este modo, no logra romper con estructuras de dominación “precapitalistas”, caracterizadas por formas de poder patriarcales, patrimoniales y racistas (las primeras), sino que, incluso llega a fortalecerlas en algunas partes del país. Este es el caso del oriente boliviano, donde, al amparo de las políticas de tierras de la revolución, se amplió el poder de la hacienda y se fortaleció el poder de algunas élites regionales y locales (Soruco, Plata y Madeiros 2008; Rojas, Tapia y Bazoberry 2000, Seleme, Peña y Pardo 2007; Assies 2006; Sandoval et al, 2003).

En tal sentido, a pesar de constituirse lo que podría denominarse como un proyecto político nacional-popular en términos gramscianos, se establecen también condiciones de reproducción de formas tradicionales de dominación y, en consecuencia, se reproducen o fortalecen clivajes regionales que venían produciéndose desde tiempo atrás, con lo que la construcción de un Estado central fuerte se ve seriamente afectada (Mansilla 2007, Rea 2005, Rojas, Tapia, Bazoberry, 2000, Burbano 2006, 2012; Sanjinés 2010, Orellana 2006). La reproducción de estas formas de segregación, exclusión y dominio, van a jugar un papel muy importante en el desarrollo posterior de las disputas por el Estado y la sociedad boliviana, particularmente en lo que tiene que ver con procesos organizativos que han luchado por la autonomía del oriente boliviano, incluso en tiempos de Evo Morales (Rosnes 2010).

Ahora bien, esta presentación panorámica del proceso de transformaciones institucionales, políticas, ideológicas y económicas que se abren con el nacionalismo revolucionario, es necesario determinar el papel que juraron las elites empresariales, quienes fueron protagonistas de la gestión e implementación de dicho cambio.

Así, en primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que vive la sociedad boliviana, antes y durante la revolución nacionalista liderada por el MNR, es un proceso de transformación progresiva de una estructura política, económica y social de carácter oligárquico y, la constitución de nuevas élites políticas y económicas. Este proceso, si bien es muy limitado, dado el carácter precario de la economía nacional boliviana, es resultado, por un lado, del incipiente desarrollo del capitalismo en esta sociedad y, por otro lado, de la constitución de

escenarios de sociabilidad política en la que sectores urbanos ilustrados, de clase media, realizan nuevas lecturas de la historia política y económica de Bolivia y comienzan a proyectar, desde éstas, la construcción de una nueva sociedad.

Así, tal como lo expone Luis Tapia (2012), desde los años 40, luego de la catastrófica *Guerra del Chaco*, la sociedad oligárquica comienza a resquebrajarse y a mostrar claros signos de debilitamiento de sus soportes ideológicos. La producción intelectual de nuevos actores se orientó en este periodo a la crítica de estructuras económicas, políticas y culturales que empiezan a considerar atrasadas y cuya superación se establece como una tarea imprescindible para estas nuevas élites. Tapia destaca que en los años 40 comenzaron a publicarse textos en los que se resalta la presencia del pueblo y de los indígenas en particular, en la historia de la sociedad boliviana. Autores como Carlos Montenegro, con su *Nacionalismo y coloniaje*; Tristán Marof, con su *La Justicia del Inca* y Walter Guevara, *Manifiesto a los electores de Ayopaya*, exponen, no solo una nueva lectura que reivindica a un pueblo excluido, “verdadero” representante de la nación boliviana, frente a la oligarquía *antinacional*, sino que presentan propuestas para la reconfiguración general del país en la que estos excluidos fueran protagonistas de su propia historia (Tapia 2012, 9-11)³⁷

Esta pérdida de legitimidad de las estructuras de dominación oligárquica se puede ver también en los aportes de Sinclair Thomson (2003: 117-134), quien estudia cómo antes de la revolución nacionalista se configuró una memoria de la participación popular e indígena en la construcción de la sociedad boliviana; una memoria que en la que se resalta el carácter revolucionario del pueblo boliviano. Para este autor:

... If we look back over two and a half centuries of history in Bolivia, revolution may be the idea that most commonly fames collective imagination of the past. The mere recitation of dates (1781, 1825, 1899, 1952...) is enough to summon up a spectral presence of leaders larger than life, insurgent masses and rampant militia, echoes of grandiose and incendiary discourse, scenes of destruction and renewal, triumphant climax and denouements of betrayal. Beyond their dramatic and symbolic resonances, the dates carry a set of abstract connotation: anticolonialism, populism, class struggle... (Thomson 2003, pp 117)

Esta memoria, adquiere creciente visibilidad en el proceso urbanización que Bolivia vive a lo largo de la primera mitad del siglo XX (Burbano de Lara 2012, 48-49; Del Barco 2012: 217). Los discursos nacionalistas y revolucionarios, de este modo, tienen un asidero material en este

³⁷ Sobre la manera en que las nuevas lecturas de la historia comienzan a constituirse en temas de debate público y base de la construcción del discurso revolucionario de 1952, ver también: Dunkerley, 2003: 135-163)

proceso y el “legado revolucionario” del pueblo boliviano gana creciente protagonismo y arraigo en sectores sociales heterogéneos, como campesinos, indígenas, militares e intelectuales/políticos urbanos. Bajo de este manto es que se van a desarrollar las luchas por ampliar las bases de la democracia boliviana, tanto desde el punto de vista institucional y económico, como de los sujetos que participan de la misma. (Dunkerley 2003)

Por otro lado, así como los sectores populares adquieren creciente protagonismo político, tanto en los discursos de nuevos intelectuales, como en las luchas y demandas sociales desde los años 30 o 40, también es necesario recalcar que en el campo de los poderes de élite se van a desarrollar, durante la primera mitad del siglo XX, importantes transformaciones. Al amparo del desarrollo de los procesos de integración económica boliviana al mercado mundial, a partir del aumento de exportaciones de minerales como el estaño, que pasan, de 9139 toneladas métricas en 1900 a 39981 toneladas métricas en el periodo que va de 1926 a 1930, con valores en libras esterlinas de 1.331.466 a 6.600.753 respectivamente (Dunkerley 2004, 143), nuevas élites económicas y políticas emergen también.

Este incremento considerable de recursos que llegan al país³⁸ configura una incipiente burguesía industrial que le apuesta a la profundización de liberalización económica iniciada a comienzos de siglo y al impulso de procesos de articulación de nuevas élites económicas minero-industriales. Élites que buscan liberalización económica, sin democratización política (Dunkerley 2003, 143; Conaghan 1994, 40)

De este modo, lo que tenemos en el marco de la revolución nacionalista del 52, es un campo de conflicto por la orientación global de los proceso económicos, políticos, sociales y culturales; un campo en el que el Estado se convertirá en el objeto a partir del cual, particularmente los sectores populares y de clase media, van a buscar materializar su protagonismo y hacer efectiva la satisfacción de sus demandas. El Estado es así, en el marco de los años 50, la respuesta institucional desde la cual se busca la modernización capitalista de la sociedad boliviana.

Como ya se ha dicho, la revolución liderada por el MNR, se destaca por el carácter popular de su discurso. Podría decirse, a partir de esta consideración, que hay un creciente poder y capacidad de influencia de los sectores populares que son articulados, políticamente por el MNR; creciente poder que desemboca en la revolución, pero que inmediatamente se choca

³⁸ Es importante precisar, frente al desarrollo de la exportación de estaño que buena parte de los recursos generados por la exportación de este mineral, no son invertidos en Bolivia, sino en Europa y Estados Unidos, pese a que quienes exportan son bolivianos. Ver. Del Barco (2012, 218) Mansilla (1994, 48-49) Tsolakis (2009, 97-98)

con la estructura económica y política de la sociedad boliviana. Esto implicó, desde el comienzo de la revolución, la necesidad de viabilizar las reformas políticas y económicas. Esto condujo a la generación de conflictos con las élites económicas tradicionales y con las nuevas élites industriales y comerciales del país, que apuntaban más a liberalización económica que a democratización política.

De hecho, es importante recordar que es en el marco del proceso revolucionario, de sus ires y venires y, en su etapa final; antes de que sobrevinieran los gobiernos militares y la profundización de la inestabilidad política, que se constituye la organización empresarial más importante de la historia boliviana de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, como es la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Hecho que, aunque tiene lugar 10 años después de la Revolución, el 4 de septiembre de 1962, marcará un antes y un después de las disputas por el poder de Estado en Bolivia, en el sentido en que los actores empresariales bolivianos, progresivamente articulados por esta organización, van a desarrollar mecanismos de integración, no sólo de las élites económicas, sino que buscarán ampliar esta articulación a los partidos políticos e, incluso, sectores populares, como se verá más adelante (Mansilla 1994; Sanjinés 2004)

Ahora bien, el proceso de constitución del poder empresarial articulado bajo la dirección de esta nueva organización gremial a partir de los años 60, había iniciado ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el surgimiento de las Cámaras Nacionales de Industria y Comercio (Sanjinés 2004, T1; 2010 T1). El crecimiento económico y el incipiente proceso de urbanización e industrialización vivido por la sociedad boliviana durante la primera mitad del siglo XX, contribuyó así al desarrollo de una heterogénea pero creciente organización empresarial que va a chocar con la ocupación del poder de Estado por los actores políticos de la revolución nacionalista, que convierten a estas élites en objeto de intervención modernizante (Arze 2002, 136). De este modo, el establecimiento de un organismo gremial en principio, pero luego altísimamente politizado como la CEPB, se convierte en elemento de articulación de las dispersas y fragmentadas élites económicas y consecuentemente, de las también fragmentadas fuerzas políticas que se constituyen antes, durante y después de la revolución del 52.

Un elemento para tener en cuenta al comprender este denso proceso que se desencadena con la revolución nacionalista es que, de acuerdo con varios analistas, si bien es cierto hay una importante ampliación del espacio político y, por tanto, una profunda democratización de la sociedad boliviana, el proceso económico vivido por la misma fue más bien traumático. La

nacionalización de las minas, por ejemplo, no obtuvo en el mediano plazo, los mejores resultados por los altísimos costos que asumió la administración de las minas nacionalizadas al amparo de la Compañía Minera Boliviana (COMIBOL).

Las minas pequeñas y medianas, por el contrario mostraron una creciente eficiencia en su desempeño y por tanto en sus utilidades (Morales, 2003: 219).³⁹ De este modo, si bien la producción industrial en general se vino a pique en los años siguientes a la revolución (particularmente en el segundo gobierno del MNR), esto no implicó un retroceso estructural, del proceso de acumulación y concentración de capital en manos privadas sino, de hecho, su progresivo fortalecimiento (Tsolakis 2009,102; Arze 2002; Sandoval et al 2003; Mercado, Leitón y Chacón, 2003).

Así, tal como lo plantea Luis Tapia (2009), en el marco de la revolución nacionalista se desarrolla una creciente, pero relativa autonomía del Estado (que mejor sería decir de los actores estatales). Sin embargo, la grave crisis económica en la que cae Bolivia luego de la revolución, imposibilita la profundización de esta autonomía: un creciente poder estructural de las élites económicas, así como la fragmentación de los líderes de la revolución y la emergencia de los militares como actores políticos, frenarán la constitución de un estado autónomo y la hegemonía nacionalista estado-céntrica. Con la revolución, de hecho, se produce un debilitamiento de la capacidad estructural del Estado Boliviano en relación con el proceso de acumulación capitalista privada y, al final, un fortalecimiento político e ideológico

³⁹ Hay una reflexión que regularmente no se hace sobre la constitución del Estado como actor económico. No se tiene en cuenta que las utilidades de las empresas estatales del capitalismo periférico, debido a los grandes déficits sociales, se usan, regularmente en, precisamente, inversión social (escuelas, infraestructura pública, de transportes, hospitales, etc.) y que, por tanto, estas son mucho más dependientes de los ciclos económicos, a los que regularmente no están sujetas las empresas en manos privadas, cuyas utilidades son regularmente de libre destinación: para la reinversión o para el consumo suntuario de los propietarios del capital. La reinversión de las utilidades de las empresas estatales se orienta más que a la reproducción del capital (que es propio de las empresas privadas), a la inversión social y en esto es donde debe ser medida también su “rentabilidad” social, más que económica. De este modo, el “capitalismo de Estado”, en sociedades deficitarias o incluso en sociedades con altos niveles de acumulación de capital, tiene problemas de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, pero esta sostenibilidad es más el resultado de factores estructurales (¿a qué responden las empresas estatales? ¿cómo medir su utilidad?, etc.), que, a factores vinculados, necesariamente con la “racionalidad” de su manejo o dirección. No se trata, en este sentido únicamente, de un saqueo de las empresas estatales por parte de sus administradores políticos (que suele darse, por supuesto), sino que los actores estatales usan los recursos de estas empresas para invertir en otros ramos, que no necesariamente conducen al incremento del capital económico, pero si pueden contribuir al fortalecimiento del capital social, entendido como el grado de integración social al que contribuyen. Efectivamente también pueden considerarse problemas de gestión de las empresas estatales, burocratización de las mismas, relativamente altos costos de mano de obra, atrasos tecnológicos, etc., pero esto respondería a cómo se concibe la producción en general y los resultados de la producción; que no es la acumulación de capital per se, sino un capital que busca el fortalecimiento del tejido social. Así, podría pensarse en el Estado y en las empresas estatales, como mecanismos de acceso a recursos por parte de grandes grupos sociales; grupos que, de otro modo, en una economía ultraliberal, difícilmente podrían alcanzar. Sirven así, con todo y la volatilidad de la economía internacional, como mecanismos de redistribución de las utilidades de la riqueza social.

del poder económico privado, resultado incluso del apoyo del Estado, por la vía de subsidios selectivos otorgados a algunos empresarios privados, entre otros mecanismos (Morales, 2003, Tsolakis, 2009; Arze 2002).

De este modo, una marca caracterizará este proceso político-económico: la tremenda inestabilidad económica y política. Desde el mismo momento en que se produce la revolución, se generan disputas al interior de los principales líderes del MNR y de los grupos y organizaciones políticas y sociales aliadas. El “fracaso” de la gestión económica, profundiza este debilitamiento de los líderes revolucionarios y con esto, pronto la reversión de algunas de las políticas nacionalistas más democratizantes, en el segundo gobierno revolucionario.

En medio de la crisis del primer gobierno del MNR, bajo el mando de Víctor Paz Estenssoro, la economía boliviana en general se fue a pique. La inflación se disparó; el abastecimiento de alimentos disminuyó considerablemente, la industria privada nacional deterioró sus ingresos, el PNB cayó en un 20% entre 1952 y 1957; la dependencia del financiamiento estatal de la economía hizo insostenible la situación y creció la dependencia de la ayuda externa proveniente principal y “curiosamente” de los Estados Unidos (Morales 2003, 216-217).

La respuesta de las élites empresariales se hizo visible. Durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo, la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia publicó duras críticas a las políticas económicas de los gobiernos nacionalistas, pese que éste gobernante impulsó una mayor liberalización de la economía. El 5 de septiembre de 1958, esta institución cuestionó los “desmanes” y la “indisciplina” obrera, y acusó a los gobiernos nacionalistas de una actitud complaciente. proclamó como ilegítimas, lo que considera demandas excesivas de los trabajadores bolivianos, que no se condolían, a su parecer, de la grave situación financiera de las industrias; abogó por la necesidad de disminuir los costos de operación e impugnó el silencio del gobierno. Como conclusión de estas críticas declara tajantemente:

1. La industria manufacturera nacional, en conjunto o individualmente, no considera ni dará curso a ningún pliego presentado por los trabajadores que presente concesiones económicas y suscite conflicto, mientras el Supremo Gobierno no adopte las siguientes esenciales medidas que eviten el colapso de la industria;
 - Libertad de contratación, establecida en la Ley General del Trabajo y en los Decretos de Estabilización monetaria del 15 de diciembre de 1956
 - Represión del contrabando mediante la aplicación de las leyes vigentes contra esa clase de delitos;
 - Aprobación de un Arancel Aduanero que traduzca una razonable protección para la Industria Nacional.
2. Si en industrias aisladas, mediante la coacción de las huelgas o ilegales resoluciones del Ministerio de Trabajo, se pretendiera imponer arbitrariamente o por la fuerza el pago de nuevos beneficios económicos, toda la industria del país como protesta por la violación de

los principios económicos y de la libertad de empresa, se solidarizará con la industria perjudicada, adoptando las medidas que la situación aconseja. (Sanjinés 2004 T1, 143-144)

En medio de la crisis económica, ésta es la primera vez que un organismo gremial de la trayectoria e importancia de la Cámara Nacional de Industrias manifiesta su rechazo a las políticas nacionalistas y demanda prontas soluciones; se queja de la “indisciplina obrera” y de las desmedidas demandas de los trabajadores; pide políticas laborales liberales, pero al mismo tiempo solicita protección de la industria nacional. Esto, no obstante, el hecho de que es precisamente en el gobierno de Siles Zuazo, cuando la radicalidad de las reformas de los gobiernos revolucionarios comienza a disminuirse y el segundo gobierno revolucionario evidencia una menor capacidad de maniobra (Morales 2003, 219; Mercado, Leitón y Chacón, 2003). Esto debido a una creciente fragmentación de los miembros del MNR, entre un ala derecha y otra de izquierda, así como un mayor aislamiento de los aliados de la revolución, particularmente de la COB, que se opone a las medidas liberalizadoras (Conaghan 1994)

De este modo, la revolución no se consolida en su pretensión de establecer políticas desarrollistas exitosas, que mejoraran la vida de los ciudadanos bolivianos, pero si instaura un ciclo de intensa volatilidad política, inestabilidad institucional y económica y violencia social. Los gobiernos militares, de izquierda y derecha que “controlan” el escenario estatal a partir de 1964, si bien es cierto continúan con algunas de las políticas del MNR, buscarán autonomizarse frente a actores políticos dominantes e incluso, frente a las élites económicas. Todo esto, mientras la economía no logra estabilizarse y la calidad de vida de los bolivianos no mejora sustancialmente o incluso empeora (Klein 2003; Morales 2003)

Ahora, es precisamente esta búsqueda de autonomización del poder militar que controla el Estado entre 1964 y 1982 (con breves momentos de “democracia” electoral), la que lleva, progresivamente a la reconfiguración de las relaciones de poder entre los miembros de los partidos más importantes del periodo, los movimientos y organizaciones sociales y las élites económicas. En este último caso, como planteábamos atrás, con la creación de la CEPB, en el declive de los gobiernos revolucionarios, se inaugura un proceso de creciente protagonismo político de las élites empresariales. De hecho, es muy importante recordar que en el periodo que va de la creación de la CEPB, al restablecimiento de la democracia electoral las organizaciones de empresarios se multiplican, por ramos y por regiones. Surgen así las federaciones de empresarios privados de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, y se consolidan organizaciones de bancos privados, como ASOBAN (Sanjinés 2004, T1). No

obstante, las relaciones con los gobiernos militares no pueden catalogarse sino como ambiguas y sujetas al extremo personalismo de los jefes de gobierno militar que se suceden, en algunos momentos, “día a día” (entre 1964 y 1982, pasan por el poder más de 23 militares; algunos no duran más que algunas horas). Algunos miembros de las élites empresariales participan de estos gobiernos, logran medidas proteccionistas para algunas empresas y empresarios, pero otros son perseguidos o incluso son exiliados (Sanjinés 2004, 228-233).

Es precisamente esta tremenda inestabilidad política, social y económica que caracteriza a los gobiernos militares bolivianos, lo que lleva a lo que podría llamarse una creciente conciencia del empresariado boliviano de su poder y de la necesidad de ejercerlo para reorientar al país. Unos de los momentos más tensos en las relaciones entre empresarios y militares se vive en el marco del gobierno del General Juan José Torres (1970-1971), quien de manera más directa atacó a los líderes empresariales y buscó “profundizar” la revolución “socialista”. Desde la perspectiva del periodista Ricardo Sanjinés (2004, 230-236), todos los intentos de diálogo entre los empresarios y el gobierno de Torres fracasaron. Algunos miembros de la CEPB se vieron amenazada su seguridad en varias ocasiones, lo que los llevó a buscar distintos aliados para “resolver” la situación. En el campo político, líderes del movimiento Falange Socialista Boliviana (FSB) y el MNR, antes enemigos, se unen con el futuro fundador de ADN (Hugo Banzer) para combatir al gobierno de Torres. Esta unidad temporal fue impulsada por líderes empresariales. En palabras de Sanjinés, quien narra cómo los líderes de la CEPB, buscaron sumar alianzas entre los empresarios de Cochabamba y Santa Cruz en el año 71, estos se encontraron con que: “Estaban tan disgustados los dirigentes empresariales cochabambinos que querían sumarse a cualquiera de las revoluciones de las que se rumoreaba y que el gobierno se encargaba de acrecentar cada noche, con denuncias histéricas en el canal estatal de TV”. (Sanjinés 2004, T1:238).

Dentro de este escenario, a pesar de que autores como Mansilla (1994; 1995, 2000) y Sanjinés (2004), concuerdan en que la CEPB como institución, no participó de manera directa en el golpe al gobierno de Jun José Torres, empresarios cruceños y de otras regiones vinculados con la CEPB, facilitaron reuniones entre distintos actores políticos, en las que, efectivamente se fraguó el golpe de Estado y el establecimiento del gobierno derechista de Hugo Banzer (Sanjinés, 2004: 238). En este clima caldeado, los militares perseguidos o amenazados por el gobierno de Torres o por otros actores político-militares del momento (como el ELN y otros grupos armados), o incluso de las mismas filas activas del Ejército Boliviano, también fraguaban cómo salir del gobierno de Torres.

Así, en el transcurso de 33 años, esto es, entre 1952 y 1985, la inestabilidad es la regla. A lo largo de este periodo y pese a la inestabilidad política y económica se producen avances importantes en el proceso de acumulación capitalista en Bolivia. Gracias al estatismo, de hecho, las élites empresariales logran incrementar su poder estructural a través de distintos mecanismos y gracias a distintas circunstancias. En primer lugar, tanto los gobiernos nacionalistas como los gobiernos militares de distinta orientación impulsaron políticas de financiamiento de la empresa privada y los mismos líderes del empresariado no pusieron en duda el papel protagónico del Estado como motor del desarrollo.

A ojos de H.C.F Mansilla, en este contexto se desarrollan en Bolivia unas élites, que incluso después del surgimiento de la CEPB, no ponen en duda la preminencia "... *fáctica e ideológica del Estado como empresario y en cuanto guía indiscutido del proceso de modernización*". A pesar de la ambigüedad de la relación entre los gobiernos nacionalistas y las élites empresariales, Mansilla, considera que la revolución contribuyó notablemente al desarrollo al crecimiento del sector manufacturero:

La producción de la industria de bienes de consumo se duplicó entre 1952 y 1962; para el mismo periodo, el incremento industrial, medido en indicadores per cápita de la población fue de un 63%. A esta evolución subyacen algunos factores como la paulatina integración del campesino en el mercado nacional después de la Reforma agraria, la apertura del Oriente boliviano a causa de la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz (inaugurada en 1953). El auge de la exportación petrolífera y la generosa dotación de créditos (a fondo perdido) a favor de la elite política asociada directamente al régimen del MNR (Mansilla 1994, 50)

Los gobiernos militares posteriores a los gobiernos del MNR, favorecieron así los procesos de acumulación de capital iniciados por revolución o incluso desde antes. La misma reforma agraria, que en el occidente del país dotó a miles de campesinos e indígenas de pequeñas parcelas, en el oriente significó la profundización de la concentración de la propiedad, debido a que el MNR proyectaba a esta región como centro de desarrollo de la moderna producción capitalista mediante el fomento de la industria privada (Sandoval et al 2003, 44)

A partir de estas medidas que favorecían abiertamente dos modelos de producción, uno centrado en la pequeña propiedad y otro en la gran propiedad, sumado a las políticas de fomento de la inversión privada, por la vía de la ayuda externa y el endeudamiento, se gestó el fortalecimiento del poder estructural de las élites. El Estado boliviano se convierte así en el motor de este fortalecimiento. En el Oriente boliviano, particularmente en Santa Cruz, es

notorio este proceso de incentivos a las empresas agroindustriales tanto en el merco de los gobiernos revolucionarios, como en el de los gobiernos militares. Esto se evidencia cuando vemos que, entre 1955 y 1970, se otorgaron algo más de 2 millones de hectáreas, mediante “dotaciones individuales”, mientras que sólo se otorgaron un poco más de 88 mil hectáreas, mediante dotaciones colectivas (Sandoval 2003, 46).

Ahora bien, desde la perspectiva de Conaghan (1994), en el caso boliviano, no habría contradicción entre nacionalismo estatista y promoción del capital y la empresa privada, pues a ojos de esta autora, tal vez el protagonista más importante de la Revolución del 52; Víctor Paz Estenssoro, fue siempre consciente de la importancia de la empresa privada para el proceso de modernización de la sociedad boliviana (Conaghan, 1994: 184 y ss.)

De este modo, bajo el amparo de los gobiernos revolucionarios se impulsan políticas para incrementar la producción de alimentos, sobre todo en el Oriente, que conducen a que, así sea parcialmente, Bolivia gane autonomía alimentaria. Las élites económicas de Oriente, reciben créditos, pero no se aplica una reforma agraria que promueva la pequeña producción, ni la redistribución de tierras. Más que eso, en el Oriente se reparten tierras, pero en pocas manos. Andreas Tsolakis, muestra que el Estado boliviano, distribuyó en el oriente, más de 30 millones de hectáreas en pocas manos, consolidando el neolatifundio. Inversores brasileros, menonitas alemanes y colonos japoneses, fueron beneficiados con este regalo de tierras que fueron la base de las primeras haciendas capitalistas. La oligarquía cruceña, no sólo sobrevive a la revolución, sino que se beneficia de la misma (Tsolakis, 2009: 102). Los primeros gobiernos militares, de clara orientación derechista, continuaron con la promoción de la acumulación capitalista en manos privadas en el Oriente y, bajo la presión de Estados Unidos (para combatir el comunismo) y con el apoyo del FMI y el BM, otorgaron grandes cantidades de recursos económicos a los empresarios privados de Santa Cruz (Sandoval et al 2003, 55-66; Tsolakis, 2009)

Pese a estas ayudas y regalos, a partir de 1969, el nacionalismo se radicalizó en Bolivia bajo el mandato del General Ovando. En este gobierno las élites empresariales se vieron amenazadas por primera vez, cuando este gobierno nacionalizó la *Bolivian Gulf Oil Co*, hecho que fue visto por las élites cruceñas principalmente, como un ataque a los intereses regionales. (Sanjinés, 2004, V. 1: 208). Ante las políticas estatistas del gobierno de Ovando, la CEPB, no dudó en buscar acercamientos con el gobierno, sin lograr mucho (Sanjinés 2004 T1, 210-211).

En este contexto, los empresarios privados no escatiman esfuerzos para oponerse a las medidas del gobierno y promueven procesos de articulación gremiales más abarcadores. Específicamente los empresarios del oriente constituyen la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, bajo el liderazgo de la CAINCO. Lo propio hacen empresarios de otros departamentos como Cochabamba y Oruro. La CEPB, del mismo modo, realiza gestiones entre el empresariado y sus distintas organizaciones regionales, para buscar soluciones frente a lo que sentían como amenaza a sus intereses y resistir a las medidas “estatizantes” del gobierno (Sanjinés 2004 T1, 211-212).

Así, los empresarios son cada vez más conscientes de la necesidad de unificar criterios, principios de acción y estrategias de mediano y largo plazo en contra de los militares de izquierda. El gobierno de Juan José Torre (1970-1971) no desconocía la importancia de la empresa privada en el desarrollo económico y social del país, pero le otorgaba un lugar marginal, motivo por el cual frente a este gobierno la postura de las élites empresariales se hizo cada día más frontal y unificada (Mansilla 1994 54-55).

El clima de confrontación generalizada hacía temer a cada vez más empresarios por su seguridad. De acuerdo a Sanjinés (2004 T1, 239-242), en el marco del gobierno de Torres, hay amenazas en contra de miembros de la Banca, de empresarios mineros, directivos de la CEPB, de la Cámara Nacional de Industrias, de la Cámara Nacional de Comercio, de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz; se amenaza también a líderes políticos de los principales partidos, como el MNR, FSB, el PDC, entre otros (los mismos que a fines de éste año respaldarán el Golpe de Hugo Banzer contra el Gral. Torres). Los empresarios piden reunirse con el presidente Torres, quien acepta, pero no les ofrece salidas concretas a su estado de “incertidumbre”. Por el contrario, en dos reuniones seguidas, desarrolladas en 1971, este les dice que el gobierno no está con condiciones de ofrecer seguridad a nadie y que los empresarios debían procurarse su propia seguridad. De este modo, los empresarios, de acuerdo a este autor, deciden organizar lo que denominaron como “Comités de Defensa”. En este contexto, Héctor Ornamecha, miembro directivo de la CEPB, comenta que: “Nos dábamos cuenta de que muy pronto nos íbamos a encontrar en medio de una batalla que no habíamos originado ni queríamos, pero que se iba a dar indefectiblemente. La Confederación decidió preparar Comités de Defensa” (Sanjinés 2004 T1, 243)

La amenaza sentida por los empresarios los lleva a tomar consciencia de su vulnerabilidad, pero también son conscientes de cómo este gobierno se ve presionado por parte de distintos actores sociales y políticos. No fue difícil entonces para las élites empresariales, encontrar

aliados. Pero no asumen un rol dependiente de los actores políticos. Estos mismos se constituyen en intelectuales de la resistencia frente al gobierno y desarrollan mecanismos de combate ideológico (como Radio Progreso); desarrollan actividades para fortalecer la articulación del empresariado a nivel nacional para constituir un bloque unificado de reacción frente a la inestabilidad social y a las amenazas contra la integridad de sus miembros; constituyen comités que, dentro de sus objetivos, contienen la promoción de los principios de la libertad de empresa y los derechos de propiedad, etc. En este contexto un líder empresarial va a sobresalir: Adalberto Violand, quien

(...) se acercó a otros sectores de actividad que no pertenecían a la CEPB, pero eran empresariales, tenían inversiones y empleaban asalariados, aunque la parte patronal era de esencia popular, como los abarroteristas, los panaderos o los temporales. (A ojos de Violand) Ellos se sentían igualmente disgustados por los acontecimientos en el país y se expresaron conformes en pactar mutua protección con la Confederación, pues definitivamente compartían principios de libertad empresarial, anisaban la paz social y rechazaban ideas proclives al comunismo (Sanjinés 2004 T1,240)

De acuerdo a Sanjinés, quien cita al, por ese tiempo, vicepresidente de la CEPB y miembro de la Asociación de Mineros Medianos, y luego asesor político del gobierno de Banzer:

(...) el gobierno militar del Gral. Torres amenazaba con instituir en el país otro sistema político y económico extraño a los bolivianos y eso hizo que todo el sector privado se pueda aunar en torno a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Se debe destacar que en ese tiempo, siendo yo vicepresidente de la confederación, se afiliaron los panaderos, también los pequeños industriales, en defensa de la libertad de producir en una actitud muy valiente, muy heroica que asumió la CEPB (Sanjinés 2004 T1, 242)

Junto a estos mecanismos de organización, de ampliación de las bases sociales e ideológicas del empresariado, militares (dentro de los cuales estaba Hugo Banzer), políticos del MNR (orientados por Paz Estenssoro), de FSB, preparan un segundo intento de golpe de Estado en contra del General Juan José Torres. El golpe se organiza desde Santa Cruz, a donde ha llegado clandestinamente Hugo Banzer, pero tiene apoyos en Tarija, Cochabamba, La Paz, Trinidad, Potosí, Sucre, entre otros lugares del país. Juan José Torres está acosado, pero tiene respaldos de la COB, que piden armas para defender al gobierno, pero no logran este cometido (Sanjinés 2004 T1, 245-248). A pesar de estos apoyos, el ejército se divide y buena parte de los regimientos termina apoyando el golpe de Estado liderado por Banzer y agenciado por líderes empresariales y de algunos partidos políticos. Éste segundo intento de golpe, finalmente tiene éxito. Los empresarios han apoyado decididamente (logística,

organizativa e ideológicamente) este proceso y Hugo Banzer toma el poder el 22 de septiembre de 1971 (Burbano de Lara 2012, 68).

A partir del momento en que Hugo Banzer asume el gobierno, la represión contra los movimientos sociales y populares no se hace esperar. Durante su gobierno son asesinadas 200 personas y obligadas al exilio alrededor de 20000 (Dunkerley 2003, 259 Citado por Burbano de Lara 2012, 69). El bloque dominante, que había articulado a empresarios, políticos de distintas facciones y militares de derecha había triunfado. Este triunfo significó para la empresa privada la continuidad de incentivos, tales como créditos a fondo perdido, exenciones de impuestos, entre otros. Esto no significó que los empresarios no criticaran al gobierno. Los primeros que cuestionan al gobierno son precisamente los miembros de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, quienes, la mayor parte del mandato del dictador, se vieron beneficiados económica y políticamente (Mansilla 1994: 63) La CEPB también hará críticas al gobierno acusándolo de “estatista”.

En este marco, las élites se dedican a hacer negocios, pero no se incrementa la productividad de la economía nacional. El contexto internacional es muy propicio para los empresarios bolivianos; los precios de los productos de exportación bolivianos gozan de un repunte importante; la minería mediana crece considerablemente, los préstamos internacionales, particularmente provenientes de la banca privada internacional llegan a “manos llenas” y el gobierno los canaliza al sector privado, pero este no invierte; incrementa sus utilidades, pero a través de la importación y el acopio de los recursos que llegan desde el exterior.

Es importante, de acuerdo con lo anterior, detallar un poco cómo el gobierno de Hugo Banzer, lejos de promover un crecimiento económico auto sostenido, contribuyó al enriquecimiento de empresarios buscadores de rentas. Así, lo que significó el gobierno de Hugo Banzer, que fue apoyado por empresarios del oriente, la CEPB, el gobierno de Estados Unidos, el MNR de Paz Estenssoro y la Falange Socialista, evidencia esta orientación de las élites, lo que a la postre, en un escenario internacional conduce a la quiebra de la economía boliviana entre los años 1978-1984.

Andreas Tsolakakis, argumenta al respecto que el gobierno de Banzer encarnó las contradicciones dentro del capitalismo de Estado: los ingresos por exportaciones fueron usados (ineficientemente) para sostener la emergencia y consolidación de tres fracciones de capitalistas nacionales: un sector productivo, particularmente minero y agropecuario; un sector financiero, (se destaca el hecho de que los más importantes bancos privados bolivianos

fueron establecidos entre los años 60 y 70 en La Paz y Santa Cruz) y, finalmente, un sector comercial. Junto con estos, se fortaleció una clase media vinculada con la burocracia estatal y las fuerzas armadas que se apropiaron de parte de los rendimientos obtenidos por Estado boliviano por la vía del endeudamiento externo, y de los altos precios de los productos de exportación.

En el primer caso, el gobierno de Banzer fortaleció a los mineros, promovió la diversificación y expansión de los agro empresarios en el oriente y estableció condiciones muy favorables para la inversión extranjera directa con un régimen ultraliberal. Todo esto, sustentado en un uso terrorista de la fuerza y la sistemática represión de los trabajadores y movimientos populares (Tsolakis, 2009: 106, Burbano de Lara, 2012: 70, Tapia, 2008: 28).

La evidencia de este proceso de enriquecimiento privado favorecido por el gobierno dictatorial de Hugo Banzer se puede observar cuando vemos que, lejos de usar los recursos que el gobierno canaliza para el sector privado, las inversiones disminuyen y se incrementa la fuga de capitales, tal como ilustra Andreas Tsolakis (2009: 109) en el siguiente cuadro:

Tabla 3.1. Fuga de Capitales durante el gobierno de Banzer y la transición a la democracia

Año	Monto en millones de dólares	Porcentaje del PIB
1973	29.6	1.1
1974	57.8	
1975	30.1	0.9
1976	119.3	
1977	297	7.5
1978	163.8	
1979	48	
1980	248.8	6.4
1981	347.2	
1981-1983	318.6	2.6
Total	1660	

Fuente: Tsolakis, 2009 (109), con información de Lavaud (1991:249)

De este modo, durante el gobierno de Banzer, pese a la “estabilidad política” impuesta violentamente por el dictador, la fuga de capitales sobrepasó el 60% del valor de la deuda acumulada durante el mismo periodo, esto es, entre 1971 y 1978 (proceso que se extiende hasta, 1981, en el contexto de los gobiernos militares que sucedieron a Banzer). Llama la atención de estas cifras el hecho de que la fuga de capitales se incrementa precisamente cuando se produce la ruptura entre el dictador y sus aliados vinculados al MNR o FSB, a partir de 1975. De este modo, el endeudamiento del gobierno cuya finalidad era la inversión pública, así como la promoción de la inversión privada, por la vía de otorgar créditos “a fondo

perdido”, terminó favoreciendo la acumulación de capital privado y las inversiones de los capitalistas bolivianos, pero fuera del país. El gobierno se endeuda, le "presta" a los capitalistas nacionales y estos sacan el dinero del país, pues asumen que el clima de inversión no es el mejor (Tsolakis, 2009: 108, López, 1997)

En la gestión económica del gobierno de Hugo Banzer y en el modo en que operan las élites empresariales estaría la explicación de la crisis económica que sobrevino sobre Bolivia entre 1978 y 1984. Éste gobierno sobre endeudó al país, no atrajo inversión extranjera directa nueva (de hecho, esta decreció considerablemente con su mandato) y facilitó la fuga de capitales con un sistema que no hizo el menor esfuerzo por controlar este fenómeno.

En relación con la inversión Extranjera, es Eduardo Arze Cuadros (2002: 282), quien nos presenta cómo esta decreció considerablemente durante el gobierno de Banzer. Así, en el siguiente cuadro se detalla la evolución de la entrada de capitales a Bolivia por la vía de Inversión Extranjera:

Tabla 3.2. Bolivia. Entrada neta de capitales privados a corto plazo 1970-1977

AÑO	VALOR
1970	1.0
1971	-12.8
1972	-8.4
1973	-6.0
1974	-46.9
1975	-19.9
1976	-35.6
1977	-121.1
Total 1970 – 1977	-251.7

Fuente: BID. Progreso Económico y Social en América Latina, Washington, 1979.

El panorama es aún peor cuando se hace una revisión de la evolución de la deuda pública en relación con el PIB, boliviano. De ahí que no sea aventurado decir que es en el desempeño económico de este gobierno y en la importante fuga de capitales agenciada por las élites empresariales que se explica la debacle económica boliviana de finales de los años 70 y comienzos de los años 80 y no en las políticas aplicadas por el gobierno de izquierda de la UDP (1982-1984). Para ilustrar esto, traemos los datos recopilados, por Arze Cuadros. En estos se puede ver cómo, entre 1971, cuando comienza el gobierno dictatorial de Hugo Banzer se pasa de una deuda de 591.200.000 dólares, que representaban un 56.57% del PIB, a una deuda de 3.498.550.000 dólares, que representaron la absurda proporción del 109.04% del PIB.

De este modo, lo que deja Banzer es una economía deficitaria, que difícilmente podría recomponerse en los gobiernos posteriores, tanto de militares, como de civiles. Más si se tiene en cuenta que el ambiente internacional es de crisis generalizada, caracterizada por la cesación de pagos de la deuda en varios países de América Latina; congelamiento de préstamos internacionales, y baja significativa de los precios de los productos exportables de los países periféricos.

Tabla 3.3. Bolivia. Evolución de la Deuda Pública Externa 1951-1979

(En millones de dólares a precios corrientes)			
AÑO	DEUDA	PIB	RELACIÓN
1952	52.800.000	387.000.000	13.65
1956	114.300.000	354.000.000	32.29
1964	262.000.000	448.000.000	58.49
1971	591.200.000	1.045.000.000	56.57
1977	2.441.600.000	3.050.000.000	80.05
1979	3.498.550.000	3.208.400.000	109.04

Fuente: En base a datos de CEPAL, James Maltby y Carter Goodrich, Bolivia. Beyond the Revolution. Estrategia Nacional de Desarrollo 1971 – 1991. Banco Central de Bolivia, Memoria Anual, Gestión 1977 y 1979.

La dependencia de la economía externa de este modo se incrementa con el gobierno de Banzer. El clima general de inversiones, celebrado por las elites empresariales (Sanjinés, 2004, T.1: 249-259), no conduce a un mejoramiento de la estructura productiva ni al incremento de inversiones por parte de estas, sino todo lo contrario. Su dependencia se profundiza frente al mercado internacional, en el contexto de un mercado externo cada vez más volátil. La síntesis de todo este proceso podría ser la siguiente: El gobierno de Hugo Banzer “pacifica” al país, reprimiendo duramente a los movimientos obreros y campesinos e ilegalizando además a partidos y organizaciones políticas opositoras; incrementa la inversión pública, mediante la deuda externa y contando con las utilidades del incremento de los ingresos estatales debido a los buenos precios para los productos de exportación; facilita créditos sin garantías a las élites empresariales para promover el desarrollo industrial y estas, lejos de invertir en Bolivia, sacan el dinero a otros países. La mayor parte de estas medidas son un fracaso. Los cambios en la estructura productiva boliviana son de los más bajos en América Latina en este periodo (López, 1997)

Como respuesta a los beneficios otorgados por el gobierno dictatorial, las elites, invierten menos, compran más, para sí mismas, y para las clases medias; favorecen el consumo suntuario, pero no le apuntan al desarrollo industrial del país (López, 1997). Como si fuera poco, en este periodo crece la economía del narcotráfico, aumenta la informalidad y las elites sacan cada vez más dinero y descapitalizan al país. Por otro lado, los ingresos de los

trabajadores se congelan, disminuyen los salarios reales y en general, las elites se enriquecen, mientras el grueso de la población empeora su situación económica. Para completar el cuadro, el gobierno está cada vez más endeudado y con un déficit que llega a ser insostenible. La herencia a los siguientes gobiernos no podía ser peor. Con una crisis económica internacional a bordo y disminución significativa de los precios de los productos exportables, no había una fuente de financiamiento distinta a la expansión monetaria, con las nefastas consecuencias que esto trajo consigo. Primero vino la hiperinflación y luego la quiebra del país. De este modo, el gobierno de la UDP, liderado por Hernán Siles Zuazo, será la víctima final, del irresponsable gobierno de los militares de derecha, pero, sobre todo, del gobierno de Hugo Banzer. Este es, precisamente el escenario en el que se verán legitimadas las políticas neoliberales en Bolivia y las frases lapidarias de algunos de los líderes más importantes del empresariado boliviano, así como de los políticos del MNR y ADN, principalmente.

Además de lo anterior, el enriquecimiento de las elites, a costa del empobrecimiento generalizado y de la bancarrota del Estado a comienzos de los años 80, la reforma agraria promovida por los gobiernos nacionalistas para favorecer a los pequeños productores, se revierte durante el gobierno de Banzer. Arze Cuadros, citando a Miguel Urioste (1987), muestra en este sentido como:

Los distintos gobiernos del MNR, desde 1952 hasta 1964, titularon más de 6 millones de hectáreas (19,4%). El gobierno del general Rene Barrientos (1964-1969) tituló casi 4 millones de hectáreas (12.5%). En ambos casos debe destacarse que, aunque hubo muchas excepciones, los beneficiarios de estas titulaciones fueron generalmente los campesinos minifundistas. En cambio, a partir de 1971, año en que se inició la dictadura del general Banzer, hasta 1978, en que concluyó, se tituló el 57% del total de la superficie afectada del país (17.833.000 hectáreas) Lo notable en este último caso es el destino de estas tierras: el 90% corresponden a los departamentos de Santa Cruz y Beni, y los beneficiarios principales son las empresas grandes y medianas. Hasta ahora, ni el 7% de esas tierras están trabajadas en la agricultura o ganadería... existe una notable coincidencia entre los procesos dictatoriales y el resurgimiento del neolatifundismo (Arze, 2002: 292-293)

De esta manera, aparte de favorecer a las élites en el proceso de acumulación y concentración del capital, que no contribuye al impulso de las inversiones ni de la productividad, el gobierno de Banzer favorece la concentración de la tierra, particularmente en las regiones orientales (Santa Cruz y Beni) donde se fortalece aún más el latifundio. Además de esto, la presión tributaria se mantuvo considerablemente baja en el periodo (Arze, 2002: 310, Sandoval et al, 2002).

Como se ha mostrado atrás, el financiamiento de inversión nacional obedeció, sobre todo en los gobiernos militares al contrato de créditos con el sector privado transnacional; esto implicó, la transferencia de recursos del campo a la ciudad y del sector público al privado, fortaleciendo con esto la concentración del ingreso:

... datos sólo disponibles para los cuatro años de 1975 a 1978 muestran que la proporción de ahorro interno generado por el sector privado disminuyó, correspondientemente, de 81% en 1975 a 69% en 1977 y a 55% en 1978. Tal es el trágico desenlace de la irracional política de endeudamiento público externo del periodo 1971-1978 con que se abre el difícil periodo de transición económica y política 1979-1985 (Arze, 2002: 312):

En este escenario, no es casual que, pese a algunas críticas poco creíbles de las élites empresariales, el único gobierno militar que es juzgado como positivo por aquellas, sea el Hugo Banzer (1971-1978); gobierno en el que se produce un importante repunte de la economía boliviana, pero que a la postre no resulta suficiente y tras su “renuncia”, vuelve el declive económico y la inestabilidad política (Sanjinés, 2004, T1). Esta imagen positiva posterior, no carece, por supuesto, de fundamento, dado el importante enriquecimiento de las élites económicas en perjuicio de las mayorías bolivianas. El poder estructural de las mismas se ve considerablemente fortalecido, no obstante, el hecho de que, en lo fundamental, continúan con un poder todavía subordinado a los dictámenes del gobierno de turno. Así, en la medida en que la dictadura busca su autonomización frente a los distintos actores sociales y políticos, las élites empresariales asumen distancia y empiezan a pedir la “vuelta” de las reglas democráticas. Particularmente a partir de 1975, las demandas por democratización son cada vez más insistentes de parte de las élites empresariales lideradas por la CEBP, pese a estar insertas en prácticas de prebendalismo y patrimonialismo (Mansilla, 1994: 70).

Son así cada vez más frecuentes las manifestaciones de recelo y/o oposición al estatismo de derecha de Hugo Banzer, de parte de las élites empresariales. Estas empiezan un proceso de auto reconocimiento como actores protagónicos de la política y la economía boliviana. Proceso que implicó el fortalecimiento del componente ideológico-intelectual de su accionar frente a la sociedad boliviana, lo que llevó, particularmente a la CEPB a impulsar estudios sobre la economía boliviana, así como a “revisar” la continuidad de la dictadura de Banzer, en medio de una economía que mostraba signos de agotamiento (Sanjinés, 2004, T1: 319, Mansilla, 1994: 86). Es importante destacar que resultado de la presión de las élites económicas, a inicios de 1977, Banzer convoca a elecciones y promueve el “retorno a la democracia”. En este contexto

(...) la CEPB anunció un 'nuevo Plan Nacional' que postulaba el alejamiento de Bolivia respecto al Pacto Andino, la reducción de la actividad económica del Estado y la demanda de mayor libertad para el desenvolvimiento de la empresa privada; de igual relevancia es el orgullo anunciado de la CEPB -aunque ya conocido *in nuce*, lanzado empero por vez primera de manera enfática y directa a las instancias gubernamentales- de que el Estado en cuanto empresario habría resultado un genuino fracaso: controlaría por medio de las empresas estatales el 70% de la actividad económica nacional, pero contribuiría únicamente con el 25% de la masa impositiva global. El peso tributario recaería, después de todo, sobre la empresa privada, que sería en el fondo la instancia que financiaría la supervivencia del gobierno y de la nación (...) (Mansilla, 1994: 83).

Las élites, de este modo, que han sido beneficiarias tanto de las políticas nacionalistas del estatismo del nacionalismo, como de estatismo de derecha de Hugo Banzer, refuerzan su poder estructural y demandan creciente poder de intervenir en la economía y la reducción del papel del Estado en la Economía. A finales de los años 70, así, son cada vez más conscientes de este poder y desde este es que demandan, como una necesidad imperiosa el retorno a la democracia y el establecimiento de una economía de libre mercado (Sanjinés, 2004, T1: 329).

Tras la renuncia de Hugo Banzer y tras la victoria de la UDP en las elecciones, como se sabe, el candidato de ésta última coalición no logra asumir el poder, debido a las serias irregularidades del proceso; un proceso en el que el candidato de Banzer, Juan Pereda termina por declararse vencedor y desconoce el proceso electoral. Pereda, sin embargo no dura más de tres meses en el poder y, es remplazado por el General David Padilla, quien tampoco dura mucho en el poder. El caos político se generaliza y la CEPB hace llamados al diálogo nacional. A finales de 1978, publica un documento en el que llama al respaldo al proceso de democratización de Bolivia; al establecimiento de una democracia que “garantice la libre iniciativa y la propiedad privada en función del interés colectivo”. Así mismo, “Destaca el papel protagónico e insustituible del sector privado en el desarrollo económico y social del país generando riqueza con justicia social; plantea la necesidad de un clima de estabilidad política, económica y social que garantice la inversión privada”, factor que considera “incuestionable para generar desarrollo económico autosostenido que conlleve al bienestar general”

En ésta misma tónica,

(...) destaca que la empresa privada no se encuentra comprometida con ningún gobierno, por no ser transitoria ni producto de circunstancias coyunturales, siendo su vigencia permanente en el tiempo y en el espacio y parte indisoluble de la esencia misma del país... Reafirma la

unidad de todo el empresariado privado” y “proponga por un permanente diálogo con todos los sectores de la nación a objeto de lograr concertadamente soluciones positivas en un clima de respeto, superando intereses personales o de grupo en aras de la grandeza de la patria y el bienestar colectivo Concluye manifestando que su único compromiso es con el país y con el pueblo. (Sanjinés, 2004, T1:333-334).

Entre 1978 y 1982, fecha esta última en la que se pone fin a los gobiernos de facto y se reestablece la democracia electoral, la situación económica empeora cada día más. Una situación que agudiza entre 1982 y 1985, bajo el gobierno de quien había ganado las elecciones de 1978 y 1979, bajo la coalición de la UDP. En un marco de intensa actividad política, las fuerzas de izquierda experimentan un profundo declive generado, sobre todo, por la insostenibilidad de la economía boliviana resultado, a su vez, de la voraz apropiación privada de recursos que se produjo en el gobierno de Hugo Banzer y que contó con un clima favorable para los negocios de exportación y para el endeudamiento público.

De este modo, quienes serán beneficiarios de la crisis y quienes harán una gestión cada vez más audaz para ganar adeptos en nombre de la “democracia y el mercado”, serán las élites económicas lideradas por la CEPB. Estas impulsan, desde los gobiernos militares que sustituyen a Hugo Banzer lo que denominaron un “Gran Acuerdo Nacional”, que buscaba articular a todas las fuerzas políticas, incluyendo a antiguos enemigos como el líder de la COB, Juan Lechin, quien, a decir de Marcelo Pérez Monasterios, por aquel entonces presidente de la CEPB, se mostraba de acuerdo con los postulados de esta organización en privado, pero despotricaba de la misma en público. (Sanjinés, 2004, T1: 339-341)

Así, la izquierda que logra el poder por las vías electorales no tiene un margen de maniobra mínimo para mantener a flote una economía cada vez más deficitaria e ingobernable. El gran hueco dejado por los gobiernos militares, pero, particularmente del gobierno de Banzer y sus sucesores, no permitía alternativas distintas a un auto sostenimiento por la vía de políticas monetarias que incrementaban la inflación día a día. Las élites, son cada vez más conscientes de su poder económico y de unos actores estatales incapaces de controlar tanto la economía como la “paz social”.

Así, los años que van de 1978 a 1985, no dejarán otra salida que un “ajuste” estructural de inmensas proporciones y serán las élites empresariales las que articularán a las fuerzas políticas del MNR y ADN, principalmente, para el impulso de una Nueva Política Económica (Mansilla, 1994; Sanjinés, 2004, T1). La alternativa de un movimiento contrahegemónico, por más que los discursos y el movimiento popular favoreciera a los movimientos de izquierda

(como se ve en el hecho del triunfo de la UDP), no tiene cabida. No hay soporte estructural para sostener alternativas al neoliberalismo.

Por otro lado, es necesario considerar cómo la sociedad boliviana se ha modificado considerablemente y el lugar de la población urbana es cada día más importante. Así mismo, hay una creciente participación popular, indígena, campesina y obrera en una lucha abierta por buscar alternativas de gobierno. Sin embargo, las que más logran su articulación son las élites económicas y políticas, quienes contarán con poder estructural creciente y una presencia discursiva mediática, cada vez más protagónica, bajo el liderazgo de la CEPB (Sanjinés, 2004: T1).

Dentro de este marco, pese a la importancia de figuras emblemáticas como Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, máximos líderes del MNR, o de Jaime Paz Zamora, máximo líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o el mismo Hugo Banzer, dictador y fundador del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), el tránsito a la democracia se realizó con base en el consenso liderado por las élites empresariales, sobre la necesidad compartida por estos líderes, por encima de las diferencias personales y partidistas, o incluso en contra de estas, de reorientar la economía boliviana e impulsar políticas económicas de corte neoliberal. Este consenso sobre “lo fundamental”, dio pie a lo que se conoce como “democracia pactada” (Pachano, 2006, Mayorga, 2004; Deheza, 2006); una democracia, dentro de la cual el neoliberalismo, al amparo de los más importantes empresarios bolivianos y de sus organizaciones, se asumió como la política que sacaría al país de la profunda crisis económica en la que se encontraba y lo encaminaría al prometido desarrollo económico y social.

3.2. El caso ecuatoriano. Desarrollismo elitista y revolución nacionalista frustrada

A diferencia del caso boliviano, en Ecuador, no se produce una revolución social de la envergadura y profundidad de la boliviana en los años 50, lo que va a dificultar y/o alterar la emergencia del pueblo como actor político protagónico y a establecer relaciones distintas entre los actores que pugnan por el poder de Estado. Entre estos las élites económicas y sus organizaciones gremiales. Como en Bolivia, las décadas de los 50, 60 y 70, se caracterizan por ir y venir entre distintas orientaciones políticas que carecen de coherencia ideológica, así como por políticas económicas en general estado-céntricas

Si bien es cierto tanto Ecuador como Bolivia viven en este periodo el vaivén entre dictadura y democracia, en el primer caso, transformaciones sociales y políticas como las experimentadas en Bolivia en los años 50, van a tener que esperar al establecimiento de una dictadura militar

“progresista” o nacionalista, a mediados de los años 70, aunque con profundas diferencias en intensidad y profundidad. En este momento se impulsan también reformas económicas y sociales que le apuntan a modernizar el comportamiento político de los ecuatorianos, abriendo espacios de participación política a una gran cantidad de grupos, tradicionalmente excluidos y, reconfigurando las relaciones con la empresa privada y con las élites económicas en general.

En el caso ecuatoriano, el campo político estará caracterizado por una más intensa fragmentación y por el desarrollo de estructuras partidistas mucho más débiles que las bolivianas. Esto pese, a que estas últimas no gozan de una meritoria estabilidad en el largo plazo (Conaghan, 1995, Pachano, 2007, Mayorga, 2003, 2009, 2010). Como en el caso boliviano, en Ecuador algunos intentos de reforma política y económica adelantados en este periodo, buscaron superar las formas oligárquicas de ejercicio del poder, tanto dentro del Estado como fuera del mismo. Un proceso que se había iniciado ya a finales del siglo XIX con la revolución liberal que contribuyó, aunque limitadamente, al surgimiento de nuevos actores políticos de clase media urbana (Cueva, 1973; Del Campo, 1978; 1981; Hurtado, 1981; Burbano de Lara, 2014).

Así, el surgimiento de nuevos actores políticos que denuncian el monopolio del poder político por parte de unas élites plutocráticas oligárquicas tendrá un importante desarrollo en los años 20. A mediados de esta década se produjo lo que se conoce en la historiografía ecuatoriana como la *Revolución Juliana*, una insurrección liderada por militares de rango medio en contra de un gobierno que consideran corrupto y antipopular. Con esta “revolución” se intentó modificar algunas estructuras estatales y se cuestiona el poder de las élites bancarias, particularmente de Guayaquil, al crear el Banco Central y monopolizar el Estado ecuatoriano la política monetaria y cambiaria que estaba en manos de un banco privado.

Sin embargo, para impulsar y aplicar estas reformas, los militares de la *revolución juliana*, tienen que apoyarse en las oligarquías de la costa y la sierra que habían interpelado, recibiendo préstamos de estas para sostener a un Estado famélico y con serias limitaciones estructurales para ser constituido en agente central de integración social, política y económica (Cueva, 1973, Núñez, 1985; Hurtado, 1981, Del Campo, 1981). De este modo, el poder estructural de las élites financieras y comerciales del Ecuador, particularmente asentado en la agricultura de exportación, les sirve a estas élites para revertir la *revolución*, pero no de establecer un régimen político y una economía estables en el mediano y largo plazo. Así, tras los 6 años que duran los gobiernos “julianos”, se abre en el Ecuador un periodo en el que, en

veinte años, 27 presidentes ocupan el gobierno (Burbano de Lara, 2014: 83). La democracia es la excepción entre 1931 y 1948.

De este modo, sin embargo, en este periodo se produce lo que varios historiadores ecuatorianos han calificado como una crisis de la hegemonía oligárquica que no se resuelve sino mediante vías populistas o caudillistas, debido a la fragilidad de las estructuras políticas y, entre estas, aquellas de carácter popular (Del Campo, 1978; 1981; Hurtado, 1981, Cueva, 1973, Núñez, 1985). Así, con en el caso boliviano, el dominio oligárquico es cuestionado desde el punto de vista ideológico, entre los años 20 y 30. En este periodo, en las artes, la literatura y la poesía surgen críticas a formas racistas y coloniales de dominación. Para Osvaldo Hurtado, por ejemplo:

Las nuevas ideas se expresan en el campo de la literatura que, a través de la novela social, denuncia la explotación del indio, del montubio, del negro, del mulato, del cholo, etc., Algo parecido sucede con la poesía y con las artes plásticas que sufren una revolución. Luego tenemos los estudios indigenistas y los ensayos sociológicos; después los análisis de los economistas principalmente contenidos en las publicaciones de la Junta Nacional de Planificación y del Banco Central. A todo ello hay que sumar la aparición de ciertos periódicos y revistas comprometidos (Hurtado, 1981:174-175).

Ahora bien, a diferencia del caso boliviano, en Ecuador no se constituirán fuerzas políticas capaces de disputar el poder de las élites políticas y económicas tradicionales y establecer una revolución de las dimensiones de la boliviana de 1952. En este caso, serán los militares de rango medio, los encargados de intentar reformas que chocarán pronto con la resistencia y oposición de las clases dominantes. El poder del Estado no cuenta con un escenario económico favorable y de hecho el músculo financiero privado es capaz de frenar los más importantes intentos de reforma. Las fuerzas políticas de izquierda no tendrán la capacidad de movilizar a amplios sectores sociales y darles fuerza a procesos profundos de transformación política y económica, no sólo por elementos estructurales, como la pervivencia de una economía atrasada, rural y excluyente de las mayorías, sino por las intensas divisiones en su interior (Hurtado, 1981:175, Núñez, 1985).

Así, es sólo a partir de finales de los años 40 y, particularmente a partir de 1948, momento a partir del cual se logra una relativa estabilidad política y económica, resultado de un pacto entre élites serranas y costeñas, que se logra un importante despegue económico y un periodo de considerable estabilidad política (Pachano, 2007, De la Torre, 2000, Montufar, 2000, Cueva, 1973). La lógica de que las élites económicas tradicionales por sí mismas no

impulsarían procesos de modernización llevó a algunos sectores de las élites políticas y militares a impulsar un modelo de crecimiento desde adentro que, a partir de sus objetivos, buscaba constituir una burguesía modernizante, que sustentara los procesos de industrialización que se consideraban necesarios para una más sólida inserción en el mercado mundial y para un más estable desarrollo del capitalismo (Pachano, 2007, Montufar, 2000, Burbano, 2006, 2012,). No obstante, estos intentos van a chocar con formas de ejercicio del poder intensamente personalistas. De ahí la importantísima participación del líder político José María Velasco Ibarra en los procesos políticos ecuatorianos desde los años 30 hasta los años 70 (Cueva, 1973, Del Campo, 1981, Montufar, 2000, De la Torre, 2000).

Ahora bien, para entender un poco mejor este proceso de establecimiento de orientaciones políticas y económicas de carácter desarrollista en el Ecuador a partir de los años 50, es importante definir una periodización de las relaciones entre las élites económicas y los actores estatales, antes del establecimiento de la hegemonía de las orientaciones neoliberales en la política y la economía ecuatoriana.

Así, el establecimiento de políticas en las que el Estado jugaría un papel central en el desarrollo económico y político del Ecuador, sería el resultado de un proceso en el que la inestabilidad política y el populismo se convierten en una amenaza para los intereses de las élites económicas y políticas. La inestabilidad política llega a extremos insostenibles entre 1931 y 1947, lo que conduce a la configuración de un pacto entre élites económicas y políticas. Estas buscan frenar el avance del populismo velasquista y la intromisión de los militares en asuntos políticos y económicos, a partir del control del aparato estatal.

De 1948 y hasta 1960, se logra una estabilidad política y un crecimiento económico sin precedentes en el Ecuador, en buena medida gracias al *boom* del banano (Moncada, 1974, Burbano de Lara, 2014). A partir de este último año se abre un nuevo proceso de inestabilidad política y económica, en la que los militares y el populismo se suceden en el control del poder ejecutivo del Estado. La crisis oligárquica no se resuelve aún. Entre 1960 y 1978, se establecen en el Ecuador dictaduras militares que son, a veces impulsadas, a veces enfrentadas por las élites económicas, dependiendo de los réditos coyunturales que estas dictaduras puedan ofrecerles, o la amenaza, también coyuntural, que puedan significar. A partir de 1978, comienza el “segundo” retorno a la democracia en Ecuador y con esta el impulso de medidas antiestatista y neoliberales. Estas, como se verá, no se caracterizaron por la radicalidad de las reformas neoliberales bolivianas, donde las medidas de choque fueron mucho más frontales,

sino por el gradualismo y la ambigüedad (Pachano, 2007, 2010; Montufar, 2000; De la Torre, 2000, Hey and Klak, 1999)

Haciendo un análisis detallado del primer periodo, podemos cómo en este contexto se pudo establecer un periodo de estabilidad política y económica y cómo, en éste momento, operaron las relaciones entre las élites económicas y Estado. En esta dirección, para Esteban del Campo, la estabilidad política de 1948 a 1960, estaría mediada por el acuerdo entre élites económicas de la costa y la sierra que vieron en la inestabilidad del periodo precedente una amenaza para avanzar en el proceso de acumulación de capital. Entre 1948 y 1960, las exportaciones de Banano se incrementan considerablemente- Estas habrían pasado de 13.800 toneladas en 1944 “a 492.800 toneladas en 1952 y 855.500 en 1960-, el volumen monetario se había incrementado de 22.8 millones a 102.6 millones en 1960, y los sectores burgueses más avanzados encuentran las condiciones favorables para intentar un modelo de racionalización económica y política, presidido por el gobierno de Galo Plaza”. (Del Campo, 1978: 1117)

Desde la lectura de Del Campo (1978) y de Cueva (1973), puede verse que se establecen las condiciones para un pacto entre las élites que buscaba asegurar la estabilidad política como base para mantener o favorecer el proceso de acumulación privada de capital, por la vía de exportación de banano, que en este momento tiene una demanda creciente debido a la crisis de la producción del Centro América (Mayoral, 2009: 121). La modernización del Estado en la lógica dominante en este momento en América Latina, se entiende como una tarea imperiosa y esto convocó a las élites económicas que vieron (al menos temporalmente) que el populismo y las dictaduras militares no contribuían, sino que obstruían este proceso. Apoyaron así el establecimiento de una democracia electoral que les resultaba beneficiosa, pues aseguraba las bases, bajo su dominio, para el crecimiento de las exportaciones y la apertura al mercado externo. Este es un periodo, además, en el que las élites económicas vinculadas a la exportación encuentran también condiciones favorables para invertir en una incipiente industrialización orientada a la satisfacción del creciente mercado interno. Estas élites, ven en los gobiernos democráticos, conducidos por miembros de sus propias estructuras e poder, la oportunidad de crecer, pero además, el escenario para la participación directa en la toma de decisiones políticas dentro del Estado (Del Campo, 1978: 1117; Verduga, 1981: 62-53).

De este modo, el modelo de económico que se adopta en los años 50 en el Ecuador, a ojos de uno de los gestores de la Junta de Planificación (José Moncada Sánchez), que se constituye formalmente para racionalizar el proceso de desarrollo económico del Ecuador en 1954, está

caracterizado, más por la búsqueda del crecimiento económico, que por el desarrollo integral de la economía y la sociedad ecuatorianas. Lo que se impulsa, desde el desarrollismo ecuatoriano, es favorecer la economía exportadora y, a partir de esta, de la re-inversión de excedentes, en un proceso de industrialización para el mercado interno, con la ayuda estatal, consistente en el otorgamiento de créditos a las élites económicas y en la reducción de impuestos y aranceles para las exportaciones e importaciones de bienes de capital. Este proceso de financiación estatal hay que aclarar, había empezado ya a mediados de los años 40, cuando se incrementó la inversión pública en infraestructura, sobre todo para favorecer a los agro-industriales vinculados a la exportación. Durante ésta década se produjo un incremento de créditos a los exportadores que pasaron de 330 mil sucres en 1944 a “ (...)más de 17 millones de sucres entre 1949 y 1950; este esfuerzo crediticio del Estado para fomentar la producción agrícola de exportación fue acompañado de un plan de colonización y de inversión en infraestructura, que dinamizaron considerablemente la región de la Costa” (Fernández, 1976: sp). Así, como en el caso boliviano, incentivos tributarios, créditos en condiciones favorables tanto para el desarrollo industrial y, sobre todo para el sector agropecuario exportador; construcción de infraestructura; reducción de aranceles para la exportación, entre otros mecanismos, se convierten en herramientas que los gobiernos de los años 50, articulados a los intereses de las élites económicas, usan para favorecer la acumulación privada de capital.

Sin embargo, en este proceso el papel de la empresa privada, a diferencia del caso boliviano, no ocuparía un lugar subsidiario o subordinado, sino que los empresarios son los actores centrales y protagónico de las reformas de los años 50 (Moncada, 1974). En ésta misma dirección, argumenta Fernández (1976: sp):

El Estado, en general, aparece en esta etapa como un simple dispositivo incentivador de las actividades económicas del capital privado, a las que favorece, creando y manteniendo las condiciones, tanto materiales, como sociales, necesarias para su reproducción. La intervención del Estado en la economía de ninguna manera es para controlar o regular procesos productivos en función de una visión global del desarrollo o proponiéndose tareas de consolidación de los circuitos de acumulación interna; la intervención se produce en el plano de la inversión en favor del sector externo de la economía, es decir, la dependencia del Estado del ingreso de divisas de las exportaciones lo hace económicamente débil, y en cuanto a política lo coloca al servicio de la fracción ligada a esos intereses.

El papel del Estado como “simple incentivador” de la acumulación privada, fue el resultado del acuerdo entre las élites económicas que se produce a finales de los años 40; quienes, como

mencionamos antes, ocupan de manera directa el poder de Estado, a través de la delegación del poder ejecutivo en un importante banquero guayaquileño, Carlos Julio Arosemena Tola. Este banquero, en su corto mandato, sienta las bases para la ocupación del poder de Estado por parte de las élites económicas y con esto, una orientación de la economía en la que se establece un desarrollismo dominado y orientado por el capital privado. En este dominio oligárquico, se instrumentaliza al Estado para el desarrollo de la acumulación privada de capital, vía exportaciones y vía industrialización.⁴⁰

A Arosemena Tola, lo sucede el importante terrateniente serrano: Galo Plaza Lasso (1948-1952), quien da continuidad a las políticas de su antecesor, asignando al Estado un papel de promotor de la acumulación privada de capital, mediante la racionalización de los procesos productivos de exportación (Burbano de Lara 2014, 89-90; Fernández, 1976). De éste modo, son las élites económicas las protagonistas del periodo de democracia electoral que vive el Ecuador en los años 50 y, si bien es cierto la concepción del papel del Estado en el proceso económico están influenciadas por el desarrollismo de los años 50 (que implicaba la promoción de políticas de sustitución de importaciones y el desarrollo de la industria nacional), estas se preocupan, como quedó atrás, más por el crecimiento económico que por políticas redistributivas y de desarrollo social integral.

Así las cosas, las políticas desarrollistas de los años 50 se caracterizan en el Ecuador, como bien plantea José Moncada Sánchez, no por intentar cambiar el sistema, sino por buscar su adecuación a las necesidades de la industrialización y la sustitución de importaciones, con protagonismo de la empresa privada. De ahí que haga énfasis en el fortalecimiento de las exportaciones y menos en "las reformas a la estructura de tenencia de la tierra, el desarrollo rural, la estructura social y las instituciones". Esto es, se crea una orientación económica en la que faltó, a juicio de Moncada, "la presentación de acciones realmente concretas y viables capaces de desencadenar un proceso de cambio". Para Moncada, lo anterior no supone que no hubiese consciencia sobre los efectos sociales de la adecuación de la estructura social, a la promoción de las exportaciones y el favorecimiento del capital privado. Para la Junta de Planificación creada en 1954, en el gobierno de José María Velasco Ibarra (1952-1956), cuyos propósitos eran la racionalización de los proyectos y procesos económicos ecuatorianos,

⁴⁰ Las lecturas de estos autores contrastan con algunos trabajos contemporáneos, que afirman que desde los años 50 se le habría dado al Estado el papel protagónico en el impulso del desarrollo industrial. La evidencia que los mismos presentan tendería a afirmar un mayor protagonismo del sector privado que, de hecho, ocupa el Estado o está muy íntimamente vinculado a éste, permitiría afirmar que son más las élites económicas las encargadas de agenciar estas políticas que el mismo Estado. Para una lectura contemporánea ver: Martín-Mayoral (2009).

también era claro que "un modelo de desarrollo que solamente basara su confianza en el crecimiento de las exportaciones y en la continuación del proceso de sustitución de importaciones, era un modelo que significaba, en el fondo, propiciar una alta concentración del ingreso nacional o que, a su vez, implicaba mantener una alta cuota de desempleo y de estrangulamiento del mercado interno". Para matizar esto, el Plan Decenal de Desarrollo, elaborado por esta Junta "Ofrecía una orientación de política social que, en la práctica, no avanzó en su elaboración y mucho menos en su ejecución..." (Moncada 1974, sp).

En consecuencia, el desarrollismo ecuatoriano de los años 50, a diferencia de las políticas impulsadas por los gobiernos revolucionarios de Bolivia, carece del nacionalismo y de la ampliación de las capacidades del Estado en los ámbitos de la producción industrial, así como de políticas que profundizaran la democracia, por la vía de reformas políticas, sociales y económicas de carácter popular. Es más bien un desarrollismo volcado a favorecer la acumulación privada de capital, en el que el Estado contribuye financiera, fiscal y tributariamente, sin intervenir directamente en la producción económica y delegando la producción industrial a la iniciativa privada. De este modo, el pacto entre las élites económicas, logrado a finales de los años 40, edifica un modelo ecuatoriano de sustitución de importaciones en las que un sector privado de élite jugará el papel determinante. Las élites económicas logran beneficiarse de los altos precios de los productos de exportación y mantener el poder por tres periodos presidenciales consecutivos.

De acuerdo a lo anterior, se evidencian importantes diferencias entre el caso ecuatoriano y el boliviano. En este último, el Estado, si bien favorece al sector privado, promueve también la industrialización y la sustitución de importaciones en manos estatales; en el caso ecuatoriano se le da al sector privado un carácter más protagónico y se determina que el Estado actuaría, sólo en condiciones de excepcionalidad, como actor económico. Así, las relaciones entre élites económicas y Estado se caracterizan en este periodo, más por la primacía de los intereses del empresariado privado, en términos de acumulación privada de capital y diversificación de las inversiones (banca, industria, comercio de exportación e importación), que por la apertura de la democracia ecuatoriana. El carácter elitario del proceso de desarrollo económico ecuatoriano, se vería favorecido también, por la debilidad de las organizaciones sociales populares y de los partidos de izquierda y, por tanto, por la incapacidad de estos de impulsar proyectos políticos contrahegemónicos, frente al dominio de las élites oligárquicas y de las nuevas élites que se constituyen en el *boom* exportador del banano (Burbano de Lara, 2014; Núñez, 1985; Fernández, 1976; Maldonado, 1979; Fernández, 1976)

En tal sentido, la promoción del desarrollismo desde las élites económicas costeñas y serranas del Ecuador, que concentran el poder financiero, comercial e industrial, podría calificarse de liberal, desde el punto de vista económico, pero conservador, desde el punto de vista político. Unas políticas económicas liberales que desarrollaron instrumentos de planeación en los años 50, pero que no buscaban el cambio de las estructuras económicas ni políticas. De este modo, el crecimiento económico de los años 50 que, desde el punto de vista histórico, no tiene precedentes en la historia de la sociedad ecuatoriana, no se revertirá en mejores niveles de desarrollo social y económico integral, sino en una creciente concentración de la riqueza.⁴¹ Esto puede evidenciarse cuando vemos que los niveles de pobreza y desigualdad en Ecuador, a comienzos de los años 60 son de los más altos de América Latina.⁴² En este país, la desigualdad, medida por índice de Gini, alcanzaba en 1960 el 0.6268, tal como se muestra en siguiente tabla comparativa:

Tabla 3.4. Desigualdad del ingreso en América Latina 1961-1962

PAIS	COEFICIENTE DE GINI
Argentina (1961)	0.4452
Brasil (1960)	0.5636
Colombia (1961)	0.4911
Costa Rica (1961)	0.4911
Ecuador (1962)	0.6268
El Salvador (1961)	0.5253
México (1963 – 1964)	0.4774
Venezuela (1962)	0.4350

Fuente: (Uribe, 1976: 79)

Terminada la década de los 50 crecimiento económico se debilita y esto abre para el Ecuador una nueva etapa de inestabilidad política, que, sin embargo, no afecta sustancialmente el proceso de acumulación privada de capital (Moncada, 1974; 1981, Fernández, 1976). Lo que si sucede es que se produce una recomposición de las élites económicas, en la medida en que el *boom* del banano permitió el surgimiento de nuevos actores económicos, que desplazan a las viejas élites agrícolas del Cacao (Cueva, 1973). La dinámica de exportación de Banano tal como fue promovida por la *United Fruit Co.*, en el Ecuador y facilitada por el gobierno de Galo Plaza (1948-1952) y sus sucesores, favoreció este proceso de surgimiento de nuevas

⁴¹ Para José Moncada (1974: sp), entre 1950 y 1970, EL PIB ecuatoriano se habría multiplicado por 5. En la primera década (del 50 al 60), la actividad exportadora habría significado unos ingresos impresionantes. El promedio de crecimiento de esta década habría sido del 5.1%; con un crecimiento de la inversión total por encima del 15% y una inversión pública que creció en un 22%. (Burbano de Lara, 2014: 91)

⁴² La pobreza llega en Ecuador en 1962 al 66% de los hogares. Tanto pobreza como desigualdad eran mayores en las áreas rurales.

élites que ven en este negocio una oportunidad de crecimiento sin precedentes (Burbano de Lara, 2014). Este contexto favorable al crecimiento económico, trae como consecuencia, que las exportaciones totales se hubiesen incrementado de manera significativa. Así, “Mientras el valor de las exportaciones ecuatorianas, entre 1930-1940 fue de un promedio de 7.4 millones de dólares, entre 1950-1955 tal promedio llegó a 78.6 millones de dólares” (Moncada, 1981: 94). Esto significa que las exportaciones se multiplicaron por más de 10, solo teniendo en cuenta la primera mitad de la década de los 50.

Este crecimiento fue parte fundamental del proceso de sustitución de importaciones, que se inicia de manera más o menos sostenida a lo largo de los años 50, 60 y 70. Se constituyen así unas élites económicas muy influyentes en el campo político que incrementan de manera considerable sus ingresos y que diversifican igualmente sus inversiones. El mercado interno se convierte en este proceso, en una cada vez más importante fuente de recursos, que va a atraer inversionistas extranjeros que se articularán con los productores nacionales (Conaghan, 1988). El crecimiento de las ciudades durante los primeros 25 años de la segunda mitad del siglo XX, se constituye en uno de los grandes dinamizadores de este mercado interno. Las inversiones extranjeras se concentrarán en la banca, el comercio, los medios de comunicación, entre otros. Tal como lo expone Moncada:

(...) si hasta 1959 y desde 1960 se habían creado en el país, 17 sucursales de empresas extranjeras; entre 1960 y 1975 se establecieron en territorio nacional, nada menos que 134 nuevas sucursales. Solamente la inversión norteamericana radicada en el Ecuador, que en 1936 se la estimaba en 5 millones de dólares, ascendió en 1963 a 37 millones de dólares y, en 1974 a 396.6 millones. En este último año, las utilidades de la inversión acumulada de origen estadounidense excluyendo las utilidades del banano fueron de 167.7 millones de dólares (Moncada, 1981: 99).

De ese modo, los años 50, 60 y 70 significarán para el Ecuador, un importante despegue económico, que favorece a los inversionistas nacionales que se benefician del sector exportador de banano, pero así mismo, a los inversionistas extranjeros que ven en la economía ecuatoriana una importante fuente de recursos, debido al crecimiento progresivo de su mercado interno, así como de productos de potencial exportación.⁴³ Estos recursos, saldrán de la economía ecuatoriana y beneficiarán a las casas matrices (Younger, 1990)

⁴³ Pese al declive temporal de la economía ecuatoriana a finales de los años 50 y comienzos de los 60, las inversiones extranjeras crecen de manera importante. En este periodo, la entrada de capitales pasó de 29.7 millones de dólares en 1961 a 78.1 millones de dólares en 1968 (Verduga, 1981: 61-62)

Es importante resaltar, en todo este proceso que, los principales beneficiarios de dicho despegue económico ecuatoriano serán las élites empresariales, pero esto no se traducirá, como en el caso boliviano, en la configuración de agremiaciones del tipo de la CEPB; agremiaciones que articulen los intereses empresariales y que impulsen un posicionamiento unificado frente a las políticas estatales. En buena medida, esto podría ser interpretado a partir de la gran diferencia que existe en los dos países en el impulso del desarrollismo. Si en el caso boliviano, el desarrollismo es impulsado por un Estado considerablemente autonomizado frente a las élites económicas; donde las clases medias urbanas, devenidas partidos políticos y con un sustento popular muy fuerte son protagonistas (V.gr. la articulación del MNR - COB), en el caso ecuatoriano son las mismas élites económicas las que impulsan las políticas desarrollistas y de sustitución de importaciones con articulación del capital transnacional. Al ser las mismas élites económicas las que ocupan el poder de Estado, o, al tener un predominio estructural y político sobre el mismo, esto configurará una dinámica en la que la primacía la tiene la empresa privada de élite.

Las élites económico-empresariales se constituyen de esta manera, en actores dominantes que se benefician de la fragmentación social y política de los sectores subalternos. Este es un hecho que en la década de los años 50 va a favorecer al líder populista Velasco Ibarra, quien asume la presidencia (y es la única en la que termina su mandato), entre 1952 y 1956 y luego es sucedido por el hijo de Arosemena Tola, Carlos Julio Arosemena Monroy, vinculado con los sectores empresariales Guayaquileños.

La constitución de unas élites débilmente articuladas, desde el punto de vista institucional en el Ecuador, implicará dominio de la política, pero no hegemonía, en el sentido en que no logran la articulación y compromiso activo de los actores sociales subordinados. La fragmentación social y política, así como el incremento de la desigualdad, restará posibilidades a las élites empresariales de lograr la articulación de amplios sectores sociales. Las mismas dinámicas de concentración de la riqueza en pocas manos, impedirá de hecho, la satisfacción de las demandas sociales crecientes de los sectores populares (Fernández, 1976, Uribe, 1976; Santos, 1989).

Esta misma incapacidad de las élites económicas que mantienen la estabilidad política durante los años 50, contribuye a que, una vez el crecimiento económico tiende a estancarse a finales de la década, las protestas sociales se incrementen y la inestabilidad política se reinstale en la sociedad ecuatoriana. La debilidad de las fuerzas políticas de izquierda y la fragmentación del campo popular facilitarán que la inestabilidad se “resuelva” por la vía del populismo

velasquista, o por la incursión de los militares en el control del Estado (Del campo, 1978; 1981; Cueva, 1973). Las décadas de los 60 y 70 representaron entonces el retorno a la inestabilidad política y la reemergencia de la pugna de poderes (Fernández, 1976; Núñez, 1985, Burbano de Lara, 2014). Gobiernos militares de derecha; gobiernos militares de izquierda y populismo se intercalarán en estas dos décadas, lo que daría pie para pensar que la “crisis de la hegemonía oligárquica” no finalizará todavía. Sólo teniendo en cuenta el periodo de 1960 a 1972, Ecuador tendrá 8 cambios de gobierno. Los gobiernos militares, serán los que en las dos décadas (60 y 70) logren un creciente predominio sobre los actores políticos civiles, incluyendo al velasquismo y otras fuerzas populistas como la CFP, de Guayaquil.

Sin embargo, la reemergencia de la inestabilidad política no significó para el Ecuador un retroceso significativo en los niveles de crecimiento económico alcanzado en los años 50. Así, si bien en los primeros años de la década de los 60, el crecimiento económico disminuye frente a los altos niveles reportados durante los años 50, a mediados de esta década, se producirá un nuevo despegue de la economía. Esto debido al crecimiento de las exportaciones, pero también a la creciente importancia del mercado interno para el desarrollo industrial que logra mayores niveles de diversificación. Se calcula en este sentido que el sector de la industria manufacturera se multiplicará por 7 entre la década de los 50 y mediados de los años 70; mientras el producto interno bruto global se multiplica por 5 en el mismo periodo; un crecimiento que no implicó, como antes, mayores niveles de igualdad social, sino todo lo contrario: mayores niveles de concentración de la riqueza (Moncada, 1981: 95-98, Uribe, 1975; Maldonado, 1979).

Pese a esto, una característica central de este periodo es la creciente participación del Estado en el control y orientación de la economía y la búsqueda de los actores estatales, particularmente de los militares de derecha e izquierda, de darle al Estado un mayor protagonismo en el desarrollo económico. Durante los años 60 y 70, se llevaron a cabo importantes reformas administrativa, financieras, tributarias y, por primera vez se impulsó una reforma agraria que buscaba acabar con las formas precapitalistas de subordinación de la mano de obra y de apropiación de excedentes; algo que se considera fundamental para modernizar las estructuras productivas y a la sociedad en su conjunto (Fernández, 1976; Vos, 1985, Escobar, 2007)⁴⁴ En el caso ecuatoriano, de hecho, realmente se dan dos intentos de

⁴⁴ Las políticas de reforma agraria impulsadas en el Ecuador por los militares, durante los años 60, de derecha, responden a una política agenciada por los Estados Unidos, a través de su Alianza para el Progreso. Esta, más que la democratización por sí misma, se asume también como una estrategia para poner freno al desarrollo del comunismo en la región. La tremenda desigualdad en el acceso a la tierra, se lee de este modo, desde EE.UU y

reforma agraria en este periodo. Una, durante el gobierno de la Junta Militar, en el año de 1964 y la otra, mucho más radical para algunos, durante el gobierno de gobierno “revolucionario y nacionalista” del general Guillermo Rodríguez Lara (Maldonado, 1979; Fernández, 1976; Burbano de Lara, 2014, Martín-Mayoral, 2009)

Este mayor protagonismo estatal, que buscaba, “por primera vez”, establecer un Estado que coordina, ordena y orienta el desarrollo económico, trajo consigo el crecimiento de la burocracia y de los gastos del Estado, para lo cual, precisamente se requerían reformas tributarias, arancelarias, administrativas y financieras (Martín-Mayoral, 2009). La racionalidad de los procesos económicos, podía dejarse, para los militares, en manos de unas oligarquías que lejos estaban de permitir la democratización y modernización del país. El Estado se asume, en este contexto como el agente que lograría romper con estructuras de poder y de producción prebendalistas, patrimonialistas y corporativistas. Se requería, por tanto, liberar la mano de obra y la misma propiedad de formas atrasadas, que se entienden como obstáculos para el desarrollo de la producción y la productividad. Tanto gobiernos militares de derecha, como, durante los años 70, de izquierda, impulsarán la ampliación de las capacidades del Estado para coordinar y dirigir los procesos políticos y económicos, pero también para producir a través de sus propias empresas. Podría decirse, en tal sentido que, pese a la inestabilidad política que caracteriza estas décadas, el estado-centrismo se posiciona como la orientación ideológica hegemónica, del desarrollismo ecuatoriano y de buena parte de América Latina.

Tal perspectiva del Estado y de las relaciones de poder, despertó la reacción de las élites económicas. Estas no estaban dispuestas a subordinarse. Durante los años 60, los gobiernos militares que impulsaron estas primeras medidas, moderadamente estatistas, chocaron con la recia oposición de los actores económicos empresariales de élite, particularmente de la Costa. Esto a pesar de los grandes beneficios que el estatismo de este periodo trajo, precisamente para el desarrollo industrial privado del Ecuador (Burbano de Lara, 2014; Fernández, 1976; Hurtado, 1981:181, Vos, 1985).

De este modo, en el caso ecuatoriano, las lógicas corporativistas de las élites serán diezmadas, sólo temporal y coyunturalmente. De hecho, al haber disfrutado de un crecimiento económico sustancial durante los años 50, un crecimiento que las posicionó como los agentes y/o artífices y beneficiarias de éste mismo crecimiento, no estarán dispuestas a sucumbir frente a nuevos

desde los militares de derecha que sumen el poder en varios países de América Latina, como parte de una reacción al surgimiento de movimientos revolucionarios. Ver: Escobar, 2007; Vos, 1985: 1098-1100.

actores políticos y frente a estos desarrollaran una cada vez más férrea oposición, Sobre todo cuando las reformas que estos actores establecen, implicaban democratizar la economía y la política ecuatoriana (Conaghan, 1988, Moncada, 1978, Fernández, 1979; Egas, 1979, Pallares, 2002) Estas elites impedirán de hecho, las pretensiones de los gobiernos militares de los años 60, de llevar a cabo una reforma agraria que pusiera fin a formas precapitalistas de tenencia de la tierra, así como de subordinación de la mano de obra (Pallares, 2002. Egas, 1979); Se opondrán, del mismo modo a los intentos de los gobiernos militares de ampliar los marcos de acción del Estado a la producción industrial, así como hacia el comercio y los servicios públicos (Moncada, 1978).

Pese a haber limitado los alcances de las reformas de los años 60, estas contribuyeron a ampliar las posibilidades de la producción y obligaron a algunas haciendas, particularmente de la sierra a modernizar sus estructuras productivas. No hay que olvidar, en este marco, que la sociedad ecuatoriana, desde los años 50 viene acelerando su tránsito de sociedad rural a sociedad urbana. Esto presiona a las mismas élites oligárquicas, de la hacienda tradicional en la sierra y de la producción agroindustrial para la exportación, de la costa, a buscar diversificar sus inversiones y entrar en los campos de la industria, la banca y los servicios. Así, los intentos reformistas de los gobiernos militares de los años 60 y las transformaciones estructurales de la sociedad ecuatoriana, conjugados con el elitismo de sus actores económicos dominantes, se articularán para dar a estos últimos, la capacidad de frenar cualquier proceso de democratización profunda de las estructuras sociales (Bocco, 1983, Conaghan, 1988, Vos, 1985; Moncada, 1979, Fernández, 1979). La resistencia empresarial a un Estado cada vez más activo será de este modo, en buena medida, exitosa durante este periodo.

Las élites empresariales a través de sus organizaciones gremiales, articuladas ideológicamente, aunque no institucionalmente como en el caso boliviano, son capaces así, de poner freno a los intentos más importantes de transformar las estructuras socioeconómicas y políticas de país: la liberación de la mano de obra de formas tradicionales de subordinación; la redistribución de la tierra; la participación política de los sectores subalternos, entre otras medidas (Fernández, 1976).

La búsqueda de distintos gobiernos de este periodo de incrementar la autonomía del Estado frente a la influencia de las élites económicas será, más fuerte durante el gobierno del General Rodríguez Lara, gobierno que, por primera vez se declara “Revolucionario, nacionalista y antioligárquico”, (Moncada, 1978; Fernández, 1976; Burbano de Lara, 2014; Maldonado,

1979). Esta declaración, más allá de sus implicaciones económicas, será respondida políticamente de manera muy intensa por las élites costeñas y serranas. El gobierno de Rodríguez Lara, promoverá una radicalización de las políticas de reforma agraria iniciadas en la década anterior, pero también una profundización de los estímulos dados al proceso de industrialización por sustitución de importaciones. En cuanto a lo primero, buscó incrementar la productividad agropecuaria y su modernización tecnológica, para incrementar sus utilidades y su diversificación. Esto para responder al mercado interno, pero también, para lograr una inserción más adecuada en el mercado externo. Pese a estos intentos, en términos generales, la producción agropecuaria disminuirá su crecimiento y su participación en la composición del PIB ecuatoriano, y no se lograrán mayores niveles de igualdad económica en las zonas rurales (Vos, 1985; Maldonado, 1979). La producción industrial, por su cuenta, logrará mayores niveles de crecimiento y diversificación y, como se ha planteado, estará beneficiada por la creciente demanda interna promovida por el auge del petróleo de los años 70, sobre todo a partir de 1972, cuando comienza su exportación.

El Gobierno de Rodríguez Lara, tal como lo expone Conaghan (1994), impulsó varias estrategias para fortalecer la gran industria, a través de financiamiento. Este financiamiento se canalizó a través del Banco Central, del Banco de Desarrollo y de la Corporación Financiera Nacional. Con el auxilio de estas instituciones, las más grandes y modernas industrias absorbieron el 98% de todos los créditos de desarrollo industrial. En el caso de la agricultura, el 80% de los créditos los absorbió la agricultura a gran escala. (Conaghan, 1994: 56).

Con el ingreso de nuevos recursos a la economía ecuatoriana, y debido a las políticas establecidas por los gobiernos militares en cuanto a la apropiación de los ingresos generados por la explotación petrolera, el Estado fortalecerá en sus capacidades y autonomía relativa. Sin embargo, a partir de estos recursos, se fortaleció a un sector privado industrial, a través de subsidios, ventajas fiscales, arancelarias y créditos

En el cuadro siguiente, pueden verse los cambios vividos en el financiamiento estatal a las actividades privadas del Ecuador en dos periodos. En primer lugar, se muestra el crecimiento otorgado a cada sector de la economía, en el periodo comprendido entre comienzos de los años 60 y finales de los años 70 y, luego se muestran las especificidades de los créditos otorgados en los años 70, hasta 1977. A partir de estos datos, se evidencia que los créditos para el sector agrícola se mantienen en el ritmo instaurado desde los años 60, pero también que el sector industrial incrementa su participación del 10,4% al 12,6%, en el periodo comprendido entre 1970 y 1977. El comercio, por su parte, reducirá su participación en el

acceso a créditos, en los periodos comparados. Más adelante se mostrará detalladamente la participación de cada sector y sus variaciones año a año, desde 1970 hasta 1978. Año, éste último, en el que se produce el “segundo” tránsito hacia la democracia.

Tabla 3.5. Crecimiento del crédito por sector de la economía

Crédito	Crecimiento (a) 1960-1977 (%)	Crecimiento (a) 1970-1977 (%)
Total	8.0	8.8
Agropecuario	11.3	11.3
Industrial	10.4	12.6
Comercio	6.0	5.3

(a) Crecimiento en promedio anualmente acumulado.
Fuente: O. BARSKY y G. COSSE: Tecnología y cambio social. FLACSO, Quito, 1981.

Fuente: Bocco, 1983: 499

En consecuencia, de lo anterior, en el periodo contemplado hasta ahora, vemos a unas élites que juegan un papel importante desde dos perspectivas. En primer lugar, como artífices de los procesos de reformas desarrollistas con un estado-centrismo moderado, pues el impulso del poder económico privado se veía dentro de las perspectiva relativamente “estado-céntrica” como uno de los objetivos fundamentales para lograr los niveles de industrialización deseados por los proyectos económicos tanto de las élites empresariales como de algunas élites políticas y, en segundo lugar, como beneficiarias también de un creciente poder económico y político que se va a volcar, pese a los beneficios recibidos de parte de las élites políticas, en contra del modelo de desarrollo dominante en este periodo.

Podría decirse entonces para sintetizar este proceso que, en el caso ecuatoriano, las élites viven tres momentos entre los años 50 y 80. En un primer lugar, son las encargadas de impulsar los procesos desarrollistas mediante la ocupación directa o indirecta del poder de Estado en los años 50; un proceso que pone énfasis en el crecimiento económico y menos en el desarrollo social. En un segundo momento, las élites militares ganan creciente autonomía y, pese a la inestabilidad de los años 60, logran incrementar el poder de Estado en términos de regulación, producción económica y competencias burocráticas y administrativas, lo que pone a las élites empresariales y económicas en general, en la actitud defensiva/ofensiva (Bocco, 1983,). En un tercer momento, al establecerse gobiernos militares mucho más frontales frente al papel del Estado en el desarrollo económico (Particularmente el Gobierno de Rodríguez Lara), las élites económicas desarrollarán también una oposición más radical y de hecho, se verán impulsadas a buscar ocupar el poder de Estado a través de los líderes más importantes

que en este proceso de constituyen. Este es el caso del papel jugado por la Cámara de Industriales de Guayaquil, liderada por León Febres Cordero. Este líder, desde la vocería de dicha cámara primero y luego como representante en el poder legislativo (Una vez se produce el tránsito hacia la democracia), opondrá una férrea resistencia a los intentos de los gobiernos militares (particularmente del gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara), de incrementar el papel del Estado en la Economía y llevar a cabo profundas reformas económicas y sociales (Conaghan, 1988, Bocco, 1983).

De este modo, desde finales de los años 70, las élites empresariales buscarán recuperar el poder perdido y para esto contarán con un contexto internacional favorable. La cada vez más profunda crisis económica de los países latinoamericanos y, en nuestro caso, del Ecuador, favorecerá la reemergencia del poder empresarial en el campo político y con esto, la búsqueda de líderes empresariales de ocupar el gobierno. Este es el marco en el que el líder empresarial León Febres Cordero y sus aliados ocuparán el poder de Estado por la vía electoral entre 1982 y 1986 y establecerán las bases a partir de las cuales se intentará acabar con el desarrollismo limitadamente estado-céntrico, de los años 50, 60 y 70.

Para precisar aún más las características de las etapas identificadas anteriormente, puede decirse que, en la primera parte del desarrollismo militar, se impulsan transformaciones moderadas, tanto en las políticas agrarias, como fiscales y tributarias, pero estos gobiernos no contaron ni con el músculo financiero suficiente para sentar bases sólidas a sus propósitos, ni con el respaldo popular necesario, para viabilizar políticamente el fortalecimiento del Estado.

Durante los años 60, de este modo, el reformismo militar estará fuertemente limitado por las capacidades materiales y de maniobrabilidad política de los actores que se hacen con el poder de Estado. Estos no son capaces de sostener sus políticas y resistir los embates de las élites económicas. De hecho, podría decirse que, por tratarse de gobiernos militares de orientación derechista y tecnocrática, no buscarán siquiera constituir un sustento social-popular que permitiera enfrentar eficazmente la resistencia económica y política de las élites comerciantes, industriales y financieras, tanto nacionales como extranjeras. Esto desemboca en un reformismo desarrollista más bien liberal de estos gobiernos militares, y muy corporativizado en favor de las élites empresariales.

Durante esta década, por tanto, si bien se avanza en algunas políticas de reforma agraria, será más bien la colonización que la redistribución de la tierra para el acceso de los más pobres, lo más exitoso. Éxito en el que, de hecho, se beneficiarán los terratenientes costeros y serranos.

Durante los años 70 y, específicamente con el gobierno de Rodríguez Lara se pretendió profundizar las políticas reformistas y modernizar la economía, la administración pública, al Estado y a la sociedad en General. Este gobierno cuenta con un contexto económico más favorable que los anteriores y el Estado, por la vía del inicio de las exportaciones petroleras, logrará acopiar recursos, en cantidades sin precedentes, lo que le sirve para tomar medidas más radicales en el campo de la producción industrial, las transformaciones sociales y políticas, así como fiscales y financieras. Como puede verse en el cuadro siguiente, el inicio de las exportaciones petroleras significó un gran salto en los recursos recibidos por el Estado ecuatoriano, pero también algunos problemas derivados de la estructura social y económica del país. Así, los recursos provenientes de las exportaciones se multiplican, pero sucede lo mismo y, de hecho, en mayor medida, con las importaciones.

Tabla 3.6. Exportaciones e importaciones de bienes y equipos (a).

(En millones de sucres de 1970)			
Año	Exportación	Importación	Saldo
1970	5.121	6.666	-1.545
1970	5.738	7.380	-1.642
1972	7.738	6.493	+1.216
1973	10.079	6.706	+3.373
1974	10.271	11.263	-992
1975	9.571	11.734	-2.163
1976	10.545	11.416	-871
1977	9.568	12.614	-3.046
1978	10.856	12.234	-1.378
Tasa de crecimiento	Promedio acumulado	9.8%	7.9%
(a) Tomado de la cuenta 6: transacciones exteriores. Fuente BCE: Cuenta Nacional de Ecuador 1970-78, agosto 1979, cifras provisionales.			

Fuente: Bocco, 1983: 487

Como puede verse, pese al importante crecimiento de las exportaciones, que se evidencia, primero en el año de 1972 y, de manera más significativa a partir del año 1973, se produce también un importante aumento de las importaciones, lo que va a generar una balanza comercial deficitaria que se extiende desde el año 74 hacia adelante. De este modo, la actividad económica crece, pero no se logra retener una buena parte del capital producido por el incremento del valor de las exportaciones. Los años de 1975 y 1977, significarán un incremento considerable del déficit en la balanza comercial. Entre 1974 y 1978 se produce un déficit acumulado, de 8.450 millones de sucres. En la práctica, esto representará una forma de fuga de capitales, que afecta las posibilidades de desarrollo sostenible, tanto de la industria como de los demás ramos de la economía (Younguer, 1990).

Por otro lado, el tipo de desarrollo que se impulsa en este periodo posibilitará la diversificación de las inversiones de las élites económicas ecuatorianas, proceso que había iniciado ya desde los años 40 y, sobre todo, a partir del boom del banano en los años 50. Esta diversificación fue usada por las élites de la banca y la agroexportación, como una forma de capitalizar la importante transformación de la estructura social ecuatoriana; esto es, el proceso de transformación de sociedad rural a urbana y el consiguiente crecimiento de la clase media y el mercado interno. Las distintas medidas económicas, financieras, arancelarias y de crédito para el fortalecimiento del proceso industrial, por parte de los gobiernos militares de los años 70, contribuirán a este proceso de acumulación privada de unas élites que habían diversificado sus inversiones y que se habían articulado de manera muy eficiente con el crecimiento de las inversiones de capital extranjero directo (Conaghan, 1988, 1994, Mainguashca, 1993). En el siguiente cuadro se puede ver cómo durante los años 70 se potenció el crecimiento de los distintos sectores de la economía ecuatoriana, por la vía del otorgamiento de créditos y cómo a partir de estos beneficios, se incrementa la participación de algunos sectores en la composición del PIB global:

Tabla 3.7: Evolución del PIB y el crédito por ramas de actividad (a).

(En millones de sucres constantes a 1970)										
Años	Total		Comercio y servicios		Industria		Agrario		Pecuario	
	PBI	Crédito	PBI	Crédito	PBI	Crédito	PBI	Crédito	PBI	Crédito
1970	34.659	11.912	12.983	6.511	5.671	2.252	5.459	1.321	2.830	467
1970	36.377	11.244	14.320	6.261	5.870	2.191	5.576	1.127	2.975	398
1972	38.991	11.789	14.945	7.121	7.121	2.072	5.432	1.249	3.239	406
1973	46.547	12.647	16.286	7.986	7.778	2.202	5.685	1.504	3.450	413
1974	50.221	13.512	18.820	8.786	8.786	2.745	6.149	2.032	3.672	611
1975	52.716	15.944	20.640	10.270	10.270	3.333	6.636	2.209	3.756	685
1976	56.460	17.836	22.494	11.727	11.727	4.000	6.851	2.745	3.925	615
1977	59.856	19.256	24.397	12.540	12.540	4.862	6.619	2.808	4.167	642
1978	63.045	19.922	25.895	11.616	11.616	6.103	6.360	3.046	4.398	510
Tasa de crecimiento	7.76	6.6	9.0	7.5	9.6	13.3	1.9	11.0	5.7	1.1

(a) Tomado del A, Bocco: Concentración de la propiedad y acumulación de capital en el sector financiero ecuatoriano en los años setenta, IIE-UCE, 1981.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Banco central del Ecuador; y elaboración propia.

Fuente: Bocco, 1983: 496

Como puede verse en la tabla anterior, el sector más beneficiado con el otorgamiento de créditos, es el industrial que crece a un ritmo del 13,3% anual entre 1970 y 1978 y representa la mayor proporción de créditos otorgados entre todos los sectores. Esto contribuye al incremento de la participación del mismo sector en el PIB general. El segundo sector beneficiado con créditos fue el sector agrario, cuya tasa de crecimiento se situó en el 11.0%,

muy por encima del sector pecuario e incluso, del sector comercio y servicios, que crecen a una tasa del 1.1% y el 9.0% respectivamente.

Puede verse así que se produce un importante incremento de las actividades económicas ecuatorianas durante los años 70. Pero también, cómo una buena parte de los recursos termina saliendo del país por la vía del déficit generado por la balanza comercial y la balanza de pagos. De este modo, son más los recursos que salen que los que ingresan al Ecuador. Ahora bien, pese a las políticas de los distintos gobiernos de los años 70 y al énfasis en constituir una industria moderna, estable y próspera, la búsqueda de mayor autonomía para el Estado en la orientación de estos procesos será contestada por las élites empresariales de manera frontal y desafiante. El gobierno de Rodríguez Lara, en este sentido, recibirá el rechazo de las élites económicas, que usufructúan el crecimiento económico, pero sin contraprestación.

Los militares, que se asumieron técnicos, más que partidista (su relación con los partidos políticos será más bien de confrontación), no constituirán un grupo lo suficientemente articulado y cohesionado para responder a las críticas y a las estrategias de disuasión de las élites económicas. De hecho, estas élites jugaron un papel muy importante en la caída de Rodríguez Lara y en la Constitución del “triumvirato” que hizo el tránsito hacia la democracia; un salto en el que las élites empresariales, lideradas sobre todo por León Febres Cordero, buscaron asumir, de manera directa, el poder de Estado, precisamente, para restarle capacidades (Burbano de Lara, 2014, Conaghan, 1988, Bocco, 1983, Oleas, 2013)

Ahora bien, Conaghan (1988) muestra también que a partir del boom petrolero, las relaciones de poder económico entre el Estado y el sector privado cambian sustancialmente. El primero adquiere una posición desafiante para los intereses políticos y económicos de las élites empresariales. Buena parte de los recursos que ingresan al Estado se queda en manos de una burocracia que se multiplica, pues pasa de 61.277 funcionarios a 103.911 y los sectores que más crecen son: educación, obrero, bienestar social (Conaghan, 1988: 48). Estos sectores consumen buena parte de las utilidades que empieza a recibir el Estado ecuatoriano, lo que refuerza la idea de un cambio en el modelo que se había impulsado durante los años 50, que hacía énfasis en el crecimiento económico, pero sin transformaciones sociales.

El asunto es que este tipo de crecimiento, que incrementa el consumo también y el crecimiento de la clase media, no resulta sostenible en el largo plazo. La redistribución, choca así, estructuralmente con la sostenibilidad del acopio de utilidades; con el mismo desarrollo de la productividad y con la resistencia de las élites a contribuir tributariamente a la

sostenibilidad. El crecimiento del mercado interno que beneficia el proceso de industrialización, no se convierte en un incentivo suficiente para las élites, que buscarán siempre mayores utilidades que, al menos coyunturalmente, puede ofrecer el mercado externo en expansión. Esto trae como consecuencia obstáculos en la estructura de las economías periféricas, que no logran construir proyectos colectivos que comprometan a las élites económicas. Todo lo contrario a lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de algunos países asiáticos (Sevares, 2007).

En el caso ecuatoriano, contrario a esta articulación alrededor de proyectos nacionales, entre 1972 y 1975, se multiplicaron los créditos a las industrias de productos semi elaborados, pasando de 63 millones a 352 millones de sucres. El crecimiento del PIB, es importante en estos años, pero las relaciones entre el gobierno y los empresarios fueron más bien traumáticas, lo que hizo que la sostenibilidad del proyecto militar se hubiese frustrado. Los incentivos dados por el gobierno al desarrollo empresarial nacional conducen a que los empresarios se beneficien, pero no se dobleguen a las orientaciones del gobierno. Cuando el gobierno de Rodríguez Lara, para favorecer el consumo interno, decreta control de precios sobre algunos productos; los empresarios orientan su producción hacia productos no controlados. Se dan incentivos a la inversión extranjera y esto permite a las firmas multinacionales articularse con las firmas y grupos económicos nacionales para la producción, tanto para el mercado interno como el externo. Esto a pesar de que los más beneficiados de estas políticas serán los exportadores, que se oponen de manera más radical a las políticas de promoción industrial adelantadas por el Estado (Conaghan, 1988: 48-54). De este modo, se evidencia cómo los empresarios nacionales, ven en el mercado interno, un incentivo para las inversiones, pero no lo suficientemente atractivo como para desplegar hacia este la totalidad de sus actividades económicas. El mercado externo en expansión en este contexto histórico hará que busquen mayores utilidades en las exportaciones.

Así mismo, durante este periodo los industriales van a oponerse a las reformas que implicaban crecientes beneficios para las clases medias, así como a una posible expansión de tendencias más radicales, en términos de reformas políticas y económicas. Las cámaras de Industrias de Quito y Guayaquil, principalmente, liderarán la oposición a las medidas reformistas del gobierno de Rodríguez Lara (Fernández, 1979, Bocco, 1983, Burbano de Lara, 2014).

En términos identitarios, quienes se oponen a las políticas reformistas, desde el punto de vista social y político, son personas que han acumulado poder económico y social; gerentes o líderes empresariales de las más grandes industrias ecuatorianas; gente en su mayoría educada

fuera del país, que están vinculadas a asociaciones empresariales antes mencionadas y que pertenecen a los mismos clubes, y círculos sociales. Estos comparten una mirada negativa de la intervención estatal, así como del “populismo” (pese a que se benefician del mismo) y son altamente elitistas. Para Conaghan, el concepto que los une es el del "productivismo" (Conaghan, 1988: 64-65). Desde este concepto cuestionan la intervención estatal en la economía, pero sobre todo la participación del Estado en ésta como productor directo o en actividades de comercio. Proceso que se había iniciado desde los años 60 y que se fortaleció con el gobierno de Rodríguez Lara (Moncada, 1981, Maldonado, 1979).

Para Conaghan (1988), el “productivismo” como discurso de las élites, se refiere a la concepción de que el liderazgo del sector privado es la mejor respuesta a los problemas del desarrollo económico y que, por extensión, el Estado y las clases bajas deben estar subordinadas a estos objetivos. Los líderes empresariales se perciben a sí mismos, como líderes de la sociedad ecuatoriana; todos asumen que su grupo es el más importante; su liderazgo estaría, para ellos, por encima de otros grupos o instituciones, como el Estado, los trabajadores, las clases medias, etc. Los industriales, además, mantienen vínculos con las clases altas, desde tiempo atrás, con las oligarquías tradicionales, constituidas por terratenientes, comerciantes, banqueros, etc. No reconocen conflictos con otras élites económicas, como los agricultores y, cuando los reconocen, culpan a las "erróneas políticas del gobierno". Desconfían profundamente de las clases trabajadoras, por pretender estas incrementar su autonomía política y económica; así mismo, se oponen a la ampliación de la participación política de los iletrados, pues son considerados incapaces de tomar decisiones electorales competentes. Consideran del mismo modo, que las políticas económicas deberían ser tomadas, sólo por el sector privado y el Estado, sin la participación de los trabajadores. La mayoría tiene una concepción negativa de los sindicatos; la mayoría concibe a estas organizaciones como incompetentes, permeadas por el comunismo, y reflejo del bajo nivel educativo y cultural de los trabajadores. Los sindicatos son descritos comúnmente, afirma Conaghan, como corruptos, manipulados, contaminados; constituidos por personas inmaduras, individualistas, egoístas y emocionales. (Conaghan, 1988: 65-66)

Basados en lo anterior, se pone de presente arribismo de las élites ecuatorianas; la oposición de éstas a transformaciones que implicaran disminución de su poder social y una lectura del proceso económico en el que un liberalismo corporativista, sería lo más adecuado para el desarrollo económico del país. El Estado es visto, de este modo, como un instrumento para la

promoción de la producción privada, pero su participación en la producción es cuestionada duramente.

Continuando con la descripción de estas élites industriales, Conaghan, muestra que estas consideran que la mayor participación del Estado en la promoción del desarrollo económico es la promoción de la gran propiedad o la producción a gran escala, dando incentivos. En relación con la industria, consideran que esta debería estar en manos de grandes firmas; reconocen que el mercado interno es limitado y que debería crecerse a partir del mercado externo; perseguir el incremento de las exportaciones por encima de privilegiar la sustitución de importaciones. De este modo, en el estudio sobre las orientaciones ideológicas de los industriales ecuatorianos, Conaghan, encuentra que sólo el 14% reconoce la importancia de las políticas de sustitución de importaciones, mientras que la mayoría considera que la creación de riqueza es más importante que las políticas de redistribución. Así mismo, se establece que el mayor acuerdo es considerar al Estado como un conductor ineficiente de la economía; critican los excesivos gastos públicos, los insuficientes créditos a la industria y la falta de habilidad del gobierno para controlar la inflación, así como por la creación de incertidumbre por parte de los gobiernos. (Conaghan, 1988: 67-68).

Esta lectura de la participación de las élites económicas y del estado en los procesos de desarrollo, se estableció de hecho en el Ecuador como la principal orientación ideológica de los años 70, gracias a la orientación que los militares le dieron al desarrollismo. Si bien durante esta década se promovió la pequeña propiedad, no se dieron incentivos reales a los pequeños productores para mejorar su productividad y avance tecnológico. Los grandes empresarios industriales y agroexportadores si se beneficiaron, de las políticas de créditos. Para las élites de este momento, el Estado debía ser complementario del sector privado y establecer las condiciones adecuadas para la acumulación de capital y reducir al mínimo las presiones a la gran empresa privada. De hecho, para uno de los más importantes industriales de Guayaquil, de aquel entonces, el Estado debía dedicarse a mantener el orden, proveer la infraestructura necesaria, crear un clima estable para las inversiones, y estimular al sector privado, con créditos y tasas de interés bajas. (Conaghan, 1988: 70).

Estas ideas remarcan el carácter elitista de los líderes empresariales ecuatorianos. Desde esta posición se opusieron a las políticas reformistas de Rodríguez Lara, así como ya se habían opuesto al reformismo moderado de los años 60 (Hurtado, 1981, Conaghan, 1988: 80-81). La búsqueda de constituir un Estado que promueve el desarrollo e implementa políticas de igualdad social, encontró la oposición de unas élites temporalmente articuladas. Cuestionaron

también el papel protagónico que el gobierno intentó darle al Estado como productor de bienes de consumo a partir de industriales estatales pues vieron amenazada su primacía y sus posibilidades de expansión para cubrir el creciente mercado interno (Conaghan, 1988: 83, Bocco, 1983)

La resistencia de las élites fue finalmente exitosa. Con esto se reforzó la debilidad de la intervención estatal en la economía ecuatoriana. El gobierno de Velasco Ibarra a comienzos de los años 70 había intentado desarrollar algunas industriales estatales, sin mucho éxito. Rodríguez Lara continuó con este esfuerzo de fortalecer la posición del estado en la economía. Los dos encontraron en las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil una férrea resistencia, que a la postre condujo al fin de dichos gobiernos.

Por otro lado, uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar el gobierno “revolucionario”, fue la carencia de perspectiva política; esto es, su ceguera en términos de necesidad de construir una base popular sólida que sustentara las reformas. Demasiado confiado en la técnica y la planificación, el Rodríguez Lara, no le apuesta a la articulación hegemónica. El gobierno militar, de hecho, llega a prohibir la actividad partidista, pero no las organizaciones de las élites a las que considera legítimas, dentro de una tradición de un gobierno mixto; entre el corporativismo y los arreglos democráticos.

En este proceso es necesario recordar que las cámaras de la producción (cámaras de comercio, agricultura e industria) fueron creadas por el Estado en 1930 como el vehículo oficial para representar los intereses de estos sectores frente al Estado. Las cámaras fueron subdivididas regionalmente, pero dada la concentración del poder económico en Quito y Guayaquil, las de estas ciudades se convirtieron en las más poderosas llegando a tener representación en el poder legislativo, así como en algunas agencias estatales. La acción conjunta de las Cámaras de Industriales de Pichincha y Guayaquil, se realizaba a través de la Federación de Cámaras de Industrias, cuya presidencia se rotaba anualmente entre las Cámaras de Quito y Guayaquil. Los intereses comerciales y agrícolas, afirma Conaghan (1988: 84-85) estuvieron más débilmente organizados en similares confederaciones.

Desde la constitución de este poder instrumental y estructural, la burguesía industrial, no se oponía a la participación del Estado en la producción, siempre y cuando esta fuera mínima; pero cuando el Estado que pretenden construir los militares, y, especialmente el gobierno de Rodríguez Lara, comienza a ampliar sus bases industriales y comienza el control de precios de los productos de las más importantes industrias, así como la instalación de plantas de

producción que competían directamente con aquellas, viene la reacción de sus instituciones gremiales. Así, a finales de 1973 las Cámaras comenzaron a movilizarse públicamente en contra de lo que interpretaban como un ataque a los mecanismos del mercado.

En abril de 1973, el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y gerente ejecutivo de las empresas del grupo Noboa, León Febres-Cordero, fue detenido por evasión de impuestos, lo que contribuyó a enturbiar el clima en el que el sector privado se sentía amenazado. El regionalismo fue usado en este momento como eje del discurso empresarial para criticar lo que se consideró un ataque a Guayaquil, desde Quito. (Conaghan, 1988: 86-87, Ver también, Burbano de Lara, 2014). De este modo, las Cámaras de la producción iniciaron una campaña en contra del gobierno y progresivamente logran debilitarlo, al dividir a las fuerzas militares. De hecho, se impulsa un golpe de Estado, que, pese a que fracasa, deja al gobierno profundamente debilitado. A la presión de los empresarios se sumó el débil respaldo de los sectores sindicales y campesinos (Burbano de Lara, 2014: 106):

Por otro lado, y siguiendo con el análisis de Conaghan, 1988, la búsqueda de mayor control sobre la inversión de capital extranjero que, a ojos del Gobierno de Rodríguez Lara, debería contribuir al desarrollo de la industria nacional fue atacada por las élites industriales y comerciales, así como por parte de otros actores, como el Colegio de Abogados de Guayaquil. De este modo, una red de poder se activa para impedir el mayor control Estatal sobre las actividades económicas. Los vínculos de las élites industriales con el capital externo son la base de esta oposición (Conaghan, 1988; Bocco, 1983, Burbano de Lara, 2014). Los empresarios denuncian las medidas de control impulsadas Rodríguez Lara, pero que, de hecho, habían sido establecidas al amparo del Acuerdo de Cartagena que Ecuador había firmado a comienzos de los años 70, en el gobierno de Velasco Ibarra; denuncian estas medidas como violatorias de los derechos de propiedad.

Sin embargo, lo que debilita al gobierno, además de las crecientes presiones de las cámaras y la promoción que estas hacen de derrocar al gobierno, es para Conaghan (1988), la grave crisis cambiaria en la que va a caer a mediados de los años 70. Las presiones, en este contexto, van a conducir a la dimisión del ministro de Industria y el nombramiento de Danilo Carrera Drouet, "un economista con fuertes lazos con la banca industrial" que rápidamente anunció la bienvenida del capital extranjero y buscó maximizar los beneficios ofrecidos por el Acuerdo de Cartagena. En concordancia con lo anterior, el fracaso de establecer una "industria nacional estatal, demuestra que lo que hay es unos actores políticos que no logran establecer ni la idea ni la materialización institucional de un estado fuerte. El poder estructural

e instrumental de las élites empresariales ecuatorianas logran poner freno a los débiles intentos de un gobierno sin proyecto hegemónico. Subsiste así una estatalidad debilitada por el poder de las clases dominantes.

Habría que cuestionar ¿en qué consiste esta debilidad? Todos los que impulsaron reformas se chocaron con el poder de las élites y estas, a la postre, las frenaron en lo sustancial. Se constituyen de este modo unas estructuras económicas y políticas tremendamente desiguales y un poder empresarial que parece inquebrantable. Un poder que logra articular intereses financieros, comerciales y agrícolas, dentro de lo que podría llamarse, una producción para la exportación (una producción especulativa y orientada sólo al corto plazo), para el crecimiento desde afuera; unos actores estatales que no logran construir unas instituciones fuertes; en el sentido de capaces de imponer nada. Pero también, unos actores estatales, que buscan una democratización desde arriba y sin sustento popular orgánicamente articulado (Cueva, 1973). De ahí también la inestabilidad de los mismos gobiernos.

El carácter inorgánico de estos procesos impide de esta manera la construcción de luchas contrahegemónicas y facilita la reproducción o incluso fortalecimiento del dominio de las élites económico-políticas, que se oponen a la construcción de alternativas de sociedad, desde el punto de vista de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. En este marco, se reconoce una crisis de la sociedad oligárquica, de la hegemonía oligárquica, pero sin alternativas. De ahí que las salidas sean muy efímeras, como lo describe Cueva (1973) y Del Campo (1978; 1981). De este modo históricamente construida fragilidad del Estado ecuatoriano y la incapacidad de los actores que pretenden su fortalecimiento, para orientar a los productores privados y comprometerlos con un proyecto nacional de desarrollo, es lo que conduce a que estos se orientan a la producción especulativa (Pfaller, 1975, 1981). De ahí que las políticas de industrialización con democratización que se plantearon en los años 70 para el Ecuador estuvieran condenadas al fracaso. Los actores estatales que orientan este proceso no cuentan con la fuerza suficiente para desafiar el poder de las élites económico-empresariales. Disminuir los riesgos e incrementar las utilidades de corto plazo, será la lógica que guía a las élites empresariales. Los distintos mecanismos definidos e implementados para la promoción de la industrialización, por obstáculos estructurales difíciles de resolver en el corto plazo como los altos costos en los que incurre el Estado para desarrollar las industrias, pero también por la perspectiva especulativa de unas élites empresariales orientadas a las altas ganancias en

el corto plazo y la búsqueda de disminuir los riesgos y los costos de una producción pensada en el largo plazo (Fernández, 1989)⁴⁵

La reproducción y fortalecimiento del poder de las élites empresariales ecuatorianas, se edifica así a través de la constitución de redes de poder en las que se articula poder mediático, poder legal, poder estructural económico, a partir de las Cámaras, mientras el poder de los sectores sociales subalternos no logra desarrollar mecanismos de articulación. Ahora, aquí hay coincidencia, parcial, en la perspectiva que expone Conaghan (1988), con la que propone la presente investigación. El problema central que plantea esta autora es ¿Cuándo el Estado es relativamente autónomo en la toma de decisiones y en el desarrollo y gestión de políticas públicas? Para Conaghan, la autonomía del Estado es mayor, y la participación de las burguesías es reactiva cuando: 1. La cohesión de las clases es debilitada externamente (por una crisis económica internacional) o internamente (por divisiones sectoriales dentro de la burguesía); 2. El Estado es capaz de crear una base alternativa de soporte entre las clases subordinadas y; 3. Hay unidad en las decisiones políticas dentro de los aparatos del Estado. Para la autora, ninguna de estas condiciones se dio en Ecuador, para permitir la formación de una alianza capaz de inducir y establecer las reformas políticas, económicas y sociales más importantes y “radicales”. Las clases medias, muy limitadas en su tamaño, además de burocratizadas (Cueva, 1973, Del campo, 1979, 1981) no representaron, en ningún momento, una alternativa al dominio de las élites empresariales; de ahí que estas, en términos coloquiales, *tengan el sartén por el mango*.

Por otro lado, los partidos políticos tradicionales se han disuelto progresivamente en este proceso y los nuevos partidos no tienen un profundo arraigo en la sociedad. De hecho, buena parte de estos incorporará progresivamente el discurso antiestatista, o al menos buscará implementar sus orientaciones. (Conaghan, 1988: 96-98, Cueva, 1973; Del Campo, 1979; 198, Hey an Klak, 1999). De ahí que la gran los proyectos de democratizar a la sociedad ecuatoriana terminen frustrado sen los años 80. El carácter tecnocrático y antipartidista de los gobiernos militares ecuatorianos y sus orientaciones “anticomunistas” restarán posibilidades de dar sustento popular a las reformas. De hecho, debido a estas orientaciones, tal como lo planteará Burbano de Lara (2014), llevará a los actores populares a exigir al gobierno de

⁴⁵ El desarrollismo ecuatoriano gestionado por los Militares y, particularmente por el gobierno de Rodríguez Lara habría establecido muy importantes beneficios para las industrias nacionales. Beneficios que fueron, desde el plano fiscal y tributario, al otorgamiento de créditos con tasas de interés muy bajas. Los costos para el Estado, en este proceso, se hicieron insostenibles en el mediano y largo plazo y sus efectos, muy limitados. Ver. Fernández, 1983, Mainguashca, 1993

Rodríguez Lara, cumplir con las promesas de desarrollo e igualdad, mostrando así mismo, los límites del poder de Estado, frente a unas élites económicas articuladas por el discurso anti estatista y “productivista”.

De acuerdo a esto, la mayor fragmentación de la sociedad ecuatoriana, frente a la sociedad boliviana y sobre todo, de sus respectivos campos políticos, hace que a la postre sean representantes del poder económico a título personal los que terminen ocupando el poder en el fin de los gobiernos militares (Conaghan, 1988: 104). Esto explicaría también el gradualismo que impera en la implementación de las políticas que buscan dar marcha atrás a las pretensiones de constituir un Estado fuerte, política y económicamente (Hey an Klak, 1999, Mainguashca, 1996).

En Ecuador, así como en el caso boliviano, las continuas dictaduras militares contribuyeron al empoderamiento y articulación de las élites económicas y, con esto a incrementar su protagonismo político. En el caso ecuatoriano, estas élites lograron establecer la representación directa de los empresarios en los puestos claves del gobierno, cuando su propio poder es amenazado. La pretensión de los miliares de autonomizar al Estado ecuatoriano mediante el reclutamiento de tecnócratas pertenecientes a la carrera administrativa, y provenientes de las clases bajas o medias, se verá, por parte de las élites económicas, como una afrenta a su estatus y capacidad administrativas; una amenaza a su dignidad. Denunciarán a estos tecnócratas, como incapaces de conducir la economía ecuatoriana, tal como lo hizo muchas veces, León Fébres Cordero (Montufar, 2000). El gobierno de los militares intentó romper con la idea de que las élites económico-empresariales eran las únicas capaces de dirigir la economía. Sin embargo, fracasó. Los militares no lograron darle al poder de estado un soporte estructural sólido ni romper la unidad de las élites empresariales. Años de constitución de tejidos sociales entre estas fueron la base de su articulación política. Son estas de hecho, las que logran romper la unidad de los miliares y esto lleva al traste al gobierno de Rodríguez Lara, el máximo exponente del estatismo y el nacionalismo ecuatoriano.

Una vez Rodríguez Lara cae, el gobierno del triunvirato, que sucede a Rodríguez Lara, establecerá mecanismos de protección de las élites. Esto mediante el otorgamiento de créditos a tasas negativas y aranceles altísimos para los productos que competían con la producción de los empresarios ecuatorianos. También protege a las élites mediante la represión de los movimientos populares. El triunvirato hará el tránsito a la democracia, intentando mantener algunos mecanismos del modelo de sustitución de importaciones, pero esto no será posible. El contexto internacional y nacional, dificultará cualquier asomo de nacionalismo. El

neoliberalismo se ha impuesto como ideología dominante y en el plano nacional las fuerzas políticas subalternas, lejos de apostarle a la articulación, reproducirán su perenne fragmentación.

En esta dirección, el retorno a la democracia hizo evidente la profundidad de la crisis en la que quedaron los partidos y movimientos políticos, luego de las dictaduras militares. Las campañas presidenciales para 1979, mostraron la extrema fragmentación política en la que quedaba Ecuador. Los militares que “impusieron” la democratización no comprendieron que las Cámaras de la producción se habían convertido en las claves institucionales de la derecha en el proceso político (Conaghan, 1988: 124). Pero ni siquiera estas estaban en las condiciones de conducir un proceso de cambio institucional sostenible en el largo plazo. De este modo, las mismas élites, en el primer gobierno democrático, se verán envueltas en un escenario denso, frente al cual, sólo podrán continuar con su “oposición” al estatismo, pero sin lograr canalizar un bloque político con el poder suficiente para constituirse en bloque hegemónico, las élites económicas mantendrán su lugar preponderante y su capacidad de presión al gobierno.

Así las cosas, las probaron también en el retorno a la democracia, ser capaces de impedir la constitución de un estado fuerte. En el tránsito a la democracia, en el gobierno de Roldos y Hurtado, se evidenció la capacidad de presión de estas élites para que los cambios no se salieran de su control. La crisis de estos gobiernos, de hecho, favoreció posteriormente la candidatura de Febres-Cordero que, para Conaghan, inequívocamente abrió las puertas del Estado, nuevamente al control directo de las élites empresariales. (Conaghan, 1988: 142). Durante el gobierno de Roldós, las élites buscaron a toda costa disminuir las “incertidumbres de la democracia”, cuestionando cualquier intento de los actores estatales de “manejar” la economía y buscando mantener la tutela sobre las instituciones de gobierno. (Conaghan, 1988: 143). Para esto, en el contexto de los años 80, las élites encuentran un campo ideológico que favorece la idea de que había que “empresarializar” al Estado y, por tanto, el mismo estado debía estar en manos de los empresarios, quienes se presentan como los únicos capaces de generar riqueza (Mainguashca, 1993, Montufar, 2000).

Esta auto proyección de las élites como portadoras de racionalidad económica usó el incremento de la deuda externa legado por los gobiernos militares para poner en evidencia “incapacidad del estado para dirigir la economía y fortalecer el antiestatismo siempre proclamado por estas. Esto desconociendo el hecho de que fueron las más beneficiadas por las

políticas de los militares, a través de créditos y prebendas tributarias (Burneo y Oleas, 1996, Bocco, 1983, Santos, 1989, Martín-Mayoral, 2009⁴⁶).

Así, en el momento en que sobreviene la crisis económica internacional de finales de los años 70 y varios países declaran la imposibilidad de asumir sus compromisos con la banca internacional, ni el Ecuador, ni los demás países dependientes, habrán logrado blindar sus economías ante estos embates. De hecho, como buena parte de las economías latinoamericanas, habrá incrementado su dependencia y su vulnerabilidad, frente al mercado mundial y frente a las demandas de las grandes potencias. Las élites, han logrado blindar sus propios patrimonios, precisamente a través de la diversificación de sus inversiones. Esto hace que, en las crisis externas sus ingresos se disminuyan, en algunos casos considerablemente, pero que no se vean tan afectados como los sectores populares que dependen en buena medida de la buena salud financiera de los Estados y sus capacidades redistributivas, y de actividades económicas muy volátiles. Unas élites que producen-especulan, con el mercado interno y externo; en la banca y el comercio, fortalecerán en este escenario, su poder político; su imagen de “productores eficientes” y líderes “naturales” de la economía y la política.

En este sentido, tanto en Bolivia como en Ecuador, se establecen condiciones para el incremento del poder económico de las élites empresariales, a pesar de su mediocridad productiva. Los intermitentes intentos de desarrollar un modelo de crecimiento e industrialización desde adentro se van a enfrentar con contextos económicos internacionales muy inestables. De hecho, entre mediados de los años 70 y comienzos de los años 80, no sólo en América Latina, sino en el mundo desarrollado se va a cuestionar duramente el protagonismo e intervencionismo estatal en la dirección y proyección de la economía (Blanco, 2004).

Así, si bien es cierto tanto en Bolivia como en Ecuador estos intentos van a dar magros resultados, un elemento que puede ser considerado como común a estos países es que se van a sentar las bases para la constitución de poderes económicos que se constituyen como los protagonistas del cambio de orientación económica y política durante los años 80. Las críticas

⁴⁶ A partir del año 75, el endeudamiento externo comienza a construirse en uno de los principales problemas de la economía ecuatoriana. Así, de un poco más de 600 millones de dólares en 1975, se pasa, en el transcurso de 11 años, es decir, en 1986, a una deuda de algo más de 11.000 millones de dólares. La falta de productividad y de competitividad de la economía ecuatoriana, de este modo, sirve para este incremento tan importante. La deuda externa, de éste modo, en 10 años, se multiplica por 12. Ver: Santos, 1989; Burneo y Oleas, 1996. Además de esto, el gobierno de los militares que suceden a Rodríguez Lara, ante la disminución de los ingresos por exportaciones y para sostener los niveles de crecimiento logrados en el boom de las exportaciones petroleras, no llevará a cabo reformas fiscales o tributarias, por no afectar los intereses de las élites empresariales, principalmente, y cubrirán sus déficits, con créditos del extranjero (Bocco, 1983).

al a la intervención del Estado en la economía, servirán para que, en los dos países, los partidos políticos que se constituyen durante este periodo, o bien se adecúen a los nuevos dictámenes de la economía mundial (de carácter neoliberal), o bien surjan nuevos liderazgos que propugnan por la liberación de la economía.

Sin embargo, habría una gran diferencia en nuestros dos casos de estudio. Mientras en el caso boliviano el Estado se convierte en el gran artífice de la constitución de las élites agro-exportadoras e industriales “modernas” (con un mercado interno mucho más estrecho que en el caso ecuatoriano), en Ecuador, las élites económicas se constituyen, gracias a la tremenda fragilidad del Estado y de los actores populares que pugnan por su dirección, en los actores principales del impulso de un desarrollismo antiestatista desde los Años 50. A partir de los años 60, debido al fortalecimiento del populismo y del poder político de los militares, las élites económicas entrarán en disputa con los actores que intentan darle una mayor centralidad al Estado en los procesos económicos. Las élites económicas, oligárquicas y nuevas élites, articuladas entre sí y con el capital transnacional y que debido a estos procesos habían logrado diversificar sus inversiones durante este periodo (Bocco, 1985, Conaghan, 1988), logran la hegemonía política desde la década de los 50, pero esta hegemonía es desafiada, debido a la incapacidad de estas de generar impactos positivos del crecimiento económico vivido, en la sociedad en general. De hecho, la pobreza se mantiene en unos niveles muy complicados frente al contexto latinoamericano y, además, Ecuador se constituye en uno de los países más desiguales de América Latina, durante los años 50 y 60; con niveles de desigualdad por encima de Brasil o El Salvador o Colombia; países campeones de la desigualdad en las décadas siguientes, como se vio antes.

La dependencia económica de estas sociedades, de este modo, sirve de marco para este incremento del poder de las élites (sustentado además por un creciente proceso de urbanización, por el incremento de la demanda interna proveniente del crecimiento demográfico –mucho más significativo en Ecuador- y de las clases medias), tanto desde el punto de vista económico como político. En el caso boliviano, como se vio, hay un proceso de acumulación creciente de la conciencia de su propio poder y capacidades de articulación social y política, de actores económicos, sociales y políticos también. Los gobiernos militares servirán de base para una acumulación de capital político y económico muy significativo. Los años 80, serán entonces el escenario propicio para que salten a la búsqueda de la hegemonía ideológica al amparo del neoliberalismo. La mucho más profunda crisis económica de la sociedad boliviana servirá de trampolín para que las reformas neoliberales y para que las

medidas se shock se vean como la única alternativa para recuperar la viabilidad política, económica y social de Bolivia. Las élites empresariales articuladas y lideradas por la CEPB, serán las protagonistas de la confección e implementación de estas reformas y medidas.

En el caso ecuatoriano, vemos más bien, unos actores estatales que no logran establecer procesos de acumulación de poder estatal suficiente, tanto desde el punto de vista político como económico, para disputar, de manera significativa y sostenible, el poder de las élites empresariales y económicas en general. Estas, retrocederán en el campo político, temporalmente durante los años 60 y 70, pero logran frenar las reformas más importantes que los gobiernos militares, principalmente, agenciaron para lograr un Estado más fuerte y capaz de impulsar el desarrollo económico y social. La inestabilidad y volatilidad política de la sociedad ecuatoriana, sumada a una mucho más débil articulación popular, contribuirán a la permanencia de las élites económicas como agentes decisivos en la orientación de las políticas económicas y sociales (Conaghan, 1988, Bocco, 1983).

Capítulo 4. Estado y élites empresariales en el neoliberalismo

Introducción

Tal como se planteó en el capítulo uno de esta investigación, desde mediados de los años 70, el mundo occidental y, progresivamente el planeta entero, experimentaron un proceso de transformación de sus estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. La centralidad del Estado como agente de integración política, social y cultural, así como de articulación de los intereses de los actores económicos, comienza a ser cuestionada, allí donde este había logrado importantes avances en sus capacidades de intervención (Sassen, 2010). Las industrias pesadas comenzaron a ser afectadas por los desarrollos de los sistemas de información y comunicación y la electrónica. La industria, base del Estado desarrollista en América Latina y del Estado de bienestar en los países europeos, se vio alterada de modo significativo por los nuevos adelantos. Las perspectivas económicas de largo plazo, propias del Estado de Bienestar, fueron echadas por tierra y un mundo incierto y, en buena medida ingobernable, comenzó a abrirse paso. La constitución de un mundo con una economía estable y en permanente crecimiento, pareció llegar a su fin. Las estructuras estatales fueron culpabilizadas de la debacle del modelo económico de capitalismo de Estado y una “era neoliberal” se abrió paso, a una velocidad rampante. Ya no eran las instituciones estatales las encargadas de regular la economía y servir de canales o mecanismos de articulación social, sino el mercado y sus instituciones.

En América Latina, el neoliberalismo se constituyó rápidamente como la perspectiva económica y política hegemónica, sin que esto desconozca la diversidad de las formas que asumió ni la diferencia de los procesos de implementación de sus postulados en cada país (Blanco, 2004, Molyneux, 2008). En los casos de estudio de esta investigación, las estructuras económicas, sociales y políticas que se habían venido construyendo, afectaron los modos en los que el neoliberalismo se impuso como orientación hegemónica y por tanto, la participación de los distintos actores de poder.

Para comprender mejor como se salta del “estatismo” al neoliberalismo, y el lugar que ocupan las élites empresariales en estos procesos, es importante precisar algunos de los elementos de constitución y desarrollo de los sistemas políticos y las relaciones de poder. Cómo se ha hecho hasta el momento, frente al periodo “desarrollista”, se sostendrá la idea de que el Estado no es algo que se constituya por sí mismo; que sus capacidades, límites y debilidades, dependen de los agentes que lo constituyen; de las dinámicas de conflictos y procesos de articulación de distintas fuerzas políticas que pugnan permanentemente por ocupar este

escenario y, desde allí, constituir ciertos tipos de sociedad. Es por esto que es importante, identificar, precisamente, cómo participan las distintas fuerzas que pugnan por la orientación de esta institución.

Este análisis, es complementado con la presentación de los desempeños económicos de los gobiernos del periodo neoliberal, para determinar cómo operan, los procesos de construcción hegemónica, más allá de lo meramente discursivo. Como se ha visto atrás, la postura de la presente investigación es que, las crisis de hegemonía obedecen también a una crisis o incapacidad de las élites políticas (y en nuestro caso también de las económicas) de ofrecer condiciones de vida digna para las mayorías. Así, si bien el neoliberalismo logra la estabilización de la economía, en materia de crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad, sus resultados son más bien mediocres (Farah, 2004). Esto, sumado a un desempeño de los actores de la economía en los que las estructuras económicas no logran mayores niveles de autonomía, sino todo lo contrario, conduce a una crisis de los modelos de desarrollo centrados en el mercado. Las turbulencias políticas y sociales de finales de los años 90 y comienzos del presente siglo darían cuenta de esta incapacidad de las élites de hacer sostenibles procesos de integración social, política y económica; de constituir un modelo de integración política y económica sostenible en el mediano y en el largo plazo. Esto conduciría también a sentar las bases para que varios actores sociales y políticos, buscaran la reconfiguración del poder del Estado.

4.1. Ecuador: Fragmentación política, corporativismo y gradualismo neoliberal

Lo primero que hay que plantear frente a éste primer caso es que el sistema político ecuatoriano que se establece a partir del “segundo” retorno a la democracia a finales de los años 70, no logra vencer el personalismo y la fragmentación política que había caracterizado la política de este país. En este proceso, así como en el precedente, se reproducirá el “influjo” del velasquismo, en el sentido de reproducción de formas personalistas y demagógicas de articulación política, y se sentirán los efectos de las intervenciones militares en la política ecuatoriana. Las distintas dictaduras militares han logrado algo fundamental, pero al final contradictorio con sus propias pretensiones, en el momento en que “imponen” la democratización: han debilitado a la mayor parte de los partidos y movimientos políticos; han profundizado su debilidad orgánica. Esto será evidente también en el campo popular y de las fuerzas de izquierda.

Así, si bien es cierto, en el tránsito del régimen militar a la democracia en Ecuador, se le da a los partidos políticos la responsabilidad de ser garantes de la estabilidad política y económica,

del fortalecimiento de la democracia y de la lucha contra el particularismo dentro de los mismos, éste no sólo no va a desaparecer, sino que incluso se fortalece progresivamente, con lo que la estabilidad política se ve debilitada (Pachano, 2007, 2010, De la Torre, 2000, Basabe, 2009, 2010, Burbano 2006, 2014, Montufar, 2000, Freinemberg, 2003). El extremo personalismo y fragmentación política, se institucionaliza de hecho, mediante el establecimiento de un importante poder discrecional al poder Ejecutivo, que permite que los presidentes puedan gobernar muchas veces por encima del legislativo. Como en otros contextos latinoamericanos (Weffort, 1994) en el tránsito hacia la democracia en el Ecuador, gobernar por decreto se convierte en una práctica recurrente (Acosta, 1996). Así mismo, la fragmentación política se reproducirá gracias a una política “oposicionista” en la que los mismos miembros de los partidos cuestionan permanentemente a sus líderes,. Lo mismo harán los sectores de la sociedad civil y del empresariado (Cohaghan, 1988; 1994; Freindemberg, 2003, Martín-Mayoral, 2009, Pachano, 2010).

Tenemos así en Ecuador, un campo político cuya fragmentación no logra superarse o incluso se profundiza en el periodo neoliberal. Esta fragmentación impedirá de hecho, la imposición del modelo neoliberal de manera estable y duradera. En este país no hay pacto político que logre establecer principios básicos de la acción política, del ejercicio del gobierno y la oposición (Pachano, 2003, 2007). Si bien el “antiestatismo” se constituye en uno de los principales discursos de las élites económicas y políticas (Paz y Miño, 2008, Conaghan, 1994, 1997), los márgenes de gobernabilidad que logra cada gobierno, no les permiten a los protagonistas de cada momento, establecer unas bases sólidas que aseguren continuidad, coherencia y eficiencia. (Montufar, 2000, Mainguashca, 1993, Hey an Klak, 1999, Pachano, 2003, 2007)

De este modo, la falta de consenso en la orientación de las políticas neoliberales, y el extremo personalismo de la política ecuatoriana, termina restando posibilidades para la constitución de un bloque hegemónico liderado por las élites económico-políticas, que fueron protagonistas del debilitamiento del poder de Estado y de la obstrucción de las iniciativas de fortalecerlo. Esto hace que, en Ecuador, la participación de las élites económicas en los rediseños institucionales termine siendo mucho más fragmentada y difusa, pese al acuerdo fundamental sobre la orientación neoliberal y, por tanto, sobre la “necesidad” de darle mayor importancia a las fuerzas del mercado como actores protagónicos del nuevo modelo de económico y político (Bonilla, 2002, Carranza, 2002, Segovia, 2002, Escobar, 2002, Tobar, 2002, CELA, 2003, Paz y Miño, 2008; Burbano de Lara, 2014: 105). Así, un mayor corporativismo y particularismo

de las élites económico/políticas, caracterizaría la participación de estas en el desarrollo del Estado ecuatoriano y esto afectaría la implementación de las políticas económicas neoliberales del Ecuador desde los años 80 hacia adelante. (Montufar, 2002, Martín-Mayoral, 2009)

Este marco general explica en parte por qué el primer gobierno democrático no impone unas reformas tan radicales como las bolivianas, después del fracasado gobierno de la UDP. De hecho, el primer gobierno democrático, liderado por Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, buscará reducir gastos, incrementar precios, devaluar la moneda (todas políticas monetarias), pero no cuestiona radicalmente la ya de por sí débil centralidad del Estado que los militares habían establecido (Conaghan, 1994: 114, Mainguashca, 1993, Martín Mayoral, 2009, Paz y Miño, 2008, Páez, 1996).⁴⁷

Al decir de Burbano de Lara (2014), el hecho de que el gobierno de Roldós, primero y, tras la muerte de éste en un accidente aéreo, de su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, no haya impulsado las medidas que se las élites económicas consideraban necesarias, hizo que, particularmente las élites de Guayaquil (lideradas, en este gobierno por el diputado León Febres Cordero), opusieran una *furiosa* resistencia al gobierno. De hecho, ante la crisis económica que, para las élites no era asumida del modo en que se debía (reduciendo el papel del estado en la economía y abriendo el mercado hacia el exterior), los empresarios guayaquileños impulsaron un paro empresarial de 48 horas, en marzo de 1983 (Paz y Miño, 2015: 170). Las medidas de ajuste que impulsó el gobierno con el fin de reducir el déficit fiscal y enfrentar la crisis de la deuda que ya se sentía en el Ecuador, fueron respondidas por estas élites, denunciando al gobierno de la Democracia Popular, de *comunista* y de querer liquidar la empresa privada (Burbano de Lara, 2014: 126)

De este modo, el primer gobierno democrático se vio muy tempranamente debilitado y sin posibilidades de establecer alianzas de largo plazo con unos partidos políticos sólidos. Las denuncias al gobierno de Roldós-Hurtado, fueron articuladas, no obstante, temporalmente por el, desde 1979, diputado León Febres Cordero. Este político, proveniente de la oligarquía guayaquileña, contó con el apoyo de las Cámaras de la Producción con quienes fue constituyendo un programa político basado en el desmonte del modelo “estado-céntrico”. Para

⁴⁷ Buena parte de las políticas neoliberales estarán orientadas, sobre todo, a la reducción de déficit fiscal y a una apertura de la economía ecuatoriana al mercado externo. Un elemento central que caracterizaría la intervención del Estado en la economía ecuatoriana, durante las dictaduras militares de los años 60 y 70, estuvo en el campo de la protección de la industria nacional manufacturera, a través de la imposición de aranceles elevados. Algunos de estos aranceles, llegaban, a finales de los años 70 hasta el 300%. Ver. Mainguascha, 1993, Gestambide, 2010.

esto, además, estableció alianzas secretas con varios asesores de Guayaquil, que fueron los arquitectos de lo que sería su programa de Gobierno. El liderazgo de Febres Cordero potencia aún más el poder instrumental que las élites venían acumulando desde fines de los años 70. Sin embargo, no rompe con una estructura política fragmentada. En las elecciones de 1984, Febres Cordero obtiene el segundo puesto, con el 27.5% de los votos y Rodrigo Borja, logra el 28%. De acuerdo con el sistema electoral ecuatoriano, esto lleva a la segunda vuelta y para esta la demagogia de Febres Cordero se refuerza y finalmente obtiene la estrecha victoria con el 51.5% de los votos, frente al 48,5% de Rodrigo Borja.

La fragmentación partidista y el personalismo son el telón de fondo del triunfo de Febres Cordero. Este triunfo mostrará, no obstante, la debilidad del liderazgo de las fuerzas de derecha que se venían juntando a partir del trabajo de las Cámaras de Industria y Comercio de Quito y Guayaquil. Esta debilidad, se expresa también en la imposibilidad de construir consensos sobre los procedimientos para imponer las reformas neoliberales ni sobre la profundidad de las mismas seguir (Hey an Klak, 1999, Pachano, 2003: 119-120, Martín-Mayoral, 2009).

Los actores estatales no cuentan en existe escenario, ni con un pacto entre las distintas élites, que permita darle continuidad a las políticas económicas que le den al país la estabilidad que desean, desde el punto de vista económico y social, ni cuentan con los recursos para, en el marco de un poder ejecutivo fortalecido por la Constitución que se elabora en el tránsito hacia la democracia, gozar de la autonomía requerida. Tenemos así, un caso de tremenda debilidad estructural del Estado, así como de una debilidad instrumental de los actores estatales. El ejecutivo, no logra subordinar a los poderes fácticos (económicos), ni consigue la articulación de los poderes del Estado, especialmente del legislativo.

De este modo, ni el gobierno del binomio gobierno de Roldós-Hurtado, ni el de Febres Cordero, enfrentarán esta debilidad estructural y dificultades para articular a los partidos políticos mayoritarios en el congreso, lo que hizo que, las reformas impulsadas fueran mucho menos radicales de lo que algunos esperaban y sólo pudieran implementarse escalonadamente. Esto a pesar de que el gobierno de éste último se abstiene menos, mucho menos, de usar la fuerza para reprimir las protestas populares que se realizaron durante su gobierno y para amenazar y reprimir también a los miembros de los demás poderes del Estado (Conaghan, 1994: 146-147, Montufar, 2000)

Además de esta fragmentación, los primeros gobiernos del retorno a la democracia enfrentarán un escenario económico difícil. Para enfrentar este escenario, el gobierno de Hurtado impulsó un plan de estabilización que, en el marco de esta política fragmentada, favorece a los opositores: los partidos de derecha y los gremios empresariales. A pesar de eso, la mera pretensión de este gobierno de llevar a cabo un mayor control de la evasión de impuestos generó la recia oposición de las élites empresariales. El carácter parcialmente reformista del gobierno de Hurtado en estas materias, que fuera acusado de estatista. De este modo, mediante distintos mecanismos de presión

(...) los gremios empresariales lograron que Hurtado diera un cambio en su gobierno y los hiciera beneficiarios de varias medidas, entre las que se cuenta, como la más importante, la sucretización de la deuda externa privada. No obstante, los partidos de derecha en el Congreso, junto a los gremios, no bajaron el nivel de su oposición a Hurtado (Montufar, 2000: 46).

Las medidas tomadas por Hurtado, bajo la presión de las élites empresariales, terminaron beneficiando incluso a empresas, clubes sociales de élite, clubes deportivos y personas naturales que no tenían vínculos directos con el aparato productivo nacional. Una buena cantidad de empresarios que se habían beneficiado del “endeudamiento agresivo” de mediados de los años 70, pudieron cambiar, con el auxilio del gobierno de Hurtado, deudas en dólares, por deudas en sucres (Acosta, 2001)⁴⁸

Se reproduce entonces un sistema de relaciones de poder paradójico en el Ecuador. Se constituye un régimen Estado-céntrico (en la demagogia de las élites económicas), pero con Estado débil frente al creciente poder estructural e instrumental de los grupos económicos y de interés; una sociedad política (léase partidos políticos) fragmentada, polarizada y con una debilidad no superada para consolidarse institucionalmente en el largo plazo (Pachano, 2003). En En este marco, no hay un proyecto hegemónico, sino apenas unas luchas corporativas, que defienden intereses sectoriales o de algunos grupos de interés. En este río revuelto, no obstante, las élites serán las más beneficiadas en la medida en que su poder estructural e instrumental, les permitirá limitar cualquier iniciativa de fortalecer el poder de Estado. Pese a esto, el liderazgo de Febres cordero se constituirá en la base de un posible proyecto

⁴⁸ Alberto Acosta muestra cómo una buena cantidad de empresarios dedicados al comercio de importación, clubes sociales, clubes deportivos, etc., logran, fraudulentamente (por la presión que ejercen las organizaciones gremiales de los empresarios de élite) beneficiarse significativamente con el proceso de sucretización de las deudas. El Estado se hace garante de deudas privadas con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del aparato productivo industrial. En el marco de la debilidad del gobierno de Hurtado, se benefician también, empresarios y personas que nada tenían que ver con el desarrollo de la industria nacional.

hegemónico que no se consolida. Potenciado por su carisma y por el apoyo de los gremios empresariales a los que pertenece, Febres Cordero llegará a la presidencia, pero sin unas bases estables que sostengan su poder.

Este es el marco en el que Febres Cordero, una vez en el gobierno, se impuso sobre ese sistema político fragmentado; capitalizó las debilidades institucionales a favor del Ejecutivo; profundizó las desigualdades sociales, afectó los derechos humanos y benefició a los grupos de interés y élites económicas que lo respaldaron, aunque no faltaron disputas con otros grupos de poder. Para Montufar, "... Febres Cordero encarnaba al moderno representante empresarial, pionero en el Ecuador de una retórica anti estatista, pero vinculado desde la década de los sesenta con los círculos políticos tradicionales, especialmente, costeños" (Montufar, 2000: 54)

Para éste mismo autor, el discurso de Febres Cordero, se va configurando así, a partir de la crítica al estatismo de los gobiernos anteriores; cuestiona la intervención del Estado en la economía y a los partidos y políticos que habían orientado las políticas ecuatorianas hacia el desarrollismo controlado desde el Estado. Del mismo modo, para Febres Cordero,

(...) los sectores empresariales y sus organizaciones gremiales no solo eran el grupo más importante del país sino su sector dirigente. En ese sentido, los intereses y necesidades de los mismos eran idénticos a los intereses y necesidades de generales de la nación. Como presidente lo afirmó ante la Cámara de Comercio de Quito en julio de 1986: 'Lejos de lo que ciertos prejuicios sugieren, las Cámaras no existen para defender interés egoísta alguno. Existen para defender el legítimo interés de sus miembros, integrado de manera necesaria e indisoluble, en el interés mayor del país'. (Montufar, 2000: 71)

En otro discurso, Febres Cordero, pronunciado en 1987, ante la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Febres Cordero afirmó que: "Es muy importante, pero, al mismo tiempo muy delicado y complejo... el sabio equilibrio al que están llamadas las Cámaras de la Producción, si es que van a satisfacer realmente el deber funcional que les corresponde, en el vasto conjunto orgánico del Estado".

Con base en estas consideraciones, es que se evidencia un incipiente pero infructuoso proyecto hegemónico en el que, sobre la base de la articulación de los intereses de las cámaras y de las élites en general, se fundieran o subordinaran los intereses del país, como si fuesen los mismos. Habría allí, un discurso pseudo hegemónico, pues hay que tener en cuenta el hecho de que la llegada al poder de este político social cristiano, lejos estuvo de ser el resultado de un fuerte movimiento social popular.

Además de lo anterior, la búsqueda de articular los intereses privados con los estatales no representa para el Montufar, una lectura liberal o neoliberal de la política “sino una perspectiva que fusiona orgánicamente lo estatal y lo privado” (Montufar, 2000: 73). Con esto se refuerza la idea de que el gobierno de Febres Cordero, representa un proyecto pseudo hegemónico de articulación social, en la que una fracción de las clases dominantes se constituye en clase dirigente para orientar la vida social en general, sin contar con la sociedad y los sectores sociales subalternos. Desde este lugar, no se busca la eliminación del Estado (ningún neoliberal afirmaría tal cosa), sino que este debía subordinarse al poder privado. Lo que la concepción de Febres Cordero reflejaba no era la noción de un Estado imparcial, árbitro desinteresado en el libre juego de interés particulares, sino uno cuyos intereses y aspiraciones coincidiera con los de los sectores empresariales. Como se puede deducir, aquí no hay alguna visión liberal o neoliberal del Estado sino una clara concepción organicista del mismo (Montufar, 2000: 56),

Ahora bien, en esta lectura del discurso de Febres Cordero, que lo aleja del neoliberalismo o del liberalismo, resulta incompleta o, al menos, distorsiona al neoliberalismo. Se construye una imagen de este en la que el Estado jugaría ese papel imparcial de árbitro de los intereses particulares y esto va mucho más allá. La lectura liberal o neoliberal tiene de hecho una mirada orgánica del Estado y la sociedad, en la que esta actúa libremente, promoviendo sus intereses y al promoverlos desarrolla el interés general. El interés general termina siendo la suma de los intereses individuales; el progreso es el resultado del desarrollo de estos intereses, de ahí que el Estado sea considerado como funcional a los mismos (Gramsci, 1980). Y esto no es distinto de lo que está planteando Febres Cordero

De acuerdo con lo anterior, bajo el ropaje del discurso liberal, lo que se oculta, como en la mayor parte de los países donde el neoliberalismo se ha impuesto, es una visión corporativa y oligárquica de la sociedad y del Estado; el Estado está para el beneficio de los grupos de interés de las élites (del capital, en una palabra), pues estos se asumen a sí mismos, como los representantes del interés general. La eliminación de subsidios, que en ningún país ha sido completa, se compensa con beneficios indirectos como la desregulación de las relaciones laborales y algunas relaciones comerciales tanto en los mercados nacionales, como internacionales. Desde esta perspectiva Febres Cordero, continua con la política de sucretización de las deudas adelantada por Oswaldo Hurtado, profundizando los beneficios para las élites económicas, ampliando plazos de pago de las deudas y congelando las tasas de interés (Acosta, 2001, Romero, 2007).

De este modo, el “gran cambio” impulsado por el gobierno de Febres Cordero, en su retórica y en su práctica de oposición a los gobiernos anteriores, consistió en que el Estado no debía servir a los intereses de cada uno de los ciudadanos, como en el desarrollismo, ni promover el desarrollo de la industria nacional (plataforma que, finalmente benefició fundamentalmente a las élites). Por el contrario, al fundirse los intereses del empresariado con los de la sociedad en su conjunto, el Estado debía servir, fundamentalmente a los intereses de las élites empresariales.

En este discurso sobre la coincidencia de los intereses de los empresarios y los intereses generales, y en el contexto de surgimiento de grupos de oposición armados, integrará pragmáticamente a los militares como los encargados de velar por la seguridad del país, por su integridad y su soberanía (que es integridad y soberanía empresarial). De ahí también el antipartidismo de Febres Cordero y esto se evidenció en el gabinete que constituyó una vez en el poder, formado con “independientes” y militares retirados “(...) confirmando esa confianza de los empresarios en los militares como buenos organizadores” (Freindemberg, 2003)

Esta estructuración del poder de estado edificada por Febres Cordero, mostraría la cara de la “nación imaginada” por el gobierno empresarial. Mientras tanto, los opositores a sus políticas eran, para Febres Cordero, subsidiados desde afuera y representaban la *antipatria*, y por tanto debían ser combatidos con firmeza. Dentro de los miembros de la *antipatria* no sólo estaban los grupos armados, sino los mismos partidos políticos de la oposición y las organizaciones sociales que defendían derechos sociales. En esto, podría decirse, Febres Cordero establece pares de posición en los que quienes enfrentan sus proyectos y discursos, representan a los enemigos del país (Montufar, 2000).

La oposición del gobierno de Febres Cordero a los partidos políticos, se materializó en el impulso de un referéndum para “ampliar” los derechos de los ciudadanos y fortalecer a candidatos independientes de los partidos políticos (Freidenberg, 2003). Hasta ese momento no se podía participar de las elecciones si no se estaba afiliado a alguno de los partidos establecidos. Un discurso democrático, de este modo, cubre las prácticas autoritarias de un gobierno que negaba derechos de los ciudadanos en el plano social y político, evidenciando así el verdadero rostro de la demagogia neoliberal. Sin embargo, Montufar lo pone como si fuera exclusivo de la experiencia ecuatoriana y, precisamente, este discurso es absolutamente demagógico al impulsar la idea (falsa) de que todos pueden ser empresarios (Lander, 2005). Para Montufar, el populismo de Febres Cordero:

(...) se enmarcó en el mismo molde de oposiciones típicas del discurso populista: pueblo (empresarios) versus intelectuales (ideólogos de centro izquierda); pueblo (empresarios) versus elites (políticas y militares reformistas); indiferenciación versus diferenciación sistémica; comunidad (empresarios, militares, redes clientelares) versus conflicto político (antipatria). Incluso, la oposición nación versus amenaza imperialista fue incorporada por el discurso febrescorderista pero como un rechazo a las transnacionales políticas, paradójicamente, entre estas incluidas también la Democracia Cristiana internacional, que según él, financiaban a los partidos de centro izquierda y enajenaban su conocimiento de la realidad ecuatoriana. (Montufar, 2000. 89).

En esta lectura binaria maniquea, los empresarios ocupan el lugar del pueblo y por tanto a los supuestos enemigos del empresariado, se les acusa enemigos del pueblo. De este modo también, los políticos y militares desarrollistas terminan por constituirse como enemigos del pueblo, representado por los empresarios. En este marco discursivo, el gobierno de Febres Cordero impulsó políticas de liberalización que luego fueron revertidas; disminuyó el gasto fiscal, pero pronto lo incrementó;⁴⁹ incrementó la deuda pública, redujo aranceles, decretó la libre importación; transformó el sistema cambiario y concentró las medidas económicas en cuatro instituciones: CONADE, Ministerio de industrias, Banco Central y Junta Monetaria (Montufar, 2000; Hey y Klak, 1999; Mainguashca, 1993), todas con participación determinante de los gremios empresariales

Ahora bien, las medidas económicas impulsadas por Febres Cordero, terminaron por beneficiar, principalmente a los exportadores:

Este grupo, al controlar gran parte del caudal de divisas que ingresan al país, era el que en mejor situación se encontraba de sacar ventaja del proceso de desregulación en marcha. De acuerdo a una cifra proporcionada por el investigador Lucas Pacheco, la política cambiaria del gobierno significó para el sector exportador un ingreso adicional de no menos de 10.000 millones de sucres (85.4 millones de dólares), solo durante los últimos cuatro meses de 1984 (Montufar, 2000: 99)

Dentro del sector de los exportadores, el sector agrícola sacó una buena partida y apoyó las medidas del gobierno. Así mismo los banqueros se beneficiaron de las políticas de Febres Cordero. A éstos, el Estado les compró las deudas en el exterior, contraídas en dólares para que pagaran en sucres; les disminuyó los intereses, les amplió los plazos y les congeló el

⁴⁹ Esta reversión de las medidas de reducción de los Gastos del gobierno, estuvieron motivadas, entre otras razones, por las graves catástrofes naturales que vivió el Ecuador en este periodo. Pero también, por la búsqueda de constituir una clientela política que asegurara la legitimidad del gobierno (Hey y Klak, 1999, Mainguashca, 1993)

precio del dólar (Acosta, 2001, Romero, 2007). En cuanto a la reducción de gastos fiscales, sólo funcionó en los dos primeros años. En los dos últimos llegó casi a duplicar el gasto fiscal (para mantener a la clientela) y llevó el déficit fiscal a una cifra cercana al 16%. De este modo: *La continuación de políticas que beneficiaban directamente a determinados sectores privados ilustra claramente cómo el gobierno de Febres Cordero consolidó la penetración de los intereses del gran capital en las decisiones del Estado.* (Montufar, 2000: 101). Con esto, lo que se desarrolla es un ajuste neoliberal selectivo, corporativista.

Pese a los aportes del autor citado para comprender al gobierno de Febres Cordero y cómo este impuso el neoliberalismo, Montufar, plantea una mirada de esta ideología, que termina por idealizarla. En apartados como el siguiente, puede verse la manera como se entiende esta orientación de la sociedad, el Estado y el mercado:

Sin embargo, el gobierno socialcristiano, lejos de institucionalizar un principio de neutralidad, **propio del régimen neoliberal** que intentaba institucionalizar, orientó el aparato del Estado hacia los intereses de los sectores económicos más poderosos del país, quienes siempre presentaron las mejores posibilidades de sacar mayores ventajas de las medidas adoptadas. En tal virtud, la desregulación parcial de los mercados, no significó ningún intento por establecer algo que se parezca a un sistema de **mercado libre** sino que consolidó la influencia de ciertos grupos, principalmente ligados a la exportación y al sector financiero, sobre áreas principales de la economía del país. (Montufar, 2000: 102, Resaltado mío).

Esta forma de plantear el problema de las relaciones entre el Estado y los empresarios, dentro del régimen autoritario de Febres Cordero, impide comprender el hecho de que, tal como ha sido planteado por varios críticos del liberalismo y del neoliberalismo (V. gr, Lander 2005), éste modelo de sociedad, es más la apuesta de las élites, particularmente financieras y comerciales, para fortalecer sus procesos de acumulación de capital, sin contraprestación y sin limitaciones. Un régimen, que le apuesta a la articulación de los capitalistas nacionales con los transnacionales, desregulado, en lo laboral y en lo social, pero duro en contra de los movimientos populares.⁵⁰

De este modo, lo que se establece en el Ecuador es un régimen político autoritario, corporativista y demagógico; un régimen que benefició a los grandes grupos económicos de

⁵⁰ Las críticas de Polanyi al liberalismo vienen también muy al caso. El modelo de sociedad del liberalismo económico, lejos de posibilitar articulación social alguna, es intensamente fragmentario e, incluso podría decirse, anti-social (Polanyi, 1989). Las críticas a la hegemonía neoliberal y a la manera en que esta cierra espacios de participación y diálogo (o los reduce a lo meramente consultivo e instrumental), al considerar que la orientación del campo económico es mera técnica y no política, han sido también desarrolladas por Mouffe (2009), en su “En torno a lo político”.

exportadores y de la banca, transfirió recursos a estos grupos, los benefició con exención de impuestos, etc. En la imposición de este régimen, Febres Cordero debilitó y/o cooptó al poder legislativo, reformó la constitución o, en términos coloquiales, *se la pasó por la faja*, al anular el control político por parte del Congreso; violó derechos humanos, limitó libertades; politizó a las fuerzas militares y a la policía; promovió torturas y desapariciones, etc. (Méndez-Carrión, 2003; Conaghan, 2003, Paz y Miño, 2015: 175). A este balance anterior, hay que agregar que dentro del gobierno de Febres Cordero, se constituyeron liderazgos importantes que lo acompañaron en el diseño e implementación de políticas y a algunos de sus sucesores. Este es el caso de personajes como Alberto Dahik, Carlos Julio Emanuel, Francisco Swett, quienes fueron los principales arquitectos de los planes de estabilización y de cambio de modelo de Febres Cordero (Conaghan, 1994: 129-137, Conaghan, 2003: 242-243).

De esta manera, en el caso ecuatoriano, varios elementos contribuyeron a que las políticas de ajuste fueran más graduales y, sobre todo, a que el pretendido neoliberalismo puro y duro del gobierno de Febres Cordero y de sus sucesores terminara siendo tremendamente corporativista y pro oligárquico. En primer lugar, Febres-Cordero provenía de la industria orientada al mercado interno, aunque con fuertes lazos con el capital extranjero. Además de esto, había tenido vida política como senador funcional a mediados de los años 60; había sido congresista antes de presidente; conocía los problemas del día a día de las industrias, etc. De ahí que, para Conaghan, se haya inclinado por una lectura gradualista de los ajustes, para permitir a la industria ajustarse progresivamente a los cambios (Conaghan, 1994: 156-158).

Además de lo anterior, varios de los funcionarios de Febres Cordero habían trabajado antes para las Cámaras de Comercio o Industria de Guayaquil. Uno de sus ministros fue Xavier Neira, quien ocupó la cartera del ministerio Industrias. Este aseguraba que no se buscaba destruir a las industrias que habían sustituido importaciones, sino hacerlas más eficientes. Así, las políticas de ajuste se hacen progresivamente y después de un largo proceso de negociación entre funcionarios del gobierno y líderes de la industria nacional (Conaghan, 1994: 159).

En segundo lugar, choques externos e internos debilitaron al gobierno. En el plano internacional, la fuerte reducción de los precios del petróleo, redujeron significativamente los ingresos del Estado y esto fue cubierto con créditos. En tercer lugar, en el plano nacional, un fuerte terremoto afectó las finanzas del gobierno; en cuarto lugar, la oposición en el congreso se vio fortalecida debido a un referéndum en el que el gobierno había depositado mucha energía y que buscaba más poder para el ejecutivo, en el que fracasó; en quinto lugar, las

protestas sociales crecieron a partir de un secuestro al presidente y esto llevó al gobierno a matizar las medidas y a buscar cómo constituir un soporte social que le diera legitimidad. Finalmente, la opción de un autogolpe no era viable, debido a la oposición de los Estados Unidos y al riesgo del aislamiento internacional. (Conaghan, 1994: 162-172).

Otros factores contribuyeron a la debilidad del gobierno e impusieron el gradualismo en las reformas neoliberales: la especulación de las élites y la fuga de capitales (Oleas, 2017: 218). Los candidatos para suceder a Febres Cordero no ofrecían, por otro lado, seguridad a los inversionistas. Por un lado, Rodrigo Borja y por el otro Abadalá Bucarán. El primero, un social demócrata que había perdido las elecciones de 1984, precisamente frente a Febres Cordero y, por el otro, un demagogo del Partido Roldosista Ecuatoriano. El gobierno de Febres Cordero termina así, como el de un neoliberal que fue "traicionado" por los empresarios que representaba, por su corporativismo, de acuerdo con el juicio que el mismo Febres-Cordero hace. Los empresarios, considera, no entendieron la crisis o pensaron sólo en sus bolsillos, más que en los intereses del país. No desconfió del modelo, sino de las personas que decían defenderlo, pero que contribuyeron a su fracaso: los empresarios especuladores. Las creencias de líder autoritario, de que el neoliberalismo generaría las alianzas suficientes para sostenerlo y proyectarlo en el largo plazo, se chocaron, con la práctica corporativista y clientelista de las élites políticas y económicas (Conaghan, 1994: 178-180).

De este modo, así como los gobiernos militares despreciaron las bases organizativas, en el caso de Febres Cordero, más allá de las organizaciones empresariales, la idea de cultivar un soporte social a través de un partido que penetrara socialmente nunca fue visto como un elemento sustancial que soportara la imposición de las reformas económicas adelantadas por este. Además, de esto, la unidad de las élites intentada por Febres Cordero, no resultó, motivando las críticas del gobierno. Así, éste responsabilizó a los capitalistas nacionales por su falta de visión y de no contribuir con la continuidad de sus políticas en manos de su sucesor: Sixto Durán Ballén, quién sólo obtuvo el 14.7% de los votos en las siguientes elecciones (Conaghan, 1994: 180-183).

De este modo, la coalición de partidos y movimientos políticos que sirvió para el triunfo de Febres Cordero, se rompió en el camino. Si el liderazgo de Febres Cordero no fue suficiente para articular a las élites, los gobiernos que lo suceden contarán con menos poder y operarán en un marco en el que la fragmentación social y política llegará al paroxismo. En este escenario, las élites económicas nuevamente saldrán beneficiadas de gobiernos mucho más vulnerables a su presión. Ningún gobierno podrá gobernar sin la anuencia y beneplácito de

estas. De hecho, obtienen cada vez más ventajas, que contribuyen a la acumulación de capital, pero también permiten que estas estén cada vez menos comprometidas con un proyecto nacional. La fuga de capitales se incrementa también significativamente, así como la especulación financiera y la evasión de impuestos, etc. Esto conduce a mayores niveles de concentración de la riqueza y, como contracara, al incremento de la desigualdad y la pobreza (Paz y Miño, 2015, Acosta, 1999).

En este marco, si bien la economía ecuatoriana se estabiliza en los primeros gobiernos neoliberales, el crecimiento es más bien mediocre. Así, mientras en la década de los años 60, el crecimiento económico ecuatoriano estuvo siempre por encima del 5%, alcanzando, en las primeras décadas, producto de la exportación petrolera, niveles de más del 20% anual, en toda la década de los 80, el crecimiento alcanza tasas considerablemente inferiores, con excepción de 1988, cuando se logra un crecimiento del 10%. En este escenario, el sector más golpeado por las políticas aperturistas de los gobiernos neoliberales de los años 80 es el industrial. Este registra, en la mayor parte de la década, tasas negativas de crecimiento y cuando crece, siempre lo hace por debajo del 3% (Paguay, 1992: 45). Como resultado, el mercado ecuatoriano se abre cada vez más a la penetración de capital e inversiones extranjeras que no logran, sin embargo un incremento significativo (Arteta, 2000, Acosta, 1999; Oleas, 2017). Para algunos, la inestabilidad institucional se convierte en un estímulo negativo para la atracción de capitales y, para otros, lo que hacen los gobiernos de finales de la década de los 80 y de los 90, es contribuir al favoritismo, el particularismo y el autoritarismo en la toma de decisiones económicas. El hecho es que, durante los años 90 la inversión extranjera es más bien mediocre y no sirve para resolver el problema del déficit en la balanza de cuenta corriente. Este déficit fue: 1990: -3.41%; 1991: -6,14%; 1992: -0.98%; 1992: -4.66%; 1993: -4,02%; 1995: -4,08%, 1996: 0.58% y 1997: -3.90% (Arteta, 2000: 20).

Por su parte, la evolución de la deuda externa, que venía ya en un franco crecimiento durante los años 70 y, particularmente a partir de mediados de esta década, no logra disminuirse a partir de los gobiernos neoliberales. entre 1981 y 1990, se pasa de una deuda de 5.868 millones de dólares, a 11.856 millones. La única deuda que logra una disminución significativa es la deuda de los privados, gracias a la compra de deuda en dólares por parte del Estado, conocida como “sucretización”. Esta pasa, de 1,451 millones de dólares en 1981 a 170 millones de dólares en 1990 (Paguay, 1992). De este modo, el poder de estado es usado para beneficiar los intereses privados de las élites económicas. De ahí que incluso defensores de la ideología neoliberal, consideren que lo que sucedió en este país, lejos estuvo de

promover una economía de libre mercado y más bien se hayan fortalecido los intereses corporativos (Romero, 2007). Autores con una mirada más crítica sobre estos procesos de liberalización de la economía coinciden con defensores del neoliberalismo como Pedro Romero Alemán, al considerar que los procesos de ajuste económico en el Ecuador condujeron a un fortalecimiento de los intereses de las élites (Burbano de Lara, 2006, Paz y Miño, 2015)

Ante el fracaso de las políticas de ajuste estructural para realizar el crecimiento económico prometido y, por el contrario, el hecho de que estas políticas empeoran las condiciones de vida de miles de ecuatorianos, la movilización social comienza a incrementarse a partir de los años 90, poniendo a prueba el dominio de los líderes políticos neoliberales. Particularmente el movimiento indígena gana protagonismo. La fuerza organizativa, el alcance nacional de sus manifestaciones y el progresivo agotamiento de la legitimidad de las élites políticas que impulsan las reformas neoliberales, sirven de cortapisa para frenar también una mayor radicalidad de las reformas económicas que los gobiernos pretendían impulsar (Santana, 1992, Pallares, 2002, Burbano de Lara, 2006, Paz y Miño, 2015, Pacari, 1996, Becker, 2011)

A pesar de lo anterior, al mismo tiempo que se incrementa la movilización popular, se profundizan también los procesos de reforma neoliberal, mediante reducción de aranceles y beneficios tributarios para los grandes empresarios. En este contexto se van a impulsar reformas laborales, reformas tributarias que pretendían simplificar los sistemas de recaudo de impuestos, reformas fiscales, entre otras (Hey y Klak, 1999, Mainguashca, 1993, Paz y Miño, 2015, Acosta, 1996, 1999)

La década de los años 90, se convierte así, en un escenario en el que la política ecuatoriana se complejiza significativamente. Las reformas económicas continúan privilegiando a los sectores dominantes, reduciendo progresivamente las capacidades del Estado para gobernar la economía y sucumbiendo ante las presiones de las élites económicas que buscan una creciente, aunque selectiva, liberalización de la economía. En este periodo, las presidencias de Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996), flexibilizan a la vez las relaciones laborales y las actividades crediticias; fortalecen la dependencia de la economía y la sociedad ecuatoriana frente a las determinaciones de la banca multilateral y conducen, a la intensificación de las tensiones sociales. En estos dos periodos presidenciales se produce también la agudización de la conflictividad social y se sientan las bases que conducen al fin de la precaria estabilidad política lograda desde 1979.

Con las políticas adelantadas por estos gobiernos, la de por sí limitada capacidad del estado ecuatoriano de regular la economía disminuye aún más. Como hemos visto, las élites empresariales ecuatorianas limitaron al máximo la constitución de un estado empresario y regulador de la economía en el desarrollismo. Como resultado de las limitaciones impuestas por las élites, en este país, no se desarrolló nunca una fuerte presencia del Estado como productor industrial, más allá de la producción petrolera y el control de algunos servicios públicos estratégicos como la producción de energía eléctrica y telecomunicaciones. El papel que los actores políticos de los años 60 y de manera más importante en los años 70, pretendieron darle al Estado, no pudo ir más allá de constituir a esta institución como un agente regulador de la economía y esto, de manera muy limitada (Acosta, 1999). De hecho, es importante destacar que las actividades comerciales o de intermediación que los gobiernos de los años 70 le dieron al Estado, no amenazó de manera significativa el lugar de la empresa privada de élites, tal como sucedió en el caso boliviano. Estas lograron frenar la ampliación de las capacidades del Estado y, de hecho, éste las benefició de manera muy significativa. Como complemento, las políticas proteccionistas, a través de altas tasas arancelarias a las importaciones, protegieron a la industria nacional y favorecieron la acumulación de capital (Mainguashca, 1993). La diversificación de inversiones hizo de la industria, de algún modo, apenas uno de los frentes de acumulación; un frente con un peso relativamente débil en la economía y cada vez más débil. Se beneficiaron sobre todo del comercio y de la especulación financiera, así como del mantenimiento o incluso de la reducción progresiva de los tributos que el desarrollismo estableció y que fue continuada en el periodo neoliberal (Paz y Miño, 2015). Esto llevó a que, desde el comienzo del Boom Petrolero, los gobiernos militares descargaran el acopio de ingresos, sobre todo en la explotación y exportación de hidrocarburos, disminuyendo de manera importante los ingresos del Estado provenientes de impuestos directos a la renta de las empresas y de las personas. Con el tránsito hacia la democracia, en los años 80, los ingresos del Estado continúan dependientes, sobre todo de la renta petrolera y en el momento en que ésta se disminuye, no tiene fuentes para sustituirla (Paz y Miño, 2015, Oleas, 2017).

Como hemos visto, cualquier intento de los gobiernos por incrementar impuestos directos, es respondida de manera feroz por las élites económicas y, particularmente por sus representantes institucionales: las cámaras de la producción. Se impone entonces en el periodo neoliberal, un progresivo sustituto para que el Estado logre los recursos suficientes para su mantenimiento y sus inversiones en materia social: los impuestos indirectos, que resultan ser

tremendamente regresivos en términos de bienestar de los sectores populares (Paz y Miño, 2015). Esto explicará también en parte el crecimiento de la protesta popular.

Es precisamente este incremento de las contradicciones sociales (mayor concentración de la riqueza, desmejoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de los ecuatorianos; disminución de la capacidad del Estado para el impulso de las políticas sociales -que son cada vez más reducidas al asistencialismo-, para gravar la producción de la riqueza; incremento de las desigualdades sociales y de la pobreza generalizada; mayor capacidad de presión de las élites económicas y mayor corrupción, lo que conduce a una creciente movilización y protesta social. Se generan entonces las bases para que la inestabilidad política se reinstala en Ecuador a partir de 1996. Desde este año y hasta 2006, el país es gobernado por 7 presidentes, algunos de los cuales duran apenas días en el poder. Pese a esto, las reformas neoliberales, graduales como se estableció desde el retorno a la democracia, continúan su camino. Las protestas sociales, son el mecanismo creciente para buscar frenar estas reformas, pero el carácter inorgánico de las mismas disminuye su potencial contrahegemónico.

Las políticas neoliberales, lograron disminuir significativamente la capacidad de articulación de los sectores laborales, por la vía de las reformas en los tipos de contratación. Al imponer cada vez más restricciones a la organización de los trabajadores, las protestas “ciudadanas”, se convirtieron en el mecanismo para canalizar los descontentos de millones de ecuatorianos con los modos en que se privilegió a las élites económicas en cada una de las reformas aplicadas. Sin embargo, el movimiento indígena que mostró un importante desarrollo desde las protestas de comienzos de los años 90, pronto mostró también sus límites. Su inserción electoral, si bien posibilitó la institucionalización de algunas de sus demandas (particularmente el reconocimiento de sus propias formas organizativas y la adjudicación de tierras en el oriente ecuatoriano, entre otras), también debilitó su potencia contrahegemónica (Santana, 1992, Becker, 2011).

De este modo, el corporativismo de las élites empresariales, su tradicional resistencia a políticas redistributivas, la creciente presión tributaria sobre los sectores menos favorecidos; el desmejoramiento continuo de las condiciones de vida de los ecuatorianos; un Estado plegado a las demandas de las élites económicas, sin contraprestación; la inestabilidad institucional, derivada por la ausencia de pactos entre las élites, entre otros problemas conducen a el incremento de las protestas callejeras. Pero estas no logran constituir liderazgos orgánicos.

La fragmentación política es la marca, así, difícilmente reversible de la política ecuatoriana. De esta fragmentación, los únicos que se benefician, son las élites económicas, que logran subordinar a los actores políticos y, frecuentemente someterlos a sus designios. Esto es lo que permite afirmar a Juan Paz y Miño, que lo que se constituye en el Ecuador, es un modelo empresarial de desarrollo. Afirmación que, aunque no carece de verdad, también es importante destacar qué tipo de modelo empresarial es el que se instaura en el Ecuador. No se trata, como se ha visto, de un modelo de producción económica eficiente, en términos de mejorar la producción, la productividad y la competitividad. De hecho, lo que sucede es todo lo contrario. La industria ecuatoriana sufre un proceso de retroceso en el periodo neoliberal. Crecen las actividades de intercambio; los negocios de importación y exportación y crece la especulación financiera. Se trata de un modelo empresarial especulador; un modelo en el que la progresiva desregulación laboral, tributaria, arancelaria y financiera beneficia sustancialmente a ciertas actividades de las élites, pero que no conduce a mejorar la producción nacional, ni a disminuir la dependencia externa.

Veamos, para finalizar este apartado, algunos detalles de la desregulación financiera sus impactos. En primer lugar, la especulación financiera, fue favorecida por los gobiernos de Hurtado y Durán Ballén inicialmente. A mediados de los años 90 Ecuador se convierte en receptor de capitales golondrinas que son usados por la banca nacional para especular, en negocios tremendamente riesgosos, que al final conducen a la quiebra del sistema financiero ecuatoriano. A través de maniobras muy peligrosas e incluso ilegales, los grandes grupos económicos del Ecuador con vínculos con la banca, se enriquecen a costa de los recursos del Estado que termina por cubrir, a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, la totalidad de las deudas en las que incurren banqueros sin escrúpulos (Gestambide, 2011; Acosta, 1999, 2001).

El cortoplacismo, como orientación dominante de los distintos actores políticos; un cortoplacismo, por otro lado, instaurado institucionalmente⁵¹, fue otro de los elementos que condujeron a la crisis del modelo pseudo empresarial de desarrollo, que se instaura desde los años 80 y, particularmente, desde el gobierno de León Febres Cordero. Un Estado desvalijado, con muy débiles capacidades de maniobra económica, tributaria, etc., es el que configuran las élites empresariales dominantes en los años 90. El mismo Banco Central, encargado de la política monetaria, creado al amparo de la Revolución Juliana, a partir de la Dolarización de la economía ecuatoriana, iniciada por Jamil Mahuad Witt y concretada por su

⁵¹ La misma prohibición de la reelección de diputados, contribuye a esta proyección política de corto plazo.

sucesor, Gustavo Noboa, sucumbió, en medio de las políticas de salvamiento de la banca nacional, y de los comerciantes importadores-exportadores (Paz y Miño, 2015, Gestambide, 2011, Acosta, 2001) Algunas herramientas técnicas, heredadas de los últimos gobiernos neoliberales, sin embargo, servirán para su estabilidad, particularmente el Servicio de Rentas Internas, creado en 1997. Ampliaremos esta discusión en el siguiente capítulo, eje central de la disertación de éste investigación.

4.2. Bolivia: Vicisitudes del neoliberalismo radical y bloque hegemónico político-empresarial

Como vimos atrás, en el caso boliviano, el tránsito hacia la democracia electoral y, también hacia el neoliberalismo, se da como resultado de un proceso en el que las opciones dictatoriales han perdido el respaldo de las élites políticas y económicas y donde las fuerzas políticas subordinadas no han logrado construir unas propuestas económicas viables y sostenibles, después de la grave crisis económica que se gesta en el gobierno de Hugo Banzer (Arze, 2002; Pachano, 2007, 2010, Burbano, 2006, 2008, 2014). A diferencia del caso ecuatoriano, en Bolivia, una mayor articulación entre los partidos políticos más fuertes (MNR, ADN y MIR) y las élites empresariales lideradas por la CEPB, principalmente, servirá de base para el diseño y ejecución de políticas de *shock* mucho más coherentes y sistemáticas, aunque no exentas de contradicciones. En este caso, un elemento central que fortalece, al menos temporalmente, la hegemonía del neoliberalismo es la más amplia y profunda articulación de las distintas élites empresariales a través de la CEPB como organización *top*. El liderazgo construido por esta organización se fue fortaleciendo poco a poco, así como su autoconciencia del poder estructural e instrumental acumulado, sobre todo durante y después de la dictadura de Hugo Banzer (Sanjinés, 2004, T1, Mansilla, 1994).

Varios factores explican el modo en que se produce el proceso de “democratización” y el establecimiento del neoliberalismo en Bolivia. En primer lugar, el periodo que va de finales de los años 70 a comienzos de los años 80, es de una intensa actividad popular, sindical y obrera. La movilización social que alcanza dimensiones revolucionarias amenaza los intereses de las élites y los sucesivos gobiernos de finales de los años 70 y comienzos de los 80, pierden progresivamente margen de maniobra. La amenaza de la revolución parece ser cada vez más real para las élites económicas y, en respuesta, buscarán incrementar su protagonismo en la esfera público-política. Una vez finalizan las dictaduras militares y se establece el gobierno de la UDP; las élites cuestionan a este gobierno por su falta de voluntad o su incapacidad para “pacificar” al país y poner freno a las demandas de los obreros liderados por

la COB. Critican así mismo la capacidad del gobierno para dar solución a la creciente inflación.

En segundo lugar, las difíciles condiciones en las que se establece el gobierno de la UDP (déficit fiscal, devaluación, inflación, deuda externa, protestas y movilización social y un escenario internacional muy difícil para los productos de exportación bolivianos), hacen que éste sea incapaz de tomar medidas que permitan salir de la crisis. Pese a que el gobierno cuenta con el respaldo relativo del parlamento, no cuenta con el concurso de las élites políticas y económicas, para buscar salidas a la crisis dentro del mismo modelo de protagonismo estatal edificado desde 1952. El mismo Estado es cuestionado, en el contexto internacional, como la institución causante de la debacle económica de finales de los 70 y comienzos de los 80. Derivado de lo anterior, en tercer lugar, la debilidad estructural del Estado se ve agravada con la fragilidad política del gobierno de la UDP, lo que debilita la viabilidad de alternativas distintas al neoliberalismo.

Finalmente, el empresariado boliviano es liderado en este momento por una persona como Fernando Illanes, quien da a esta agremiación una más eficiente organización y liderazgo y esto se ve favorecido por el incremento de sus miembros. El consenso al interior del empresariado boliviano sobre la necesidad de reducir el papel del Estado en la economía se ha venido consolidando. La mayor parte de los líderes empresariales son protagonistas en la construcción ideológica, a través de distintos mecanismos, del neoliberalismo como la única salida a la difícil situación de la economía boliviana. En este marco, La CEPB, incrementa su protagonismo, así como sus demandas; las hace más sofisticadas y perfecciona su discurso tecnocrático y, a partir de éste, exige democracia electoral y mercado libre como las soluciones ineludibles para la sociedad boliviana (Mansilla, 1994; Sanjinés, 2004, T1, Tsolakis, 2009).

Ahora bien, ¿cómo se constituyó esta mayor articulación entre élites política y económicas en Bolivia? ¿Cómo fue posible que, pese a los tremendos impactos que el neoliberalismo podía ocasionar en la industria nacional, entre otros sectores, la CEPB, haya logrado tal nivel de hegemonía al interior del empresariado y en el campo político boliviano en general, como para que las resistencias a las medidas neoliberales más radicales pudieran ser minimizadas?

Responder a estas preguntas implica revisar el proceso anterior a la implementación del neoliberalismo. Supone reconocer que el campo político nacional ha experimentado transformaciones estructurales en las que el empresariado, particularmente minero,

agroindustrial, exportador y financiero, bajo el liderazgo de la CEPB, durante los años 70 y 80, ha logrado constituirse como referente político e ideológico a nivel nacional. Para lograr este liderazgo, esta organización desplegó una serie de estrategias de visibilidad, de negociación con otros actores políticos y económicos (particularmente los líderes históricos de MNR y ADN); configuró una institucionalidad social, educativa y publicitaria que posicionó el discurso de la democracia electoral y del “libre mercado” como la salida a las crisis. El contexto internacional favorece esta postura (Sanjinés, 2004, T1, T2; Romero, 1996; Mansilla, 1994).

Tal como se ha planteado atrás, se produce entonces un proceso de acumulación de poder, a la vez estructural, en términos de control de medios de producción y acumulación de capital privado, y poder instrumental, en términos de capacidad de influencia política por parte de las élites empresariales (Durand y Campodónico, 2010, Fairfield, 2015; Wolf, 2016). De ahí que la participación de estas en el diseño e implementación del “modelo”; de la “Nueva Política Económica” (que se concretó a través de famoso Decreto Supremo, 21060), como se le llamó a la implementación de medidas neoliberales por parte del gobierno de Víctor Paz Estenssoro en un comienzo, haya sido tan primordial y protagónica. Este cambio estructural en el campo político, además, dejó por fuera alternativas históricas y el campo popular, tardará unas décadas en recomponerse.

Así, durante el gobierno de la UDP, en 1983, la CEPB, continúa su proceso de fortalecimiento institucional y de acumulación de poder político-ideológico iniciado en el gobierno de Banzer. Esta organización empresarial que había venido constituyéndose en referente ideológico, institucional y económico pide, desde finales de los años 79, la reorientación de la economía boliviana, de manera cada vez más frontal y desafiante. Sus declaraciones públicas y sus estrategias de interpelación del poder de Estado exigen disminuir al protagonismo Estatal y fortalecer el papel de los actores privados. Su participación política fue clave, de hecho, para el retorno a la democracia electoral y para la formalización del gobierno de la UDP.

Cuestionaron duramente el manejo político y económico de los últimos gobiernos militares y exigieron “¡Democracia Ya!”, a tiempo que publicaban “*ultimátums*”, amenazando, de diversas formas al gobierno. (Sanjinés, 2004, T2: 22-35, Mansilla, 1994, Tsolakis, 2005).

En este marco, pese a que consideraron al gobierno de Hernán Siles Zuazo, como un mal necesario, desplegaron una férrea oposición y crítica permanente. Las relaciones con el mismo fueron, salvo pocas excepciones, muy conflictivas. Acusaron incluso al gobierno de la UDP, de poner en riesgo la democracia y de buscar establecer una dictadura de clase

(Sanjinés, 2004, T1: 46) Las políticas de la UDP (V. gr el incremento salarial), en búsqueda de paliar la situación de millones de bolivianos que venían empeorando sus condiciones de vida, fueron fuertemente cuestionadas por la CEPB. El protagonismo de la COB, en la gestión de asuntos políticos dentro del gobierno de Siles Zuazo, fue expuesta por esta organización como una afrenta para la democracia y el pluralismo. Así, frente al incremento de las tensiones sociales, en agosto de 1983, declararon que:

Frente a la lucha de clases que algunos pregonan, proclamamos la unidad de los bolivianos y la alianza de clases y sectores.

Frente a cualquier régimen totalitario, proponemos la preservación del régimen democrático, con libertad, pluralismo, derecho a disentir y vigencia de la ley para todos.

Frente a planteamientos económicos ilusionistas y milagrosos, planteamos el incremento cualitativo de la producción como única vía para frenar la crisis.

Frente a los avasallamientos de la Ley, de las instituciones y del modelo de vida escogido por el pueblo, decimos ¡BASTA! (sic)

Reiteramos la necesidad de institucionalizar el diálogo

No se trata de decir No a la COB: no se trata de que se diga NO a la empresa privada; de lo que se trata es decir Si a Bolivia”. (Declaración de la CEPB, Agosto de 1983. En, Sanjinés, 2004, T2: 47).

En estos términos, los empresarios buscan posicionar un discurso de articulación, nacionalista incluso, que incluye a los distintos actores sociales en la toma de decisiones colectivas. El discurso de la democracia y el mercado se configura como el eje central de los manifiestos de la CEPB, durante el gobierno de Siles Zuazo. Un gobierno debilitado que intenta maniobrar en medio de una borrasca económica, política y social incontrolable. La imposibilidad del gobierno para acopiar recursos con sustento en producción real, para gestionar inversiones, crear empleo, desarrollar infraestructura, terminó por complicar aún más la situación de Bolivia y por radicalizar las posiciones de un empresariado que se tornó cada vez más beligerante.

En este proceso, que resulta ser la estocada final para alternativas distintas al neoliberalismo y bajo el liderazgo de Fernando Illanes, quien tenía inversiones en varios sectores de la economía (Tsolakis, 2009; Mansilla, 1994, Sanjinés, 2004: T2; Conaghan, 1994), la CEPB, presiona al presidente Siles Zuazo, para que tome medidas de liberalización y desregulación. Exige la eliminación del control de precios, especialmente de los productos agrícolas, la eliminación de los subsidios al consumo, la introducción de leyes laborales más flexibles, propone la renegociación de la deuda externa y el restablecimiento del crédito internacional

para Bolivia, sin lograr mayores resultados. Pero la situación, para 1984, es aún más grave. La hiperinflación aparece y las presiones al gobierno de la UDP, se incrementan de todos lados. De la izquierda y la derecha, se pide la salida del gobierno de Siles, pero incluso la CEPB, es consciente de que la salida militar no es viable en este momento (Conaghan, 1994: 120-124). Las reformas exigidas por la CEPB, tendrán que esperar al gobierno de Paz Estenssoro y sus sucesores, para convertirse en política de Estado.

En medio de las tensiones sociales, las élites, tanto políticas del MNR Y ADN, como económicas, lideradas por la CEPB, llevan a cabo un proceso de articulación ideológica en el que las distancias sobre la concepción del Estado y de su lugar en la sociedad se estrechan progresivamente. El mismo Paz Estenssoro, había dado ya el viraje del nacionalismo “estatista” a la defensa de la economía de mercado. Una muestra de esto es el debate promovido por la CEPB, en mayo de 1985, donde se hacen evidentes estos acercamientos y la disminución de temor sobre las posibilidades de que Paz Estenssoro regresara al poder. Por otro lado, son cada vez más importantes los asesores económicos que convergen también para "sacar a Bolivia de la crisis". En este mismo año, viaja a Bolivia Jeffrey Sachs, quien es uno de los arquitectos claves de la "Nueva Política Económica" (NPE). (Conaghan, 1994. 127-128).

La historia de cómo se va configurando la NEP, muestra el grado de articulación ideológica que los distintos actores políticos y económicos dominantes logran. La economía de mercado y la democracia electoral se ven cómo las únicas salidas para una economía en franca decadencia y, en este marco, las élites empresariales jugarán un papel central (Sanjinés, 2004, T2: 30; Tsolakis, 2009, Grebe, 2001). De la cuna de esta organización van a salir los equipos que van a diseñar las políticas de *Shock* y luego las reformas estructurales. El mismo economista Jeffrey Sachs, uno de los cerebros de las reformas, llegó a Bolivia gracias al “reclutamiento” y financiación, a título personal, de miembros de esta organización, quienes pusieron los servicios de éste a favor del equipo económico de la candidatura de Hugo Banzer. Sanjinés, comenta al respecto cómo este equipo, integrado por

(...) Carlos Iturralde, Ronald MacLenan, Willy Vargas, David Blanco, Mauro Botero, Raúl Boada, Jorge Balcázar y Álvaro Ugalde... participaron en Harvard en un seminario destinado a formular las bases del programa económico del futuro gobierno de Bolivia.

Carlos Iturralde cuenta su participación en el asunto afirmando que, durante ese seminario en Boston, entre el grupo de profesores de Harvard se distinguía uno que hacía muchas preguntas. Era Jeffrey Sachs, apasionado por el fenómeno inflacionario boliviano y conocedor de las

particularidades del contexto político y económico del país. Surgió entonces la idea de contratar sus servicios para asesorar al gobierno de Banzer. Iturralde se reunió con Sachs, le planteó venir a Bolivia y le financió su viaje (Sanjinés, 2004, T2: 79)⁵²

Como han planteado varios analistas, el proyecto de las élites empresariales era que el gobierno que llevaría a cabo las reformas estructurales en Bolivia, fuera del de Hugo Banzer. No obstante, en medio de una campaña con gastos excesivos, afirma Conaghan (1994), lleva a que Banzer gane el primer lugar en las elecciones, pero con un reducido margen frente a Paz Estenssoro. El primero obtiene el 28% de los votos, mientras que Paz, logra el 26%. Con esto, la designación del nuevo presidente se realiza a través del Congreso, donde, gracias a la alianza de los partidos de “izquierda”, particularmente con el MIR, Paz Estenssoro, resulta elegido presidente. Una vez en el poder, Paz Estenssoro “hereda”, tanto el equipo económico de Banzer, como el programa de reformas diseñado por el mismo (Sanjinés, 2004, T2: 79, Grindle, 2003: 319). A partir del triunfo de Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada, el empresario minero que había acumulado una buena cantidad de poder al interior del empresariado como uno de sus máximos dirigentes e ideólogos, gana protagonismo y se constituye como el jefe del equipo que va a plantear el programa de estabilización económica (Tsolakis, 2009, Conaghan, 1994). Todo esto se desarrolla en el marco del "Pacto por la democracia" al que llegan los principales partidos políticos, incluyendo al derrotado ADN de Hugo Banzer y a los máximos líderes el empresariado privado.

Así, el equipo liderado por Sánchez de Lozada estará conformado por Juan Carriaga, economista independiente que había trabajado en el equipo económico asesor de Hugo Banzer en la campaña; Fernando Romero, un empresario del "grupo consultivo" de la CEPB.⁵³ Por su

⁵²El también presidente de la CEPB, Carlos Morales Landívar, se da la autoría de la contratación del académico norteamericano, para asesorar los programas de ajuste de la economía boliviana. Afirma, puntualmente que “Yo contraté a Jeffrey Sachs, como una contribución personal y de la CEPB. Le pagamos sus honorarios, vino a la Confederación y lo presentamos al presidente Paz Estenssoro, quién lo conoció a través de nosotros, aunque Sachs ya conocía al resto de personas que llevaron adelante el proceso del 21060. El DR. Paz organizó un grupo de personas del Sector privado que acompañó el proceso de estabilización, donde estaba Fernando Romero, quien al finalizar 1985 renunció y yo asumí la presidencia”. Sanjinés, 2004, T2:85)

⁵³ Este empresario había sido parte del grupo boliviano que compró los intereses comerciales, industriales y financieros de la Casa Grace, cuando ella tomó la decisión de Salir de Latinoamérica”. En la compra de esta casa comercial, que se constituye en uno de los grupos económicos más poderosos de Bolivia, “participaron... tres bolivianos y un norteamericano: Hugo Villegas, Jorge Crespo, Fernando Romero, James Raaf, Samuel Doria Medina (padre), Arnoldo Jurgensen y Ramiro Cabezas (Sanjinés, 2004, T2: 82-83). Buena parte de los equipos económicos salen entonces de las redes económico-políticas que se articulan a partir de la CEPB, pero van a compartir una particularidad: la mayoría está vinculado con las industrias extractivas que están muy interesadas en articularse con el capital transnacional; o bien tienen vínculos con el capital financiero y comercial. Estos años van a estar dominados entonces, por élites especuladoras que aspiran a fortalecer sus propios negocios, incluso por encima de la de por sí débil industria privada nacional. A la postre, como se verá más adelante, de estas élites industriales saldrán los principales críticos del modelo.

parte, los ministros que completaron el equipo que elaboró el Plan de Estabilización, fueron: Guillermo Bedregal, ministro de planeación y Roberto Gisbert, ministro de gobierno, todos vinculados a la CEPB (Sanjinés, 2004, T2). Al decir de Conaghan (1994:128), se trató de un equipo pequeño, exclusivo y secreto, debido a la concepción de Paz Estenssoro de que se debía minimizar la interferencia de los partidos y de los grupos de presión, para poder desmontar el modelo estado-céntrico.

Como puede verse, en Bolivia, quienes compiten por el poder en 1985, no tienen grandes diferencias y el equipo que va a diseñar el Decreto 21060, estará constituido por líderes empresariales y asesores del MNR y ADN. Estos cuentan con la colaboración del MIR. Ahora, podría decirse que la profundidad de la crisis boliviana es uno de los elementos centrales que favorece la mayor articulación de las élites políticas y económicas, lo que no sucedió en el caso ecuatoriano.⁵⁴ Además, en Bolivia, se cuenta con una intensa actividad popular, lo que también sirve de motivos para esta articulación. ES en este contexto donde puede verse con claridad que la disputa por el Estado, es una lucha por orientarlo, por darle sus perfiles y, desde éste, a la sociedad en su conjunto, hace parte de la lucha por la hegemonía.

De este modo, en Bolivia, a partir de estas alianzas, los cambios implementados lograron ser mucho más consistentes que en el caso ecuatoriano. Así mismo, tal como se ha mostrado atrás, la situación económica ecuatoriana no es tan grave, mientras que en caso de Bolivia el gobierno de Víctor Paz Estenssoro tiene que enfrentar una situación "catastrófica". La hiperinflación estaba por las nubes y la economía amenazaba colapsar. En Ecuador la economía de hecho se venía recuperando y mostrando signos de crecimiento, a finales de los años 70 y comienzos de los 80.

De esta manera se configura el consenso en el equipo de asesores de Paz Estenssoro. Los cambios debían ser rápidos y drásticos. Lo extremo de la situación requería, para éstos, un tratamiento de *Shock*. El freno de la hiperinflación fue la tarea inmediata del equipo liderado por Gonzalo Sánchez de Lozada; así mismo, se debía reducir el gasto del gobierno y de las empresas públicas; gasto que fue interpretado como el principal causante de la inflación. Para Paz Estenssoro, el país estaba muriendo y la economía en coma, visión que fue compartida

⁵⁴ Durante los gobiernos militares, varios empresarios fueron amenazados, secuestrados o incluso asesinados. En el tránsito del gobierno de Siles Zuazo al de Víctor Paz Estenssoro, fueron secuestrados empresarios por parte de miembros de la COB. Esto, finalmente habría fortalecido el proceso de unidad ideológica del empresariado y la búsqueda de éste de establecer un régimen de gobernabilidad más eficiente. Este será uno de los principales objetivos del gobierno de Paz Estenssoro (Sanjinés 2004, T2: 69-71)

por Sánchez de Lozada (Conaghan, 1994: 142-143). Esta lectura, no puede dejar de lado, para la adecuada comprensión del proceso, el tremendo hueco que dejó para la economía boliviana, el gobierno de Hugo Banzer a través de su política de hiper endeudamiento y en pro de la concentración de la riqueza.

Ahora bien, la posibilidad de implementar los programas de ajuste dependió también de la capacidad de articulación de las élites políticas en el Congreso o, al menos, de la capacidad de Paz Estenssoro de minimizar las posibles resistencias a las políticas económicas a implementar. En Bolivia esto se logró mediante el acuerdo entre Paz Estenssoro y Hugo Banzer, lo que, sumado al poder discrecional del ejecutivo, permitió enfrentar mediante la represión, las protestas populares que se levantaron a partir del famoso decreto 21060, que contenía las orientaciones de la Nueva Política Económica.

Sin embargo, Paz Estenssoro enfrentó, con represión, a las protestas de una COB, en decadencia desde el gobierno de Siles Zuazo. Así, encarceló sin base legal a sus dirigentes, dentro de los que estaba Lechín Oquendo, en 1985. En el marco del respaldo de distintos sectores, en 1986, este gobierno no dudó en usar la represión para bloquear las aspiraciones de los movimientos populares. Un elemento que destaca Conaghan, como base de la "derrota" de los sindicatos en Bolivia (elemento que es compartido también por Ecuador y Perú) fue su marginalidad en términos estructurales, pues los trabajadores formales representan una pequeña porción del empleo en los países de AL. De acuerdo con Alejandro Portes, citado por Conaghan, el tamaño del trabajo informal representa en Bolivia, el 56% y en Ecuador, el 52%. Este hecho se constituye en un serio obstáculo para la organización de los sectores populares y, por tanto, en este contexto, para enfrentar las políticas neoliberales. El neoliberalismo contribuiría aún más a debilitar los procesos organizativos de los trabajadores, en la medida en que inserta políticas de flexibilización y privatización que generan la atomización de los trabajadores organizados (Conaghan, 1994: 140-150). De ahí, diríamos, que no sean estas organizaciones las encargadas de oponerse a los efectos del neoliberalismo, sino que esta oposición proviniera, más adelante de otras formas organizativas

Este es el escenario en el que el discurso que se impone progresivamente en Bolivia sostiene que un mercado "incontaminado" sería el encargado de regular las relaciones políticas y económicas de manera más eficiente. Pero esto no era lo que esperaban muchos de los empresarios que vieron afectados intereses concretos. Así, la idea según la cual, el mercado lejos de asignar los recursos eficientemente termina favoreciendo al corporativismo, se hace visible. Los industriales que producen para el mercado interno son afectados por las políticas

neoliberales y comienzan un trabajo de Lobby para defender sus intereses. En Bolivia, sin embargo, la oposición a la liberación del mercado por parte de las élites industriales no tuvo éxito, pero sí en Ecuador. (Conaghan, 1994: 151-152).

Otros cuestionamientos a las políticas de ajuste estructural provinieron de la Cámara Nacional de Industrias y los agroindustriales de Santa Cruz, organizados en la Cámara Agropecuaria del Oriente. De manera precisa, se opusieron a las medidas que unificaban tarifas y que abrían el mercado a productos extranjeros. Se quejan de la sobrevaluación del peso, los altos costos del transporte interno y de la ausencia de incentivos que tenían países vecinos, lo que limitaba su capacidad de competir con productores extranjeros: presionaron al ejecutivo, pero fracasaron.

Frente a las resistencias de algunos sectores al nuevo modelo económico, Ricardo Sanjinés, con base en declaraciones de un líder industrial comenta que

(...) no todos estaban contentos con el modelo en el sector privado. Por ejemplo, la industria tenía una percepción negativa del 21060. Javier Lupo Gamarra, entonces presidente de la Cámara Nacional de Industrias, explica que los sectores productivos, especialmente el manufacturero, sintieron una preocupación enorme porque se suponía que una apertura de esa naturaleza iba a significar la quiebra de todo el sistema productivo nacional, Había dudas de que la industria boliviana esté preparada para responder en toda su amplitud al desafío (Sanjinés, 2004, T2:89)⁵⁵

No obstante, el gobierno se mantuvo en sus propósitos, para garantizar la credibilidad frente al mercado internacional. Con esto, en el caso boliviano se reforzó el lugar marginal de la industria nacional en generación de empleo y como potenciadora de Producto Interno Bruto. De hecho, los mismos industriales que al comienzo critican algunas de las implicaciones del ajuste estructural, termina por aceptarlo y sumarse a su defensa (Sanjinés, 2004, T2: 90). Por

⁵⁵ Pese a estas críticas al modelo, éste mismo líder empresarial, terminó por mostrar su complacencia con los efectos de las reformas neoliberales. A respecto, comenta que: “Fuimos viendo que en realidad no habíamos sido tan ineficientes como pensábamos. Pero sobre todo tomamos conciencia de que o nos modernizábamos y nos volvíamos competitivos o sucumbíamos. Aprendimos que no se podía seguir viviendo en función de mercados cautivos, con fijaciones de precios. Nos dimos cuenta de que –si bien iban a quedar empresarios muertos y heridos en el camino- la oferta y la demanda debía funcionar, no había otro camino” (Sanjinés, 2004, T2: 90). Éste discurso muestra, además de su dramatismo (empresarios que morirían o resultarían heridos), la manera en que el discurso neoliberal termina por establecerse como dominante incluso al interior de quienes, dentro de las élites empresariales, podrían verse afectados por el neoliberalismo. Pero también se ve cómo el discurso neoliberal, termina por naturalizarse dentro del empresariado; como algo que no da pie para alternativas. Las alternativas son “adaptarse” (“modernizarse”) o Sucumbir. La adaptación se asume como un reto, del que puedes resultar muerto o herido, pues “la oferta y la demanda debía funcionar, no había otro camino”. El discurso de este industrial no podría entenderse bien, si no se tiene en cuenta que se trata de uno de los ejecutivos de “Industrias Albus”, conglomerado industrial de producción de insumos médicos, que terminó, de acuerdo a su propia publicidad, por controlar el 70% de las ventas de su campo en Bolivia.

otro lado, el gobierno siempre se negó a negociar intereses sectoriales. Lo mismo sucedió con los agro-empresarios de Santa Cruz (de la CAO), que habían gozado de un boom en los años 70. Su lugar político y económico fue cada vez más marginal. De hecho, menciona en este sentido Conaghan, estos agro-empresarios no eran los más productivos, pues estaban por debajo de las haciendas de Menonitas y japoneses, que no hacían parte de la CAO. Ahora bien, la CEPB, hizo eco de las quejas de la CAO y la CNI, por lo abrupto de la liberalización, pero no hizo de estas causas su tema central, gracias a la heterogeneidad de quienes constituían esta organización y al peso relativamente inferior de estas organizaciones al interior de la CEPB.

Quienes si resultaron altamente beneficiados de los cambios fueron los empresarios importadores vinculados a la CAINCO. La tarea de la CEPB se centró entonces en contribuir a la reactivación reactivar la economía, a partir de la presión para que las tasas de interés se redujeran y para que el sector privado accediera más fácilmente a créditos (Conaghan, 1994: 153-156) En éste marco, Conaghan explica que el hecho de que la oposición a las medidas neoliberales no haya sido contundente, obedeció a tres factores centrales en Bolivia: 1. El decreto 21060 desreguló las leyes laborales, terminó con el control de precios, entre otras iniciativas que fueron acogidas con beneplácito por los empresarios, 2. Todas las organizaciones empresariales soportaron ideológicamente el modelo, aplaudieron el nuevo respeto por los principios del mercado y el gobierno se comprometió a reducir el rol del Estado en la economía; y, 3. Los líderes empresariales recibieron bien la constitución de un gobierno fuerte y el restablecimiento del orden luego de décadas de incertidumbre política; celebraron también el restablecimiento de las relaciones con la comunidad financiera internacional. La retórica pro capitalista fue música para los oídos de los empresarios que se habían sentido profundamente amenazados por el “radicalismo” de los trabajadores y los disturbios ocurridos en el gobierno de Siles Zuazo (Conaghan, 1994)

Ahora bien, a pesar de las diferencias con el caso ecuatoriano, se pueden identificar algunos elementos comunes en la imposición del neoliberalismo, tanto en Bolivia como en Ecuador, desde la perspectiva de Conaghan. En primer lugar, el fortalecimiento del poder ejecutivo que neutralizó la oposición en el congreso, particularmente en Bolivia. En segundo lugar, la división de las élites económicas, debido a que las medidas beneficiaban a unos y perjudicaban a otros. En tercer lugar, fueron implementados por "verdaderos creyentes en el modelo". En Ecuador, se atemperó la implementación del modelo neoliberal por la creencia en el gradualismo, pero en los dos casos habría una creencia verdadera en la necesidad de las

medidas implementadas. Además, en los dos casos las élites políticas y económicas que lideraron los procesos, compartían una mirada negativa de la sociedad civil y los partidos políticos, que eran vistos como disruptivos y buscadores de rentas. Finalmente, los dos casos se destacan por el presidencialismo y el personalismo en la toma de decisiones (Conaghan, 1994: 160-161). No obstante, esta lectura, la división de las élites económicas en Bolivia, logró ser superada gracias al papel jugado por la CEPB en el campo empresarial y por Paz Estenssoro en el campo político, lo que minimizó el impacto de las críticas de los industriales y de otros sectores sociales.

Además de lo anterior, es necesario plantear que en el Ecuador, las élites que lideran el tránsito hacia el neoliberalismo, a diferencia del caso boliviano, no son capaces de (o no estuvieron interesados por) constituir una alianza duradera; no hicieron un manejo político adecuado de la coalición que los llevó al poder, pues no establecieron las bases para que esta fuera sostenible a lo largo del tiempo; no constituyeron una organización política sólida capaz de generar un soporte masivo que sostuviera las reformas neoliberales a largo plazo. Ahora bien, la pregunta que cabría a las interpretaciones de Conaghan y otros, es si la sostenibilidad del modelo neoliberal era posible, dadas las condiciones corporativas de las organizaciones sobre las cuales se edificó el proyecto neoliberal. De hecho, en el caso boliviano, la falta de sustento popular a las reformas, los tremendos efectos en términos de incremento de la desigualdad y la pobreza que estas reformas generaron, condujo a que, a la postre, el proyecto hegemónico neoliberal se hiciera insostenible en el mediano plazo. Pese a que en Bolivia los partidos políticos más importantes lograron un acuerdo para mantener el modelo económico, en conjunto con las élites empresariales organizadas, el personalismo también terminó por afectar la imposición de la NPE. Las mismas dinámicas de las reformas (el secretismo, la ausencia de la "sociedad civil" en la elaboración y gestión de estas, el elitismo, etc.) contribuyeron a debilitar el soporte social de las reformas neoliberales (Freindemberg, 2003). En éste mismo sentido, las personalidades que impulsaron las reformas, demasiado "confiados" en sus capacidades técnicas para elaborarlas e implementarlas terminaron por marginalizar a las estructuras partidistas. He ahí, la gran contradicción de las reformas de primera generación. Además de esto, no había una base sólida sobre la cual transformar las estructuras sociales, políticas y económicas, lo que condujo a que los grandes beneficiarios de la NEP, fueran los mismos que las impulsaron: Empresarios y políticos interesados en el comercio de importación y exportación, pero no en la producción económica en manos de actores nacionales. Así las cosas, los partidos políticos, como lo ha planteado Pachano en

varias oportunidades (2003, 2007, 2010), son marginalizados de las reformas; son usados para la movilización electoral, pero no son soportes organizacionales sólidos capaces de mantenerse en el tiempo. Las crisis económicas hacen que, de esta manera, se presenten tensiones entre quienes impulsaron el cambio de gobierno, pero que pronto fueron marginalizados.

Pese a lo anterior, los rápidos efectos del decreto 21060 en términos de poner freno a la inflación, contribuyó a legitimar las reformas. Las posibilidades de consumo de productos importados por parte de las clases medias, también permitió que estas terminaran por reconocer las “bondades” de las políticas de ajuste. Así, el adecuado manejo político de las reformas en el caso boliviano fue una pieza clave del relativo éxito de Paz Estenssoro y sus sucesores. El pacto con la ADN de Banzer y luego con los miembros más importantes de los demás partidos políticos que establecieron la “democracia pactada”, contribuyó a que las mismas se sostuvieran en el tiempo. Del mismo modo, Paz Estenssoro aseguró el soporte del congreso y estableció un marco institucional que lo mantenía bajo control.

Los choques externos amenazaron las políticas, pero la pronta intervención de Jeffrey Sachs sirvió para impedir virar un camino que tuvo continuidad, además, por la sucesión del gobierno de Jaime Paz Zamora, que, si bien perteneció al MIR, y en apariencia era un izquierdista radical, terminó por aceptar y continuar el legado neoliberal de Paz Estenssoro (Ortuste 2009; Sanjinés, 2004, T2,). Hay que tener en cuenta, que, en esta transformación, en las elecciones regionales el MIR, tuvo importantes votaciones y se perfilaba como opción, junto con Hugo Banzer, para sustituir a Paz Estenssoro, en las elecciones de 1988, donde, Jaime Paz Zamora resultó elegido presidente por el Congreso, sin contar, nuevamente, con la mayoría de los votos (Conaghan, 1994: 190-193). Esto sirve para afirmar que lo que sostiene el modelo durante cerca de 20 años es el pacto entre las élites, que, aunque divididas en tres partidos dominantes, logran en las sucesivas elecciones, más del 70% de los votos. Dentro de la “democracia pactada”, de este modo, no importa el vencedor, pues hay un acuerdo en “lo fundamental” entre los líderes de los partidos políticos más fuertes.

De este modo, las políticas neoliberales lograron impulsarse de manera más o menos coherente y sistemática en Bolivia, pero esto no sucedió en el caso ecuatoriano, donde tampoco, como ya se ha dicho, se había desarrollado un fuerte estatismo, en el periodo de las políticas de desarrollo por sustitución de importaciones. Tampoco allí los sectores populares representaron una seria amenaza para el dominio de las élites económicas. En el caso boliviano, las élites empresariales fueron responsables directas, junto con un “selecto grupo”

de asesores internacionales de las reformas neoliberales y este protagonismo tuvo como referente principal a los asesores económicos del partido ADN, del exdictador Hugo Banzer, pese a que el poder, una vez termina el gobierno de la UDP, en 1985, había caído en manos del MNR, recién al comienzo del periodo democrático (Grindle, 2003, Conaghan, 1990, Conaghan y Malloy, 1992, Conaghan y Malloy, 1994, Burbano, 2014).

La estabilidad en la orientación de las políticas neoliberales en el caso boliviano, se viabiliza de ésta manera, gracias al consenso entre élites económicas y políticas y, debido también a un contexto internacional que impone estas medidas, no como una opción entre otras, sino como la única alternativa para salir de la crisis en la que Bolivia y otros países estaban. Esto dio como resultado la hegemonía neoliberal en la sociedad boliviana y su reproducción en distintas áreas de la vida social, incluido el mundo académico (García, 2004).

Además las medidas tomadas pronto dieron sus frutos. La inflación descendió vertiginosamente, pasando, en dos años (1985 a 1987), de 23.000% al 9%; el déficit fiscal pasó del 25% en 1984 al 2.5% en 1986; la economía volvió a crecer, a partir de 1987, jalonada, sobre todo por las actividades comerciales y de transporte. Pero las actividades industriales se redujeron y su crecimiento, cuando éste fue posible, no superó el 2.6% (Schejtman, et al, 2006: 10, Del Barco, 2012, Mercado, Leitón y Chacón, 2003). Además de lo anterior, se buscó racionalizar las actividades del Estado, disminuyendo sus gastos, tomando medidas en contra de la inflación y promoviendo las actividades económicas, particularmente de comercio de importación y exportación. Pero esto también significó una reducción significativa del gasto social, que ya venía siendo afectado en el gobierno de la UDP. Así, entre 1984 y 1986, “... *el gasto público en educación, salud y seguridad social*” pasó del 2.4% a apenas el 1%. En una economía altamente deficitaria como la boliviana, esto significó un incremento de la pobreza y la desigualdad, sobre todo en zonas rurales. (Romero, 1996: 196).

A pesar de los costos sociales, una vez se logró la estabilización de la economía boliviana, se dieron pasos hacia una mayor apertura al mercado externo. Se buscó atraer capitales extranjeros para potenciar, sobre todo, las industrias extractivas (Del Barco, 2012). Del mismo modo, se buscó el apoyo de la banca internacional para paliar los efectos negativos de los ajustes. Poco a poco, por otro lado, las élites empresariales comienzan a presionar a los gobiernos de Paz Zamora (1989-1993) y luego de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1987) para pasar de la disminución de la regulación de la economía a abrir los sectores de la producción monopolizados por el Estado al capital privado. La privatización de las empresas

del Estado se convirtió así, con apoyo de la banca internacional, en una de las banderas de luchas del empresariado boliviano. Estas privatizaciones representaron el segundo momento de las reformas estructurales en Bolivia y su impulsor principal fue, precisamente, Sánchez de Lozada (Mercado, Leitón y Chacón, 2003; Del Barco, 2012, Schejtman, 2006)

En este sentido, el financiamiento externo, se convierte en otro de los elementos que contribuyeron a darle fortaleza a las reformas impulsadas por los distintos gobiernos neoliberales. Los préstamos que recibe el Estado boliviano, particularmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, hacen que el proceso de liberalización económica haya sido también el resultado de la negociación y presión de estos organismos multilaterales. El BM y el FMI, presionaron al gobierno en temas como la reestructuración de empresas, la privatización o liquidación de las corporaciones de propiedad del Estado entre 1990 y 1993 y, luego, nuevamente, entre 1997 y 1998 para la privatización de la empresa de Fundición El Vinto y de los servicios de distribución de agua (que conducirán a las duras movilizaciones del 2000 y posteriores). Estas instituciones presionaron también por la privatización de la banca estatal a finales de los 80 y principios de los 90; por mantener la estabilidad fiscal; indujeron a los distintos gobiernos a disminuir el tamaño de la burocracia estatal a través de despidos, y obligaron, mediante distintos mecanismos, a disminuir la "rigidez" del mercado de trabajo, (Tsolakis, 2009: 193, Romero, 1997)

A diferencia del caso ecuatoriano, además, las políticas neoliberales fueron acompañadas de un despliegue de trabajo ideológico de parte de los empresarios privados bolivianos. Un andamiaje, que, como se ha visto, había comenzado a construirse, desde finales de los años 70 (Sanjinés, 2004, T1 y T2). En esta tarea, se sumarán también los organismos multilaterales. Así, el Banco Mundial colaboró activamente con el gobierno boliviano en las luchas para lograr la hegemonía de las políticas neoliberales. Proveyó asistencia y materiales para el desarrollo de una campaña estatal de información, para el diseño y explicación del programa de capitalización, particularmente en el gobierno de Sánchez de Lozada. Para Andreas Tsolakis, el equipo asesor del BM era consciente de la importancia de la comunicación efectiva y el mantenimiento del *statu quo* y de los beneficios de la reforma. De este modo, consideró que una estrategia de comunicación efectiva debería incorporar un mensaje amplio, así como educar a audiencias especializadas sobre aspectos específicos del programa para combatir los miedos y construir soporte social a las reformas. Para esto invirtieron un total de 3.5 millones de dólares a comienzos de los años 90, durante del gobierno de Sánchez de Lozada. Siguiendo esta línea, por un periodo de dos décadas, la coordinación entre las

Instituciones Multilaterales de Desarrollo y las agencias del gobierno se centraron en la lucha político-ideológica para la creación de relaciones predecibles y funcionales entre las despolitizadas (mercantilizadas) agencias del Estado y la acumulación de capital, que debían transformar al Estado y sus actividades. (Tsolakis, 2009: 205).

La estrategia de reforma del Estado, particularmente en la segunda generación, agenciada por Sánchez de Lozada, consistió, en darle mayor sustento "ciudadano" al neoliberalismo, a través de la reforma de los gobiernos municipales, y regionales; descentralizando la administración de impuestos e inversiones (de modo relativo). Todo esto bajo la orientación de los asesores del BM y con una buena cantidad de donantes internacionales, Instituciones Multilaterales de Desarrollo y ONGs (López, 1997). Sin embargo, este proceso no se desarrolla, como ninguna intervención política lo hace, en un marco exento de conflictos y contradicciones ni de manera unidireccional. Frente a las políticas neoliberales, los actores sociales se adaptan y transforman sus propias estrategias y dinámicas de luchas por el poder. La Ley de Participación Ciudadana fue clave en este proceso (Tsolakis, 2009: 210-215).

Para Tsolakis, este periodo podría ser concebido (sin caer en sobre simplificación, aclara el autor) como una lucha prolongada entre tres altamente fluidos y jerárquicamente relacionados bloques históricos, cada uno fracturado por contradicciones internas. En primer lugar, un bloque constituido por las élites transnacionalizadas y/u otras domésticamente orientadas. En segundo lugar, un bloque de orientación socialista, basado en las más grandes ciudades y, finalmente, un bloque constituido por trabajadores e indígenas rurales (Tsolakis, 2009: 264). La recomposición de las relaciones de poder en el momento en el que las reformas manifiestan sus limitaciones, cuenta entonces con la participación estos actores.

Ahora bien, como es sabido, el neoliberalismo se impulsa como un cuestionamiento radical a las políticas colectivistas impulsadas por el Estado durante el periodo del Estado desarrollista o de bienestar y a las instituciones que soportaron este tipo de orientación del Estado, incluidos los partidos y los sindicatos. Para los defensores del neoliberalismo, la política, precisamente debía limpiarse de la intervención partidista y dejarse en manos de tecnócratas, capaces de orientar, técnica y racionalmente la economía. En este sentido, se minan las bases de legitimidad de los partidos políticos y de su capacidad para orientar al Estado, la economía y la sociedad en general. Esto es claro en el caso boliviano donde las políticas económicas se imponen por encima de los mismos partidos y, a la postre en contra de estos.

El consenso sobre la Nueva Política Económica primero, y luego sobre las reformas de segunda generación y los procesos de privatización, se da en contra de los partidos políticos y gracias a ellos (Morales, 1992, Grindle, 2003, Sanjinés, 2004, 2010, Villegas, 2001). En contra, en la medida en que estos prestan sus nombres para el impulso de dichas políticas (flexibilización laboral y pensional; privatizaciones, apertura comercial, libertad cambiaria, etc.) y ante el fracaso de estas medidas, serán precisamente sus nombres los primeros en ser deslegitimados tanto para electores, como para la sociedad en general. En segundo lugar, en la sociedad boliviana, pese al (supuesto) combate del colectivismo y corporativismo llevado a cabo por las orientaciones neoliberales, estos se reproducen y pronto se hace evidente, no sólo en casos de corrupción por parte de quienes participan del diseño económico neoliberal (como el mismo Gonzalo Sánchez de Lozada), sino de aquellos que son sus beneficiarios: los grupos financieros y comerciales y aquellos vinculados a las industrias extractivas, particularmente.

Así, el neoliberalismo, lejos de combatir estos “vicios” de las economías atrasadas, termina por reproducirlos y, de hecho, fortalecerlos en contra de la misma legitimidad de las instituciones políticas y del Estado en particular (Mansilla, 1994, Tsolakis, 2009). Del mismo modo, pronto se evidencia que los procesos de transformación social impulsados desde la Ley de Participación Popular en los años 90, no logran romper los entramados sociales colectivistas (de origen popular, campesino e indígena) y estos dirigirán sus esfuerzos a la construcción de nuevos referentes políticos y a la lucha por reconfigurar al Estado como agente articulador de proyectos nacionales populares (Grey Postero, 2007, Blanco, 2013).

La apertura de la economía boliviana, por otro lado, termina atrapada en una creciente dependencia de los flujos de capital extranjero, por la vía de préstamos de la banca multilateral o de la banca privada, así como por la vía de las inversiones atraídas por la privatización de las más importantes industrias del Estado. Mientras los flujos de capital se mantienen, el Estado, de hecho, puede realizar inversión social, así como en el desarrollo de infraestructura, tal como sucedió en los años 90. Pero una vez se produce la crisis internacional, estos flujos se detienen y el Estado boliviano no es capaz de sostener las políticas asistencialistas, lo que contribuye a una mayor y creciente protesta popular. La desregulación de la economía permite así la llegada de productos extranjeros para las élites y las clases medias, pero los sectores populares no pueden acceder a estos productos. La desregulación significó también para Bolivia un incremento muy importante de la economía informal, del contrabando y del narcotráfico (Sanjinés, 2004, T2, Villegas, 2001: 14, Kohl y Farthing, 2006).

De hecho, pese a que las reformas buscaban darle mayor protagonismo a los sectores privados nacionales y extranjeros en la economía, los resultados en este aspecto fueron más bien muy limitados (Kohl y Farthing, 2006). A partir de la implementación de estas a comienzos de los años 90, la inversión pública siempre estuvo por encima de la inversión privada, salvo el año de 1988 (Antelo y Valverde, 1991). Esto sólo podrá ser revertido a partir de los procesos de capitalización, pero no será precisamente el sector privado nacional el que lleve a cabo las más importantes inversiones o el que se quede con las mayorías accionarias de las empresas capitalizadas o privatizadas (Sanjinés, 2004, T2).

De esta manera, las reformas económicas neoliberales darán magros resultados. Si bien se logra estabilizar la economía, como en el caso ecuatoriano, el crecimiento económico es también mediocre. Esto pese al impulso que los gobiernos de los años 90 le dieron a la inversión de capital extranjero, a las donaciones y al relativamente alto grado de presión tributaria. Así, el crecimiento apenas alcanza un promedio del 3.4% entre 1992 y 2001 y de 3.8%, entre 1991 y el 2000, cifras que evidencian el bajo impacto de las capitalizaciones y privatizaciones. (Arze, 2002: 507)

En este contexto, un elemento que contribuye al deficiente desempeño económico del periodo es el bajo nivel de inversión de la empresa privada. La mayor parte de los recursos que las empresas privadas obtienen se fuga, es usado en consumo suntuario, o es depositado en los bancos locales pero no impulsa el desarrollo industrial. El nivel de depósitos alcanza, en este contexto el 40% del PIB, del periodo (Arze, 2002: 510). Al mismo tiempo, la inversión extranjera es fundamentalmente en el campo de las industrias extractivas; se concentra en la explotación de recursos naturales, servicios públicos y comercio, pero no impulsa el desarrollo industrial local, ni contribuye al desarrollo económico integral, sino que también termina por salir del país (Kohl y Farthing, 2006). Así, si bien hay un relativamente importante crecimiento de la inversión extranjera directa, en los años 90, como ilustra el siguiente cuadro, los impactos de ésta en el crecimiento económico boliviano, son poco relevantes (Kohl y Farthing, 2006).

Tabla 4. 1. Bolivia. Inversión Extranjera directa Neta 1992-2000

Año	Monto (En millones de dólares)
1992	91
1993	125
1994	147
1995	391
1996	472
1997	728

1998	955
1999	1.015
2000	730
Total 1992-2000	4.654

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago. 2001.

Esta situación de fuga de capitales y resultados mediocres en términos de crecimiento refuerza los planteamientos de Tsolakis, sobre el proceso de internacionalización de la economía y el Estado bolivianos. De las 100 empresas más grandes de Bolivia, las 10 primeras estarían constituidas por 8 capitalizadas, 1 de capital nacional (empresa de servicios públicos de Santa Cruz) y una tendrá capital mayoritario nacional: COMSUR, de propiedad mayoritaria de Sánchez de Lozada con un 68% de las acciones; el 32% restante pertenecerá al National City Bank, de Estados Unidos.

Por otro lado, los niveles de deuda externa a partir del retorno a la democracia se estabilizan y su crecimiento es inferior al promedio de América Latina, donde se duplica. La década de los 90, es testigo así de una importante entrada de capitales, sobre todo por la vía de donaciones y asistencia técnica que, no impulsan un crecimiento auto sostenido. A decir del Tsolakis (2009), sumando endeudamiento y asistencia habrían entrado a Bolivia, unos 15.000 millones de dólares en la década de los 90. A esto se sumarían los ingresos por concepto de asistencia técnica oficial para el desarrollo (unos 6.000 millones de dólares) y los ingresos obtenidos a través de endeudamiento externo.

Otro elemento que permitiría comprender el progresivo deterioro de la economía neoliberal boliviana, a finales de los años 90 y que ayudaría a entender el incremento de las protestas sociales, es el hecho de que la base sobre la cual se depositan la mayor parte de los objetivos de la Nueva Política Económica (el comercio exterior), termina siendo deficitario, gracias a los altos flujos de capital que salieron del país, particularmente durante esta década.

Así, una mirada de largo plazo nos permite entender cómo en los momentos de mejores niveles de precios para los productos exportados, el país no mejora sus niveles de inversión y, por el contrario, incrementa la salida de capitales y el endeudamiento (el periodo correspondiente a 1973-1982). Con la apertura económica de los gobiernos neoliberales, las reformas estructurales y el ajuste económico desde mediados de los años 80, la inversión privada no mejora, pese a la retórica de los empresarios privados sobre el papel central de las exportaciones en el desarrollo económico (Arze, 2002: 528). Lo que se profundiza es la constitución de una economía de enclave, tal como funcionaba con el estaño, antes de la revolución del 52. En el periodo neoliberal la mayor parte de los productos (hidrocarburos,

minería, industria, agricultura empresarial) fue "capitalizado" por compañías transnacionales que extraen recursos bolivianos, sin que promueva o fortalezca el aparato productivo nacional. Frente a esto, Eduardo Arze muestra cómo las exportaciones, en relación con las importaciones, se redujeron, pasando de algo más de 35.1% del PIB, en el periodo 1950-51, a 20% del PIB, en el periodo de 1997-99; mientras las importaciones pasaron, de 15.3% del PIB, millones a 31.1%, en el mismo periodo (Arze, 2002: 530). De acuerdo con lo anterior, el mismo autor citado plantea que, en conclusión:

Por consiguiente, dentro del plano de la perspectiva histórica del comercio exterior, el modelo neoliberal se ha traducido en un fracaso estadísticamente comprobable que no podrá ser superado, tampoco, por la inserción de sectores de exportación del tipo de enclaves externos de producción, característico del periodo de hegemonía de la gran minería del estaño, porque, en tal caso, se habría llegado a la definitiva transnacionalización de la economía nacional, circunstancias en las cuales los ingresos por exportaciones y los beneficios derivados de los mismos se canalizan, en forma directa, hacia las economías dominantes donde funcionan las sedes de operaciones del gran número de empresas transnacionales que ya operan en Bolivia (Arze, 2002: 530-531)

Considerando lo anterior, podemos ver que los intentos de dar base social al neoliberalismo en Bolivia, a través de políticas de descentralización administrativa y de participación popular, lejos de conducir a la legitimidad del proyecto neoliberal, terminaron por sentar las bases para la constitución de proyectos contrahegemónicos. A finales de los años 90 y comienzos del presente siglo, las movilizaciones sociales populares se incrementarán sustancialmente, desafiando la búsqueda de los segundos gobiernos de Hugo Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada, de profundizar las reformas neoliberales, a través de nuevos ciclos privatizadores. La confrontación social se intensificó y esto se evidencia tanto en plano de las movilizaciones sociales como en el marco de la misma democracia electoral, donde nuevos liderazgos comenzaron a ocupar, de manera cada vez más importante, cargos de elección popular.

El caso emblemático de la recomposición de lo popular, tanto en el plano de las protestas y luchas sociales, como en el marco del combate electoral lo constituyen los liderazgos de Felipe Quispe, por un lado y, por el otro, de Evo Morales Ayma. Estos dos líderes populares, desde concepciones diferentes, combatirán las políticas neoliberales y apostarán, a través de distintas estrategias, por la ocupación del poder de Estado y por la orientación general de la sociedad boliviana.

Por su parte, los más importantes líderes empresariales impulsores de las políticas neoliberales terminarán por defender los “logros” de las reformas estructurales, en términos de haber estabilizado la economía, pero minimizando la importancia de las grandes desigualdades económicas y sociales que el neoliberalismo profundizó en Bolivia. En el campo empresarial, los balances que estos líderes hacen de la manera en que fue aplicado el modelo, lejos están de reconocer que estos contribuyeron a incrementar la desigualdad económica y social. La explicación de la crisis, para la mayor parte de estos, obedece más a la aplicación de las políticas que a las políticas en sí mismas.⁵⁶

De este modo, la misma debilidad de las economías y la voraz e improductiva apropiación de los excedentes económicos por parte de las élites económicas y políticas de Ecuador y Bolivia, conduce a la crisis del neoliberalismo, en el marco de crecientes movilizaciones sociales, donde lo indígena, las clases medias y sectores populares jugarán un papel cada vez más importante al tiempo que constituyen un proyecto contrahegemónico, con una fuerte base organizativa popular. Algo sustancialmente diferente al caso ecuatoriano.

En consecuencia, ni las orientaciones (relativamente) estado-céntricas, ni el neoliberalismo conducen a la solidez económica, ni mina, el poder económico y político de las élites económicas, quienes seguirán jugando un rol importante en el cambio de régimen que se produce a comienzos del siglo XXI, tanto desde el punto de vista ideológico, como político e institucional. En este último caso, su protagonismo estará atado al poder estructural acumulado en el periodo precedente, asentado en el dominio regional, pero también en el contexto de un nuevo orden mundial en el que el poder político del Estado, como motor del desarrollo económico y de la integración política sigue estando cuestionado (Soruco, Plata, Medeiros, 2001, Tsolakis, 2009, Seleme, Peña y Pardo, 2007, Burbano, 2012, Sassen, 2010).

4.3. Conclusiones

Para sintetizar lo anterior puede decirse que, en el caso boliviano, los gobiernos militares que se establecieron con el argumento de estabilizar social, políticamente y económicamente al país, lejos de favorecer el incremento de la producción en todos los sectores (además en un marco de mayores cargas impositivas), con las sucesivas dictaduras militares, el país terminó más endeudado, comparativamente menos productivo y con mayor concentración de la

⁵⁶ En el balance que presenta Ricardo Sanjinés, en su “Biografía de la empresa privada boliviana” pueden leerse las declaraciones de los más importantes líderes empresariales del periodo de la “democracia pactada”. De estas apreciaciones se extrae esta conclusión. El problema del “modelo”, no fue éste en sí mismo sino la aplicación que hicieron de esta “los políticos”. Lo que no se reconoce allí en esta implementación inadecuada es que, precisamente los políticos fueron, en gran parte de este periodo, los mismos empresarios que asumieron ministerios claves para el diseño e implementación de las políticas neoliberales. Ver: Sanjinés, 2004: T 3.

riqueza. El fin de este periodo, bajo el gobierno del general Hugo Banzer, pasó a la historia como uno de los más represivos y violentos de la historia boliviana en el que se produjo un retroceso significativo, en términos económicos y de conquistas sociales (Arze, 2002; Villegas, 2001).

Terminado el periodo de dictaduras militares (paradójicamente apoyadas en momentos por líderes históricos del MNR), viene la democracia electoral y con ésta, una ola de políticas neoliberales que tampoco logran reorientar la economía boliviana para sacarla de su matriz primario-exportadora. Durante lo que comúnmente se conoce como “democracia pactada” (Pachano, 2006, Mayorga, 2003, 2004, 2009) de hecho, no se logran disminuir los niveles de pobreza y desigualdad, sino que, por el contrario, se mantiene casi intactos, pese a lograr estabilizar la economía, particularmente en lo referido los niveles de inflación que habían llegado hasta el 23.000 a comienzos de los años 80 (Villegas, 2001, Gray, 2006, Schejtman et al, 2006).

El establecimiento de la democracia a partir de 1982 en Bolivia, se da como resultado del pacto entre los líderes más importantes de los partidos y movimientos políticos del momento, así como de militares y empresarios. A partir de esto se establece una democracia restringida que intenta y logra (temporalmente) sacar del escenario institucional a las organizaciones sociales populares históricas y presiona, a estas organizaciones, a una forma extrainstitucional de trámite de sus conflictos con los actores políticos dominantes (García, 2002, Tsolakis, 2009)

El retorno a la democracia significó, de este modo, el impulso de políticas neoliberales, presionadas por organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial tanto en Ecuador como en Bolivia (Conaghan, 1990, 1992, Villegas, 2001, Tsolakis, 2005). Un sistema presidencialista moderado con un fuerte peso del parlamento (Mayorga, 2003), junto con un multipartidismo también moderado fueron edificados, con la anuencia de partidos como el MNR, el MIR y ADN, este último liderado por el exdictador Hugo Banzer en Bolivia. El pacto entre los líderes políticos de estos partidos y apoyados por los organismos multilaterales, dio como resultado una democracia y una economía estable, aunque débil y fragmentada (Mayorga, 2003, 2004, 2009; Pachano, 2006). La estabilidad económica y política lograda a través del pacto entre representantes de las élites políticas y económicas, fue presentada durante mucho tiempo como un modelo de disciplina y responsabilidad, pese a los bajos niveles de crecimiento logrados, a la ampliación de la desigualdad y a la exclusión de buena parte de los sectores populares (Weisbrot, 2006; Stefanoni, 2009).

Con todo, la democracia pactada, durará hasta el año 2005 cuando, precisamente, un “outsider”, llega al poder con el respaldo del 54% de los electores, algo inédito en la historia política boliviana desde el retorno a la democracia. Pero un largo proceso de surgimiento y consolidación de movimientos sociales y políticos (algunos de ellos marcadamente indigenistas), está detrás del fin de este periodo “democrático”, así como un proceso de creciente incapacidad de los líderes de los partidos políticos dominantes para institucionalizar o reproducir su hegemonía (Mayorga, 2004, 2009; Pachano, 2006).

No obstante, estas importantes diferencias en los dos casos, es importante resaltar también algunos elementos coincidentes del desarrollo de estas dos sociedades en la implementación de las políticas neoliberales y que a la postre van a conducir a la debacle de los sistemas políticos y de partidos que se establecen desde el tránsito a la democracia. Así, si bien es cierto los partidos políticos (desde el plano formal en el Ecuador y más “real” en Bolivia), fueron los protagonistas, junto con las élites económicas, tanto del retorno a la democracia, como del impulso de políticas neoliberales, la aplicación y desarrollo de estas medidas pronto revelaron sus límites “democráticos” y la solidez de las instituciones políticas, incluso en el caso Boliviano, donde la hegemonía neoliberal parecía haberse instaurado en todos y cada uno de los actores políticos dominantes. Un primer elemento que muestra la debilidad de las instituciones y del sistema de partidos es el que tiene que ver con el mismo neoliberalismo como política económica y política cultural.

El caso ecuatoriano mostrará en este sentido, y tal vez en mayor medida la apropiación corporativista y oligárquica del Estado por parte de las élites económicas, particularmente de aquellas provenientes del sector exportador y financiero. El caso de los gobiernos de Febres Cordero, Oswaldo Hurtado, Durán Ballén y Jamil Mahuad, ilustran estas formas de apropiación corporativa del Estado (directa o indirecta) por parte de las elites económicas (Montufar, 2000, Pachano, 2007, 2010, Burbano, 2012). En los dos casos puede verse, además, cómo miembros de las élites económicas y de sus agremiaciones más importantes participan del impulso de las políticas neoliberales (de manera ordenada, o desordenada, coherente o no), pero esta participación se hace en contra de los mismos partidos políticos o por encima de los mismos (Conaghan, 1988; Conaghan y Malloy, 1994; Montufar, 2002; Gamarra, 2003; Grindle, 2003). Esto, al final, servirá para la deslegitimación de las estructuras partidistas, así como del modelo de desarrollo neoliberal en general, debido a los procesos de concentración de la riqueza que genera, a los altos niveles de concentración de la riqueza y a la pobreza generalizada.

A diferencia del caso boliviano (al menos en la primera etapa de las reformas neoliberales), el proceso político ecuatoriano estará marcado por la influencia del caudillismo y el personalismo más que de los partidos políticos (Pachano, 2010). En Ecuador, como se vio atrás, a diferencia de Bolivia no se desarrolla una revolución social y política de la envergadura de la boliviana, ni logra constituirse un sistema de partidos medianamente estable, como en el caso boliviano. Lo limitado de la participación popular en el caso ecuatoriano o el carácter tremendamente inorgánico de esta participación, limitará también la resistencia que pudieran ofrecer los sectores subalternos a las políticas neoliberales. Para algunos teóricos, el caso ecuatoriano, al amparo de la fuerte influencia política de José María Velasco Ibarra, se establece como un sistema político cargado de populismo y personalismo (De la Torre, 2000, Montufar, 2000, Del campo, 1979; 1981; Cueva, 1973). De éste modo, para Ecuador, los años que van de 1948 a 1979, están caracterizados por sucesivas dictaduras con orientaciones ideológicas dispares y contradictorias (De la Torre, 1993, 2000). Estas formas de implementación del neoliberalismo van a confabular contra las instituciones partidistas y contra la estabilidad del sistema por estas edificado; un sistema en el que, nuevamente, hay una apropiación corporativa del Estado por parte de las élites económicas. Esto a pesar de que algunas de estas hacen gala de lucha contra la corrupción y el “estatismo”, un estatismo del que son beneficiarias (Sanjinés, 2004, 2010, Mansilla, 1994).

Por lo que se ha discutido hasta el momento, puede decirse que en las relaciones entre Estados y élites económicas está marcada por el tipo de estructura de poder se constituye en cada país, así como por los marcos de referencia dentro de los cuales se desarrollan estas relaciones. No obstante esta observación general, es clara la participación de las élites económicas en la orientación no sólo de las funciones de los estados sino en la manera en que se configuran sus perfiles y actividades. Estas élites, aunque de manera desigual en los dos países, han sido beneficiarias de distintos modos de orientación de los estados y han ocupado un lugar privilegiado en el impulso de los sentidos, significados y materializaciones de los estados, cuando no han ocupado directamente el poder de Estado y han diseñado e implementado sus políticas.

Este protagonismo y las formas particulares que adquiere en cada sociedad, están también relacionados con el tipo de sistemas políticos que se configuran en cada sociedad. Una mayor articulación política entre distintos actores conduciría a formas más coherentes y sistemáticas de intervención e influencia por parte de las élites. Un sistema político más fragmentado y personalista, daría pie a formas más “corporativas” de intervención de las élites económicas.

sin embargo, como se vio a lo largo de este capítulo, tanto en un “modelo” como en otro, las orientaciones corporativistas de las élites, sean en el plano formal o informal, se han manifestado con igual contundencia. Lo que queda de todo esto, es, que, pese a las diferencias, las élites económicas son reconocidas como actores privilegiados en la orientación de las políticas de los estados, en sociedades dependientes.

Capítulo 5. Debilitamiento de los proyectos neoliberales en Bolivia y Ecuador

Alrededor de 30 años después de establecida la democracia electoral en Bolivia y Ecuador y de múltiples intentos por consolidar un modelo político y económico que implicaron, regularmente, una buena cantidad de reformas, muchas veces incoherentes entre sí, las democracias de estos dos países entran en un periodo de profunda inestabilidad (Muñoz-Pogossian, 2008). A finales de los años 90 la movilización social y popular se intensificó. El crecimiento económico de América Latina y, especialmente de Ecuador y Bolivia, se desaceleró; el desempleo y la pobreza crecieron al tiempo que la desigualdad (Blanco, 2004). Las élites políticas y económicas que gobernaron Bolivia y Ecuador agotaron paulatinamente sus recursos y no pudieron frenar la emergencia y consolidación de líderes y movimientos políticos que las cuestionaron de frente. Una intensa fragmentación del campo político y de la política de las élites se produjo. Esto último, particularmente en Bolivia, donde la crisis de la hegemonía de la “democracia pactada”, con sus soportes políticos y sociales, se derrumbó progresivamente.

Para algunos analistas, la crisis boliviana alcanza su punto máximo a partir del año 2000, cuando el activismo popular y, crecientemente indígena, se toma las calles y carreteras del país desafiando a las autoridades gubernamentales. Múltiples organizaciones y movimientos sociales protestan contra la privatización de los recursos naturales y las políticas neoliberales en general. La movilización social logra poner en jaque, hasta llevarlo a la renuncia, a Gonzalo Sánchez de Lozada (en su segundo gobierno), protagonista indiscutible de la implantación de políticas neoliberales desde el retorno a la democracia (Chávez, 2007, Polet, 2009; Tapia, 2009, Sader, 2005, Torrico, 2007).

Tanto en Bolivia como en Ecuador, el fin de la década de los 90 supuso una dramática crisis del modelo neoliberal. La insatisfacción con las políticas agenciadas por los líderes políticos (muchas veces de origen empresarial), más que por los partidos, condujo a una crítica de radicalidad creciente, de la “partidocracia”⁵⁷ en Ecuador, y de la “democracia pactada”, en el Bolivia. En los dos casos se cuestiona el carácter pseudo-democratizador con el que se había

⁵⁷ A juicio de este trabajo, el término “partidocracia”, frecuentemente usado por Rafael Correa y sus aliados, de manera despectiva, para referirse a la estructura de poder que gobernó el Ecuador desde el retorno a la democracia, resulta exagerado y solo útil desde el punto de vista de la confrontación. Con el mismo, se aglutina, se constituye un adversario homogéneo que realmente no existió, pues, más que partidos, había líderes políticos muy autónomos frente a cualquier estructura partidista. Ver: Conaghan, 1998, 2003; Freidenberg, 2003)

impulsado el discurso neoliberal y se denuncian las condiciones de pobreza, marginalidad y desigualdad de millones de ecuatorianos y bolivianos.⁵⁸

Si bien es cierto algunos teóricos, desde distintas perspectivas, resaltan que el protagonismo popular, ciudadano o indígena obedeció, de alguna manera, a los procesos de reforma política impulsados por el neoliberalismo, dentro de los cuales uno muy importante fue la descentralización política y administrativa de los años 90 (Pachano, 2003, Grey Postero, 2007, Yashar, 2007, Muñoz-Pogosian, 2008), lo cierto es que los tipos de participación que se establecieron durante este periodo, pronto mostraron sus límites. De hecho, se empezó a luchar por una ciudadanía que trascendiera lo pluricultural, y le apuntara a la interculturalidad (Grey Postero, 2007); una ciudadanía que sirviera de base para el establecimiento de regímenes políticos y económicos más equitativos e igualitarios, en suma, más democráticos.

A pesar de las crecientes protestas, las élites económicas y políticas radicalizan las reformas. En Bolivia esto se materializó en dos procesos convergentes. En primer lugar, con la intensificación de la privatización de recursos estratégicos (gas-petróleo-minería) y servicios públicos (gas y agua), iniciativas que terminan convirtiéndose en referentes simbólicos de las luchas contra el neoliberalismo (Kohl y Farthing, 2006, Grebe, 2001). En segundo lugar, con las mismas reformas relacionadas con la “participación popular” y la descentralización política y administrativa impulsadas de manera especial por Gonzalo Sánchez de Lozada. Éste segundo proceso puede leerse como un intento por darle solidez ideológica, hegemónica, al neoliberalismo, bajo el amparo del discurso de la democratización de la gestión pública y de la ampliación de la participación ciudadana (Lander, 1994)

En el caso ecuatoriano, la inestabilidad política y el descontrol financiero que se instaura a mediados de la década y un contexto internacional, a finales de los noventa, llevan a una crisis económica que afecta sensiblemente a millones de ecuatorianos de clase media y de sectores populares a quienes les son expropiados sus ahorros y a muchos, sus posesiones materiales. La salida que las élites políticas dan a la crisis es la dolarización; política que entienden como mecanismo de estabilización financiera y económica. En los dos casos, los líderes de los partidos políticos dominantes se convierten en el blanco de ataques. Se les acusa de ser los

⁵⁸ Para el caso boliviano, a comienzos del presente siglo fue cada vez más evidente los tremendos efectos negativos que habían traído las políticas neoliberales en el incremento de la pobreza y la desigualdad. Millones de bolivianos no habían sido beneficiarios de las políticas aperturistas de los gobiernos neoliberales y sus condiciones de vida se habían empeorado paulatinamente. La economía se había estabilizado y alcanzado niveles de crecimiento, si bien no muy altos, al menos significativos; la inversión extranjera había logrado importantes niveles también, pero la vida de los más pobres había empeorado y, particularmente, de las poblaciones indígenas rurales. (Schejtman, 2006; Escobar, 2004: 57-69; Farah, 2004: 209-237; McNeich, 2004: 323-348)

responsables del incremento de las desigualdades, de la tremenda concentración de la riqueza y del despojo de los bienes colectivos.

En el presente capítulo analizamos el colapso de los sistemas políticos, de partidos y las estructuras institucionales (económicas y políticas) que sirvieron de soporte a las políticas neoliberales. Así, exponemos lo que, desde la perspectiva de este trabajo, fue la crisis de la hegemonía neoliberal y la emergencia de proyectos contrahegemónicos en las dos sociedades objeto de investigación. Se precisarán las particularidades que esta crisis asumió en cada país y las implicaciones de éstas para lo que van a ser los conflictos por la reorientación del Estado y la sociedad, con la constitución de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa.

Buscamos demostrar que, mientras en el caso boliviano se produjo la erosión paulatina de los soportes institucionales-estatales e institucionales-civiles, así como de los marcos ideológicos que sostenían el neoliberalismo, en el caso ecuatoriano, pese a vivir una más dura crisis económica que en el caso boliviano y la erosión del sistema político, las instituciones socioeconómicas que impulsaron las reformas neoliberales en el Ecuador, se adaptaron más eficazmente para resistir los embates del nuevo proyecto político de la Revolución Ciudadana. De hecho, estas élites económico-empresariales se constituyeron en el caso del Ecuador en agentes de la crisis, en duras críticas de los distintos gobiernos previos al de Rafael Correa, lo que les permitió mantener un grado de legitimidad mayor que el de las élites bolivianas. En una primera parte mostraremos las particularidades del caso boliviano, en términos de crisis, política, económica y social, para pasar, en un segundo momento, al caso ecuatoriano. En el primer caso, la manera en que esta crisis puede ser definida como una crisis estructural de la hegemonía de los actores políticos que agenciaron los procesos de liberalización de la economía boliviana. Se muestra, en segunda instancia, cómo el modelo neoliberal no sólo golpeó a los sectores populares, sino que las mismas élites empresariales o, al menos ciertos sectores importantes de estos, empezaron a ver críticamente los efectos del modelo en el desarrollo empresarial privado nacional. Se muestra, así mismo, cómo esta crisis y la manera en que los actores políticos intentaron afrontarla, condujo a una ruptura al interior del empresariado, cuando, en 2004, la importante Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, decide separarse de la CEPB. Finalmente, se analiza la configuración de un proyecto político contrahegemónico, liderado, progresivamente, por Evo Morales Ayma.

En el caso ecuatoriano, afirmamos que el carácter inorgánico y gradualista del neoliberalismo expuesto en el capítulo anterior, tuvo efectos sociales desastrosos y facilitó una apropiación rapaz de los recursos públicos, al mismo tiempo que se abrieron más puertas para el

fortalecimiento del personalismo en la política ecuatoriana. Damos cuenta de la manera en que las élites económicas, particularmente banqueras, condujeron a la quiebra del Ecuador a finales de los años 90 y cómo esto posibilitó motivó una recomposición, que no obstante fracasa, de los sectores sociales subalternos. Finalmente, se exponen las condiciones en las que emerge el liderazgo político de Rafael Correa, y cómo la fragmentación política y la deslegitimación de ciertos sectores populares, como los movimientos indígenas, permitió este liderazgo personalista e inorgánico.

5.1. Economía política del colapso de la “democracia pactada”

¿Qué tipo de crisis es la que vive Bolivia al finalizar los años 90 y principios del siglo XXI? ¿Cómo intentaron las élites económico-política, contener la erosión de sus mecanismos de legitimación y articulación y por qué fracasaron? Desde la perspectiva de la presente investigación, lo que se produce es de una crisis profunda y multidimensional, que sólo puede ser captada como manifestación de una crisis estructural o crisis de la hegemonía. En esta crisis, los cimientos que configuraron el retronó a la democracia y que permitieron el establecimiento de políticas neoliberales, colapsan. Desde el punto de vista económico, el incremento de la pobreza, la desigualdad y el desempleo son las manifestaciones de los problemas de integración material que trajo consigo el neoliberalismo. Desde el punto de vista político, las instituciones que sirvieron de soporte para la integración política se fragmentan progresivamente y los mismos pactos por la democracia, renovados continuamente en caso boliviano, terminan por hacerse inviables. La política de calle se hace cada vez más importante y determinante, pues los canales institucionales pierden legitimidad tanto en Bolivia como en Ecuador y en otros países del continente (López, Iñigo y Calveiro, 2008, Ardaya, 2009, Burbano de Lara, 2005). Nuevos actores sociales y políticos entran en escena. En las dos sociedades, las fuerzas políticas más reaccionarias de derecha no logran constituirse en fuerzas articuladoras de la heterogeneidad social, política y cultural que constituye estas dos sociedades y serán orientaciones de izquierda las que ganan el liderazgo y la capacidad de articulación a nivel nacional.

En el desarrollo de esta crisis, a finales de los años 90 y principios del presente siglo, resultado de la privatización.⁵⁹ la movilización social se multiplica. Los partidos políticos que dominaron el espectro electoral boliviano, desde el retorno a la democracia o, incluso desde la revolución de 1952, poco a poco sucumben ante nuevas fuerzas, tanto de izquierda, como de

⁵⁹ La capitalización, inicialmente es la forma que adquiere la privatización en Bolivia. Durante el gobierno de Paz Zamora, se vendieron alrededor de 780 empresas estatales y el siguiente gobierno, se vendieron 40 más. El dinero obtenido por estas ventas fue usado para gasto público (Grebe, 2001: 164-165)

derecha. Las élites empresariales, otrora protagonistas de las reformas económicas, también atraviesan dificultades y se produce una importante ruptura al interior de la organización empresarial más importante del país. La importante Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, decide romper con la CEPB, institución determinante en la articulación de las élites económico-empresariales durante los años 80 y 90. Su poder instrumental, por tanto, se ve menguado significativamente.

El agotamiento de la democracia pactada es evidente ya en el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002). Para algunos analistas, es a partir de este gobierno que se rompe el diálogo entre los principales partidos que gobernaron Bolivia desde el retorno a la democracia. La fragmentación electoral se intensifica y las disidencias ganan protagonismo (Pachano, 2006, Mayorga R., 2004, Alenda, 2004). Nuevos movimientos políticos y nuevos líderes disputarán el histórico dominio de las figuras más representativas del MNR, el MIR y ADN, protagonistas indiscutibles del sistema de partidos que se construyó con el retorno a la democracia. Con esto, se incrementa la polarización social y, al mismo tiempo, la visibilidad tanto de líderes disidentes de los partidos políticos “tradicionales” como de líderes que cuestionan la legitimidad del ordenamiento político y económico construido al amparo de la “democracia pactada” (Pachano, 2006, Muñoz-Pogossian, 2008, Mayorga R, 2004).

Mientras el poder se erosiona, las condiciones de vida de los sectores populares también. Las medidas de austeridad, la apertura comercial y financiera impulsada por los gobiernos de la democracia pactada, han desmejorado progresivamente sus condiciones de vida. Los salarios se han estancado, también la generación de nuevos empleos. Con esto los niveles de pobreza aumentaron, así como la desigualdad. El segundo gobierno de Hugo Banzer, tiene que enfrenar la disminución de la producción nacional, el incremento del contrabando, la crisis de las economías de Brasil y Argentina, entre otros choques internos y externos, sin muchas herramientas macroeconómicas (Escobar de P., 2004; Muñoz-Pogossian, 2008,). El incremento de la inversión extranjera en Bolivia, resultado de la capitalización había crecido en los años 90, pero no había dejado réditos para los sectores populares. (Cossio, 2001).⁶⁰ Con el transcurrir de éste gobierno, las condiciones de vida de los bolivianos van a empeorar y para fines de 1999, el desempleo llega a niveles no vistos en Bolivia (Escobar de P., 2004)

⁶⁰ “En forma agregada, el proceso de capitalización y privatización de empresas públicas, permitió atraer Inversión Extranjera Directa (IED), que se incrementó de 2.1% del PIB en 1992, a 10.2% del PIB en 1998, nivel que creció en 1999. La IED incremento de 128 millones \$US en 1993, a 987 millones en 1999”. Cossio, 2001: 14

En este marco, los intentos de cooptación adelantados tanto por el primer gobierno de Sánchez de Lozada, (con sus leyes de participación popular y de descentralización administrativa); como por el gobierno de Hugo Banzer (con sus “diálogos nacionales”) fracasan, al menos en las posibilidades de sumar respaldos populares (Muñoz-Pogossian, 2008; Ames, Pérez-Liñán y Seligson, 2004).⁶¹ Lo que se produce, por el contrario, es una creciente impaciencia de las clases subalternas (Tsolakis, 2009: 256, Sanjinés, 2004, T3: 18-19).

Refiriéndonos específicamente al problema de la desigualdad, podemos ver que entre 1998 y 2003 los más ricos incrementan en un 11 por ciento su riqueza, mientras que los más pobres pierden un 20 por ciento de sus ingresos. En este sentido, podríamos agregar, pese a que la economía boliviana crece a un ritmo de alrededor del 4.0%, entre 1990 y el 2003 (Mercado, Leiton y Chacón: 2003: 36), este crecimiento no contribuye a la disminución de los índices de pobreza, desigualdad y dependencia de la economía boliviana. Se calcula, por el contrario, que la pobreza afectaría a un porcentaje que varía entre el 58.6% y el 63% de la población, en el 2001 y la pobreza extrema llegaría al 39.5% en el mismo año (Farah, 2004: 213-214). Estos procesos, en buena medida explicarían el incremento de las protestas sociales y la inestabilidad del régimen político, tal como lo plantea Andreas Tsolakis (2009: 260).

Con todo esto, se configura en Bolivia no es una crisis coyuntural, como lo plantearon algunos analistas en medio de la crisis (v gr. Gamarra, 2002; 2003), sino una crisis estructural

⁶¹ La iniciativa de los llamados “diálogos nacionales”, buscaba articular a las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales en la construcción de un “proyecto común” de desarrollo para enfrentar la crisis social, política y económica. Esta iniciativa fue encargada al Vicepresidente Jorge Quiroga. En Palabras de Ricardo Sanjinés, cuando se convoca al Primer Diálogo Nacional, denominado “Bolivia hacia el siglo XXI”, el objetivo era que en Bolivia “... sus organizaciones republicanas y sociales, se pusieran de acuerdo en el diseño de políticas de Estado para superar sus limitaciones y ofrecer un mejor horizonte a la ciudadanía”. Cuatro temas se definieron para ser tratados colectivamente: “Oportunidad (desarrollo económico) Dignidad (Lucha contra el narcotráfico); Justicia (Institucionalidad, Estado, Sociedad) Y; Equidad (Desarrollo humano”. Cada una de esas mesas estuvo apoyada por moderador y consultores de renombre e integrada por representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Corte electoral, Iglesia, Empresarios Privados, COB, Universidades, Fuerzas Armadas, Partidos políticos, Comités Cívicos, Campesinos, gremiales, artesanos, medios de comunicación, gremios de la prensa, cocaleros, ONG, organizaciones de mujeres, Derechos Humanos y movimientos culturales”. Los empresarios, en este diálogo, representados por José Luis Camacho, Carlos Calvo y Johnny Nogales, propusieron, entre otras cosas, para salir de la crisis, ampliar la base de contribuyentes, desarrollar una política de inversión en la que la inversión pública no sustituye a la inversión privada, sino que la complementa, coordinar el destino de la cooperación internacional entre el sector público y el privado, liberar el precio de los hidrocarburos, en materia fiscal. En materia de reformas estructurales, los empresarios pidieron “Concluir la privatización de Vinto, las compañías residuales de YPFB, la comercialización de hidrocarburos, las distribuidoras de energía eléctrica SETAR y SEPSA, las empresas de las Fuerzas Armadas y las funciones operativas de Impuestos internos y Aduanas”. Propusieron la “Entrega en concesión de servicios municipales. Transferencia al sector privado de propiedades de la COMIBOL. Seguridad a los inversionistas que capitalizaron empresas estatales. Flexibilización del mercado de trabajo. Proyecto nacional de desarrollo rural para dos millones de campesinos en occidente”. (Sanjinés, 2004, T, 3: 16-17).

de las instituciones y de los actores que gobernaron Bolivia, desde el retorno a la democracia, o incluso desde antes. Una crisis de la hegemonía de la “democracia pactada” y del modelo económico, que no sólo se soportó sobre los partidos políticos, sino también sobre la sociedad civil de élite, liderada en buena parte del trayecto por las grandes asociaciones empresariales y, particularmente, por la CEPB. Como ha sido expuesto ya en este documento, las élites empresariales fueron piezas claves en el proceso de democratización boliviana, pero también en el diseño e implementación de las políticas neoliberales en sus distintos momentos. Estas élites habían encontrado en los partidos políticos dominantes y en el Parlamento por éstos controlado, los canales de participación directa y, por tanto, habían acumulado un poder político considerable. Tal como lo Plantea Schejtman (2006):

Los casos de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), La Cámara de Hidrocarburos, la Federación de Empresarios, la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO), de las organizaciones de la banca, demuestran que sus demandas pasan a través de los partidos políticos tradicionales, el Parlamento o la presencia directa dentro del Ejecutivo. Es decir, para conseguir sus reivindicaciones, las élites poseen también sólidos mecanismos de presión hacia la estructura estatal, los gobernantes y representantes. (Schejtman, 2006).

Se evidencia con esto, aún más, que la articulación entre el poder político y el poder económico, fue muy importante para el mantenimiento de la hegemonía neoliberal por casi 30 años. Pero esta articulación se debilitará por la pérdida de capacidad de cooptación por parte de los partidos políticos dominantes (MNR, ADN y MIR, principalmente), así como de las élites económicas y sus organizaciones más sobresalientes: CEPB y CAINCO. De hecho, ya desde el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se venían presentando distanciamientos entre éste y los líderes de la CEPB, quienes cuestionaron primero, la lentitud de los procesos de privatización y del fortalecimiento poder económico privado, pero luego, el no poder participar de los procesos de capitalización por las trabas que este gobierno (y el siguiente) habría puesto de manera ilegítima (Muñoz-Pogossian, 2008, Sanjinés, 2004, T 2; Grebe, 2001: 166). A pesar de estos distanciamientos no pasaban de “tradicional” cuestionamiento de las élites a políticas concretas y eran parte de las normales fisuras entre los actores de poder.

Lo que pasa, por el contrario, durante el segundo gobierno de Hugo Banzer es que la hegemonía se agota. Los empresarios reconocen que son convocados, a través de múltiples escenarios (como los “diálogos nacionales”, la creación del Consejo Consultivo, el envío de los borradores de los Presupuestos Generales de la Nación, entre otros), pero sienten también que sus indicaciones no son tenidas en cuenta y poco a poco se distancian del gobierno. La

relación entre el gobierno y los empresarios se hace cada vez más ambigua y la comunicación cada vez más débil. Estos últimos, llegan a acusar a Banzer de ceder ante todos los sectores laborales y campesinos de no seguir sus recomendaciones. Cuestionan incluso las orientaciones que el gobierno de Banzer recibe de organismos internacionales como el FMI; orientaciones a las que la dirigencia empresarial califica de “cada vez más alejadas de lo que realmente acontecía en el país” (Galindo, citado por Sanjinés, 2004, T3: 56)

Una buena síntesis de las relaciones entre la dirigencia empresarial y el gobierno de Hugo Banzer, puede estar contenida en la siguiente declaración del, en ese momento, secretario Ejecutivo de la CEPB, Jhonny Nogales:

La CEPB trazó tres planes económicos para la recuperación del país desde los inicios del proceso de la crisis. Hablamos permanentemente no tanto con el General, quien no tenía mucho conocimiento de temas económicos, pero sí con el vicepresidente Quiroga, que era el operador económico. No recibimos ninguna respuesta. Algunos de los aspectos sugeridos por el sector privado fueron sacados de contexto e implementados parcialmente y por supuesto no tuvieron ningún efecto benéfico. Los resultados fueron estos cinco años de recesión y descontento social (Declaraciones de Jhonny Nogales, en: Sanjinés, 2004, T3: 59)

Como se hace palpable, las élites se asumen así mismas como la razón que lograría sacar al país de la crisis, pero esta razón es desoída por el gobierno. Esto lleva a que, en 2001 la CEPB, ante la “poca atención” por parte del gobierno a las peticiones (exigencias) de los empresarios, amenazara al gobierno con un paro empresarial, primero y luego, a pedir la renuncia del primer mandatario. El 25 de Julio de 2001, justo cuando Banzer se encontraba internado en un hospital en Estados Unidos, la CEPB, publicará un documento titulado “*Basta ya, no va más*” en el que critica la falta de eficiencia del gobierno de Banzer y su incapacidad para sacar al país de la crisis. En éste documento, los empresarios le recuerdan al gobierno los múltiples pedidos de reorientar la economía y se quejan de no haber logrado nada. La crisis, argumentan, no puede esperar soluciones de parte de Banzer. En palabras de los empresarios, esta falta de atención

(...) ha derivado en el desprestigio y descrédito del orden político establecido, se constata que el país se encuentra a la deriva y se esparcen sentimientos de verdadera desazón y desánimo. La delicada salud del presidente de la República afecta de manera particular al quehacer nacional, dando lugar a especulaciones sobre un vacío de poder, que incide en la toma de decisiones en el manejo estatal. Frente a esta situación, plantea la renuncia inmediata a la presidencia de la República del Gral. Hugo Banzer, aquejado por una grave y lamentable enfermedad, que le impide cumplir sus altas funciones y, según lo dispone la Constitución

Política del Estado, debe el vicepresidente asumir la primera magistratura y conformar un gobierno de unidad con el apoyo de todos los bolivianos. (En Sanjinés, 2004, T3: 76)

Como se sabe, al final Banzer renuncia (algo que también había reclamado Gonzalo Sánchez de Lozada). Sin embargo, ni su sucesor, Jorge Quiroga ni el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada lograrán recomponer la articulación de las élites económicas y políticas. En el gobierno de Carlos Mesa Ginsberg, serán particularmente los empresarios de Santa Cruz, quienes radicalizarán sus críticas, al punto que la unidad empresarial, lograda por la CEPB, por un buen tiempo, se rompe.

En este marco, es un hecho de relevancia histórica que uno de los más importantes gestores del neoliberalismo en Bolivia, al final, haya sido quien comienza su sepultura. Gonzalo Sánchez de Lozada, el constructor y organizador de las resistencias ideológicas de las élites económicas articuladas en la CEPB, a finales de los años 70 y comienzos de los años 80 (ver capítulo 3), se convirtió en blanco de la radicalización de la insurrección popular, campesina e indígena y termina huyendo del país. Su huida motivó más a los bloques de poder que la insurrección ha venido configurando, al calor de las guerras del agua (2000) y del gas (2003). En la efervescencia de estos procesos se fue configurando un proyecto político que usa insistentemente el lenguaje de la revolución y que se va reconociendo a sí mismo como una alternativa de reorientación política, económica y cultural para Bolivia con altas probabilidades de triunfo. El mismo Evo Morales, al cumplir 11 años en el gobierno recuerda que, en la contienda con Sánchez de Lozada en 2001, no ganó, pero vio que en cualquier momento llegaría a ser presidente y sintió que “debía prepararse” para asumir el cargo de primer mandatario (Morales, 2017).

Todo lo anterior muestra, que no se trata solamente de una crisis del sistema político y la incapacidad de los partidos políticos “tradicionales” para integrar o vehicular la participación y demandas ciudadanas. Se trata de que esta es una incapacidad estructural, que lleva a la configuración de proyectos contra hegemónicos, que paulatinamente ganan reconocimiento y que van ampliando sus aspiraciones (Farah, 2004). Usando, de hecho, las mismas estructuras institucionales creadas para la cooptación o para la disminución del potencial revolucionario de la participación popular y ciudadana, algunas vertientes de los movimientos y organizaciones sociales indígenas y campesinas logran conquistar el poder de Estado y fortalecer la capacidad de movilización popular (Tapia, 2009).

Desde esta perspectiva el “consensualismo democrático” (v gr Simón Pachano, René Mayorga, entre otros) de las perspectivas institucionalistas, que han intentado explicar el

colapso de la democracia pactada, resulta tremendamente limitado y legitimador de las perspectivas “mínimas” de la democracia y de la política en general. Estas perspectivas asumen, regularmente categorías con alto contenido peyorativo (populismo, neopopulismo, etc.,) como si se tratara de categorías académicas imparciales y no políticas. Para estas lecturas de la crisis, los únicos conflictos que se reconocen como legítimos son aquellos que no cuestionan los resultados de las estructuras institucionales, en términos socioeconómicos, políticos y culturales. El único trámite que se reconoce como legítimo, para estos conflictos, es aquel que se lleva a cabo por la vía electoral, siempre y cuando quien coseche éxitos en el trámite de sus proyectos y demandas no cuestione “el sentido común” y la ortodoxia económica liberal; siempre y cuando no cuestione las estructuras de poder y dominación sobre las cuales se ha venido edificando el capitalismo contemporáneo. Estas perspectivas, no tienen en cuenta que, precisamente, hay estructuras institucionales e ideológicas (en lo económico y político) que limitan la participación de amplios sectores sociales y culturales y su inclusión, de hecho, no es posible dentro de las mismas estructuras del mercado y lo político, propias del neoliberalismo que reforzó una estructura de poder oligárquica (Orellana, 2006). Así, habría una fuerte contradicción entre el “sentido de la existencia” que propusieron los neoliberales (mercantil, pseudo productivista, pseudo empresarial, etc.) y los sentidos de la existencia que otros grupos sociales construyen y oponen. De este modo, las perspectivas institucionalistas, niegan que hay, de hecho, perspectivas del mundo, de la economía y lo político que son contradictorias y que le apuestan a la configuración de estructuras sociopolíticas diversas y contradictorias, no por esto, necesariamente, antidemocráticas. Algunos autores, por esta vía llegan a idealizar el liberalismo político y económico como modelos que lograrían el desarrollo económico y social integral, bajo la condición de dejar actuar libremente a los actores económicos. Lo que en buena media muestran los procesos de imposición del neoliberalismo en América Latina, sea por la vía de las medidas de Shock, como en Bolivia, o a través del gradualismo, como en Ecuador, por el contrario es que lejos de favorecer la integración social, económica y política, favorecen la concentración del poder económico y la desigualdad estructural.

En el caso boliviano, esta debilidad del modelo neoliberal fue profundizada por dos procesos. Por un lado, por la más intensa beligerancia de los movimientos sociales y, por el otro, ante el incremento de las presiones sociales, las élites buscarán salidas contradictorias. En el campo del poder de las élites, como se acaba de mencionar, se produce una fragmentación en el contexto de la crisis. La CEPB, poco a poco se desliga o es desligada por los gobiernos de

Banzer, primero y luego de Sánchez de Lozada. El discurso de la “falta de confianza empresarial”, es usado entonces para cuestionar las estrategias de los gobiernos que buscan mantener a flote la gobernabilidad del país (Grebe, 2001). A ojos de los empresarios, (particularmente de los del Oriente boliviano), los gobiernos no estaban ofreciendo salidas satisfactorias o coherentes a la grave crisis económica que atraviesa Bolivia desde 1997 (La Razón, 27-08-2003). Así, el gobierno de Sánchez de Lozada, que generó expectativas positivas para los empresarios, pronto fue visto también como incapaz de enfrentar la crisis. Para Carlos Calvo, presidente de la CEPB, en el año 2002

(...) las expectativas se fueron desdibujando al comprobar que la prioridad de los partidos eran las cuotas de poder y nada de soluciones. La percepción inicial era que Goni aceptaba la magnitud de la crisis y tenía la decisión de encararla radicalmente, lo que no se plasmó... con la frustración se enfrió la relación (En, Sanjinés, 2004, T3: 96).

La fragmentación de las élites empresariales, de hecho, se hará más profunda en el marco del gobierno de Carlos Mesa, entre el 2003 y el 2005 (Fairfield, 2015; CEPB, 2004, Sanjinés, 2003, T.3). En este momento hay que recordar que, en el campo empresarial, los procesos de capitalización hicieron poco para fortalecer a la industria nacional o, para la construcción de una burguesía nacional, más allá del fortalecimiento del sector exportador del oriente boliviano, muy desconectado con el mercado nacional. Por el contrario, la integración de algunos capitalistas nacionales con inversores extranjeros, así como la privatización de las más grandes empresas estatales, benefició el incremento de la desigualdad entre empresarios. 50 firmas controlaban, a comienzos del presente siglo, buena parte del capital y este estaba concentrado en la banca, la minería y el comercio. El resto, estaba dividido en dos grupos también desiguales de medianas y pequeñas empresas muy fragmentados entre sí y con baja productividad (Grebe, 2001, Farah, 2004).

Esta desigualdad entre los empresarios bolivianos conducirá, en el gobierno de Sánchez de Lozada y, particularmente en el de su sucesor Carlos Mesa, a una división política que asume varios matices. Inicialmente la CEPB mantiene el liderazgo entre las organizaciones empresariales del país y, desde este liderazgo cuestionan el manejo de las políticas económicas de los últimos gobiernos de la democracia pactada. En medio de la crisis, de hecho, esta organización “hace gala” de un discurso “nacionalista”, de búsqueda de unidad entre las fuerzas políticas más relevantes, pero cada vez más heterogéneas y contradictorias. Las declaraciones públicas de la CEPB, en estos años, insisten una y otra vez en la crítica a las presiones del FMI, y la defensa del mercado nacional. Este discurso “nacionalista”, puede

entenderse en parte si se tiene en cuenta que, para los años del segundo gobierno de Sánchez de Lozada, los industriales nacionales, asumen un liderazgo importante al interior de esta organización. Para uno de estos líderes, en clara oposición a la doctrina del crecimiento “hacia afuera”, como es el caso del industrial Carlos Calvo, de hecho, llegó a afirmar que:

No hay desarrollo sin un vigoroso aparato productivo nacional. Es importante la estabilidad macroeconómica, pero ésta es absolutamente vulnerable sin niveles adecuados de crecimiento y de empleo. Para salir de la crisis hay que revertir la brutal caída en la demanda agregada. Ello sólo será posible con recursos financieros, movilizándolo el ahorro interno e impulsando la inversión privada. Debemos adoptar políticas agresivas de incentivos fiscales, e inclusive subsidios, como en el caso de la vivienda, para generar nuevas fuentes de trabajo (En: Sanjinés, 2004, T3:104)

Este tipo de declaraciones ampliarán las distancias entre los empresarios y entre estos y el gobierno de Sánchez de Lozada, que iba en otra dirección: buscando una mayor apertura del mercado nacional y buscando atraer mayores niveles de inversión extranjera a través de las privatizaciones. El año 2003, es tal vez el punto de inflexión en este proceso. Pese a que varios analistas importantes en éste momento veían todavía esperanzas de recuperar la gobernabilidad y reorientar al país⁶² y a pesar de que los mismos empresarios llamaron a construir “un Gran Acuerdo Nacional para resistir y vencer la crisis”, llamado al que llegaron a invitar al mismo Evo Morales⁶³, por aquel entonces uno de los más radicales adversarios del gobierno de Sánchez de Lozada, y duro crítico del modelo económico impuesto en Bolivia desde mediados de los años 80, el sistema político de la “democracia pactada” sucumbió. Como se sabe, esta unidad no se dio, al menos en los últimos gobiernos de la democracia pactada.

En este escenario, las élites Cruceñas, con una relativamente larga historia de construcción de la identidad en la que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, se repliegan cada vez más sobre esta identidad regional, para resistir el proceso de ampliación y acumulación del poder popular

⁶² Ver particularmente los análisis de Eduardo Gamarra, producidos en 2002 y 2003. En estos análisis, se hace ver, por un lado, los límites de las innovaciones institucionales, para mantener a flote el modelo de gestión política, trámite de conflictos y el modelo económico, pero también se muestra cómo había todavía alternativas para los gobernantes.

⁶³ En relación con las invitaciones a Evo Morales por parte de los Empresarios, no fue la CEPB, la primera organización empresarial en reconocer el liderazgo y la importancia de este líder político. Primero lo hizo la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, para “lograr la paz” en la región. Ese mismo año la CEPB, coincidirá en algunos puntos con Evo Morales, particularmente en la crítica a los nuevos impuestos que estableció o pretendió establecer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La invitación de los empresarios a Evo Morales, para discutir los grandes temas del país y construir un “Gran acuerdo Nacional”, fue vista por Sánchez de Lozada, como un “acto subversivo”, comentaba Carlos Calvo. (Ver, Sanjinés, 2004, T3: 94-105)

indígena y para criticar las medidas del gobierno, primero de Sánchez de Lozada y luego de Carlos Mesa (Burbano de Lara, 2014, Rosnes, 2010, Fairfield, 2015). Éste repliegue debilitará la unidad nacional de las élites empresariales aún más (Webber, 2010). El discurso regionalista de las élites políticas y económicas de Santa Cruz, se radicaliza progresivamente y se configura una oposición en la que los otros, los repudiables son, para las élites económicas regionales, los migrantes de las zonas altas, del occidente boliviano (Rosnes, 2010).

Hay que tener en cuenta que las reformas neoliberales habían fortalecido la identidad cruceña, pues es en este periodo en el que se incrementa el poder económico de esta región, al calor de las exportaciones e inversiones que recibe Bolivia para la producción agropecuaria y de hidrocarburos (Pérez, 2006: 123). Así mismo, las reformas institucionales jugaron un papel importante en la construcción de liderazgos regionales de una sociedad civil de élite (Tapia, 2009).

Cuando la democracia pactada sucumbe ante las múltiples presiones, la reacción de las élites cruceñas fue dirigida a la protección de sus "logros" y la reivindicación de autorrepresentación como los civilizados y modernos de Bolivia. El fortalecimiento de los movimientos indígenas y del poder popular es visto aquellas como amenazas a sus logros y demandarán insistentemente, tanto en el gobierno de Sánchez de Lozada, como en el de Carlos Mesa (con quien, afirma Ane Rosnes, siguiendo a Eaton, 2006, Evo Morales firma una alianza en el congreso), una respuesta más fuerte. Así, "El diálogo entre Mesa y Morales preocupó a las élites cruceñas ya que ninguno de los representantes del poderoso sector agrícola de Santa Cruz fue (sic) invitados al gabinete presidencial, por primera vez desde la transición a la democracia en 1982" (Rosnes, 2010: 60).⁶⁴ Esto llevó a posturas más radicales por parte de los empresarios cruceños que entendieron esto como una afrenta a su estatus y una muestra de debilidad frente a los movimientos sociales populares.

En este marco, Carlos Mesa experimenta una crisis de gobernabilidad y legitimidad de la democracia pactada que ha tocado fondo. La estructura de poder ya no es la misma. La movilización social, creciente desde el año 2000, había contribuido a una reestructuración del poder estatal. Nuevos actores políticos habían entrado en escena, tanto de izquierda, como de derecha. El gobierno anterior, de hecho, tuvo que recurrir a un partido de creación reciente, como la Nueva Fuerza Republicana, para asegurar, en el comienzo de su mandato, un mínimo

⁶⁴ Sobre los pactos o acuerdos entre el gobierno de Carlos Mesa y Evo Morales y las reacciones de las élites políticas y económicas de Santa Cruz, puede verse también: Fairfield, 2015: 241, Webber, 2010)

de gobernabilidad. Gobernabilidad que sin embargo no logró, debido al incremento de la oposición tanto en el parlamento, como en las calles y, finalmente, a la ruptura de la frágil coalición que configura y que finalmente lo abandona en la “guerra del gas”, de octubre de 2003 (Muñoz-Pogossian, 2008: 167)

En este contexto, el mismo poder legislativo sufrió una variación importante pues los movimientos indígenas y sus partidos políticos (Movimiento Indígena Pachakuti y el MAS) habían logrado sumar un importante bloque en el parlamento. Las elecciones de 2002, son el anuncio del fracaso del sistema multipartidista moderado, pues dos partidos que contribuían a la coalición, CONDEPA y UCS, casi desaparecen, el primero de hecho perdió la personería jurídica en este momento y el segundo sólo obtuvo 5 escaños con un 5.5% de los votos. En este mismo escenario entre el MAS (35 escaños) y el MIP (6) escaños, lograron quedarse con el 26% del total de los escaños en el parlamento (Mayorga: 2004: 32). Así las cosas, lo único que salva y, temporalmente, a la hegemonía de los partidos “centristas”, es la votación que obtiene la Nueva Fuerza Republicana, de Mánfred Reyes Villa, quien se alía a los partidos dominantes (MNR y MIR).

Ahora bien, las decisiones más importantes del gobierno en materia legislativa, ya no pueden pasar sin tener en cuenta a los movimientos sociales y políticos indígenas y sus representantes en el parlamento. A esto contribuyó también una crisis de liderazgo que viene desde el gobierno de Hugo Banzer. Como se sabe, el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada culmina prematuramente y, después de un corto periodo de inestabilidad e incertidumbre, es sustituido por Carlos Mesa, quien intenta mantener a flote al gobierno, sin lograr articular a las élites políticas “tradicionales” y buscando sumar fuerzas de manera, al final, poco eficiente, tanto en la izquierda como en la derecha (Webber, 2010).

Para sumar elementos a la crisis, a comienzos de 2004, la importante Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz liderada por Zvonko Matkovich (protagonista, años más adelante de un famoso caso de terrorismo, intervenido por el gobierno de Evo Morales), decide separarse de la CEPB, debido al apoyo que ésta última institución dio a las políticas impositivas del gobierno de Carlos Mesa (La Razón, 24-02-2004, Sanjinés, 2004, T.3; Fairfield, 2015). Esta ruptura, hasta ahora no superada, debilitará mucho las posibilidades de reconfiguración de la articulación hegemónica entre élites políticas y económicas y entre estas y otros sectores sociales. El liderazgo de la CEPB, se verá menguado de este modo.

Para Alejandro Frenkel, en el proceso político boliviano desde 2000, se constituyen dos frentes de acción política, cada uno impulsado desde "agendas" que podríamos catalogar de "estratégicas" y contradictorias. El primer frente es el popular, que desarrolla una agenda para el poder en octubre de 2003 y otro frente de derecha y de élite, que desarrolla su propia agenda en enero de 2005. Esta última tiene como propósito la lucha por las autonomías departamentales, la profundización de la descentralización y la elección directa de prefectos departamentales (Frenkel, 2011:205). Este autor, así mismo, se centra en el análisis de tres movimientos sociales/políticos que se han desarrollado en el nuevo contexto de polarización del país: Comité Cívico de Santa Cruz, Unión Juvenil Cruceñista y el Partido Poder Democrático y Social, PODEMOS. Este último es considerado como "un intento por parte de los partidos políticos tradicionales por ocupar (de nuevo) un rol protagónico en un emergente sistema de partidos" (Frenkel, 2011: 206). Un intento que, como se sabe, fracasará estruendosamente, en el año 2005.

En esta dirección, la disputas que se configuran alrededor de las luchas por el ordenamiento político e institucional, va más allá de lo meramente económico. Se trata de una disputa por la orientación del orden social en su conjunto entre actores socio-políticos contradictorios. Esto en la medida en que

(...) existe un fuerte clivaje histórico-étnico que atraviesa las demandas de la agenda de enero, como contraposición a las demandas de la agenda de octubre de 2003, e impulsadas (luego) por el gobierno de Evo Morales. La idea de una nación 'camba' y de una identidad regional son determinantes en el accionar de algunos grupos que ven al Estado central como un enemigo que los excluye y margina tanto de la potestad sobre los recursos considerados 'legítimamente propios', como del proceso de toma de decisiones a nivel nacional (Frenkel, 2011: 206)

Los dos proyectos político-ideológicos buscarán imponer sus perspectivas sobre el Estado y la economía a través de distintas estrategias. Pero las fuerzas de derecha, asentadas en el oriente boliviano, recibirán un duro golpe en el momento en que, pocos meses después de nacida la agenda de enero de 2005, Evo Morales logra la presidencia de la república con una votación no vista en toda la historia de la democracia pactada. El contundente triunfo de Evo Morales radicalizará las presiones políticas y económicas de las élites políticas de la Media Luna, pero estas presiones encontrarán un gobierno fuerte que logra menguar, hasta articular a sus opositores en un proyecto político nacional. Ahora, ¿Cómo se construyó el proyecto político que finalmente se hace con el poder de Estado? ¿Cómo logró constituirse la fuerza suficiente

para disputar el poder del dinero y de la tradición de la democracia pactada y lograr hacerse con el gobierno por la vía electoral?

5.2. Incremento de las tensiones sociales y construcción de nuevos proyectos hegemónicos en Bolivia

La constitución de estos dos “frentes” que configuran agendas contradictorias para la lucha por el poder de Estado o para su reconfiguración puede ser considerada, a la vez como un punto de partida, pero también como un punto de llegada, de un relativamente largo proceso de agudización de contradicciones sociales, políticas, económicas y culturales (Tapia, 2009, Blanco, 2013). Del lado del poder de las élites político-económicas del oriente boliviano, que contribuyen al debilitamiento de las estructuras de poder nacional, tanto desde el punto de vista político, como económico, como se ha visto, hay un relativamente largo proceso de articulación. La crisis de las estructuras políticas que habían logrado la “articulación” nacional, politizará la identidad regional para la construcción de un movimiento político que le apunta a la reconfiguración del estado y sus instituciones, para mantener su poder regional. Desde el lado de la constitución de las fuerzas políticas que logran ocupar el Estado a partir de enero de 2006 y que se configuran con fuerzas contrahegemónicas, el proceso inició desde el mismo momento en el que, frente a las primeras medidas de apertura de mercados, desestructuración del poder económico del Estado y reestructuración del mercado laboral, generó una intensa ola de movilizaciones. Primero fueron los profesores los que se movilizan en contra de las reformas educativas implementadas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Luego serán los pensionados quienes se levantarán en contra de la privatización del sistema de pensiones (Kohl y Farthing, 2006, Alenda, 2004). Más adelante van a ser los cocaleros e indígenas y progresivamente una heterogénea multiplicidad de organizaciones y movimientos sociales urbanos y campesinos, quienes se tomarán calles y carreteras (Tsolakis, 2009: 249, Muñoz-Pogossian, 2008: 101-102).

La política de Hugo Banzer, en su segundo mandato, de cero tolerancias frente a la producción de coca, conduce a un incremento de las protestas de los cocaleros del Chapare, que ya se venían presentando desde el gobierno de Sánchez de Lozada (Kohl y Farthing, 2006, Muñoz-Pogossian, 2008: 103). Esta lucha va a impedir la llegada de una buena cantidad de recursos al país. Durante buena parte de los años 80 y parte de los noventa, frente al debilitamiento de la producción nacional de la minería de pequeña escala, el narcotráfico venía creciendo. Los recursos de esta actividad ilegal habían sido legalizados, a través del Banco Central que compraba los dólares del narcotráfico sin importar de dónde venían. Se

calcula que estos recursos pudieron representar entre el 12 y el 14% del producto interno bruto boliviano; esto es, entre 250 y 450 millones de dólares por año, afirma Andreas Tsolakis (2009: 252. Ver también, Gamarra, 2002)

En este contexto, los otrora mineros, se vuelven productores de hoja de coca y, al producirse la represión del gobierno de Banzer, se activan las resistencias indígenas y campesinas. Unas resistencias que exponen un discurso antimperialista en la región del Chaparé, donde la figura de Evo Morales va a sobresalir (Sanjinés, 2004, T 2, Muñoz-Pogossian, 2008, Gamarra, 2002). En este escenario, no sólo se resisten las políticas del gobierno, sino que se va edificando un proyecto alternativo de sociedad que será la base sobre la cual se construye el soporte popular del Movimiento al Socialismo (Tsolakis, 2009: 255-256, Muñoz-Pogossian, 2008)

Por otro lado, es importante recordar que la movilización popular se despliega también a partir de los límites que las políticas neoliberales habían impuesto a la participación ciudadana. Las reformas vinculadas con este aspecto buscaron disminuir el potencial insurreccional de los movimientos y organizaciones de campesinos, indígenas y de otros sectores, pero contribuyeron a que estas vayan ganando terreno, incluso desde el punto de vista institucional (Gamarra, 2002). La famosa Ley de Participación Popular promovida por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada genera así dos procesos: 1. La ocupación de espacios institucionales por parte de líderes de movimientos sociales populares y de clases medias urbanas, a través de distintos procesos electorales y 2. Muestra los límites de la ciudadanía multicultural que esta ley promovía, tal como lo expone Nancy Grey Postero (2009). En el primer caso, los recursos del Estado contribuyeron al financiamiento de los movimientos indígenas, particularmente para los Ayllus, articulados por Felipe Quispe, pero estos van a pugnar por una autonomía política y económica, que las restricciones de la “participación popular” no permitía (Tsolakis, 2009: 254, Kohl y Farthing, 2006)

En el segundo caso, la movilización social es creciente. El gobierno ya no puede controlarla, ni cooptarla. Por tanto, recurre a la represión, mostrando con esto sus propias debilidades, tal como sucede en los gobiernos de Sánchez y Banzer (Muñoz-Pogossian, 2008). En este último gobierno varios líderes sociales fueron asesinados en 1997 (Tsolakis, 2009: 257). Sin embargo, la represión, lejos de frenar la movilización, radicaliza las protestas.

Para enfrentar la crisis, algunos asesores de Sánchez de Lozada, le aconsejaron que el partido por éste liderado, debía cambiar y recuperar su orientación hacia la izquierda, pero este se

opone. Se aleja del pragmatismo político, mantiene su ortodoxia y muere políticamente, tras ser obligado a renunciar y a “autoexiliarse”. (Tsolakis, 2009: 260). Sánchez de Lozada rompe así definitivamente, con la unidad de las fuerzas políticas de “centro derecha” que fueron la base de la democracia pactada y de la hegemonía neoliberal, al restar posibilidades de articulación de fuerzas sociales populares.

Como si lo anterior fuera poco, a la creciente resistencia a las medidas “liberalizadoras” del mercado, por parte de profesores, indígenas y campesinos, se van a sumar los conflictos al interior de las fuerzas militares y de policía. Las reformas neoliberales no sólo habían afectado a los trabajadores rurales mineros, profesores y pensionados. Los policías y militares eran unos de empleados estatales cuyas condiciones laborales y de vida se venían deteriorando con salarios precario y sin beneficios sociales o de promoción (Alenda, 2004). Esto llevó a crecientes motines policiales y del ejército, que fueron reprimidos por otros policías o por fuerzas militares. Durante las guerras del agua y del gas, estos motines policiales se reprodujeron continuamente (Tsolakis, 2009: 262, Gamarra, 2003: 8)

Quienes capitalizarán todo este desorden estructural, como lo llama Burbano de Lara (2014), serán los movimientos políticos emergentes: el Movimiento Indígena Pachacuti y el Movimiento al Socialismo. Se favorece con esto la articulación de varias demandas, alrededor de la lucha anti neoliberal, como la fuente de todos los males por los que estaba atravesando la sociedad boliviana. (Tsolakis, 2009: 264). De éste modo, de unas movilizaciones indígenas y populares, en principio meramente reactivas y, hasta cierto punto de vista, corporativas, poco a poco se va pasando al desarrollo de proyectos revolucionarios contrahegemónicos. Estos ya no sólo piden frenar las reformas neoliberales, sino que interpelan la legitimidad de la autoridad estatal construida al amparo de la “democracia pactada” (Gamarra, 2003, Gamboa, 2007). Se produce con esto, siguiendo a García Linera (2001), una desestructuración del poder de Estado, pues éste pierde la capacidad de regulación y control. Una capacidad ya de por sí, muy limitada.

Por el contrario, los movimientos sociales y las comunidades indígenas fortalecen su posición y mejoran sus capacidades organizativas y de autogobierno en sus territorios. En el marco de la confrontación con los sucesivos gobiernos y, sobre todo contra el gobierno de Sánchez de Lozada, desarrollan una estructura productiva orientada hacia el sostenimiento de los bloqueos. pero también, una estructura proto-militar que se prepara para el enfrentamiento con el "ejército republicano". Hay, en este sentido, para García Linera, una guerra de posiciones; una profunda crisis del Estado (de la democracia pactada), pues éste pierde la

capacidad de control territorial; no puede ejercer soberanía, sobre carreteras y calles. Para García Linera, se produce un proceso de "sustitución del poder estatal por un poder político comunal supra-regional (sic) descentralizado en varios nodos (cabildos)" (García, 2001:187).

De esta manera, una heterogénea cantidad de actores socio-políticos comienzan a tomar las calles, pero también a ocupar las instituciones políticas) Kohl y Farthing, 2006, Muñoz-Pogossian, 2008). Se producen así, dos frentes de confrontación, a partir de los cuales se va edificando una "época revolucionaria" (García Linera (2004: 136). De un lado, desde algunas fuerzas sociales que se movilizan, se configuran fuerzas políticas que disputan el poder de Estado en distintos ámbitos de la vida política. Los procesos de descentralización, así como sirvieron de base para el incremento del poder de las élites políticas, económicas y sociales del oriente boliviano, sirvieron también para este proceso de institucionalización del poder de nuevos actores socio-políticos de origen popular. De este modo, la política nacional, manifiesta en las disputas por el poder legislativo y ejecutivo, se convierte en escenario de conflicto, entre dos proyectos contradictorios de sociedad (García, 2004: 137; Pachano, 2007; Schejtman, 2006, Muñoz-Pogossian, 2008).

Sin embargo, la resistencia de la "media luna" boliviana, es lo logra superar un carácter reactivo, mientras que los movimientos sociales, edifican un proyecto de sociedad que despliegan a través de distintas estrategias. Las élites del oriente boliviano, buscarán conservar sus privilegios, mediante un repliegue "estratégico", en el contexto de un Estado que se va transformando paulatinamente al calor de las luchas populares (Webber, 2010). Desde el campo popular, frente a las demandas autonomistas, se van configurando proyectos de transformación del Estado. Esto se evidencia cuando se reconoce que parte de las demandas de los movimientos sociales que se desarrollan a partir del 2000 está la convocatoria a una asamblea nacional constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. Por su parte, la derecha pedía autonomía departamental, descentralización y elección directa de prefectos. Estas élites usan, para tales fines, así como su contraparte, marchas, bloqueos, cabildos, etc. En este marco, la elección popular de prefectos se aprueba en 2004, y es a partir de allí que se va a constituir la oposición al gobierno nacional que asumirá el poder pocos meses después. Del mismo modo, en la reforma constitucional de este año, se establecen algunos mecanismos de participación ciudadana, que sirven para redefinir el poder local y las relaciones entre este y el poder nacional (Kohl y Farthing, 2006). La derecha se organiza, de este modo, a partir de dos escenarios. En el escenario político institucional, en el que actúa el

nuevo partido PODEMOS, como principal fuerza opositora una vez gana Evo Morales y en el plano extrainstitucional, el Comité Cívico de Santa Cruz (Frenkel, 2011: 207)

La historia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, inicialmente es producto de organizaciones de universitarios que, luego se convierten en representante de los intereses regionales, más allá de la clase o de los sectores de clase. Esta organización logra constituirse en la representante de la región a partir de una "asamblea de la Cruceñidad", el 28 de agosto de 2006. (Frenkel, 2011: 208). Pero esto se produce, luego de que, a finales de 2005 Evo Morales Ayma, llega a la primera magistratura en Bolivia. A partir de este momento, el nuevo gobierno tendrá la tarea de recomponer el sistema político boliviano y la articulación de heterogéneos y contradictorios actores sociales. El Estado se reconfigura en el nuevo gobierno, adquiriendo nueva centralidad en lo político, lo económico y lo cultural. Serán varios los contextos de la lucha por la hegemonía. El debate ideológico sobre el deber ser del Estado, es uno de ellos, lo que constituirá el tema central de nuestro próximo apartado. Antes, debemos revisar las dinámicas de la crisis ecuatoriana y los marcos de acción a partir de los cuales se configura un nuevo gobierno.

5.3. Tras las rutas de la crisis ecuatoriana. Fragmentación, inestabilidad política y depredación del Estado en las disputas contrahegemónicas

El presente apartado analiza el proceso político que hizo posible la emergencia de un gobierno que se asume, así mismo, como revolucionario y en clara oposición a las estructuras de poder y dominación que le preceden. Busca comprender la crisis que desembocó en la elección de Rafael Correa Delgado como presidente del Ecuador y el papel desempeñado por las élites económico-empresariales en este proceso de transformación del sistema político ecuatoriano.

En esta dirección, hay que recordar que, tal como se mostró en el capítulo 4, una característica central del retorno a la democracia en este país es la tremenda fragmentación política y la debilidad de las estructuras partidistas que controlaron el Estado a partir de 1978. Como vimos, pese a esta fragmentación, los procesos político electorales fueron más bien estables, hasta 1996, cuando el "agazapado populismo" vuelve a la escena política de la mano de Abdalá Bucaram (Verdesoto, 2014)

A partir de este momento la política ecuatoriana entra en un nuevo ciclo de inestabilidad en el que la incapacidad de las fuerzas políticas "tradicionales", para lograr legitimidad y mantener consensos mínimos en materia política, se hace más notoria. Como efecto de esta incapacidad, dos frentes disputarán el poder que la "partidocracia" no logra articular. Por un lado, es creciente la protesta ciudadana, con matices y demandas diversas. Por el otro, fuerzas

políticas, de carácter personalista y demagógico que disputan el poder institucional a los partidos políticos y que los cuestionan como los responsables del atraso y la debilidad de la economía ecuatoriana se fortalecen cada día más (Pachano, 2003, Pachano, Basabe, Mejía, 2010, Verdesoto, 2014). En medio de esta disputa, se producirá una de las peores crisis económicas del Ecuador y el Estado, considerado desde una perspectiva liberal, como institución administradora de los recursos públicos, será el escenario a partir se realiza uno de los peores atracos de los recursos de los ciudadanos en su historia. Esto en medio de un obstinado intento de las élites políticas y económicas dominantes de continuar con medidas liberalizadoras de la economía.

Bajo este marco, diríamos, lo viejo se erosiona, mientras “lo nuevo” no logra ocupar el lugar dejado por las “viejas” estructuras de poder. Tanto los partidos políticos mayoritarios desde el retorno a la democracia, como los nuevos actores políticos (entre ellos los líderes demagógicos) no construyen fuertes anclajes sociales, como para que logren estabilizar su preponderancia política en el mediano y en el largo plazo. No hay un verdadero proyecto de hegemonía política y el particularismo, corporativismo y las miradas de corto plazo marcarán el derrotero del sistema político ecuatoriano. Así, buena parte de los discursos y prácticas políticas de los actores políticos y sociales que emergen a partir de mediados de los años 90, están marcados por la ambigüedad ideológica, un pragmatismo cortoplacista y la desarticulación generalizada. ¿cómo se desarrolló este proceso de erosión del sistema político ecuatoriano?

5.4. La erosión de la “partidocracia”, demagogia y depredación desde el Estado

En 1996, el demagogo Abdalá Bucaram, luego de dos intentos de llegar a la presidencia (1988-1992), es elegido presidente el Ecuador. En el proceso electoral, la victoria no estaba asegurada. La tradicional fragmentación del campo político de élites se repite, una y otra vez. Como era ya normal en ese momento, la primera vuelta sólo sirvió para determinar los dos candidatos que se enfrentarían por los votos de los electores en el *balotage*. A partir de este momento, los candidatos ampliaron la oferta de promesas y buscaran todo tipo de alianzas. A quien se enfrenta Bucaram en la segunda vuelta es al “elegido” de Febres Cordero: Jaime Nebot. Se produce así el enfrentamiento entre dos tipos de élites. Una vieja oligarquía representada por el Nebot y un movimiento político organizado por “nuevos ricos” de Guayaquil, por una élite informal que busca abrirse espacio en el sistema político ecuatoriano (Acosta, 1996; Freidenberg, 2003; 2003b).

Con la ambigüedad propia de los demagogos, Bucaram se presenta a sí mismo como un excluido más que lucha por la igualdad, defendiendo al mismo tiempo las políticas aperturistas que venían incrementando los niveles de concentración de la riqueza en el Ecuador. Con su discurso populachero, logra movilizar al 26.28% de los electores en la primera vuelta, quedando a tan solo 0.89% de distancia de quien lo supera: Jaime Nebot, el protegido de las élites “patricias” guayaquileñas (Freidenberg, 2003, De la Torre, 2006). El estrecho margen entre Nebot y Bucaram; entre el “viejo y el “nuevo” rico, se revertirá con creces en la segunda vuelta. En ésta, Bucaram arrecia sus críticas a la oligarquía, promete de esto y de aquello, firma pactos y alianzas con varios grupos políticos de izquierda y derecha. Contra todos los pronósticos, logra así el 54.47% de los votos, frente al 45.53% de su contrincante (De la Torre, 2006: 17).

Una vez en el poder, una a una, todas las promesas hechas a los pobres pasan al olvido. Las políticas que impulsarían la reducción de la desigualdad se cambian por acuerdos con el FMI para reducir el déficit fiscal, por el incremento de los precios de los combustibles y los servicios públicos, flexibilizar el mercado laboral e impulsar la privatización del servicio de energía eléctrica (Acosta, 1996, 1999, Freidenberg, 2003, 2003b, De la Torre, 2006). De la mano de aquellos a quienes cuestionó duramente en la campaña (y que seguirá cuestionando después), dará continuidad a las políticas neoliberales y la oligarquía patricia, lo acompañará en estas iniciativas. Grandes empresarios, de hecho, conforman el gabinete de asuntos económicos y las cámaras de la producción se adaptan pues, tal como lo expresó, Alberto Acosta, a estas "no les importa la forma, mientras se mantenga el fondo". Al respecto, Alberto Acosta, expresó, poco tiempo después de la elección de Bucaram, que los representantes de las cámaras de la producción “temerosos por naturaleza”, bajaron su perfil o se sumaron “más o menos silenciosos a la fanfarria” (Acosta, 1996).

El círculo del que se rodeó Bucaram para concretar sus políticas no podía ser mejor para los auspiciadores de las políticas aperturistas y de “libre mercado”. La crema y la nata de los representantes de la Banca y de la agroexportación, ocuparon los cargos más altos. Álvaro Noboa (candidato presidencial por el PRE en 1998 y luego bajo su propio partido, el PRIAN), heredero del emporio bananero e industrial de su padre, fue nombrado en la determinante Junta Monetaria.⁶⁵ A éste lo acompañaron Roberto Isaías, Gerente del Banco Filabanco y uno

⁶⁵ Bajo la perspectiva de Julio Oleas en su interpretación de la manera en que se abandonó el “desarrollismo”: "El avance hacia el neoliberalismo no significó el remplazo del Estado por el mercado. El centro de gravedad de la política económica paulatinamente se trasladó desde la Junta Nacional de Planificación hacia la Junta Monetaria, entidad en la que se gestó buena parte de la mutación hacia el neoliberalismo criollo. Una vez

de los hombres más adinerados del Ecuador y David Goldbaum, presidente del directorio del Banco Territorial (Freidenberg, 2003; El Tiempo, 1996, 09-06-1996; Acosta, 1996). Se trataría así de un gobierno de empresarios, en el que la banca, particularmente, jugará un rol determinante que le daría continuidad a las políticas del presidente anterior y sentará las bases para la depredación de los recursos de los ecuatorianos. Con estos nombramientos, Bucaram buscaba calmar los ánimos, tranquilizar a los agentes del mercado y dar luces sobre la “responsabilidad” con la que se tomarían las decisiones importantes (El Tiempo, 09-06-1996). Para complementar este “parte de tranquilidad”, contrató al exasesor de Carlos Menen, el neoliberal Domingo Cavallo, para construir un plan de estabilización de la economía (Acosta, 1996)

Pero no todas las medidas ni las formas de Bucaram agradarán a los empresarios y a la clase política. Las políticas que afectaban a los agroexportadores, particularmente el incremento del precio de los carburantes y luego, bajo la dirección de Cavallo, el plan de convertibilidad del sucre, generarán una fuerte resistencia de varios sectores sociales. Frente a estas medidas concretas, pero con el argumento de cuestionar el actuar político que desprestigiaba al Ecuador en el plano internacional, las élites se levantan y contribuyen a la ola de movilizaciones sociales que despertaron las disposiciones “aperturistas” del gobierno de Bucaram. Si bien la mayor parte de las medidas fueron aprobadas por las Cámaras de la Producción, estas se sumaron a la protesta callejera, especialmente en Guayaquil, donde, por otro lado, el enfrentamiento entre el Partido Social Cristiano, el más “fiel” representante de la oligarquía patricia y el PRE, venía desde los años 80 (Acosta, 1996: 10, Oleas, 2013)

Con la contratación del “ilustrado” argentino, se impulsa una política de convertibilidad que busca acercar el valor nominal del sucre al dólar, pero que de fondo, le quitaba margen de maniobra al Banco Central y autonomía al Estado en términos de política monetaria. Con la convertibilidad fija, que definió una relación de 4 Nuevos Sucres por dólar, a partir del momento en el que el dólar llegara a los 4.000 sucres:

El BCE ya no hubiera tenido posibilidad de expandir la circulación monetaria para financiar el gasto público, a menos que previamente se hubiera producido un incremento de las reservas monetarias. Esto requería un periodo de 'sinceramiento de la economía, en el sentido que el Ministerio de Finanzas empieza a manejarse mejor para conseguir crédito; quien le preste dinero tiene que pensar que el manejo fiscal es viable' (de la Torre, 1997: 2), pues el BCE ya

capturada la dirección de la política monetaria por la banca privada, el sector financiero pudo sortear las dificultades de la década perdida y consolidar su posición dominante en la política interna” (Oleas 2013, 385

no podrá 'crear' dinero para concederle crédito. Como para 1996 el déficit llegaría a 3.1 del PIB..., Bucarán presentó su Plan como la única opción viable para disciplinar el gasto fiscal (Oleas, 2013. 290)

La respuesta de algunos empresarios a las medidas de Bucarán, no se hicieron esperar. A muchos de los banqueros que estaban en el gobierno, en este momento no les convenía la convertibilidad pues, eventualmente disminuiría su poder económico. Un poder que venía incrementándose de manera importante, gracias a los juegos especulativos y su posición preponderante al interior de los gobiernos neoliberales que les habían ya perdonado deudas. El Panorama del poder bancario en el Ecuador puede verse cuando constatamos la concentración de capital a fines de 1996:

(...) A 31 de diciembre de 1996 el patrimonio sumado de todas las entidades bancarias era de unos 1.277.5 millones de dólares (alrededor del 6% del PIB de ese año). Los nueve bancos más grandes concentraban 70% del patrimonio total, 56% del capital pagado y 79% de las reservas. En el otro extremo, los bancos más pequeños apenas contaban con 2%, 3% y 1% del patrimonio, capital pagado y reservas totales respectivamente. En el equipo de gobierno se encontraban representados tanto los del primer grupo como los del último. Diez grupos financieros concentraban 82% de los activos totales gestionados por todos los grupos; seis eran guayaquileños y cuatro quiteños; 64% de los activos totales correspondían a sus negocios bancarios y 36% a otros servicios financieros. En el grupo Progreso, un abrumador 96% de sus activos correspondía a su ejercicio bancario, pero entre los grupos más pequeños el 94% de los activos reportados correspondía a intermediación bancaria (Oleas, 2013: 293-294)

Esta tremenda concentración del poder económico de la banca (que, hay que decirlo, nunca es un sector independiente y autónomo, sino que sus principales dueños tienen un portafolio de inversiones bien diversificado), corría el riesgo de cambios bruscos y, por tanto, eventuales pérdidas, lo que generó enfrentamientos al interior del gobierno. Así mismo, la parcialización de la política oculta bajo la demagogia neoliberal de Bucaram, hizo que varios sectores, tanto populares como de las élites económicas, se levantarán en contra del gobierno. La prensa hizo eco de las quejas de las élites, que se veían afectadas, por las medidas ideadas, fundamentalmente por Domingo Cavallo, quien, para algunos, buscaba disminuir, precisamente, la influencia de los grupos de poder en el Estado y que este pudiera recuperar su autonomía en el desarrollo de la política económica.

Se gestan así contradicciones al interior de las fuerzas que respaldaron a Bucaram, lo que lo debilita progresivamente. De hecho, dos frentes se van a desarrollar, en contra de las políticas del gobierno. Por un lado, la oposición al interior del congreso (y dentro del propio ejecutivo)

y, por el otro, la oposición callejera, que termina por juntar a las élites económicas con obreros e indígenas. Así, una vez se dan a conocer las medidas económicas:

Los empresarios y los obreros mostraron al país un comunicado conjunto sin precedentes, en el que reiteraban “su oposición a la convertibilidad, a la creación de nuevos tributos, a los cambios laborales que permitan la arbitrariedad y el aumento del desempleo, a modificaciones del sistema financiero y crediticio...” y observaron las “inquietantes formas de corrupción administrativa y conflictos internos en los altos estratos del poder y la crispación reinante en todos los niveles de la administración, la cual ha obligado a la separación del gabinete de la Ministra del Trabajo” (El Comercio, 1 de diciembre de 1996: C1). La crispación en los ámbitos burocráticos invadió con rapidez al resto de la sociedad. La oposición (PSC, ID, DP, MPD y Nuevo País) exigió un congreso extra para tratar la reforma tributaria que era parte del Plan, pero el PRE y el FRA querían tratar las reformas económicas urgentes en el Plenario de las comisiones legislativas (El Comercio, 3 de diciembre de 1996: A2) (Oleas, 2013: 298).

De esta creciente oposición, resultará un movimiento de congresistas que, anclados en las críticas sociales y en las crecientes denuncias de corrupción, impulsaron y lograron la destitución de presidente poco tiempo después de que éste diera a conocer su paquete de medidas económicas. Así, Bucaram fue destituido por el Congreso con el argumento de que este manifestaba “incapacidad mental”. Para cubrir el vacío de poder, esta institución estableció un “presidente interino”, figura que, a decir de Pachano (2007) no existía en la Constitución vigente hasta el momento. De este modo, la destitución de Bucarán contribuirá al desarrollo de un nuevo ciclo de inestabilidad, en el que el sistema político creado desde el retorno a la democracia sucumbirá lenta y dramáticamente. Los banqueros y los grupos empresariales aliados serán los únicos beneficiarios.

Entre la elección del demagogo Bucaram y Rafael Correa, 8 presidentes ocuparán el palacio de Carondelet; es decir, cada presidente apenas logra un promedio de duración de su mandato de apenas 15 meses. Algunos de quienes ocupan la presidencia, sólo lo harán por unos días o, incluso, por algunas horas. El sistema político ecuatoriano se degrada, mientras la economía y la población es duramente golpeada por los efectos de las políticas de apertura y flexibilidad (particularmente financiera), los choques externos y, sobre todo, la depredación de los recursos del Estado, por parte de las élites económicas locales. Como si lo anterior fuera poco, al final de la década de los noventa, las economías latinoamericanas sufrieron un duro golpe debido a la crisis asiática y a su expansión en las más importantes economías latinoamericanas, entre las más relevantes, las de Brasil y Argentina. En Ecuador, este choque externo estará complementado con los catastróficos efectos del fenómeno del niño que deja

pérdidas materiales y humanas, difíciles de superar (Acosta, 1999; Parandekar, Vos y Winkler, 2002).

Para Simón Pachano, el nuevo ciclo de inestabilidad del sistema político ecuatoriano obedeció, de este modo, a la ruptura del pacto entre las élites política de respetar el orden democrático y las funciones de cada poder. Por tanto, este ciclo no habría empezado con la destitución de Bucaram, sino antes, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la renuncia de Alberto Dahik, luego de haber sido acusado de corrupción por la Corte Suprema de Justicia que emitió orden de captura en 1995. A partir de este momento, afirma Simón Pachano, la justicia se politizó y la política se judicializó. La inestabilidad política argumenta Pachano, obedeció a esta ruptura del pacto entre las élites y sus efectos conducirían a la debacle del sistema de partidos y a la intensificación de la fragilidad de la democracia ecuatoriana (Pachano, 2007: 62 y ss.)

Desde una mirada distinta, argumenta esta investigación, la ruptura de este pacto es consecuencia y no causa de la inestabilidad. La debilidad de las estructuras políticas ecuatorianas, entre estas los partidos políticos, tanto desde el punto de vista institucional, como ideológico, sirvió de base para la ocupación rapaz del Estado por parte de las élites económicas y políticas. En esta ocupación, los conflictos por los recursos (cada vez más escasos y sometidos a la volatilidad propia de las economías dependientes), podían estallar en cualquier momento. Y así sucedió a mediados de los años 90, cuando el Estado ha sido disminuido en sus capacidades y lo que queda de sus recursos es poco y para cada vez más actores que entran (o quieren entrar) a disputar un lugar dentro del mismo. Puede decirse entonces, que la estabilidad de las instituciones dura, hasta que duran los pactos para mantenerlas y, en contraposición a lectura institucionalista de Pachano, puede verse que en el caso ecuatoriano, desde el retorno de la democracia electoral, es que estos pactos son muy inestables. Desde el retorno a la democracia, se intentó crear una base institucional para partidos fuertes y lo que hubo fue más liderazgos que partidos; más personalismo que estructuras partidistas orgánicamente articuladas. De ahí que el clientelismo haya sido el mecanismo más eficiente para la cooptación de líderes regionales y locales y de los electores. Más eficiente, pero también tremendamente vulnerable a la disponibilidad de recursos y al peso que, institucionalmente, los líderes darán a su propio poder personal. Esto, sobre todo, desde Febres Cordero. De ahí que, aunque este recurso se enfrente con la volatilidad electoral ecuatoriana, los constantes cambios en las reglas del juego electoral y político, ratificaran esta

debilidad de los actores colectivos para garantizar la continuidad de los pactos para sostener una democracia electoral estable (Pachano, 2007: 134)

Otro elemento por considerar, que podría contribuir a explicar la crisis que se desarrolla en la política ecuatoriana es que, precisamente, los líderes políticos comienzan a tener problemas para sostener los vínculos clientelistas y se generan dificultades para que los partidos copen el espacio público-político de manera organizada. Los niveles de competencia electoral se incrementan con la pérdida progresiva de legitimidad de los partidos políticos, el ingreso de nuevos actores (v gr. los indígenas, entre otros) y el fortalecimiento de los liderazgos “demagógicos” (unos más, otros menos, todos fueron “populistas” en Ecuador antes de Bucaram). Esta mayor competencia hace que los vínculos clientelistas se debiliten o, al menos, se volatilicen (Ospina, 2006). Ratificando lo anterior, tal como han planteado Conaghan (2003 [1996] y Freidenberg (2003a; 2003b), el Ecuador democrático fue testigo de la configuración de liderazgos en contra de los partidos y partidos en contra de sus propios líderes. Los mismos líderes políticos más importantes no estaban a gusto con sus propios partidos y con tener que negociar constantemente sus decisiones. De ahí que hayan generado mecanismos “institucionales” para debilitar a las estructuras partidistas y fortalecer sus propios liderazgos.

Una evidencia más de esta esquizofrenia en el ejercicio del poder ecuatoriano es que, si bien es cierto buena parte de los gobiernos hasta finales del siglo XX en Ecuador, son “gobiernos de partidos”, un espacio de estos gobiernos, particularmente el manejo de las políticas económicas se deja en manos de agentes “independientes”, de “técnicos” que dentro de la hegemonía del discurso y las políticas neoliberales, serían capaces de construir e implementar políticas económicas guiados por la “racionalidad” y un pragmatismo, supuestamente “desinteresado”. Y así fue, sólo que esta “racionalidad” y “pragmatismo” sirvió, no para intereses generales, sino para intereses muy particulares. Estas políticas favorecieron la ocupación del Estado y su formación, por parte de unas élites depredadoras, que se beneficiaron aún en contra de la reproducción de las bases sobre las cuales los gobiernos las pusieron; esto es en contra de las bases del mismo clientelismo que es la disponibilidad de recursos. Al no haber dinero, es cada vez más difícil ganar el respaldo de ciertos sectores y líderes políticos

Esta ambivalencia entre el “gobierno de los partidos” y el gobierno de la tecnocracia, debilita a los primeros y sirve para esta ocupación del Estado por parte de la pseudo tecnocracia rapaz. Ante la falta de estructuras orgánicas que movilicen y representen a sectores sociales más o

menos delimitados, el campo político se abre para líderes demagógicos, más o menos populacheros, que crean sus propios partidos (Bucaram había creado el PRE, Álvaro Noboa creará luego el PRIAN) o usan su posición de dominio dentro de las estructuras partidistas dominantes (El PSC es dominado por Febres Cordero; Oswaldo Hurtado domina en la Democracia Popular), en contra de las mismas estructuras, pues se asumen estas como patrimonios personales (Freidenberg, 2003b). De este modo, el personalismo domina y es usado para negociar con otros poderes, particularmente los poderes económicos, nacionales y extranjeros, en detrimento de los recursos colectivos.

Bajo este panorama de fragilidad orgánica de la “partidocracia” y la intensificación de las movilizaciones sociales, particularmente de los movimientos indígenas, sirve al mismo tiempo para dos procesos. Por un lado, para el fortalecimiento de líderes políticos que se oponen a los partidos políticos, pero que siempre hacen uso de estos, para impulsar políticas concretas, mediante lo que Burbano de Lara denominó “Coaliciones fantasmas” (Burbano de Lara, 2004). Derivado de esto, se facilita la emergencia de nuevas fuerzas políticas cuyos líderes demagógicos van a culpar a los partidos dominantes y a las “oligarquías”, como las llamaba Bucaram, de la crisis económica, política y social ecuatoriana (Acosta, 1996). Por otro lado, la debilidad de las coaliciones, la instrumentalización de las mismas para favorecer intereses privados, facilitará la ocupación directa del Estado por parte de las élites económicas, principalmente las élites bancarias y los grupos empresariales asociados a las mismas que delinearán las funciones del Estado, al servicio de sus intereses.

Sobre el primer proceso, esto es, sobre el fortalecimiento de una “política” anti-partido, a partir de Bucaram, hasta Rafael Correa, todos los líderes harán eco de estas críticas para movilizar a la ciudadanía electoralmente. Si antes de la elección de Bucaram, los líderes políticos no hicieron mucho por fortalecer a los partidos, la legitimidad de estos se desvanece aún más con la llegada de éste al poder. A partir de la elección de Abdalá Bucaram, las mediaciones entre líderes y organizaciones políticas prácticamente desaparecen y el multipartidismo polarizado, que frecuentemente genera mucha inestabilidad, se polariza aún más. La apelación a un poder por fuera de toda norma o pacto será el recurso que los líderes políticos usan para atacarse mutuamente en un escenario de cambio de correlación de fuerzas vertiginoso. Este uso indiscriminado del poder se ejemplifica primero con el derrocamiento de Bucaram, después de tan solo 6 meses en el gobierno; luego, con el derrocamiento de Jamil Mahuad y finalmente; de aquel que contribuyó al derrocamiento de este último: Lucio Gutiérrez (De la Torre, 2006, 2008). En la caída del primero, además del parlamento, la

presión social proveniente de la Federación Unitaria de trabajadores, la “poderosa Federación de Cámaras de Producción y Comercio” así como el expresidente Febres Cordero, y el movimiento indígena fueron determinantes (Fontaine, 2002, Becker, 2011, Pachano, 1996: 72). Múltiples y contradictorias fuerzas confluyeron en la búsqueda de posicionarse mejor en las disputas por el poder, pero no en la perspectiva de configurar una propuesta alternativa de país.

Pese a todo lo anterior, no todo es inestabilidad, pues hay continuidad en las políticas de orientación neoliberal. Así como Bucaram impulsa la receta neoliberal, su sucesor, el conspirador Fabian Alarcón, también lo hará. Estas políticas, no habiendo mucho que privatizar en el Ecuador, generarán endeudamiento progresivo, flexibilización financiera, pérdida de controles sobre la banca privada (que los mismos banqueros habían impuesto), y el debilitamiento de agentes de control institucionales. Al amparo del debilitamiento de los partidos políticos, los movimientos sociales tuvieron escenario para su fortalecimiento. Los indígenas ganarán protagonismo. Pero serán las élites económicas las que se aprovecharán de la debilidad de los gobiernos, y de la fragmentación de los movimientos indígenas. Las primeras, particularmente las asociadas a la banca, mediante maniobras dolosas, por decir lo menos, lograron enriquecerse y hacer colapsar el sistema financiero ecuatoriano a finales de los años 90 (Oleas, 2001)

Así, mientras el sistema de partidos colapsa, las élites económico-empresariales saldrán airoas y enriquecidas (claro, también, dependiendo de los vínculos políticos, algunas empobrecidas o quebradas) y mantendrán, su discurso “liberalizador”, más intacto que en el caso boliviano. De hecho, gracias a la debilidad de las fuerzas políticas, pudieron mantenerse como árbitros; como jueces del sistema político y conservaron su capacidad de presión sobre los cada vez más débiles gobiernos, aunque esta presión no se haga de manera unificada, sino más bien pragmática, coyuntural y cortoplacista. De este modo, las crisis económica y política, no se ven, de manera tan evidente, como una crisis de la dominación de las élites económico-empresariales y de las políticas liberalizadoras. Banqueros, agroexportadores, grandes comerciantes de importación y exportación-especulación, sostendrán, hasta el final, la defensa de una orientación económica de libre mercado.⁶⁶ Y lo harán, de hecho, con toda

⁶⁶ Con las reformas de los años 80 y 90, se fortalece una tendencia de los actores económicos hacia "la economía especulativa" quienes concentran "las expectativas" "en plazos cada vez más cortos" Como resultado de esta tendencia especulativa de los actores económicos, el comercio y los servicios. La economía productiva se redujo, pues se redujeron las inversiones; las exportaciones se contraen, pero se incrementan las importaciones (Oleas, 2013: 389)

intensidad, aún después de la dolarización que éstas mismas imponen, a comienzos del año 2000, durante el gobierno de Jamil Mahuad. La inestabilidad institucional les va a servir para ocultar su propia responsabilidad frente a la crisis económica.

Así las cosas, las élites empresariales, que habían sido afectadas también por el debilitamiento del mercado externo y la devaluación del sucre, pronto se dieron cuenta de la importancia de mantener sus recursos resguardados, mediante una dolarización progresiva de sus activos, tanto al interior del Ecuador, como fuera de éste. De este modo, cuando se oficializa la dolarización total de la economía y se abandona el sucre, los poseedores de dólares serán los más beneficiados con la medida. Los grandes exportadores y la banca, nuevamente, serán quienes usufructúen la dolarización. A partir del año 2000 estos empresarios vinculados al comercio exterior, podrán acopiar cada vez más dólares, gracias a la recuperación del mercado internacional y al incremento de la demanda de productos ecuatorianos (Solimano, 2002).⁶⁷ La medida entonces no es una transformación radical y resultado de una coyuntura específica, sino la ratificación radicalizada de la dependencia de la economía ecuatoriana y del procesos de dolarización parcial de las fuentes de ingreso y acumulación de sus élites económicas que ya venía dándose durante los años 90. Los grandes perdedores, serán los sectores laborales, que verán cómo sus ingresos disminuyeron significativamente y, de hecho, cómo sus ahorros se hicieron humo con la dolarización.

5.5. Degradación de las condiciones de vida en Ecuador y fragmentación de alternativas políticas al neoliberalismo

El análisis de este proceso de crisis del sistema político ecuatoriano desde mediados de los 90, no han sido entendido del todo. Acosta (1996, 1999), como otros, no plantean de manera suficientemente clara, una relación directa entre neoliberalismo y "populismo", y en buena medida, tal como lo evidenció Edgardo Lander, a mediados de los 90, si algo caracteriza al discurso neoliberal es su alta dosis de demagogia (de populismo en el discurso académico ecuatoriano). La idea de que con una economía de "libre mercado" triunfa la competencia, la creatividad, el emprendimiento y la razón, no deja de ser un recurso demagógico de los impulsores del discurso neoliberal (Lander, 1994). Esto, pues a través de las medidas liberalizadoras los poderosos obtienen y/o fortalecen sus ventajas comparativas y competitivas, frente a los pobres y las clases medias, que ven un escenario económico cada vez más difícil e inestable. En este marco, los poderosos de la periferia específicamente, se

⁶⁷ Realmente la diversificación de activos de estas élites, hace que se trate, más o menos de los mismos actores. Ver al respecto, Pastor, 2017

adaptan a las nuevas condiciones, se fusionan, venden parte de sus activos y se articulan con las élites transnacionales, incrementando su poder estructural a nivel local (Durand y Campodónico, 2010). El reconocimiento de este proceso es frecuentemente dejado de lado.

No es, de éste modo que el neoliberalismo de Bucaram y sus sucesores, se haya untado de ciertos rasgos populistas, como plantea Acosta (1996, 1999), Verdesoto (2014) y otros, sino que es, intrínsecamente demagógico o populista y esta es, precisamente una de las bases de su hegemonía, pues las clases medias terminan por adaptarse al mundo inestable y cada vez más “competitivo”, con lo que el proyecto de flexibilizar a la sociedad, una de las tareas centrales del proyecto neoliberal de los años 70, se ve progresivamente realizado (Blanco, 2004)⁶⁸

No obstante, debido al carácter demagógico del neoliberalismo, sus promotores se ven en la necesidad de configurar o reproducir mecanismos de reproducción clientelar de las relaciones de poder y dominación, como son las políticas asistencialistas promovidas por la banca multilateral y el Banco Mundial, e implementadas por los gobiernos neoliberales de la periferia. Acosta intuye esto, pero no ve con la suficiente claridad lo que ha significado el neoliberalismo y cómo este, más allá de favorecer al gran capital, constituye bases institucionales para su reproducción y para su perpetuación que, pese a esto, no logra la hegemonía, pues más que integración social y consenso activo de los dominados (salvo, en los momentos de prosperidad, de las clases medias), lo que produce es la intensificación de la fragmentación social. El incremento de la pobreza y la desigualdad contribuirá a esta fragmentación. Esto es precisamente lo que se produce en el Ecuador, donde los índices de pobreza pasan del 57% en 1987, a un 67%, en 1995 (Acosta, 1996; Burbano de Lara, 2006: 307)

A la vez que se produce este empeoramiento de las condiciones de vida para las mayorías, se fortalecen unas élites evasoras, con una “débil cultural tributaria”. Hasta la creación de la Secretaría de Rentas Internas, en 1999, la recaudación casi que dependía de la “buena voluntad” de empresarios privados. Con el SRI, en 1999, en buena medida resultado de la presión de organismos multilaterales que buscan asegurar ingresos para el pago de la deuda externa, la recaudación se incrementa en un 2.3% del PIB, equivalente a 320 millones de dólares (Samaniego, 2001- en Marconi). Según este autor, a fines de los 90, los niveles de evasión llegaban a alrededor del 60% de la tributación. Esto hacía que: “(...) Cuando

⁶⁸ Este discurso de la competitividad, la productividad que resalta la iniciativa individual, tan beneficioso par las élites económicas en términos de legitimación de su propio estatus, es apropiado por las clases medias ecuatorianas y algunos sectores populares, particularmente vinculados al comercio informal.

cualquier ciudadano compraba un artículo, pagaba al vendedor un valor adicional del 10% sobre el precio, pero nunca llegaba al Estado. Es decir, parte de los tributos estaban ‘privatizados’ y servían para engrosar los excedentes de ciertos empresarios” (Samaniego, 2001: 216)

En ésta misma dirección, para Larrea y Sánchez (2003), los problemas del Ecuador obedecieron en este momento, a un débil desarrollo institucional, a la enfermedad holandesa y al carácter eminentemente rentista de las élites económicas. Los autores describen los bajísimos niveles de competitividad.⁶⁹ Así, lejos de la demagogia empresarial, que construye una imagen de las élites como “artífices” del desarrollo ecuatoriano, en contra de un Estado derrochador e interventor, puede verse que, entre 80 países, Ecuador a comienzos del presente siglo, estaba en las últimas posiciones (70 y 78) y se ubicaba entre los menos competitivos del mundo. Esta debilidad del aparato productivo contribuyó al incremento “abultado de las importaciones”, de acuerdo con Larrea y Sánchez (2003).

De los pocos indicadores favorables, derivado de hecho, del drama humano de la emigración, para la economía ecuatoriana, se resalta el incremento de las remesas. Cerca de 700.000 ecuatorianos migraron a partir del año 1998 y sus envíos se convirtieron en la segunda fuente de ingresos para el Ecuador, después de las ventas de petróleo. Los más pobres ecuatorianos, así como las clases medias no pudieron beneficiarse de la recuperación económica que Ecuador empezó a vivir a partir del nuevo siglo, pues los recursos del Estado estaban comprometidos. Los ingresos petroleros, servían, sobre todo, para pagar altos intereses de la deuda externa. Las élites compradoras, lejos de aprovechar la entrada de divisas por de las remesas de los migrantes, para incrementar su propia producción, incrementaron la importación de bienes de consumo. Otro efecto de la crisis que registran Larrea y Sánchez (2003) es el incremento de la pobreza y la indigencia, particularmente en ciudades como Guayaquil, la ciudad más afectada por el fenómeno del niño y, además, una ciudad con una

⁶⁹ La débil competitividad del empresariado ecuatoriano, se habría producido también por el rentismo al que se acostumbró con los beneficios constantes que recibió de los distintos gobiernos ecuatorianos. La sucretización de las deudas, la flexibilización del sistema financiero, el otorgamiento de subsidios, la evasión de impuestos y la protección (a toda costa) de las utilidades de las élites, habrían generado esta actitud rentista del empresariado. Ver: Paz y Miño (2015) Este autor, sintetiza cómo se posicionó el discurso neoliberal y el cuestionamiento de las capacidades del estado de la siguiente manera: La ideología neoliberal fue utilizada para el “apertura” en beneficio de una elite social propietaria y concentradora de la riqueza. Las demandas frente al Estado configuraron un cuadro recurrente: no al “estatismo” ni a los impuestos; utilización de los fondos estatales al servicio “del país”, es decir, del sector privado; condonación de deudas y reestructuración ventajosa de créditos; no a la “competencia desleal” del Estado, etc., incluyendo la “muerte” del BCE y, que incluso el trabajo sea “flexibilizado” a fin de que no se convierta en una “carga” que afecte los “costos de producción” y con ello la rentabilidad, que es lo único que interesa. (Paz y Miño, 2015: 19)

fuerte desigualdad. El aparato productivo ecuatoriano, en este marco, no se recupera con la dolarización que instaura Jamil Mahuad y que, esta vez, cuenta con el total respaldo de las élites económicas (sobre todo los banqueros que financiaron su campaña) sino que se estanca. El único sector que crece es el petrolero, impulsado por la inversión en la construcción de un nuevo oleoducto, pero los beneficiarios de esta recuperación son, sobre todo, las empresas extranjeras que lo controlan. La participación del Estado en las utilidades es más bien mediocre y se destina principalmente al pago de intereses de deuda externa.

En este marco, los indicadores de sociales ecuatorianos sufren una dramática degradación a finales de los años 90. La pobreza se incrementa en 12 puntos en 1998 y luego 9 puntos más en el año siguiente (Parandekar, Vos and Winkler, 2002: 127). Lo mismo sucede con la desigualdad. Los ingresos de los más pobres decrecen. La extrema pobreza afecta al 20% de la población (2.2 millones de ecuatorianos), mientras que la pobreza afecta al 55% de los ecuatorianos. Las políticas sociales, en este contexto, sufrieron además una fuerte contracción. Parandekar, Vos and Winkler (2002) ubican al Ecuador, en estos años, como uno de los países más desiguales de América Latina, un continente ya de por sí campeón en desigualdad. Las áreas rurales son las más golpeadas con el incremento de la extrema pobreza que pasa del 12% en 1995 al 21% en 1999. Una vez se produce la dolarización en el año 2000, los efectos inmediatos se descargaron sobre los más pobres, pues la inflación se disparó, debido a la falta de moneda circulante. La crisis afectó particularmente a los hogares liderados por mujeres, los hogares en su conjunto redujeron sus gastos en educación, con lo que se sentaron las bases para el mantenimiento de una pobreza y desigualdad estructural. Los niveles de desnutrición en Ecuador eran sólo comparables, a fines de los años 90, con los de Bolivia y Perú. Esto afectaba a más del 25% de los hogares. Este índice llegó hasta el 43% de los hogares más pobres, superando la cifra de 1998, que se acercaba al 40%. (Parandekar, Vos y Winkler, 2002, 139)

Es este el marco en el que empiezan a configurarse nuevas fuerzas políticas o a articularse algunas que venían constituyéndose desde finales de los años 80. El protagonismo indígena ya se había hecho sentir en la elección de Abdalá Bucaram, pero esto, más que favorecer su imagen la debilitó ante los electores. De este modo, una de las demandas más importantes de los indígenas, desde comienzos de los años 90, va a terminar siendo capitalizada por los políticos aperturistas. La constitución de 1998 será el escenario no para la reconfiguración de la política y la economía ecuatoriana, sino para la ratificación de la orientación neoliberal de

la economía y para el fortalecimiento del personalismo político (Hidalgo Flor 2002, 2005; Becker 2011, Oleas 2013; Beckerman, 2002).

Ante el creciente protagonismo indígena, las élites políticas dominantes desarrollaron, estrategias de cooptación de sus liderazgos, lo que a la postre se revirtió en contra de los líderes cooptados y en general del propio movimiento indígena, pues perdió capacidad de articulación. Esto, a pesar de que este movimiento logra constituirse en una fuerza política importante, de manera particular en los ámbitos locales y eventualmente, regionales. Así, no obstante que la constitución de 1998 contó con la presencia indígena que la impulsó y que, de hecho, fue pactada su convocatoria con el gobierno de Fabián Alarcón y reconoció al Ecuador como una sociedad diversa en términos étnicos y culturales, lejos estuvo de ser construida con amplia participación popular e indígena. Esto por cuanto los actores dominantes, los partidos políticos, vieron que podían sacar provecho de esta y lograron mantener su dominio en la elección de asambleístas. Representantes de los partidos políticos tradicionales: el PSC, DP Y FRA fueron las bancadas mayoritarias al alcanzar, en su conjunto el 66% de los escaños. Con esto, la orientación neoliberal, no se debilita, sino que se fortalece (Oleas, 2013: 322). Así, los partidos dominantes

Nombraron a Osvaldo Hurtado presidente de la Asamblea y la aspiración de una constituyente soberana fue truncada por una limitada asamblea constitucional con representación similar a la del Congreso, pero sin diputados nacionales. Aunque la Asamblea Nacional Constituyente - como se autodenominó- declaró que tenía plenas facultades constituyentes, el Congreso que defenestró a Bucaram siguió en funciones... (Oleas, 2013: 323-324).

Bajo este marco, una síntesis de lo que podría ser el más profundo cambio introducido por la constitución de 1998, la plantea Oleas quien expresa que "Los asambleístas de mayoría acogieron con entusiasmo las enseñanzas del neoliberalismo: del texto del art. 243:2 se infiere que lo fundamental de la economía ya no era el desarrollo, como postulaba el estructuralismo Cepalino, sino el crecimiento--- pero siempre preservando los equilibrios macroeconómicos, tan esquivos durante dos décadas de ajuste". (Oleas 2013, 331). En consecuencia:

La constitución de 1998 confirmó el ámbito de acción económica del Estado limitándolo a propiciar la expansión del sector privado. El sistema económico fue definido como 'economía social de mercado' en la que al Estado le correspondía el papel de garante de las actividades privadas; las empresas públicas y privadas debían recibir el mismo tratamiento, y la inversión extranjera recibir trato similar a la nacional... La planificación ya no era nacional, sino 'descentralizada y participativa', obligatoria para la inversión pública y referencial para la

privada... El estado tenía la obligación de promover mercados competitivos, impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas... también debía crear infraestructura básica, científica y tecnológica, y dotar de los servicios básicos para el desarrollo (Oleas 2013, 331)

De este modo, los cambios en el marco institucional, promovieron un más abierto campo para la iniciativa privada, sin control social ni de las instituciones del Estado. La constitución de 1998 puede verse así como la continuación de las políticas liberales que venían agenciándose desde los años 80, por lo que las tensiones sociales no se resuelven, sino que tienen a profundizarse. Por su parte, los banqueros serán los más beneficiados con la flexibilización de los mercados de capitales. Estos captaron dinero del Estado y de sus clientes para hacer negocios que resultaron mal y que no tenían cómo ser cobrados, en caso de que salieran mal. Produjeron así la quiebra del país, pues, de hecho, los mismos propietarios de los bancos se presentaron ese dinero, sin las debidas medidas de seguridad. El caso del Banco de Préstamos es uno de los ejemplos usados por Julio Oleas para ejemplificar cómo se captó dinero del Estado y cómo este fue usado no para el desarrollo de proyectos productivos, sino para juegos especulativos que se vinieron al piso y con estos, la economía ecuatoriana en su conjunto. (Oleas 2013, 348).

Así, lo que se produce a partir de mediados de los años 90 en el Ecuador es una captura rapaz de los recursos del Estado, por parte de los banqueros, con la ayuda de los partidos políticos dominantes y los caudillos demagógicos. Estos crean leyes para proteger las aventuras especuladoras de los banqueros y sus socios que piden prestamos de sus propias instituciones, sin ningún tipo de respaldo. Al final, dadas las difíciles condiciones externas e internas, los bancos quiebran, pero antes obligan al Estado, a pagar sus deudas. La creación de la AGD, es una muestra de cómo se legisló en favor de quienes quebraron al país, cómo se les garantizó el cubrimiento de sus delitos e irresponsabilidades. Cerca de 2000 millones de dólares del Estado, recaudados entre los ciudadanos, fueron así a parar, de manera ilegal, a manos de banqueros (Oleas 2013, 354-355).

Ahora bien, la captura del Estado por parte de los banqueros provino, desde el principio del gobierno de Mahuad, de la financiación de su campaña por parte de aquellos. La familia Isaías, fue una de las principales aportantes a dicha campaña. También participaron, los dueños del Banco del Progreso, Fernando Azpiazu, Fidel Egas, del Banco Pichincha, y Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil (Oleas, 2013: 362) Al final, éstos dos últimos serán los que capitalizan la crisis y lograrán multiplicar sus activos de manera espectacular.

Mientras este proceso se produce, el campo popular no logra articular la tradicional dispersión. El movimiento indígena que tanta relevancia ganó desde inicios de los años 90, pero que venía de procesos organizativos muy significativos desde los años 70 (Larrea, 2004, Arias, C. 2006), tiene dificultades para convertirse en un actor protagónico y con un proyecto contra hegemónico real capaz de disputar el dominio de las clases políticas y económicas dominantes. Su participación en los procesos electorales reproducirá el personalismo y contribuirá a la fractura del movimiento. Esto es hábilmente aprovechado por los caudillos demagógicos a través de prácticas de cooptación clientelar. De este modo, la relación entre acción social y combate político se verá limitada.

Así, a pesar de que a partir del levantamiento indígena de 1990, se constituye un potencial proyecto contra hegemónico nacional popular, con el predominio de la dirigencia indígena, poco a poco ésta misma dirigencia se ve afectada por dos procesos que convergen en su debilitamiento (Hidalgo, 2005). Por un lado, del movimiento social se pasa al movimiento político y Pachakutik, como mecanismo de ampliación de la base social y política de los indígenas (Larrea, 2004: 69). Este proceso permitió a la dirigencia indígena participar en los procesos electorales e ir ganando cargos políticos en los ámbitos locales y un importante reconocimiento de sus gestiones. Sin embargo, este tránsito entre el movimiento social y el movimiento político también significó su fractura interna. Varios de sus líderes terminan siendo cooptados por Bucaram y sus sucesores. Para De la Torre, de hecho, el movimiento indígena termina por reproducir las mismas prácticas corporativistas y clientelares de los demás actores sociales (De la Torre, 2008).

La base social que el movimiento indígena configuró desde comienzos de los años 90, sufre así una fragmentación progresiva al no contar con una estrategia clara y eficiente para la disputa por la hegemonía. De este modo, más allá de los ámbitos locales, donde los indígenas cosechan éxitos importantes, en el ámbito nacional se estanca. Esto, particular y paradójicamente justo a partir del momento en el que, a través de la alianza con Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez y Coroneles insurgentes que contribuyeron al derrocamiento de Jamil Mahuad en el año 2000, logran la presidencia en el año 2003.

Ahora bien, tal como lo ha expuesto Marc Becker y otros (v.gr Larrea, 2004^a, 2004b, De la Torre 2006, Arias, 2006), el escenario de las luchas sociales, más allá del movimiento indígena, también explica por qué esta alternativa se diluye. Desde la perspectiva de este autor, Pachakutik, habría surgido también como resultado del fracaso de los partidos de izquierda para desempeñar la función de representar a la población indígena y además

representa, la culminación de las directrices de la CONAIE de insertar a los pueblos indígenas directamente en los debates políticos, dándoles su propia voz y permitiéndoles hablar por sí mismos. La principal fuerza detrás de la creación de Pachakutik fue la Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupó a la CONAIE, las vertientes de izquierda de los sindicatos de las empresas estatales y unas 50 organizaciones campesinas más⁷⁰ (Becker, 2011: 46)

Antes de la constitución de ésta importante organización, algunos indígenas ya habían participado en política, manteniendo unas relaciones más bien ambiguas con la izquierda. En los años 80, por ejemplo, Manuel Naula, fue el primer indígena en llegar al Congreso, por Izquierda Democrática. Auki Tituaña, economista Kichwa que estudió en Cuba, fue uno de los primeros líderes indígenas en ganar una alcaldía (en Cotacachi), En Cotacachi, había sido ya Concejal, Alberto Andrango (Becker, 2011: 51)⁷¹

Esta participación se amplía a partir de mediados de los 90, cuando se inicia su participación en los procesos electorales del ámbito nacional. En las elecciones que desembocaron en la elección de Bucarán, inicialmente Pachakutik se alía con Freddy Ehlers, un periodista que creó el Movimiento Ciudadanos por un nuevo país. La campaña no logró entrar a segunda vuelta, pero sí se constituyó en la tercera fuerza al obtener el 20,60% de los votos. Algo muy importante, si se tiene en cuenta que es la primera vez que el movimiento indígena, aliado con otros sectores sociales, participa en procesos electorales (Sánchez y Freindenberg, 1998: 73). Aunque también presentó candidatos para el poder legislativo, en este escenario no logró tanto éxito como en el caso de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, culminada la primera vuelta varios líderes indígenas terminan apoyando, contrariando a las bases, a Abdalá Bucaram. El apoyo a Bucaram es asumido como una jugada oportunista cuya finalidad es posicionarse mejor en las estructuras de poder (Becker, 2011: 56). Como resultado de este apoyo, Bucaram crea un ministerio de asuntos indígenas, una medida que algunos rechazan por considerar que esto llevaría a tratar los como si estuviesen separados de la sociedad. No obstante, otros aceptan cargos en el ministerio creado

⁷⁰ Para Ana María Larrea, al interior del movimiento indígena, se debatió el tema de la participación política y no había una tendencia unificada clara. En su interpretación: En el nacimiento de Pachakutik confluyen tres tendencias: la propuesta de las organizaciones amazónicas de crear un movimiento político exclusivamente indígena; el planteamiento de las organizaciones serranas y la izquierda política de contar con un movimiento político multiétnico; y la idea de generar alianzas más amplias con tendencias progresistas, promovida desde los actores sociales urbanos del austro ecuatoriano. Finalmente, se lo bautiza como “Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País”, nombre que refleja estas tres vertientes (cfr. Guerrero y Ospina, 2003: 195-196). Para una ampliación sobre los orígenes y desarrollo de la participación política de los indígenas ver también Larrea, 2004.

⁷¹ Como se sabe, estos dos líderes terminarían divididos. El primero sería luego candidato a la vicepresidencia con ¡Guillermo Lasso! y el segundo se iría a las toldas de Alianza País.

y luego, muchos líderes indígenas se vieron implicados en casos de corrupción. (Becker, 2011: 54) De acuerdo con Becker, una vez se produce la caída del gobierno, los movimientos indígenas respaldan a Fabián Alarcón para que asuma la presidencia del país, a cambio de la promesa de una Asamblea Constituyente. (Becker, 2011: 57)

En el proceso constituyente de 1998, Pachakutik logró 7 sillal y tres más en alianza con otros partidos. Para Becker,

Esto hizo de Pachakutik la tercera fuerza política en dicha Asamblea, y un jugador significativo en el bloque de centro-izquierda que presionó para la revisión de importantes elementos de la constitución, como el reconocimiento de los derechos indígenas. Cuando los partidos de centro-derecha dejan la asamblea en protesta, Pachakutik llegó a ser parte del núcleo de la alianza de centro izquierda que finalizó la constitución. (Becker, 2011: 58).

Más allá de las discusiones sobre si efectivamente un bloque de “cetro-izquierda” terminó liderando la elaboración de constitución de 1998, lo importante es considerar que esta sirvió para que el partido indígena ampliara su poder en el congreso y su representación electoral, sobre todo en los ámbitos locales. Por varios años, de hecho, logró el 10% de los votos. Varios indígenas logran, en este marco, importantes cargos dentro del Estado, y la izquierda los cuestiona, porque asumen que estos puestos son el resultado de la negociación clientelar de Pachakutik con las vertientes conservadoras y neoliberales. Esto lleva, en un marco de crisis económica creciente, a la fractura profunda de los movimientos sociales que, de acuerdo con varios autores, obstaculizó la emergencia de una fuerza unificada que permitiera liderar cambios políticos progresistas (Larrea, 2004, Hidalgo, 2004, Arias, 2006, Ramírez, 2003). Finalmente, los movimientos sociales verán la constitución de 1998, como una oportunidad perdida. (Becker, 2011: 60).

Así, a pesar de haber logrado ampliar su participación en distintas instancias del poder estatal, su capacidad de movilización electoral enfrenta duros escollos a nivel nacional. En las elecciones de 1998, nuevamente Pachakutik apoya a Freddy Ehlers, pero en este momento, el candidato logra sumar apenas un 14.74% de los votos, ocupando el 4 lugar en las elecciones presidenciales (Sánchez y Freidenberg, 1998: 73). Muchos indígenas, de hecho, no están de acuerdo con este apoyo y prefieren anular sus votos, o votar por Noboa (Becker, 2011: 67). Dada la radicalidad de las reformas introducidas por Jamil Mahuad, el movimiento indígena logra repositionarse temporalmente en el espacio público y su participación es muy importante en las movilizaciones en contra del gobierno de Mahuad. Tal como había sucedido antes, ante la pérdida de legitimidad del gobierno, las cámaras de la producción terminan

quitándole respaldo y desligándose de aquel que ha tomado medidas que les benefician. Las cámaras de la producción de la provincia de Guayas impulsaron entonces movilizaciones sociales en contra de las políticas del gobierno referidas a la eliminación de subsidios de derivados del petróleo. La primera organización en pedir formalmente la destitución del presidente es la Federación de Cámaras de la Agricultura, que pide el establecimiento de un gobierno civil-militar (Fontaine, 2002: 12).

El líder indígena Auqui Tituaña, planteó, luego del golpe, que había que probar la construcción del poder, desde arriba.⁷² (Becker, 2011: 69-70). Pese al protagonismo del movimiento indígena y las cámaras de la producción en el derrocamiento de Jamil Mahuad Carlos de la Torre (2006, 2008) ha cuestionado lo determinante de estas movilizaciones. Para este autor, la caída de Mahuad se produce más bien, por decisión (ilegal) de las mayorías parlamentarias, tal como había sucedido ya con Bucaram.

Pese a lo anterior, la participación protagónica del movimiento indígena en el derrocamiento de Jamil Mahuad y luego en masivas movilizaciones sociales en las que los indígenas son los agentes centrales, sirvió para que éste recuperara credibilidad y esto se va a manifestar en los procesos electorales regionales de 2001, en los que la representación indígena, se incrementa de manera significativa, aunque sin poner a tambalear el tradicional poder de los partidos políticos dominantes (Larrea, 2004b). Así, a pesar de la división que la participación política trajo al movimiento social y al movimiento político (La CONAIE rompe con la coordinadora de movimientos sociales éste mismo año), lo que se vive en este momento es una nueva ola de protagonismo indígena que hizo pensar a varios analistas del momento en la posibilidad de la recomposición de un bloque histórico capaz de adelantar procesos radicales de transformación social, política, económica y cultural (V.gr, Hidalgo F., 2006).

Ahora bien, no todo es un mar en calma para los movimientos sociales. Varios líderes indígenas resultan acusados de corrupción, lo que afecta duramente la imagen que se había construido estos como defensores de los bienes colectivos y luchadores contra los robos de los recursos públicos. El gobierno de Gustavo Noboa, que sustituye a Jamil Mahuad, aprovecha estas debilidades del movimiento indígena y de los movimientos sociales en general, para impulsar políticas neoliberales, apodadas, Trolle I, II y III, a través de las cuales impulsó la

⁷² Podría pensarse que éste tipo de concepciones políticas de Tituaña, serían los que lo llevaron a aliarse con el multimillonario banquero, Guillermo Lasso, en las elecciones de 2012.

privatización de empresas del estado, incluida la telefonía, el petróleo, la electricidad y el sistema de seguridad social. (Becker, 2011:72)

Alrededor de las políticas neoliberales de Noboa, los indígenas vuelven a protestar articulados con otros movimientos y organizaciones sociales, pero sin poner en riesgo la continuidad del gobierno del empresario costeño. En los procesos electorales de 2002, se produce un nuevo sisma al interior del movimiento indígena. Este, inicialmente considera lanzar un candidato único (Auki Tituaña), debido a su reconocimiento al interior del movimiento indígena, así como a sus características socioculturales. Pero nuevamente, las divisiones internas, impidieron la construcción de una propuesta unificada. (Becker, 2011:77) La división al interior de los movimientos indígenas se produce alrededor de los liderazgos de Vargas y Tituaña, pero Pachakutik se irá a otras toldas: la candidatura de Lucio Gutiérrez, quien constituye el movimiento Sociedad Patriótica. La fusión de Pachakutik y Sociedad Patriótica, en la práctica aborta las posibilidades de construir una propuesta de articulación hegemónica liderada por los indígenas. De esta experiencia, además, resultarán profundamente golpeados en su legitimidad y reconocimiento. Si bien los militares han tenido históricamente una importancia relativa en la memoria política de los ecuatorianos, desde la Revolución Juliana, ha pasado un largo periodo de adaptación de estos a las reformas políticas y económicas y han sido marginalizados del espacio político (Burbano de Lara, 2002). En este marco, la alianza de los indígenas con los militares, el apoyo que los primeros dan a Lucio Gutiérrez puede ser interpretado como una muestra de cesarismo, un tanto ingenuo, del movimiento indígena. Lo mismo había sucedido ya con Abdalá Bucaram, a quien el movimiento apoyó electoralmente y con quien, luego rompe, pero dejando en el camino la imagen de patrimonio moral del país (Becker, 2011. 79)

Por otro lado, en las elecciones donde Lucio Gutiérrez es elegido, pese a la obligatoriedad del voto, presenta un 35% de abstencionismo, lo que, para Becker expresa la apatía generada por el proceso y representa a una sociedad desgastada. El opositor de Lucio Gutiérrez es, como se sabe, Álvaro Noboa, que organiza su propio movimiento político: el PRIAN (Partido Renovador Institucional Álvaro Noboa). En estas elecciones, el triunfo de la alianza entre Pachakutik y Sociedad patriótica se ve favorecido por la división al interior de las élites políticas dominantes (Hidalgo, 2002). El partido Social Cristiano no apoya a Noboa y finalmente Gutiérrez suma los apoyos suficientes para llegar al poder (Becker, 2011: 81) Si bien la alianza Pachakutik/PSP, logra apenas el 20.64%, esta vez, dada la fragmentación de

las élites políticas, logra pasar a la segunda vuelta, la cual saldrán vencedores (Hidalgo, 2002, Ramírez, 2003)⁷³

El triunfo electoral en la segunda vuelta, no obstante, no sirvió para la consolidación de una alianza multisectorial y de múltiples actores, capaz de construir un proyecto hegemónico sostenible, si bien esto parecía estar sucediendo (Burbano de Lara, 2002, Hidalgo, 2002). El pragmatismo y cortoplacismo se hizo evidente, tanto en el campo del movimiento popular e indígena, como en el mismo gobierno de Lucio Gutiérrez. Este último, generó una estructura de poder más bien contradictoria. Mantuvo, en los ministerios del campo económico, lo que había sido tradicional en Ecuador: la vinculación del sector empresarial de élite. En ministerios menos importantes, puso a líderes del movimiento indígena (Ramírez, 2003, Verdesoto, 2014)

La contradicción entre las orientaciones económicas de Lucio Gutiérrez y el movimiento social indígena, se evidenciaron pronto y la alianza lograda se fue al traste. Pero también la posibilidad de la construcción de un proyecto político fuerte y de largo plazo. El nuevo sujeto político, que articulaba a indígenas, militares y movimiento popular (Burbano de Lara, 2002), no cuajó y el gobierno se vino al piso. También sirvió de base para el inicio de un ciclo de descenso del movimiento indígena. Un ciclo que el que todavía no logra recuperarse.

Así las cosas, Lucio Gutiérrez, mantiene la orientación neoliberal de la economía, pues ideólogos neoliberales terminan ocupando el poder ejecutivo. Las decisiones políticas que tomó poco a poco hicieron que perdiera el respaldo popular y que éste virara su discurso más a la derecha (Becker, 2010: 83) Para el movimiento indígena, el haber acompañado a Gutiérrez en las elecciones significó dos cosas. En primer lugar, una parte del botín burocrático, pero, en segundo lugar, la deslegitimación del partido indígena y, de paso, en buena medida, del movimiento social, que entra en franca decadencia. En el primer caso, Luis Macas fue nombrado ministro de agricultura, Nina Pacari, ministra de Relaciones Internacionales, Lourdes Tibán, asumió una subsecretaría en el ministerio de Bienestar Social. Así mismo, líderes de Pachakutik, fueron nombrados en otros puestos. Rosa María Torres, ministra de Educación, Doris Solís, ministra de turismo y Virgilio Hernández, subsecretario en el ministerio de gobierno. (Becker, 2010: 84), sin embargo, en el ministerio de Economía y

⁷³ A pesar del triunfo de Gutiérrez, los partidos políticos tradicionales mantuvieron el poder en el legislativo. De 100 diputados, el PSC, dominó la legislatura con 36 puestos, El Partido Roldosista Ecuatoriano, fue segundo con 15 sillitas e Izquierda Democrática logró 14 sillitas. En este momento, todavía se hace evidente el poder del clientelismo y el caciquismo, con lo que los movimientos de opinión, dentro de los cuales están los movimientos indígenas, tienen serios obstáculos para incrementar su poder (Becker, 2011: 82)

Finanzas, Gutiérrez nombró al economista Mauricio Pozo, quien había sido presidente de la Cámara de Comercio de Quito y director de la bolsa de valores de la misma ciudad. (Becker, 2010: 86)

La reproducción de las prácticas clientelares y las alianzas burocráticas con los agentes del neoliberalismo, llevaron pronto a algunas organizaciones indígenas como Ecuarrunari y FENOCÍN, a romper con el gobierno de Gutiérrez. Las protestas se fueron reproduciendo y ampliando desde distintos sectores. Las protestas indígenas obligan al gobierno de Gutiérrez a retroceder en algunas medidas económicas, particularmente relacionadas con la privatización.

Hay en las elecciones que dan como ganador a Lucio Gutiérrez y en las elecciones legislativas de 2003, un suceso inédito. Si bien, como se ha mostrado anteriormente, con la elección de Abdalá Bucaram, retorna la inestabilidad al Ecuador y se produce la profundización de la crisis de los partidos políticos, lo cierto es que estos siguieron siendo los más importantes electores, hasta el 2003, cuando la alianza entre dos nuevas fuerzas políticas se hace a la presidencia. El movimiento político creado por los militares que fueron protagonistas en la caída de Mahuad, liderados por Lucio Gutiérrez, denominado Sociedad Patriótica y el partido indígena Pachakutik. Esta alianza sienta las bases para una nueva estructura del poder en el Ecuador, en la medida en que el poder electoral de los partidos dominantes sufre un retroceso. La debilidad y ambigüedad del gobierno de Lucio Gutiérrez, no obstante, sirve para reposicionar a las élites económicas. Las cámaras de la producción se convierten en este gobierno en uno de los principales opositores al gobierno de Lucio Gutiérrez, pese a que éste da continuidad a las políticas de apertura y liberalización de la economía. Poco dura así el gobierno de Lucio Gutiérrez, pero también poco dura la alianza entre los nuevos sujetos políticos que se habían articulado. En buena medida, esta articulación más que representar un proyecto político realmente transformador, se constituye más por el pragmatismo y el tradicional corporativismo. La caída de Lucio es nuevamente un golpe del congreso que lo destituyó por abandono del cargo, aunque Gutiérrez estuviera físicamente en su oficina. (Becker, 2011: 94, De la Torre, 2006; 2008)

De esta manera fuerzas políticas, nuevas y viejas, se deslegitiman a una velocidad vertiginosa. La ciudadanía, termina por pedir “¡que se vayan todos!”. Esta proclama, usada por miles de ciudadanos ecuatorianos, se convierte en la manifestación del hastío que sentían ante tanto intento fracasado de reformar las estructuras de poder y dominación en el Ecuador. Además de esto, en la Caída de Lucio Gutiérrez, los indígenas estuvieron ausentes, después de haber sido protagonistas de las caídas de Bucaram y Mahuad. Con esto, la posibilidad de construir

una fuerza contrahegemónica desde los sectores subalternos organizados se ha debilitado considerablemente. Es el caso, precisamente, contrario al de Bolivia, donde la presencia de un líder con experiencia en el campo de la política de calle, pero también en la política institucional, logra ser la base sobre la cual se va edificando progresivamente, una potencia contrahegemónica. Esta debilidad de las fuerzas populares, del sujeto popular en el Ecuador, es la que permite también las coaliciones fantasmas (Burbano de Lara, 2004). Esta debilidad es la que permite también, pese a la tremenda inestabilidad, la continuidad de las políticas liberalizadoras. La movilización social, si bien limitó los alcances de estas políticas, no logró ser la base para la articulación social y política de los múltiples actores. Aquí podría decirse que el gradualismo ecuatoriano también permitió la inserción, también gradual, de algunas fuerzas opositoras y, por tanto, también para su gradual deslegitimación como alternativas a las lógicas y prácticas de poder dominantes: el corporativismo y la “liberalización” selectiva y la configuración de unas élites especuladoras y rentistas.

Es necesario resaltar varios elementos como claves del nuevo escenario que se abre a partir de la Elección de Rafael Correa Delgado en el año 2006. En primer lugar, el hecho de que el movimiento social no se encuentra, precisamente en su mejor momento. El paso del movimiento indígena por el gobierno de Lucio Gutiérrez significó para este, la disminución de su potencial articulador político y, por tanto, como agente de construcción de una nueva hegemonía, sin que esto signifique el desconocimiento de los importantes cambios que su presencia y acciones trajo para la sociedad ecuatoriana, desde el punto de vista político y cultural, particularmente, tal como han reconocido varios autores (Ospina, 2005, Burbano de Lara, 2004, Larrea, 2004-a, 2004b, entre otros).

Este declive de los movimientos populares, luego del paso de los indígenas por el poder, abrió el campo, no para un movimiento orgánico que lo sustituyera, sino para la emergencia de un liderazgo más bien muy autónomo e independiente frente a toda organización sociopolítica o sociocultural, como es el de Rafael Correa. Este liderazgo, de hecho, edifica su proyecto político, sobre la idea de la movilización ciudadana en general, no sobre procesos organizativos previos, lo que lo diferencia, sustancialmente, del proceso boliviano. Y es esa movilización ciudadana, a secas, la que está en el escenario político luego de la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, la que reclama para sí, el triunfo frente al régimen “corrupto” y “autoritario” de Lucio Gutiérrez. Esto, a pesar de que, como antes, la caída de este gobierno haya sido más el resultado de la debilidad de los pactos que Gutiérrez hace para salvar su mandato; más el resultado del poder de la “partidocracia” que lo derroca (De la Torre, 2006,

2008, Larrea Marcelo, 2007). Las movilizaciones sociales que contribuyen a la caída de Lucio abren ya el espectro para la configuración de un liderazgo que arma su campaña política, no sobre la base de procesos organizativos, sino sobre un actor etéreo: la ciudadanía. No es fortuito, de este modo, que el nombre que le dieron a esta a esta nueva revolución se la de “Revolución Ciudadana”.

Por otro lado, hay unos actores que, en medio de las crisis buscarán capitalizar la inestabilidad. Se trata de las élites empresariales y sus aliados políticos. En medio de la crisis política, de gobiernos interinos o de gobiernos “legalmente” establecidos, pero resultado de destituciones ilegales, buscarán promover sus iniciativas. A comienzos del nuevo siglo, luego de la dolarización, por ejemplo, estas élites impulsaron negociaciones para el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En este marco, es en el gobierno de Lucio Gutiérrez que se constituye el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). Organización que va a intentar nuclear a las heterogéneas y en muchos casos contradictoras organizaciones empresariales ecuatorianas. Desde este Comité, se gestaron alianzas entre las distintas organizaciones empresariales, para agenciar una más radical liberalización de la economía; una liberalización, no obstante, selectiva y corporativista.

Es en estos años de crisis política, que se consolidan las élites empresariales como los jueces del sistema político. Estas, contrario a lo que pasa en Bolivia, no son arrastradas por la crisis, sino que se van a presentar a sí mismas como sujetos lejos de las componendas y las triquiñuelas del poder político. Su poder de presionar a los gobiernos, lejos de debilitarse, se mantiene intacta o incluso fortalecida. No se trata, sin embargo, de unas élites unificadas o muy bien articuladas. Los conflictos entre las mismas es una marca constante del proceso político ecuatoriano, tal como se ha mostrado en las páginas anteriores. El asunto es que estas disputas, son más por usufructuar prebendas particulares, que por profundas diferencias ideológicas o de contradicciones en proyectos “ideales” de país. (Unda, 2005, Burbano de Lara, 2005) Los enfrentamientos entre Álvaro Noboa, vinculado más con el PRE, de Bucarán, que con el Partido Social Cristiano de Febres Cordero, articulado a la élite patricia de Guayaquil, van a marcar el rumbo que sigue el gobierno de Lucio Gutiérrez y agenciarán su caída. Una disputa entre elites arrasa con el gobierno, de la mano de la movilización ciudadana.

Es dentro de este marco también que las clases medias y altas, se unirán con representantes de los sectores populares para pedir la caída de Lucio Gutiérrez y los políticos que logran mayorías en el congreso usarán este pretexto para acabar con un gobierno que ha perdido

todos los apoyos, a pesar de que mantiene unos índices de popularidad mejores que sus predecesores (Unda, 2005, Checa Monfufar, 2005, Larrea, 2005). Resultado de estas alianzas unas “fantasmas”, otras muy visibles, Lucio Gutiérrez cae, pero se lleva por el camino o, al menos, deja debilitados a los procesos de movilización social orgánicos. La expresión que el movimiento “ciudadano”, usa de que “se vayan todos”, dice mucho de quienes la usan, así como del momento político que vive Ecuador. Se pide que se vayan los partidos políticos y sus líderes, que se vaya el gobierno, pero también, que se vayan aquellos que han apoyado al gobierno, incluidos los indígenas (Ospina, 2009). En este escenario, de hecho, no son infrecuentes las manifestaciones de racismo contra el presidente y con quienes lo han acompañado (Larrea, 2006, 2008). Las clases medias manifiestan su inconformidad con la conducción política del país, pero favorecen los pactos entre las élites patricias que son las que definen, finalmente el fin del gobierno de Lucio Gutiérrez.

El sucesor de Gutiérrez recibe de este modo, un poder presidencial debilitado, frente a unas élites políticas y económicas envalentonadas. Esta debilidad lo lleva a sucumbir, permanentemente, a las presiones de algunos sectores sociales que piden consulta popular para las políticas aperturistas, específicamente para un eventual tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero es éste también quien saca de las aulas a Rafael Correa y lo proyecta como Ministro de Economía. La simpatía del nuevo ministro y sus críticas al modelo económico pronto conquista a las clases medias y medias altas ilustradas. Su paso por el gobierno de Alfredo Palacio es efímero, pero lo suficientemente largo como para convertirse en la nueva cara de la búsqueda de reforma social, política y económica que han venido buscando varios sectores sociales. Como es sabido, no obstante, la popularidad que conquista en los pocos meses que dura en el gobierno y a lo largo de la campaña, no le alcanza para llegar a la presidencia en una primera vuelta. Tal como sus predecesores, sufre el rigor de la fragmentación de un sistema de multipartidista cada vez más polarizado. De hecho, no queda en el primer lugar en la primera vuelta, pues su rival, el empresario Álvaro Noboa, lo supera, aunque con pocos puntos porcentuales.

La manera en que Correa, agencia su campaña política, genera un escenario difícil para distintos actores sociales y políticos no es fácil. El candidato no busca alianzas con ninguna organización; no presenta candidatos al Congreso, pero sus propuestas, como lo vio Ana María Larrea (2006), eran las que venían defendiendo varios movimientos y organizaciones sociales. Se apoya en la ciudadanía, a secas, pues es de esta ciudadanía etérea de la que ha salido su movimiento. La crisis del clientelismo, que ha sido expuesta por Pablo Ospina

Peralta (2005), como una de las manifestaciones de la transformación del sistema político ecuatoriano desde finales de los años 90, permite jugar con un electorado dispuesto a probar nuevas alternativas. El voto obligatorio, también permite esta impredecibilidad de los resultados electorales. Contra todos los pronósticos, pero gracias también a una élite política y económica dividida, Rafael Correa logra la presidencia del Ecuador.

La mayor parte de intelectualidad ecuatoriana y extranjera, por lo general defensora de la democracia liberal, lo ve, desde el principio, como un líder “populista” y autoritario. Otra parte lo ve como una posibilidad de reconfigurar el proyecto contrahegemónico, anticapitalista, plurinacional. Sin embargo, el desenlace de este estará marcado por estas nuevas tendencias: Un movimiento social, sin alternativas de proyección, terminará apoyando, inicialmente al candidato que promete acabar con la partidocracia, que promete poner la vida, por encima del capital, la redistribución por encima del crecimiento.⁷⁴ Será precisamente esto lo que impulsa durante su presidencia, pero para esto intentará configurar una estructura de poder que se enfrenta con unas estructuras corporativistas muy fuertes que afectarán los éxitos de su gobierno y las posibilidades de la construcción de una nueva hegemonía.

⁷⁴ Los fundamentos teóricos del nuevo gobernante los había expuesto ya en sus clases y en sus artículos. En uno de éstos últimos, en 2002, Rafael Correa mostraba argumentos técnicos, desde el discurso econométrico, en contra de la idea del crecimiento como motor del desarrollo. Cuestionaba la flexibilización laboral y otras medidas neoliberales en su eficiencia para lograr un crecimiento y desarrollo sostenido y mostraba evidencias sobre el papel de la redistribución económica como motor de desarrollo social. Al respecto ver: Correa R., 2002

Capítulo 6. Las élites empresariales en la reconfiguración del Estado de la Revolución Ciudadana

El año 2007 es para Ecuador, el punto de llegada de un proceso de debilitamiento de su sistema político y de partidos, pero también el punto de partida de para reconfiguración. Un verdadero *Outsider*, luego de un periodo de tremenda inestabilidad política y económica, asumen la presidencia. Se trata de un profesor universitario de economía, intelectual de clase media alta, con una muy corta carrera política, al mando de un movimiento político, recientemente creado, para las elecciones de 2006, quien asume la presidencia de la república del Ecuador, a comienzos de 2007.

En el presente capítulo describimos, analizamos e interpretamos la configuración y desarrolló el proyecto político y económico de la Revolución Ciudadana y sus conflictos con las élites empresariales. Para tal fin, en primer lugar, se expone lo que podría denominarse la genealogía de la Revolución Ciudadana; esto es, las condiciones coyunturales, que hicieron posible el surgimiento del movimiento político que llevó a la presidencia a Rafael Correa, así como las particularidades de este movimiento, tanto en su “génesis”, como en su desarrollo. De entrada, afirmarnos que se trata de un movimiento político constituido por verdaderos *outsiders* que se oponen a formas corporativistas del poder e impugnan la manera en que el país había sido conducido, por las élites económicas y políticas tradicionales; por la “partidocracia”. Un movimiento que interpela los modos de inserción de los movimientos indígenas y obreros en el sistema político dominante.

Para empezar, consideramos que tres elementos se conjugaron para dar forma a la Revolución Ciudadana: En primer lugar, la particular coyuntura política por la cual pasaba Ecuador, caracterizada, por el debilitamiento conjunto de las estructuras políticas que definieron los rasgos del neoliberalismo ecuatoriano y de las alternativas políticas más orgánicas de los movimientos sociales e indígenas. En segundo lugar, la constitución de lo que denominamos un *core group*: un grupo de intelectuales que, de manera un tanto “impensada” al principio, terminan construyendo un proyecto político para la transformación de las estructuras políticas y económicas del Ecuador. Este grupo se constituye a lo largo de la segunda mitad de 2005, aunque tenía vínculos personales y académicos desde tiempo atrás. La mayor parte de este grupo no tiene (y si la tiene es efímera) experiencia política y lo que hace es usar su capital intelectual para la proyección de una propuesta de transformación política y económica del Ecuador. En tercer lugar, ésta la formación como economista de Rafael Correa y su enfoque crítico frente al proyecto neoliberal.

Desde estos tres supuestos, y junto con la presentación genealógica de la revolución ciudadana, describimos sus elementos centrales: Desarrollismo, anti corporativismo y defensa de un Estado poderoso, tanto en lo político, como en lo económico. En la configuración del Estado, la técnica económica será la pieza clave de la gestión política del desarrollo económico. De ahí que se impulse una fuerte autonomía del Estado, frente a cualquier actor social y político. La construcción de mayorías a través de la democracia representativa facilitará esta autonomía. Lo mismo harán las reformas institucionales y del sistema judicial que el gobierno impulsa.

Con esta presentación discutimos con algunos de sus críticos, que se centran en el problema del discurso “populista” de Correa y dejan de lado el proyecto de reforma institucional, económica y política del Ecuador que este impulsó. Entender esta propuesta es la clave para entender por qué Correa generó tanta aceptación ciudadana, pero también tanta conflictividad con ciertos actores organizados, tanto de izquierda, como de derecha. La aceptación ciudadana lograda, le permitió llevar a cabo las reformas institucionales más importantes: Una nueva constitución política, una reingeniería institucional y una nueva apuesta económica para el Ecuador, que algunos llamaron de neodesarrollista, neoextractivista. La conflictividad, sin embargo, generó un ambiente de confrontación permanente con distintos y heterogéneos actores: indígenas, obreros, campesinos, ciudadanos urbanos, movimientos de izquierda política, prensa tradicional y, por supuesto, los gremios empresariales más importantes. Esta conflictividad también generó tensiones al interior de la Revolución Ciudadana, así como disidencias importantes que debilitaron el proceso. Esto hace que, una vez Rafael Correa deje el poder, lo larvado en el gobierno, mute y explote en un conflicto político en el que su “designado” a la presidencia y anterior vicepresidente, termine en un visceral enfrentamiento con su antecesor y, también, articulado con las élites gremiales que Rafael Correa había excluido de la construcción de las agendas económicas y políticas. El neodesarrollismo, como proyecto hegemónico, quedará seriamente debilitado. Afirmamos que las élites empresariales, en todo este proceso, intentaron sin mucho éxito, resistir los procesos de reforma institucional y política, pero, gracias a estos, los grandes grupos de poder económico fortalecerán su poder estructural. El gobierno tendrá que negociar, al finalizar el último mandato, mucho más de lo que hizo al principio, pues su sostenibilidad en lo económico se hizo cada vez más difícil.

6.1. Hacia un nuevo Estado sin hegemonía. La propuesta de Correa y sus críticos

Como se expuso antes, el gobierno de Rafael Correa no nace en un momento de cresta de desarrollo del movimiento social, sino todo lo contrario, en su fase de descenso. Rafael Correa

emerge, como actor político, en un contexto de unos movimientos sociales fragmentados y de una estatalidad política debilitada. Emerge luego de haber sido ministro de Economía y Finanzas de Alfredo Palacio. El movimiento indígena particularmente, está duramente golpeado por su efímera, pero significativa alianza con Lucio Gutiérrez. La izquierda en general no tiene alternativas para constituir un proyecto político viable y autónomo, más que el liderazgo que ha ganado el recientemente conocido Rafael Correa. Su protagonismo surge así en un escenario de repliegue de los movimientos sociales organizados y en el que un nuevo “movimiento” social ha emergido; un movimiento de ciudadanos a secas, no ligados a organizaciones con proyectos políticos definidos, que sólo cuestionan el poder y que, cansados de las formas de conducir al país y de la corrupción, pide “que se vayan todos”. De este modo, el liderazgo de Correa se proyecta en el contexto de un movimiento más bien inorgánico de ciudadanos, *los forajidos*, un movimiento que ha contribuido a la caída de Lucio Gutiérrez (Unda, 2005). Es sobre estas manifestaciones inorgánicas, particularmente de clase media, que se edifica el proyecto de Correa; es sobre la emergencia de la clase media y media alta ilustrada que Rafael Correa como miembro de este segmento social, logra visibilidad y reconocimiento. Es desde esta clase media alta e inorgánica que actúa, que asedia *lo imposible*., como dirían Acosta y Falconí (2005)

Rafael Correa proviene de un campo intelectual que busca salidas para la crisis y empieza a hacer propuestas para la reconducción del País. Desde el punto de vista de esta investigación, coincidimos con las observaciones de Luis Almeida (2008), que ubican los gérmenes de ésta búsqueda de alternativas en la publicación, a finales del año 2005, de un libro editado por Alberto Acosta y Fander Falconí, titulado *Asedios a lo imposible. Propuestas económicas en construcción*. Efectivamente, allí se plasmaron, a grandes rasgos, las críticas a las herencias dejadas por más de 30 años de neoliberalismo “tortuoso” y se establecieron las bases de las políticas económicas de lo que será luego el Gobierno de Correa y de lo que representaría éste gobierno en términos sociopolíticos.

Ya hemos visto antes que la trayectoria intelectual del profesor de Economía y luego presidente del Ecuador, se caracteriza por sus críticas al modelo neoliberal y por la creencia en que la distribución económica era uno de los mecanismos más eficientes para lograr el desarrollo económico y social (Correa, 2002, 2009). En *Asedios a lo imposible* confluyen nueve intelectuales ecuatorianos, del campo de las ciencias sociales y económicas que coinciden en estas críticas y plantean alternativas desde el campo económico y las políticas

públicas. Todos, salvo el intelectual peruano, Oscar Ugarteche, estarán vinculados al gobierno del futuro presidente y, la mayoría, no tendrá experiencia política.

En la construcción de este importante libro, participaron: **Alberto Acosta**, editor y escritor de dos de los capítulos, quien luego sería Ministro de Energía, luego presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; luego disidente de la Revolución Ciudadana y finalmente opositor del Gobierno de Rafael Correa. **Fender Falconí**, quien fue primero Secretario Nacional de Planificación de 2007 a 2008; ministro de relaciones exteriores, entre 2008 y 2011, y miembro del Consejo de Educación Superior, desde donde se reformó el sistema de educación superior ecuatoriano y se llevaron a cabo las evaluaciones de todas las universidades, varias de éstas fueron cerradas. Entre 2011 y 2013, volvió a la Secretaría Nacional de Planificación, como Secretario General.⁷⁵ **Jeannette Sánchez**, ministra de inclusión Económica y Social, de 2007, a 2009. En éste mismo periodo, presidenta del Instituto Nacional de la Familia, luego ministra Coordinadora de Desarrollo social, 2009, a 2011. A partir de este último año, ministra Coordinadora de política Económica. Promotora de la Economía Popular y Solidaria. Luego de su paso por el gobierno, vuelve a la academia. Es profesora de la Universidad Central del Ecuador. **Carlos Larrea**, quien fuera viceministro de Defensa, y luego Ministro de Defensa, Embajador de Ecuador en Bielorrusia. Fue además Asesor técnico del a Iniciativa Yasuní-ITT, de la Presidencia de la República en 2011; Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008-2009 y asesor del ministro de Turismo y de la Secretaría de Planificación y Desarrollo. **Pedro Páez**, quien fuera ministro Coordinador de la Política Económica, en el primer gobierno de Correa, Trabajó como analista en la Agencia de Garantías de Depósitos. Había trabajado como analista en el Banco Central, como profesor en varias universidades, incluida la FLACSO. Fue también Super Intendente de Control del poder del Mercado, una de las instituciones creadas por el gobierno de Correa, luego de la promulgación de la Ley orgánica de control del poder de mercado. **Carlos Marx Carrasco**,⁷⁶ fue primero director del Servicio de Rentas Internas (SRI), lugar desde el cual agenció un incremento significativo del cobro de impuestos en el Ecuador. En el SRI, llevó a cabo una reingeniería de la institución, cambiando el modelo de gestión y creo también el Instituto de Investigaciones Tributarias y el

⁷⁵ <https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/btkosv4dj9cgp0jaledp1g746ocpzm.pdf>

⁷⁶ " ... en el ministerio de trabajo, duró 20 meses. En el SRI, lideró el cobro de impuestos a pesos pesados, tales como a Bananera Exportadora Noboa, la operadora celular Claro y, recientemente, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), donde cinco petroleras son socias. Con información de:

<http://www.revistalideres.ec/lideres/carlos-marx-carrasco-me-quedare.html>. La oposición, publicó acusaciones de Acoso Sexual, y de haber salido del SRI, por estas conductas, así como alicoramiento. También fue acusado de tráfico de influencias, de haber colocado a 50 familiares en distintos cargos dentro del estado. Esto con información de. <http://www.ubicatv.com/ecuador-capayaleaks-le-llego-el-turno-a-carlos-marx-carrasco/>

Centro de Estudios Fiscales y el Departamento de Grandes Contribuyentes. Fue ministro de Trabajo y uno de los hombres de mayor continuidad en el gobierno de Correa. **Hugo Jácome**,⁷⁷ también funcionario del gobierno de Rafael Correa, como Super intendente de Economía popular y solidaria. Editorialista de El Telégrafo. **Javier Ponce C.**⁷⁸ Fue ministro de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, del gobierno de Correa, así como director del Banco Nacional de Fomento, esto último, a partir de 2013. Antes había sido ya ministro de defensa del Ecuador, desde 2008, Este nombramiento se da, luego de haber sido secretario particular de Correa. Finalmente Participó **Pablo Dávalos**, quien trabajó con Correa, como viceministro de economía en el gobierno de Alfredo Palacio. Luego se pasó a la crítica, durante el gobierno de aquel, cuestiona su autoritarismo y su incapacidad para el diálogo. Es asesor de los movimientos indígenas, particularmente de la CONAIE.

Estos intelectuales, son quienes, más que como un movimiento político organizado, junto con otros intelectuales y líderes políticos de la “vieja izquierda” y algunos nuevos activistas políticos, comenzarán a construir un proyecto político que, en lo fundamental buscaba darle una mayor centralidad al Estado y desarrollar políticas económicas que contribuyeran a la equidad social y al desarrollo humano integral de los ecuatorianos. No se trata entonces de un proyecto político de vieja data, sino de actores sociales que en el escenario de una cada vez más difícil situación política y ausencia de liderazgos, construyen propuestas de país y buscan romper con las anquilosadas prácticas políticas a través de una reconfiguración del Estado, pasando del campo intelectual al campo político.

Estos intelectuales que se proyectaron como una alternativa a las formas tradicionales de hacer política, desarrollarán una campaña en la que se establece a los partidos políticos y a las élites económicas que habían impulsado las “tortuosas” reformas neoliberales como sus principales adversarios. Para Acosta y Falconí (2005), los 100 días de Rafael Correa como Ministro de Economía y Finanzas habían mostrado la posibilidad de transformar a política ecuatoriana; habían mostrado que se podía “reflexionar sobre las desventajas de la adicción al

⁷⁷ Luego de su paso por el gobierno cuestionó las debilidades del gobierno de Correa para regular los procesos de concentración de la riqueza en manos de grandes empresarios. con información de: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111461>. Planteó el tema de la concentración de la riqueza en pocas manos, como una de las tareas pendientes, en 2009, y además que esto debía ser enfrenado por el nuevo código de producción que estaba construyendo el gobierno en esos años. Así mismo mostró posturas críticas frente al procedimiento usado por los grandes banqueros para financiar la economía de países ricos, sacando el dinero del Ecuador. En 2010, denunció que estos habían sacado alrededor de 4.400 millones de dólares del Ecuador para estas economías. <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102862>

⁷⁸ <https://lahora.com.ec/noticia/705330/javier-ponce-cevallos-serc3a1-posesionado-hoy-como-ministro-de-defensa>; <http://www.agricultura.gob.ec/javier-ponce-cevallos-sigue-al-frente-del-ministerio-de-agricultura-ganaderia-acuicultura-y-pesca/>

endeudamiento externo, al definir que se recurriría a tanto ahorro interno como fuera posible y a tanto ahorro externo como sea indispensable” (Acosta y Falconí, 2005: 34). Para estos autores, durante estos 100 días, “Se sentaron algunas bases, sobre todo en la opinión pública, punto medular para disputar el cambio de rumbo”. La experiencia, sin embargo, había enseñado también que “un solo ministro no cambia la correlación de fuerzas dentro de un gabinete, y peor aún la correlación social de fuerzas. Y así como se requiere un equipo de gobierno comprometido con la misma línea de transformaciones estructurales, se precisa la participación de amplios sectores sociales que respalden e interpielen permanentemente la legitimidad del proceso”. Desde esta mirada, lo que se construía en el libro, como primer intento de buscar salidas a las crisis del Ecuador, no era sólo una reflexión teórica, sino las bases de un nuevo poder, pues, concluyen los autores: ***La disputa real no es solamente por la agenda; el juego está en el poder.*** (Acosta y Falconí, 2005. 35)⁷⁹

Es así como se sembraron los gérmenes de lo que va a ser la Revolución Ciudadana. Esta apelación a *amplios sectores sociales* se llevará a cabo, buscando diferenciarse de las estructuras políticas tradicionales y, de hecho, propondrán el cambio de la Constitución de 1998, como uno de los primeros objetivos para reformar al estado ecuatoriano y, a través de este, a la sociedad en su conjunto. Así, una de las primeras estrategias del *core group*⁸⁰, que asedia *lo imposible* será, por supuesto, posicionar a quien ha ganado mayor visibilidad como el líder de las transformaciones sociales que “la ciudadanía” demanda. El 2006 será el año para la proyección de un movimiento político que se edifica alrededor de la figura de Rafael Correa y su carisma. Pronto, su exposición mediática lo ubica como un candidato fuerte que, como muestra de diferenciación no presentaba candidatos al parlamento. Compitiendo con el multimillonario bananero Álvaro Noboa, como su principal adversario, Correa logrará imponerse, pero sin lograr, en la primera vuelta, ganar la mayoría absoluta de los votos.

⁷⁹ La negrilla es nuestra.

⁸⁰ He tomado esta idea del *core group* de Gioconda Espina y Cathy A. Rakowski (2002) que, estudiando los movimientos de mujeres en Venezuela, encuentran que más que movimiento; es decir, más que acción colectiva organizada, lo que había era un conjunto de líderes, particularmente académicas que impulsaban las demandas de las mujeres. En el caso ecuatoriano, asumo, lo que se presenta es, precisamente una profunda crisis de los proyectos colectivos orgánicos y esto deja paso para la emergencia de este tipo de liderazgos. El grupo de Intelectuales que se configura alrededor de Rafael Correa, actúan como este *core group*, sólo que, a diferencia de la promoción de la acción colectiva autónoma, van a mostrar más bien resistencias y recelo (Ramírez, 2010, López, 2016, Ospina, 2009). Pablo Ospina, afirma al respecto, que parte del núcleo de intelectuales vinculados al movimiento de Rafael Correa y el mismo Correa, consideran que el tiempo de los indígenas ha pasado y asumen que estos tienen demandas muy particularistas o corporativistas, opuestas al universalismo que buscan (Ospina, 2009: 203)

El origen y el contexto de emergencia de Rafael Correa, explicaría por qué no presenta candidatos al Congreso, por qué promueve una nueva Constitución Política y por qué impulsa, junto con los miembros de este grupo, el movimiento que se denomina la Revolución Ciudadana. Desde la particular forma de ver la política ecuatoriana, es al ciudadano, individualmente considerado al que habló siempre el candidato y luego el presidente. No habla al ciudadano organizado, ni a los movimientos sociales, lo que plantea una concepción del proceso político y una lectura de la manera en que había que orientar la transformación del Ecuador.

A lo largo de su trayectoria profesional, no había sido Rafael Correa un político activo. De los presidentes que impulsaron el *socialismo del siglo XXI*, Correa es quien menos experiencia tiene en este campo, es el verdadero *Outsider* político y el *core group* que lo acompaña no estará en condiciones muy distintas. Salvo el vínculo de algunos de sus más cercanos colaboradores con algunas organizaciones sociales, regularmente en calidad de consultores y asesores, los liderazgos de la Revolución Ciudadana provienen todos, del campo intelectual. Desde este lugar, la relación que establece el líder de la RC, con movimientos sociales y partidos políticos fue desde el principio más bien conflictiva. El movimiento indígena, por ejemplo, no estableció con Correa una alianza formal, tampoco otras organizaciones políticas de izquierda tradicional como el MPD. Tal vez el único partido que lo acompañó, con quien hizo alianzas, haya sido el Partido Socialista Ecuatoriano; un partido, sin embargo, disminuido con el paso del tiempo (Paz y Miño, 2006; Ramírez 2010, 178). A pesar de esto, en las elecciones, estos movimientos sociales y políticos terminan apoyándolo (Larrea, 2006). De este modo, no hay inicialmente un proyecto hegemónico, sino una unificación coyuntural y, por tanto, muy volátil. Para Franklin Ramírez, la no incorporación dentro del gobierno a otros actores sociales y políticos “tradicionales”, partía de “... la tesis de que la construcción de una agenda pública de vocación universalista tenía como condición evitar toda representación partidaria, corporativa o gremial en el gobierno”. Orientación que buscaba, “sobre todo reducir la habitual influencia de la gran banca y de la oligarquía guayaquileña” (Ramírez 2010, 179) articulada por el PSC.

De este modo, si hacemos una revisión de la manera en que se condujo el Gobierno de Rafael Correa, podemos darnos cuenta de que la mirada de éste es más la de un economista que intenta gobernar a un, parafraseando a Franklin Ramírez, “neoliberalismo indócil”, que la de un político que busca sumar fuerzas organizadas pues ve en estas la base de una nueva hegemonía. Como economista, buscó la viabilidad de la Revolución Ciudadana, pese a que

algunos autores consideren lo contrario (Dávalos, 2016). De este modo, la RC es conducida de manera más técnica que política, aunque constantemente Rafael Correa se declare enemigo de la técnica como base de la política económica y desde allí critique a los economistas neoliberales (Correa, 2005). Su gobierno se va a caracterizar entonces, por el diseño y e implementación de herramientas que le permitan desarrollar su propósito fundamental: un Estado autónomo frente a cualquier tipo de presión gremial, sindical, partidista o empresarial. Desde este lugar, en su carrera por la presidencia, la relación que establece Rafael Correa con otros actores sociales y políticos se hace más desde la desconfianza y la instrumentalización mutua, que a partir de procesos de articulación hegemónica. No hay, como en el caso boliviano, un proyecto político que ha ido construyéndose a la vez teórica y organizativamente. Correa enfrenta al sistema político ecuatoriano, desde su carácter y carisma y desde su saber cómo economista. Para esto contará con un grupo de académicos y técnicos que lo acompañan. En el camino, su núcleo más cercano se mantendrá (con algunas disidencias importantes), pero se conservará, en lo fundamental, la orientación general del Estado y de su administración

Desde su experiencia como ministro, Rafael Correa cree que es posible cambiar la orientación de la política económica ecuatoriana. Uno de los aprendizajes legados por este paso por el ministerio, para el mismo Correa, fue haber demostrado que se podía modificar la estructura de dependencia del financiamiento externo que había conducido a un sobreendeudamiento y subordinación económica del Ecuador y reorientar los recursos del Estado hacia el bienestar común (Correa, 2005). Así, desde su ministerio, puso en duda la manera en que el estado ecuatoriano venía haciendo uso de los recursos producidos por el petróleo. Desde su perspectiva, las políticas petroleras sólo servían para endeudar más al país y por tanto modificó la destinación del Fondo de Estabilización, Inversión, Reactivación Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), pues este estaba desarrollando los objetivos que le correspondían y, por el contrario, sólo había beneficiado a los tenedores de deuda ecuatoriana, ya que con este fondo la deuda, en vez de disminuirse, se encarecía cada vez más. Reorientó los recursos de este FEIREP para la inversión social. Cuestionó también la manera en que se había adquirido parte de la deuda externa. Para Correa, “Existe una deuda ilegítima, adquirida en situaciones dudosas, no usada para los fines para los que fue contratada, o que ya ha sido pagada varias veces” (Correa 2005, 73)

En tal sentido, propuso independizar las políticas económicas de los organismos multilaterales. Para ganar autonomía propone puntualmente “recuperar (las) reservas para la

región, juntarlas y administrarlas adecuadamente”, lo que permitiría financiar a los países de la propia región, es decir, sería el inicio de una gran integración financiera. Mas que un imperativo económico, éste constituye un imperativo del sentido común”. Otro de los mecanismos propuestos es la diversificación de las fuentes de endeudamiento, viendo a Brasil o China como potenciales prestamistas. Durante su paso por el Ministerio, afirma, logró financiamiento de Venezuela. Un tercer mecanismo es la inversión en capital humano y social. En este aspecto, el Ecuador mostraba un rezago alarmante incluso frente a países latinoamericanos. De este modo, el Ecuador debía incrementar los recursos destinados a formar capital humano, pero también hacia la formación de capital social, el cual entiende como la constitución de “sociedades motivadas, con energías intrínsecas, mirando juntos hacia los mismos objetivos, socialmente cohesionadas, etc.” En consecuencia, la política social era pieza clave de la política económica, pero superando las miradas asistencialistas. De ahí que justifique porque, como ministro de Economía y Finanzas había creado la “Subsecretaría de Política Social, para integrar orgánicamente las políticas económicas y sociales, y superar definitivamente el falso dilema entre lo económico y social” (Correa, 2005: 76). Con base en estos planteamientos, Correa concluye que el Ecuador (y Latinoamérica) debían apostarle a la construcción de una nueva idea de desarrollo, que fuera autónoma frente a los grupos dominantes, para quienes el mercado estaba por encima del Estado. En esta nueva concepción el Estado y la *acción colectiva* debían recuperar “su papel esencial para el desarrollo; y preservar activos intangibles pero fundamentales como el capital social”. Correa, 2005: 77)

Con estas miradas gruesas sobre el papel del Estado en la sociedad, se van configurando líneas de acción a partir de las cuales se constituirá el proyecto político de la Revolución Ciudadana. No es así, en el contexto del 2006, cuando empieza a definirse un plan y unas políticas para la reconfiguración del Estado, como lo plantea Fernando Vega (2013) en su texto “*El Carácter del Estado en la Revolución Ciudadana*”, sino en el contexto de la experiencia de Correa como ministro. Es desde ese momento que Correa delinea lo que después se concretará en el Plan de Gobierno de Alianza País 2007-2011, un año después de la publicación de *Asedios a lo imposible*. De hecho, para el año 2006, ya había un equipo de trabajo consolidado y se había formalizado la propuesta de Alberto Acosta y Fender Falconí, de disputar no sólo la agenda, sino por el poder. Y es esto lo que hacen en este año, al participar de la contienda electoral por la presidencia. Esto implicó ya aterrizar estas especulaciones al diseño de estrategias mediáticas que les permitieran sumar los votos que les

dieran el triunfo. Combinaron así, prácticas tradicionales, como hemos visto, con intentos de sumar, sin generar compromisos de gobierno, a la diversidad cultural ecuatoriana. Algunos críticos del proceso impulsado por la Revolución Ciudadana, desde distintos espectros teóricos e ideológicos, llamarán a esto una especie de usurpación de las demandas de los movimientos sociales, para fines electorales (Pachano, 2010, Dávalos, 2016). Pero antes ya se habían delineado las orientaciones de política económicas que, veremos, son centrales en la construcción del gobierno de Rafael Correa. En general, estas buscaron fortalecer al Estado como agente de integración social y motor del desarrollo. Para tal fin, se debía reorientar y reconstruir su campo de acción, tanto en la política interna, como externa. La apuesta fue así, la revisar las políticas comerciales y fortalecer la demanda interna y la capacidad productiva (Vásconez, 2005). Así mismo, había que contar con más recursos y fuentes de ingresos más estables, por lo que se hacía necesario reconfigurar los sistemas financiero y tributario. Esto implicaba incrementar las capacidades reguladoras del Estado frente a la banca y a los actores privados de la economía, para incrementar los ingresos fiscales (Carrasco, 2005; Páez, 2005, Jácome, 2005). Para Carrasco, todo esto pasaba por la esfera política y era necesario construir un “proyecto nacional/identitario/popular”, por lo que era “indispensable ejecutar una profunda reforma política de refundación del Estado a partir de la desprivatización del Estado central y los gobiernos locales”. De este modo, se profundizaría la democracia y una nueva Constitución era el escenario propicio para construir un proyecto orgánico, articulado. Para Carrasco, había que incorporar a los afectados por “la rapacidad neoliberal” y asumir compromisos “con una patria solidaria y soberana”. En tal sentido, había que contar con *la voluntad de la dirigencia política* de centro izquierda hacia la izquierda y abandonar “las posiciones maniqueístas, sectarias y dogmáticas y comprender que el único camino era la unidad para la consecución de los supremos objetivos de justicia y democracia...” Ante tantas injusticias acumuladas, “solamente una transformación revolucionaria es la solución. Esta revolución silenciosa y pacífica tenemos que hacerla colectivamente. Si no es así, las fuerzas que impongan las condiciones materiales de la historia motivarán que sobre venga indefectiblemente una revolución cruenta y violenta” (Carrasco, 2005: 154).

Pese a que se hacía énfasis en la necesidad de que el proyecto revolucionario fuera sostenido colectivamente y se opusiera al mesianismo y el personalismo, las dinámicas tradicionales de confrontación electoral pusieron en el centro del espectro público a Rafael Correa Delgado, como la encarnación personal del cambio. El peso estructural del personalismo en la política ecuatoriana se impuso en este, como en otros casos. Los críticos liberales, nacionales y

extranjeros, no tardaron en catalogarlo como un nuevo líder populista. Su apelación al pueblo, a la patria como motor de las transformaciones sociales, se hicieron corrientes. Pero la estrategia política también ayudó a que la figura de Correa se estableciera como el centro del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Alrededor de él gravitará la Revolución Ciudadana.

Algo distinto sucede en Bolivia, donde lo que se produce es un incremento de la capacidad de articulación de los distintos actores sociales y políticos. Si bien en Bolivia el liderazgo de Evo Morales destaca de manera significativa también, alrededor suyo se articuló una multiplicidad de actores políticos que no sucumbieron ni sucumben pasivamente, ante las determinaciones del líder. En el caso ecuatoriano, el peso del liderazgo de Correa en el impulso de la Revolución Ciudadana, se configura como el sujeto central, que representa a un sujeto colectivo etéreo, como es “la ciudadanía”. En Bolivia, por el contrario, este sujeto colectivo está articulado por los movimientos sociales indígenas y otras formas de movilización y organización social.

Ahora bien, en el Ecuador en el que emerge el liderazgo de Rafael Correa, difícilmente podría ser de otro, si lo que hemos visto es, precisamente, una gran dificultad de los movimientos populares para articularse y/o evitar la cooptación por parte de las élites políticas y económicas, y la corrupción de algunos de sus líderes o, al menos, de aislarlos de la representación de los movimientos populares en su conjunto. Con base en este reconocimiento, la interpretación del proceso de la Revolución Ciudadana se aleja de las perspectivas dominantes que se centran en las críticas al gobierno de Correa, a partir del análisis del discurso “populista”, de Correa (Vr. Gr. Burbano de Lara, 2015, De la Torre, 2013). No porque no se reconozca el liderazgo carismático de Rafael Correa, sino porque lo que hay que entender es cómo se configura este tipo de liderazgo y en qué contexto.

Desde este marco interpretativo, es necesario considerar que desde los escritos académicos de Correa hay una visión económica de los problemas del desarrollo que plantea soluciones técnicas a las dificultades de este. Su visión del desarrollo económico se centraba en la redistribución y no en el crecimiento por sí sólo. Esto es compartido por algunos de sus allegados, como Fender Falconí, Julio Oleas (2004), defensores de una orientación desarrollista de la Economía.⁸¹ Hasta cierto punto, también por Alberto Acosta y los demás

⁸¹ Sobre la elaboración teórica de las críticas al neoliberalismo y la defensa del desarrollismo de estos dos autores puede verse: Oleas, 2013, Oleas y Falconí, 2004. Otro de los colaboradores centrales de Rafael Correa será René Ramírez Gallegos (Hermano de Franklin Ramírez Gallegos), quien en 2008, dedicó una de sus obras a Rafael Correa. Se trata del texto “Igualmente pobres, desigualmente ricos”. Julio Oleas, estuvo vinculado con el

intelectuales autores de *Asedios a lo Imposible*, que ponen en el centro del debate el problema del desarrollo, aunque sus concepciones varíen significativamente.⁸² En primer lugar, porque da cuenta de la manera cómo un grupo de intelectuales está pensando la transformación del país y, en segundo lugar, porque estos, efectivamente llegarán al poder a finales de 2006. Justamente en noviembre, un año después de la publicación de la citada obra.

Ahora ¿Cómo este conjunto de iniciativas llegó al poder y cómo se desplegaron para reformar de manera profunda de la estructura del Estado y de su lugar en la sociedad y la economía? ¿Qué tipo de estatalidad configuró la Revolución Ciudadana? Para sus críticos, el proyecto de la Revolución Ciudadana termina por caer en un personalismo populista y autoritario que ha reproducido las prácticas corruptas de las viejas estructuras políticas y ha fortalecido el poder de los grandes grupos económicos que decía cuestionar (Acosta, 2018). Se ha dicho también que edificó su poder sobre una concepción plebiscitaria de la democracia (Conaghan, 2008), un régimen híbrido (López, 2016), una revolución ciudadana, sin ciudadanos (Ospina, 2009), un *tecnopopulismo* (De La Torre, 2013).

Para los críticos, lejos de haber fortalecido el poder de los movimientos y actores sociales populares, el gobierno de Rafael Correa habría conducido a su debilitamiento y división, por la vía de las prebendas y el establecimiento de relaciones clientelistas. A pesar de estas críticas, como se ha mostrado en este documento, este debilitamiento sería causa y no consecuencia de la emergencia de la RC. Es en el marco de la fragmentación social y política, de la que también fueron responsables los movimientos indígenas y otros movimientos sociales (Becker, 2010), que se gesta el movimiento que reclama autonomía e independencia frente a toda fuerza social y política precedente. Esta fuerza política hace suya la idea de que “debían irse todos”.

Desde el punto de vista económico, las críticas han estado dirigidas a resaltar el débil crecimiento de la economía en un contexto más bien favorable y de incremento sin precedentes de los recursos del Estado. Así mismo, se ha cuestionado el incremento de la dependencia del petróleo, del extractivismo y del endeudamiento para sostener un gasto fiscal

gobierno de Correa, como asesor en la SEMPLADES, Fue Viceministro de Comercio Exterior, Fue asesor para la elaboración del Plan de Desarrollo del primer gobierno de Rafael Correa, fue también Asesor del Programa Nacional de Reforma Democrática del Estado, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Ver: su hoja de vida en: <http://www.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/2016/10/CV-Julio-Oleas.pdf>

⁸² Alberto Acosta, particularmente ha planteado las diferencias significativas entre la idea del Buen Vivir, y la idea del Desarrollo. La primera sería, de hecho, una alternativa al desarrollo que se entiende como la incorporación de las lógicas dominantes del capitalismo y, para éste, de lo que se trataba era de superar el capitalismo o, al menos sentar las bases para su superación (Acosta, 2012, 2013)

creciente y cada vez más, para algunos, insostenible. (Burbano de Lara, 2015, Alberto Acosta, 2016, 2017; Verdesoto, 2015; Dávalos; De la Torre, 2010, Conaghan, 2015, Ospina, 2010; 2013; Machado, Andrade y Nicholls, 2017, por citar sólo algunos). De esta manera, de la esperanza del cambio, que se avizoraba en los gérmenes de la Revolución Ciudadana, se habría pasado a la “pesadilla” de un gobierno que desperdició todo el potencial transformado que tenía. Incluso, uno de los críticos del gobierno de Correa, que se habría pasado de la utopía a la distopía (Ávila, 2013; Calderón y Chamorro, 2017).

A pesar de lo anterior ¿En qué consistía, a partir de lo expuesto, el proyecto de la Revolución Ciudadana y cómo interpretar su potencial transformador y hegemónico, frente a las estructuras políticas sobre las cuales (en contra de las cuales) se edifica? Por lo expuesto, estamos frente a un proyecto político modernizante y, podría decirse, más socialdemócrata que socialista. La apuesta es la modernización de la sociedad ecuatoriana a través de la construcción de un Estado con capacidad de producir esta modernización. Y este Estado requería una transformación de las prácticas políticas anteriores, desde la particular interpretación que los actores que edifican el proyecto político de la RC tenían en este momento y que podrían resumirse, a riesgo de simplificar, de la siguiente manera: 1. Una dependencia económica de la sociedad ecuatoriana que le impedía hacer uso de sus propios recursos para generar desarrollo con igualdad social. Esta dependencia se sustentaba sobre la deuda externa, sobre todo, pero también sobre las formas de administrar los recursos del Estado y, particularmente su principal producto: el petróleo; 2, Unos actores políticos con prácticas corporativistas que dificultaban la construcción de un proyecto de desarrollo “universal”; unas estructuras económicas y políticas excluyentes; 3. Una estructura estatal ineficiente, corrupta y subordinada a los intereses de unas élites empresariales oligopólicas y de una “partidocracia” corrupta; 4. Un sistema financiero también oligopólico e ineficiente para contribuir al desarrollo productivo del país y; 5. Un sistema tributario regresivo e ineficiente.

En buena medida, de esta estructura económica y política, que los autores de *Asedios...* consideran heredada de Consenso de Washington, es la que había que transformar y, por tanto, la importancia de la construcción de un Estado fuerte que volviera a las políticas del desarrollo. Los actores de la transformación no serían otros que aquellos que estaban construyendo estas miradas de futuro. Y la posibilidad de esto se abrió, precisamente a partir del paso de Correa por el Ministerio de Economía y Finanzas. No decimos con esto, que todo

el proyecto político de la Revolución Ciudadana se encuentre en estos gérmenes, pero ahí está la génesis de lo que va a desarrollarse después.

Desde el punto de vista de esta investigación, es más con la perspectiva de la política económica que con alguna teoría política específica, que se va a impulsar la transformación del Estado y esto explicaría la relevancia de la toma de decisiones ejecutivas y, de hecho, el porqué de la importancia del poder presidencial y decisonal en la Revolución Ciudadana. Más que un proyecto de articulación hegemónica, la propuesta de la RC, tiene una postura tecnocrática del proceso de transformación social e institucional; una apuesta modernizante de las clases medias altas; unos sectores sociales que desde su capital cultural, confían en el potencial modernizador de las transformaciones económicas, pero que reconocen (inicialmente al menos) la pluralidad de voces y enfoques que han configurado históricamente los movimientos sociales populares, pese a que no comparten con estas posturas corporativistas.

El estudio de las relaciones entre el gobierno de la Revolución Ciudadana, como actor político, y las élites empresariales encuentra aquí su importancia. Desde el punto de vista de esta investigación, en los gérmenes de la RC, se delinearon las orientaciones de los nuevos actores políticos. Como diría Gramsci, en su filosofía, se hallaba su política (Gramsci, 1980). En este caso, en su perspectiva de economía política, estaba su concepción del cambio que requería el Ecuador y los modos de hacer este cambio realidad. También estaban parte de las debilidades del proyecto revolucionario.

Ahora bien, para lograr constituirse el proyecto político de la Revolución Ciudadana, como bien lo expuso Franklin Ramírez (2010), combinaron realismo político, con realismo económico. De este modo, si el objetivo era llegar al gobierno y luego mantenerse en el poder, tendrán que combinar las herramientas que la comprensión del comportamiento político ecuatoriano tradicional podía dar y hacer uso de las mismas. También hicieron uso de la teoría económica para agenciar la transformación del Estado y su proyección hacia la sociedad. A través de ésta última, impulsaron las reformas del Estado atacando distintos frentes.

Desde la perspectiva de la RC, del desarrollo económico, se derivarían los derechos políticos y el bienestar de la sociedad. Por esto la búsqueda de atacar dos frentes generales a la vez. a) potenciar el crecimiento económico a través del incremento de la producción y la productividad del país, bajo la dirección del Estado y, b) ampliar y mejorar la seguridad social, la inversión pública y el bienestar material colectivo (Correa, 2005). Lo primero

desencadenó distintas iniciativas para potenciar la producción nacional (restricción selectiva de importaciones, incentivos al crédito productivo, financiación directa de proyectos productivos en distintos sectores de la economía, particularmente agroindustriales y manufactureros; una inmensa inversión en infraestructura pública de transportes, etc.) y lo segundo, en los incrementos sustanciales en educación, salud, saneamiento básico, etc.⁸³

Ahora, desde una perspectiva distinta a la manera en que lo planteó Franklin Ramírez, el proyecto de la RC, no sería sólo una experiencia inédita en el periodo democrático, sino en toda la historia del Ecuador. Esta forma de posicionar al Estado y su sostenibilidad en el tiempo no tiene precedentes. Ni siquiera en el contexto de la dictadura de Rodríguez Lara se constituyó un Estado con tantas capacidades de intervención (social, política, económica y cultural), como la construida por la RC. No obstante, esta observación, lo que sí hace Franklin Ramírez es una muy buena síntesis de cómo se despliega la RC en su propósito de reconfigurar al Estado ecuatoriano

En primer lugar, considera Ramírez (2010), esta se despliega a partir de un activismo comunicacional, con una débil capacidad organizativa. Ya hemos visto que, más que las organizaciones y los movimientos sociales, lo que busca convocar e interpelar al gobierno es al ciudadano “común”. Ya hemos visto también que esto hace parte del realismo político con el que se conduce el proyecto político. El poder había que mantenerlo y para esto era imprescindible ganar elecciones. Los dos primeros años fueron de combate político electoral permanente. Como bien planteó Conaghan (2009), este era un gobierno en campaña permanente. La convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue el primer momento de esta campaña. Luego vinieron las campañas para construir las mayorías en la ANC, luego para la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), y

⁸³ Solo en el sector educativo, a para el año 2015, René Ramírez afirmaba se habían invertido durante el gobierno de la revolución Ciudadana, alrededor de USD 9.500 millones de dólares, equivalente al 2.12% del PIB (Ver: <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/historica-inversion-en-educacion-superior/>) Estas inversiones fueron alabadas por prensa extranjera que destacaba el mejoramiento de la calidad educativa en el Ecuador, medida por pruebas internacionales (Ver: <http://www.semana.com/educacion/articulo/reforma-educativa-en-ecuador/439412-3>). La inversión en Salud fue también reconocida a nivel nacional e internacional. Para el año 2016, se hizo evidente el incremento en la cantidad de hospitales, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en general, así como el incremento del personal de salud dentro del sistema público. Jorge Glass, destacó que el número de médicos entre 2007 y 2016, había pasado de 11.000 a 33.000. Ver. <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/ecuador-aumento-10-veces-mas-la-inversion-en-salud>. Para el año 2016, la inversión en salud, durante todo el gobierno de Rafael Correa habría llegado a los 13.500 millones de dólares. “En una entrevista con Andes, la ministra de Salud, Margarita Guevara, señaló que la inversión ha ido aumentando paulatinamente, en el 2006 (antes de que inicie el gobierno de la Revolución Ciudadana) la inversión fue de 400 millones, en 2007 se pasó a 586 millones, en 2014 fueron 2.408 millones y en 2015 fueron 2.517 millones”. Ver: <http://www.andes.info.ec/es/noticias/gobierno-ecuador-invertido-13500-millones-dolares-salud-durante-sus-9-anos.html>

luego, para relegitimar el mandato y construir mayorías en la Asamblea Legislativa. Así, la observación de que se trataba de una presidencia plebiscitaria (Conaghan), resulta irrelevante. Dado lo expuesto, para la RC, no podía ser de otra manera. Había que construir las mayorías, pues serían estas las que viabilizarían las reformas que se asumían como imprescindibles. Y, además, los cambios había que hacerlos rápido, sin importar de dónde provinieran los obstáculos, había que saltarlos (El Comercio, pág. 7, 2008/01/11). Esto significó frecuentes enfrentamientos al interior del movimiento político que se fue configurando en el proceso, pero también enfrentamientos con sectores populares, partidos de derecha, representantes de medios de comunicación, grupos económicos, asociaciones empresariales, sindicatos, etc.

Como en todo proceso revolucionario una multiplicidad de frentes de conflicto se abrió en el desarrollo de la RC. Castoriadis (2002), refiriéndose al significado de la revolución explica que todas las sociedades cambian, permanentemente, sólo que estos cambios, parecen imperceptibles, pues no afectan las significaciones más profundas y arraigadas. *Esta auto alteración está casi siempre oculta por la acción de las instituciones existentes de la sociedad...*” En los periodos revolucionarios, por el contrario, la auto alteración de la sociedad se acelera y se hace evidente que las mismas instituciones son creaciones humanas. Esto pues las revoluciones son

(...) periodos de auto alteración importante y rápida de la sociedad durante los cuales una intensa actividad colectiva, investida de un grado mínimo de lucidez, apunta a cambiar las instituciones y lo logra. Estos periodos ejemplifican otro modo de ser de lo sociohistórico, el cuestionamiento explícito de las leyes de su existencia y el esfuerzo correspondiente de transformación lúcida de estas leyes” (Castoriadis, 2002: 134).

Esta alteración rápida de las instituciones y las leyes, no pueden generar otra cosa que conflictos, pues las instituciones establecidas y los actores que las soportan buscarán las formas de hacer frente a aquellos que se pretende edificar una nueva institucionalidad; cuestionarán las formas o las finalidades; los principios o los mecanismos. Lo que se ve en Ecuador en el contexto de la RC es, precisamente este escenario de intensa y heterogénea conflictividad entre las distintas miradas del cambio, así como entre estas apuestas por el cambio y aquellos que pugnan por conservar la hegemonía de sus propios valores e instituciones. En este caso, de los valores e instituciones que el neoliberalismo ecuatoriano había configurado paulatinamente y que se habían establecido como los únicos posibles.

La pretensión de reconfigurar al Estado, de reorientar a la sociedad ecuatoriana, de darle nuevas funciones a la institucionalidad estatal y de establecer una nueva constitución y nuevas

leyes que soportara su funcionamiento y su despliegue en la sociedad, se exponen, además, con una explícita idea de estar revolucionando. Lo que se está constituyendo es una sociedad que reclama su autonomía (a través del Estado), frente a los poderes tradicionales, internos y externos. Se quiere un Estado autónomo, además, de toda presión sectorial o corporativa. Y esto, en Ecuador genera tensiones profundas. La revolución será contestada así, por múltiples actores sociales, desde los distintos lugares del espectro ideológico.

Esta orientación de la Revolución Ciudadana, será vista como “Bonapartismo” por Alberto Acosta (2013), será calificada de Populista, por otros. ¿Puede ser considerada de otra manera? Desde una perspectiva Gramsciana que hemos acogido en esta investigación, uno de los grandes vacíos de este proceso revolucionario estará dado por la ausencia de un sujeto colectivo que sostenga el proceso revolucionario. Más que un movimiento político, hemos planteado, hay un “*core group*”, un grupo de especialistas que impulsan el proceso revolucionario y, en el camino intentan construir el sujeto colectivo que los soporte y le dé continuidad. Pero este sujeto es etéreo, no tiene vínculos orgánicos con la sociedad. La ciudadanía, destinatario del mensaje revolucionario, seguirá la revolución “desde” el aparato de televisión. Franklin Ramírez (2010) , en su balance de los dos primeros años de la Revolución Ciudadana, expone acertadamente que el gobierno había sido exitoso en reducir el poder de los partidos políticos tradicionales y la influencia de los grupos de poder... pero no había fortalecido a las organizaciones sociales de base. Así, "La sociedad, hastiada de la política, acompaña las transformaciones desde lejos y a través de la pantalla chica" (Ramírez, 2010: 189).

De este modo, para Ramírez, cuatro cuestiones explican e iluminan la preponderancia estatal y las diversas tensiones gubernamentales con la sociedad organizada, en el proceso de cambio que vive el país: a) la gelatinosa formación de Alianza País. Esto es, la falta de anclaje social. El "distanciamiento de toda forma de organización partidaria se colocó, desde sus orígenes, en el centro del discurso de la Revolución Ciudadana"; su falta de interés por los procesos organizativos: b), Redistribución sin reconocimiento, que se refiere a los conflictos con los sectores organizados que hacen parte del "arco progresista"; que son incluidos como destinatarios de la política, pero no como agentes de la misma; c), los conflictos entre las apuestas universalistas y los particularismos de los actores sociales: indígenas y sindicatos. d), El uso del marketing político, como herramienta central de convocar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación (Ramírez, 2010: 189-191)

En tal sentido, los líderes de la RC se constituyen en los protagonistas del cambio y, especialmente la figura de Rafael Correa. Si se quiere, tal como en algún momento lo plantearon, en otro sentido, los dirigentes empresariales, como el *gerente* del cambio. No obstante, es un gerente que deriva su autoridad de mecanismos electorales. Y este soporte lo usará Rafael Correa como justificación del por qué, la última palabra sobre cualquier decisión política o económica de su gobierno, era responsabilidad exclusiva del ejecutivo. Un gobierno que ha logrado las mayorías electorales, para Rafael Correa, está legitimado popularmente. Con las minorías o con la sociedad civil se dialoga (con ciertos sectores, más que con otros), pero este diálogo no se asume como vinculante.

Así, una característica central de la RC es su reclamo de autonomía total frente a cualquier actor social organizado. Esto, en el contexto ecuatoriano, significó el intento de hacer tabula rasa. Y aquí, nuevamente Castoriadis:

Toda institución, así como la revolución más radical que se pueda concebir, sucede siempre en una historia ya dada e incluso por más que tenga el proyecto alocado de hacer tabula rasa total, se encontraría que debería utilizar los objetivos de la tabla para hacerla rasa. El presente transforma siempre el pasado en **pasado presente**, es decir el **ahora** adecuado no será más que la “reinterpretación” constante a partir de lo que se está creando, pensando, poniendo - pero es este pasado, no cualquier pasado, el que el presente modela a partir de su imaginario.

Toda sociedad debe proyectarse en un porvenir que es esencialmente incierto y aleatorio.

Este pasado de la estructura política, social, económica e incluso cultural del Ecuador, es el que pretende dejar atrás la RC y para esto, llegará al autoritarismo (esto es, la ruptura de los marcos normativos que la misma revolución configura), así como la intransigencia con ciertos sectores sociales que reclaman su participación como agentes de cambio y que buscan posicionar su agenda e influenciar las características del cambio que la sociedad demandaba. Esta orientación del cambio de la sociedad, por la vía del desconocimiento de la heterogeneidad sociopolítica ecuatoriana, contribuirá a perfilar un importante número de frentes de conflicto y a partir de estos, pronto la RC mostrará sus límites. Aquí encontraremos una de las grandes diferencias con el proceso boliviano, donde el concepto de “economía plural”, servirá de anclaje hegemónico, para articular incluso a las élites empresariales, en principio feroces opositoras al nuevo gobierno de Evo Morales.

De este modo, los propósitos centrales del gobierno de Rafael Correa, como la industrialización a través de la sustitución selectiva de importaciones y la de configurar una economía de servicios centrada en el conocimiento, como plantea Ramírez (2010)

evidenciarán sus dificultades. Para Pablo Andrade y Esteban Nichols (2017), a pesar de contar con recursos económicos y con un contexto externo positivo, el Estado que construye la RC no logró desarrollar un proceso positivo de "cambio de matriz productiva". Estos autores afirman además que:

El tipo de autoridad creada ha perjudicado al aumento de las capacidades productivas de la economía porque ha sido formulada desde la lógica de un estado excepcionalista, es decir, del producto de una serie de prácticas de construcción del Estado que lo han ubicado como el único actor capaz de efectivizar los cambios económico-sociales que requiere el Ecuador. Esto ha impedido que el Estado aproveche importantes fuentes de capital social y productivos ya existentes en la sociedad -componentes necesarios, como nos indican la teoría sobre Estados para el desarrollo... y experiencias históricas concretas, para que el Estado lidere procesos relativamente exitosos de cambios en la matriz productiva. En definitiva, el Estado ecuatoriano no se ha 'arraigado' (Evans, 1995) en la sociedad sino que se ha sobrepuesto a ella de una manera muy particular: el excepcionalismo (Andrade y Nichols, 2017: Pág. 3-4)

Este excepcionalismo, no obstante, se argumenta aquí, no es producto exclusivo de los agentes de la RC, sino también de un agotamiento de otras formas de articulación social y política. De hecho, de este agotamiento será fruto la misma posibilidad y legitimidad del tipo de liderazgo que le permite a Rafael Correa gobernar al Ecuador a lo largo de 10 años. Así mismo, esta investigación defiende la idea de que, las élites tampoco estuvieron dispuestas a la negociación. Más propensas a la imposición, desconocerán, de principio a fin, los logros y la legitimidad del gobierno en casi todas las áreas en las que interviene: salud, educación, infraestructura, disminución de la pobreza, etc. Lo mismo harán otros actores que no fueron reconocidos como protagonistas del cambio.

Así, a partir del Año 2005, se configuró en Ecuador un proyecto político nacido del campo intelectual, fundamentalmente, que busca reconfigurar al Estado potenciándolo como actor central del desarrollo económico y social ecuatoriano. En la construcción de este proyecto, había una lectura esperanzadora: la creencia de que era posible dejar atrás una larga historia de dependencia y subordinación del pueblo ecuatoriano frente a los dictámenes de los organismos internacionales, así como de las imposturas de las élites políticas y económicas dominantes. Este proyecto político, no obstante, tendrá que enfrentarse con varios obstáculos objetivos para su realización. Como hemos visto, dentro del grupo de intelectuales que acompañaron (o impulsaron) a Rafael Correa en su carrea por la presidencia, no era extraña la idea de la necesidad de que esta proyección debía edificarse con un amplio respaldo social y

popular. Sólo que la estrategia debía combinar elementos tradicionales con propuestas transformadoras.

Lo anterior implicó, desde la primera campaña por la presidencia, vincular promotores de campaña con experiencia en las lides electorales como Vinicio Alvarado.⁸⁴ Si la propuesta era hacerse con el poder de Estado, la misma debería ser viable electoralmente, y para esto debían exaltar las características de Correa y lo que representaba: la ciudadanía y la crítica a la partidocracia. Así, si bien se pensó en superar el caudillismo, el personalismo y buscaban la construcción de la victoria del pueblo, como lo expresaba el Plan de Gobierno de Alianza País (citado por Vega, 2013), las dinámicas electorales los llevaron por otros rumbos: el del fortalecimiento de la imagen del líder y el debilitamiento de las estructuras colectivas. De este modo, la materialización de las propuestas de la RC se vio amenazada por las prácticas políticas estructuradas en el Ecuador. El fortalecimiento del Estado, que los autores de *Asedios a lo imposible* veían como viable, se chocó con las realidades de la acción política. Tal como hemos visto, estas realidades estaban marcadas más por la fragmentación que por la articulación social y política de los sectores subalternos y por unas prácticas políticas muy personalistas. Se debía jugar con todas las cartas y eso fue lo que hicieron los asesores de campaña de Correa para llegar al gobierno

Una vez conquistada la presidencia, desde las propuestas hechas y los enfoques construidos, se procedió a la reforma del Estado. La tarea inicial fue el desmonte de la partidocracia por la vía de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes. Los nuevos actores estatales desarrollaron una tarea convergente con la Asamblea: Iniciaron un proceso de reforma del Estado sin precedentes. Las fuentes de financiamiento del Estado debían mejorarse, las relaciones con los poderes internacionales debían reconfigurarse; los

⁸⁴ Alvarado explica que en la segunda vuelta se enfrentaron a un escenario inesperado. El propio Correa había dicho que pensaba disputar la final con el candidato de la alianza RED-ID, León Roldós. “En la primera vuelta tuvimos tres aciertos: marcar una posición política (“yo represento a la ciudadanía, no a la partidocracia”); tener un mensaje frontal (no a la OXY, no al TLC, no a la Base de Manta); y los códigos que se usaron para reforzarlos. Como pasamos con un candidato demagogo, que hacía regalos, debimos modificar el discurso”, dice. Entonces, explica el estratega, decidieron bajar el perfil a su propuesta política, basada en la convocatoria a una consulta popular para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, y enfatizar las ofertas en el área social para hacer contrapeso a la oferta de Noboa de construir 300 mil viviendas por cada año de gestión. El programa que presentaron se llamó Socio PAÍS; este tiene tres componentes: Dale Desarrollo, Dale Trabajo y Dale Vivienda. El primero plantea el aumento del bono de desarrollo humano de \$ 15 a \$ 30; el segundo, la entrega de créditos de hasta \$ 5.000 al 5% de interés para los microempresarios y agricultores; y, el tercero, el aumento del bono de la vivienda de \$ 1.800 a \$ 3.600. “Presentamos una oferta coherente y seria. Pero nunca dejamos lo político”, dice; de ahí que, en lo comunicacional, hayan reemplazado el personaje del león (en alusión al líder socialcristiano León Febres-Cordero) por el de boa (en alusión al candidato del Prián) para indicar que “la partidocracia había tomado la posta”. (El universo, 27-11-2006), en: <https://www.eluniverso.com/2006/11/27/0001/8/C75ADA1A99A94A439D9E140A22E8570F.html>

proyectos en los que venían trabajando las élites económicas, debían enfrentarse. Tal como se había planteado en la campaña, las iniciativas de las élites empresariales de buscar un TLC, serían suspendidas de inmediato. Y así se hizo. Un conjunto de acciones desarrolladas en muy poco tiempo, le sirvieron a Correa para incrementar su popularidad. Los dos primeros años del gobierno fueron de un activismo político vertiginoso.

¿Cómo reaccionaron las élites económicas y empresariales a este proceso? Antes de pasar a exponer la manear en que responden las élites económico-empresariales a los desafíos que generó el gobierno de Rafael Correa a la hegemonía de las orientaciones neoliberales de la economía y a su importante poder instrumental, es pertinente presentar algunos indicadores económicos de este gobierno, para dimensionar las transformaciones generadas por el mismo. En esta dirección, hemos mostrado ya que la inversión en salud y educación⁸⁵ fueron dos frentes importantes del gobierno de Rafael Correa, lo que implicó un incremento sustancial de los recursos del Estado. Otros frentes fueron la ampliación de la infraestructura pública de transporte terrestre, aéreo y marítimo. En estos casos, se potenció la construcción y mejoramiento de aeropuertos, puertos y carreteras.⁸⁶ Se impulsó también la construcción y mejoramiento de hidroeléctricas y refinerías, así como importantes obras de infraestructura pública en saneamiento básico como acueductos y alcantarillados en varias zonas del país. Este incremento de la inversión pública se logró, principalmente a través de cuatro mecanismos. En primer lugar, incrementando la renta petrolera y los ingresos del Estado derivados de la economía extractiva en general. Entre 2007 y 2012, los ingresos del Gobierno Central, petroleros pasaron del 20.8%, al 31.2%. Este crecimiento, obedece tanto a incremento de los precios internacionales del crudo, como a las modificaciones legislativas impulsadas por el gobierno de la RC. En este último caso, la renegociación de los contratos con las petroleras extranjeras contribuyó al incremento de los recaudos. También ayudó el

⁸⁵ El informe Estadístico de la CEPAL, del año 2016, muestra cómo la inversión en salud, como porcentaje del PIB, se incrementó del 5% en el año 2007 (durante el año 2000, el monto llegó a apenas el 3.6%), al 7.5% durante el 2013 (CEPAL, 2015:57). La inversión en educación, como porcentaje del PIB, mostró también un incremento considerable. Para el año 2000, esta llegaba a apenas el 1.2%. Para el año 2012, el monto había ascendido al 4.2% del PIB (CEPAL, 2015: 52)

⁸⁶ Un informe del diario El Comercio de Quito del 22 de mayo de 2017, presenta el siguiente balance del desarrollo de la infraestructura: “Las mayores construcciones e inversiones en infraestructura del presidente Rafael Correa se consolidaron en el período 2008-2012. En el inventario están 9 790,52 kilómetros de carreteras (entre mejoradas, refaccionadas y nuevas vías), 11 aeropuertos (entre reconstruidos y nuevos), seis puentes, como Los Caras (entre Bahía de Caráquez y San Vicente). También el tren y cinco puertos. Se invirtieron USD 10.730 millones en arterias viales, frente a cerca de 2 800 millones en el resto de obras” (<http://www.elcomercio.com/actualidad/construccion-carreteras-conectividad-ingresos.html>). Pese a la mirada crítica por la “falta de planificación”, la estandarización u homogenización en los proyectos de infraestructura, se reconoce también que el volumen y la rapidez con la cual se desarrollaron las obras no tiene precedentes en la historia del Ecuador.

incremento de la participación de la estatal Petroecuador, en la exploración y explotación de hidrocarburos. En segundo lugar, a través de varias reformas tributarias que buscaron dos resultados concretos: incrementar la tributación de las grandes empresas y grupos económicos, así como de las personas de más altos ingresos y mejorar la recaudación.⁸⁷ En tercer lugar, en la medida en que los recursos propios se hicieron de más difícil consecución (producto de la crisis internacional y un crecimiento económico desacelerado o muy inestable), se recurrió también al endeudamiento externo. En cuarto lugar, se reorientó el uso de las reservas internacionales y del financiamiento público con recursos del Estado. Sobre esto último el uso de los recursos del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS), como prestamista del Estado para financiar proyectos productivos y construcción de viviendas, fue muy importante. Sobre las reservas internacionales, estas se repatriaron para financiar la economía nacional a través de varios mecanismos: créditos productivos, subsidios a la demanda de vivienda, entre otros. La mayor parte de estas políticas estaban contenidas ya en las propuestas de *Asedios a lo imposible*, bajo el principio de que había que hacer uso del ahorro interno, tanto como fuera posible y del ahorro externo (endeudamiento), tanto como fuera necesario.⁸⁸

Este importante crecimiento en la función social, económica y política del Estado significó también un importante aumento del tamaño del Estado, en cuanto a recursos y personal administrativo y ejecutivo, así como una mayor capacidad reguladora de las actividades económicas, sociales y, hasta cierto punto políticas y culturales. No obstante, la principal

⁸⁷ Durante el gobierno Rafael Correa, la presión tributaria se incrementó considerablemente. Durante los años 90 Ecuador era uno de los países con más baja recaudación. A partir del gobierno de Correa, llegó a ser el segundo país, después de Uruguay con más altos impuestos. En términos porcentuales, los ingresos tributarios pasaron del 5.7% del PIB, 14.5% del PIB, en el año 2012. (ver: Meneses, 2014: 48) Entre el año 2007 y el 2012, el gobierno de Correa impulsó 4 grandes reformas tributarias que buscaban incrementar los ingresos del Estado, así como disminuir la dependencia de la renta petrolera. A pesar de que lo primero se logró, los indicadores económicos muestran que lo segundo no fue tan efectivo. La dependencia de la renta petrolera mantiene al Ecuador como uno de los países más vulnerables de la región (Meneses, 2014). En el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2015, la presión fiscal o tributaria pasó, de acuerdo a cifras del SRI, de un 12,5%, al 21.7% del PIB. A partir de 2008, gracias al nuevo marco normativo impulsado desde finales de 2007, esta presión se incrementó. desde 2008, se pasó de una presión fiscal del 15.7% al 21.7, es decir, un incremento 6 puntos porcentuales. Esto representa un 100% más de lo que se había incrementado del 2000, al 2007. (OCAMPO, Heidi P., 2017, Notas de Reflexión, no. 45. Centro de Estudios Fiscales-SRI, pág. 7. Las Queja de las élites empresariales frente a estas nuevas dinámicas, no se harán esperar. Esta queja fue amplificada por la prensa que llegó a afirmar que este gobierno había impuesto 10 reformas tributarias en los primeros 7 años de gobierno.

⁸⁸ Los ambiciosos planes de inversión del gobierno, así como la expansión del Estado, significaron un déficit constante en las finanzas del gobierno. Este déficit fue cubierto con deuda externa, de orígenes distintos. La deuda con China, es tal vez la que más creció en todo el periodo. Esta habría pasado de 4.500 millones de dólares en 2009, a 8.100 millones en 2016 (BID, 2018)

motivación de la revolución no se habría cumplido: el cambio de la estructura productiva (BID, 2018⁸⁹).

6.2. Las élites empresariales frente a la emergencia de la Revolución Ciudadana

En los años previos al triunfo de Rafael Correa y la RC, las élites empresariales venían en un proceso de acumulación de poder económico y político. Uno de los temas que había venido constituyéndose en mecanismo de articulación fue la búsqueda de firmar un TLC con los Estados Unidos. Para esto, los líderes de las más grandes asociaciones empresariales de Quito y Guayaquil habían constituido el Comité Empresarial Ecuatoriano, como herramienta para la articulación de las élites empresariales y de las distintas asociaciones de producción.⁹⁰ Con este organismo, presionaron, sin mucho éxito a los distintos y debilitados gobiernos por acelerar las negociaciones con los Estados Unidos. El gobierno de Alfredo Palacio fue, como los anteriores, presionado. El argumento en este momento era fortalecer las relaciones con un socio que acaparaba el 50% de los productos ecuatorianos (Telégrafo, 2006/03/03). Pese a distintas formas de presión, los dirigentes empresariales no lograron que el gobierno firmara ningún acuerdo comercial.⁹¹ Difícilmente podría ser de otra manera, pues este gobierno estaba de salida y no estaba dispuesto a correr con esta carga política que implicaría y de hecho había generado muchas movilizaciones sociales.

Durante varios meses, los empresarios organizaron foros, seminarios, invitaron expertos, dialogaron con algunos indígenas, sin lograr nada al respecto. La amenaza constante de que el gobierno de los Estados Unidos en cualquier momento no renovara el ATPDEA, fue usada para presionar la firma del TLC. Sin este, afirmaban sus defensores y sin ATPDEA, se generarían olas *de desocupación en el País*'. (El Universo, 2006/07/09).

⁸⁹ De acuerdo al BID (2018: 46), del 2006, al 2017, la estructura productiva no mostró cambios significativos, las contribuciones más relevantes al crecimiento han venido esencialmente de algunos servicios (comercio, restaurantes y hoteles, así como servicios comunales, sociales y personales) y de sectores relacionados con la infraestructura (construcción, transporte y comunicaciones) (BCE). Es importante notar que a partir de 2015 la construcción ha decrecido.

⁹⁰ Los representantes de la Pequeña Industria de Guayas, representados por Renato Carló, manifestaron su rechazo a este tipo de actividades, al considerar que era “una burla a la inteligencia de los ecuatorianos”, A juicio del líder empresarial, lo que se buscaba era que la gente “diga sí al TLC, sin dar razones, con base en que puedan justificarse que están en lo cierto” (El Universo, 2006/03/29)

⁹¹ Los exportadores y representantes del CEE, así como de las CCG, CCQ, CIP, CIG, impulsaron marchas, conciertos populares, movilizaron trabajadores, hicieron campañas mediáticas, pagaron pautas comerciales para promover el acuerdo comercial. La mayor parte de estas campañas usaron el miedo como mecanismo de presión. En estas marchas y conciertos, se planteaba que, de no firmarse el acuerdo, los empleos de miles de trabajadores estaban en riesgo. Al suceder lo contrario, la demanda de trabajadores se incrementaría, así como se posibilitaría el ingreso al país de productos de mejor calidad y menor precio. Para un seguimiento de las distintas actividades llevadas a cabo por los empresarios, puede verse: (El Universo, 2006/03/21, El Comercio, 2006, 03/18; El Universo, 2006/03/18; El universo, 2006/03/29; El Universo, 2006/03/31; el comercio, 2006/04/24; el Mercurio, 2006/03/27)

Ahora bien, si en la búsqueda de un TLC con los EE.UU, las élites empresariales vieron su capacidad de influencia limitada, en otros campos ésta se expresó de manera contundente. Un primer hecho fue lo que denominó como Ley Huaquillas. A través de esta ley, de Marzo de 2006, se establecía un área de libre comercio en la frontera entre Ecuador y Perú. Para los grandes empresarios y algunos periodistas, esta zona legalizaba el contrabando. Un editorialista, llegó a llamar torpes a quienes aprobaron la Ley (Pablo Ortiz García, El Comercio, 31/03/2006). Hay que tener en cuenta que la declaratoria de esta zona se da en el marco de presiones que las élites empresariales venían desarrollando para que el gobierno de Alfredo Palacio entregara a las cámaras de la producción el manejo y control del sistema de Aduanas nacionales. En el mismo mes de marzo, los empresarios se declaran en “*Sesión permanente*”, para exigir al gobierno de Palacio, la privatización inmediata de la Corporación Aduanera del Ecuador. En tono desafiante, el presidente de la CCG, Eduardo Maruri, le comunicó al gobierno: “Señor presidente, espero que nos dé una cita para saber de su propia boca si desea que la CAE siga politizada o sea concesionada”. En el mismo tono desafiante, Maruri “Expresó que la CAE es como un cáncer que no se lo cura en uno o dos días”. De acuerdo con El Telégrafo, la intención de las cámaras de la Producción era presionar para que la concesión de la administración y parte de la verificación de mercadería, controlada por el Estado, pasara al manejo de empresas privadas. (El Telégrafo, 2006, 03/06; ver también: El Telégrafo, 2006/03/12).

Este tema se volvió a tratar el 23 de marzo del mismo año, y allí, en reunión con Alfredo Palacio, los empresarios exigieron cambios en la CAE. Allí, Eduardo Maruri ofreció al debilitado gobierno que, a cambio de la privatización, “El presidente recibirá el apoyo incondicional de los sectores productivos y podríamos volver a formar parte del Directorio de la Aduana”. La principal exigencia de las cámaras de la Producción es concesionar al sector privado el manejo aduanero. La dirección privada de esta función del Estado, contribuiría a acabar con la politización en el nombramiento de gerentes y de funcionarios (el Telégrafo, 2006/03/24, Ver también. El universo, 2006/03/24, El comercio, 2006/03/25, El Telégrafo 2006/03/26). Los trabajadores de la CAE, se opusieron a la iniciativa empresarial y realizaron un paro a fines del mes de abril (el Universo, 2006/04/27).

Volviendo al tema de la denominada Ley Huaquillas, la Editorial de El Telégrafo, se manifestó a favor de las críticas de los empresarios y afirmó que dicha ley era un regalo para el contrabando (El Telégrafo, 2007/03/27) La presión empresarial, en este caso tuvo éxito. Para el 29 de marzo, ya se habla de que el Congreso derogaría la Ley (El Diario, 2006/03/29).

Frente a la derogación, presionada principalmente por la CCG, el Congreso afirma que es el presidente quien debía derogarla, pues fue el presidente anterior el que envió el proyecto que aprobó el Congreso. (El Comercio, 2006/03/30). Eduardo Maruri, presentó 1000 firmas para respaldar la declaración de inconstitucional de la Ley Huaquillas. Las advertencias sobre el impacto económico para el fisco ecuatoriano hablaban de potenciales pérdidas por la declaratoria de la zona de libre comercio que podrían llegar a los 89 mil millones de dólares (El Universo, 2006/03/18, El comercio 2006/'03/30). Finalmente, la ley terminó por ser derogada por el gobierno.

Un segundo ejemplo de la capacidad de presión de las grandes Cámaras de la Producción del Ecuador y grupos de poder económico frente al gobierno de Alfredo Palacio, enmarcado en las disputas por el control de la política comercial y exterior tiene que ver con la poca autonomía del gobierno para designar a sus funcionarios⁹². Uno de los casos que más resaltó fue el de Jorge Illingworth, que fue nombrado por Palacio, a comienzos de Julio de 2006 como ministro de comercio. Desde el momento en que Jorge Illingworth fue nombrado, los empresarios dudaron de la posibilidad de que este tuviera buenas relaciones con el empresariado. Específicamente El Comercio expuso cómo “El nuevo ministro de comercio que fue vicepresidente de la CCG hasta el 2004 demandó a esa entidad por \$200.000 porque, según él, no se le reconoció la liquidación a la que como trabajador tenía derecho”. Alberto Dassun, Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y uno de los representantes del radicalismo neoliberal ecuatoriano consideró “una falta de tino (el nombramiento de Illingworth) por parte del presidente”, nombrar como ministro a “alguien que debe hacer de puente entre los sectores productivos y al mismo tiempo mantenga un juicio planteado contra una Cámara”. Por su parte, el presidente de la CCG y también de la Federación de Cámaras de Comercio, Eduardo Maruri, recordó que Illingworth renunció a su cargo de vicepresidente de la Cámara para postularse a la presidencia de ese gremio y no tuvo apoyo al quedar en

⁹² Los últimos meses del gobierno de Palacio estuvieron marcados por la inestabilidad en su gabinete El tema también tiene que ver con presiones de empresarios, particularmente de petroleras. La búsqueda de varios ministros, incluido el futuro presidente, de renegociar contratos petroleros llevó a que los empresarios constituyeran frentes comunes para sacar del paso a los funcionarios que proponían estas reformas (El Universo, 2006/07/08). Para el diario el Universo, el gobierno de Palacio se caracterizó por una tremenda inestabilidad. Entre marzo de 2005 y Julio de 2006, habrían sido cambiados 309 funcionarios. El periódico muestra que: “de acuerdo a este estudio, se ha detectado que 88 personas han manejado 22 instituciones claves del Estado, cuatro por cada una con un promedio de menos del mismo número de meses en sus cargos. También se diagnosticó que los ministerios con mayor inestabilidad han sido el de Gobierno, con 6 titulares, Economía con cinco; le siguen el de Energía, con cuatro y Bienestar Social, tres. El resto ha tenido dos titulares, excepto, los de Ambiente, Turismo y Agricultura. otras instituciones han mostrado inestabilidad, como Petroecuador, con siete cambios; Andinatel, siete; Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), seis y Pacifictel, cinco. (El Universo, 2006/07/14).

último lugar. En tono despectivo, afirmó que: ‘Ese es el reflejo de lo que es Jorge Illingworth en el comercio de Guayaquil’ (El universo, 2006/07/08).

Dos días después del nombramiento de Illingworth al frente de la cartera de Comercio, la oposición empresarial creció. La demanda que el nuevo ministro tenía con la CCG, era vista como un obstáculo para establecer “*una relación fluida con el ministro*”. Illingworth había trabajado en la CCG, por 22 años. Durante ese periodo fue prosecretario, secretario ejecutivo, cargo al que renunció para postularse a la presidencia en 2004 y perdió frente a Eduardo Maruri. Luego de su derrota, fue despedido⁹³. A pesar de que dirigentes de otros gremios consideraron la demanda como un asunto personal que no debía afectar las funciones ministeriales (es el caso de Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas) el Comité Empresarial Ecuatoriano, con la vocería de Roberto Aspiazú, anunció que la gestión que una comitiva realizaría la siguiente semana en Washington para buscar la reanudación de las negociaciones del TLC y la extensión de las preferencias Arancelarias, las adelantaría al margen del gobierno de Alfredo Palacio. (El Universo, 2006/07/10). En este mismo sentido, el diario El comercio difundió un comunicado de la CCG, que pedía explícitamente la destitución del nuevo ministro. De acuerdo con el diario, El gremio considera que no está a la altura del cargo. ‘No tiene la capacidad de conducir al Ecuador a nuevos acuerdos de libre comercio, ni hacer una gestión que realmente beneficie a la producción ni a la competitividad y, además, porque ha presentado una demanda laboral injusta, extemporánea y abusiva contra la institución’ (El Comercio, 2006/07/11)

Illingworth, intentó defenderse de las acusaciones, afirmando que

La verdad es que un funcionario con una trayectoria de 22 años en la Cámara de Comercio de Guayaquil no puede ser un incompetente. Hubo una liquidación laboral en la que discrepamos y esto no significa que todos los afiliados me hayan cercenado mi derecho a recibir la liquidación justa. Para eso están los Tribunales, para que juzguen quién tiene la razón y de ahí el valor que le doy la democracia” (El Telégrafo, 2006/07/13)

En el contexto de la crisis ministerial, tal como lo habían anunciado a mediados de Julio, los empresarios viajaron a los EE. UU, actuando como agentes estatales, sin la anuencia y consentimiento del Presidente, para intentar destrabar los diálogos sobre el TLC y la renovación del ATPDEA.⁹⁴ Ahora bien, el tono en el que plantean la negociación y el

⁹³ La versión de los dirigentes de la CCG, era que Jorge Illingworth había renunciado.

⁹⁴ Entre estos estaban Alberto Dassum, Roberto Aspiazú, del Comité Empresarial; José Eljuri, de la Cámara de Comercio de Quito, y Ricardo Estrada, de la Corpei. Los sectores con mayor presencia serían el de las flores, con 5 delegados, el Comité Empresarial Ecuatoriano, con 4 representantes, y los Industriales madereros con 2

objetivo de su viaje, es lo que llama la atención. Esta delegación planteó que en su viaje no necesitan la ayuda del gobierno, pues consideraban que “Esta es una iniciativa eminentemente privada y no necesitamos su ayuda”, comentó Alberto Dassum, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano”. Al siguiente día de estas declaraciones, la salida de Illingworth se materializó, y se mantuvieron las descalificaciones de parte de los empresarios, particularmente de Roberto Aspiazu, quien pidió a Illingworth que retirara la demanda ante la CCG. (El comercio, 2006/07/14). En medio de las descalificaciones de parte de representantes de la CCG, se llegó a afirmar “No sabe ni siquiera hablar inglés y pensamos que estas son barreras difíciles de superar en los momentos por los que estamos atravesando para desempeñar bien su cargo’ aseveró Javier Castro, vicepresidente de esta cámara (El Diario, 2006/07/14)

La “renuncia” de Illingworth, evidenció la capacidad de presión de la CCG y de las demás élites empresariales que secundaron las presiones para la destitución del ministro. La justificación del gobierno para “aceptar” la salida del ministro, mostró además la subordinación del mismo frente al poder de las élites:

Enrique Proaño, secretario de Comunicación, explicó que el régimen podría aceptar las **sugerencias** de las Cámaras de Comercio de Guayaquil para evitar discrepancias con este sector. ‘Que las cámaras sugieran una persona y tener un ministro que sea de consenso y que pueda comunicar fácilmente a los dos sectores y alcanzar objetivos que son del Gobierno y de los empresarios, esa sería una posibilidad que no se ha descartado” afirmó el delegado presidencial (El mercurio, 2006/07/2014).

Disfrazar de “sugerencia” lo que se manifestó explícitamente como una exigencia de parte de los representantes empresariales, es lo que resalta de lo expresado por el secretario de comunicación del gobierno y expresa la subordinación del mismo ante las disposiciones y criterios de las élites empresariales.

Una vez se produce la dimisión del ministro “defenestrado” por las élites guayaquileñas, estas manifestaron su complacencia. (El telégrafo, 2006/07/14). El tema del sustituto del nuevo ministro de Comercio se resolvió apenas el 26 de Julio y fue la nueva presidenta de la CCG, María Gloria Alarcón, quien anunció que el nuevo ministro sería Tomás Peribonio, que se venía desempeñando en la Corporación de Promociones de Exportaciones (Corpei) (El universo, 2006/07/27). El matutino de Portoviejo, publicó la siguiente nota titulada “Presidente nombra ministro con aval de empresarios”. En esta se informaba cómo “Palacio presentó al nuevo ministro la noche del miércoles durante una reunión con integrantes de la

Cámara de Comercio de Guayaquil, organismo que había solicitado la salida de Illingworth de esa cartera; sin embargo, no se oponen a la designación de Peribonio”. (El Diario, 2006/07/28).

Otros detalles hablan del alcance del poder instrumental de las élites para limitar la autonomía del gobierno, fueron revelados por el diario El Telégrafo así: “el miércoles de esta semana Palacio se reunió a puerta cerrada con el directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, presidido por Gloria Alarcón, y luego de ello se anunció a Peribonio como miembro del Gabinete de Estado. ‘No considero haber sido un puente entre los empresarios y el presidente, sino como parte de un grupo de diálogo’, comentó Alarcón” (El Telégrafo, 2006/07/28) A finales de agosto, pese al inicial regocijo con el nuevo ministro de Comercio exterior, las Cámaras criticaron su gestión, y pidieron que no fuera solo una “*figura decorativa*”. Exigieron compromisos reales del gobierno para llevar a buen término el TLC. (El Universo, 2006/08/24; 26-08-2006).⁹⁵

Un tercer ejemplo de las formas en que las élites empresariales manifestaron su oposición frente a las políticas del gobierno de Palacio se produjo tres meses antes del impasse con el ministro Illingworth, en el mes de abril. En este momento la discusión fue alrededor del tema de hidrocarburos. Alfredo Palacio, propuso renegociar contratos con las petroleras, con el fin de que el Estado pudiera acceder a mayores utilidades. Las élites empresariales y, por supuesto, las petroleras, formaron un frente común frente a la iniciativa gubernamental. Para estos, una renegociación de los contratos implicaría mayores demoras en la firma del TLC y establecería un clima de inestabilidad jurídica (El Comercio, 2006/04/19, El Telégrafo, 2006/04/19, El Telégrafo, 2006/04/21). En este momento, el ministro de gobierno, Felipe Vega, defendió las reformas a la Ley de hidrocarburos, pues esta tenía vacíos legales y, a su criterio, atentaba contra los intereses del país.⁹⁶ El ministro pidió a los empresarios no mezclar la reforma de la Ley de hidrocarburos con el TLC. Los empresarios, no obstante, interpusieron demandas de inconstitucionalidad frente a las reformas que impulsó el gobierno de Palacio para que el Estado recibiera más recursos por ingresos petroleros extraordinarios. Estas demandas fueron presentadas por representantes de las Cámaras de Industria y Comercio de Quito en defensa de las petroleras, alegando estabilidad jurídica y cumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado ecuatoriano. (El Universo, 2006/07/03).

⁹⁵ En el mes de Julio, otro episodio importante: - la CCG, se opone a reglamentar la actividad de terciarizadoras. Galo Chiriboga actúa como ministro de Trabajo de Palacio (El Universo, 2006/07/16)

⁹⁶ Sobre estas negociaciones se levantará el discurso de Correa

El gobierno defendió la medida argumentando, de acuerdo con el ministro de Finanzas, Diego Borja que; “Esta es una reforma de envergadura, el más grande cambio petrolero que se ha hecho desde 1978, y obviamente altera a muchos grupos de poder, a los cuales se les ha quitado 1.500 millones de dólares anuales”. Por su parte, Blasco Peña Herrera, de la CCQ, manifestó que el sector empresarial desistirá de la demanda de inconstitucionalidad contra dicha ley siempre y cuando se reforme, retirando su vigencia retroactiva (El Mercurio, 2006/07/04), lo que al final lograron imponer.

Un cuarto ejemplo corresponde a la oposición que las élites empresariales frente a un nuevo código de trabajo impulsado también por el gobierno de Alfredo Palacio. En este caso, que el gobierno buscó reorientar el tema de la contratación colectiva y disminuir la flexibilidad laboral en las relaciones laborales en el Ecuador. Bajo el título “La contratación colectiva es el ‘cuco’ para el sector empresarial”, el periódico El Comercio expuso el rechazo que los intentos de reforma de Palacio, generaba en los círculos de la empresa privada de élite. En el documento se cita a empresarios que deslegitiman las luchas de los trabajadores ecuatorianos y los responsabiliza del cierre de varias empresas en los años 90. Pese a esto, el mismo diario trae un recuadro que muestra la disminución progresiva de los conflictos colectivos (El Comercio, 2006/08/24, pág. 10). Los empresarios se oponen de este modo a la contratación colectiva y, contrario a esto, piden incrementar la jornada laboral hasta en 8 horas semanales. Para Gonzalo González, vicepresidente de la CCQ, “ese esquema es muy rígido y afecta a la productividad del trabajador”, se refería a una jornada de 40 horas semanales y al pago de recargos por horas adicionales, de hasta el 50%, (El comercio, 2006/09/07). Las reformas al mercado laboral tendrán que esperar al gobierno de Correa, que acaba con las terciarizadoras y reestablece algunos derechos perdidos por los trabajadores.

Los anteriores ejemplos, además de lo planteado ya en capítulos anteriores, describen muy bien la manera en que las élites ecuatorianas actúan como un poder cuasi estatal, como un poder que configura al Estado. Ellas se abrogan el derecho de vetar ministros y este veto, es aceptado por las autoridades gubernamentales. Se abrogan, así mismo, la potestad de vetar leyes y estas leyes terminan siendo desechadas por las élites políticas. Se aglutinan alrededor del poder transnacional, buscando mantener “la estabilidad jurídica”, en contra de los intereses nacionales. Cuestionan los derechos laborales y responsabilizan a los obreros del quiebre de empresas. La visión de país, que funciona, es la que estas élites imponen, como la mirada legítima.

A mediados del mes de agosto de 2006, la CCG, organizó el primer debate de candidatos a las elecciones.⁹⁷ Los invitados fueron León Roldós, candidato por la Alianza Red Ética y Democracia y la Izquierda Democrática (RED-ID); Rafael Correa, Alianza País; Cynthia Viteri, Candidata por el PSC y Luis Macas, de Pachakutik, con la moderación de Andrés Oppenheimer. De este debate llaman la atención dos acontecimientos. En primer lugar, la manera en que fueron seleccionados los candidatos que participarían. De acuerdo con el diario El telégrafo, la CCG, le preguntó a 1200 de sus socios ¿Qué candidato o candidata presidencial le gustaría escuchar? (El Telégrafo, 2006/08/15). El segundo es que la promoción mediática del mismo se hizo a partir de un slogan, muy “empresarial”: Se busca un gerente para Ecuador”. La publicidad se complementaba diciendo: “Ecuador es una empresa y uno de ellos quiere ser gerente general. ¿A cuál piensa contratar?”. Dos candidatos no estuvieron muy a gusto con esta forma de presentar el proceso electoral. Para León Roldós “La sociedad es más compleja como para tratarla como una simple empresa”. Rafael Correa afirmó que “gobernar y gerenciar no son equivalentes”, el debate le permitió a Correa mostrar sus dotes como orador, y su carácter polémico. (Semanao líderes, 2006/08/28).

Los diarios ecuatorianos, reseñaron el debate en los siguientes días. De estas reseñas, podemos constatar cómo el debate sirvió a Correa para mostrar algunas de sus propuestas políticas (que habían sido delineadas en los meses pasados con los líderes de Alianza País, así como su visión de país y de la política. El escenario sirvió también para que los empresarios contrastaran estas miradas y propuestas con lo que aquellos deseaban y querían. Mantenían así su lugar de jueces de la política ecuatoriana. Lo que no calculaban era que quien iba a ser

⁹⁷ A comienzos del mes de agosto, Correa presentó a su candidato a la vicepresidencia, Lenin Moreno. De acuerdo a El Universo, Correa “dijo que había escogido a Moreno para completar su binomio porque proviene de una provincia olvidada (Napó) y pertenece a uno de los grupos más postergados de la sociedad: los discapacitados. Por último, agregó ‘porque es un motivador profesional y lo que más necesita nuestro Ecuador es recuperar la fe’. Moreno no tiene una fuerte relación de amistad con el presidenciable. Lo conoció a principios de año. Su nombre constaba en una lista de otros precandidatos como el presentador de televisión Freddy Ehlers; el general René Vargas Pazzos, dirigente del movimiento bolivariano Alfarista; y Alberto Acosta, integrante de su buró político nacional”. En esta presentación, también estuvieron Manuela Gallegos, de Alianza Democrática Nacional; Gustavo Larrea, del Movimiento Iniciativa Ciudadana y Francisco Andino, del Movimiento Blanco. En el reporte de prensa se comenta cómo el candidato vicepresidencial, tiene 53 años y está casado. Es Licenciado en administración pública por la Universidad Central del Ecuador, Es experto en motivación y humor para la vida y el trabajo. Fue director nacional de Discapacidades y dirigente de la Cámara de Turismo de Pichincha” (El Universo, 2006/08/06, pág. 2.). Todo indica que la relación con el vicepresidente, luego presidente del Ecuador, fue, desde el principio más bien instrumental por parte de Correa. Una vez Correa consolida su poder, su segundo vicepresidente será alguien más afín y familiar, como es el caso de Jorge Glas, con quien Correa tenía una relación de vieja data. Hay muchos indicios para considerar, además, que la “elección” de Lenin Moreno, como candidato presidencial en 2017 por parte de Correa, partía de que éste podía ser instrumentalizado para continuar en el poder “en cuerpo ajeno”. Pero, había muchas rencillas larvadas en el interior de los funcionarios de Correa. Estas explotan, una vez Moreno logra la presidencia.

presidente, buscaría hacer realidad de manera más bien fiel a la propuesta, la transformación del Estado ecuatoriano y las relaciones entre el gobierno y las élites económicas.

Una vez elegido Rafael Correa, el 26 de noviembre de 2006, las élites empresariales manifestaron sus consideraciones frente al nuevo gobernante. Una de las primeras en exponer su lectura del nuevo mandatario fue María Gloria Alarcón, quien, pese a reconocer diferencias con el presidente electo, manifestó sus esperanzas en que todo podía cambiar. Así, afirmó que “... Es cierto que muchos de los lineamientos del presidente electo no coinciden con los conceptos empresariales. Pero ahí tenemos coincidencias con Correa. Además, hay algunos temas que, si bien no hay coincidencia total, podemos trabajar para un consenso”. Los temas en los que Alarcón, encontraba coincidencia eran, en primer lugar, la eventual reducción del IVA: “Claro que él lo enfoca más desde los social, para que los pobres paguen menos impuestos. Pero para nosotros es un incentivo directo al consumo y por ende a dinamizar a los sectores productivos. También ha hablado de la flexibilización laboral. Aunque no coincidimos en todo, hay muchos puntos de negociación interesantes”. Frente a las propuestas de incrementar aranceles, Alarcón consideró que “las barreras arancelarias ya no se usan. No es lógico ir contra la corriente mundial. Debemos aprender de las buenas experiencias de otros países que se han desarrollado con el aperturismo comercial. No olvidemos que también se habla de bajar aranceles para materias primas y bienes de capital”. En el mismo marco ideológico, la dirigente empresarial pidió disminuir los subsidios y se opuso a la regularización de los depósitos bancarios por ser un freno al libre mercado. Complementó diciendo que: “Pero más allá de estar o no de acuerdo considero que no es práctico. Se deben buscar incentivos y no castigos. Así, podemos repatriar muchos más capitales que con regulaciones coercitivas”. Frente a la renegociación de los contratos petroleros, manifiesta rechazo y temor. Para la dirigente empresarial, lo que debía hacer el gobierno era atraer capitales, y no ahuyentarlos. María Gloria Alarcón, manifestó su esperanza de que el nuevo gobierno poco a poco se diera cuenta de la realidad del manejo económico; realidad que no podría resistir. A partir de esto, esperaba que el nuevo gobierno se ajustara a las estructuras de poder y al marco ideológico dominante. Así, manifestó que “Yo parto de una premisa clara. Cuando un candidato llega al poder, muchas cosas cambian. Al llegar a Carondelet se percatan de qué cosas son viables y cuáles no. Los empresarios no pueden esperar tres meses por el sistema económico del nuevo presidente. Yo recomiendo continuar participando activamente y seguir haciendo país”. (Semanao Líderes, 2006/12/04:3).

En un sondeo que realizó el diario El Comercio, la mayor parte de los líderes empresariales manifiestan su incertidumbre (El Comercio, 2006/12/05). La Revista Vanguardia, publica, el 11 de diciembre una nota de María Gloria Alarcón, en la que plantea que “el camino del país y de Rafael Correa es el del Consenso. La Cámara de Comercio de Guayaquil, pide un voto de apoyo al gobierno electo. El éxito de Correa surgirá con la gestión de todos”. En este documento, invita al gobierno a buscar acercamientos con EE. UU, en materia comercial, pues es el primer socio comercial. Así no se llame TLC, pues el presidente electo, ha manifestado que no firmará un tratado de este tipo. Invita al Consenso.

No sólo del Gobierno con los sectores empresariales, sino con los grupos sociales, trabajadores, grupos étnicos y gobiernos seccionales. Y la mejor manera de trabajar es empezar por las cosas donde todos estamos de acuerdo... Lo que proponemos es que se le dé a Correa un apoyo sin condiciones. Está claro que muchos de sus pronunciamientos son contrarios a lo que profesamos, pero él ya es el mandatario electo será presidente a partir del 15 de enero. (Vanguardia, 2006/12/11 pág. 29)

Pese a este llamado al “apoyo sin condiciones”, la dirigente empresarial considera que las votaciones no fueron todas pro Correa, pero si pro cambio. Y la Cámara apoya el cambio. Ahora bien, manifiesta sus orientaciones ideológicas:

Puede ser que se vincule a los sectores productivos con los partidos, porque las Cámaras como tales pudieron haber tenido un alineamiento con ciertas posiciones en las que creemos: la libre empresa, el derecho y respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica. Por eso, cuando hay políticos que apoyan eso puede concluir que hay una afinidad. Y es obvio que nos hemos sentido más distanciados de aquellos que promulgan lo contrario. Sin embargo, si mañana aparecen nuevos liderazgos en defensa de lo que creemos, nos acercarnos a ellos, pero no seremos rueda de coche de ellos, ni del PSC, a pesar de que hubo evidentes vínculos con León Febres Cordero, por su pasado industrial, y los hay con el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, principalmente por su gestión administrativa. (Vanguardia, 2006/12/11 pág. 30).

La incertidumbre de los empresarios, pero también la confianza en su propio poder y en el “peso de la realidad”, que haría que el gobierno de Correa poco a poco fuera dándose cuenta de lo que podía hacer y lo que no, no contó con el creciente apoyo popular a las primeras decisiones políticas, económicas y sociales del nuevo gobierno.

En el momento en que Correa recibe credenciales como nuevo presidente, los empresarios se mantienen a la expectativa. El nuevo gobierno, es realmente nuevo en su constitución interna y en su orientación política e ideológica, tal como hemos visto. Serán, poco a poco los

empresarios los que se adaptarán a la nueva realidad: Un gobierno que busca una autonomía, no sólo relativa, sino absoluta, frente a los grupos de presión e incluso frente a la sociedad civil en su conjunto. Algunos empresarios se refieren a medidas específicas, pero en un primer momento no se evidencia la magnitud del cambio que buscará el gobierno del nuevo presidente, en la estructura de poder ecuatoriana. Blasco Peñaherrera Solah, por ejemplo, auguró crecimiento económico, pero también efectos negativos de una eventual declaración de moratoria a la deuda, anunciada por el gobierno (El Telégrafo, pág. 6, 2006/12/02).

Mauricio Pinto, le apuntó a la necesidad de reorientar a la derecha ecuatoriana.

Responsabiliza al gobierno de Alfredo Palacio de la no firma del TLC, de no haberse comprometido con el mismo. Cuestionó las pretensiones del presidente electo, de limitar el mercado, fortalecer el mercado interno y sustituir al mercado de los Estados Unidos por otros mercados, como el europeo o el Mercosur. No obstante, manifestó también su interés en participar de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. (Semanao Líderes, pág. 3, 2006/12/25)

6.3. El nuevo gobierno en ejercicio: el combate contra el Estado corporativizado⁹⁸

En 2007, ya en el gobierno Rafael Correa, una de las primeras disputas que mostrará la capacidad del nuevo gobierno de imponer sus decisiones en contra de la voluntad de las élites empresariales (y de otros sectores sociales), será por el tema del control de las Aduanas Ecuatorianas, que había cedido el gobierno de Alfredo Palacio al sector privado, bajo la presión del empresariado guayaquileño. Rafael Correa revertirá esta cesión del sistema de Aduanas y, junto con el Congreso, un primer paso fue pedir la expulsión de las compañías verificadoras (El Comercio, Pág. 10. 2007/09/19). Así mismo, gestionó la exclusión de las Cámaras de la producción de la CAE. Antes de esta medida, el directorio de la CAE estaba integrado por representantes de distintos sectores, entre ellos de las cámaras de la producción, con voz y voto. El primer paso de Correa fue quitarles el voto. Los empresarios guayaquileños defendieron, sin éxito, su participación en este organismo, argumentando que “Las cámaras son un órgano técnico y contralor de políticas aduaneras. El sector privado necesita tener una participación y una voz y voto en el Directorio”, afirmó Rubén Morán, de la CCG. Así mismo acusaron al gobierno de afectar la seguridad jurídica, al terminar prematuramente los contratos con las empresas verificadoras (El comercio, pág. 3,

⁹⁸ La manera en que Correa combatió el corporativismo, un tanto sin distinguir entre actores de élite y bloques populares, ha sido analizada ya en apartados anteriores. En este apartado, sólo referenciamos la manera en que Correa, en la búsqueda de fortalecer la autonomía del Estado, particularmente del Estado central y, para ser más preciso, del ejecutivo, fue desplazando progresivamente a las élites empresariales que ocupaban ciertas instituciones Estatales o constituían organismos “público-privados.

2007/09/20). De nada valieron los cuestionamientos. De hecho, los primeros resultados parecieron darle la razón al gobierno, pues pronto el nivel de recaudación se incrementó y, en un mes, mostraba un crecimiento del 11.2%. (El Universo, pág. 8, 2007/10/21)

Los industriales e importadores de Cuenca, contribuyeron a legitimar la expulsión de las compañías verificadoras. El hecho había significado para estas, “de acuerdo a criterios técnicos”, ahorro de tiempo y, por tanto, disminución de Costos. (El Tiempo, pág. 5, 2007/11/02). Este apoyo de las élites empresariales cuencanas, evidencia también una tendencia a lo largo del gobierno de Correa: el vínculo más fuerte que establece Correa con los empresarios se dará, precisamente, con las Cámaras de la producción del Azuay y de Cuenca.⁹⁹

Este primer evento y la manera en que el gobierno resistió las críticas de las élites empresariales se posicionó poco a poco como la característica central de las relaciones entre Rafael Correa y las élites empresariales. El gobierno se encargó, una y otra vez, de demostrarle a las Cámaras de la producción, sobre todo, aunque no exclusivamente de Guayaquil y Quito, que era él quien tomaba las decisiones y aquellas no podían vetarlas, como ocurría con los anteriores gobiernos.

Como parte de esta “guerra de posiciones” adelantada por el nuevo gobierno, para descorporativizar al Estado, un segundo escenario que Correa buscó ocupar fue el de la Comisión de Tránsito de Guayas, agencia pública en la que tenían puesto, con voz y voto tanto la Junta Cívica de Guayaquil, como las Cámaras de la Producción de esta ciudad. De este modo, pidió al Tribunal Constitucional la exclusión de estas organizaciones privadas de dicha institución.¹⁰⁰ A juicio del gobierno, esta participación violaba el derecho a la igualdad. A pesar de la resistencia y las críticas de las élites económicas de Guayaquil, el Tribunal le dio la razón al gobierno. (El Comercio, pág. 6, 2007/10/24). El presidente de la Cámara de Acuicultura, César Monge, reconoció el objetivo del gobierno, así como Carlos Estrada, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, manifestaron que el trato recibido por el gobierno

⁹⁹ De hecho, para el periodista y Ex asambleísta Guayaquileño Roberto Baquerizo, desde un comienzo las élites cuencanas y del Azuay habrían gozado de mayor empatía con el gobierno de Rafael Correa y, por tanto, habrían obtenido ventajas en procesos comerciales y contractuales con el gobierno (Entrevista, 27 de agosto de 2014). La misma opinión es compartida por la columnista del periódico El Universo, promotora del liberalismo económico, vinculada a la fundación El Cato, Gabriela Calderón. La importación de ciertos productos, como automóviles, que el gobierno impulsó durante un buen tiempo, parecía no afectar a los Cuencanos, comentó la columnista (Entrevista, 29 de agosto de 2014)

¹⁰⁰ Correa defendió el pedido de inconstitucionalidad de la participación del sector privado en este organismo, pues consideró que con esto, “se acabó el botón de los socialcristianos en el organismo, en la Junta Cívica y en las Cámaras de la Producción de Guayas. (El Telégrafo, pág. 2, 2007/10/28)

no era equitativo, pues “la representación indígena y grupos de trabajadores estaría en la misma situación de corporativismo privado” y, esperaban, estos no recibirían el mismo trato. (Ospina, 2009).

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), fue un tercer escenario de esta lucha entre el gobierno contra la ocupación privada y la presencia de los empresarios en algunas instancias que el nuevo gobierno consideraba debían ser controladas por el Estado, pues, como muchas veces lo planteó Rafael Correa, la política exterior, incluida la comercial, era responsabilidad del Estado y no de los agentes privados. El mismo mes de octubre logró que este organismo, en el que el gobierno tenía 6 delegados, determinara el incremento de aranceles para productos que consideraron no esenciales o que competían con producción nacional. Los empresarios además de que tenían un delegado menos que el gobierno, perdieron la partida pues Patricio Donoso, de la Cámara de Agricultura y al mismo tiempo, presidente del CEE, votó a favor de la iniciativa del gobierno.¹⁰¹ (El Comercio, pág. 11, 2007/10/25). A partir de este momento, el COMEXI, aprobará todas las medidas del gobierno.

A partir de estas disputas que Rafael Correa desarrolla por incrementar la autonomía del gobierno, en instituciones de regulación claves para el desarrollo de políticas estatales, así como a partir de las políticas económicas y comerciales que impulsa, el gobierno logrará dividir a las élites empresariales, como veremos más adelante.¹⁰² Muchos empresarios se

¹⁰¹ Patricio Donoso, por su parte, fue objeto de recriminaciones por parte de la prensa. Le cuestionaron: “¿Cómo se puede, por un lado, estar a favor de una medida proteccionista y, por el otro, pedir la extensión de las preferencias arancelarias con EE: UU?”. A lo que el ministro responde: “Estamos pidiendo la extensión del ATPDEA, porque son productos de exportación al mercado estadounidense. Así no se pagarán impuestos para ingresar. Es exactamente lo contrario a lo que se hizo con la subida de aranceles en los productos que se importan en Ecuador. No hay contradicción alguna. El periódico lleva más allá el cuestionamiento: ¿A quién representa el Comité Ecuatoriano Empresarial (CEE), del que UD es su presidente? Y Donoso responde: A las Federaciones de Cámaras de la producción del país. Está representando todo el sector productivo del Ecuador. El periódico interroga si el empresariado está dividido. Donoso responde: “No. Hay absoluta unión entre todos. De tal manera que todos hemos pedido al Gobierno que no se instrumente este tipo de medidas, porque en términos prácticos significa subir el precio de los productos que la gente compra, con este aumento de los porcentajes de aranceles. (El Comercio, pág. 14: 2007/10/28). La contradicción, era evidente, pero manifestará las dos respuestas de las élites empresariales. Por un lado, las Grandes de Comercio de Quito y Guayaquil, serán el brazo ideológico del empresariado defensor del libre comercio y la libre empresa y, en general, de la economía de mercado. Por el otro lado, los grupos de poder económico y grandes empresarios del sector de la acuicultura, agroempresarial, construcción y el mismo comercio, usufructuarán los réditos económicos que la Revolución Ciudadana les proporciona o les facilita.

¹⁰² Además de los comentarios de la Columnista Gabriela Calderón y del periodista Rodolfo Baquerizo, el periodista “Luis Eduardo Echeverría (Lolo Echeverría), jefe de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Quito, manifestó a comienzos de septiembre de 2014 que este era, tal vez, el mayor logro del gobierno de Correa en contra del empresariado ecuatoriano. Haber logrado su división. Esta opinión fue compartida también por Blasco Peñaherrera quien afirmó que el gobierno había logrado comprar, a través de prebendas a ciertas cámaras de producción, que más que organizaciones empresariales, eran membretes, sin representados (Entrevista Blasco Peñaherrera, 23 de junio de 2013)

lucrarán con las medias proteccionistas, mientras el brazo ideológico del libre cambio empresarial, las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, particularmente, condenarán, por ineficiente, las medidas del gobierno.

La disputa de Correa en contra de la participación de agentes privados en instituciones públicas, continuó en noviembre de 2007. En este mes se hizo pública la intención de Rafael Correa de sacar a los privados de otras agencias claves en la definición de políticas públicas. A parte de COMEXI,¹⁰³ estuvieron en la mira CONARTEL, (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión) y el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (CNT). La salida de los empresarios de estas instancias de gobierno las buscó Correa a través de la declaración de inconstitucionalidad de la participación de los privados en estas agencias. Para Correa, “sólo bajo la lógica de los grandes grupos de poder es que se puede permitir que las instituciones de control que existen en el país estén integradas por los mismos sectores a los que se quiere controlar”. Esta crítica fue compartida por los directores tanto de Conartel, como de Comexi, en este momento delegados de Correa.¹⁰⁴ Por su parte, María Gloria Alarcón, argumentó que la única voz que Correa quería escuchar era la de él mismo. Álvaro Maldonado, presidente de la Federación Nacional de Exportadores, “lamentó la posición presidencial y consideró que el Consejo de Comercio Exterior es un órgano de diálogo, de comunicación y de participación de algunos sectores como el industrial, agrícola, comercial, exportador y camaronero” (El Universo, pág. 5, 2007/11/07).

Como complemento de las medidas anteriores, en diciembre del mismo año, Correa anunció que el Estado no daría más dinero a fundaciones privadas. Los ejemplos que usó Correa en este caso fueron “La Fundación Aeroportuaria de Guayaquil y la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que reciben recursos del Estado para brindar un servicio. Agregó que “no pueden existir fundaciones con leyes propias que reciban recursos del impuesto y que no rindan cuenta a nadie... Esa plata la debe administrarla el Ministerio de Salud, que es el sector de la salud nacional y de ahí vamos a apoyar a esas fundaciones sin fines de lucro que

¹⁰³ La de la salida de los privados de esta institución se formalizó luego de que el TC, tomara la determinación de declarar inconstitucional la participación de estos en el organismo. El presidente de la CCQ, declaró que la decisión del TC, era inconstitucional, pero declaró no estar sorprendido. (El Universo, pág. 5, 2008-07-02). Sin embargo, a mediados de noviembre, la exclusión de los empresarios se volvió a revisar y se permitió su participación en el organismo, con voz, pero sin voto. Patricio Donoso y Roberto Aspiazú, celebraron la medida. Manifestaron que sin la información que estos aportan, no podría desarrollarse políticas adecuadas de desarrollo comercial (El Comercio, pág. 8, 2008/11/10)

¹⁰⁴ El tema de la participación de empresarios privados en CONARTEL, con esto, quedó congelado hasta mediados de 2008, cuando se formalizó el pedido de salida de los privados de éste organismo de vigilancia de la radiodifusión y la televisión ecuatoriana. Para Correa, la participación de privados los hacía jueces y parte en el proceso de vigilancia.

contribuyen con la salud nacional’, pero que deben contribuir articuladamente y no se crean islas privilegiadas... En esta dirección enfatizó que se tiene que regularizar, si quieren tener ONG “que pongan de su plata”, si el Estado tiene que poner se tendrán que articular con las políticas nacionales de salud ‘Aquí va a mandar el país, el Gobierno Nacional, elegido democráticamente, no unos tres o cuatro pelucones’, (El Telégrafo, pág. 3, 2007/12/09, el subrayado es nuestro). Tal como hemos mencionado ya, para Correa, la representatividad electoral se establece, como el fundamento de la legitimidad de la toma de decisiones y de la autonomía frente a otros actores sociales y políticos. Los privados y las organizaciones sociales que trabajaran con el gobierno debían seguir los lineamientos de éste, para recibir recursos.

Al día siguiente, Jaime Nebot salió en defensa de las fundaciones y califica las medidas planteadas por Correa como un ataque a Guayaquil y convocó a “la ciudadanía a reaccionar con toda su fuerza” (El Comercio, pág. 20, 2007/12/10, El Universo, pág. 4, 2007/12/10). En Quito, algunos sectores del Cabildo, también se pronunciaron sobre la medida, particularmente Paco Moncayo, en este momento, alcalde de la ciudad. Moncayo defendió la participación de las corporaciones como un modelo de gestión novedoso y eficiente que había contribuido al desarrollo urbano en las más importantes ciudades del mundo. En tal sentido, pidió que el tema fuera tratado por la Asamblea Constituyente. No obstante, Alberto Acosta era también crítico de la participación de las fundaciones en la gestión de lo público. (el comercio pág. 15, 2007/12/11).

Articulado con la defensa de las fundaciones privadas en la gestión de lo público, el periódico el Universo publicó un “reportaje” titulado “Fundaciones ejecutan las obras en la ciudad”. Allí, el periódico muestra la participación de estas en la gestión de obras y espacios públicos, particularmente en Guayaquil, y las cifras de su sostenimiento, así como la manera en que se ejerce control sobre las mismas. “Todas las fundaciones, coinciden sus gerentes, tienen auditorías internas, externas, del Municipio y de la Contraloría. También tienen techos para los sueldos de gerentes, que están entre 3.000 y 4.100 dólares” (El Universo, pág. 2, 2007/12/11). Para fines de diciembre, el gobierno, no obstante, ya no habla de eliminación de fundaciones, sino de su reglamentación. La autora de este cambio en la mirada del gobierno fue Nathaly Cely, en ese momento, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social. (El Tiempo, pág. 1, 2007/12/20) y uno de los pocos canales más o menos eficientes, de comunicación que tuvieron los empresarios con el gobierno de Correa, en distintos momentos de sus mandatos.

No obstante, lo anterior, la campaña de Correa por limitar el poder instrumental de las élites empresariales continuó a comienzos de 2008. A la CEA, COMEXI, y CORPEI y CONARTEL, se sumó la disputa por el control del Comité Eléctrico, en el que tenían puesto las Cámaras de Comercio, Industrias y Pequeña Industria de Guayaquil, así como a los representantes del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (El Universo, pág. 1, 2008/02/04). Pese a que la iniciativa de excluir a los privados fue del gobierno, el periódico El Universo, reportó el hecho, más como renuncia de las cámaras que como decisión de parte del gobierno. (El Universo, pág. 5, 2008/02/05). De este modo, poco a poco el gobierno buscó ampliar y/o recuperar el control del Estado en distintas instancias relacionadas con el desarrollo y ejecución de políticas públicas, así como en instancias de control y vigilancia.

En este marco de confrontación entre el gobierno y los empresarios por algunas instancias de control y construcción de política pública, el primero se vio favorecido por una iniciativa del congresista de la UDC, Diego Ordoñez. Este propuso, en 2007, una ley que estableció la no obligatoriedad para empresarios de afiliarse a las cámaras de comercio. Esta iniciativa fue criticada por representantes de distintas cámaras de comercio e inicialmente no prosperó, pero sirvió para que el diputado se ganara la antipatía de los directivos de las Cámaras de Comercio. (El Telégrafo, 2007/11/10). La iniciativa del disputado Ordoñez estaba fundamentada sobre la consideración de que la obligatoriedad de la vinculación para todos los empresarios servía para que los directivos hicieran “campañas con la plata de los afiliados”.

Este tema es retomado por Correa, en 2008, cuando envió una solicitud formal al TC, de declarar inconstitucional la obligatoriedad de las empresas de afiliarse a las cámaras. La iniciativa, que antes no había prosperado, generó en este momento mayor preocupación por parte de los afectados. “Por eso (Afirma Vanguardia), se han venido reuniendo, tienen citas para esta semana y anuncian gestiones y comparecencias ante el TC. ‘Es el único modo en que podemos defendernos’, dice Eduardo Marriott, presidente del Colegio de Médicos de Guayas. Por su parte, Roberto Aspiazú considera que el tema no es tan importante y que las más afectadas serán las Cámaras pequeñas. En general, los más inconformes con la decisión e Correa, son los representantes de gremios profesionales (Vanguardia, pág. 24, 2008/01/28). Hasta Emilio Palacio, se pronunció a favor de la no obligatoriedad de la afiliación a las Cámaras. Estas habían sido usadas por los políticos, particularmente por el PSC y seguían usando a estas organizaciones. Para Palacio, además, la obligación de afiliación contradice la libertad de asociación (El Universo, pág. 6, 2008/02/28).

Las anteriores iniciativas fueron algunas de las estrategias usadas por el gobierno para limitar el poder privado, al tiempo que, para fortalecer el poder gubernamental del Estado, que es asumido por Correa, como el representante del interés general. Esta confrontación tendrá otras manifestaciones. Una que nos parece central, es el tema de la legitimidad de la acción del gobierno en distintos escenarios. El marco de la Asamblea Nacional Constituyente será usado por los Empresarios para buscar limitar las aspiraciones del gobierno de incrementar su autonomía. La misma legitimidad del proceso constituyente, será cuestionada por las élites empresariales. El gobierno, sin embargo, logrará constituir en estos procesos, el poder suficiente para imponer la mayor parte de las medidas de política económica, tributaria, comercial, que considera necesarias para el cambio de la estructura productiva del Ecuador. Esto lleva a una reconfiguración del poder empresarial ecuatoriano, tal como se intenta mostrar a continuación.

6.4. La reconfiguración del poder empresarial ecuatoriano en el marco del Proceso Constituyente

Una de las primeras medidas llevadas a cabo por Rafael Correa, una vez en el poder (el 15 de enero de 2007), y en respuesta a las demandas de varios sectores sociales fue, como en Bolivia, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera reformar al Estado y la estructura política y, se esperaba, económica del país. Los empresarios no estuvieron al margen de este proceso y buscaron posicionar, sin mucho éxito, sus demandas y perspectivas ideológicas y económicas. Para buscar su propia articulación, los empresarios desarrollaron un encuentro a fines de agosto, denominado “I Encuentro Nacional de la empresa privada” en el que dieron a conocer un documento titulado *Generando empleo en libertad* (El Universo, 2007-08-29-08). María Gloria Alarcón, en septiembre de 2007, siendo presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y vicepresidenta del CEE, defendió este documento (que fue presentado, además a Lenin Moreno), como la propuesta de los empresarios de los temas que consideraban centrales para ser discutidos por la Asamblea Constituyente. Dentro de estas se destaca la defensa de la propiedad privada y de la libertad de empresa “como bases fundamentales para asegurar el crecimiento del Ecuador”. Desde esta mirada se le da al Estado “un rol esencialmente regulador, transparente y eficiente, que contribuiría a la construcción de un sistema democrático que fortalezca la institucionalidad y separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial”.

La difusión de este documento en septiembre de dicho año se dio como respuesta a la crítica de un editorial del diario El Comercio en la que se acusa al empresariado de “guardar silencio” frente al proceso constituyente. Para Alarcón, no era correcto “... afirmar que el sector empresarial ha mantenido un extraño silencio o que se ha manifestado con indiferencia o inercia, coadyuvando al escenario político actual”. Agregó además que, “... ciertamente es aventurado manifestar que al igual que los viejos políticos, optamos por disfrutar del presente sin que nos importe el mañana. Nada más alejado de la verdad. Precisamente porque nos preocupa el futuro y la posible implantación de un sistema económico centralizador y cerrado que coarte la libertad y la iniciativa privada, es que organizamos el referido encuentro”. Ahora bien, la líder empresarial aclaró que los empresarios no eran opositores políticos, sino “... más bien... enérgicos promotores del sistema de libre empresa en el marco de una sólida democracia, como el mejor camino por conseguir un desarrollo sostenido y sostenible” Como promotores de la libre empresa y frente al escenario de la ANC, destacó que “el Comité Empresarial Ecuatoriano ha desarrollado una campaña por radio y televisión, en apoyo a la dolarización, el empleo y la seguridad para justamente posicionar estos temas en la opinión pública de cara a la próxima asamblea constituyente. Además, a inicios de este año esta y otras cámaras presentamos a la Comisión del Conesup nuestras propuestas de reformas constitucionales” (El Comercio, 21-09-2007).

De este modo, las élites empresariales desarrollaron, articuladas y/o fragmentadas, distintas actividades e iniciativas que pretendían influir el desarrollo del proceso político liderado por el nuevo gobierno. Así, los empresarios disputan la orientación política y económica del país, a través de propuestas constitucionales y estrategias mediáticas, que buscan construir un ambiente propicio para la recepción de la lectura empresarial del Estado y la manera en que esta debería ser incorporada en la nueva constitución. Llama la atención que la representatividad empresarial está fundada sobre un elemento que sería extrapolítico. El poder económico se establece como suficiente fundamento para la búsqueda de participar de la constitución del orden político.

El contexto de la Constituyente se caracterizó así, por una activa visibilidad de los líderes empresariales. Un reportaje de la revista Vanguardia detalla particularidades de las relaciones entre los empresarios y el gobierno. Bajo el sugerente título de “*la guerra de Trincheras*”, se cuestiona “¿Es el presidente hostil a los grandes empresarios? ¿Son ellos aliados de la oposición? Los discursos entre los gremios y el gobierno están cruzados. Y esto afecta la economía”. El reportaje cita a Roberto Aspiazú, para quien, la situación frente al nuevo

gobierno era de “incertidumbre e inquietud y suspicacia”. A penas 8 meses después de iniciado el gobierno, los empresarios han “perdido protagonismo político y social, los partidos que antes parecían representarlos se han desmoronado, el Gobierno no comparte ni sus principios ni su agenda y están ante la casi certeza de que el movimiento del presidente tendrá la mayoría en la Asamblea. Es mucho para sectores que no tenían entrenamiento alguno en navegar a contracorriente”. El articulista continúa mostrando cómo desde la elección de Rafael Correa, en la primera vuelta, los empresarios le habían apostado a la tradicional estrategia del *lobby*, pero sin tener éxito. Los intentos de acercamiento se habrían intensificado desde el 26 de noviembre, cuando resultó electo presidente de la República. Y todo parecía ir bien, pues Correa les concedió una cita para el 26 de enero (de 2007) a las 16:00. En realidad, aclara el articulista, tuvo lugar a las 18:00 y duró apenas 40 minutos. De esta reunión, Renato Carló, recuerda que con él estuvieron Patricio Donoso, Sebastián Borja, César Monje, César Rohon y Sebastián Cornejo. La sensación que les quedó es que el presidente trató de calmar el juego: se mostró interesado en conocer los planteamientos para reactivar la producción y se comprometió a reunirse cada quince días con el sector productivo, pero esto nunca sucedió. Ha habido reuniones, reconoció en ese momento, para el reportaje, Sebastián Borja, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, con ministros como Raúl Sagasti, María Fernanda Espinosa, Mauricio Dávalos, Carlos Vallejo, Fernando Bustamante, Alexei Mosquera o con Lenin Moreno, vicepresidente de la República. Pero no con el presidente. ‘*con ellos nos ha ido bien*’ -afirmó Miguel Peña- presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil-, resaltó su receptividad a las ideas del empresariado, pero también entendió que ellos no tomaban las decisiones. Así las cosas, concluyó el documento: “... dos certezas básicas alberga el sector empresarial. El presidente tiene actitudes hostiles y su hoja de ruta se aleja de los postulados liberales en los cuales empresarios y comerciantes inscriben sus actividades”. Mauricio Dávalos, oportunamente citado en el mismo reportaje, comentó al respecto que más que animadversión entre los actores políticos habría

(...) una lucha política... parte del malestar que acusan los gremios se explica por la costumbre que tenían de imponer sus agendas a los gobiernos de turno... Es un cambio total porque antes se reunían con los presidentes y de allí salía lo que se hacía. Eso ahora no sucede y me apena que no alcancen a ver que las acciones del Gobierno, en materia económica y en la creación de infraestructura, están dirigidas a robustecer la producción privada. Si los empresarios resienten que el gobierno tenga una política de mejoramiento del capital humano, me parece una barbaridad. (Vanguardia, 30-01-2007)

La disputa, en este marco, es por la autonomía del gobierno, más que por las acciones mismas de éste o por el cambio en el modelo económico. A las élites económicas, pareciera no interesarles tanto las políticas del gobierno y los beneficios que pudieran obtener de estas¹⁰⁵, sino la autonomía con la cual Correa conducía al Estado y el lugar de poder del que estaban siendo desplazados. Lo que sienten los empresarios y será la constante a lo largo de los distintos mandatos de Correa, es que han sido desplazados del poder de dirección política del Estado que tenían, hasta antes de 2006. El argumento de la inestabilidad jurídica que el gobierno ha impuesto es el que usan, para justificar lo que será la falta de inversión productiva, o que será, además la forma en que resisten la autonomía del gobierno.

Volviendo al artículo que hemos reseñado en extenso, por ser una buena radiografía de lo que está pasando políticamente al finalizar el primer año del gobierno de Rafael Correa y, particularmente la manera en que este afecta a los empresarios, se puede ver que el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente coge a los empresarios en orfandad o, al menos con serias dificultades para responder articuladamente a la indocilidad de este gobierno “postneoliberal” (Ramírez, 2010)¹⁰⁶ Dos problemas enfrentan las grandes cámaras de la

¹⁰⁵ Varios autores han destacado la manera en que, lejos de disminuir el poder económico de las élites empresariales, el gobierno de Correa desarrolló políticas que benefició o incrementó este poder Ver, por ejemplo: (, Machado, 2012, Acosta, 2016, Pastor, 2017) Blasco Peñaherrera, una entrevista para esta investigación afirmó que lo importante no era tanto el modelo económico que un gobierno impulsara, sino la manera como este era impulsado. Si se partía del reconocimiento de las distintas voces implicadas en cada reforma, los empresarios participarían, de lo contrario, manifestarían su rechazo (Blasco Peñaherrera, Comunicación personal, 23 de Junio de 2013)

¹⁰⁶Bajo el título “La Fractura del Poder, la revista Vanguardia había reportado un cambio generacional que se estaba produciendo en la derecha ecuatoriana pero también la inexistencia de élites articuladas, a finales de 2006. El documento sólo reconoce líderes aislados, sin proyecto de país. En este documento se habla del surgimiento de nuevos liderazgos, al mismo tiempo que se reporta el rechazo de ciertas élites empresariales, de las prácticas mafiosas en el empresariado mismo y en la política, particularmente de los “ecualibaneses”, a quienes les acusa de no buscar más que réditos económicos. Se destaca así la figura de Guillermo Lasso, quien crea la Fundación Ecuador Libre y que será la plataforma para su participación política en distintos momentos de los gobiernos de Rafael Correa. La fundación de Lasso, para el articulista “asume el reto ideológico de rescatar la verdadera ideología de la derecha. Esta, vista por él, incluyen generación de políticas de Estado, pensamiento libre y defensa de la libertad de mercado. Once guayaquileños son los fundadores (Fernando Salazar, Angelo Caputi, Roberto González, Juan Fernando Noboa, José Enrique Rivas, Vicente Vallarino...) La fundación persigue estructurar un discurso y un equipo que genere propuestas para el país a través de cinco objetivos. Políticas públicas en materia económica, competitividad, políticas sociales que irán llegadas al desarrollo económico, justicia independiente y el fortalecimiento de la democracia con partidos que la practiquen en su interior. La búsqueda de una nueva fuerza política lidera por Lasso, fundamente an la consideración de las fuerzas políticas tradicionales, como dictatoriales. El principal del Banco Guayaquil, quien de acuerdo al artículo se había inspirado en la fundación FAES, de José María Aznar y América Libre de Paco Flores en el Salvador, apunta con este plan a los jóvenes empresarios y políticos. Se trata de formar líderes que cotejen con la realidad ecuatoriana y que, gracias a becas, adquieran nuevos referentes en España y EE.UU. Un salto hacia la política activa no está excluido. Lasso, sin haber hecho públicas aún sus intereses electorales, parece encontrar eco en otros empresarios guayaquileños como Renato Carló, de la Pequeña Industria, o Eduardo Maruri, de la Cámara de Comercio de Guayaquil. También ellos creen estar dando pasos en dirección de una ruptura, que Maruri ve necesaria, con los dueños de poderes tradicionales. Maruri afirma que la sociedad ecuatoriana se había acostumbrado a vivir con la corrupción y a ser permisiva. Esto hacía que la ruptura con las viejas fuerzas debía ser más fuerte, sacando a los corruptos del sistema (Revista Vanguardia, 2006-04-25). Esta insipiente “nueva

producción (la CCG y la CCQ, particularmente) en su búsqueda de canales para mantener su tradicional preponderancia política. En primer lugar, el deterioro de las fuerzas políticas que servían de canales para tramitar demandas en el congreso, particularmente el debilitamiento del PSC y la división que en el empresariado va a gestionar el gobierno de Correa. A la primera, además, se le sumará la insipiencia de las nuevas fuerzas políticas de derecha que se venían constituyendo, desde el año 2006. En este marco, algunos empresarios (vinculados con las cámaras de la pequeña industria y algunos exportadores), manifestaron no alinearse con la oposición, pues reconocían algunas buenas políticas del gobierno (baja de aranceles para materias primas, insumos y bienes de capital). En el otro lado, se posicionarán María Gloria Alarcón, presidenta de la CCG y Blasco Peñaherrera Solah, dirigente de la CCQ. Estas dos organizaciones serán las más radicales defensoras de las “libertades económicas”, la libre empresa y la competencia.

En este marco también, algunos empresarios pragmáticos, buscarán ventajas particulares. Las cámaras de la construcción, las cámaras de industrias y comercio del Azuay y de Cuenca e, incluso, en algunos momentos, la Cámara de Industria de Guayaquil, estarán en este lugar de acomodarse de manera pragmática a las disposiciones del gobierno. El gobierno encontrará, además, en empresarios particulares, fuente de soporte para sus decisiones, así como en las cámaras de la pequeña industria de distintas regiones.

De este modo, en el marco de la ANC, las más poderosas cámaras de comercio e industrias serán víctimas de un desconocimiento sin precedentes por parte del primer mandatario ecuatoriano. Esto las lleva a buscar abrir espacios de mediación, a un *lobby*, la mayor parte de las veces infructuoso, pero también a apoyar a los candidatos que podrían eventualmente ser protagonistas al interior de la ANC, de la defensa de la economía de mercado. Precisamente para las campañas de diputados para la ANC, las grandes cámaras, desarrollaron campañas publicitarias con presupuestos altos, para defender la dolarización y la generación de empleo *a través de la libre empresa*. Llegaron incluso a la creación de un fondo para patrocinar candidatos a la Asamblea. En este fondo, los empresarios depositaban “ayudas económicas que se reciben contra un recibo, pero no se dan los nombres de los beneficiados ni los montos”. Reconociendo la existencia de este fondo, pero desligándolo de la dirección de la

generación” de líderes políticos, vinculados a las élites empresariales, no podrá contener la arremetida política de Correa y verá obstaculizado su proceso de consolidación como élite dominante, pese a que económicamente se fortalece. La resistencia, con acumulación de poder estructural, será la estrategia de las élites empresariales, hasta que los vientos políticos cambien e intente revertir las políticas y la estructura estatal construida por diez años.

CCG, la CCQ y el CEE, Roberto Aspiazu, manifestó que *esos* apoyos son individuales y no comprometen, en forma alguna a los gremios. Así estos no quieren ser -lo dice Roberto Aspiazu- ‘meros espectadores ante la pretensión de imponer cambios que pueden retrasar aún más el desarrollo del país’” (Vanguardia 2007/09/24, pág. 18.).

La configuración del nuevo marco normativo para el Ecuador, deja ver así las bases del conflicto: Para los empresarios el gobierno hacía énfasis en la redistribución de riqueza, el incremento del poder económico del Estado, “la estigmatización del mercado y la globalización... en detrimento del sector privado” (Vanguardia, pág. 18, 2007/09/24). Esto iría en contravía del desarrollo del país, proceso para el que las elites empresariales, asumen tener la única llave o fórmula.

Ahora bien, como se sabe, a pesar de las campañas de los empresarios y el financiamiento de líderes opuestos al nuevo gobierno, los movimientos que respaldaron a Correa logran las mayorías, aunque dentro de unas fuerzas políticas muy fragmentadas¹⁰⁷. Como resultado del triunfo oficialista, banqueros, dirigentes gremiales y constructores invitan al gobierno, a través de los medios de comunicación, construir consensos y disminuir la confrontación y a reunirse con su dirigencia para buscar un proyecto común de país. (El Comercio, pág. 10, 2007/10/02). Algunos empresarios o líderes de opinión defensores del liberalismo económico participaron en los comicios obteniendo algunos escaños en la ANC. El Partido UNO, fundado recién a fines del año 2006, liderado por el Ex presidente de la CCG, Eduardo Maruri obtuvo algunos puestos.¹⁰⁸ Desde este lugar, el partido defendió las ideas liberales en lo económico, planteando tres propuestas centrales: microfinanzas, dolarización, economía social de mercado. Para el impulso de sus propuestas y de sus candidatos, el partido hizo

¹⁰⁷ Participaron 118 movimientos políticos, la mayor parte provinciales (94), y una pequeña proporción (24), nacionales (El Universo, 2007/10/02).

¹⁰⁸ Este partido surgió a partir de la elección de Rafael Correa en noviembre de 2006. Estuvo, desde el principio liderado por empresarios, entre estos, Eduardo Maruri. Pese a estar liderado por el Ex Presidente de la CCG, su presidente en este momento María Gloria Alarcón, afirmó no pertenecer a la iniciativa. (El Universo, pág. 2, 2006/12/14). Este partido lo lideran Maruri, Mae Montaña y Santiago Ribadeneira. (El Universo, 2006/12/15). El partido se define como orientado por “ideas pragmáticas”, pero, además, consideran que nace por iniciativa de empresarios, no se limita a esto. “para los promotores de UNO, es un error que se los identifique como una iniciativa empresarial, ya que aseguran que se trata de un partido incluyente. Sin embargo, no revelan los nombres de las organizaciones sociales que según ellos simpatizan con el proyecto porque dicen que los miembros de esas entidades asisten a las reuniones a título personal. (El Comercio, pág. 6, 2006/12/19). La revista Vistazo, del mes de diciembre, muestra, además, cómo desde finales de 2006, se empiezan a crear otras organizaciones políticas. “Clave Democrática (César Montúfar); Fuerza Ecuador (Humberto Mata); Súmate y un grupo de empresarios cuya cabeza es Benjamín Rosales (Vistazo, 2006/12/19, pág. 20.). Estos serán parte de la ANC, impulsada por Rafael Corea y harán oposición a la mayor parte de sus iniciativas.

pactos con microempresarios y ligas barriales.¹⁰⁹ En su discurso, el partido defendió la idea de que el mercado era el agente regulador de la economía y, por tanto, el Estado no debía intervenir, más que en el campo de la educación. (El Comercio, pág. 8, 2007/09/05). Este partido así mismo buscó ocupar el lugar dejado por el PSC, planteándose como un movimiento incluyente, que se pone por encima de las diferencias entre izquierda y derecha. (El Comercio, pág. 9, 2007/08/04).

Además del partido UNO, otros partidos y líderes vinculados con las élites empresariales también lograron representación. Algunos de estos fueron: Anabella Azin, del PRIAN, esposa del bananero multimillonario Álvaro Noboa; César Rohón, del PSC, “Empresario vinculado al sector pesquero. Fue presidente de la Cámara de Pesquería y del consejo Consultivo del área, Asambleísta en 1997; Saúl Fadul, también del PSC, “sus actividades están ligadas al sector empresarial productivo. Laboró en una exportadora de Banano; Pablo Lucio Paredes, del movimiento MCity, Economista, editorialista, “Fue secretario de Planificación en el gobierno de Sixto Durán Ballén y presidente del Banco Continental, defensor del liberalismo económico en cada una de sus columnas de opinión en el periódico El Universo; Galo Laradel PSP, empresario automotriz, vinculado al comercio.¹¹⁰ En otras notas de prensa, se encuentra que luego de ser asambleísta fue condenado a 10 años de prisión por varios delitos, entre ellos el asesinato; había delinquido también en los Estados Unidos; León Roldós, Ex vicepresidente de la república entre 1981 y 1983, abogado de instituciones financieras. Alfredo Ortiz, del PSP-RED, propietario de compañías turísticas. Álvaro Noboa, del PRIAN, presidente de la Junta Monetaria con Abdalá Bucarán, Empresario bananero, tres veces candidato a la presidencia. (El Universo, 2007/11/29).

De parte de los aliados del gobierno, la mayoría tenía experiencia con organizaciones sociales, algunos periodistas, abogados, exmilitantes de partidos tradicionales, como Izquierda Democrática, Democracia Popular, del PR, Partido Socialista, del PRIAN, Pachakutik. Otros eran miembros de la clase media alta, con alguna participación en organizaciones estudiantiles o sociales. La mayoría con poca experiencia en política electoral. El dominio de la ANC, por parte de los aliados del gobierno sirvió para que algunos editorialistas hablaran del fin de la

¹⁰⁹ Además de haber sido el soberbio presidente de la CCG, Eduardo Maruri, era también presidente del Club de Fútbol profesional Barcelona, de Guayaquil. Este lugar, fue usado para interactuar con las ligas barriales de fútbol y movilizarlas electoralmente.

¹¹⁰ Sobre el prontuario de Galo Lara ver: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/fbi-confirmando-antecedentes-criminales-de-galo-lara-en-eeuu/>; <http://www.planv.com.ec/historias/testimonios/la-muerte-vida-galo-lara>;

democracia, debido a la concentración del poder que las mayorías del gobierno generaban.¹¹¹ Con las mayorías en la ANC, Correa efectivamente buscó compensar su falta de representación en el Congreso y pidió a la Asamblea cesar al Congreso. Este responde frenando o derogando varias leyes que el gobierno había mandado con carácter urgente (el universo, pág. 4, 2007/11/12; El Comercio, pág. 5, 2007/11/17)

Ahora bien, el control que Correa intenta establecer sobre la ANC genera algunos enfrentamientos con militantes de su movimiento político. Alberto Acosta, el asambleísta más votado, y algunos más intentan poner distancias entre la ANC y Correa, despertando el reclamo de este último. (El Comercio, pág. 3, 2007/12/10). Al final del proceso, Alberto Acosta termina renunciando y convirtiéndose en uno de los más duros críticos de Correa. Otros sectores sociales cuestionan también el modo autoritario en el que Correa pretende orientar el desarrollo de la ANC.

En este marco, los empresarios jugaron a tres bandas. De un lado, le apostaron a la participación directa en la ANC, a través de distintos representantes directos o de aliados ideológicos; movilizaron la crítica al gobierno y a sus políticas económicas y su “autoritarismo” a través de ruedas de prensa y comunicados públicos,¹¹² y finalmente, a la búsqueda de acercamientos con el presidente, para gestionar consensos sobre la política económica. Uno de los escenarios en los que los empresarios buscaron influenciar, sin mucho éxito las decisiones del gobierno, fue el caso de una de las primeras reformas tributarias gestionadas por el gobierno. Esta reforma, se concretó a través de la construcción de un Código Tributario. (El Telégrafo, 2007/12/16, pág. 1 y 2). El incremento de varios impuestos, fue rechazado por los empresarios pues, a su juicio, aumentarían la informalidad, el desempleo y el contrabando y los costos también serían asumidos por las clases medias. Pese a estas críticas, los empresarios no tenían cómo responder de manera articulada. Desde el CEE, se criticó que no habían recibido el texto final de la reforma. Era normal, pues el presidente no los reconocía como interlocutores. Ante la cesación de Congreso, la ANC fue el escenario que usaron las grandes cámaras, para tratar de influir en la configuración del nuevo

¹¹¹ Uno de estos editoriales incluso llegó a afirmar que se trataba del fin de la democracia. Ver. “Pablo Ortiz García, réquiem por la democracia, El Comercio, pág. 5, 2007/11/30; Editorial. Cambio o concentración del poder, El Comercio, pág. 4, 2007/12/01). Frente a estas lecturas, Enrique Ayala Mora, incluso llegó a cuestionarse si lo que se había establecido en el Ecuador era una dictadura, negando tal posibilidad. (El Comercio, pág. 4, 2007/11/07).

¹¹² Como hemos visto, de hecho, algunos medios de comunicación, asumieron posturas incluso más combatientes que las mismas élites empresariales. Sobre todo, aquellos vinculados con la banca, sector con el que el gobierno de Correa va a tener varios conflictos.

marco normativo y en las decisiones del gobierno. (El Universo, pág. 4, 2007/12/20). En este caso, lo hicieron también para intentar bloquear la reforma tributaria.

La reforma del gobierno, además de lo anterior, dispuso el establecimiento de un impuesto del 0.5% a la salida de capitales, algo que la banca consideró equivocado pues a su criterio, desmotivaba a los inversionistas, a la vez que cuestionó la disminución de incentivos a los bancos. (El Comercio, pág. 10, 2007/12/21). La reforma resultó tan problemática para las élites que algunos dirigentes de oposición y empresarios llegaron a proponer, como en otros tiempos, la desobediencia civil y la realización de paros empresariales (El Universo, pág. 3, 2007/12/22). También se tomó la Mesa 10 de la ANC, denominada de legislación y Fiscalización, como el escenario para que empresarios, gremios y organizaciones sociales presentaran sus propuestas. (El Telégrafo, 2007/12/22, pág. 3). La amenaza de los empresarios de llevar a cabo paros empresariales fue respondida por el gobierno instando “a los trabajadores para que tomaran las empresas que paralizaran sus actividades en protesta por el proyecto oficial de reforma tributaria”. El Tiempo (2007/12/23, pág. 8)¹¹³ Pero en realidad Correa fue más lejos y, desde nuestro punto de vista, identificó el problema central. No se había pedido permiso para hacer los cambios “... ¿Saben cuál es el único problema? Interrogó Correa frente a los medios. Que no les hemos pedido permiso a los de siempre... Nos quieren dar cátedras de democracia, de moral, dicen que hay que consultar. Lo que nos quieren es hacer perder tiempo para no poder utilizar la asamblea”. (el Universo 2007/12/23, pág. 3.) Esta es, precisamente, la característica central de las relaciones que establece inicialmente Correa con la mayor parte de los empresarios y, sobre todo, con los dirigentes de la CCG y la CCQ. Sin embargo, las demandas de la oposición y de los empresarios tuvieron algunos resultados. El día 22 de diciembre de 2007, la comisión de legislación de la ANC, devolvió el documento de reforma tributaria, reduciendo las aspiraciones de tributación que planteó Correa, específicamente para herencias y donaciones. Estableció la Mesa, un tope del 35% de impuesto a las herencias por encima de los 600.000 dólares y la aspiración de Correa era que se grabaran hasta con un 70%, para herencias y donaciones por encima de los 500.000 dólares. (El Comercio, pág. 11, 2007/12/23). Para los empresarios, no obstante, estos cambios a la ley realizados en la Asamblea, no fueron suficientes. María Gloria Alarcón, planteó que “Si no es una ley válida, no obliga. Esa es mi posición y la de muchos empresarios”.

¹¹³ Todo esto, en medio de un descenso importante en la favorabilidad de Correa, según publica el Universo este mismo día (pág. 4). El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, uno de los cerebros de la reforma, defendió la propuesta como una herramienta técnica para reducir la evasión y generar recursos para redistribuir. Las críticas a la reforma, provenían, para Carrasco, de la oposición y de las campañas mediáticas para desinformar (El universo, pág. 8, 2007/12/23)

“Institucionalmente nos hemos reunido con el directorio ampliado de (De la Cámara) y ese es el sentir”. Agregó que: “Esta no es una reforma tributaria orientada a mejorar los tributos del Estado, a mejorar una base de contribuyentes, sino a quitarle todo lo que se pueda a los mismos contribuyentes, que ellos (el oficialismo) considera ricos, millonarios”. Los empresarios de la Cámara de Industriales de Guayaquil, complementaron afirmando que “Un proyecto que tiene más de 200 disposiciones y 180 artículos no puede debatirse en 10 días hábiles. Si quieren que la ley tenga trascendencia en el futuro, debe ser fruto del consenso de todos los sectores ampliando el debate”, (El Tiempo, pág. 1, 2007/12/25). Del mismo modo rechazaron la invitación de Correa para que los trabajadores a tomarse las fábricas. Para los directivos del CEE, no había sustento jurídico para tal acción, en cambio sí la había para un eventual paro empresarial. (El Universo, pág. 5, 2007/12/26)¹¹⁴

El día 28 de diciembre, finalmente la reforma tributaria fue aprobada por la ANC, con 91 votos a favor y 23 votos en contra. (El Comercio, pág. 3, 2007/12/29). Correa se mostró satisfecho con la aprobación de la ley y celebró que los que más ganaran deberían pagar más. Pese a las diferencias al interior de la ANC, Correa demostró su capacidad de resistir las presiones y amenazas de los empresarios. Tras la aprobación de su primer gran reforma, Correa advirtió a los evasores de impuestos, resaltando la pena de cárcel, incluida en la ley. Así, afirmó que: “La evasión existía en el país por la gran maraña legal, ya que venían ciertos grandes evasores, grandes herederos que ahora quieren ser líderes políticos y apenas se les ponía una glosa por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), antes de iniciar una acción legal”. Agregó que “No pagar impuestos es robarle al Estado, robarles a los niños su educación, robar los libros, las carreteras, los créditos a los más pobres”. Defendió al Impuesto a la Salida de Divisas, para evitar fuga de capitales. En relación con las amenazas de no acatar la Ley, advirtió que:

Se habla de que quieren llamar a la rebeldía hacia la Ley Tributaria, háganla no más **entérense que ya hay Gobierno**, desacatan la Ley, pelucones, y se van presos... Cuál es el temor, simplemente dime quién se queja y te diré si es buena o mala la reforma. Los que se quejan son Alvarito Noboa, las Cámaras de la Producción, los banqueros, los pelucones, lo que es buen síntoma ya que el país está cambiando El Telégrafo, pág. 3, 2007/12/30

¹¹⁴ Otros actores sociales que manifestaron sus reparos a la reforma fueron los alcaldes de Guayaquil, Jaime Nebot y de Quito, Paco Moncayo, pues la reforma implicaba eventuales recortes a los presupuestos locales, de esta manera Correa se reunió con los alcaldes el 26 de mayo y calmó los ánimos. (El Universo, pág. 2, 2007/12/27)

Finalmente, el presidente reveló que varios grupos económicos evadían impuestos. Expuso el caso del grupo Wong, que en 2006, habría reportado ingresos por 294 millones y sólo pagó 60 mil dólares, es decir, sólo declaró el 0.1% de utilidades de ingresos y el Grupo Holcim, que cuenta con 21 compañías, que declaró casi US\$29 millones (El Telégrafo, pág. 3, 2007/12/30).¹¹⁵

El inicio del año 2008, un año en el que Correa debería hacer aprobar la nueva Constitución y lograr la mayoría en el Congreso, tras la convocatoria a nuevas elecciones, estuvo marcado por las denuncias de Rafael Correa y Alberto Acosta, de que ciertos sectores, en particular las cámaras de la producción estaban buscando desestabilizar la ANC y la democracia ecuatoriana. Esto, al impulsar el discurso de que Ecuador estaba viviendo una dictadura. Así mismo, los líderes de Alianza País denunciaron el llamado de estos sectores a desconocer la Ley de Reforma tributaria. (El Universo, pág. 1 y 4, 2008/01/04).

Con la disputa por la reforma resuelta a favor de Correa, la idea del paro empresarial, para comienzos del 2008, poco a poco se diluyó. María Gloria Alarcón mantuvo la advertencia de que los empresarios no acatarían la nueva ley hasta que fuera sometida a referendo. No obstante, descartó la idea del paro, pues “la propuesta nunca se concretó. ‘Sólo se quedó en ideas sueltas. Nadie ha consolidado esa propuesta, ya que siempre hemos llamado al trabajo. Eso fue fruto de la indignación e impotencia de tener que cumplir con una ley a la fuerza’ sostuvo Alarcón”. Finalmente, reiteró sus críticas a la ilegalidad de la aprobación de la ley. (El Tiempo, pág. 6, 2008/01/08).

De este modo, el gobierno mostró su capacidad de frenar las aspiraciones de los líderes empresariales, otrora poderosos actores que destituían funcionarios públicos y hacían que las leyes se vetaran. La percepción que queda de estos procesos es que las cámaras han perdido capacidad de imponer su voluntad o sus criterios al gobierno y el gobierno ha logrado constituir en muy poco tiempo una muy fuerte autonomía de su mandato. El respaldo popular, medido por varias encuestas puede ser considerado también uno de los soportes de esta inédita autonomía. Los medios de comunicación reflexionaron sobre esta nueva situación. La revista Vanguardia, por ejemplo, afirmó que “la relación Gobierno-empresarios pasó de castaño a oscuro. La Reforma Tributaria y el aumento salarial caldearon un ambiente marcado por la incertidumbre. Ni los contactos han sido directos, profundos y sostenidos ni el régimen

¹¹⁵ Los Ganaderos se sumaron a las críticas a la Reforma tributaria y plantearon que el impuesto de 5 dólares por hectárea improductiva significaba el acabose para un sector en crisis. El ministro de Agricultura explicó que esto era exagerado y que no tenía en cuenta las deducciones que la misma reforma contemplaba frente al sector. (El Telégrafo, pág. 6, 2007/12/30).

ha generado señales auspiciosas para un sector que no sabe siquiera si el país pedirá la ampliación del Atpdea con Estados Unidos”.¹¹⁶ Ante las dificultades para influir de manera directa en la toma de decisiones del presidente y de la Asamblea, las élites empresariales de Quito y Guayaquil optaron por la denuncia de la supuesta ilegalidad de la ANC. En esta dirección, la CCG, publicó un aviso de prensa “en el cual recuerda que las decisiones de la Asamblea deben ser sometidas a referendo antes de ser aplicadas. De lo contrario, afirma, el país se encontraría en plena dictadura”.¹¹⁷ Ante la ausencia de debate, para los empresarios, la única salida que les quedaba era hacer públicas sus consideraciones sobre el accionar del gobierno y la ANC. Pero no hay unidad de criterio en las resistencias del empresariado. Como vimos, la rebeldía tributaria, propuesta por María Gloria Alarcón, no convoca a varios líderes de las grandes cámaras ni al director del CEE. Las reformas que se vienen, entre ellas, una nueva ley laboral, que los pequeños industriales critican por hacerlos menos competitivos y dificultar la creación de empleos, también los preocupa y no se ve cómo van a enfrentar estas medidas (Vanguardia, pág. 18 y ss, 2008/01/07).

Justamente, la búsqueda de articulación llevó a la realización de una reunión de las más grandes asociaciones empresariales el día 7 de enero de 2008. El resultado de esta reunión fue el planteamiento de que, en un escenario marcado por la debilidad de los partidos, la oposición que se iba a configurar provendría de estas asociaciones y de los municipios más grandes, que no estaban bajo el control de Correa y su movimiento (El Comercio, pág. 3, 2008/01/08) El mismo día de esta publicación, de hecho, la Editorial de El Comercio plantea que es el gobierno el que ha definido a sus nuevos opositores: los empresarios y los medios de comunicación. (El Comercio, pág. 4).

Además de la denuncia, los empresarios usaron otro mecanismo para oponerse a la Reforma Tributaria, el incremento salarial y la fijación de precios. Demandaron la constitucionalidad de estas medidas ante el Tribunal Constitucional. Esto como resultado del encuentro en Quito, en lo que sería el Segundo encuentro de la Empresa privada. Patricio Donoso, del CEE, afirmó que la ANC, no tenía facultades legislativas y sus actuaciones en esta materia eran

¹¹⁶ Las Preferencias, finalmente fueron prorrogadas por Estados Unidos a mediados de Febrero de 2008, sin tanto lobby de parte del Gobierno. Los empresarios, pidieron acuerdo de largo plazo. (El Telégrafo, pág. 7, 2008/02/15) Correa, por su parte, cuestionó la prórroga por 10 meses y pidió que se extendiera indefinidamente, al menos hasta que dure la lucha contra el narcotráfico (El Tiempo, 2008/02/19)

¹¹⁷ Ruedas de prensa convocadas continuamente y anuncios pagos en la prensa de mayor circulación en el país se hicieron frecuentes. Las grandes cámaras de la producción podían invertir en cada aviso, hasta 90 mil dólares, dependiendo del día de la publicación o del periódico en el cual se pautara, de acuerdo a Esperanza Hurtado, Asistente de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Quito. (Comunicación personal, agosto de 2015). Los anuncios más costosos eran los de el Periódico El Comercio. En El Universo, el caso de cada anuncio, podía llegar a los 25.000 dólares.

ilegales. Los empresarios advirtieron también, que las reformas los conducirían a despedir trabajadores para poder cubrir el incremento salarial decretado por el gobierno. (El Comercio, pág. 8, 2008/01/08, Ver también; El Tiempo, pág. 2, 2008/01/08, El Universo, pág. 8, 2007/01/08).

La configuración del empresariado como “la oposición” al gobierno de Correa fue reconocida por él mismo a comienzos de 2008. Para el presidente, su oposición estaba en la banca, los grupos de poder y la prensa. Afirmó que esta, dada su constitución resultaba mucho más peligrosa que la que podrían hacer partidos políticos. Por tanto, la estructura de poder en el Ecuador debía ser reformada, atacando a los poderes tradicionales y, específicamente a los asentados en Guayaquil, pues estos, desde su parecer tenían intereses “separatistas” y habían constituido “un feudo dentro del Estado”. Junto con estas élites guayaquileñas, había que enfrentar a las cúpulas de los partidos políticos “que son mafias que no están dispuestas a perder privilegios. También determinados grupos económicos que han estado acostumbrados a no pagar tributos. Esos grupos acostumbrados a hacer lo que les da la gana se van a oponer con uñas y dientes a hacer un cambio” (El Comercio, 2008/01/1, pág. 7)

Efectivamente, el clima de confrontación venía creciendo. El ministro de defensa, Ricardo Patiño, llegó a interpretar las actividades de la oposición y los empresarios como un complot, con varios frentes para desestabilizar al gobierno. Esto incluía recoger dinero para sobornar a los assembleístas de la mayoría, la desobediencia civil, los anuncios publicitarios pagados por la CCG, en los principales periódicos, que afirmaban que estaban frente a una dictadura, las marchas de la oposición; los intentos del congreso de reunirse en Guayaquil, para adelantar un juicio de destitución a Correa, entre otros Temas (El Comercio, pág. 7, 2008/01/11).

Pese a estas consideraciones, los empresarios asumieron la mayor parte del tiempo una posición ambigua frente a su papel como líderes de opinión frente al gobierno. Así, por ejemplo, Patricio Donoso, reusó asumirse como oposición y manifestó que esta la hacían los políticos, no los empresarios. Para Donoso, lo que hacían estos últimos era denunciaban las acciones ilegales de la ANC. Reconoce, no obstante, que el 2007 había sido un año de confrontación política, pero que el 2008 sería de confrontación económica, debido a la inestabilidad propia de un año electoralmente muy intenso y a la falta de claridad jurídica. Donoso también manifestó que los empresarios no hacían parte de la convocatoria que, a mediados de enero de 2008, hiciera el Alcalde Jaime Nebot a marchar en contra de las reformas planteadas por el gobierno de Corea y en defensa del “municipalismo”, afectados

por la ley Tributaria.¹¹⁸ En relación con la acusación del gobierno de Correa de que los empresarios eran conspiradores, Donoso afirmó que “si algo detesta el sector productivo es la inestabilidad política. No tenemos ni la intención ni los instrumentos para eso”. Dijo, finalmente que el gobierno estaba cerrado al diálogo e informó que le habían enviado tres cartas al presidente, pidiendo una cita, y éste no ha respondido (El Comercio, pág. 7, 2008/01/14). Tal como se ha planteado antes, efectivamente el gobierno optó por una estrategia que en la práctica desconocía la representatividad de la dirigencia de las tradicionalmente más poderosas cámaras de comercio e industria. Como respuesta, los empresarios desconocían la institucionalidad y las leyes emanadas tanto del gobierno, como de la ANC.

En este marco, el gobierno eligió reunirse directamente con empresarios y no con las grandes asociaciones empresariales, lo que contribuyó a generar fisuras al interior del empresariado ecuatoriano. Correa privilegió, entre los empresarios, a los industriales, los acuicultores, productores de bienes para la exportación, constructores y, eventualmente a la banca. En tal sentido, unos días después de las manifestaciones de la oposición, a fines de enero, Correa invitó a más de 60 empresarios de distintos sectores¹¹⁹, para presentar su Plan de Desarrollo. A este evento, no fueron invitados los dirigentes de las Cámaras de la producción de Quito y Guayaquil. Allí, Correa habló de sustituir la economía extractiva manteniendo los equilibrios macroeconómicos. El encuentro fue aprovechado por algunos invitados para rechazar la acusación que les habían hecho de ser evasores. Correa respondió que no se ha acusado a todos los empresarios, sino a ciertos sectores, que efectivamente lo hacían. Citó a Carlos Marx Carrasco, para confirmar que cerca del 61% de los empresarios evadían impuestos (El Tiempo, pág. 1. 2008/01/30), En la búsqueda de debilitar a sus adversarios, luego de esta reunión con empresarios, Correa se reunió con alcaldes municipales, entre otras, para disminuir el liderazgo de Jaime Nebot. Los empresarios se manifestaron satisfechos con el encuentro con el presidente e, incluso Patricio Donoso, del CEE, se manifestó satisfecho de la apertura de este tipo de canales, pese a no haber sido invitado como dirigente gremial. (El comercio, 2008/01/3, pág. 6).

¹¹⁸ El hecho de que varios líderes empresariales negaron ser oposición, “dejaron en libertad” a sus afiliados para participar o no en las marchas convocadas por Jaime Nebot, en contra de las políticas de Correa. Así mismo, “invitaron” a sus empleados a asistir a la concentración propuesta por Nebot, en Guayaquil, en contra del gobierno de Correa (El universo, pág. 13, 2008/01/20)

¹¹⁹ A la cita acudieron empresarios del sector turístico, agropecuario, agroindustrial, maderero, alimenticio, automotor, textil, manufacturero. Pidieron créditos, infraestructura (El Universo, pág. 1 y 4, 2008/01/30).

En relación con el tema tributario, en el que el gobierno ya había tenido victorias, a mediados de junio de 2008, el tema no se había resuelto del todo. Luego de varias demandas y con la oposición de las élites empresariales y otros sectores, la ley tuvo que ser efectivamente reglamentada por la ANC. Allí se desplazaron los representantes de los empresarios para exigir, como último recurso que al menos no se aceptara el cobro adelantado del Impuesto de Renta, pues podía afectar a los empresarios y estos no podían determinar, con anticipación, cuanto iban a ganar (Vanguardia, pág. 28, 2008/05/20).¹²⁰

Contrario a los efectos de las demandas de los dirigentes gremiales, las reuniones que impulsó Correa, directamente con empresarios y con dirigentes gremiales menos encumbrados, parecían tener efectos positivos. El 13 de junio, Correa se reunió, esta vez con empresarios y representantes de cámaras de comercio provinciales para presentar un plan de ayuda a los pequeños productores debido a los altos costos de insumos y al incremento de la inflación. El plan costaría 256 millones de dólares que se destinarían a subsidios para compra de insumos, así como la eliminación del pago de IVA, para estos productos. Así mismo, anunció la reducción de aranceles y créditos para el sector. Bernardo Traversari, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (CCEA), interpretó positivamente el encuentro, pero afirmó que esto había sido ya planteado por el sector privado “de manera directa y frontal”. Esta apreciación fue compartida por César Monge, de la Cámara de Acuicultura del Ecuador. Puntualmente las medidas reformaban el contenido de la Reforma Tributaria, al menos parcial y temporalmente. En la reunión con los empresarios Rafael Correa prometió pedir a la ANC, que este impuesto no se cobrar en 2008 ni en 2009 (El Comercio, pág. 12, 2008/06/14). A la reunión también asistieron Javier Patiño, de la Cámara de Comercio de Cuenca (CCC), Isabel Noboa, presidenta de Nobis; Bruno Leone, Vicepresidente de la Cámara de Pesquería y Alberto Sandoval, de la Empresa de Inversiones Crece Ecuador, que compartieron una mirada positiva del evento. (El Universo, pág. 3, 2008-06/14).

Ahora bien, no sólo el problema de los tributos generó tensiones entre el gobierno y las Cámaras de la producción. También estuvo el problema de las reformas laborales que impulsó Correa, en el marco de la ANC. Como hemos visto el problema de las terciarizadoras venía

¹²⁰ Los adelantos fueron establecidos en la reforma tributaria, como un mecanismo de financiamiento del Estado, así como para el control de la evasión de impuestos. El excedente de estos, una vez se acaba el año fiscal, debían ser devueltos a los contribuyentes. Con esto, lo que el estado lograba era un préstamo de los contribuyentes, para poder financiar sus gastos corrientes. Al pagar el adelanto, cada contribuyente recibe una nota de crédito que puede ser comercializada. El enfrentamiento en junio se produjo porque los empresarios pedían que esta “nota de crédito” por pagos adelantados, se pudiera negociar en el mercado bursátil. Carlos Marx Carrasco aceptó, pero esto sólo podría hacerse, para él, en un plazo de 5 años, lo que fue rechazado por los empresarios.

discutiéndose desde el año 2007, momento en que se pone freno a algunas de las actividades de estas empresas.¹²¹ En el marco de las discusiones de la ANC, el tema se discutió nuevamente en abril de 2008. y María Gloria Alarcón, se manifestó en defensa de estas empresas y de la flexibilidad laboral en general. Para la dirigente empresarial, el tema estaba vinculado con lo que considera el establecimiento de “leyes inflexibles en cuanto a las condiciones de contratación”, por parte del gobierno. Para la empresaria, había “una gran cantidad de trabajos que solamente pueden ser realizados de manera flexible”, como las actividades comerciales y productivas derivadas de los ciclos comerciales y las terciarizadoras facilitaban el trabajo y disminuían costos. Pese a los reclamos de las élites empresariales, la ANC, mediante el mandato No. 08, acabó con la terciarización. Con una votación de 95 asambleístas, de Acuerdo País, PK, MPD y RED y dos de Sociedad Patriótica, la ANC, acabó con estos instrumentos de flexibilización laboral. (El Universo, pág. 3, 2008/05/01).

Frente a las nuevas relaciones laborales, los empresarios desarrollaron un seminario en la ciudad de Quito. En este evento, los empresarios expusieron sus argumentos para la defensa de la flexibilización laboral. Para los empresarios, “Mientras el mundo le apuesta a la flexibilidad laboral, en Ecuador se hacen esfuerzos para combatirla”. Esta flexibilización no tenía que ver sólo con los cambios en la economía, sino también en las aspiraciones subjetivas de los individuos. Para los empresarios la tendencia de las nuevas generaciones en América del Sur ahora ya no era consolidar una carrera profesional en un trabajo. Más bien, se busca “cambiar de forma constante de plaza y vivir el momento según sus necesidades”. Esto, de acuerdo con Horacio de Martín, director regional de Manpower... Para el empresario, “las causas están relacionadas con las nuevas formas de interconexión del mundo (Internet, celulares) que crean la necesidad de estar en movimiento constante. También con el incremento demográfico de las personas y de los flujos migratorios”. Así, para completar su exposición, argumentó que: “Cada vez existe más gente que necesita hogar, alimentos, vestidos y para ellos requiere dinero que lo obtiene de nuevos trabajos”. Este panorama de las

¹²¹ Por violación de normas de contratación, varias empresas de intermediación laboral han sido cerradas en este año (El Universo, pág. 2, 2007/10/08) Desde el mes de agosto, se empezó con intervenciones en estas empresas y el gobierno encontró que varias incumplían reglamentaciones expedidas desde 2006. 112 empresas de este tipo fueron sancionadas por el Ministerio de Trabajo, luego de visitas de inspección (El Universo, pág. 8, 2007/08/24) Estas empresas se defendieron argumentando que los procedimientos habían sido irregulares y que, de hecho, no fueron notificadas de las sanciones oficialmente, sino a través de la prensa (El Universo, pág. 4, 2007/08/25) Al amparo de la organización Fedehumana, que agrupaba a 120 de estas empresas, pidieron a la ANC, “reflexionar”, pues, a juicio de estas, el efecto de su desaparición sobre el empleo, afectaría a cerca de 250 personas. Argumentó que no era cierto “que los enrolados en esas empresas ganen menos. Según ella, reciben \$245 (incluyendo fondos de reserva desde el primer año de trabajo), frente a \$226 de otros empleados privados. Lo que debe hacerse, agregó, es fortalecer la Ley de Terciarización para que las compañías ‘informales’ no cometan abusos”

tendencias a las cuales los sujetos se adaptan, diríamos, mecánicamente, como si del fluir del mundo se tratara, es complementada con la defensa de la terciarización. Otra experta invitada por los empresarios en su seminario afirmó que: “Una herramienta para alcanzar esta flexibilización, añadió María Fernanda García, consultora, es la contratación a través de sistemas de terciarización, intermediación y el trabajo por horas. Estas permiten que tanto obreros como propietario de empresas adapten sus relaciones laborales a sus ritmos de vida y a los procesos productivos de las firmas. Así, la eliminación de las terciarizadoras ha encontrado su lugar. Conduce al atraso, a ir a contracorriente. Lo que parece una lectura de sociología del “sentido común”, se traduce en arma de combate político, naturalizando los procesos económicos y sociales. En este marco, el mandato 8 de la ANC, y su reglamentación no solo iría “en contra de la tendencia laboral del mercado, también contra los tratados internacionales y derecho”. El acto, organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, llevó a una conclusión de los empresarios: la población debía votar No en el referéndum de la Nueva Constitución. “Así, los mandatos y leyes quedarían sin efecto jurídico” (El Comercio, pág. 9, 2008/06/12) De este modo, el mundo podría seguir rodando libre como es, las relaciones laborales, podrían seguir su curso natural, que es el curso dado por el fluir de la economía de libre mercado y la flexibilización. Este tipo de actividades no es poco frecuente. Una buena cantidad de recursos se emplea constantemente por los gremios empresariales. A través de los mismos, se autoconvencen, y se convencen a los “afilados” y, a través de los medios de comunicación, se amplifica el discurso liberal.¹²²

La aprobación de la constitución gestionada por el gobierno, se convirtió así en una derrota más para el poder instrumental de los empresarios. Pocos meses antes de la aprobación de la Nueva Constitución, en el mes de mayo, María Gloria Alarcón, fue reelegida como presidenta de la CCG. Su posesión coincidió con la celebración de los 119 años del ente gremial. Sumando varios reveses en contra del poder instrumental de las élites empresariales, Alarcón, “criticó a la Asamblea y al ‘mal llamado socialismo del siglo XXI’”. Para Alarcón, este “pregona lo mismo que ya probó ser un fracaso: centralismo absoluto de poderes y falta de un estado de derecho, además de una cohesión (sic) a las libertades individuales. Cuestionó nuevamente la legitimidad de la asamblea al considerar que: “si bien la Asamblea y el Gobierno fueron elegidos por votación popular, no hay garantía de una verdadera democracia.

¹²² Las mismas revistas producidas por las Cámaras de Comercio, están repletas de historias fantásticas de emprendedurismo y esfuerzo empresarial. La Revista Comercio, de la CCG, por ejemplo, en cada ejemplar presenta la trayectoria de sus héroes: los empresarios. El discurso de superación personal es una pieza central también de esta forma de entender la actividad económica. El adversario de esta loable actividad, por tanto, termina siendo, frecuentemente el estado que pretende regular estas actividades, poniendo trabas.

‘dimos paso a una Asamblea en la que se suponía íbamos a discutir qué país queremos y cuáles son las reglas de juego... Pero está claro que esto no es lo que está sucediendo’.

Cuestionó también la falta de concertación entre gobierno, empresarios y trabajadores para legislar. Desde su perspectiva el gobierno “tomaba decisiones sobre la propiedad privada y pretendía hacer un reparto igualitario de los beneficios de la producción. Independientemente de quién los haya acumulado y quién haya invertido su capital y su trabajo”. Indignada, concluyó diciendo: “¡No hay derecho!”

Los miedos y cuestionamientos de los empresarios encontrarían alicientes un mes después de la reelección de María Gloria Alarcón al frente de la CCG. A comienzos de julio, la Agencia de Garantías de Depósitos, incautó las empresas del grupo Isaías, uno de los grupos económicos más poderosos del Ecuador, cuyos representantes se vieron envueltos en problemas de corrupción durante la quiebra bancaria de finales de los 90, luego de lo que se exiliaron en los EE.UU. Dos Canales de televisión y 200 empresas, fueron incautadas tras un proceso que había iniciado en el año 2007. Los dirigentes empresariales salieron en defensa de los Isaías. Blasco Peñaherrera calificó el hecho como un “atentado a la propiedad privada” y afirmó que “con excepción de Cuba, no hay antecedentes de una medida similar”. En tal dirección, “informó que la CCG, ‘está denunciando este caso a los organismos internacionales de los derechos humanos’”. (El Universo, 2008-07-08). El Periódico El Universo, realizó una corta entrevista a Roberto Isaías sobre la incautación. Para el empresario todo era una jugada política publicitaria. De forma despectiva afirmó que “*El tipo*”, refiriéndose al presidente Correa, “quiere hacer publicidad diciendo ‘fregué a los Isaías, a los banqueros corruptos’”. (El Universo, pág. 4, 2008-07-09). Por su parte, Correa afirmó que no se trataba de un atentado contra la libertad de prensa y que pondría en venta, cuanto antes, los canales incautados. (El Telégrafo, pág. 3 y 6, 2008-07-09).

Para la familia Alarcón, el evento los involucró directamente, pues dos de sus empresas (Plásticos del Ecuador SA e Industrias Toni) fueron ocupadas también por la AGD, por tener nexos con el Grupo Isaías. El gerente de plásticos del Ecuador, en este momento, Francisco Alarcón Alcívar, hermano de la dirigente empresarial, explicó que los únicos propietarios de esta empresa eran él y su hermana. Manifestaron su rechazo frente a la ocupación de las dos empresas y cuestionaron la paralización de la producción de Industrias Toni, una de las más grandes procesadoras de lácteos del Ecuador. Los empleados de estas empresas se declararon en huelga. Los ganaderos, que vendían su leche a Industrias Toni, pidieron que la producción se reactivara. (El Comercio, pág. 8, 2008/07/15). Además de las empresas de la Familia

Alarcón, también fueron incautadas empresas de Miguel Peña Valle, de la Cámara de Industrias de Guayaquil. (El Comercio, pág. 8, 2008/1).

El asunto con las empresas de los Alarcón, se “resolvió” parcialmente dos días después de la toma por parte de organismos estatales¹²³. Tanto la empresa de Plásticos del Ecuador, como Industrias Toni, pudieron reactivar su producción, luego de que se firmara un acuerdo de coadministración con la AGD (El Universo, pág. 8, 2008/07/17).¹²⁴ El evento marcaría, sin embargo, un hito en la historia de las relaciones entre el gobierno y los empresarios. Este estaba dispuesto a enfrentar poderes, regularmente intocables.¹²⁵ Más adelante, algo similar sucederá con la incautación de parte de la fortuna del empresario bananero y varias veces candidato presidencial Álvaro Noboa. Con estos eventos, para los empresarios, la intocable propiedad privada se veía en peligro como nunca. Ya no se trataba únicamente de amenazas y cuestionamientos públicos, sino de medidas de hecho que atentaba, a ojos de aquellos, contra los derechos humanos fundamentales y contra la democracia. Sin embargo, a diferencia de otras épocas, el poder y capacidad de movilizar actores sociales, políticos o militares, no estuvo de su lado. Efectivamente, esto había cambiado radicalmente en con la llegada al poder de Rafael Correa.

De este modo, el discurso liberal, que pone énfasis también en la defensa de la propiedad privada, como derecho fundamental y principal de una democracia, se vio enfrentado con la concepción de los nuevos agentes del poder estatal. Poco a poco, el problema del modelo económico se convirtió en el centro del debate. Para enfrentar este nuevo modelo, los empresarios impulsaron el voto negativo a la nueva constitución. Rechazaron el nuevo régimen de desarrollo que establecía “el reparto igualitario y equitativo de los frutos del desarrollo y de los medios de producción”. Así mismo, rechazaron el modelo económico consignado en el artículo 276 de la nueva constitución, pues el igualitarismo allí establecido,

¹²³ A mediados de noviembre de 2008, Correa responsabilizó a los Alarcón de la incautación de sus empresas, por falta de claridad en la propiedad. Para Correa, “Resulta que los accionistas de Toni (una de las incautadas) para eludir impuestos y no pagar impuestos por la herencia, eran dos empresas de Panamá. Como esas dos empresas son hechas por los mismos abogados panameños, los directores eran los mismos que los de las empresas de los Isaías”. Agregó Además que “Los Alarcón no lograron probar la real propiedad, aunque si demostraron que ellos constituyeron las empresas en Panamá; “ Por eso se les devuelve, pero en realidad no hay una demostración contundente. Frente a la duda, se les devuelve”. Afirmó Correa. El Universo, 2008-11-16, pág. 5)

¹²⁴ Vinicio Alvarado, es el responsable de parte del Estado, de la revisión de las propiedades incautadas.

¹²⁵ Para Blasco Peñaherrera, este hecho fue un duro mensaje para el empresariado ecuatoriano. A partir de este momento, se habría generado un ambiente de miedo e incertidumbre. Cualquiera podría ser auditado e incautado. Para el dirigente gremial, esto contribuyó a una adaptación de muchos empresarios a las orientaciones económicas y políticas del gobierno, más guiados por el miedo que por la comunión de intereses y miradas (Blasco Peñaherrera, comunicación personal, 23 de junio de 2013, Quito)

generaba “explotación del buen trabajador por el vago”. En un análisis de la Cámara de Industrias de Guayaquil, se llegó a afirmar que, de acuerdo con el texto del citado artículo “un pequeño artesano con un bien de capital, como una prensa, por ejemplo, tendría que compartir su herramienta de trabajo con quien el Estado disponga” (El Universo, pág. 4, 2008-08-21) Este tipo de lecturas simplistas, que defienden la supuesta meritocracia sobre la que se edificaría la economía capitalista, es una muestra de parte de la campaña en contra de la nueva constitución, a través del miedo. Para algunos, de hecho, con la propuesta de la nueva Constitución Política, se volvía al modelo de los años 70, a un modelo que fracasó rotundamente, tal como lo afirmó Roberto Aspiazú, del CEE. Ese retorno al modelo económico estatista de los años 70, ahuyentaría las inversiones y no era claro cómo se fomentaría la producción (El universo, pág. 9, 2008/07/25).

El proceso de convocatoria al referéndum para la aprobación de la nueva constitución se convirtió de este modo, en una prueba para los empresarios y otros actores políticos de oposición. Las Cámaras de Industria y Comercio de Quito y Guayaquil, así como el CEE, se involucraron directamente, cuestionando, tanto la legitimidad de la ANC, como el régimen de transición que la misma ANC, definió. Para las cámaras, este régimen permitía la discrecionalidad del gobierno en el nombramiento de muchos funcionarios de alto nivel, como los miembros del poder legislativo, las autoridades del TSE, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defensor del pueblo, etc. Se pidió al TSE que sólo se autorizara la aprobación de la nueva constitución, pero no del régimen transitorio. De hacerlo, afectaría la democracia ecuatoriana. Afirmaron, de manera ambigua, que no eran actores políticos, y no harían campaña ni por el Sí, ni por el No, pero, abrirían espacios para discutir el contenido de la nueva constitución (El Telégrafo, pág. 4, 2008/08/15).

El tercer sector “en la mira” de las reformas legislativas impulsadas por el gobierno y ejecutadas por la ANC, estuvo el sector financiero. Correa impulsó, a partir de mayo de 2008, la Ley de Seguridad Financiera (Vistazo, pág. 28, 2008/05/01). Como con la mayor parte de cambios promovidos por el gobierno, los empresarios y, en este caso particular los banqueros, vieron esta ley como un atentado a la “estabilidad jurídica”. Como respuesta, pusieron cada vez más restricciones para el otorgamiento de créditos. Una vez Gana el Si, aprobatorio de la nueva constitución, Correa destacó la importancia de una Ley de seguridad financiera para evitar crisis como la de fines de los 90, que le habría costado al Ecuador el 21% del PIB.

Otros dos temas que motivaron la preocupación de los empresarios fueron la política Comercial y el presupuesto del Estado, dentro de los lineamientos de la nueva Constitución

Política. Sobre lo primero, se hace referencia al Artículo 304, que plantea 6 objetivos para la política comercial: “el primero es desarrollar y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”. Otros objetivos son impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial, fortalecer la producción nacional e impulsar el desarrollo de las economías de escala y de comercio justo. En tanto, el artículo 305 determina que la creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función Ejecutiva. La preocupación de los empresarios es que con este tipo de medidas se puede excluir la participación privada. Esto pensaba Carlos Ribadeneira, de la CPIP y es compartido por Joaquín Zeballos empresario y político Guayaquileño.¹²⁶ Para el exportador Eduardo Ledesma, los criterios para la fijación de aranceles deben ser técnicos y objetivos. Todos coinciden en la necesaria participación del sector privado y el uso de criterios técnicos. Pese a todas las críticas, e incidentes en el proceso (o tal vez gracias a estas y estos) la NCPE, fue aprobada con más del 60% de los votos a finales de septiembre de 2008. La concentración del poder en el manejo de la política económica, por parte del presidente es lamentada por representantes del sector empresarial, como Eduardo Cadena, director del Consejo de Cámaras y del Centro de Estudios Económicos de la CCQ. El abandono de los criterios técnicos es lo más grave, desde su punto de vista. (Semanao Líderes, pág. 3, 2008/09/29).

De este proceso Rafael Corea salió muy fortalecido. A partir de este momento, contará con un respaldo popular también sin precedentes. Resultado de la nueva constitución, el año 2009, fue el escenario para un proceso electoral en el que, por primera vez en mucho tiempo, un presidente resultara elegido en primera vuelta. Además, logrará la mayoría en la Asamblea Legislativa, lo que le permitirá acumular aún más poder que antes, al controlar el poder legislativo. Este dominio en el control de las instituciones del Estado, se complementará con las reformas a la función judicial del Estado, lo que le permitirá controlar o subordinar a los entes de control y al aparato de justicia. Todo esto proyectará a Rafael Correa, a una posición privilegiada para el ejercicio del poder. De éste hará uso para buscar la profundización de la reconfiguración de la política y la economía ecuatoriana. De este poder emanarán también los conflictos con las élites empresariales y con otros actores sociales y políticos. A partir de esta acumulación de poderes, fortalecerá la autonomía del Estado frente a todos los actores

¹²⁶ Fue presidente de la Cámara de comercio de Guayaquil por 6 años, Ministro de Comercio, Industria y Productividad en el gobierno de Alfredo Palacios, Presidente de la Junta Cívica (El Telégrafo, 2017/10/15. Edición digital en: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/1/joaquin-zevallos-un-empresario-que-se-viste-de-coach>.

sociopolíticos. Pero dos problemas se derivarán de esta concentración del poder. Dado el carácter inorgánico del movimiento que lo acompaña, se presentarán conflictos en su interior. Correa impondrá su voluntad o, al menos esperará que esta se imponga frente a otras miradas del proceso político. El autoritarismo, se convertirá entonces en la forma en que Correa adecúa, permanentemente el aparato estatal, al juego de las contradicciones y las vicisitudes políticas y económicas. La Constitución de 2008, que legitima su poder será reformada a través de enmiendas y referéndums consultivos. Esto traerá disidencias y conflictos que estallarán cuando éste deje el poder a partir de 2017. Un segundo problema, es el de la corrupción y la falta de control social y político sobre los funcionarios del gobierno. Varios de sus funcionarios más allegados (en lo personal, más que en lo académico y político, de donde se configura la revolución Ciudadana), se verán implicados en comportamientos dolosos que la prensa explotará de la mejor manera, minando progresivamente la legitimidad lograda por el gobierno y disminuirá su potencial hegemónico

Con este capital político acumulado y con un estado fortalecido en lo económico, a partir de 2009, la “gerencia” del cambio radicalizará su discurso. Esto traerá conflictos con las élites empresariales, pero también procesos de adaptación de estas, como veremos a continuación. La búsqueda de conducir al país la modernización económica, se verá amenazada, precisamente porque las élites, pese a que asumen un papel defensivo, no verán menguado su poder estructural. De hecho, como hemos visto, este se mantendrá intacto o incluso se verá fortalecido. Esto debilitará el proyecto hegemónico de la revolución ciudadana: el personalismo, la instrumentalización del aparato de Estado para generar rentas por parte de funcionarios y aliados del gobierno y, por supuesto, la instrumentalización y adaptación de las élites empresariales, servirá de base para debilitar a la Revolución Ciudadana.

6.5. Las élites empresariales en la “Consolidación” de la Revolución Ciudadana

Una vez Correa logra la reconfiguración (parcial) del Estado, la tarea, será la profundización de la transformación económica. En un ir y venir, de la economía a la política, la estructura institucional tendrá que ser reformada constantemente para poder enfrentar una realidad difícil de domesticar y una pluralidad de voces difíciles de subordinar o de articular. En el campo económico tres elementos, argumentamos, definieron las reacciones de las élites empresariales. En primer lugar, Rafael Correa le dio continuidad, esta vez, con relativo éxito, a las iniciativas del anterior gobierno de buscar más recursos económicos a partir de la renegociación de los contratos con las petroleras extranjeras. Al mismo tiempo, buscó darle mayor protagonismo a la estatal petrolera, Petroecuador, a través de un proceso de

modernización, que no siempre funcionó. En los primeros años, esto significó, como vimos, un incremento de la renta petrolera para el Estado Ecuatoriano y mayores recursos para la inversión pública. En segundo lugar, le dio un protagonismo sin precedentes al Servicio de Rentas Internas. Esta institución bajo el liderazgo de Carlos Marx Carrasco, incrementó su capacidad de recaudación de manera inédita. Para el logro de este incremento de los recursos provenientes de la tributación, fue fundamental contar con un marco institucional, favorable. El control de aparato legislativo le facilitó llevar a cabo varias reformas tributarias. Con estas dos fuentes de recursos, sumadas a un proceso de endeudamiento externo, con nuevos actores internacionales, garantizó un incremento de la participación de los recursos del Estado en el PIB, nunca vivida en el Ecuador. Con estos recursos a la mano, llevó a cabo las inversiones en infraestructura, educación, salud, saneamiento básico, sólo comparables con las hechas en los años 70, en el boom petrolero, pero superando con creces lo hecho en el pasado. Así mismo, promovió lo que es el tercer elemento de su política económica y que es, puede decirse, su apuesta central: la búsqueda de repotenciar y modernizar el aparato productivo nacional. ¿Qué logros obtuvo el gobierno en este caso? ¿Cómo reaccionaron las élites empresariales a este nuevo escenario político y a la apuesta por reorientar al estado y la economía ecuatoriana?

Para responder estas preguntas, en primer lugar, es importante analizar el crecimiento económico ecuatoriano, medido en PIB. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, el Ecuador manifiesta un crecimiento altamente inestable, entre el 2007 y el 2016. Desde el año 2004, la economía ecuatoriana había desacelerado su crecimiento, pasando del 8.2% a algo más del 2.2 % en 2007.¹²⁷ A partir de este año, sube 6.2%, para descender nuevamente, por debajo del 1% en 2009. La economía se recupera nuevamente, teniendo varios años de crecimiento más o menos sostenido, hasta el 2011, cuando alcanza el 7.8%. Siguen dos años de crecimiento positivo (aunque inferior al alcanzado en 2011 y luego un desplome, hasta el año 2016, cuando vive un crecimiento negativo, de alrededor de -2.5%. En promedio, la tasa de crecimiento apenas llegó al 3.33%, mientras en el periodo que va del 2000 al 2007, la tasa fue casi un punto porcentual más, en promedio 4.55%.

Como puede verse, esta evolución de la economía ecuatoriana se corresponde con el movimiento de los precios internacionales de los *comodities*, lo que mostraría una dificultad para desarrollar políticas anticíclicas y para transformar la estructura productiva, que, como se mencionó antes, no fue significativa (BID, 2018). Ahora bien, éste análisis debe ser

¹²⁷ Ver: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&locations=EC-BO-CO-CL&start=2000&view=chart>

completado con algunos cambios importantes en el desarrollo de la economía ecuatoriana. Uno de estos, es el que tiene que ver con la inversión extranjera. Si bien históricamente ésta había sido baja en el Ecuador, a partir del año 2007, esta desciende aún más. En términos porcentuales, el promedio de la Inversión Extranjera Directa, en el periodo de gobierno de Rafael Correa, casi que se estanca en todo el periodo y no logra superar los USD 1.299 a los que llegó en 2015. La inversión acumulada, de 2007 a 2016, apenas llegó a los USD 4.956 millones.

Las dificultades para atraer inversión extranjera, así como el estancamiento o la reorientación de la inversión privada, contribuyó a que la inversión pública se convirtiera en la fuente principal de inyección de recursos y motor central del crecimiento económico. De esta forma la inversión se hace difícilmente sostenible, pues las fuentes de financiamiento del gobierno central se agotan progresivamente, sobre todo a partir del año 2011. El déficit en el financiamiento de los gastos del gobierno es constante y este tiene que cubrirse, la mayor parte de las veces, a partir de endeudamiento y presión fiscal. En algunos casos, incluso, se busca disminuir el gasto y fortalecer la inversión privada, como en caso del año 2011, a través de la construcción de un Código de la Producción y, a partir de 2015, con una nueva Ley de articulaciones público-privadas. Aunque estas medidas pudieron haber reportado un incentivo para la inversión, la misma no representó un porcentaje significativo en el volumen total de inversiones. El sector público fue en todo el periodo el que dominó las inversiones.¹²⁸ Desde esta posición dominante en lo económico, el gobierno pretendió subordinar a las élites empresariales. Estas, más que subordinarse, se adaptarán al nuevo escenario y aguantarán “pacientemente” a que éste se debilite. Sin embargo, esta resistencia, usará distintos medios para minar ideológicamente los soportes políticos del gobierno.

6.6. Elites empresariales ecuatorianas. Entre el rentismo y el combate ideológico.

Como hemos visto, uno de los primeros temas que convoca a la resistencia de los empresarios es el incremento del poder del SRI. Esta institución se convirtió desde los primeros años del gobierno en una herramienta para el incremento de la presión fiscal, así como para el combate del poder de las élites. Las denuncias de evasión de impuestos se hicieron frecuentes, para legitimar la intervención de esta institución. Desde este lugar, el Gobierno cuestionó la legitimidad de la riqueza de algunos empresarios afirmando que ciertos sectores, eran evasores sistemáticos. Ambientando la primera reforma tributaria que impulsa el gobierno y

¹²⁸ El volumen de inversiones de sector público habría llegado, entre el 2007 y el 2016, a los USD 80.647 (Márquez, Carriel y Salazar, 2017)

que generó la dura resistencia empresarial, El gobierno inició el combate por los impuestos, afirmando que un 96% de los constructores no pagaban Impuesto de Renta y que, en el sector comercial, esta llegaba al 30%. (El Telégrafo, pág. 7, 2007/09/14).

Poco tiempo después, Carlos Marx, Carrasco anunciaba la auditoría a 156 grandes empresas y plantea que la evasión de estas ascendía a los 2.000 millones de dólares¹²⁹. El funcionario reafirmó en este momento que los sectores que más evadían impuestos eran: construcción, con un 92%, la intermediación financiera que llega al 82% y la industria, con un 66%. Además, afirmó que la evasión del grupo Noboa, podía llegar al 99%, la del Grupo Wong y del sector bananero, que debió pagar 1.77 millones de dólares, pero pagó apenas 25.000 dólares estarían en cifras similares. A inicios del mes de noviembre de 2007, Correa se refirió a la evasión de las compañías prestadoras de telefonía celular en estos términos:

¡Es de llorar! Ni la madre Teresa de Calcuta se sacrifica tanto. Trabajaron a pérdida cinco años y pagaron cero de impuestos... Señores de Porta, se les acabó la fiesta. Hasta diciembre tenemos que renegociar las concesiones. Si no les gustan las nuevas reglas de juego, que les vaya bonito. Les compramos los fierros y seguimos con el negocio. El Telégrafo, pág. 7, 2007/11/18

Estas declaraciones se hacen en el marco del fin de los contratos definidos desde 1999, con las dos compañías de telefonía móvil más grandes del Ecuador: Porta (ahora Comcel) y Movistar, que para 2007, ya controlaban el 90% del mercado ecuatoriano¹³⁰.

La batalla por los impuestos, sin embargo, como hemos visto representó una de las primeras conquistas del gobierno. Pero una conquista en la que tendrá que negociar frecuentemente con los empresarios. A partir de esta batalla, el gobierno buscará enfrentar dos procesos. En primer lugar, el incremento de recursos para el estado, para la redistribución de la riqueza. En segundo lugar, se convertirá en parte de la estrategia para enfrentar el déficit permanente en la

¹²⁹ Roberto Aspiazú, manifestó en una entrevista para esta investigación que las auditorías se convirtieron en un mecanismo de presión para silenciar a los empresarios. Para el dirigente empresarial, cada vez que hablaba un empresario en los medios de comunicación sobre la política económica o fiscal del gobierno, se convertía en objeto de intervención del SRI (Roberto Aspiazú y Henry Kronfle, comunicación personal 13 de junio de 2013). Llama la atención que en esta observación coincidió en Bolivia, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar de la Barra. Para el dirigente empresarial boliviano, el gobierno perseguía a sus opositores a través de interventorías de parte del Sistema de Impuestos nacionales. (Mario Yaffar, comunicación personal, 4 de abril de 2014)

¹³⁰ Uno de los primeros conflictos que el gobierno enfrenta por acusaciones de evasión, es con las empresas de telefonía privadas. A finales del año fue cada vez mayor la presión del gobierno para que las empresas de servicios de telefonía pagaran impuestos atrasados. Porta, actual Claro, se defendió demandando a través de la CCG al estado para detener las sanciones impuestas. Lo que buscó el gobierno fue acabar con los contratos. El gobierno contraatacó desconociendo el arbitraje pedido por Porta a través de la CCG. (El Telégrafo, pág. 7, 2007/11/18)

balanza comercial no petrolera e incentivar la producción nacional. Esto generó conflictos constantes con empresarios y el rechazo generalizado de las grandes cámaras de la producción, que consideraron las medidas como un atentado a la seguridad jurídica, a los costos de producción y a la competitividad y a la inversión extranjera.

El rechazo a las reformas tributarias del gobierno se acompañó de la búsqueda de negociaciones con el gobierno, para discutir la política económica en general, así como ciertas medidas específicas. De este modo, los empresarios gestionaron reuniones, directamente con Correa o con alguno de sus ministros o con el vicepresidente Lenin Moreno. La mayor parte de estas reuniones, trataron sobre temas sectoriales. La política en general no es algo que discuta Correa. Así, Correa se reúne con representantes de la Banca privada, quienes le piden eliminar el 1% de impuestos a los créditos, pues estos, a su juicio encarecían los costos para los clientes. Le sugieren así mismo que alivie la carga de tributos que pagaba la banca y pidieron reformas legales y una nueva ley de quiebras. (El Telégrafo, pág. 7, 2007/11/21).

Los empresarios de la Federación de Cámaras de la Producción, organismo que reúne a las más grandes cámaras de comercio e industrias del país, tuvieron que conformarse con un encuentro con Lenin Moreno el 23 de octubre de 2007, para tratar temas que pudieran vincularse a las discusiones de la nueva constitución. En esta reunión los empresarios piden reactivar los diálogos con EE.UU y cuestionaron el incremento de aranceles para la importación de 567 productos. Lenin Moreno, en representación del gobierno defendió la medida como un apoyo a la industria nacional (el Universo, pág. 4, 2007/10/24). A inicios del mes de noviembre, Lenin Moreno vuelve a reunirse con los empresarios a quienes garantiza el respeto a la propiedad privada y gestionar negociaciones con Estados Unidos, para garantizar la renovación del ATPDEA (El Comercio, pág. 4, 2007/11/06)

Pese a estas ofertas del vicepresidente de buscar acercamientos con Estados Unidos, el gobierno no hizo mucho por renovar las preferencias arancelarias. Varios funcionarios de alto nivel de Correa se manifestaron en contra de “rogar”, “mendigar” y plantearon que las Preferencias eran la contrapartida de EE. UU, por la lucha del Ecuador contra el narcotráfico. El Lobby, para el gobierno, era responsabilidad de los empresarios y afirmaron que lo veían con “*simpatía*”, pero que el gobierno no haría nada en esa dirección (El Telégrafo, pág. 6, 2007/11/07).

Además de buscar un más rentable y eficiente sistema tributario, para poder adelantar las políticas sociales y la inversión pública, el gobierno promovió una política de protección de la

industria nacional a partir de medidas arancelarias. Esta es probablemente la lucha perdida por el gobierno. Así, a comienzos del mes de noviembre, 259 productos de importación fueron afectados con alzas en los aranceles, ante la queja de las Cámaras de comercio, por lo que consideraron una medida inconsulta. Para Teodoro Maldonado, de la Federación de Cámaras de Comercio, “este aumento de aranceles es una mala señal para el proceso de negociación que lleva adelante la Comunidad Andina de Naciones con la Unión Europea”(El Comercio, pág., 9, 2007/11/02). La disputa por las medidas de comercio exterior tomadas por Correa, continuaron en noviembre de 2007. Para enfrentar las medidas de Correa, las cámaras contaron con la prensa como aliada. Así, bajo el título de “Consumidor pagará el alza de los aranceles, dicen importadores”, el periódico El Universo presentó un informe en el que expone el nerviosismo en los consumidores y el desconocimiento general de qué ítems habían sido incluidos. El periódico cuestiona también los incrementos a los impuestos de importación para los celulares. Pero también cuenta historias de pequeños productores que dudan de los beneficios de las medidas del gobierno. Se recalcan las críticas de las cámaras y califican el alza de aranceles como un grave error. (El universo, pág. 12, 2007/11/04). En esta disputa por las medidas arancelarias, el gobierno generó sus propios aliados. Así, frente a las críticas de los grandes empresarios, Correa recibió el respaldo, con marcha incluida, de los artesanos de la Junta Nacional del Artesano, el 10 de noviembre. Con este respaldo recibido, frente a los manifestantes, Correa defendió el incremento de los aranceles, “criticó a algunos sectores productivos y enfatizó, que ya es hora de que en el país se diga la verdad. ‘No son esas cámaras de Comercio, de la Producción las generadoras de empleo sino el principal sector generador de empleo, se llama sector artesanal’- (El Telégrafo, pág. 3, 2007/11/07).

Como se ha afirmado, además de medidas arancelarias, el gobierno impulsó políticas de financiamiento a ciertos sectores que consideró prioritarios. Uno de estos fue el camaronero. Para Correa, el impulso de este sector fue el resultado del análisis en el contexto del mercado local, así como del mercado internacional. (El Universo, pág. 8, 2008-06/23). Este tipo de incentivos se amplió a fines del mismo mes a otros 9 sectores que el gobierno consideró estratégicos. De acuerdo con El Comercio, la idea era hacer crecer los mercados internos y externos, algo que los grandes empresarios, como vimos antes, consideraban una equivocación. Los sectores priorizados fueron: Acuicultura, flores, biocombustibles, silvicultura con madera y muebles, frutas y vegetales procesados, pesca, servicios de consultoría y software, metalmecánica, turismo, transporte y logística. El presidente de la Cámara de Acuicultura, César Monge, planteó al respecto que no se trataba sólo de dinero,

sino de acciones integrales. El gobierno se comprometió a invertir 16 millones en los siguientes tres meses (El Comercio, pág. 9, 2008/06/27). La protección de estos sectores de la economía llevaron al gobierno a que, a mediados de julio de 2008, 282 productos fueran incluidos en la reducción a cero los aranceles de ingreso. Esto con el fin de beneficiar a un sector afectado por inundaciones, así como el alza de los precios internacionales de insumos.

Ahora bien, pocos días después se publicó una nota que resalta la no invitación de los representantes de las más grandes asociaciones empresariales a este tipo de reuniones a las que asisten industriales y empresarios de distintos sectores. No se invita ni a la CCG, ni a la CCQ, tampoco a la CIP, ni a la CIG. Esta exclusión fue cuestionada por uno de los invitados recurrentes a estas reuniones: el empresario Roque Sevilla. Para el empresario del turismo, luego de valorar los encuentros con el presidente, considera que en esas reuniones pudieran ser '*más efectivas*' si se permitiera la participación de los dirigentes. “Los gremios tienen planteamientos que tienen que ver con las políticas macro, que son de interés general, pero -al parecer- eso no le interesa escuchar”. Esta interpretación muestra, efectivamente, la manera como Correa lleva a cabo el gobierno. Él es la representación de las mayorías, por tanto, sus orientaciones son las que priman, en lo que a política macro se refiere. Pero el encuentro con los empresarios da cuenta también de un combate político ideológico; una forma de desmovilizar a las cámaras como agentes políticos o, al menos de tenerlas fuera del debate con los empresarios. Ahora bien, los dirigentes empresariales, al menos públicamente no reconocieron esta estrategia como efectiva para distanciarlos de sus representados. Al respecto, Patricio Donoso, manifestó que, pese a que reconocía como valiosas estas reuniones, para que Correa se informara de primera mano de los problemas del sector “que genera empleo y fuentes de trabajo”, también debía escuchar a los dirigentes, pues estos no hacían “política partidista”, sino que eran “hombres y mujeres de empresa” que promovían políticas para el fortalecimiento del desarrollo. “El Comercio, pág. 7, 2008/09/04”

Este discurso, es tal vez el más reiterativo. El crecimiento de la producción es asumido como desarrollo, algo que es propio del discurso liberal. En la práctica, esto regularmente no es así, como se ha visto en perspectiva histórica, sino que fortalece la concentración de la riqueza y el poder. El discurso liberal fue históricamente el sustento del fortalecimiento de las oligarquías regionales. Ahora, pese a esta marginación de los dirigentes empresariales, las relaciones tendrán un ir y venir constante. En el mes de septiembre de 2008, Rafael Correa volverá a reunirse con empresarios, con el fin de evaluar la aplicación del decreto 1285, que estableció techos para ciertos alimentos. La idea del gobierno fue dar a conocer los programas

del gobierno para frenar la inflación (El Comercio, pág. 7, 2008/09/04, El Telégrafo, pág. 4, 2008/09/04).

Así las cosas, las medidas arancelarias y la promoción de la producción nacional, tanto para el consumo interno, como para la exportación, el problema de la balanza comercial fue uno de los temas más difíciles que tuvo que enfrentar el gobierno desde el principio hasta el final. La mayor parte de las medidas tomadas, los éxitos van a ser muy limitados. Por el contrario, lo que se evidencia es un crecimiento sostenido de las importaciones. Varias medidas se tomaron para desestimular la importación de bienes de consumo e incrementar la importación de bienes de capital y materias primas. Sin embargo, no fue posible reducir la importación de los primeros. Lo limitado de estas medidas se vio pronto y los medios de comunicación estuvieron ahí para hacerlo visible. De acuerdo con El Comercio el primero de noviembre de 2008, “Los datos del Central revelan que las importaciones de bienes de capital crecieron en un 30% y las materias primas en el 40% los siete meses de este año (Enero-junio). Mientras los bienes de consumo llegaron al 35%. Es así que de los USD 9340.1 millones que se importaron entre enero y julio del 2008, el 25% fue de bienes de capital y el 26% de materia prima” (El Comercio, pág. 6, 2008/10/01). Esto significa que el 49% restante fue empleado en la importación de bienes de consumo, lo que a la postre significa una fuga de capitales muy significativa.¹³¹

A los problemas de la economía nacional, a finales de 2008, se sumaron los derivados de la crisis financiera de los Estados Unidos. Esto sirvió para que el gobierno se reuniera con exportadores de flores, quienes manifestaron su preocupación por la reducción de pedidos y el incremento de la demora en los pagos del mercado de los Estados Unidos. El gobierno, les aseguró buscaría soluciones o al menos medidas que no afectan tan duro al sector exportador. Anunció que se reunirán también con cacaoteros y bananeros para buscar soluciones ante la eventual crisis (El Telégrafo, pág. 8, 2008/10/09. A lo largo de este mes, se produjeron varias reuniones entre el gobierno o sus delegados y tuvieron el propósito de buscar concertar políticas de incentivos a los exportadores de flores y producción agropecuaria (El Comercio, pág. 8, 2008/10/23).

¹³¹ A esto habría que agregarle el cuestionamiento por el tipo de “bienes de capital” y de “materias primas importadas. La mayor parte estarán orientadas a la producción, no de nuevos bienes de capital, sino de bienes de consumo y su sostenibilidad en el tiempo estará amenazada por la capacidad de consumo local, que a su vez depende de los ingresos petroleros y del endeudamiento, particularmente, que son los que sostienen a lo largo de todo el periodo, las inversiones y el crecimiento del consumo nacional.

Para fines de octubre la situación se había agravado y el gobierno buscó medidas tributarias para favorecer al sector exportador. Abrió líneas de crédito para sostener a los empresarios afectados por caída de la demanda de los Estados Unidos y los retrasos en los pagos de compradores en este mercado. Además de esto, tomó 5 medidas de ayuda para los exportadores: USD 1.100 millones de créditos a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN), sin restricciones para sector o compañías, ni montos mínimos o máximos requeridos; 2. Devolución del IVA, en 72 horas, desde enero; 3. Reducción del tiempo de aforo aduanero; búsqueda de nuevos mercados; 4, 80 millones para devolver impuestos a importadores de materias primas para producir bienes exportables y; 5. Más reuniones con sector empresarial.

El mismo presidente se reunió a comienzos de noviembre con las Cámaras de Cuenca y Azuay. Allí destacó la importancia de la “cohesión social, con la participación de las empresas públicas y privadas, del sector académico, para romper con el bicentralismo (sic), la postergación y la indiferencia”. En similar dirección, se refirió a los incentivos a la producción, como la eliminación de aranceles para más de 2500 productos y sostuvo que había que fortalecer el Estado para que este apoye al sector productivo. Las medidas anunciadas no generaron la satisfacción de todos los afectados, lo que mostró las debilidades de la gestión de demandas sectoriales que estableció el gobierno de Correa.¹³² Continuando con la búsqueda de articular esfuerzos para enfrentar la crisis, a mediados de noviembre, Rafael Correa se reunió con representantes de los gremios exportadores e industriales de Guayaquil (El Comercio, pág. 6, 2008/11/18, El Universo, pág. 8, 2008/11/1). En la reunión, en la que participó la banca, (Guillermo Lasso entre los más importantes banqueros), se ofrecieron beneficios para el sector financiero para reactivar el crédito (suspensión de la reducción de las tasas de interés), flexibilización de procedimientos para el comercio exterior, entre otros. (El comercio, pág. 1, 2 Y 5, 2008/11/19). En esta reunión, por primera vez, Correa se reunió con representantes de la Cámara de Industrias de Guayaquil, así como de la Cámara de Industriales de Pichincha y de la Pequeña Industria de Guayaquil, junto a empresarios ganaderos, bananeros, de la industria exportadora de flores, entre otros (El Comercio, pág. 14, 2008/11/23) Cinco medidas se definieron en la reunión para proteger la economía nacional.

¹³² Uno de los productos desgravados fue el maíz y esto afectó a los productores nacionales. A mediados de noviembre se quejaron de la liberación de importaciones de maíz y sorgo y pidieron elevar los aranceles para este producto y facilitar la exportación del grano por la posible sobreproducción que no encontrará demanda en el mercado nacional. (El Telégrafo, pág. 8, 2008/11/18). Las peticiones de los arroceros fueron acatadas por el gobierno y, para el 23 de noviembre se hizo pública la autorización de exportar 10.000 toneladas métricas de soya y arroz. Los arroceros lamentaron que esta decisión se haya tomado tan tarde (El Telégrafo, pág. 2, 2008/11/23).

Fiscales, bancarias, financieras, comerciales y empresariales. Entre las medidas financieras, se aprobaron 600 millones de dólares para la promoción del comercio exterior, 100 de la CFN, y 500 de un préstamo con el BID. Determinó, dentro de los beneficios financieros, que camaroneros, cafeteros y bananeros no pagaran el anticipo de renta durante el 2009; anunció que pedirá beneficios al sector financiero a cambio de que fortalezcan el crédito; incrementará el impuesto de renta el 0.5% al 1%, para mejorar la liquidez interna. Se instruyó al COMEXI, para que prohibiera la importación de productos que compitieran con los productos nacionales, dentro de los marcos normativos de la OMC; se flexibilizaron normas de protección ambiental para las camaroneras (suspendida la obligación de reforestar), entre otras medidas. La mayor parte de los asistentes se mostró satisfecho con las medidas presentadas por el gobierno, salvo Guillermo Lasso que criticó el incremento del impuesto a la salida de capitales, pues para éste dificultaba la entrada de inversión extranjera. (El Telégrafo, pág. 3, 2008/11/19).

Además de estas medidas se anunció, pocos días después, el incremento de aranceles para productos suntuarios pues, para Correa, esto estaba afectando la economía nacional, afectando la balanza comercial y la balanza de pagos. Los recursos del petróleo y de las remesas, afirmó, estaban saliendo del país para comprar bienes de lujo y la cifra llegaba a los 1.200 millones; dinero usado para importar “chicles, caramelos, hojas de choclo, muñecas chinas y perfumes”. Efectivamente, tal como lo reconocía el presidente, para el 2007, el Ecuador había importado 12.895 millones, con un incremento del 14.4% frente al 2006. De enero a septiembre de 2008, la cifra iba ya en 12.703 millones, lo que preocupaba al gobierno (El Universo, pág. 8, 2008/11/22). Para el 24 de noviembre, una nueva reunión se produjo en Cuenca entre el Ministro de Industrias y Competitividad Xavier Abad, para presentar los planes de incentivos al desarrollo productivo. Los empresarios se mostraron esta vez cautelosos, pues no tenían claro a qué grupo de productos se iba a incrementar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que había anunciado Correa como mecanismo para evitar la salida de capitales. (El tiempo, 2008/11/25).

La política comercial del gobierno fue cuestionada en este momento por Blasco Peñaherrera, presidente de la CCQ, para quien sólo con aranceles a materias primas y bienes de capital no se resolvían los problemas de la economía ecuatoriana. Para él, más importante era disminuir los costos generales de la producción para lograr mejores niveles de competitividad de productos exportables. Para el dirigente gremial, el gobierno, además debía reducir los gastos en que había incurrido en acciones irresponsables y ahora que la “chequera se encogió”, era

difícil salir de la crisis (Vanguardia, pág. 18, 2008/11/25). A pesar de estas críticas, el COMEXI, determinó el incremento de aranceles a productos considerados de Consumo Especial o bienes suntuarios. Aunque inicialmente se había hablado de 800 productos, finalmente fueron 940 los incluidos en la lista. El SRI, recaudará 85.5 millones de dólares con la medida. Con esto, además, se pensó desestimular las compras externas que, por estos productos representan USD 1.051 millones de dólares y favorecer el consumo de productos locales. Frente a estas medidas, nuevamente Blasco Peñaherrera manifestó “sentirse preocupado, pues habrá más contrabando y competencia desleal. Los productos entrarán por canales que no son legales y eso afectará al Fisco, hasta que no se tenga un verdadero sistema de control del contrabando”. (El Comercio, pág. 6, 2008/11/27). Se cuestionó la medida debido a que se excluían del cobro de impuestos a los productos comprados en países con los cuales Ecuador tenía tratado de libre comercio, como los miembros de la Comunidad Andina. La medida, para Blasco Peñaherrera y Roberto Aspiazu, incrementaría las compras a estos países y no beneficiaba a la industria nacional.

De éste modo, el tema de los aranceles, no generó consenso entre empresarios. Para los grandes industriales, la medida perjudicaba a la economía, para los pequeños era benéfica. Algunos usaron la crisis, para presionar la baja de los costos de producción, entre estos, los costos de la mano de obra y de los insumos. Esto se deriva de las opiniones de Manuel Muñoz Paz, presidente de la Asociación de importadores y Comerciantes de Guayaquil. Por su parte, el presidente de la Cámara de la Pequeña industria de Guayas (CPIG), Renato Carló, esta era “una medida excelente porque permitirá mejorar la productividad de la industria local”, así como incrementar el empleo, y fomentar el consumo de lo nacional (El Telégrafo, pág. 8, 2008/11/29).

Además de las medidas tomadas para enfrentar la crisis, antes mencionadas, la Corporación Financiera Nacional (CFN), abrió líneas de crédito para industria, turismo, comercio, transporte y producción camaronera, por un monto de 440.1 millones. Con esto, se movilizaron entonces, sólo en la segunda mitad de 2008, más de USD 1.500 millones de dólares para contribuir al desarrollo de la industria nacional y para enfrentar la crisis financiera internacional. Como complemento y a pesar de las críticas de movimientos indígenas y ambientalistas, el gobierno comenzó el impulsó la minería a gran escala, que buscaba aprovechar un potencial calculado en 220 mil millones de dólares, de acuerdo a la Cámara de Minería del Ecuador y así atraer mayores recursos de inversión extranjera. (El

Universon, pág. 5, 2008/12/02). Estas políticas fueron cuestionadas y se acusó al gobierno de seguir el recetario de los organismos multilaterales.

En el contexto de preocupaciones, se conoció la noticia de la exclusión de las negociaciones de la UE, a Bolivia y Ecuador, para firmar un acuerdo comercial. La negociación había iniciado en 2007, pero se había suspendido a mediados de 2008, por la negativa de estos dos países de abrir más sus mercados y por los desacuerdos en temas como propiedad intelectual, biodiversidad, comercio y desarrollo sostenible. Esto habría llevado a la UE, a negociar bilateralmente con Colombia y Perú.

Con todo esto, la crisis se acercaba y el año 2009 fue un año de contracción de la economía mundial y el Ecuador no estuvo exento. Como una de las salidas a la crisis, el gobierno pidió a los banqueros a fines de 2008, que repatriaran los recursos que tenían depositados en los EE. UU. Estos afirmaron a través del presidente Fernando Pozo, que percibían “que no era el momento más adecuado para repatriar sus inversiones”. Agregó además que descartaban la posibilidad de prestarle al estado, pues “Rafael Correa ha dicho que en el caso de una crisis dejará de pagar la deuda”. Carlos Marx Carrasco respondió a estas apreciaciones, invitando al sector a repatriar el dinero, pues el país podría ofrecer mayores utilidades, al ser invertido en el aparato productivo. Además, serviría para generar crecimiento y fuentes de empleo (Semanario Líderes, 2008/10/20)

Todo esto también en un escenario en el que había una contradicción entre consumidores y productores. La CCEA, realizó un evento en el que, de acuerdo a estudios de mercado se presentaba una contradicción en la percepción de consumidores y productores sobre la economía ecuatoriana. Para los primeros, la economía estaba bien (un 60% así lo consideraba), mientras que un 62% de los empresarios consideraba lo contrario. Lo interesante de esto es que, además, pone en discusión las tendencias de las inversiones privadas. “pese a que el empresario piensa que la economía está mal, las encuestas sobre sus ventas demuestran lo contrario. El 23% de empresarios dijo que sus ventas están peor, el 43% mejor y el 34% dijo que sigue igual” (El Comercio, pág. 3, 2008-08-06).

Llama la atención de este evento cómo muestra lo que luego se vuelve tendencia. Las medidas del gobierno, a pesar de sus objetivos de incrementar la producción nacional, incentivaron la especulación comercial. Lo más probable es que los empresarios ecuatorianos no hayan visto las ofertas del gobierno de incentivar la producción nacional, como algo probable y sostenible

y por tanto, disminuyeron sus inversiones.¹³³ El “clima de inversiones”, discurso permanente del empresariado de elite, no era propicio para los grandes empresarios y la dirigencia gremial. Lo que los empresarios auguraban, por el contrario, era la fuga de las inversiones en busca de nuevos destinos, pues a sus ojos, el Ecuador no ofrecía estabilidad. Así, los recursos van a pequeños y medianos empresarios que crecen, mientras el Estado puede hacerlos crecer o ayudarlos, pero una vez los recursos disminuyen, la producción de estos pequeños y medianos empresarios también se va a pique y se pierde respaldo social y político.¹³⁴ Así, el compromiso con los grandes empresarios puede servir de base para mantener un crecimiento más sostenido en el largo plazo, tal vez, como se evidencia en el caso boliviano. Algo que no sucedió en el Ecuador de Rafael Correa.

Entre las medidas que el gobierno tomó también para buscar enfrentar la crisis, estuvo el apoyo dado al sector de la construcción, desde mediados del 2008. Frente al cierre de créditos por parte de la banca privada, el gobierno buscó mecanismos de intervención estatal. Uno de estos fue la entrada del IESS, como agente financiero. Este colocó en el mercado inmobiliario unos 600 millones de dólares, para que sus afiliados pudieran acceder a créditos, sin cuota inicial (El Comercio, pág. 7, 2008/08/08). Así, ante el endurecimiento de los requisitos para acceso a créditos de parte de la banca privada, el Estado tuvo que intervenir en otro escenario, con los riesgos que esto implica. Así también, un efecto de las medidas de control de la banca por parte del gobierno llevó a que los banqueros orientaran sus créditos a perfiles de endeudamiento más altos y esto, a su vez se reorientó al sector de la construcción, que dinamizó también la oferta para estos sectores. Se presenta con esto una contradicción tremenda, también en el campo de la inversión, que es parte de la hipótesis de este trabajo: la banca cierra sus puertas a los pobres, se orienta a la clase media y media alta, que puede pagar y puede endeudarse. El gobierno ofrece incentivos para que se cubra un mercado más amplio, pero ni el sector de la banca ni el de la construcción responde. El gobierno impulsa entonces el otorgamiento de bonos o subsidios para acceder a vivienda (El Comercio, pág. 7, 2008/08/08). Con esto, el gobierno amplía su radio de intervención en la economía y, con esto, su vulnerabilidad en términos de poder estructural, pues se va ampliando la descompensación entre los ingresos disponibles y los compromisos que va adquiriendo. Esto

¹³³ Esta es la opinión de Blasco Peñaherrera, particularmente. Para este dirigente gremial, lo que hicieron los grandes empresarios fue “hacer su agosto” a partir de los incentivos y beneficios ofrecidos por el gobierno, sacando, de paso una buena cantidad de dinero del país.

¹³⁴ No obstante, los grandes grupos de poder económico se van a beneficiar de los incentivos tributarios y en metálico, ofrecidos por el gobierno.

lleva a profundizar el endeudamiento externo, como uno de sus efectos y, por tanto, también a incrementar su vulnerabilidad en una economía mundial cada vez más inestable.

Por otro lado, la búsqueda de colocar dinero, por parte del IESS, estaba también basada en el “exceso de liquidez” que debía generar utilidades para poder cubrir, en el largo plazo las obligaciones con los pensionados. Con los créditos hipotecarios, se pretendió matar entonces, dos pájaros de un solo tiro: las dificultades para reactivar la economía, y encontrar una fuente de ingresos sostenible que hiciera, así mismo, sostenible el sistema pensional. Sin embargo, estas medidas generaron desconfianza entre las élites bancarias, pues consideraron que flexibilizar créditos no era buena idea, por riesgos de pérdida de control de cartera vencida. Frente a la no colocación de dinero en el mercado crediticio por parte del sector privado, el líder del gremio bancario César Robalino, planteó que “*los bancos dependen de depósitos a corto plazo*”. A pesar de las críticas de los empresarios, los recursos del IESS, no solo fueron a financiar proyectos de vivienda y por tanto, a dinamizar el sector inmobiliario, por la vía del crédito, sino también en la construcción de hidroeléctricas. (Semanario Líderes, pág. 12, 2008/09/11).

Los intentos del gobierno de promover la inversión y de presionar a la banca para contribuir con la financiación de nuevos proyectos, el tema de la ley de seguridad financiera y jurídica generó también un amplio debate entre banqueros y gobierno, nuevamente a fines de 2008. Para los banqueros, las políticas de Correa eran contradictorias y contraproducentes, pues lejos de incentivar al sector financiero para aportarle liquidez a la economía ecuatoriana, desincentivaba el incremento de créditos y, por tanto, la producción nacional. Los banqueros, a través de Fernando Pozo, dirigente de ABPE y miembro del directorio del Banco Del Pichincha, culpaban a Correa de la falta de flexibilidad en el sistema financiero, pues había incrementado los costos operativos, así como los riesgos. Esto, al final afectaba a los consumidores y a los productores. Una de las medidas criticadas por los banqueros y otros empresarios fue la creación de un impuesto a la salida de capitales del 0.5 en 2007 y luego su incremento al 1%. Esto, lejos de beneficiar la economía, afirmaban los banqueros, la perjudicaba, pues desestimulaba el ingreso de capitales, por los costos de sacarlos, en otro momento. Así mismo, encarecía los costos de los créditos tanto de la banca pública, como del sector privado, adquiridos en el exterior pues, además de los intereses, los deudores debían pagar un impuesto al Estado, a la hora de sacar su dinero del país, para pagar sus deudas. Si bien los límites de las tasas de interés, definidos a mediados de año, habían sido eliminados en el contexto de la crisis financiera internacional, la declaratoria de moratoria de los pagos de

deuda externa por los bonos Global 12, incrementaban los riesgos para el sector financiero y cerraban el crédito externo, dejando un margen de maniobra muy complicado (El comercio, pág. 2, 2008/12/12; El Comercio, pág. 1 y 9, 2008/12/13). De hecho, responsabilizaron al gobierno de genera una disminución de los ingresos en más de 245 millones para el 2008, según Fernando Pozo. Para este dirigente de la ABPE y del Banco Pichincha, si bien reconoce utilidades sostenidas de la banca entre el 2001 y el 2008, por un monto de entre el 18% y el 20%, defiende estas utilidades argumentando que “no es que los accionistas se han llevado esas utilidades, sino que han fortalecido los patrimonios”. Desde esta lógica, “La idea del gobierno de debilitar los ingresos representa afectar al crédito” (El Universo, pág. 8, 2008/12/13).

Ahora bien, lo que no se tiene en cuenta en el análisis del Banquero es que las utilidades sostenidas del 18 al 20%, habían significado una multiplicación total de más de por lo menos el 318% en los 7 años de los que habla el banquero. Y no necesariamente estas utilidades habían fortalecido la economía ecuatoriana, pes esta no había mostrado, este mismo tiempo, incrementos significativos de su productividad ni de su competitividad. Una buena parte de estos recursos de hecho, habían servido para financiar a otros países (principalmente el mercado de Estados Unidos), al salir del Ecuador, tal como lo reconocieron los mismos banqueros frente al gobierno y frente a la prensa.¹³⁵ Recursos que, debido al incremento del “riesgo país”, por la crisis internacional y por las decisiones del gobierno, no veían conveniente reinsertar en la economía de la cual habían salido. Pese a esto, reconocen el incremento de distintos tipos de créditos en los distintos sectores de la Economía: “Si comparamos octubre del 2007 con octubre de 2008, vemos que en el área comercial subió de \$3.700 millones a 4.800 millones; en consumo de 3.700 millones a 3.900 millones. El microcrédito de \$1.000 millones a \$1.374 millones y el de vivienda de 1.600 millones a \$1.800 millones”. (El Universo, pág. 8, 2008/12/13).

Ahora bien, en todo esto, los bancos, no asumen ninguna responsabilidad, así como tampoco los dirigentes de las grandes asociaciones empresariales. Estos últimos culparon al gobierno de desarrollar políticas equivocadas y recomendaban todo el tiempo, llevar a cabo políticas de liberación de la economía y de no intromisión política en asuntos que debían tratarse de manera “técnica”. Es este discurso, precisamente, el que puede ser considerado parte de las

¹³⁵ Las cifras que manejaba Fernando Pozo era que había USD 4.000 millones de la banca fuera del país (El Universo, pág. 8, 2008/12/13). Alberto Acosta, (2009), con datos del banco central estableció que el total de los recursos de los bancos fuera del país era equivalente al 21.4% de los depósitos totales

disputas hegemónicas entre el gobierno y las élites económicas del Ecuador. Buena parte del discurso usado por estas para pedir reformas a las políticas del gobierno se basan en “criterios técnicos”; esto es, análisis de costos y beneficios. El criterio, de lo técnico en lo político y en las políticas económicas, parte del supuesto de la racionalidad de la acción de los actores económicos, sólo que, como se ha dicho, esta racionalidad de la acción es racionalidad de medios-fines, pero sin cuestionar los fines. Estos se dan como supuestos, siempre y en todo lugar. Casi que se asumen como parte de la “naturaleza humana” de buscar siempre maximizar beneficios (Castoriadis, 2001)

Por otro lado, como parte de la estrategia del gobierno de buscar también aliados entre los empresarios, particularmente Cuencanos, en el mes de agosto se estableció lo que puede ser el inicio de una alianza importante entre el Gobierno y los industriales de esta región. Allí se impulsó la participación de los empresarios en la producción y distribución de gas natural para el sur del país, a través de una empresa de economía mixta, entre empresarios de la producción cerámica y Petroecuador. La relación de la inversión sería 80% pública, y el 20% restante privada (El Universo, pág. 4, 2008/08/16). Este modelo de inversiones se va a ampliar a partir de 2010, con la construcción el Código de la producción y luego en 2015, con la ley de promoción de asociaciones público-privadas. Las necesidades crecientes del gobierno para hacer sostenible la ampliación de las funciones sociales y económicas del Estado, harán que sus resistencias ante el poder económico privado disminuyan progresivamente. Las mismas políticas del gobierno, como hemos visto y complementaremos más adelante, favorecieron el poder estructural de las élites económicas, las cuales obtuvieron altos rendimientos en sus negocios, particularmente de comercio de importación par aun mercado interno ampliado a través de una fuerte inversión de recursos públicos.

En este contexto, el sector minero, se convirtió en una fuente alternativa de recursos y esto fue aprovechado por la Cámara de la Minería que urgió por una Ley Minera que le diera paso al desarrollo de la explotación. Manifestaron tener un borrador de ley que presentarían al Ejecutivo. (El Tiempo, pág. 4, 2008/09/30) En años posteriores y ante la insuficiencia de recursos para el financiamiento de la inversión social, el gobierno se abrirá de manera decidida a la promoción de la minería a cielo abierto, lo que desencadenó, desde 2009 conflictos con ambientalistas y movimientos indígenas. (El Telégrafo, pág. 4, 2009/01/11). En parte esto llevará a la profundización del distanciamiento de Correa con Alberto Acosta y la organización Acción ecológica, que Correa terminará acusando de cómplice de la derecha ecuatoriana.

Durante el 2009, la crisis se hizo más profunda y esto llevó al gobierno a incrementar su intervención en la economía a través de tres tipos de políticas, fundamentalmente. La primera, vinculada con la financiación de empresas locales a través de créditos de la CFN y otras instituciones del Estado, como el IESS.¹³⁶ En el primer caso, a comienzos de año, el gobierno ofreció cerca de 500 millones de dólares para financiar proyectos productivos, privilegiando la producción agropecuaria y manufacturera (El Universo, pág. 5, 2009-01-02) A finales de 2009, el gobierno prometió la inversión de \$2.500 millones de dólares más para reactivar la economía a través de distintos mecanismos e instituciones. Entre los mecanismos, se buscó reactivar la construcción mediante tasas subsidiadas para adquisición de cartera (USD 200 millones), Financiamiento de constructores y compra de carteras (USD 200 millones), Otorgamiento de bonos de hasta USD 5000 dólares para compra de vivienda de hasta USD 60.000 dólares, por un total de 200 millones de dólares. Destinó USD 465 millones de dólares para obras de gobiernos locales, la refinanciación de cartera para mayor plazo y tasas de interés, y líneas de créditos varias para el sector productivo, a través del Banco de Desarrollo Ecuatoriano (BEDE), la CFN y el BNF. Destinó, así mismo, USD 494 millones para “grandes proyectos eléctricos, vivienda, escuelas del milenio, prevención de inundaciones, estudios para puertos artesanales, Mypimes y economía popular y solidaria (El Comercio, pág. 6, 2009/10/22). La segunda, estuvo constituida por políticas arancelarias y tributarias para incentivar la producción nacional, disminuir las importaciones de bienes de consumo y facilitar la importación de bienes de capital para fortalecer el desarrollo industrial. Se ofrecieron también beneficios en reducción de tarifas eléctricas para el sector industrial, con el fin de reducir sus costos (El Tiempo, pág. 3, 2009/09/12). La tercera fue el incremento de la inversión social y la inversión en infraestructura y la promoción del consumo nacional. Así mismo, buscó articular las políticas con los sectores empresariales, fundamentalmente agropecuarios y manufactureros.

Para ampliar el financiamiento, además buscó establecer relaciones con los organismos multilaterales, y, en este año, empezará el uso de las reservas internacionales para la promoción de actividades económicas, de inversión en infraestructura. (el Telégrafo, pág. 5, 2009/01/07). En el mes de agosto se concretó el uso de 300 millones de dólares para financiar al sector privado (El Telégrafo, pág. 3, 2009/08/20) Del mismo modo, buscó incrementar el otorgamiento de créditos productivos y para esto tuvo que recurrir a alianzas con la banca

¹³⁶ El IESS, por su parte se convirtió en una de las fuentes más importantes de financiamiento para las obras públicas (Líderes, pág. 13, 2009/03/16; El Comercio, pág. 9, 2009/04/13)

privada. De hecho, llegó a insertar recursos públicos en la banca privada. Se habló de 800 millones del Estado canalizados a través de la banca privada. (El Tiempo, pág. 2, 2009/03/02). La pretensión de estas medidas era que la banca se comprometiera a inyectar también su propio dinero a la economía ecuatoriana (El Comercio, pág. 7, 2009/03/03) La banca privada, por su parte, afirmó haber traído desde el exterior 500 millones de dólares, luego de las exigencias del gobierno el año anterior. En las negociaciones también se logró que la banca disminuyera las tasas de interés y flexibilizara el acceso a créditos (El Comercio, pág. 7, 2009/03/03; El Comercio, pág. 6, 2009/05/13) El gobierno, a través del Banco Central, siguió presionando a la Banca a retornar al país parte de sus depósitos en el extranjero. Se habló de USD 1200 millones (El Comercio, pág. 1, 2009/05/31; El Telégrafo, pág. 9, 2008/07/04). Las presiones sobre la banca hicieron que, efectivamente esto se concretara en el mes de agosto de 2009, pero se opusieron al direccionamiento de los créditos por parte del gobierno. (El Telégrafo, pág. 3, 2009/08/26), a pesar de los acuerdos y presiones, los bancos privados continuaron restringiendo los créditos para vivienda (El Telégrafo, pág. 8, 2008/09/12).

Para la búsqueda de articulación con los sectores productivos, durante este año el gobierno mantuvo reuniones a través de su participación directa o la de sus ministros. Buena parte de las políticas arancelarias, así como de las políticas de incentivo a la producción en general fueron pactadas o acordadas con grandes empresarios y, particularmente con el sector industrial. En las reuniones a las que fueron invitados los dirigentes de las Grandes Cámaras de Comercio, así como del CEE, fueron esporádica. Las políticas, así fueron respondidas de dos modos distintos. Desde las Cámaras de comercio tanto de Quito, como de Guayaquil, se mantuvo una crítica constante a las medidas tomadas por el gobierno. La banca manifestó también sus reservas frente a las medidas.¹³⁷

Las medidas arancelarias, por ejemplo, fueron calificadas de paquetazo en contra de los consumidores por el presidente de la CCQ, Blasco Peñaherrera Solah. Por su parte la presidenta de la CCG, cuestionó el impuesto del 1% a la salida de capitales, pidió la reducción de trámites y la participación privada en el negocio petrolero. Así mismo propusieron la eliminación de subsidios a las termoeléctricas, focalizar el subsidio al gas; la reducción de los

¹³⁷ La ABPE, emitió, una buena cantidad de comunicados en los que cuestiona la política financiera del gobierno de Correa, al tiempo que resalta su importante aporte al crecimiento y desarrollo del país, a través de la inyección de recursos en la economía ecuatoriana.

ministerios para reducir gasto público y fusionar instituciones financieras (El Universo, pág. 5, 2009/01/13).

Pese a que el gobierno intentó reducir de manera significativa las importaciones de bienes de consumo, ante la crisis de 2009, terminó cediendo a las presiones de los importadores, pues estos argumentaron que el empleo de muchas personas estaría en peligro (El Comercio, pág. 4, 2009/01/18). Lo que se pretendía, inicialmente era disminuir en un poco más de 2.400 millones de dólares la importación de productos denominados de Consumo Especial. Ante la presión empresarial, se definió que al menos se buscaría disminuir en unos 1.400 millones de dólares. Los dirigentes empresariales del CEE, la CCQ y CCG, se manifestaron en desacuerdo frente a las medidas y frente al mecanismo. Acusan al gobierno de no tener en cuenta la opinión de todos los sectores (El Telégrafo, pág. 9, 2009/01/20). El diario el Universo, publica al respecto una nota en la que pone en evidencia la división de los empresarios entre quienes apoyan las medidas y quienes se oponen a las mismas. Mientras María Gloria Alarcón, plantea que “Nunca estaremos de acuerdo con restricciones al comercio exterior, cupos de importaciones o subidas de aranceles”. Los empresarios que participaron en el encuentro, a través del Abogado de Bustamante & Bustamante, afirmó que “No conozco a nadie que haya dicho ‘no se necesitan medidas’. El sector empresarial en su conjunto hizo conciencia de que, más allá de echarle la culpa a alguien de la crisis, era necesario tomar medidas para equilibrar la balanza de pagos para sustentar la dolarización”, (El Universo, pág. 5, 2009/01/09).

Las políticas laborales, fiscales, arancelarias, comerciales, entre otras fueron cuestionadas tanto por representantes de la CCQ, como del CEE y la CCG. Para los entes gremiales, lejos de incentivar la economía, hacían que se incrementara el desempleo por los altos costos laborales, la inseguridad jurídica, afectaba las inversiones y no se atraían capitales, se promovía el contrabando, la informalidad y la evasión de impuestos (Gestión, pág. 14, 2009/22, El Telégrafo, 2009/06/25). Así mismo, miembros de las cámaras afirmaban que con esto, en general se restaba competitividad a la industria y a la economía en general (El Universo, pág. 3, 2009/08/28). Este discurso también fue compartido por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que en Ecuador hace las veces de difusor de las ideas de libre mercado y apertura comercial. Todas las medidas del gobierno terminarían siendo contraproducentes para la ecuatoriana (El universo, pág. 5, 2009/08/31)¹³⁸. Desde esta

¹³⁸ La prensa, comúnmente, en la disputa por mantener la hegemonía neoliberal, publica textos en los que se cuentan historias de fantasía y progreso. Una de estas fue publicada el 18 de agosto de 2009. En ella, Un

perspectiva, que es dominante en cierto discurso empresarial, de las grandes élites empresariales, se entiende cómo la intervención estatal es vista como un obstáculo que impide el libre flujo de las fuerzas económicas, de productores y consumidores.

El año 2009, aparte de significar para el Ecuador una desaceleración económica muy significativa, también fue un escenario de intensa actividad política electoral. Pese a que los empresarios se reusaron siempre a ser considerados actores políticos, en varias ocasiones buscaron articulaciones con actores políticos y sociales, particularmente en Guayaquil, donde se convocó el liderazgo de Jaime Nebot para “defender” lo logrado con base en los principios liberales y el emprendimiento privado. El enfrentamiento entre las élites empresariales, así se inserta en las disputas regionales y desde estas se plantean lecturas diferentes del Estado y las relaciones Sociales. De hecho, se buscó constituir un frente común contra Correa y éste contó con el impulso de María Gloria Alarcón. A través de marchas y reuniones de dirigentes empresariales y organizaciones sociales tradicionales de élite, como la Junta Cívica de Guayaquil se buscó articular y repotenciar la capacidad de resistencia y lucha contrahegemónica (El Comercio, pág. 6, 2009/09/2). Así, convocado por la CCG y frente a unos 80 empresarios, Jaime Nebot, explicó “(...) la urgencia de organizarse para defender la libertad de acción, emprendimiento y la economía social de mercado. Esto como alternativa para frenar el socialismo del siglo XXI que impulsa el gobierno y que es criticado por Nebot y varios gremios empresariales”. A los empresarios específicamente les dijo que tenían que “comprender que no queremos que Ecuador se convierta en Cuba, Bolivia, Venezuela o Nicaragua. Y peor que eso ocurra en Guayaquil, ya que eso sería inaceptable y es una forma de retroceder por ignorancia”. Pese a las declaraciones de Nebot y al hecho de que varios empresarios, reseña El Comercio, le pidieron a Nebot liderar la oposición a Correa, María Gloria Alarcón, expresó que no fue una reunión política sino un diálogo para defender la

importante empresario del comercio, vinculado a la cámara de comercio de Quito, llegó a afirmar que los frenos al libre comercio, terminaban por retrasar los avances de la economía y la sociedad. Contrario a buscar reducir el consumo, había que facilitarlos, para Saadín Solah Ferri para incrementar el crecimiento. El libre mercado incentiva a la industria. Antes de Correa, para el empresario “la industria ecuatoriana venía creciendo sin aranceles, sin proteccionismo, venía creciendo de una manera muy agresiva. Antes de las salvaguardias, la industria local, que es pequeña y no se da abasto para cubrir la demanda, tenía una oportunidad para mejorar en relación con los productos importados y competir en precio y calidad. Lo único que hacen las aranceles es crear grandes monopolios y perennizar la ineficiencia y la mala calidad. Por otro lado, hay muchos productos que no se producen aquí, por ejemplo, celulares. No se producen ni se producirán nunca y, sin embargo, pagan un arancel y un ICE muy alto. La oportunidad está en la apertura, en la competencia, en ser osados”. Por tanto, el proteccionismo de Correa resultaba contraproducente, estimulaban el contrabando. Para Saadín, esto sucedía porque “El mercado se ajusta sólo. Cuando hay mucho desbalance, la gente que puede pagar más, pagará más y seguirá comprando. En cambio, quienes no pueden comprar, dejarán de hacerlo o buscarán en el mercado del contrabando. Hoy, en un parque de Quito, por ejemplo, un comerciante informal vende en su camioneta zapatos de atletismo de buena marca, a un precio menor que los importadores en las tiendas. Al ecuatoriano le encanta consumir y buscará lo más conveniente para su bolsillo” (El Comercio, pág. 2, 2009/08/18).

estabilidad económica del sector privado. “No se trata de formar comités políticos ni de defensa. Son comités empresariales que deben hacer conciencia para mantener sus fuentes de trabajo. Joaquín Zeballos, expresidente de la CCG, “solicitó que se fortalezcan los gremios y que sea la Junta Cívica de Guayaquil la que lidere la propuesta de Cambios”. (El Comercio, pág. 6, 2009/09/2, El Universo, pág. 3, 2009/09/02) Los pronunciamientos de los empresarios, denotan la falta de consenso sobre la manera de conducir la resistencia y sobre el liderazgo. Mientras para unos era Nebot, para otros era la Junta Cívica la que debía liderar la construcción de un frente común. En lo que sí hay consenso es en que el empresariado debía organizarse mejor para resistir y enfrentar los embates del gobierno de Correa (El Comercio, pág. 6, 2009/09/15)

Por el contrario, los dirigentes de las pequeñas industrias fueron más propensos a buscar acuerdos con el gobierno, así como los empresarios del Banano, el cacao, la producción camaronera, la producción textil y la construcción fundamentalmente, tanto de Guayaquil, como de Cuenca. En ésta última ciudad, a lo largo de 2009, se presentaron una buena cantidad de reuniones y acuerdos (Como vimos, allí se desarrollaron las discusiones sobre la Ley de Minería) para el impulso industrial y de la construcción. Pese a la importante contracción económica de 2009, los sectores apoyados por Correa, a través de distintos mecanismos e instituciones del Estado, mostraron un dinamismo muy importante. Sectores como el Textil, recién a comienzos de 2010, manifestaron que habían logrado un crecimiento del 67%, con ventas que pasaron de USD 48 millones de dólares a USD 77 millones, entre el 2008 y el 2009. Las industrias atuneras y pescado incrementaron sus exportaciones el 33.61% y el 15.76% respectivamente (El Comercio, 2010/01/01). Las grandes asociaciones empresariales, pese a las utilidades de ciertos sectores, se mostraron críticas a las medidas del gobierno, pues para ellas, la contracción mostraba que, en general, el modelo no funcionaba. Los pequeños productores, de hecho, fueron los beneficiarios de la mayor parte de los incentivos tributarios del gobierno, así como de los más de 2200 millones en créditos para los productores (El Universo, 2010/01/15). Los resultados de las políticas arancelarias parecían dar resultados positivos, particularmente en lo que tiene que ver con la disminución de bienes de consumo y su sustitución por productos nacionales (El Comercio, pág. 9, 2010/01/25). Los incentivos arancelarios fueron así valorados por los productores nacionales y por analistas como Katuska King y Hugo Jácome, para quienes, tras investigar los impactos de dichas medidas en la industria nacional, particularmente en la pequeña y mediana industria, recomendaba su continuidad (King y Jácome, 2013).

Una vez el Gobierno ratifica y consolida su poder en las elecciones de 2009, varios temas ocuparon la agenda de las relaciones entre empresarios y gobierno a lo largo del 2010. Uno de ellos, y tal vez el más importante fue la construcción de un nuevo Código de la producción. Este tema fue desarrollarlo a lo largo de varias reuniones en las que la Ministra Coordinadora de la Producción Nathalie Cely, principalmente, gestionó la participación de los distintos sectores empresariales del país.¹³⁹ Uno de los más activos en este proceso fue el presidente de la CCG, Eduardo Peña Hurtado, que sustituyó a María Gloria Alarcón desde el mes de junio de 2010. Frente a este documento, se produjo una fisura importante en la unidad de criterios que se había establecido entre la CCQ y la CCG, durante la dirección de María Gloria Alarcón pues, desde su elección Peña Hurtado se mostró más conciliador y dispuesto al diálogo que su predecesora. Esto lo llevó a una participación activa en las discusiones sobre el nuevo Código de la producción, al que calificó como el primer escenario de diálogo real entre el gobierno y los empresarios y del que él mismo se abroga la autoría de todo el título tres (Eduardo Peña, comunicación personal, 29 de agosto de 2014).

La construcción de un nuevo CPIyC, se comenzó en el mes de enero de 2010, cuando se iniciaron los acercamientos entre el gobierno y los empresarios, Parte de las propuestas de este instrumento de regulación de las actividades económicas de los privados era reducir el 10% del impuesto de renta con el fin de que éste fuera usado en inversión de activos productivos, investigación y desarrollo, así como en la creación de nuevas plazas de trabajo. Así mismo, buscaba desarrollar nuevas zonas de producción con incentivos de hasta el 100% de exoneración de impuesto de renta por 5 años. Frente a la propuesta inicial, los miembros de las Cámaras de industrias de Guayaquil, de Acuacultura y pesca, manifestaron interés en la propuesta y destacaron las posibilidades que esta tenía de incentivar la producción. La importancia que le dio el gobierno al diálogo con los empresarios, de hecho, sirvió para que se cuestionara esta apertura frente a los empresarios y el cierre frente a otros actores sociales como los indígenas y los sindicatos (El Universo, pág. 3, 2010/06/07). Parte de los argumentos de Nathalie Cely y del gobierno, era que el código buscaba edificar un marco de seguridad jurídica para la producción en el Ecuador, y mostrar la importancia de un cambio en la matriz productiva. Eduardo Peña llegó a calificar el trámite del CPIyC, como el primer acercamiento real entre el régimen y los empresarios. Llegó a considerar que antes de esta iniciativa, el gobierno sacaba leyes y luego, producto de la confrontación las iba modificando.

¹³⁹ La revista Vistazo reseña la realización de 32 foros entre representantes del gobierno y empresarios de todos los sectores (Vistazo, pág. 42, 2010/09/24)

Ahora, con este se presentan unas iniciativas generales sobre las que se discute y se buscan consensos, afirmó (Semanao Líderes, pág. 3, 2010/07/05)¹⁴⁰.

Pese a estos aspectos positivos, el mismo fue cuestionado por el CEE y por varias cámaras binacionales. Estas descalificaron el establecimiento de trato diferencial para inversionistas extranjeros y nacionales. (El Comercio, pág. 7, 2010/07/13). Desde el CEE y la CCQ, Blasco Peñaherrera planteó que en el nuevo código debería haber “cuatro puntos básicos: el fortalecimiento institucional, un esquema macroeconómico estable, buen ambiente de negocios y política de integración comercial”. Así mismo, expusieron que, pese a la importancia de la iniciativa, el gobierno tramitaba otras leyes que terminaban siendo contradictorias con lo que el Código de la producción plantea, como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Régimen Monetario, la Ley de Comunicación, así como el acuerdo firmado entre el IESS y el Ministerio de Finanzas sobre el pago del 40% de las pensiones jubilares a doce años de plazo. (El Universo, pág. 8, 2010/07/22). En esta misma línea, Peñaherrera planteó que había dos lenguajes en el gobierno, alrededor del nuevo Código. El de la Ministra Cely, que priorizaba la seguridad jurídica (para él lo fundamental para producir), y el del gobierno, con leyes contradictorias entre sí “aprobadas entre gallos y media noche”. En relación con la promoción de la pequeña y la mediana empresa, afirmó que, aunque son válidas este tipo de iniciativas “no hay que olvidar que la fuerza productiva está en los grandes sectores productivos: camaronero, floricultor y bananero son la base de las exportaciones. Par mí el camino no es complejo: reglas de juego claras, seguridad, garantías para la inversión, reformas laborales, acuerdos comerciales importantes”. A pesar de que reconoce los diálogos, duda de la inclusión de las propuestas de los empresarios, más allá de las demandas concretas de un sector en específico. Y declara que la función de los entes gremiales que él lideraba no representaba intereses de empresas, “sino del sector empresarial, es decir de todos aquellos que no trabajan para la burocracia”. Para Peñaherrera, el objetivo de las organizaciones empresariales era que el crecimiento del Ecuador. Desde este punto de vista, manifestó que los empresarios no se aferraban a un modelo de desarrollo, “pero sí a decir que lo que se ha hecho en los últimos cuatro años ha estado mal. El PIB, con recuperación de la crisis y con precios del petróleo altos, apenas va a crecer lo que crece la población... Todo pasa por la macroeconomía del populismo: tener dinero para mantener satisfecho a un grupo y seguir

¹⁴⁰ Resultado de la interacción más productiva entre la CCG y el gobierno, afirmó Peña Hurtado, el gobierno había permitido una importante participación de los técnicos de la CCG, en la construcción de este código. Todo el libre tres del código, habría sido elaborado por estos técnicos (Eduardo Peña, comunicación personal, 2014-08-29, Guayaquil)

ganando elecciones. ¿para qué ganar elecciones si el país va para atrás?”, cuestionó. Esta manera de plantear el conflicto es tal vez la más frontal y clara. Desde su punto de vista, lo que defienden los dirigentes de los empresarios es el interés general de los mismos, y, por esta vía (un discurso muy parecido al de Febres Cordero, ver capítulo 2), el interés general de los ecuatorianos. Desde esta convicción, resisten los embates del régimen. En palabras de Blasco Peñaherrera (que, por otro lado, estuvo vinculado al PSC. Su padre fue vicepresidente de Febres Cordero: “Sin duda el presidente ha quitado todo el poder a todos, comenzando por la Asamblea. A nosotros ha tratado de desaparecernos, pero no ha podido, la fuerza centenaria de instituciones como la Cámara de Comercio ha sido mayor”).

De este modo, dos posiciones muy distintas se desarrollaron alrededor de esta apuesta del gobierno por articular al sector productivo. Diríamos, por esta apuesta hegemónica. Una que ve las posibilidades de incluir interés concreto y viabilizar demandas y la otra que piensa en el modelo que se está configurando y que, desde este lugar resiste; desde la “fuerza centenaria”. (Vistazo, pág. 42, 2010/09/24).

Los grandes industriales y el sector agrícola, por su parte pidieron ser incluido en los beneficios arancelarios y tributarios que se daban a pequeños productores, a partir del nuevo código. Los Agricultores del banano pidieron que se les incluyera en los beneficios tributarios, pues “todos producimos, todos queremos incentivos. No se debe excluir a sectores estratégicos como el agrícola”, El Comercio, pág. 7, 2010/07/15). En reuniones a finales de Julio entre el gobierno y los empresarios, (la ministra Cely, la ministra Sión y la Ministra King), se expusieron pros y contras frente a la propuesta del gobierno. La lectura de los asistentes fue que, por fin, el gobierno escuchaba sugerencias. (El Universo, pág. 8, 2010/07/30; Semanario Líderes, pág. 29, 2010/08/02, El Telégrafo, pág. 6, 2010/09/04).

La propuesta construida por el gobierno y los empresarios finalmente fue acogida por Rafael Correa que la envió a la AN, con carácter de urgente. Esta medida, fue impugnada por las Cámaras de Industrias de Guayaquil, así como por otras organizaciones empresariales. Se trataba de un tema muy complejo, como para ser resuelto en 30 días, afirmaron Henry Kronfle, Bruno Leone y Francisco Alarcón (Hermano de María Gloria Alarcón y dirigente de la CIG). Además, criticaron que se hubiese incluido la idea de un “salario digno”, pues haría aún más inflexible las relaciones laborales de lo que ya eran en el Ecuador, restando competitividad y afectando la sostenibilidad empresarial (el Universo, pág. 320, 2010/10/20). Ahora, no sólo los empresarios criticaron el código. Paul Carrasco, Prefecto del Azuay llegó a

considerar, contrario a los empresarios, que el código enviado tenía un “tinte bastante neoliberal”.

Junto con este frente de confrontación/articulación, otro tema central afectó las relaciones entre el gobierno y los empresarios durante el 2010, pero que venía generando tensiones desde el comienzo del mandato de Correa: la reglamentación de la banca. Así, en el mes de abril, tras una reunión de la CCG con César Robalino, dirigente de la ABPE, manifestaron preocupación por el estancamiento de la inversión privada, así como el estancamiento del crédito y la falta de confianza en la inversión. Robalino, se mostró inconforme con los crecientes controles por parte del Banco Central. Pese a la falta de demanda de crédito, afirmó, que no flexibilizarían “los requisitos para los créditos”. Pidieron reunión con el gobierno para buscar reestablecer la economía en el corto y largo plazo (el Telégrafo, pág. 5, 2010/02/30). De este modo, contrario a lo que mostraban los indicadores sobre incremento del consumo y, así mismo, del consumo crediticio, los empresarios denunciaban una disminución de la demanda, debido, según ellos a la falta de confianza por parte de los inversionistas y la empresa privada. Frente al desempleo, además, plantean dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales que hablan de la pérdida de 190.090 plazas de trabajo. Alarcón afirmó que “nosotros sentimos que es mayor”. (El Universo, pág. 8, 2010/03/30) Esta reunión se da luego de que el gobierno se reuniera con la banca privada el día 23 de abril y que esta manifestara su rechazo a las regulaciones del Banco Central. El problema del crédito, afirmaron, no es por falta de liquidez o de que no se concedieran créditos nuevos, sino que la demanda había caído. (Vanguardia, pág. 20, 2010/03/30). Una semana antes de esta reunión, la revista Gestión publicó un reportaje en el que se expone la supuesta difícil situación que vivía la banca privada ecuatoriana debido, según la revista a las crecientes presiones y regulaciones de parte del gobierno, a través del Banco Central. Una de estas regulaciones fue la imposición de la obligatoriedad de que los bancos privados repatriaran el 45% de sus depósitos externos para mejorar la fluidez en el mercado local. Del mismo modo, se presionaba para que los bancos disminuyeran las tasas de interés, al mismo tiempo que incrementaba los costos de los servicios financieros debido al creciente riesgo del mercado ecuatoriano. La revista llegó a afirmar que se estaba estrangulando a los bancos y que se evidenciaba una caída muy significativa de las utilidades de estos, las cuales habían pasado del promedio del 20% al 13% anual.

Otra forma de presión sobre la banca privada fue la medida tomada por el gobierno a fines del año 2009, de que todas las cuentas de entidades públicas estuvieran depositadas en bancos

públicos. Para los bancos privados, esto había generado una caída en los depósitos. Lo interesante de esta discusión es que en medio de las críticas al gobierno, los banqueros expresan que “*en el pasado*” instituciones como la Junta Bancaria y el Banco Central “tenían mayor autonomía y expresaban un criterio independiente, pero ahora dependen del gobierno y responden a la política económica consagrada en la Constitución”. Lo dicho, expuesto por Abelardo Pachano, gerente de Produbanco, y líder de la liberal organización Observatorio de la Política Fiscal, deja entre paréntesis la manear más bien poco técnica como se tomaron medidas en el pasado y más bien cómo estas medidas contribuyeron al enriquecimiento de los banqueros y a la depredación de los recursos de los ciudadanos, como vimos en capítulos anteriores. Para Fernando Pozo, de la ABPE y gerente del Banco Pichincha, lo que había hecho hasta ese momento el gobierno de Correa era poner en peligro la sostenibilidad del sistema financiero ecuatoriano, pues al reducir sus utilidades, por la vía de la reducción de tasas de interés y el incremento de sus costos operacionales (por la vía de mayores impuestos), se debilitaba la capacidad de financiamiento y de hecho, dificultaba el otorgamiento de créditos. Los bancos, en este escenario podían colocar dinero en manos cada vez más seguras, lo que implicaba dejar por fuera a un vasto público (Gestión, 2010/03/24). A pesar de las críticas, el gobierno obligó a que los bancos repatriaran USD, 800 millones de dólares¹⁴¹, lo cual debieron hacer a finales de mayo. Esto como resultado de las disposiciones del Banco Central de que la banca repatriara hasta el 45% de sus depósitos en el exterior, tomada a principios del mismo año.

Pese a las críticas, durante el año 2010, el gobierno de Correa continuó con su política de incentivar la producción particularmente la construcción. Los recursos del IESS, continuaron usándose para financiar proyectos del gobierno, incluidos los de financiamiento de los actores privados. Esto generó un enfrentamiento entre Blasco Peñaherrera y otros miembros de las Federación de Cámaras del Ecuador. Peñaherrera llegó a pedir que se sancionara a los empresarios que avalaban la política del gobierno, de usar al IESS, como prestamista. Los constructores, beneficiados con las políticas de desarrollo de la infraestructura respaldaron las medidas del gobierno (El Universo, pág. 4, 2010, 01/01; El Universo, pág. 2, 2010/06/08). Por esta vía, el gobierno de Correa estableció un sistema de financiamiento de proyectos de vivienda que empezaron a competir con el mercado privado de créditos hipotecarios.

¹⁴¹ El Ministro Coordinador de la Política Económica, Diego Borja, aclaró que no eran USD millones, sino 650 millones. Así mismo acusó, por su parte a los bancos Pichincha, Produbanco, Pacífico, Bolivariano, Produbanco y Lloyds Bank de querer desestabilizar la economía y la misma dolarización con la sacada de divisas (Vistazo, pág. 36, 2010, 03/26).

En defensa de la política financiera del gobierno, el Banco Central publicó un estudio que mostraba que el 80% de las empresas no había solicitado créditos en los 6 primeros meses del año, básicamente porque estaban financiándose con sus propios recursos. Un pequeño porcentaje opinó que no solicitaba créditos debido al ambiente de incertidumbre, tanto nacional, como internacional. Esto lo hizo, apenas el 2% de las empresas. Con esto, las críticas tanto de la banca como del empresariado, particularmente de las Cámaras de Comercio y la Banca, se quedan sin sustento (El Universo, pág. 8, 2010/07/05). De hecho, en un informe del diario citado, se muestra cómo ha habido un incremento para los créditos de consumo, particularmente a través de tarjetas de crédito y créditos para vehículos. En este informe se señala que ninguna medida para incentivar la construcción, ni la industria parecían funcionar, salvo el desarrollo de los créditos de consumo. David Sánchez explicó este incremento de la siguiente manera: “El consumo se mantuvo en aumento apoyado en las tarjetas de crédito, que significan alrededor del 50% de la cartera, el incremento de la venta de automóviles, las facilidades de crédito directo en los grandes almacenes y nuevos productos bancarios como los créditos de educación”. (El Universo, pág. 8, 2010/07/07).

Estas dinámicas, muestra cómo pese a las afirmaciones de la banca privada de una ralentización de los créditos, por falta de demanda crediticia en general, lo que se venía produciendo era una promoción del crédito de consumo y del crédito comercial, por encima del crédito productivo. Esto puede contribuir a la explicación del por qué fue cada vez más difícil sostener el modelo económico impulsado por el gobierno de Correa: La banca privada facilitó y promovió el consumo no con base en la producción creciente del país, sino en los recursos que inyectaba el Estado a través de múltiples mecanismos. Crédito externo, crédito interno, incremento de la presión tributaria que termina financiando proyectos productivos de construcción, créditos para proyectos productivos para abastecer el mercado local, pero que terminan fugándose por la vía de la compra de bienes de consumo. De hecho, una importante ola de construcciones se desarrolló en el Ecuador, no para la producción, sino para promover el consumo: los centros comerciales. Al respecto, es muy interesante ver cómo en el clima de “baja confianza” que denuncia la banca y las grandes cámaras de la producción, se anuncia un *boom* de la construcción privada para comercio y servicios “*financiada con crédito bancario y capital privado*” (Semanao Líderes, pág. 12, 2010/08/09). A comienzos de agosto se publica una encuesta sobre confianza empresarial, en la que el 27% de los empresarios afirma que sus ventas han aumentado (El universo, pág. 8, 2010/07/02). Para finales de septiembre la evolución de los créditos en Ecuador ya mostraba signos de recuperación. Estos habían

crecido un 8%, en los primeros 8 meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se habían puesto a circular USD770 millones de dólares y la banca esperaba una expansión anual del 14% para fines de 2010. Tres causas tenían los banqueros para este repunte de los créditos: la mayor liquidez del sistema por repatriación de recursos tanto por el sector público como por el privado; créditos externos del gobierno y el incremento del precio del petróleo. César Robalino, de la ABPE, comentó que el 72% de los créditos habían ido al sector productivo, “específicamente en actividades industriales, comerciales, empresariales y de construcción. Y el 28% restante está destinado a crédito de consumo”. (El comercio, pág. 7, 2010/09/10)

Otro tema importante fue la aplicación de la participación el Estado como productor y oferente de servicios. En este sentido, las telecomunicaciones fueron tal vez una de las inversiones más importantes del gobierno, que fortaleció la oferta pública de servicios de televisión, telefonía y servicios financieros. Por la participación en la oferta de servicios de telecomunicación fue acusado de pretender construir un monopolio estatal. A partir de estas iniciativas gubernamentales, el Estado amplía aún más sus funciones. El 2010, fue también un año clave en el impulso a la construcción de infraestructura, la construcción de carreteras, puertos, etc.

Para el año 2011, el gobierno continuará ampliando su actividad económica y buscando profundizar la transformación de la estructura productiva. Este año representó también un punto de inflexión para la Revolución Ciudadana, al alcanzar un crecimiento económico del 7.8%. el mayor en los 10 años de duración del gobierno de Correa. Ya el año 2010, a pesar de las críticas de las élites empresariales sobre lo mal que estaba la economía, se presentó un repunte del 3.5%. El desempleo no se incrementó y el consumo creció, particularmente de automóviles. El desarrollo de la construcción también fue muy importante en 2010 y el sector bancario tuvo unas utilidades netas de 250.000 millones de dólares, lo que representó una utilidad de entre el 12 y el 13%. La cartera bancaria se expandió en un 20% y el número de clientes subió a 5.4 millones, de acuerdo con el director de la ABPE, a lo que agregó que “El sistema bancario privado culminó el año con una notable solidez”. En este año, el Código de la Producción, discutido con los empresarios entró en vigencia a fines de año. (El Comercio, pág. 5, 2011/01/01, ver también El Universo, pág. 8, 2011/01/19). Gracias al nuevo código, la inversión extranjera logro una importante recuperación, al llegar a USD 644 millones, luego de haber caído el año anterior a apenas USD 165 millones, el año anterior. La más baja en todo el gobierno de Correa, con excepción del 2016 que llegó USD 154 millones (Márquez,

Carriel y Salazar, 2017). Pese a la caída en la inversión extranjera, algunas empresas y grupos económicos hicieron importantes inversiones, lo que contribuyó a la recuperación económica, presentada el año anterior. De estas empresas se destacan. Holdingdine, Acerías Nacionales del Ecuador, Corporación El Rosado, Industrial Molinera, Andec, Corporación Favorita, Tabos Ecuatoriana y Exxon Mobil. De este modo, informó el diario El Comercio, los sectores comerciales, construcción y la industria orientada a la producción bienes de consumo, fueron los más activos económicamente. Entre enero y octubre de ese año la inversión de las empresas habría llegado a unos USD 696 millones (sin incluir el sector eléctrico, donde la inversión es básicamente estatal) y habría estado orientada al incremento del capital de las firmas. El 64% de los recursos fueron de origen nacional y el resto inversión extranjera. En cuando a la Proción del consumo nacional, la Corporación El Rosado, aumentó su capital para construir más centros comerciales en Guayaquil, Quevedo, Babahoyo y Riobamba. En Guayaquil, esta corporación inauguró el nuevo Riocentro Norte, con una inversión que habría llegado a los USD 25 millones. De este modo, se constata cómo las élites van buscando usufructuar la ampliación de recursos disponibles en la economía ecuatoriana, sin fortalecer el aparato productivo, sino la actividad comercial y el consumo. En Guayaquil, una ciudad tradicionalmente comercial, la construcción de centros comerciales fue más fuerte. Allí, se levantaron City Mall, las torres de negocios del Mal del Sol, Parque Colón, entre otros. En Quito, por su parte, se inauguró el Quicentro del Sur, el más grande del país, y se realizaron remodelaciones en el Centro Comercial El Recreo, Quicentro Shopping y el Centro Comercial Ñaquito. El grupo *Inmodiamante* empezó a levantar el Centro Comercial Royal Plaza en Cumbayá, al este de Quito. La Inversión habría estado por el orden de los USD 40 millones (El comercio, pág. 44, 2011/01/01).

Ahora bien, durante el año 2011, se inició la implementación del NCPIyC, con varios incentivos para la producción: exención de IR, por 5 años, para inversiones nuevas en zonas no desarrolladas, Reducción de IR, por mejoras salariales y nuevas inversiones; financiación de IR, por venta de acciones a trabajadores; fondos de garantías para pequeñas empresas, por 200 millones de dólares, Estado asegura compra de producción a nuevos emprendimientos por el Fondo de Garantías. (El comercio, pág. 6, 2011/01/05). Estas medidas buscarían revertir la tendencia del déficit en la balanza comercial y fortalecer la ofertan interna, para el mercado interno. Los empresarios a pesar de ello, no reaccionarán del todo a estas iniciativas. Para fortalecer el aparato productivo nacional, de hecho, durante este año el gobierno, configuró el Plan de Sustitución Estratégica de Importaciones. Una larga lista de materias

primas y bienes de capital así como insumos agrícolas e industriales fueron incluidos en este proyecto de industrialización.¹⁴² Para la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport), este nuevo paquete de protecciones para industrias nacionales, se habría dado por la persistencia del déficit en la balanza comercial del 2010 que habría estado alrededor de los UUSD 1213 millones.

De este modo, más que la industrialización, lo que vendría produciéndose en el Ecuador, es el fortalecimiento de una vocación especuladora-compradora, promovida por las élites empresariales y finalmente facilitada o generada por el ambiente de confrontación. En este sentido, se hace evidente la contradicción entre los proyectos del gobierno de Correa y los proyectos de las élites económicas. Para el primero, la apuesta es la industrialización, por la vía de la sustitución de importaciones, algo que lograría a través de inversión la pública en infraestructura de transportes, educación, salud, saneamiento básico, el financiamiento de la actividad privada empresarial por la vía de créditos, subsidios, apoyo a las exportaciones y medidas tributarias y arancelarias. Estas medidas no van a tener el impacto buscado, sino que los empresarios buscarán (o mantendrán) inversiones de corto plazo y alta rentabilidad. De ahí que se promueva el consumo y el comercio, más que la inversión productiva. De hecho, antes que producir, incrementan las importaciones de bienes de consumo, lo que lleva a incrementar o mantener el déficit en la balanza comercial. Esto lleva a que lo que el Estado inyecta en la economía, a través de sus distintas fuentes de financiación, termina saliendo por la vía de una sociedad compradora/importadora. Esto mantiene a las élites del sector comercial con un importante poder estructural y también, como se ha visto con un importante poder instrumental. Los grandes grupos económicos, como se ha visto también, históricamente habían desarrollado un sistema de inversiones diversificado que atente importación, producción, distribución (Pastor, 2017). Eso hacen en este contexto también: producen para el

¹⁴² Los sectores protegidos serían: Fabricación de Calzado, fundición de hierro y acero; elaboración de productos de panadería, Fabricación de aparatos de uso doméstico; fabricación de pasta de papel, papel y cartón, fabricación de productos y artículos plásticos, Elaboración de almidones y derivados del almidón, Fabricación de productos primarios de cerámica refractaria, fabricación de otros productos elaborados del metal NCP, Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, fabricación de sustancias químicas básicas excepto abonos y compuestos de nitrógeno, fabricación de partes, piezas, accesorios para vehículos automotores y para sus motores, fabricación de máquinas para la explotación de minas, canteras y para obras de construcción, sector textil y confecciones, fabricación de hilos y cables aislados, cultivo de cereales y otros cultivos NCP, elaboración de cacao, chocolate y confitería, fabricación de otros artículos de papel y cartón, elaboración de cables y aceites y grasas vegetales o animal, fabricación de productos primarios de hierro y acero, fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho antitético, fabricación de productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos, fabricación de receptores de audio, televisión y productos conexos para el consumidor, fabricación de transistores de radio, televisión, aparatos para telefonía y telegrafía con hilos, fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos (El tiempo, pág. 9, 2011, 01, 06).

mercado local; incentivados por el gobierno, importan lo que les resulta más beneficioso y competitivamente más rentable frente a su propia producción y comercializan en sus propios almacenes o sus propias redes de redistribución. De ahí que no sea gratuito que los grandes grupos económicos hayan sido beneficiarios de las políticas proteccionistas de Rafael Correa, como lo planteó Decio Machado en 2012 y lo confirmaron Alberto Acosta, en 2016 y Carlos Pastor en 2017. De ahí que haya sido con ellos con los que esperaba Correa se impulsara más la industria ecuatoriana. Esto efectivamente sucedió, la industria se amplió, tanto la grande como la mediana y pequeña, pero sostenida por la inversión pública en distintos sectores. Esto disparó las compras estatales y, Correa, al final, termina perdiendo la disputa con las élites económicas tradicionales.

De este modo es que el año 2011 se constituye en un punto de inflexión en la revolución ciudadana. El gobierno buscará incentivar más la producción empresarial privada y combatir el déficit en la balanza comercial no petrolera. Para esto, y debido a la presión de las élites exportadoras, tomó más en serio las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea y, pese a la inicial expulsión de la embajadora de los Estados Unidos, por las revelaciones de los Wikileaks, buscó acercamiento y contribuyó con la gestión de la renovación de las preferencias arancelarias del ATPDEA.

No obstante, en este año la necesidad de gestionar mercados para los productos ecuatorianos terminó por acercar al gobierno y algunos empresarios. En este año, tres iniciativas generan más conflictos que alianzas. La primera tuvo que ver con una serie de reformas constitucionales, que implicaban reformar la justicia y una mayor regulación de actividades económicas; la segunda, tuvo que ver con el impulso de una nueva reforma tributaria y la tercera, con el envío a la Asamblea Legislativa, nuevamente con carácter urgente de un proyecto de ley antimonopolio. En el primer caso, las reformas se buscaron a través de una consulta popular que generó rupturas al interior del partido de gobierno, así como conflictos con otros sectores sociales, no necesariamente vinculados con la oposición.¹⁴³

¹⁴³ Indígenas, dirigentes políticos, movimientos políticos aliados de Alianza País en el Congreso, líderes mediáticos, entre otros se sumaron para rechazar la consulta de Correa. Uno de los grupos que terminó rompiendo con el bloque oficialista fue Ruptura de los 25, movimiento liderado por la Asambleísta María Paula Romo. Líderes de este movimiento también hacían parte del gobierno ocupando la Secretaría de los Pueblos y Nacionalidades y la Secretaría de Transparencia (El Mercurio, 2011-01-30, pág. 2). También se opuso a la consulta Paul Carrasco, Prefecto de Azuay y Líder del Movimiento Encuentro Democrático. Para este dirigente, que rompió también con Alianza País, la consulta atentaba contra la libertad de empresa y la libertad de Expresión (El Tiempo, 2011-02-01, pág. 3). El MPD, se opuso a la totalidad de la Consulta. Jorge Cabrera Espinoza, director provincial de El oro, del MPD, afirmó que el gobierno quería con esta consulta “*garantizar la impunidad de la corrupción de este gobierno*”. A la campaña por el no, se sumaron dirigentes de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Estos promovieron votar No, en la consulta, con excepción de la pregunta

Como parte de las reformas impulsadas por Correa a través de consulta popular, se prohibieron los juegos de azar y los casinos fueron clausurados.¹⁴⁴ Los máximos dirigentes de los empresarios tampoco pudieron hacer nada para frenar la consulta impulsada por Correa. La preocupación no era para menos. A través de la consulta popular, el gobierno restringiría la propiedad de la banca sobre los medios de comunicación, (Ecuador Inmediato, 2011-01-24). Los empresarios, del CEE, liderados por Blasco Peñaherrera, plantearon que, si el gobierno quería hacer las reformas planteadas en la consulta, el mecanismo no era el referendo, sino la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (El Comercio, 2011-01-25, pág.4). Como en otras oportunidades usaron la presión mediática, advirtiendo sobre sanciones de la comunidad internacional, pues se estaba violando la constitución (Ecuador Inmediato, 2011-01-26). Como era de esperarse, los banqueros se opusieron a la consulta pues limitaba los negocios de los banqueros. El Periódico El Mercurio, comenta al respecto que “Mediante un comunicado, los banqueros señalan que eso atenta a la confianza y la democratización del capital en el país, observan que la pregunta viola el artículo 66 número 15 de la Constitución, en el que se reconoce el derecho de las personas a desarrollar actividades económicas en forma individual y colectiva”. (El Mercurio 2011-01-30, pág. 2).

Desde la Cámara de Industriales de Pichincha, liderada por Pablo Dávila, la oposición a la Consulta se realizó a través de la amenaza de denunciar ante organismos internacionales, como la CIDH, pues a su juicio esta consulta atentaba contra el Estado de Derecho. Con el apoyo de abogados, juristas y académicos, se cuestiona la pretensión del gobierno de hacerse, vía consulta, con la potestad de reformar leyes vía decreto. A estas críticas respondió Correa, acusando de mentirosos a los líderes de esta asociación y, de manera sarcástica, mencionó como Cynthia Viteri y Jaime Nebot habían manifestado, como “sus abogados”, que las preguntas eran constitucionales. (Confirmado.net, 2011-02-06).

A pesar de todas las resistencias de distintos actores, la consulta fue aprobada el 15 de febrero de 2011, por parte de la Corte Constitucional. (El Universo, 2011-02-2016) y se dispuso que

No. 10 que establecía como delito no afiliarse a los trabajadores al Seguro Social. (Diario Opinión, de Machala, 2011-03-02). Lucio Gutiérrez en el mes de marzo se manifestó también en contra de la consulta (Opinión de Machala, 2011-03-03, pág. 22). La UNE también se sumó a la campaña por el No, en el plebiscito (El Tiempo, 2011-03-09, pág. 3). Lo mismo hicieron los dirigentes de la Federación única de Afiliados al Seguro Social Campesino. Wilfrido Álvarez, presidente de esta organización acusó al gobierno de querer controlar el poder judicial (La Hora, 2011, 03-09, pág. 3).

¹⁴⁴ Como parte de la campaña en contra de la posibilidad de acabar con los Casinos en el Ecuador, que fue una de las propuestas de la consulta popular, fueron varias las ocasiones en las que se planteó el número de empleos que se perderían, así como la cantidad de dinero que se perdería con la medida. Así, se habló de que estas empresas, daban empleo a más de 25.000 personas y generaban más de 50 millones de dólares (El Mercurio de Cuenca, 2011-03-05, pág 3).

la misma se realizará el 7 de mayo de 2011.¹⁴⁵ Una vez el Consejo Nacional Electoral dispuso la inscripción para organizaciones y personas para la promoción del Si o del No, en el plebiscito, 101 organizaciones lo hicieron. 79 se inscribieron en Quito, de estas, 36 lo hicieron para promover el Si, y 24, para el No. 18, buscarían promover el sí en algunas preguntas y el No, en otras. (El Universo, 2011-03-15). Finalmente, el Si, obtiene el triunfo en la consulta del 7 de mayo y parte de la oposición declara que este triunfo es fraudulento. Algunos consideraron que el triunfo había sido parcial, pues la oposición logra un 40% de los votos que negaban las propuestas del gobierno, lo que es mucho más de lo que auguraba Correa. (El Telégrafo, 2011-05-08). Correa por su parte celebró el triunfo, afirmando que la prensa privada era la verdadera oposición. “Calificó como ‘un hecho histórico’ que el pueblo se haya pronunciado a favor para que los propietarios de medios no tengan otro tipo de vinculaciones empresariales”. (El Universo, 2011-05-08)

Resuelto el tema de la consulta a favor del gobierno, a comienzos de junio, el gobierno y el SRI, impulsaron una nueva reforma tributaria para grabar cigarrillos, licores, plásticos y vehículos contaminantes. Con esta reforma el gobierno buscaba recaudar unos 400 millones de dólares para ser invertidos en programas de salud. Así mismo, se dispuso la reducción de subsidios para consumidores del servicio de electricidad de más altos ingresos, cambiando el sistema tarifario. (El Tiempo, de Cuenca, 2011-06-05). Como frente a otras medias, la respuesta de los empresarios fue que la misma incrementaría la informalidad y el contrabando. Cuestionaron que estas reformas desincentivaban las inversiones y por tanto afectaban la producción nacional, debido a la inseguridad jurídica que generaban las reformas frecuentes impulsadas por el gobierno, lo que mostraba una falta de planeación de largo plazo (El Tiempo-Cuenca, 2011-06-09, pág. 2 El Tiempo, 2011-06-10, pág. 2, El Comercio, 2011-06-11, pág. 12). El gobierno defendió las medidas y manifestó que no tenían una orientación fiscal, sino ambiental y que, además, por estar orientada a eliminar subsidios para familias de ingresos altos, defendió la medida afirmando que esta no tendría impacto para la clase media y las familias de bajos recursos (El Telégrafo, 2011-06-15). A mediados de este mes, se anunció además que se incrementaría el valor del ISD, el cual, además se aplicaría también a las ventas en el exterior, cuya utilidad no regresa al Ecuador. El anuncio cayó “como un balde

¹⁴⁵ El conflicto por la consulta fue llevado a la jurisprudencia internacional por Carlos Vera, periodista y “activista” opositor al gobierno. Este pidió a la CIDH, enviar una misión para verificar si la convocatoria del gobierno violaba la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La demanda fue aceptada y el abogado de Carlos Vera, Roberto López, consideró que esta aceptación era un duro golpe para el gobierno, “*pues está reconociendo que en el país no hay cortes que procesen el pedido. Y si no hay justicia, tampoco hay democracia*”, consideró (El Diario, de Portoviejo, 2011-03-12) la demanda, al final no tuvo ningún efecto.

de agua fría entre los sectores industrial, comercial y exportador del país, los cuales afirman que se está incorporando la presunción de que son evasores o ladrones”. Felipe Ribadeneira de Fedexport, consideró que este tipo de medidas lo único hacían era disminuir la competitividad de los productores nacionales, al incrementarse los costos operativos. De acuerdo con el dirigente empresarial, el dinero que se deja fuera no busca evadir impuestos, sino minimizar los costos operativos. Regresar el dinero, para el dirigente empresarial, implicaría pago doble de ISD, pues, los recursos fuera se usan para pagar proveedores. Pablo Dávila, de la CIP, afirmó por su parte que la medida desincentiva a los productores y se constituía en un impuesto a las exportaciones. “En el 2010 -expone Dávila- “el sector exportador pagó USD 194.2 millones por ISD a las importaciones de materias primas y bienes de capital, de los cuales, USD 64.9 millones afectaron directamente la liquidez empresarial, mientras el resto afectó a la rentabilidad ya que se cargaron a los costos de producción en cada empresa”. El gobierno, a través de Katiuska King, Ministra Coordinadora de la Política Económica, defendió la iniciativa argumentando ser un mecanismo para cuidar la liquidez del mercado. añadió que “lo que se busca con la medida es incentivar el retorno de divisas producto de operaciones comerciales con el exterior, que en algunos casos se mantienen incluso en paraísos fiscales”. Algunos industriales textileros, calificaron la medida propuesta como absurda (El Comercio, 2011-06-16).

A comienzos de agosto, la reforma tributaria propuesta por el gobierno, fue reformulada y enviada a la Asamblea con carácter urgente, con el nombre de “Reforma ambiental tributaria prosalud”. Roberto Aspiazu, del CEE, manifestó que “Lo que el gobierno utiliza es un marketing pintado de verde. El fin último, insistimos, es la recaudación de dinero, para financiar la enorme maquinaria de gasto público actual”. La reforma, fue rechazada también por los empresarios de la industria automotriz. (El Comercio, 2011-08-02).

Para octubre del mismo año el ISD contenido en la reforma, nuevamente se revisó por parte del gobierno. Esta vez, el incremento fue del 2 al 5%, lo cual fue rechazado por los empresarios ecuatorianos. Como parte del rechazo a la medida, por ser considerada perjudicial e ineficiente, El Comercio, informó que durante el 2010 se había producido una salida de divisas cercana a los USD 18.500 millones y, sólo entre enero y septiembre 2011, ya se eran USD17.000. Para el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, la medida buscaba proteger la producción nacional y combatir el déficit en la balanza comercial, particularmente la no petrolera, que de acuerdo a él mismo, llegaba a los 4.000 millones de Dólares. El funcionario aclaró que dentro de la reforma no quedarían cobijados pagos de créditos en el

exterior y habría exenciones para bienes de capital y materias primas. Lo fundamental era también afectar la importación de bienes de consumo suntuario (El Comercio, 2011-10-15, pág. 7). Para finales de octubre, el gobierno mandó, con carácter de urgente la reforma, con la oposición de empresarios y ciertas bancadas del parlamento. La misma fue aprobada por la ANL. No sin inconvenientes, pues, debido a la presión del empresariado y sectores de la oposición, no se logró consolidar la mayoría necesaria para ser aprobada. De hecho, el 17 de noviembre, la Asamblea decidió su archivo, lo que generó el rechazo del gobierno y de su bancada, pues esta decisión había sido tomada por menos de la mayoría absoluta, es decir, con menos de los 63 votos requeridos. El gobierno amenazó, que de no ser aprobada la reforma, la aprobaría por decreto-ley (Semanao Líderes, 2011-11-23, pág. 29). Y así sucedió. Ante las dificultades para conciliar en el parlamento, el gobierno hizo uso de sus poderes constitucionales para aprobar la reforma. Al rechazo de la reforma tributaria de Correa, se sumó la CCG que, a través de su presidente, Eduardo Peña, demandó la norma por inconstitucional. Lo mismo hicieron Gimar Gutiérrez, parlamentario de Sociedad Patriótica, tal como ya lo había hecho Blasco Peñaherrera (El Universo, 2011-12-06, pág. 10).

Como si esto fuera poco, este mismo mes de noviembre de 2011, el gobierno, de acuerdo con la Agenda de Política Económica para el Buen Vivir 2011-2013, estableció el incremento de la presión tributaria al 15% hasta 2013. Parte de este incremento se lograría a través del incremento del IVA y llevando al 50% del total del recaudo, la participación de los impuestos directos. (Gestión 2011-08-24). Esto fue denunciado por el Semanario Líderes, que afirmó en una de sus publicaciones de diciembre que “Los ingresos tributarios se convierten en la máquina de hacer dinero para financiar el presupuesto General del Estado en el próximo año, que llegará a los USD 26.109 millones”. El semanario expone que el 45-6% del presupuesto del 2012 provendría de impuestos a la Renta, el IVA, aranceles, el ISD, el impuesto a Consumos Especiales, entre otros. “Eso representa USD 11.907 millones, un 26% más que lo previsto para el 2011. Es decir, los contribuyentes, sean personas naturales o empresas, aportarán USD 2.481 millones más en impuestos”. El semanario continúa precisando que: “Las recaudaciones que más crecerán con la nueva reforma tributaria son por ICE, e Impuesto a la Salida de Capitales... La recaudación por el 5% del ISD previsto para el próximo año se calcula en USD 447 millones” (Semanao Líderes, 2011-12-12, pág. 42).

En Julio de éste mismo año, el gobierno anunció estar construyendo una propuesta de Ley Antimonopolio. Este anuncio, constituyó el tercer motivo de conflicto entre el gobierno y los empresarios. El gobierno justificó la iniciativa, tras conocer los resultados del Censo

Económico ejecutado el año anterior, que mostraba que Pichincha y Guayas concentraban “72% del volumen de ventas y el 45% de establecimientos comerciales. Pichincha, que representa el 18 por ciento de la población del país, tiene el 22.2 por ciento de número de establecimientos y el 46.8 por ciento en ventas de bienes y servicios” (El Tiempo-Cuenca, 2011-07-01).

A esta ley se opusieron los empresarios, liderados por el CEE y los banqueros. Para los segundos, la misma tendría vicios de inconstitucionalidad. Para los primeros, esta afectaría a los consumidores, a los productores y el Ecuador en su conjunto, al disminuir la competitividad y la inversión extranjera. Los empresarios buscaron influir, esta vez a los asambleístas, presentándose ante la AL. Allí, durante el segundo debate a la ley Peñaherrera planteó que de aprobar la ley del gobierno, se iban a perjudicar a todos los ecuatorianos, pues la misma *competitividad* y pondría “(...) al Ecuador al inicio del 2012 en una situación compleja, porque el Estado es demasiado grande, el precio del petróleo está bajando, los ingresos del Estado están ligados al precio del crudo y a los impuestos que generar por el petróleo, y con el consumo que se vería afectado por la Ley”. Asumiendo la mirada empresarial, como la representación del interés general, agregó que “Aquí hemos venido a defender a los cientos de miles de ecuatorianos, consumidores y productores que no necesitan que el Ejecutivo intervenga en el mercado, sino que queremos una ley buena que nos proteja de los monopolios, de los oligopolios, que son la antítesis de la libre competencia, y que permitan que la productividad del Ecuador mejore”. Y va más allá, la ley propuesta por el gobierno, para Peñaherrera, podría causar encarecimiento de los productos y desabastecimiento, “lo que ya ha ocurrido en países vecinos como Venezuela”. (Ecuador Inmediato, 2011.09-21). Henry Kronfle y Blasco Peñaherrera, manifestaron que lejos de disminuir la competencia desleal, se le daba a la Superintendencia de Control del Mercado, y al presidente específicamente, “la facultad de intervenir en el mercado, es decir, en la economía del país”. (El Tiempo, 2011-09-22, La Hora, 2011-09-22, pág. 6)

La Asamblea modificó en algunos de sus apartados la iniciativa del gobierno, pero esto no satisfizo al empresariado, así que la CCG, organizó una reunión con alrededor de 200 empresarios para analizar el contenido de la ley y buscar consensos que posibilitara la modificación de esta, más allá de lo propuesto por la AL. Para la segunda semana del mes de octubre, la nueva ley había sido aprobada por el presidente Correa, quien afirmó que se había allanado “a todas las observaciones de la Asamblea”. La mayor preocupación del empresariado y de la oposición al gobierno, una vez aprobada la ley, era el exceso de poder

del nuevo Superintendente (de control del poder de mercado). La medida, se afirmó entonces, “no permite que se consolide la confianza del sector empresarial y más bien, otorga demasiada discrecionalidad al Ejecutivo y fortalece la injerencia del sector público”. En relación con la limitación del poder de la banca y sus negocios, César Ricaurte, de Fundamedios, afirmó que “la medida debilitará a la prensa local pues, en su opinión, no podría recurrir a los mercados de capitales para hacer inversiones o actualizar su tecnología y la pondrá en riesgo de ser absorbida por conglomerados de comunicación extranjeros”. (El Tiempo, 2011-10-12, pág. 5).

Estas miradas negativas, por parte de la dirigencia empresarial, no fueron compartidas por los voceros de uno de los grupos económicos más poderosos del Ecuador. La Corporación La Favorita, manifestó que no se vería afectada por la nueva normativa, pues esta “no sólo que les da garantías para seguir invirtiendo, sino que legitima su posición en el mercado. Aduce tener el 11.5% del mercado de alimentación y productos de consumo al detalle”¹⁴⁶.

Para el CEE, la ley era discriminatoria, pues daba privilegios al sector público sobre el privado. Rechazaron que el gobierno no había establecido un régimen de transición para los propietarios de medios de comunicación y bancos, se adaptaran al nuevo escenario normativo. Bruno Leone, de la CIG, estuvo de acuerdo con Roberto Aspiazú del CEE, para quien la norma era discriminatoria y fue más lejos. Para él, “De antimonopolio”, la ley “no tiene nada”. Agregó que “no me parece que el superintendente de control de mercado sea el que sancione y el que eventualmente resuelva una apelación que se haga”. Quienes finalmente terminaron usando los recursos legales para intentar frenar la propuesta del gobierno fueron los dirigentes de la CCQ, que presentaron demanda de inconstitucionalidad a finales de octubre. Los argumentos de la CCQ, hacen referencia a la violación de normas constitucionales referidas al control del mercado por parte del Estado, pero no por parte del Ejecutivo. Así mismo se cuestiona que la norma versa sobre temas diversos y las leyes deberían regular actividades específicas. En relación con el incremento del ISD, Blasco Peñaherrera afirmó que la medida afectará “a todos, pero en especial, a la clase media y baja del país, ya que los ecuatorianos ‘consumen muchos productos importados’, pues ‘no ha habido incremento en la productividad nacional porque no hay seguridad jurídica’ y han aumentado las compras de productos extranjeros” (El Tiempo-Cuenca, 2011-10-25).

¹⁴⁶ Los empresarios farmacéuticos, tampoco manifestaron gran resistencia la ley. (El Universo, 2011-10-12, pág. 10).

Por su parte, los banqueros, alertaron sobre un eventual encarecimiento y eventual disminución del volumen de los créditos, debido al incremento del ISD. Pidieron desde la ABPE, exonerar de este pago al pago de intereses y pagos de capital de créditos contraídos en el exterior. Esta opinión fue compartida por los representantes del sector de microfinanzas, al considerar que las ganancias provienen del exterior. Jaime Cárdenas, del liberal Observatorio de la Política Fiscal, cuestionó la política de “gasto ilimitado” adelantada por el gobierno de Correa, pues “no van a haber impuestos que alcancen a financiar dichos egresos”. Culpó al ISD, de la disminución de la inversión extranjera (El universo, 2011-10-29, pág. 5).

Como vemos, el 2011, representó para el proceso de establecimiento de la revolución ciudadana, un escenario de confrontación decisivo. En primer lugar, porque se hicieron visibles dificultades para la articulación de los representantes de Alianza País en el parlamento para tomar decisiones, pero también porque debido a las iniciativas legislativas del gobierno, se produjeron también rupturas en el interior de este movimiento, disidencias y alejamientos de aliados. Así mismo, se incrementaron las tensiones con grupos y movimientos políticos que ya venían manifestando oposición al gobierno. Esto conducirá a reforzar el carácter “plebiscitario” del gobierno de Correa y el fortalecimiento de vínculos inorgánicos con “la ciudadanía”, a través del fortalecimiento del aparato publicitario y del reforzamiento de lazos clientelares. Si bien el gobierno logró imponerse en los tres conflictos centrales, el costo de esta imposición va a pesar en el largo plazo.

El año 2011, tuvo un componente adicional en términos de las disputas ideológicas. Pasados cuatro años de Correa en el poder, fue el momento de balances por parte de la prensa y los empresarios, así como de analistas liberales, soportes ideológicos de la oposición. En este sentido, los empresarios acusaron al gobierno de haber dejado de lado la inversión privada y de mostrar resultados más bien limitados en materia social. Pese a haber manejado una gran cantidad de recursos, afirmaron algunos dirigentes gremiales, la reducción de la pobreza habría sido inferior a periodos pasados (Entrevista Blasco Peñaherrera, 23 de junio de 2013). En la misma dirección se usaron los “análisis” de Pablo Lucio Paredes, quien cuestionó los “mediocres resultados” de la gestión de Rafael Correa en materia económica, a pesar de haber contado con recursos mucho más abundantes que los disponibles en la “larga noche neoliberal” (El comercio, 2011-01-17, pág. 8)¹⁴⁷. En esta misma dirección, se cuestionó el

¹⁴⁷ En el mes de marzo, el periódico Últimas Noticias publicó una nota en la que se ponía en evidencia la gran cantidad de recursos que el Estado había utilizado para subsidiar distintos productos. Expuso que entre el 2007 y el 2010, se habían utilizado 21.000 millones de dólares en subsidios, monto que era casi igual a los 24.000 millones de dólares de todo el presupuesto del estado en 2011 (Últimas Noticias, 2011-03-15, pág. 7).

más bien modesto y volátil crecimiento de la economía ecuatoriana, “pese al entorno internacional favorable”. La Cámara de Industrias de Guayaquil publicó un estudio que mostraba que, “En promedio el país ha crecido al 3.3% durante el actual Gobierno, debajo del promedio regional, mientras que en el periodo 2001-2006 fue del 5.2”. El gobierno se defendió afirmando que, “al analizar el sector no petrolero, que mide la evolución de la actividad privada, la tasa de crecimiento es mayor”. El estudio, presentado por el diario El Comercio, destaca también lo que serían pobres resultados en materia de inversión privada, en generación de empleo y balanza comercial. El problema, para los empresarios, consistía en que el alto gasto público, incentivaba el consumo y las ventas, lo que hacía que la bonanza económica, no se aprovechara de la mejor manera y fuera muy sensible frente a una eventual caída de los precios del petróleo. Esto hacía muy vulnerable a la economía ecuatoriana en su conjunto, pues se había configurado una estructura estatal con un crecimiento insostenible de sus gastos corrientes. (El Comercio, 2011-05-26, pág. 6). Frente a estas acusaciones el gobierno se defiende, mostrando resultados en materia social. Estos balances y el juzgamiento sobre los resultados del gobierno, se harán frecuentes. Las disputas con el gobierno, por parte de las élites y la prensa, se llevarán, en adelante, hacia el cuestionamiento de la legitimidad y veracidad de las cifras que el gobierno y las instituciones del Estado, presentaban como muestra de la eficiencia de la gestión de política económica y social.

Para los dirigentes gremiales, la ambigüedad era la característica central del gobierno de Correa, al considerar que, por un lado, el gobierno sacaba unas leyes que promovían la inversión, pero estas eran acompañadas por otras que la frenaban, restringían o regulaban en exceso.¹⁴⁸ De este modo, la articulación público-privada, que fue promovida a partir de la implementación, en el 2011, del nuevo código de producción y luego, a través de otras leyes, verá limitados sus efectos. Ecuador seguirá viviendo dificultades para lograr incentivar su producción, más allá de la producción de bienes de consumo con poco valor agregado. Esto, no obstante, el hecho de que, en casi todos los discursos de Correa, dirigidos a los empresarios nacionales y extranjeros (que no a los dirigentes gremiales), este los instaba a

¹⁴⁸ Para quien fuera por cerca de 10 años presidente de la CCQ, Blasco Peñaherrera, esta ambigüedad poco a poco fue debilitando el interés de los gremios por buscar que el gobierno se comprometiera con el desarrollo de una política comercial coherente con las características y necesidades de la economía ecuatoriana. Se fueron agotando, afirmó, en las gestiones para la renovación del ATPDEA, así como en las gestiones para impulsar un acuerdo comercial con la UE (Blasco Peñaherrera Solah, Comunicación personal, 23 de junio de 2013). Las negociaciones con la Unión Europea fueron asumidas, durante el año 2012, como una tarea autónoma y exclusiva de del gobierno. En lo que parecía un intento serio de reanudación de las negociaciones con la UE, los empresarios pidieron un “cuarto adjunto”, sin lograr mayores resultados (El Comercio, 2012-03-27, pág. 7; El Universo, 2012-05-02).

invertir en desarrollo tecnológico y científico, para generar un verdadero proceso de sustitución de importaciones.

Durante el año 2012, el gobierno seguirá teniendo dificultades para sumar voluntades y/o lograr subordinar al empresariado frente a sus políticas económicas. Ante estas dificultades, cuyas consecuencias se materializan en debilidades del aparato productivo nacional por la falta de inversión privada orientada a la reorientación del aparato productivo, el gobierno se verá forzado a hacer uso de fuentes de financiamiento con efectos políticos y económicos complicados: El endeudamiento externo y el impulso a la explotación minera. Esto último se hizo a partir del mes de marzo, cuando el gobierno anunció que buscaría atraer al menos unos 7.000 millones de dólares en los siguientes 3 años. Los resultados de las gestiones gubernamentales en este campo no habían sido los mejores. De hecho, desde que la minería a gran escala fuera reactivada en 2009 se habría conseguido unos USD 200 millones de dólares, provenientes fundamentalmente de empresas canadienses y chinas. Esto, pese a que la oferta que el gobierno promovía como potencial minero, podrían llegar a los 200.000 millones de dólares.¹⁴⁹

El año 2011, terminó con la tradicional discusión sobre los incrementos salariales decretados por el gobierno. Un factor que, para los empresarios se sumaba a los altos costos de producción que el gobierno venía imponiendo al sector productivo, minando su debilitada competitividad. (El Comercio, 2011-12-30). El año 2012, inicia de este modo, con esta preocupación de la dirigencia gremial, que arreciarán sus críticas al modelo económico del gobierno. Cuestionarán cada vez más radicalmente el incremento de los impuestos y de costos generales de producción, así como una poco exitosa gestión de la economía y las políticas sociales. En lo económico, el constante reclamo de los empresarios será la pérdida de competitividad de la economía ecuatoriana, las dificultades para mantener el empleo y la posibilidad de despedir trabajadores debido a los costos de producción que el gobierno había hecho crecer (El Comercio, 2012-01-01, pág. 9).

A pesar de las quejas de la dirigencia empresarial, el crecimiento de la producción industrial, para el 2011 fue significativo. El crecimiento de la economía en general, que llegó al tope de

¹⁴⁹ Esta iniciativa de Rafael Correa fue respondida con una propuesta de reforma a la Ley Minera de 2009, presentada por el asambleísta Kléver Jiménez de Pachakutik. En la propuesta, Jiménez explicó que lo que se buscaba es que el Ecuador recibiera no menos del 50% de las utilidades por la explotación minera, pero al mismo tiempo se protegieran territorios ancestrales. Este proyecto fue cuestionado por Wilson Pastor, Ministro de Recursos no Renovables, al calificarlo de “negativo para la minería mediana y a gran escala”. El ministro de Minas, Federico Aguilar fue más lejos al afirmar que no permitirían “una reforma a la Ley de Minería Actual”. (El Comercio, 2011-03-31)

7.8%, legitimó el incremento salarial decretado por el gobierno, que llegó al 10.6% (El Comercio, 2011-12-30, pág. 6). Ahora bien, aunque las exportaciones no petroleras se incrementaron en el 2011, esto no se compensó con la disminución de las importaciones que, por el contrario, aumentaron significativamente. Para el año 2012, las perspectivas no eran más alentadoras. La tendencia era el aumento del déficit comercial que, de acuerdo con el Semanario Líderes, llegaría este año a los USD 8.871 millones, esto es, unos USD 600 millones más que en 2011. Estas cifras se convierten en una herramienta para la promoción de los acuerdos comerciales y para presionar el acuerdo con la Unión Europea, de la mano de analistas y académicos, así como de dirigentes empresariales (Semanario Líderes, 01-09-2012). No obstante, aun contando con el trabajo del canciller Ricardo Patiño y la Embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Nathaly Cely, no se lograrán mayores avances en la negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea y un trámite menos politizado de la renovación del ATPDEA.

Además de los intentos de los empresarios de hacer que el gobierno se comprometiera directamente con una política comercial que fortaleciera los mercados tradicionales, sin lograr mucho, durante este año tres temas centran la preocupación de los empresarios. En primer lugar, como medida adicional para intentar frenar el crecimiento del déficit en la balanza comercial no petrolera, el gobierno impone restricciones a ciertos productos, lo que genera el rechazo de las más grandes cámaras de comercio de país. En segundo lugar, busca ampliar las relaciones comerciales del Ecuador con países que, para los empresarios, no aportarían nada a las exportaciones ecuatorianas y si afectaban las negociaciones con la Unión Europea y con los estados unidos para mantener el ATPDEA. Junto con este tema, las élites económicas rechazaron el refugio concedido por el gobierno de Correa a Snowden, protagonista de los *wikileaks*. En tercer lugar, a proximidad de las elecciones generales, durante el año 2013.

En relación con el primer tema, a mediados de 2012, el gobierno restringió las importaciones de vehículos, televisores, celulares, lavadoras, ropa, bebidas alcohólicas, tabaco, cámaras fotográficas y otros bienes de consumo, que eran considerados los responsables de un porcentaje considerable de la fuga de capitales y, por tanto, de generar problemas de liquidez. Con estas restricciones, el gobierno pretendía impedir la salida de unos 300 millones de dólares. Aunque para los empresarios, las medidas terminaban siendo contraproducentes, fomentando el contrabando y la ilegalidad. (el Tiempo, Cuenca, 2012-06-199). Esto generó la queja de los empresarios pues, para algunos la medida implicaba que no podrían importar más en lo que quedaba del año, generando así problemas para la sostenibilidad de sus negocios (El

universo, 2012-06-18, pág. 9). Los problemas de la balanza comercial son, de este modo, tal vez los más importantes para la economía política ecuatoriana, pues esta implica un debilitamiento progresivo del gobierno para mantener la orientación de las políticas económicas que ha considerado fundamentales para el desarrollo económico del Ecuador.

Las medidas restrictivas de las importaciones fueron complementadas con otras orientadas al control de las divisas que ingresaban al país. Así, argumentando la defensa de la liquidez del sistema monetario ecuatoriano, el Banco Central emitió una directiva a comienzos de agosto de 2012, en la que obligaba a exportadores, empresarios y banqueros a declarar el 100% de los recursos que ingresaban al país. Todos los recursos debían ir primero al Banco Central. La medida generó resistencia de la banca y de algunos empresarios, pues la vieron como un intento de incautación de sus recursos. Con esto, el gobierno buscaba el fraude de los bancos, mediante falsos ingresos de divisas, que la banca no acreditara dólares, a través de recursos previamente existentes en el banco en el país (El comercio, 2012-08-08).

Ante las dificultades para mantener una balanza de pagos adecuada, el gobierno tiene que recurrir a créditos. A comienzos del mes de Julio, así, el gobierno obtiene un nuevo crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas por un monto de USD 514.6 millones (El Comercio, 2012-07-08). Así mismo, debido a las dificultades para generar procesos de transformación de la estructura productiva, el gobierno se ve forzado a buscar fortalecer la economía extractiva. Durante este año la primera gran acción del gobierno en esta área fue la firma de un contrato para la explotación de Cobre en la Provincia de Zamora. El gobierno celebró el contrato por haber conseguido un nivel de regalías del 52%, el más alto del mundo, según el Ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. Rafael Correa, por su parte, destacó que su gobierno promovía una minería responsable, manifestando que los primeros en beneficiarse serían los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe (El Telégrafo, 2012-03-06). El inicio de la minería a gran escala en Ecuador, no contó con la aprobación de los pueblos indígenas, que se movilizaron en contra de la medida del gobierno y de la firma del primer contrato. Las movilizaciones comenzaron en la provincia del Azuay (El Tiempo-Cuenca, 2012-03-09). Hay que recordar que en esta provincia la Cámara de Comercio del Azuay fue protagonista del impulso de la Ley Minera desde 2008. Pese a la resistencia de indígenas y otros movimientos sociales, el gobierno anunció la firma de un nuevo contrato minero con la transnacional Kinross, para la explotación de oro en la misma provincia de Zamora Chinchipe. (El Telégrafo, 2012-02-18, pág. 7).

La profundización de la economía extractiva se vio fortalecida también por las dificultades del gobierno para mantener la producción petrolera en manos de Petroecuador y, ante el fracaso de su política de asociación público-privada, luego de 10 años, retornó al mercado en busca de inversionistas. No obstante, mantiene la búsqueda de prestadores de servicios, en asociaciones público-privadas. Esta iniciativa generó la movilización de los pueblos indígenas en rechazo a lo que consideraron una política inconsulta con las comunidades.

En relación con la búsqueda de los empresarios de adelantar los procesos de negociación con la Unión Europea, los empresarios tendrán que esperar todavía 3 años más para lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea. Ahora bien, este tema se vinculó con las discusiones sobre política económica y de comercio exterior durante el 2012. A fines del mes de agosto de este año se discutió en una reunión que el mismo presidente sostuvo con alrededor de 160 empresarios. Allí, Correa destacó el crecimiento de la economía no petrolera en un 9% y “explicó la necesidad de sustituir importaciones y otorgar valor agregado a las ofertas exportables mediante el incremento de la eficiencia y la productividad”. Los empresarios manifestaron su preocupación por posibles retaliaciones por el caso Assange”, frente a lo cual Correa manifestó que “si la soberanía nacional está en juego, nos levantaremos de la mesa de negociaciones... este gobierno no va a tolerar presiones de ninguna especie”. Así mismo precisó que “la estrategia del Ecuador es estar unidos, el sector público y privado, para defender el derecho a las negociaciones. “Pronto tendremos nuevas elecciones, que se discutan estos temas. Si me lanzo a la reelección, ratificaré que jamás aceptaré ningún chantaje”. Por su parte, los empresarios pidieron revisar el ISD y revisar la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Así mismo pidieron seguir buscando la apertura de nuevos mercados internacionales “y establecer con transparencia el desarrollo de las negociaciones que Ecuador lleva adelante con Estados Unidos y la Unión Europea” (El Telégrafo, 2012-08-29).

En relación con el tercer tema de preocupación para los empresarios, para fines de año, la campaña electoral ya se deja ver en las declaraciones de Correa. Su posible reelección ya la había mencionado meses antes. Uno de los temas de campaña será el incremento del Bono de Desarrollo Humano, de 30 a 50 dólares, que sería financiado con las utilidades de la banca. Para el presidente, si los banqueros no estaban dispuestos a financiar este incremento, el gobierno compraría los bancos y los nacionalizaría. Para algunos analistas, éste tipo de declaraciones lo único que hacían era generar pánico económico (El Comercio, 2012-10-14, pág. 9). Otro tema fue el relanzamiento de la política de sustitución de importaciones. Frente a

este tema y en consonancia con las críticas que venían haciéndose desde el 2011, el periódico el Comercio presentó un nuevo balance en el que el periodo 2008-2012, en el que se impulsó esta política. Para el periódico, como habían dicho algunos dirigentes gremiales y analistas liberales, habría sido un fracaso, pues la producción industrial ecuatoriana no había crecido ni siquiera un punto porcentual. Esto, para los analistas consultados por la prensa, obedecía a la falta de coherencia en las políticas adelantadas por el gobierno, a la falta de estímulos reales para incrementar la producción. Uno de los ejemplos que se muestra es el sector metalmecánico, que lejos de crear, presenta una balanza comercial deficitaria acumulada en el periodo de 4.500 millones de dólares, de acuerdo con el diario. Para Guillermo Pavón, de la Federación de Industrias del Metal, pese a tener una capacidad instalada muy superior a la operativa, se sienten excluidos de “la construcción de grandes obras de infraestructura estatal, como las centrales hidroeléctricas”. Así “Aunque reconoce que hay más demanda de materiales de construcción, esta viene básicamente del sector privado”. Otro sector que se usa como ejemplo para mostrar el fracaso de las políticas del gobierno es el de la producción de Línea Blanca (refrigeradoras, lavadoras, etc.) En este caso, aunque el sector había crecido en un 26.5%, también había crecido la importación de estos productos en un 45% en los últimos dos años. Javier Mora, presidente de la Asociación de Industriales de Línea Blanca, citado por el periódico afirmó que “el sector podría crecer más y cubrir las importaciones en base a políticas claras”. Así mismo comentó que “en el 2010, el presidente Correa estableció, en el decreto 265 que se compense al sector con créditos tributarios debido a las sanciones arancelarias, de hasta el 15% impuestas por la Comunidad Andina... Esta compensación no se ha cumplido hasta el momento”, (El comercio, 2012-10-15).

Continuando con esta lectura negativa de la política económica de Rafael Correa, el diario El Comercio, hace también un balance negativo del código de la producción. Para el periódico, los niveles de inversión, luego de la expedición de este código, no se habían incrementado significativamente. El diario consulta a algunos empresarios que manifiestan haber mantenido sus inversiones, sin recurrir a los incentivos del gobierno (medianos empresarios), debido a las trabas para acceder a los mismos. Mientras tanto, se comenta cómo la Corporación La Favorita si había hecho uso de estos incentivos, particularmente la reducción del impuesto de renta, generando nuevos empleos y ampliando sus plantas de comercialización y producción.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Blasco Peñaherrera, en la entrevista concedida para esta investigación afirmó que la manera en que el gobierno había conducido las relaciones con los empresarios, desconociendo a los entes gremiales, como la CCG

Además de lo anterior, para evidenciar el fracaso de la política de sustitución de importaciones impulsada por el gobierno, y de las barreras arancelarias impuestas para limitar las importaciones, el diario El Comercio, presentó también un informe en el que se detallan los 21 productos más importados por el Ecuador. A partir de este informe, puede analizarse la manera en que operaron económicamente los grandes importadores, para sacar dinero del país y cómo las políticas de promoción del consumo fueron en contravía de las pretensiones del gobierno. Así, con base el informe de El Comercio se puede identificar los productos más importados por los empresarios ecuatorianos: Vehículos y partes de vehículos, torta de soya, trigo, listados o bonitos (atún), televisores, electrodomésticos, computadores, maíz amarillo, aceite de soya, urea (El Comercio, 2012-10-15, pág. 8). Analizando el comportamiento de estos productos, encontramos que representaron, durante el 2010, un monto de importaciones que llegó a USD, 1675, 3 millones. En 2011, las importaciones de estos productos (agregando la importación de butanos, que creció de manera muy significativa), las importaciones llegaron a los USD 2.391,4 millones, lo que significó un incremento del 42.74%. Este crecimiento de las importaciones de bienes de consumo y uno que otro bien de capital, con unas exportaciones no petroleras más bien estancadas, explican los serios problemas de liquidez que enfrentaba el gobierno de Correa, lo que lo obligó a buscar medidas cada vez más difíciles y con pocos efectos. Algunas de estas medidas, fueron el endeudamiento, el control a la salida de capitales, la restricción de importaciones, etc. Casi ninguna de estas medidas funcionó. El gobierno conocía esta información y esto fue lo que lo llevó a decretar el establecimiento de toques en los volúmenes de importación de bienes de consumo, lo que habría producido una reducción en 2012. 43.91%.

El año 2012, termina con un crecimiento de la economía del 4.8%, de acuerdo con SEMPLADES. Esto en medio de la crisis internacional y la caída del precio del petróleo. Este crecimiento lo explican desde esta institución, como resultado de la gestión gubernamental, pero manifiestan una gran preocupación: el incremento de las importaciones y, por tanto, la salida de capitales por la vía de una balanza comercial no petrolera deficitaria y las dificultades para revertir esta tendencia. Con esta evaluación, proponen mayores restricciones para las importaciones. Destacan un crecimiento de la industria a un ritmo del 6% anual. Pese

o la CCQ y relacionándose directamente con grandes empresarios, había generado una relación también instrumental de éstos últimos. Muchos grandes empresarios invitados por Correa a sus reuniones, “están haciendo su agosto”, afirmó. Se estaban beneficiando de las políticas de incentivos, pero también de la contratación pública directa. Esto, sin hacer grandes inversiones en desarrollo productivo e innovación. Y fue más allá el dirigente empresarial. Los grandes grupos económicos, que estaban haciendo su agosto, de hecho, no invertían en el país, sino que, ante el criterio de que en cualquier momento el modelo se caía, habían optado por sacar grandes cantidades de dinero del país.

a esto, se resalta también el peso que tiene lo importado en la cultura ecuatoriana. Andrés Arauz, Subsecretario de Inversión Pública de la SEMPLADES comenta cómo desde el mismo Estado, a través de las compras públicas favorece las importaciones. En sus palabras:

El primer reto es cambiar ese criterio (de que lo importado es mejor) desde el Estado que actualmente consume casi el 80% de productos de afuera. Para contrastar (sic) esa práctica trabajamos en reformas legales desde la Asamblea. Una de ellas es la reforma a la Ley de Contratación Pública para establecer requisitos más duros que incentiven a comprar lo nacional... les comento: cerca del 70% de los alimentos que se distribuyen a través de los programas públicos de nutrición son importados y no nos pueden decir que en Ecuador no hay alimentos. Entonces se trata de fomentar la sustitución de importaciones en los sectores donde sí es posible, mientras que en las otras áreas podemos importar con la condición de que nos enseñen a producirlas, algo que las empresas sí están dispuestas a hacer porque se trata de contratos millonarios. (El Telégrafo, 2013.01-06).¹⁵¹

El cuestionamiento de las políticas económicas del gobierno de Correa, continúan durante el 2013, año de elecciones. Al informe citado del diario El comercio, se sumó uno presentado por el Observatorio de la Política Fiscal. Jaime Carrera, secretario de este Observatorio, se refirió a los ingresos que el gobierno había acumulado durante los 6 años precedentes: “*en los últimos seis años*, afirmó el analista, “el régimen ha tenido ingresos superiores a USD 63.000 millones, muy superiores a lo registrado en gobiernos anteriores. Esta disponibilidad de recursos habría conducido al incremento del gasto público: “Según Carrera, ésta alcanzó USD 145.000 millones en los últimos seis años. Pero pese a esta ‘bonanza’ de precios y de ingresos, el Ecuador no ha logrado mejorar la productividad y competitividad, explica Carrera”. Se cuestiona, junto con esto, el difícil acceso al mercado financiero internacional, debido al incremento del riesgo país y, la aceptación de créditos de China, con tasas de interés muy altas (Semanao Líderes, 2013-01-07, pág. 28).

Una de las políticas que se critica es el ISD, que, para los analistas mediáticos, no estaría dando los resultados para los que se estableció este impuesto. Así, se destaca cómo el año 2012, se rompieron los pronósticos de recaudación por concepto de ISD, al llegar a 1159,5 millones de dólares. Esto sobrepasó los 800 mil millones del año 2011 y mostraría la poca efectividad, pues los capitales seguirían saliendo sin disminución. Esto pese a que Carlos Marx Carrasco, del SRI, afirmara que con la medida se habría evitado la salida de unos 2.000 millones de dólares. De acuerdo con el funcionario directivo del SRI, “la reducción de salida

¹⁵¹ Para contrarrestar esta tendencia, además, la SEMPLADES propone darle mayor protagonismo a la economía social y solidaria, y al ministerio de Industrias

de dólares se da por la menor base imponible, en especial en pago de servicios al exterior, que cayó de USD 9.880 millones en 2011 a USD 8100 millones el año pasado”. A esto agrega que “El 99.03% de esa salida es de sociedades. Para el próximo año, sin embargo, con la aplicación de la Ley de Redistribución del Gasto Social, los contribuyentes podrán aplicar a crédito tributario, lo que significará una reducción efectiva de la recaudación del ISD”. Para María Gloria Alarcón, propietaria de Industrias Toni y ex presidenta de la CCG, es cuestionable que, aunque el sistema de recaudación de impuestos haya mejorado mucho, no se haya ampliado la base tributaria, lo que sobrecargaría a ciertos contribuyentes. Para Pablo Dávila de la CIP, “las constantes reformas en la normativa tributaria generan incertidumbre y limita la atracción de inversión extranjera. ‘para fomentar ese tipo de inversión es fundamental con una carga tributaria constante. Esto permitirá mejorar el clima de negocios y la planificación del sector productivo” (El Comercio, 2013-01-09, pág. 7)

Junto con las críticas al modelo económico de Correa se cuestiona el sistema tributario y se publican titulares y notas de prensa como “Ecuador es uno de los países que más tributa en la región”. Citando a Walter Spurrier y a Pablo Dávila de la CIP, se expone que el Ecuador estaría en el tercer lugar de los países con más alta tributación. Adicional a esto para Dávila, es cuestionable también que no crezca el número de contribuyentes y que se siga presionando a los mismos. “Así, los 100 mayores contribuyentes han aportado con más del 60% de las recaudaciones del Impuesto a la Renta, por ejemplo, desde que el Gobierno entró en el 2007 (El comercio, 2013-01-24, pág. 7).

A pesar de las críticas que empresarios, medios de comunicación y otros actores sociopolíticos venían haciendo al desempeño económico del gobierno de Correa y, también de los pocos avances en materia social, de acuerdo estos críticos, durante el 2013, el gobierno obtuvo dos nuevas y determinantes victorias electorales. La primera, pues logró incrementar la participación del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa y la segunda, pues él mismo logró su reelección en primera vuelta. Durante el nuevo gobierno, las relaciones entre empresarios y gobierno, pero, en términos generales, entre el Correa y otros actores sociopolíticos, se estabilizaron. El gobierno tuvo que abrir la economía al sector privado, ante las dificultades para incrementar los recursos del Estado, debido a la contracción de los precios del petróleo en el mercado mundial y a la contracción progresiva de la economía ecuatoriana.

En este marco, el gobierno impulsa una ley que promueve, por primera vez, de manera explícita, incentivos para el establecimiento de asociaciones público-privadas, en 2015. Para algunos, esta ley, favorecería al gran capital, con contra del Estado. Sin embargo, para los

empresarios, la ley todavía tenía muchas restricciones, en tanto se conservaba el carácter discrecional del gobierno para impulsar los contratos que se consideraran prioritarios. Así mismo, en este marco, el tan anhelado acuerdo comercial con la UE, se produce en 2016. Para comprender estos dos acontecimientos, es necesario tener en cuenta que los mismos no se lograron por presiones o gestiones de los empresarios y, particularmente de las grandes cámaras de la producción, sino más bien debido a condicionamientos estructurales. Luego de 8 años en el gobierno, las dinámicas de la economía ecuatoriana, se ha producido el acomodo instrumental de los grandes empresarios a las políticas económicas y comerciales del gobierno de Correa, el gobierno no lograr cambios significativos en la estructura productiva del país. Las inversiones de los grandes empresarios se dirigieron a abastecer una demanda creciente de bienes de consumo y bienes de capital para una industria local; una industria, no obstante, orientada también al consumo. El gobierno de Correa, pese a la construcción teórica de un cambio de matriz productiva, no logra romper con la estructura oligárquica, sino que termina por reproducirla.

El último gobierno de Rafael Correa, se mantendrá así, intentando mantener a flote la economía, recurriendo a préstamos internacionales y buscando mantener la presión tributaria. Pero, como vimos en páginas anteriores, se estanca progresivamente. Los escándalos de corrupción que salpican a varios funcionarios del gobierno se convertirán en el arma de la oposición, incluidos los dirigentes de las cámaras de la producción, para deslegitimar toda la obra del gobierno. Con esto, poco a poco, la RC, se diluye. Los empresarios, tal como lo anunciaron, resistieron, de hecho, ensancharon su chequera a la sombra del crecimiento económico y de las grandes inversiones del Estado. La ciudadanía se benefició de estas inversiones, peor también los empresarios que, dedicados a los negocios, a la banca y el comercio, fundamentalmente, usufructuarán grandemente el incremento considerable del consumo interno. Llenarán el país de centros comerciales y de productos importados. El relativo bajo precio del dólar, en todo el periodo les ayudará para satisfacer las crecientes demandas de bienes de lujo, autos y casas de las clases medias, medias-altas e, incluso, sectores populares, a través de un crédito expandido. Buena parte de las grandes inversiones facilitarán el comercio, pero no la productividad y, por tanto, las élites fortalecieron su poder estructural. Con este, ante el nuevo gobierno de Lenin Moreno, recuperarán, con creces, su poder instrumental.

Capítulo 7. Economía Plural, hegemonía y élites empresariales en el gobierno de Evo Morales

Tal como se hizo en el capítulo anterior, el presente está orientado a describir, analizar e interpretar la reconfiguración del Estado boliviano y de las relaciones de este con las élites empresariales. Todo esto, desde una perspectiva centrada en las disputas por hegemonía; esto es, en la capacidad de los nuevos actores estatales, de articular fuerzas políticas y económicas, potencialmente reaccionarias a su visión de Estado y de Sociedad. Para tal fin, en un primer momento, analizamos la construcción teórica y práctica que los actores estatales hacen de este nuevo Estado y esta nueva economía política. Este análisis se hace a través del estudio de la producción intelectual de quien ha sido el vicepresidente de Evo Morales, desde su primer mandato en el año 2006: Álvaro García Linera.

En este capítulo mostramos cómo los conceptos de “capitalismo andino amazónico” y de “economía plural”, han servido para articular a unas élites económicas que, en un comienzo se enfrentaron de manera incluso más radical que en el caso ecuatoriano, a las propuestas del gobierno de Evo Morales, pero que luego se acomodaron a las mismas. A diferencia del caso ecuatoriano, en el caso boliviano, estas propuestas han permitido unas relaciones mucho más fluidas, menos conflictivas y, hasta cierto punto de vista, mucho más exitosas, tanto para el gobierno como para las élites empresariales, desde el punto de vista político y económico. Esta articulación puede leerse como una articulación hegemónica, aunque con limitaciones que veremos más adelante.

Para comprender cómo se logró esta “hegemonización” de las élites empresariales, en un segundo momento presentamos el análisis de los conflictos que se produjeron en Bolivia a partir del año 2006, cuando Evo Morales asume la presidencia de la república e impulsa, como en el Ecuador, la elaboración de una nueva Constitución Política. La manera como se desarrollaron estos conflictos explica, en buena medida, por qué a diferencia de Ecuador, se logró la articulación hegemónica de las élites empresariales bolivianas, por parte del gobierno de Evo Morales. Factores estructurales, como propios de los movimientos que impulsan la reconfiguración del Estado, afectaron estos procesos de manera significativa. Una vez se presentan estos procesos, damos cuenta de cómo esto ha significado un trabajo articulado en la construcción de políticas económicas, con distintos sectores. A partir de 2010, afirmamos, se logra la estabilización de las relaciones entre los nuevos actores estatales y las élites empresariales. Afirmamos que parte del éxito del gobierno de Evo Morales, en materia de estabilidad económica, en medio de un contexto internacional volátil e inestable se debe a esta estabilización de las relaciones con las élites empresariales. Si bien es cierto, a lo largo del

gobierno de Evo Morales también se desarrollaron múltiples escenarios de conflictividad, entre los que se cuenta la oposición de antiguos aliados del gobierno a algunas de sus políticas, y el mantenimiento de ciertos sectores de la ultraderecha boliviana, el gobierno de Evo Morales, logró estabilizar las relaciones sociales y configurar una estatalidad articuladora de distintas demandas y proyectos.

7.1. Evo Morales, el proyecto hegemónico del gobierno de los movimientos sociales y el capitalismo andino amazónico

La construcción del Estado boliviano y la proyección de una nueva hegemonía está atravesada por varias dinámicas que es importante tener en cuenta para comprender sus diferencias y similitudes con el caso ecuatoriano. En primer lugar, las luchas por la forma de Estado, como hemos visto se intensifican a finales de la década de los 90 y principios del presente siglo. Esto en el marco de la radicalización de las políticas neoliberales. En este escenario se produce una acumulación progresiva de demandas y de capacidad de articulación social y política de parte de los sectores sociales subalternos y las clases medias. En este proceso, el Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales Ayma, ganará cada vez más relevancia, particularmente a partir del año 2002, cuando Morales participa por primera vez en las elecciones presidenciales obteniendo el segundo lugar, detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada. Dada la dispersión electoral, sin embargo, la votación que obtiene el primero apenas sobrepasa la obtenida por Morales. Esto hace que, en el marco de sistema semiparlamentario, sea el parlamento el encargado de elegir Lozada como presidente de Bolivia por segunda vez. Sin embargo, dos factores van a contribuir a que este segundo gobierno si siquiera llegue a culminar. En primer lugar, el ambiente de confrontación es creciente, los niveles de acumulación de poder de parte de los sectores populares movilizados y, en segundo lugar, las políticas de privatización impulsadas por Sánchez de Lozada y el agravamiento de las condiciones de vida de miles de bolivianos, van a producir un choque cada vez más intenso.

De este modo, se presenta un proceso de reconfiguración del Estado boliviano que tendrá dos fuentes principales. En primer lugar, las apuestas de los movimientos sociales indígenas y, en segundo lugar, la articulación de estos con un grupo de intelectuales de clases medias urbanas, liderados por Álvaro García Linera. En este último, así como en el economista Luis Arce Catacora, se condensará la apuesta teórica-ideológica que termina por establecer un proyecto de Estado que busca articular las distintas formas de producción, de la abigarrada economía y sociedad boliviana. En este proceso, los conceptos de “Capitalismo Andino Amazónico”, y de “economía plural”, significarán la construcción teórica y política que permitirá articular

incluso a parte de las élites económico-empresariales que, al principio se mostraron, reacias y reaccionarias de Bolivia.

En la obra de García Linera encontramos los discursos sobre el Estado y el capitalismo, orientados a establecer los fundamentos materiales y simbólicos de una nueva formación nacional, en la que estos se ponen al servicio de un nuevo proyecto hegemónico, denominado Estado plurinacional y en el que se articulan los discursos sobre los movimientos sociales y lo nacional popular, con énfasis en el protagonismo indígena comunitario. Usando el concepto de crisis del Estado de Lenin, entendida como una ruptura del equilibrio entre las dimensiones del Estado materiales (institucionales) e ideológicas del Estado, García Linera considera que esta ruptura que puede ser parcial o general. Así, lo que se habría producido en Bolivia sería una crisis general que tuvo 5 etapas. “La primera es cuando se devela la crisis del Estado, cuando se manifiesta y se expresa”. Esta etapa es de insubordinación del gobernado hacia el gobernante, vía protestas. Un ejemplo de esto puede ser *la guerra del agua*, que se produce luego de casi dos décadas de reformas neoliberales y que es sucedida por protestas escalonadas a lo largo y ancho del país. En este proceso, García Linera, el hecho de que Felipe Quispe haya desafiado a Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando le dice que no lo reconoce como “su” presidente, y que le hablará de presidente indígena a presidente de la “otra Bolivia”. Para el autor, Quispe, con esta acción, “volcó el orden simbólico de una sociedad racista y colonial como la boliviana”, al equiparar la fuerza y poder indígena y la de sus líderes en particular, con el poder del presidente de la república, legitimado por una larga historia de dominio del Estado liberal. (García; 2010-a: 7)

De este modo, el contexto de las luchas por el agua y luego por el gas como recursos nacionales soberanos, el año 2000 es leído como un momento de corte, en el que los movimientos sociales defienden los recursos públicos. Los indígenas, en este contexto cobran relevancia y poco a poco se constituyen como actores cuyo liderazgo crece a escala nacional. Se constituye así “un bloque popular con capacidad de irradiar la suma de demandas, de articular otros sectores, de encontrar legitimidad en la movilización, es lo que denominamos, teóricamente hablando, el momento de desvelamiento de la crisis de Estado”. (García, 2010-a: 8)¹⁵².

¹⁵² Sobre la constitución de las redes de soporte que permiten la articulación de los sectores indígenas-campesinos con los sectores urbanos populares, antes y durante la guerra del Gas, puede verse. Mamani, 2007. Este autor explica, no sólo como se van generando estas redes de apoyo de las movilizaciones, sino, además, cómo las mismas sirven de soporte para el aprendizaje de las comunidades en el ejercicio del poder autónomo.

Una segunda etapa, siguiendo a esta vez a Gramsci, es denominada por García Linera como *empate catastrófico*. Este se produce cuando el bloque liderado por los indígenas, comienza a crear nuevos espacios de legitimidad y a disputar la del gobierno. En este momento se presenta una dualidad del poder; la colisión dos proyectos de poder, uno dominante y otro emergente, que no se resuelve todavía. Para el autor, esto es lo que sucede en Bolivia entre el 2003 y el 2005. En este momento, el poder institucional formal del Estado es desafiado por el poder popular que se construye en las “asambleas barriales, agrarias, comunitarias”. En este momento, la coerción del Estado, no puede ejercerse en la totalidad del territorio, porque hay zonas donde las fuerzas sociales comienzan a implementar un monopolio social de los procesos de coerción. (García: 2010-a 8 y 9).

Desde la perspectiva de esta investigación, este desafío al Estado en sus dimensiones simbólicas ya se venía constituyendo de tiempo atrás, particularmente con el movimiento cocalero liderado por Evo Morales. Así, a comienzos de 2002, en la proyección de las elecciones presidenciales de ese año, Morales explicó cómo venía fortaleciéndose organizativamente la movilización, llegando a ejercer control territorial en varios puntos del país, no sólo para resistir, sino para buscar mayor capacidad de desplegar el movimiento y prepararlo para el poder. Para Morales esta fuerza organizativa estaba edificada en la conciencia de estar llevando a cabo una confrontación *político-ideológica*. En relación con el control territorial, particularmente de la región del Chapare, en este momento diputado Evo Morales, manifestó que los sindicatos tenían *control total* y que, políticamente también, pues, todos los alcaldes son dependientes de las federaciones. Refiriéndose a la confrontación con las fuerzas militares y de política expresó: ... “El año pasado los uniformados tuvieron más muertos que los campesinos, y eso que que todos los años siempre ha habido más muertos campesinos que uniformados... La organización es cada vez mejor. Más fuerte, más organizada, y quién sabe también puedan aparecer compañeros alzados en armas contra la injusticia, contra el sometimiento” (Opinión, 27-01-2002)

En este marco de creciente confrontación, Morales fue interrogado sobre su visión de los empresarios y sobre la proyección del movimiento. En relación con lo segundo, Morales argumentó que pese a la “guerra sucia” que había soportado, eran cada vez más sectores sociales los que se vinculaban con el “instrumento político”, esto es, con el MAS-IP, entre estos, comerciantes. En relación con su visión de los empresarios, manifestó que había tres tipos de empresarios en Bolivia: los transnacionales, que sólo saqueaban, los nacionales que

dependían del Estado y los que, por su propio esfuerzo, habían sacado sus negocios adelante. A estos últimos expresó su respeto, pero, afirmó:

(...) hay empresarios que están más pensando de dónde y cómo van a saquear y que explotan inhumanamente a los trabajadores. Son esa clase de gente que no tiene una conciencia de solidaridad con la gente que sufre el hambre y la miseria... Estoy convencido de que los empresarios del occidente boliviano, fundamentalmente, tienen muchas diferencias con los empresarios del oriente, especialmente los de Santa Cruz (Entrevista a Evo Morales, Tiempo de opinión, 27-01-2002).

Así, no sólo desde el movimiento liderado por Felipe Quispe, sino por el liderado por Evo Morales, que le apuesta a la ocupación del Estado y su reconfiguración desde adentro y que, de hecho ya había iniciado a partir de la participación del MAS en varios procesos electorales, se vive un momento de ruptura y reconfiguración de las relaciones de poder y se va consolidando un proyecto contrahegemónico.

Ahora, García Linera considera que el tercer momento se produce a partir de lo que denomina como *la sustitución de las élites* y se produce cuando el bloque emergente, finalmente accede al gobierno. Es el momento en el que Evo Morales Ayma llega a la presidencia, a través de unas elecciones históricas, en las que, por primera vez un candidato y, además un candidato indígena, obtiene una votación del 54%, cuando antes los presidentes bolivianos durante la denominada “democracia pactada”, eran elegidos con un 24% en promedio (Pachano, 2006, Mayorga, 2004; Deheza, 2006). Con esto para el autor lo que se evidencia es un “(...) proceso de descolonización del Estado, que se había ido construyendo, desde la sociedad, desde los ámbitos comunitarios, sindicales y barriales”. Este proceso había logrado fisurar la institucionalidad estatal colonial. El Estado, por primera vez era ocupado por un presidente indígena, así como por diputados, un canciller, una presidenta de la Asamblea Constituyente indígenas: “Las polleras, los lluchos, la whipala, que habían estado marginados, escondidos, muchas veces sancionados, perseguidos, castigados durante décadas y siglos, asumían y llegaban donde deberían haber estado siempre: El Palacio de Gobierno” (García 2010^a, 9).

En este proceso, que todavía no es la conquista del Estado, sino del gobierno, es cuando comienza a reorientarse al Estado, legal, institucional e idealmente, dentro del contexto de una nueva correlación de fuerzas. En este nuevo escenario, se fortalece al Estado, por encima del capital extranjero y a los campesinos, por encima de los terratenientes: “Tierra, recursos naturales hoy son de propiedad del Estado, de los movimientos, de los campesinos y de los

indígenas en una proporción mayoritaria de lo que era hace tres, cuatro o cinco años atrás”.
(García; 2010-a: **10 y 11**)

Todo esto trajo resistencias naturales, comenta el autor, porque ninguna élite acepta su derrota pacíficamente lo que lleva a una radicalización de los procesos. En este momento, explica García, o se vuelve a un estado anterior, o se supera el *empate catastrófico*. Es en este contexto cuando se produce un “punto de bifurcación ” y frente a esto, siguiendo a Foucault, se produce una “(...) confrontación desnuda., donde callan los procesos de construcción de legitimidad, de consenso, y donde la política se define como un hecho de fuerza. En este momento, los dos bloques que disputan la hegemonía hacen uso de los recursos de fuerza de que disponen (García; 2010-a: **11**).

Para el vicepresidente, esto es lo que pasa en Bolivia en el 2008 con el referendo revocatorio impulsado por las élites económicas del país, así como por los líderes de los partidos tradicionales. En este contexto, para García Linera, Evo Morales “Mostró su capacidad de estadista y de líder” y allí el proyecto indígena-campesino originario, termina ganando con el 67% de los votos. En este último proceso Bolivia vivió una dura arremetida de la derecha que puso a tambalear al poder; muchas instituciones del Estado fueron tomadas y violentadas. Pero en últimas es el punto de bifurcación porque se resuelve la correlación de fuerzas a favor del gobierno. Esta confrontación con las élites desplazadas del poder de Estado afirma García Linera, ya había sido prevista. Comenta al respecto que “el presidente Evo en el año 2008 inició el gabinete... y nos dijo a todos: “Este año es el momento de la definición. O nos quedamos o nos vamos, prepárense”. (García; 2010-a: 13).

En la interpretación de estos procesos de consolidación del nuevo gobierno, el autor retoma algunos elementos descritos en otros textos (García; 2008), aunque aclara que hubo un plan para reaccionar frente a la arremetida golpista que articuló a algunos movimientos sociales y a las fuerzas armadas. Todo esto se logró, explica, a partir de la combinación de distintas formas de lucha: acción política, acción armada legal y acción de masas. Todo conduce a la consolidación en el 2009 en el plano electoral. El hecho de que la constitución del 2009 hubiese sido aprobada por el 72% del electorado, es una muestra de eso y el que Evo ganara con el 64% del electorado, ratifica aún más la consolidación de las nuevas relaciones de fuerza al interior del Estado. En este contexto el MAS ganó 250 alcaldías municipales, lo que representa un 70% del total de los municipios. (García; 2010-a: 13).

Es en la descripción de este último momento que aparece la idea de que el Estado que se construye es plurinacional, autonómico y de economía social comunitaria. Este tipo de Estado, usando dos conceptos de Marx (usados a su vez por René Zabaleta y por Gramsci, precisa García Linera): el concepto de *Estado Aparente* y el de *Estado integral*, le permiten a nuestro autor, identificar algunas contradicciones del proceso revolucionario. La primera es que, el *Estado Aparente* es algo que sólo representa a un sector de la sociedad, es el *Estado patrimonial*, que estaría en camino de ser superado, pero todavía tiene que sortear algunos obstáculos relativos al histórico corporativismo de los movimientos y organizaciones sociales populares, indígenas y campesinas. El corporativismo, que puede entenderse como la búsqueda de satisfacer necesidades e intereses sectoriales o de grupos organizados de la sociedad, es así un obstáculo que resulta del triunfo del gobierno de los movimientos sociales frente a las élites tradicionales y que impide la constitución del estado *integral*, el cual debe representar a los intereses de las mayorías (García, 2011: 29 y ss.)

De este modo, el Estado se debate entre ser un ente administrativo de gestión de los recursos públicos o ser un espacio de representación de los intereses sociales. García Linera, considera que el gobierno de los movimientos sociales tiene que vivir con estas contradicciones, corriendo los riesgos de cada una de estas tensiones. De ahí que la apuesta por la construcción un *Estado Integral*, tal como fue concebido por Gramsci, sea un proyecto de largo plazo, pero es esta, considera el vicepresidente, una posibilidad abierta para Bolivia, por el dinamismo y creatividad de los movimientos sociales que soportan la nueva institucionalidad estatal. Desde esta concepción, se configura una propuesta de modernización del Estado, pero ya no desde las elites, sino desde los sectores populares que proyectan la construcción del socialismo. (García; 2010 a: 15).

Desde este lugar quedan perfiladas las características del Estado en general y del Estado plurinacional, el cual se asume como un proyecto en el que el bloque histórico hegemónico, constituido por los movimientos sociales indígenas, por la comunidad indígena, es capaz de articular en torno suyo a los demás grupos sociales, gestionar y administrar los intereses públicos con base en el interés del bloque dominante, que está constituido, nuevamente por los mismos movimientos sociales representados o articulados por el MAS. De esto se deriva una forma de entender la política y la construcción el Estado a partir del reconocimiento de esta como espacio de conflicto en el que no siempre se establecen consensos, pues no siempre son estos posibles ni necesarios. Con la configuración del nuevo Estado, se genera una imposición de dos tipos. De un grupo dominante sobre otro que ha perdido el dominio o,

mejor, la hegemonía y también como una necesidad histórica. Esta forma de entender la política, efectivamente estaría lejos de Habermas y el consensualismo y más cerca de posturas como las de Laclau y Mouffe (Laclau y Mouffe: 2006; Mouffe, 2009); una postura crítica del liberalismo, que apuesta por un *socialismo comunitario*, construido a partir de la articulación del marxismo y el indianismo (García; 2007; 2011:111-114), pero también, a partir de la articulación hegemónica de los opuestos, de aquellos que se resisten al cambio, incluso la clase empresarial nacional y local (García, 2011: 110).

Con esto, el Estado plurinacional sería el resultado de la articulación de los distintos grupos y clases sociales que componen la sociedad boliviana; una articulación en que el pacto y la negociación es parte de la estrategia hegemónica; es decir, parte de una articulación nucleada en los movimientos indígenas que están, a ojos García Linera, en el gobierno, en el control del poder de Estado. La construcción del Estado plurinacional es así, el resultado de la capacidad del liderazgo, en el caso boliviano de Evo Morales, la capacidad del político, que une lo fragmentado y articula lo dividido (García Linera; 2009:8). Sin embargo, no se trata de un líder individual, sino de un organismo colectivo que gestiona también sus propias tensiones y contradicciones, lo que configura otras de las grandes diferencias con el caso ecuatoriano.

Ahora, la articulación de los fragmentos de la sociedad, no se proyecta únicamente en el plano social y cultural, sino también en el plano económico. Allí, las economías familiares, comunitarias, comerciales, urbanas y empresariales deben articularse alrededor del núcleo comunitario. De este modo, para el autor, la construcción del nuevo Estado es también la construcción de una nueva economía. En esta, el Estado plurinacional es el líder, “pero no sustituye ni anula al resto de las estructuras y fuerzas económicas de la sociedad”. La idea, desde este marco, no es que las comunidades campesinas y rurales, se extingan o se vuelvan burguesas o proletarias, sino que estas *seguirán siendo comunidades, pequeños productores o artesanos por décadas*. En tal sentido, este nuevo Estado busca también potenciar al mercado interno, así como al externo, sin embargo, “En el estado Plurinacional, los indígenas son la fuerza motriz de la construcción del Estado”. (García; 2009: 11).

En línea con lo anterior, en el nuevo Estado, se desarrollan unas nuevas relaciones sociales, una nueva política, una nueva justicia, nuevos valores y una nueva economía. El capitalismo, como modo de producción, como formación política y jurídica, como un articulado complejo de formas de valoración y en general, como una *formación civilizatoria*, en palabras de García Linera, debe ser sustituido, en el Estado plurinacional, por un Estado integral que solo es

posible, progresiva y lentamente, a través del socialismo comunitario, entendido también como un *modelo civilizatorio universal*.

Es esto lo que se deriva de las propuestas teóricas de García Linera. La construcción de un Estado “plurinacional”, no puede verse únicamente en el plano jurídico, en el plano constitucional, sino que se ve como una dinámica de avances y retrocesos en lo económico, lo jurídico, lo cultural y lo social. El *Capitalismo andino amazónico*, como concepto bisagra, es clave para entender las formas en las que debería operar el tránsito hacia este socialismo comunitario. Para el vicepresidente, en el desarrollo de este tipo de economía, no se busca una socialización de la riqueza a partir de las economías familiares y comunitarias, sino que estas logren mayores niveles de desarrollo técnico y tecnológico que les permita, al interior, combatir las relaciones de subordinación generadas por el capitalismo. Se busca así articular las distintas producciones de manera solidaria, disminuyendo los niveles de explotación de las economías familiares. Esto se haría a partir del capitalismo andino-amazónico, el cual “promueve la ruptura de las cadenas que aprisionan el potencial comunitario y expansivo de esas economías campesinas”. (Svampa y Stefanoni 2009, 202).

Este es un proyecto que, para su desarrollo, García Linera reconoce obstáculos tanto económicos como políticos intrínsecos a los movimientos sociales (v gr. El corporativismo y el localismo), así como extrínsecos a estos (García, 2011). El proyecto de un capitalismo del tipo descrito está, además, vinculado con un poder que no sustituya a la sociedad o la suplante y, de ahí, la necesidad de fortalecer la autonomía de los movimientos sociales, reconociendo que esto es complejo y difícil en un contexto en el que existen presiones para la concentración del poder y que esto de hecho sucede en Bolivia-¹⁵³

¹⁵³ Son varios los autores que han puesto en cuestión la manera en que la idea del gobierno de los movimientos sociales ha sido usada, contrario a lo que plantea García Linera, para sustituir a los movimientos sociales y hablar en nombre de ellos. Las voces críticas provenientes tanto de la izquierda como de la derecha, consideran que la creciente concentración del poder y las alianzas más con las élites empresariales y políticas tradicionales con los sectores populares, impide la real transformación del Estado en un Estado Integral o en un Estado Plurinacional que reconozca las distintas formaciones socio-económicas existentes hoy en Bolivia. Al respecto, pueden verse las críticas, desde la derecha, de Reyé Mayorga particularmente (2009) y, desde la izquierda, las críticas de Jorge Lora (2005), Patricia Chávez (2007, 2012), Luis Tapia (2009-b). desde este lugar, algunos han considerado que se le ha dado más prioridad a las alianzas con la derecha, que García Linera asume como parte de la consolidación del proceso hegemónico, que con los sectores populares, indígenas y campesinos, con los que el gobierno se ha enfrentado en varias oportunidades. Sobre la manera en que de la confrontación se pasa a la alianza con las élites empresariales, particularmente del Oriente del país, puede verse: Mokvist, 2010. Algunas consideraciones críticas sobre la manera en que el gobierno enfrentó el conflicto generado con algunas comunidades indígenas a partir de la propuesta del gobierno de construir una carretera que conectara al centro del país con los departamentos de Oriente, atravesando un Parque Natural y territorios sagrados de las comunidades, ver: Ybarnegaray, 2011.

García Linera defiende, con todo eso, un proyecto en el que se promuevan las autonomías, aunque reconoce que estas se pueden replegar y es entonces cuando el Estado debe jugar un rol central en la articulación de los universalismos producidos en las etapas de movilización y gestionarlos con perspectiva histórica. Para el vicepresidente, había que mantener las conquistas sociales que se objetivaban en el Estado y esto dependería, a su parecer, de la capacidad de las nuevas élites formadas en los procesos de transformación. A la revolución le faltaría, en ese sentido, profundizar los procesos de reforma moral; avanzar en la conquista de derechos colectivos como el medio ambiente, así como los derechos de las mujeres. Esto se lograría a partir de la articulación entre los distintos espacios públicos que la misma sociedad va generando, tanto en los momentos en que está fuertemente movilizada, como en los momentos en que sus luchas logran institucionalizarse y reconfigurar las relaciones de poder al interior del Estado. En éstos últimos momentos, considera, hay que fortalecer el debate sobre el salto que significa pasar de la movilización al poder (Svampa y Sefanoni, 2009; García, 2011).

Una mirada compleja de lo económico, lo político, lo social y lo cultural subyace a esta propuesta de nueva hegemonía, en la que, sin embargo, no quedan claras las fronteras estructurales del capitalismo, frente a las formas comunitarias de producción y articulación social, económica, política y cultural. De hecho, en momentos en los que García Linera, defiende el proyecto revolucionario desarrollado por el MAS, termina por construir un sujeto de la revolución que, aunque no es el sujeto unitario (frecuentemente da cuenta de los conflictos internos en los sujetos de la revolución, de la heterogeneidad de los movimientos sociales, en lo que estaría de acuerdo con Laclau y Mouffe, 2006), si termina planteando asuntos problemáticos en relación con los objetivos de la revolución, que pueden ser cuestionables, tales como que lo que se pretende es construir un *mundo armónico*, donde la gente *sea feliz* (García Linera, 2010b).

De este modo, el proceso boliviano está orientado por una mirada en la que lo económico, lo político, lo social y lo cultural, son vistos a través del “prisma hegemónico”, como proceso de articulación de formas económicas, organizaciones políticas, clases sociales y orientaciones culturales, alrededor de una nueva matriz cultural y social: las comunidades indígenas. Calificar lo que viene sucediendo en la sociedad boliviana, únicamente como una revolución cultural o simbólica, no da cuenta de la complejidad que este proceso contiene. La reorganización prevista, a través de los actores que participan en la refundación de la nación boliviana como nación y Estado plurinacional, es problematizada por ellos mismos y por su

capacidad de tramitar sus conflictos, sus contradicciones dependerán del grado de articulación cultural, económica, social y política, o de integración autoritaria que pueda darse. El pensamiento de García Linera revela estas contradicciones y tensiones y el estudio de este es un elemento clave para comprender las dimensiones de la “invención de la nueva nación boliviana”, la “nueva” utopía boliviana.

A pesar de los importantes aportes del vicepresidente, es necesario ampliar aún más el horizonte. Para esto se requiere comprender la estructura de la economía política boliviana, para entender lo que podríamos denominar como obstáculos estructurales en el proceso de reorientación revolucionaria de esta sociedad. En esta dirección, hay que decir que el gobierno de Evo Morales recibió un Estado y una economía pobres y en un proceso incipiente de recuperación. Sus gestiones lograron la estabilización de la economía, con un grado de éxito considerable, a pesar de que, por momentos, la inflación se disparó a algo menos de 15% durante su primer gobierno. (Weisbrot, 2009). Sin embargo, dicho gobierno no impulsó inicialmente cambios significativos en materia de inversión pública y social, durante los primeros 4 años de gobierno, no obstante haber implementado una reforma agraria que, aunque fortalece a las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, no altera la matriz primario exportadora histórica en el país, pero puede ser su base (Fornillo, 2012).

Durante los primeros años, además, el gobierno de Evo Morales fue uno de los más austeros de América Latina, en materia de inversión pública, buscando en cambio incrementar las reservas internacionales y recuperando los ingresos del Estado y su participación en el PIB (incluso Weisbrot, 2007, 2009, ha afirmado que los mismos son exagerados si no se hace algo con ellos en materia productiva). A partir de 2009, en un momento de consolidación, el gobierno de Evo Morales iniciará un proceso de expansión del sector público sin precedentes. Analizando el periodo que va de 2010 a 2014, vemos que la inversión pública pasó del 6.7%, al 13.4%, como porcentaje del PIB (Arévalo, 2015). Gracias al importante crecimiento del PIB, y a los altos ingresos que logra el Estado por materia de venta de hidrocarburos y minerales nacionalizados en los primeros años, el gobierno contó con fuentes de financiamiento muy importante. Este crecimiento y la orientación de la política social, le permitió también una mejora en los indicadores sociales. La desigualdad, cuya reducción se había estancado desde los años 90, se redujo a partir de 2006, pasando de un índice de Gini, de 0.6, a un 0.48, en 2014. Los subsidios directos a la demanda, del mismo modo, contribuyeron a la reducción significativa de la pobreza extrema. Entre el 2006, cuando

comienza el gobierno de Morales, esta afectaba al 38% de la población mientras en 2015, se redujo al 20% (Arévalo, 2015)

Los recursos con los que han contado Bolivia en la última década han posibilitado mejorar las condiciones de vida de los bolivianos de manera muy significativa. Entre los indicadores que más han contribuido a este incremento de los recursos disponibles es el alto crecimiento de las exportaciones. Estas en el periodo que va 2006 al 2016, alcanzaron un volumen total de USD. 90.154 millones. En 2005, el volumen de exportaciones llegó a USD, 2867 millones. El 2006, en el primer año de gobierno de Evo Morales casi que se duplicó este volumen, pasando a exportar USD 4.088 millones. A partir de este momento, se produce un despegue de las exportaciones muy significativo, hasta llegar al tope de USD, 12.899 millones en el último año del periodo considerado. Salvo el 2009, por la crisis internacional, el crecimiento fue constante. Las exportaciones de hidrocarburos y minerales jalonaron este exponencial crecimiento del sector exportador boliviano (IBCE, 2018). Por su parte, las importaciones totales, en el mismo periodo, tuvieron también una evolución ascendente y sin precedentes, llegando a un volumen total de USD 76.952, lo que representa una diferencia favorable para Bolivia de USD 13.202 millones.

No obstante, la economía boliviana está corriendo el riesgo de disminuir estas utilidades acumuladas, debido a que desde 2015, el país presenta un déficit en la balanza comercial que, para el IBCE, amenaza con volverse estructural. Así, para el 2015, Bolivia importó un total de USD 9847 millones, mientras logró exportar apenas USD 8.737 millones, teniendo así un déficit en la balanza comercial de USD 1.106 millones. En 2016, con datos preliminares, tanto para el volumen de exportaciones, como de importaciones. Bolivia habría importado USD 8.516 millones y exportado apenas 7.096 millones, llegando a un déficit de USD 1.420, millones. Finalmente, para 2017, las exportaciones tuvieron un déficit de USD 1440 millones, teniendo unas importaciones de USD 9288 millones y unas exportaciones de apenas USD 7.846 millones. En estos tres últimos años, así se produjo un déficit acumulado de USD 3.966 millones. Una cifra bastante preocupante, dado el tamaño de la economía boliviana y sus implicaciones en términos de la necesidad de fuentes de recursos para cubrir esta salida de capitales.

Gráfico 7.1. Bolivia. Evolución de las exportaciones 1980-2019



Fuente. IBCE, 2018, 4, 22.

Gráfico 7.2. Bolivia. Evolución de las Exportaciones 1980-2019



Fuente: IBCE 2018, 22.

En materia de inversión extranjera, al caso boliviano durante el gobierno de Evo Morales, ha mostrado también números bastante positivos, en comparación con periodos anteriores, así como en comparación con el caso ecuatoriano. Así, podemos ver que, si bien comparativamente los ingresos por este concepto son bajos, comparando los montos iniciales de inversión, con los montos actuales, vemos que estos se han incrementado considerablemente. En tal dirección, podemos ver que, para el 2007, Bolivia recibió USD 366 millones, mientras que, para el 2013, la cifra llegó a USD, 1.116,80 millones. En cifras totales, el país recibió entre 2007 y 2013, USD 4.343.8 millones de dólares, orientados, particularmente a la producción de hidrocarburos y la explotación minera (Haro, 2017), lo que contribuyó, así mismo a incrementar los niveles de producción y de exportación. En este

periodo, es también notorio el incremento de la inversión nacional, tanto pública como privada. Si se compara el movimiento de la inversión en el periodo anterior al gobierno de Evo Morales con las inversiones por parte de los capitalistas nacionales, como por parte del estado, notamos diferencias abismales. En el periodo dominado por la “democracia pactada”, la inversión privada estuvo siempre por debajo de los USD 1.000 (con excepción de 1998) millones de dólares. La inversión pública estuvo siempre por debajo de la privada, al menos hasta 2004. A partir de este año, las dos fuentes de inversión han crecido considerablemente, alcanzando cifras récords en 2014, donde los privados invirtieron un poco más de Usd 3.000 millones, mientras el sector público lo hace en un volumen que superó los USD 4.000 millones de dólares. Desde este año, pese a la complejidad del mercado internacional, la inversión privada siempre ha estado por encima de los USD 2.000 millones, mientras que la pública ha superado los USD 5.000 millones de dólares. (Romero, 2020: 11). Esto evidencia, el ambiente de confiabilidad que el gobierno logró construir en este periodo, aún en los momentos de polarización política más difíciles, como los del primer período presidencial. Una confiabilidad no sólo para los inversionistas y empresarios extranjeros, sino para los nacionales. Esto no significa que se haya logrado el apaciguamiento total ni que todos los sectores se hubiesen sumado al proyecto político del MAS. La conflictividad será uno de los rostros más visibles de la sociedad boliviana, sobre todo, pero no exclusivamente, en el periodo que va de 2006 a 2009. En este último año, Evo Morales y el MAS, lograron consolidar su poder, nuevamente, sin que esto signifique que la conflictividad desaparezca. Como en todo proceso de cambios relevantes en cualquier sociedad, varios frentes de conflicto se abrirán, tanto al interior de su propio proyecto político, o con algunos movimientos sociales y populares indígenas, como contra algunos sectores de extrema derecha que, desde 2009, no se resignan a tener un presidente indígena y un estado controlado por sectores sociales históricamente subalternos. A pesar de esto, buena parte de estos serán superados o transformados, consolidando la hegemonía del MAS.

7.2. De la polarización a la hegemonía desde el Modelo Económico Plural

¿Cómo se logró la estabilidad política y el crecimiento de la economía boliviana? ¿Cómo el gobierno de Evo Morales logró articular a buena parte de las élites empresariales o, al menos, disminuir su potencial desestabilizador y contrahegemónico? Como vimos en nuestro capítulo 4 el proceso de constitución del movimiento que llevó al poder a Evo Morales en Bolivia no empezó en el marco de los procesos electorales de 2005, sino al calor de las luchas de los movimientos sociales (campesinos, cocaleros, indígenas, obreros, entre otros) en contra de las

políticas que radicalizaban las reformas neoliberales en los gobiernos de Hugo Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta lucha, se venía dando en dos campos de acción. Por un lado, en los procesos de confrontación callejera (paros, tomas de carretera, bloqueos, etc.) y, por otro lado, estaba el campo de la contienda electoral. Esta doble trayectoria había hecho del MAS una de las más fuertes alternativas para los bolivianos en las elecciones de 2005. Parte del soporte estructural de esta organización política se había probado y establecido en elecciones anteriores. Desde 2002, venía logrando representaciones en poder legislativo (El mismo Evo Morales se había hecho congresista), y en algunas alcaldías (Ramírez C, Jesús, 31/03/2005). El discurso nacionalista, indianista, obrero y campesino le había dado al MAS, una fuerza movilizadora de probada eficiencia. Sin embargo, para poder ganar la presidencia, tal como lo hizo a finales de 2005, el MAS de Evo Morales tuvo que establecer alianzas con otros grupos y actores sociopolíticos. Es así como se produce el “encuentro” con el intelectual y comentarista político Álvaro García Linera, con quien la apuesta política ganará visibilidad y reconocimiento entre las clases medias urbanas, también duramente golpeadas por las políticas neoliberales, así como perspectiva teórica sobre el cambio. Como puede evidenciarse ya, en todo este proceso se encuentran grandes diferencias con el caso ecuatoriano. En este último no se produjo la constitución de un movimiento orgánicamente articulado de distintos actores sociales, ni una ocupación progresiva de representación de la sociedad civil, ni tampoco se consideró necesaria la ocupación del poder de Estado de manera progresiva en los contextos regionales y locales, fue más bien la sumatoria de la “ciudadanía”, la que condujo al triunfo, en segunda vuelta, de Rafael Correa Delgado. Por el contrario, en el caso boliviano, la victoria de Evo Morales en primera vuelta, no sólo significó un hito histórico por la cantidad de votos que obtuvo, además se constituyó en un referente simbólico de la profundidad de los deseos de cambio de la sociedad boliviana. Esta es también una diferencia sustancial con el caso ecuatoriano, donde la desconfianza generalizada no le permitió a Rafael Correa, en su primer gobierno, alcanzar un triunfo de estas dimensiones.

Las elecciones de 2005 son así el punto de llegada de un proceso de movilización y participación política y social, pero también el punto de partida de un proceso inédito en términos de constitución de la estatalidad en la sociedad boliviana. Un proceso, sin embargo, no exento de contradicciones y conflictos. Las luchas por la hegemonía se configuran y reconfiguran permanentemente y los bloques de poder desarrollan las estrategias que consideran más apropiadas para fortalecer su propio poder dirigente, así como las estructuras económicas e institucionales que los soportan.

En función de lo anterior, es necesario caracterizar los bloques de poder que se disputan la hegemonía y la configuración del Estado, tanto antes, como después del triunfo electoral del MAS. De un lado, están los movimientos sociales-populares, con fuerte liderazgo indígena y campesino, con algunas contradicciones internas, particularmente en lo que tiene que ver con visiones sobre lo ambiental y lo ancestral en el proceso de cambio. De otro lado, están las fuerzas conservadoras, que también enfrentan divisiones profundas, sobre todo en la manera en que asumen este proceso de cambio y en las formas de resistir a este. Algunas buscarán su articulación estratégica mientras que otras desarrollan formas radicales de oposición a la nueva hegemonía. Como veremos, cada vez las élites empresariales estarán más orientadas a la concertación y la articulación que a la confrontación violenta o radical. Otros sectores sociales, particularmente vinculados económicamente con la producción agropecuaria y con trayectoria de organización política y “cívica”, se opondrán de manera violenta al proceso de cambio

La configuración de estos bloques se produce en el mismo campo de combate por la hegemonía; esto es, en la búsqueda de estrategias de articulación de la mayor cantidad de actores sociales y políticos. En el primer bloque, inicialmente los liderazgos de Felipe Quispe y Evo Morales, se disputaron la cabeza para agenciar la articulación de las distintas fuerzas subalternas. No obstante Morales, al tener un pie en el poder político (al ser diputado y liderar una bancada significativa desde 2002) y el otro, en el campo de la movilización social, logra constituirse en la figura más representativa. Quispe, por su parte, actúa fundamentalmente en el campo de la acción popular, lo que limitará también su margen de acción. Al final, el liderazgo termina por resolverse en el marco de procesos electorales cuyo propósito es la ocupación de las instituciones políticas y será Evo Morales quien protagonice el inédito acontecimiento de ser el primer presidente indígena en Bolivia (Stefanoni, P., 2003; Burguete, 2007)

En este proceso podemos ver cómo la disputa por la hegemonía ha reconfigurado la sociedad civil boliviana y poco a poco han venido transformándose también las instituciones estatales. Los movimientos sociales-populares han creado escenarios de sociabilidad y movilización continua y, al mismo tiempo, han ocupado el poder institucional. Sin embargo, no son los únicos actores políticos relevantes. Del otro lado estarán las élites tradicionales, dentro de las cuales se encuentran distintas fracciones de un empresariado que han visto el creciente poder indígena como una amenaza, pues no sólo tienen alta posibilidad de llegar a la presidencia,

sino que ya han mostrado su capacidad de redireccionar políticas de estado, particularmente a partir de su visión sobre la venta de hidrocarburos¹⁵⁴.

De este modo, lo que se ha puesto en evidencia es que dos concepciones sobre el estado y la sociedad, no completamente unificadas, se disputan el poder y la hegemonía. En esta disputa el poder presidencial será la apuesta del MAS, mientras que las élites económicas dominantes, no logran encontrar un liderazgo que las articules. Las luchas internas entre este bloque las conducirá a una derrota difícil de superar y estarán condenadas, por mucho tiempo, a la defensa del poder territorial, pues carecen de una visión integradora de la nación boliviana capaz de desafiar la articulación lograda por los movimientos sociales y políticos articulados por el MAS

Ahora bien, pese a la derrota, el proceso de consolidación del poder del bloque liderado por Evo Morales, tendrá que enfrentar la fuerte resistencia del bloque perdedor. Este bloque venía configurándose también como respuesta de las élites de los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, particularmente, al declive del poder institucional de la “democracia pactada” del cual habían sido beneficiarios. Estos dos proyectos, pueden considerarse proyectos hegemónicos y su enfrentamiento tendrá varias implicaciones, desde el punto de vista del lugar de las élites económico-empresariales en estos procesos (Ramírez C. 31/03/2005)

Como vimos antes, el bloque del poder tradicional, venía fracturándose desde finales de los años 90 y, en el gobierno de Carlos Mesa, se había producido una ruptura muy importante al interior de la CEPB, cuando la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, decide separarse de la CEPB, por el respaldo que esta le había dado al gobierno, al haber aceptado el pago de nuevos impuestos para enfrentar la crisis fiscal. Se produjo entonces, una importante ruptura al interior de una de las instituciones que había sido escenario de gestación e implementación del proyecto neoliberal. Pero no sólo se había producido esta ruptura, también desde el mismo empresariado de la CEPB, se habían hecho críticas al modo de implementación del modelo neoliberal que la organización empresarial contribuyó a elaborar e implementar. Estos dos eventos, dentro del bloque empresarial dominante permiten comprender, hasta cierto punto, por qué estas élites terminan articulándose dentro del modelo de economía plural que impulsa el MAS, particularmente desde 2009 hacia adelante.

¹⁵⁴ A finales de 2005, los empresarios se quedaron del “poder de veto” de los indígenas en relación con las políticas que el gobierno de Carlos Mesa venía construyendo para que el estado recibiera mayores dividendos por la explotación del petróleo y el gas (El Deber, 06-04-2005).

Para comprender este proceso, describiremos a continuación cómo se desarrollan estas conflictividades y cómo la agencia de los actores del gobierno logra romper la resistencia de algunas élites empresariales, específicamente del oriente del país. Analizaremos las estrategias de resistencia usadas por los empresarios para enfrentar al nuevo gobierno y cómo la conflictividad condujo a un distanciamiento creciente entre las alas radicales y moderadas del empresariado.

En esta dirección, lo primero que hay que decir entonces que es, una vez Morales gana la presidencia, la relación con los empresarios estará mediada también por esta división en el bloque empresarial y político y pasará por dos momentos determinantes. En un primer momento, las élites empresariales, tanto de la Paz, lideradas por la CEPB, como la CAINCO, la CAO y la FEPSC, saludan al nuevo gobierno y el discurso que este pronuncia en su posesión. En un lenguaje protocolario, los dirigentes gremiales, dan la bienvenida al nuevo gobierno y celebran la convocatoria a la unidad y la reconciliación que Evo Morales expresó. De hecho, antes de iniciar su mandato, Evo Morales llevó a cabo un recorrido por algunos países europeos y de América Latina, consiguiendo reconocimiento y algunos recursos para algunos de sus programas. Desde la CEPB, este recorrido fue calificado con *excepcional* (La Patria, 10-01-2006) Así, una vez Morales asume la presidencia, lo primero que recibe no es la condena del empresariado boliviano, sino el saludo protocolario y en tono cordial que, no obstante, expresará también desconfianza e incertidumbre. Al respecto, vale citar a Gabriel Dabdoub, presidente en este momento de la CAINCO, quien hizo público su reconocimiento, tras el discurso de posesión de Morales, en el que éste había manifestado su interés de generar unidad y trabajar con todos los bolivianos para crear “fuentes de trabajo, formar microempresarios, dar impulso económico en mucha apertura, no para unos cuantos solamente, sino una apertura que significa gobernar con todo el pueblo”. Para el dirigente empresarial, estas eran “señales muy importantes pues, cuando nos habla de que hay negocios potenciales para el azúcar, para la soya. Estamos yendo hacia ese camino, estamos creciendo. Sin la menor duda, la única forma de acabar con la pobreza es crear empleos” (La Razón, 23-01-2006 pág. A32).

A este saludo se sumaron otros que, sin embargo, también manifestaron su preocupación por lo que podría pasar con los procesos autonómicos y con la seguridad jurídica. Puntualmente, Oscar Aguilar, dirigente de la CEPB, demandó del nuevo gobierno, asegurar el crecimiento sostenible, dándole a “...la inversión posibilidades de que crezca y se desarrolle”. Para Aguilar, esto solo se lograría “con la garantía de seguridad jurídica “y de que las normas que

rigen dentro de un Estado de derecho van a ser respetadas”. Demandó, así mismo promover la “inserción internacional” buscando ampliar los mercados. (La Razón,29-01-2006: A12).

Este momento de comienzos del gobierno, está caracterizado también por reuniones constantes entre el nuevo presidente boliviano y líderes empresariales de distintas regiones del país. Pocos días después de su posesión, Evo Morales, se reunió con los empresarios del oriente y tanto el gobernante como el dirigente gremial de CAINCO, Gabriel Dabdoub, se comprometieron a buscar la complementariedad del sector público y el privado. Este último, reiteró el pedido que ya hicieran desde la CEPB, de que el gobierno tenía el deber de garantizar la seguridad jurídica y el establecimiento de reglas claras y solicitó que se buscara mejorar la infraestructura y se definieran políticas para el “desarrollo regional y de todo el país”. En esta reunión, Dabdoub, manifestó que los empresarios serían “críticos constructivos cuando se presenten situaciones que atenten contra la producción y la inversión, porque con ello se atenta contra la generación de empleo y se aumenta la pobreza”. Así mismo, expresó sus preocupaciones por políticas frente a “la flexibilidad laboral, comercio exterior, fijación de precios, política cambiaria y el rol estatal”.

Por su parte, Evo Morales afirmó haberse “dado cuenta que ser gobierno es para hacer buenos negocios para nuestro país, y en éste queremos desarrollarlo junto al empresariado cruceño, fundamentalmente la CAINCO junto a otros sectores de empresarios de todo el país”. A partir de estas declaraciones, la prensa resaltó que evo había tranquilizado a los empresarios cruceños “...al afirmar que su gobierno no cambiará el sistema financiero, ya que “es el patrimonio para nuestra estabilidad macroeconómica”. A la reunión asistieron también Álvaro García Linera, Rubén Costas y el ministro de Obras Públicas, Salvador Ric. En esta misma ocasión habló del proyecto siderúrgico de El Motún, y afirmó que el mismo sería licitado prontamente, al tiempo que comunicó el interés de empresarios japoneses y Cuba, para la soya y azúcar, temas muy relevantes para el empresariado cruceño (La Razón, 03-02-2006: A9).

Las solicitudes al gobierno, así como las observaciones del empresariado boliviano, se complementaron luego, en una “declaración de la reunión de los presidentes y gerentes de la Cámaras de Comercio y Servicios de Bolivia”, a la que titularon “Bolivia es un país económicamente viable, démosle estabilidad y política social”. En esta declaración, los empresarios manifestaron su apoyo a las declaraciones del presidente en las que se comprometía a “fortalecer la actividad económica, (la) modernidad y diversificación para generar empleo digno y permanente”. Sin embargo, le hacen saber también algunas de sus

demandas. Así, para los empresarios un primer elemento que el gobierno debía garantizar era “la estabilidad macroeconómica”, a través de una gestión de las finanzas públicas alimentadas por “un sistema tributario universal, eficiente, equitativo, proporcional, simple y estable”. Para los empresarios, por tanto, el gasto público debía ser “administrado responsablemente en función a la realidad económica del país”. En segundo lugar, el gobierno debería hacer las gestiones necesarias para consolidar mercados, desarrollar una política comercial que aprovechara la integración y mejorara la competitividad y productividad de las empresas: “Para este efecto, es indispensable la participación de técnicos y empresarios comprometidos con el desarrollo económico del país”. En tercer lugar, el gobierno debía garantizar la estabilidad y vigencia del Estado de derecho, dejando de lado “toda medida de carácter excepcional y/o transitoria, que a partir de decisiones estatales obstaculizan la producción, en contraposición con el objetivo gubernamental de lograr el fortalecimiento y ampliación de la base productiva del país”. En cuarto lugar, pidieron la reconstitución del régimen impositivo ampliando la base de contribuyentes y evitando el contrabando y la evasión tributaria. En esta misma línea piden acabar con el impuesto a las transacciones financieras. En quinto lugar, piden más controles a la corrupción y al contrabando que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas pues, de lo contrario estas “no tendrán la garantía de sostenibilidad y menos aún, posibilidades de inserción y expansión en el Mercado”. En sexto lugar, los empresarios pidieron no hacer modificaciones radicales de las políticas laborales, pues se afectaría la generación de empleo y la competitividad de las empresas. En séptimo lugar, pidieron prorrogar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, desarrollando procesos de negociación previos que configuraran consensos sobre lo fundamental. En octavo lugar, los empresarios hicieron suya la demanda de las élites económicas dominantes del oriente boliviano en el sentido de debían fortalecerse las autonomías departamentales y de que el referéndum autonómico fuera vinculante en la construcción de la nueva constitución boliviana. En tal sentido, afirmaron que: “Las Cámaras de Comercio del país consideramos que, el proceso autonómico será beneficioso en la búsqueda de democratizar el poder, el uso y acceso a los recursos de las regiones dentro de un marco de racionalidad, equidad y solidaridad para beneficio de todos los bolivianos”. Finalmente, pidieron al gobierno crear “Un Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social”, cuya función fundamental sería la de proponer políticas económicas y sociales y estaría formado por el Estado, la empresa privada y los trabajadores. Este consejo se replicaría a nivel departamental con la misma composición” (La Razón, 14-02-2006: A7).

De este modo, pese a la cordialidad protocolaria, se van generando condicionamientos al gobierno para que no lleve a cabo reformas profundas sobre el ordenamiento político y económico que venían demandándose desde el bloque popular que llevó al poder presidencial a Evo Morales. De manera particular, la demanda de que el referéndum autonómico fuese anterior y vinculante a la asamblea Nacional Constituyente, pone en evidencia los intentos de las élites empresariales de maniatar los cambios que allí esperaban establecerse. Sin embargo, no es esto lo que tiene en mente el gobierno. Si bien es cierto desde sus primeras declaraciones planteó la necesaria articulación entre la inversión pública y la privada para sacar al país adelante, (30 días de noticias, enero-2006), poco a poco, irá tomando medidas que comienzan a molestar a los empresarios y a las élites regionales del oriente boliviano¹⁵⁵. Precisamente, las discusiones sobre los referéndums autonómicos que han venido exigiendo las élites del oriente boliviano hará visible el conflicto entre los dos bloques históricos que definimos antes. A las declaraciones de los líderes empresariales nucleados alrededor de la CEPB, se sumarán de manera más frontal, las demandas de la CAO, quienes comunicaron al presidente que, sobre los procesos autonómicos, ellos esperaban un referéndum “vinculante” y esto “no era negociable”. Al mismo tiempo, le pidieron al gobierno “no confundir voluntad de diálogo con debilidad” (La Razón, 17-02-2006: A13). Con esta advertencia, mostraron su rostro las facciones más radicales de las élites orientales, que buscarán, desde la resistencia, limitar los cambios impulsados por el gobierno.

Dos días después de esta advertencia de la CAO, Evo Morales fue invitado a la posesión de Gabriel Dabdoub como presidente reelecto para la vigencia 2006-2007, en la CAINCO. En este evento, nuevamente el dirigente gremial, llamó a la unidad y al trabajo conjunto entre el estado y los empresarios, pero, también le pidió al gobierno que presentara de manera “clara y transparente” el rumbo al cual quería conducir al país. El líder empresarial hizo también observaciones sobre la manera en que “la institucionalidad moderna tumba barreras y muros para unir pueblos y civilizaciones. Apoya el comercio libre de productos y servicios para todos. Evita las islas para lograr la integración tecnológica que es sinónimo de la modernidad. Es enemiga de la tendencia anacrónica que busca tener todo bajo su poder y control”. Una vez plantea esto, insiste en querer saber “la dirección por la cual pretenden conducirnos. Queremos conocer la brújula con la cual van a guiarnos. Sin vueltas, sin excusas, sin rumores.

¹⁵⁵ No sólo algunas medidas molestarán a los empresarios. También las advertencias y las declaraciones de primer mandatario indígena generarán descontento. Una de estas primeras declaraciones a la que reaccionarán las élites tiene que ver con una declaración de Morales, en el sentido de que las tierras fiscales debían producir o devolverse, independiente del tamaño de las haciendas (El Diario, 23-01-2006)

Solo con la verdad. No con medias verdades. Con toda la verdad”. En el encuentro, el presidente de la CAINCO reitera el pedido que hicieran días antes los líderes de distintas organizaciones empresariales en el sentido de que el gobierno no podía afectar la estabilidad macroeconómica lograda por 20 años. “Esta estabilidad ¡tiene que mantenerse!... Así, insta al gobierno a apostar por “lo que funciona y cambiar lo que nos ha demostrado ser inviable. Sin dudas sigamos el camino correcto. Seamos pragmáticos y vayamos juntos por el sendero del crecimiento. Eso sí, marcando una economía más social...” El dirigente empresarial finalizó su discurso diciéndole a Evo Morales que desde la CAINCO esperaban que *su gobierno*, (fuera) “la llave para esa nueva puerta y mire con nosotros el futuro con esperanza. Para el inicio de la reconstrucción de un estado fallido y de una sociedad fragmentada. Un pacto pasa por entender que nuestra economía en Santa Cruz depende esencialmente de la agroindustria...” (La razón, 19-02-2006).

Como se evidencia, las declaraciones de los empresarios comienzan a ser más reclamos o exigencias y sus posturas, más radicales. A pesar de la gran cantidad de temas que concentrarán la atención tanto del gobierno, como de las élites empresariales, consideramos que dos conflictos convergentes sintetizan las visiones contradictorias que los bloques de poder tienen sobre la construcción de la sociedad y el Estado en Bolivia. En primer lugar, el conflicto por las reformas institucionales profundas y, en segundo lugar, sobre las funciones del Estado en la Economía. En el primer caso, se trata de un conflicto por el orden institucional y la estructura del poder estatal. En este caso, las élites empresariales hacen de la defensa de las autonomías departamentales, su estrategia central para limitar el poder del Estado en las regiones bajo su dominio, particularmente en la “media luna” oriental. En esta lucha vienen construyendo un movimiento con arraigo popular regional, desde comienzos del presente siglo, aunque hunde sus raíces unas décadas antes. A partir de distintas estrategias de movilización y confrontación, pretenden limitar los alcances de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se prevé el Movimiento Al Socialismo tendrá mayorías.

El segundo campo de disputa, se da por las políticas que el gobierno implementa para darle mayor poder estructural e instrumental al Estado en distintos ámbitos de la vida económica, tanto como agente regulador de la misma, como como productor económico. Una vez el nuevo gobierno comienza a ejecutar las políticas que buena parte de la sociedad demandaba, el combate se profundizará. En este, como se verá más adelante, se producirá una escisión en el campo de poder económico de las élites orientales, entre “radicales” y “moderados”; una ruptura que también se expresará en el seno de la CEPB, cuya dirigencia estará más orientada

a tender puentes de comunicación y diálogo frente al gobierno aunque sin renunciar a la crítica frente a medidas concretas y en situaciones específicas.

De este modo, una vez el gobierno avanza en la implementación de sus políticas, el momento protocolario dará paso al momento de la confrontación. Sobre el conflicto por la institucionalidad estatal que se configuraría a partir de la ANC, los empresarios fueron enfáticos y reiterativos, pidiéndole al gobierno no cambiar de manera acelerada las reglas de juego y que se le diera prioridad a la búsqueda del consenso entre las distintas partes. Así, la dirigencia de la CEPB, se refirió a los mecanismos de toma de decisiones al interior de la ANC: “Creemos que el mecanismo de elección tiene que garantizar una genuina representatividad, pero a la vez tiene que tener un balance de mayorías y minorías. Tiene que ser un mecanismo que refleje las aspiraciones de los bolivianos de todos los estamentos sociales. No queremos grupos dominantes”. (La Razón, 9-02-2006: A8,) Con esto, buscan poner freno a la constitución de un bloque con la capacidad suficiente para impulsar reformas sustanciales en el ordenamiento político y económico. Estas disputas por las autonomías continuarán a lo largo de 2006 y hasta el 2009, cuando se logra cierta concertación entre las partes más representativas de cada bloque.

Desde esta perspectiva, los primeros años del gobierno se desarrollarán entre la confrontación y algunos momentos de concertación. La estrategia política para disminuir el potencial hegemónico de cada bloque estará a la orden del día. Los empresarios expresarán constantemente más dudas y desconfianza que certezas sobre el gobierno de Morales. Pero, poco a poco recibirán señales de que los cambios que busca Morales, son más que cosméticos y se verán obligadas también a bajar sus aspiraciones.

Desde el oriente, sobre todo, las elites políticas y económicas articuladas por sus organizaciones gremiales más importantes (CAINCO, FEPSA, CAO, ANAPO y el comité “cívico Pro Santa Cruz”) le harán saber al gobierno que las demandas de autonomía, no se negociararán y cada medida que toma el gobierno para lograr constituir un poder centralizado, será atacada y rechazada como un atentado al poder regional autónomo. Este es el caso, por ejemplo, de la emisión de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo que, para la CAO, iba a contracorriente de la Ley de Descentralización administrativa, promovía el avasallamiento de las instituciones regionales y contradecía con los hechos, el discurso de Morales en apoyo al proceso autonómico (La Razón, 22-03-2006, A27).

El tono de la disputa y las acciones que llevan a cabo los actores incrementarán progresivamente las tensiones. Para finales de marzo de 2006, luego de la declaración de la CAO sobre su oposición a la ley citada, los Prefectos de varios departamentos del oriente, pero también de La Paz y Cochabamba, constituyeron el Consejo Nacional de Prefectos. El documento que formalizó su nacimiento recibió el nombre de “Acta de Fundación del Consejo Nacional de Prefectos y comandantes generales de los departamentos de la república (CONAPRE). Allí advierten que el proceso de fortalecimiento de las autonomías es irreversible y sólo dependía de la voluntad de quienes lo impulsaban (La Razón, 29-03.2006). Con esto, el poder nacional es desconocido de facto, algo que el gobierno no estará en disposición de aceptar. Por el contrario, desarrollará distintas estrategias para debilitar el poder regional y, en este, el poder de las élites empresariales que lo soportan.

En este momento es necesario plantear algunas precisiones para entender las dinámicas del conflicto por la institucionalidad estatal y la hegemonía y las posturas de los actores que participan. En primer lugar, lo que es evidente en las luchas por esta institucionalidad es que, de manera particular, pero no exclusivamente, en el oriente boliviano, el poder político desde comienzos del presente siglo, se articula con el poder económico empresarial. Instituciones como la CAINCO, la FEPSC, la CAO, ANAPO, entre otras, estarán fuertemente articuladas con el brazo político-ideológico de las oligarquías orientales; esto es, el Comité Cívico Pro-Santa Cruz. Esta articulación agenciará distintas manifestaciones y acciones para resistir las medidas tomadas por el gobierno, tanto en materia económica, como en relación con la estructura del poder estatal. Se juntarán así, poder estructural y poder instrumental, pero dentro del poder regional, esto es, dentro del marco de un poder que ha dejado de tener capacidad de movilización nacional. De su parte, la CEPB, liderará iniciativas de articulación y negociación de las élites empresariales, pero su postura estará caracterizada, a lo largo del proceso, más por buscar más la concertación que la confrontación, aunque habrá momentos en que el nivel de sus críticas se articula muy bien con las alas más radicales del oriente boliviano. Con esto, se pone en evidencia, no obstante, un poder empresarial debilitado en su capacidad de incidencia, en gran medida por las dificultades para articular a los distintos sectores que lo constituyen, más allá de lo regional.

Dicho lo anterior, el gobierno llevará a cabo también estrategias de negociación, pero también de confrontación usando para esto tanto sus estructuras de movilización social popular, como la fuerza del Estado. En el camino, los dos bloques miden sus fuerzas y se adecúan hasta donde su propio poder y aspiraciones lo permiten. El gobierno impulsará una serie de

medidas que buscan debilitar el poder estructural e instrumental de las élites empresariales. Llevará a cabo reformas al mercado laboral, a la tenencia de la tierra, reformas pensionales, reformas a las leyes que regulaban la explotación de los hidrocarburos, en síntesis, derogará progresivamente los cimientos del Decreto 21060, que estableció el neoliberalismo en Bolivia. En este proceso, las distintas organizaciones empresariales expresarán su rechazo y poco a poco, los llamados a la unidad y la reconciliación, se enfrentarán con un proceso de radicalización de algunas posiciones.

Dentro de los ejes de confrontación delineados, un primer tema de conflicto, será así, el de la lucha por las dinámicas del cambio constitucional y la reconfiguración de la estatalidad. Para limitar el poder de las élites económicas vinculadas con las élites políticas regionales, el gobierno intentará “radicalizar” la discusión sobre las autonomías, ampliando lo demandado por las prefecturas del oriente, también a las comunidades locales, comunitarias y municipales, donde tenía preminencia. Esto genera el rechazo de los prefectos de la CONAPRE, que cuentan con el eco de las principales organizaciones empresariales. Para los dirigentes políticos, lo que el gobierno intentaba era desconocer el proceso autonómico en el que unos “500.000 ciudadanos” habían expresado el año anterior su respaldo a las autonomías departamentales. Ante los ataques del gobierno a las autonomías, este mandato, sería defendido, para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Germán Antelo, “le pese a quien le pese y pase lo que pase. El líder político empresarial, además advirtió: Que sepan los que nos están escuchando que no van a encontrar papanatas. Encontrarán gente decidida a luchar por lo que ha conseguido a través de la vía legítima”. El gobierno, por su parte, argumentó que la defensa del referéndum vinculante, no hacía otra cosa que reemplazar el “centralismo nacional”, por el “centralismo departamental y que otras provincias no tengan derecho a decidir. Tampoco es justo esto, ¿verdad?”. (El Deber, 02-03-2006)

El tono del debate sobre la distribución territorial del poder del estado, desembocó en convocatorias permanentes a movilizaciones de parte y parte. Desde el lado de los aliados del gobierno, la defensa de las autonomías de las élites, por encima de la ANC, fue tomada como una afrenta por el Estado Mayor del Pueblo, que le dio al Congreso de la república 48 horas para convocar al constituyente para reformar al Estado. De su parte, el Comité Pro Santa Cruz, se declaró en emergencia y “anunció una reunión ampliada y permanente del directorio del Comité” al tiempo que comunicó la probabilidad de convocar nuevamente a “la Asamblea de la Cruceñidad para determinar las medidas que se adoptarán, que pueden ser movilización

general, paro cívico indefinido y bloqueos de protesta contra el Gobierno y el Congreso si no aprueban el referéndum autonómico vinculante y departamental”. (La Prensa, 03-03-2006)

Las críticas a la manera en que el gobierno estaba intentando “imponer”, la Constituyente por encima de las autonomías departamentales fueron compartidas por prefectos y líderes empresariales de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.

Estas disputas por el orden del poder que configurará el nuevo marco normativo continuarán durante todo el primer año y durante los siguientes tres años del gobierno de Evo Morales, cuando finalmente logren su aprobación. Pero esta conflictividad convergerá con las acciones que el gobierno llevó a cabo para la reconstrucción y fortalecimiento de las capacidades estatales. Una de estas y tal vez la más relevante tuvo que ver con el control territorial y las el fortalecimiento de las políticas de redistribución de la propiedad. Allí se enfrentará principalmente contra los empresarios agropecuarios nucleados en la CAO y la ANAPO.

Estas disputas se presentarán casi que desde el mismo momento en que Evo Morales llega a la presidencia y constituyen también, como los demás frentes de conflicto que enfrentarán al gobierno y a las élites del oriente boliviano, las disputas por la hegemonía. Se trata de unos poderes regionales que se oponen a un poder que se pretende nacional, pero que, para serlo, primero deberá subordinar o articular a aquellos que se resisten desde las regiones

Como acabamos de mencionar los enfrentamientos comienzan cuando el gobierno anunció a recuperación de muchas tierras ociosas que estaban en manos privadas y la distribución millones de hectáreas baldías entre campesinos e indígenas, en el mes de abril de 2006. Las declaraciones, que pronto se convirtieron en decretos, fueron contestadas por varias organizaciones empresariales (CAINCO, CAO, ANAPO), por los gobiernos departamentales y por los comités cívicos. Para estos, la entrega de tierras ocupadas por empresarios, debía hacerse en el marco de la ley y previa concertación de los implicados, respondiendo a un plan económico que no veían (El Diario, 12-04-2006). Además, argumentaron que, con sus declaraciones, lo que hacía Morales era promover los avasallamientos de tierras legítimamente adquiridas. Para Gabriel Dabdoub, de hecho, lejos de contribuir a la ocupación de baldíos y tierras ociosas, lo que hacía el gobierno era incentivar la ocupación de tierras productivas, pues “era más fácil” (El Diario, 21-05-2006).

En el marco de justificar la necesidad de avanzar en la reforma agraria, el gobierno y algunos de sus parlamentarios, presentaron informes en los que se ponía en evidencia la altísima concentración de la propiedad agraria. Uno de estos informes denunció que sólo 17 familias eran propietarias del 82% de las tierras de Santa Cruz y muchas de estas tierras no estaban

cumpliendo con su función social y productiva que le ley imponía (Gente, 24-05-2006). Esta misma situación se reproduciría en los departamentos de Beni y Pando¹⁵⁶. Pese a esto, la respuesta de los empresarios estuvo orientada a pedir el desalojo de campesinos que habían, ante los anuncios del gobierno de repartir las tierras ociosas, “avasallado” la propiedad privada y afectado seriamente al aparato productivo del “modelo sucreño”. El gobierno apuntó, ante el reclamo de los empresarios que pedían que la política de tierras fuese concertada con ellos, que esta no se haría “a puerta cerrada”, para repartir la tierra “entre los ricos”, sino para producir una “reconducción comunitaria” de la reforma agraria (La Razón, 21-05-2006).

De hecho, para enfrentar la resistencia de las élites regionales, el gobierno convocó a los sectores sociales populares para concertar con ellos la política de tierras que se realizaría en el oriente. Se argumentó en tal sentido que la reforma agraria contemplada en Bolivia no había tenido en cuenta al oriente, donde se habían concentrado miles de hectáreas en pocas manos y de manera irregular. Ahora, más allá de las justificaciones, lo que esta disputa representa es el sentido mismo del poder del estado y sus alcances, cuyos contornos no están configurados “teóricamente”; sino que son el resultado de, precisamente, las luchas por hegemonizar su sentido, sus dimensiones institucionales y sus capacidades. El neoliberalismo había establecido una idea de la estatalidad limitada que, precisamente, en el marco de un nuevo bloque en el poder se intenta y, hasta cierto punto se llega a reconfigurar. Esto es lo que se pone en evidencia, al analizar las respuestas del empresariado a las políticas de tierras. Tal vez la más significativa de las acciones empresariales al respecto, sea la convocatoria que las organizaciones empresariales hiciera a comienzos de mayo para que fueran las prefecturas y los poderes regionales los encargados de las políticas de tierras, acusando de paso al gobierno de pretensiones centralistas. Pidieron entonces que los prefectos convocaran a la Comisiones Agrarias Departamentales, para, en el marco de la autonomía, construir políticas de tierras que tuvieran en cuenta las dinámicas y a los actores de cada región.

¹⁵⁶ En un análisis sobre la tenencia y uso de la tierra, Miguel Lora (05-08-2005), llegó a afirmar lo siguiente: “Se calcula que de 16.4 millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola, en los últimos cuatro años el promedio de explotación no superó los 2 millones de hectáreas. Aún así el saneamiento agrario no deja de ser modesto: de un total de 107 millones de hectáreas de tierras rurales objeto de saneamiento, sólo se sanearon 13 millones (7); están en proceso 40.6 millones y quedan pendientes 53.4 millones. Se estima que en Santa Cruz existen al menos 8 millones de hectáreas que deberían ser distribuidas, pero de las 17 demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en el departamento sólo cuatro se consolidaron y cinco fueron tituladas parcialmente”. (Lora, 8-02-2005) Este volumen de tierras en disputa hace ver también las causas de las preocupaciones de las élites regionales que habían impedido en los 10 años anteriores el proceso de saneamiento.

Así, las élites económico-políticas, propone lo que podría denominarse una “estatalidad paralela” regional, amparada en la supuesta autonomía para hacerse cargo de este proceso. Con el lema "Esto es hacer autonomía al andar", el prefecto de Santa Cruz, lanzó su propio plan agrario, que estaría “orientado a distribuir tierras a indígenas y campesinos”, agilizando el saneamiento e identificando *tierras ociosas*, con el apoyo del “aparato productivo cruceño”. Al amparo de la autonomía, el proceso de saneamiento de tierras no dependería del gobierno nacional, sino que lo harían las autoridades departamentales con el apoyo de los empresarios, que se entienden como los más aptos para agenciar el desarrollo productivo (La Razón, 15-05-2006). Pese a que al acto de lanzamiento del plan agrario fueron invitados campesinos e indígenas, estos no asistieron, manifestando que esto sería potestad del gobierno nacional, dando con esto un duro golpe a los intentos de legitimación de la “descentralización” de facto, que las élites regionales estaban intentando construir. Al no contar con la presencia de estos sectores sociales, los prefectos decidieron romper negociaciones con el gobierno acusándolo de haber manipulado políticamente la situación y condicionaron el reinicio de diálogos con el presidente hasta que este ordenara el desalojo de los “avasalladores” de tierras (El Deber, 24-05-2006)¹⁵⁷.

Un elemento relevante de este proceso es que habían sido los empresarios los que, tras los anuncios del gobierno de fortalecer la reforma agraria y reorientarla hacia lo comunitario, exigieron al prefecto de Santa Cruz, tomar cartas en el asunto y construir una política departamental de tierras. Cuando, en pocos días el Prefecto anunció la realidad del reclamo empresarial, estos lo avalaron y llamaron a desconocer al gobierno nacional por tomar medidas ilegítimas. Algunas organizaciones indígenas respaldaron en principio las críticas al gobierno, pues vieron amenazadas las tierras por estos ocupadas. Expresaron su temor de que modificaciones a la ley de tierras les podría significar perder lo que habían ganado (El Deber, 15-05-2006). Con base en este rechazo, las élites económicas buscaron sumar resistencias, no obstante, sin mucho éxito.

Pese a las resistencias, el gobierno continuó con su programa de recuperar el control del territorio como parte de la base de la nueva estatalidad y de su poder estructural, esto es, un poder edificado sobre una estructura institucional capaz de sostener agendas específicas de

¹⁵⁷ En el desarrollo de estos conflictos algunos nombres destacan por el protagonismo que tendrán en eventos posteriores que sirvieron para aislar o neutralizar ciertas alas ultraderechistas de las élites orientales. Nos referimos específicamente a los intentos de, presuntamente, asesinar a Evo Morales y a Álvaro García Linera, en un atentado en el que, en su planeación participaron terratenientes de Santa Cruz, Beni y Pando. Estos nombres son, inicialmente, Branko Marinkovic, terrateniente y dirigente de Pro Santa Cruz, Alberto Melgar, terrateniente y dirigente del Comité Cívico de Beni, entre otros.

acción política. Las reformas a la ley de tierras se enmarcan así en un programa de fortalecimiento del papel del estado como agente económico. Y en esto fue explícito también en su relación con los empresarios tanto del oriente como del occidente del país, liderados por la CEPB. Precisamente en un encuentro con esta última organización, representantes del gobierno manifestaron que se trataba de construir una nueva matriz productiva a partir de la recuperación del control de los recursos naturales por parte del Estado. La recuperación de tierras ilegalmente en manos privadas, se enmarca así en la apuesta por reconfigurar al Estado y darle a esta institución mayores poderes, funciones y capacidades.

Dentro de esta apuesta no sólo estaba la política de tierras, sino también la reconstitución de la Empresa estatal de petróleos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, de la Autoridad encargada de la producción minera (COMIBOL) entre otras agencias y empresas. De manera puntual, el gobierno les comunicó a los empresarios a través del ministro de Planificación, Carlos Villegas el 17 de mayo de 2006 que querían "... desmontar el neoliberalismo en el plano económico y social (y) orientar los esfuerzos para que tanto la economía, la sociedad y el poder político generen condiciones para que todos podamos vivir bien". En la presentación de su plan económico, el gobierno le aclaró al país y a los empresarios invitados a este evento, que aspiraba a "construir un Estado fuerte que controle el excedente económico sobre la base de la recuperación de la propiedad de los recursos naturales". Para esto, crearía "una matriz productiva basada en la transformación industrial de los recursos naturales y" (abriría) "un nuevo proceso de generación de riqueza para superar la dependencia externa y erradicar la pobreza" (Los Tiempos, 18-05-2006)

Precisamente en este marco, el primero de mayo de este año, el gobierno había hecho un acto simbólico de ocupar los campos de gas y decretado la nacionalización de su producción, lo que había generado el rechazo de las élites regionales y de los empresarios. Esto se agravó, para los empresarios, con las reformas a la Ley de Reforma Agraria que Evo Morales anunció desde el mes de abril y que comenzó a implementar en los meses siguientes. La respuesta de los empresarios y de las élites regionales del oriente, fue la búsqueda de articulación de sus intereses y demandas, pero también la constitución de Comités de defensa de las tierras, bajo el liderazgo de la CAO. Este tema es articulado en el discurso de las élites orientales, con el proceso de departamentalización y de fortalecimiento de las autonomías. Estos comités emiten un comunicado en el que acusan al gobierno de pretender frenar el desarrollo del oriente y estar en contra de la producción agropecuaria y el progreso de la región.

El documento mencionado reafirma la idea de que la descentralización, cuyo propósito demagógico estaba dirigido al fortalecimiento de la democracia, en realidad favorecía a las oligarquías regionales. La regionalización boliviana, justamente había generado la concentración del poder familiar y una participación popular que no pasaba de lo instrumental y simbólico, como vimos antes. Esta descentralización había permitido que estas oligarquías ocuparan la institucionalidad estatal regional y así, consolidaran su dominio. Tanto en Bolivia, como en Ecuador, los dos procesos habrían sido convergentes. Así, cuando el gobierno de Evo Morales, reconfigura la estructura y funciones del Estado e impulsa procesos de recentralización del poder, la respuesta es una guerra a muerte. La intensidad de esta contienda es, sin embargo, mucho menor en el caso ecuatoriano, pese a que allí, particularmente Guayaquil, se constituye en el escenario de defensa del modelo “descentralizador” y “productivo”, que son las bases del discurso neoliberal.

En el caso boliviano, cualquier restricción a ese poder o a los marcos sobre los que se ejerce, conducen a la reacción violenta desde el discurso de la dirigencia política y económica del oriente boliviano o a la manifestación “multitudinaria”. El escenario es de mucha tensión. Pese a que en algunas declaraciones los empresarios del oriente habían manifestado que no tenían armas, que las únicas que tenían eran sus herramientas de trabajo (La razón, 31-05-2006: A8), el primero de junio se dio a conocer que no descartaban el uso de la violencia para defender sus tierras (la Razón, 01/06/2006).

Si los empresarios del oriente arremetían en sus críticas al gobierno, este respondía también promoviendo la repartición de la tierra. Así, en un acto multitudinario, y tras el fracaso de los diálogos con agropecuarios del oriente, Evo hace entrega de 2.2 millones de hectáreas para quienes no tenga y para quienes tengan insuficiente. Los empresarios de la CAO y la Anapo, acusaron al gobierno de tomar medidas unilaterales e inconsultas y afirmaron que las mismas generarían efectos negativos en el medio ambiente y en el mercado. Esto pues, las tierras entregadas, afirman los empresarios, tienen una vocación forestal (La Razón, 03-06-2006, A12).

En el marco de estos conflictos, en los que los bandos van midiendo las fuerzas, la CEPB, optó inicialmente por respaldar a los empresarios y a los prefectos del oriente boliviano, emitiendo un comunicado en el que denuncian que las medidas del gobierno generarían impactos negativos en la imagen internacional del país y poco favor le hacían a la estabilidad económica que se estaba viendo. En respuesta, Morales respondió acusó a los empresarios de intentar mantener unas condiciones de privilegio “de un modelo capitalista "arcaico" que fue

"derrotado" en las elecciones de diciembre pasado". Cuestionó lo que denominó un "falso nacionalismo" de los empresarios, por las críticas que hicieron a algunas ayudas provenientes de Venezuela (que antes habían celebrado) y de no denunciar con la misma vehemencia a los embajadores de otros países que actuaban como virreyes en el territorio nacional. Acusó también a los líderes de la CEPB, de hacer suyas las posturas de Jorge Quiroga (líder del partido Podemos) y de actuar como un partido político que poco favor le hacía a los empresarios que, efectivamente saldrían beneficiados de las políticas económicas de su gobierno (Correo del Sur, 03-06-2006).

Las élites orientales, por su parte, arreciarán en sus intentos de desconocer el poder del ejecutivo central como el responsable de las políticas agrarias y de distribución de tierras. Así, el plan propuesto por Rubén Costas por "exigencia" de las élites empresariales, comienza a ser ejecutado en el mes de junio. Para intentar legitimar dicho "plan", reiteraron la idea, según la cual, cualquier decisión sobre las tierras baldías y ocupadas, debía pasar por la Comisión Agraria Departamental (CAD), presidida por los prefectos y que, por tanto, era legal, esta decisión. El 6 de junio, distintas organizaciones empresariales, como CAINCO, CAO, ANAPO, banqueros y otros respaldaron las decisiones de Costas (que ellos mismos habían exigido), pues con esto se combatían los intentos del gobierno nacional de "centralizar" al INRA (El Deber, 07-06-2006; La Prensa, 07-06-2006). Legitimaron con esto, no sólo el poder prefectural en temas agropecuarios, sino también los desalojos por parte de grupos cercanos al paramilitarismo, de los pobladores que ocuparon tierras baldías y ocupadas por familias prestantes de la región (La Prensa, 07-06-2006).

La política de tierras es enmarcada así por las élites regionales del oriente boliviano, como parte de las disputas por la estatalidad en su conjunto que se está discutiendo en el marco de la convocatoria a una ANC. De hecho, puede afirmarse que la lucha por el control territorial junto con los intentos por limitar el poder Constituyente convocado, son dos caras de la misma moneda y que las élites empresariales buscarán defender las autonomías departamentales, precisamente como mecanismo para frenar cualquier reforma económica, política o social que afectara la estructura que soportaba su propio poder.

Como es conocido, las elecciones de representantes para la ANC, se realizaron a comienzos del siguiente mes y le dieron el triunfo al MAS y a las fuerzas políticas con éste articuladas. Sin embargo, las dimensiones del triunfo no fueron las esperadas por el gobierno, lo que abrió la puerta para la profundización y ampliación de las bases del conflicto. Además de esto en el mismo momento se realizó el referéndum autonómico en el que las fuerzas políticas del

oriente reafirmaron su predominio regional, poniendo en aprietos al gobierno. Este escenario de triunfos incompletos por parte del gobierno y de mantenimiento de la resistencia de las élites de la media luna, es el que servirá a García Linera para hablar del “empate catastrófico” (García: 2010-a: 8 y 9). Una conflictividad en la que ninguno de los dos bandos puede imponer su voluntad sobre el adversario. Así, el “empate catastrófico” no sólo se produce en el proceso que lleva a Evo Morales al gobierno, sino que continuara por los primeros 4 años. El estudio de este proceso nos lleva a afirmar que, en el desarrollo de los conflictos, los bandos radicalizaron sus posiciones, pero también evaluaron los costos de esta radicalización. Esta evaluación los condujo a hacer mutuas concesiones que permitieron estabilizar las relaciones e incluso, contribuyeron de manera significativa a la estabilización política y económica del proyecto del MAS. En este escenario, una buena parte del empresariado llamará la atención sobre los impactos económicos de la conflictividad y buscará, como el gobierno también lo hace, generar espacios de diálogo y concertación. De este modo, las relaciones entre el gobierno y las elites político-económicas dominantes, se moverán entre la confrontación y la concertación.

Bajo este panorama, el problema de las autonomías y de la ANC, no se resolverá a lo largo del primer año, ni en el proceso de elaboración de la asamblea Nacional Constituyente. El ajedrez político se jugará con dos bandos que miden sus fuerzas y que, por momentos parece darle la victoria a las élites políticas regionales. Serán los éxitos del gobierno en materia económica y electoral los que, sumado a la radicalidad de algunas posiciones de las élites cruceñas, generarán rupturas al interior del bloque de las clases dirigentes y dominantes del oriente boliviano.

En este marco, los empresarios cruceños y sus pares de La Paz, tomarán partido por el fortalecimiento de los procesos autonómicos impulsados desde los Comités Cívicos y apoyados por el empresariado regional. Contribuirán así con los procesos de movilización social y con discursos y recursos para oponerse a lo que asumían eran pretensiones centralistas y autoritarias del gobierno de Evo Morales (La Razón, 16-07-2006, B3.). En este marco, las relaciones con el nuevo gobierno serán de creciente y abierta, confrontación, limitando con esto las posibilidades de encuentro y diálogo.

En relativa contraposición a la actitud asumida por los empresarios del oriente boliviano, la CEPB jugará un rol más orientado al mantenimiento del diálogo y la búsqueda de acuerdos con el gobierno. De este modo, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, los

empresarios de esta organización configuran una comisión para discutir con el gobierno dos temas centrales: El Estado como interventor parcial y fortalecimiento del empresariado privado. A partir de esto impulsan una propuesta cuyo objetivo es “establecer un modelo de desarrollo socioeconómico integral, sostenible, participativo y equitativo”. Para la construcción de esta propuesta, se han valido de un asesor internacional que ha trabajado en Colombia, Ecuador y Perú, así como con un equipo multidisciplinario nacional- En el documento se plantea que

A partir de la Asamblea Constituyente, se dé alta prioridad al sector productivo nacional, para que sea la locomotora, el generador de ese nuevo desarrollo que requiere Bolivia y el urgente potenciamiento de su sector productivo. También señala que el proceso de capitalización de las empresas del Estado y sus resultados han derivado en una serie de ventajas y facilidades para las empresas extranjeras que tuvieron resultados económicos y financieros positivos, contrariamente al sector privado nacional que se vio afectado por la crisis económica”. (La Razón, 23-06-2006).

Con estas declaraciones, la CEPB, reafirma lo dicho en páginas anteriores de este documento. Los empresarios bolivianos, particularmente articulados alrededor de la CEPB, sintieron el duro golpe de lo que Tsolakis (2009) llamó la internacionalización del Estado en Bolivia, que es también internacionalización de la economía. Se sintió el resentimiento con Sánchez de Lozada quien sacó a los productores nacionales de la posibilidad de participar de la torta de las capitalizaciones y privatizaciones (Sanjinés, 2004). En el nuevo contexto, no estarán dispuestos a permitir su exclusión.

Así, si bien la CEPB se asume como “brazo político del empresariado que nunca ha dejado de ser referente y líder de opinión en todos los temas del acontecer nacional” y llama a los empresarios a “cerrar filas” en torno a una institución “que tiene como función precautelar y promover la actividad privada en función del bienestar colectivo y del desarrollo económico y social de la nación” (CEPB, 2007: 2), esta organización no rompió la comunicación directa ni las relaciones con el nuevo gobierno. De hecho, durante el primer año, las directivas de esta institución mantuvieron, pese al clima de desconfianza y descalificación mutua entre el gobierno y los empresarios, una muy importante cantidad de reuniones. Desde el segundo mes del gobierno, la CEPB gestionó la visita del nuevo mandatario y de su vicepresidente, a quienes comprometieron “a respetar la propiedad privada, no vulnerar el principio básico de seguridad jurídica y trabajar coordinadamente en todos los aspectos que involucren a nuestro

sector, otorgando seguridades para la inversión nacional y extranjera (CEPB, 2007:1). Las reuniones se mantendrán a lo largo de este primer año.

Además de las reuniones mencionadas arriba, la interacción entre la CEPB y el gobierno se da a través de distintos funcionarios. En un clima caldeado por las disputas por las tierras y las autonomías, en marzo de 2006, los empresarios de la CEPB, se reúnen con Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia y, ese mismo mes, se reúnen con Luis Arce Catacora, ministro de economía y gestor del modelo de "economía plural"; en abril reciben a Fernando Mirabal Palba, Superintendente de Empresas; en mayo, los visita Carlos Villegas, ministro de Planificación del Desarrollo, junto con su viceministro, Noel Aguirre. Estos últimos dan a conocer "los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo con el objeto de conocer la percepción del sector privado" Ese mismo mes el Consejo Directivo visitó a Evo Morales, a Álvaro García Linera y a Carlos Villegas. En esta visita, la CEPB, manifestó "la preocupación del sector privado sobre los lineamientos que conocimos los días pasados; por otra parte, se acordó con el presidente de la República, iniciar las reuniones con el Consejo Consultivo del Sector Empresarial -COSEM. La primera reunión se produjo el 24 de mayo, con la presencia de Juan Ramón Quintana y Javier Hurtado, delegado del presidente. Con Evo Morales vuelven a reunirse en el mes de junio. Ese mismo mes se reúnen con Nila Heredia Miranda, ministra de Salud y Deporte, para discutir el tema del Seguro Universal Materno Infantil. En septiembre, nuevamente se reúnen con Evo Morales y García Linera, así como Carlos Villegas, Eusebio Girona, Asesor del presidente y Héctor Arce. Allí los empresarios le plantearon la posición al gobierno sobre los "dos tercios para la aprobación del texto de la nueva constitución, sobre el tema de las autonomías y el tema tierra". En octubre, se reúnen nuevamente con Rolando Morales y García Linera. "En dicha oportunidad, las autoridades garantizaron el respeto a la propiedad privada y la necesidad de crear espacios de confianza mutua". García Linera expone al empresariado "la posición del gobierno sobre los sectores de electricidad, telecomunicaciones, Hidrocarburos, tierras, universidades, minería y el sector financiero. Desvirtuó las declaraciones del Ministro de Educación, Patzi, sobre el rol inexistente del sector privado en el Plan de Gobierno". Ese mismo mes, en otro Consejo Directivo, se reúnen con el Ministro Salvador Ric, de Obras Públicas y Vivienda", quien fue acompañado del Viceministro de Energía, Jerjes Mercado. En el mes de noviembre, se reúnen con el ministro de trabajo, Sr. Alex Golvez Mamani, quien expone su proyecto de "refundar" el Ministerio de Trabajo", frene al que los empresarios plantean sus "observaciones".

Finalmente, en este periodo, se reúne con Gabriel Lozada Tellería, recién nombrado Ministro de Planificación del Desarrollo, (CEPB, 2007: 4-6).

A través de los informes de la CEPB, se puede evidenciar entonces, unas más o menos fluidas relaciones entre los empresarios y el gobierno, pese al contexto de confrontación generalizada que vive el país. Al mismo tiempo, estos informes permiten ver la amplitud de temas en los que participa la organización empresarial, dando sus observaciones y buscando (y logrando) influir las decisiones y políticas del nuevo gobierno. No sucede lo mismo con los empresarios del Oriente boliviano, con los que la relación es, precisamente de confrontación permanente. Esto lleva de hecho, a enfrentamientos entre los mismos empresarios. Así como las reuniones con miembros del gobierno (tres con el mismo presidente, en el contexto de confrontación), se reúnen también con representantes del poder legislativo, para discutir temas de comercio exterior y aduanas nacionales y contrabando. La CEPB está, además, metida en el análisis de una gran cantidad de temas legislativos. Se reúnen también con embajadores.

Por su parte, los empresarios de la CAINCO y del oriente boliviano en su conjunto, desarrollarán estrategias más cercanas a la confrontación que a la concertación. De hecho, resultado de las tensiones que se producen a partir de los “triumfos parciales” en las elecciones de delegados para la ANC, estas élites deciden no invitar al presidente para la inauguración de la Feria Exposición de Santa Cruz, como era tradicional. En su reemplazo se convocó a Rubén Costas para inaugurar protocolariamente la feria (La Prensa, 20-09-2006)

Pero las élites político-empresariales del oriente no se quedaron ahí. Llegaron a convocar a un paro cívico que buscaba imponer que las decisiones de la asamblea fueran tomadas por las 2/3 partes de la misma, algo que limitaba la capacidad de los movimientos afines al gobierno de imponer su voluntad. Este paro fue convocado en el mes de septiembre por los empresarios cruceños quienes defendieron esta acción como un “sacrificio para preservar el sistema democrático (La Prensa, 07-09-2006). Así, mientras las tensiones con la “media luna” se incrementan, la CEPB, intentó bajar los ánimos, haciendo llamados constantes a no “desaprovechar” el momento económico que estaba viviendo la economía mundial en el que muchos negocios estaban dejándose de hacer. Además, la misma economía local daba muestras de un importante crecimiento, a pesar de la existencia de una presión inflacionaria. De hecho, cuestionó la convocatoria a paro llevada a cabo por los Empresarios y comités cívicos, pues, a juicio de su presidente carecía de imaginación e incrementaba la confrontación, con efectos económicos y sociales negativos (El Diario, 07-09-2006). Junto

con este llamado a la concertación, sin embargo, pidió a los actores políticos, no presionar a los constituyentes, tal como lo estaban haciendo¹⁵⁸.

De esta manera se evidencia, desde el primer año de gobierno de Evo Morales una muy importante diferencia en la manera en que empresarios y gobierno se relacionan tanto en Bolivia como en Ecuador. Si en el segundo caso, el gobierno de Correa optó por desconocer la representatividad de las Agremiaciones más importantes, tales como la CCG, la CCQ, la CIP y la CIG, en el caso boliviano, donde el clima de confrontación era mucho más intenso, tanto gobierno como empresarios, al menos de la CEPB, generan espacios de encuentro y diálogo sobre los proyectos más importantes, que el nuevo gobierno pretendía impulsar. De hecho, como se ha visto, desde el primer mes del gobierno mostró acercamientos entre el gobierno y las principales asociaciones empresariales, incluidas las del oriente boliviano. Si bien es cierto en la disputa por la constituyente y las autonomías, entre otros temas, los dos bloques chocan, no se pierden espacios de mediación y concertación que posibilitan el establecimiento de algunos acuerdos básicos y que, al mismo tiempo van a permitir, con el tiempo, marginalizar o neutralizar las posiciones más radicales¹⁵⁹. El papel jugado por la CEPB, en Bolivia no tiene su contraparte en el caso ecuatoriano.

El año 2006 fue así testigo de un proceso de incremento progresivo de las tensiones entre el gobierno y las élites empresariales del oriente boliviano. La manera en que el gobierno conduce tanto el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, como el desarrollo de los procesos autonómicos despertará el rechazo de los empresarios, pues lo que se ve afectado es

¹⁵⁸ En el informe de 2006, se expresa, sin embargo, el descontento de la CEPB ante algunas temáticas específicas, tales como decisión del gobierno de reorientar la financiación del acceso a la vivienda para sectores marginales, y la exclusión de la organización empresarial en la toma de decisiones sobre los recursos del Fondo para la Vivienda. En las distintas reuniones con el gobierno, la CEPB, planteó críticas al Plan de Desarrollo, por hacer énfasis en la producción minera y de hidrocarburos, así como por seguir una orientación "centralizada, comunitaria y socialista". La CEPB, "señaló que esta visión que recoge patrones de la cultura económica andina del país no es la que prevalece en las regiones de mayor producción del oriente. Por lo tanto, esta lectura parcial de la realidad pone en riesgo su aplicabilidad en regiones donde existe mayor ejercicio de la economía de mercado" (CEPB, 2007: 19-20). Para la "cúpula empresarial", la iniciativa del gobierno, expuesta en el Plan, había "funcionado como un factor de distanciamiento y no como una orientación aglutinadora y representativa de todos los agentes económicos nacionales. Hay un conjunto muy amplio de actores económicos que no se ven representados en el Plan" (CEPB, 2007: 20). En este marco, los empresarios cuestionan el Plan del gobierno por hacer mucho énfasis en los pequeños productores, dejando de lado a los grandes empresarios.

¹⁵⁹ En octubre de este año, la CEPB, liderada en este momento por Roberto Mustafá y representantes del gobierno, incluido García Linera, se reunieron para acordar políticas de desarrollo y se comprometieron a trabajar juntos por la industrialización y la generación de empleo. En la nota de prensa que reseñó la rueda de prensa conjunta, se cita que: *García Linera destacó la decisión de la empresa privada para que, como sujeto fundamental del desarrollo y modernización, haya decidido participar activamente de las iniciativas del Ejecutivo. De su parte, Mustafá dijo que están dispuestos a trabajar con el Gobierno en el tema de la industrialización porque ya es hora que se deje de exportar materia prima sino con valor agregado.* (El Diario, 05-10-2022)

la estructura de poder que las elites regionales, particularmente, vienen intentando consolidar. Estas elites se enfrentarán a cada vez más iniciativas del gobierno. Rechazaron los cambios en la Ley de Tierras, en la administración pública y las modificaciones del DS 21060.

Rechazarán también el Plan Nacional de Desarrollo. En este último caso, se opusieron al énfasis que le gobierno ponía en la promoción de la pequeña empresa. En una declaración pública, se cuestionó la falta de seguridad jurídica y reclamaron su participación en la definición de políticas, particularmente del PND, propuesto por el gobierno. Manifestaron que el Plan debía tener en cuenta a todos los niveles de las empresas y no sólo a las pequeñas.

Pidieron coherencia en las declaraciones de los funcionarios del gobierno. Expresan que tanto el presidente como el vicepresidente habían reconocido la importancia de todas las iniciativas empresariales privadas, pero algunos funcionarios manifestaban ideas contrarias al respeto de la propiedad privada. Exigieron una política minera clara y coherente y le solicitaron a Morales mantener la unidad de país y gobernar para todos, disminuyendo las confrontaciones y seleccionando mejor al personal del ejecutivo. Afirmaron en tal sentido que se requería “la convocatoria a los mejores ciudadanos con capacidad y conocimiento para el desempeño de las altas funciones públicas, por lo que es recomendable la despolitización del manejo económico”. Finalmente, argumentan que “Los empresarios del sector Comercio, servicios y turismo, manifestamos nuestra identificación con todas las políticas que deberá asumir este gobierno, tendientes a lograr el desarrollo económico y social del país, con visión de integración nacional”. Firman: CNC; CDCLP, CCISP; CAINCO, Cámaras de Comercio y servicios de Cochabamba, Oruro, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando (La Razón, 16-10-2006).

En relación con las discusiones sobre el desarrollo de la ANC, estas se complicaron aún más cuando el gobierno determinó que las decisiones serían aprobadas por la mayoría absoluta. Desde el momento en que se convocó a la Asamblea, el 2 de marzo de 2006, la disputa fue por el mecanismo de aprobación de decisiones. Para los opositores, debía ser por 2/3, partes mientras que, para el MAS, por mayoría absoluta. Silvia Lazarte, quien en este momento es presidenta de la ANC impulsó la toma de decisiones, favoreciendo las pretensiones del gobierno. Una de las primeras organizaciones empresariales que manifestó su oposición a esta disposición de la ANC, fue la CAINCO, que a través de un comunicado recordó que los empresarios estaban dispuestos a apoyar al gobierno en las medidas económicas que favorecieran el incremento del empleo y el crecimiento económico, pero que éste debía respetar las disposiciones de la convocatoria a la ANC, en la que se había definido que las

decisiones debían tomarse por las 2 terceras partes para ser aprobadas. Así, la organización empresarial acusó al MAS de violar la ley de convocatoria afirmando que:

(...) los sectores productivos bolivianos, desde los micro hasta los grandes emprendedores, apostamos por el país y ponemos toda nuestra estructura productiva para su crecimiento en un escenario democrático. Somos parte de la solución, el socio confiable que aporta para superar los problemas sociales de Bolivia. Para ello exigimos un ambiente de respeto a las leyes, y la seguridad jurídica que posibilite la inclusión de más bolivianos a empleados de calidad, con más seguridad social” (Firmado en Santa Cruz, el 18 de noviembre de 2006).

Los cuestionamientos de la CAINCO, a la manera en que el gobierno estaba orientando la toma de decisiones para la construcción de una nueva constitución, fue esta vez respaldada por la CEPB. Para esta organización empresarial, esto era una muestra de querer imponer “la voluntad de la mayoría y avasallar a la minoría”, lo que deslegitimaba la democracia (La Razón, 21-11-2006).

En este contexto caldeado, un interesante pronunciamiento del gremio bancario ASOBAN se produjo. A pesar del clima de confrontación permanente, los indicadores del país mostraban un repunte considerable. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia, hizo entonces un llamado al diálogo y pidió que se buscaran soluciones “en el marco del respeto a la propiedad privada y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, garantizando la seguridad jurídica, evitando el uso político y discrecional que vulnera estos derechos en la Constitución Política del Estado”. La organización bancaria agregó que el contexto no era para confrontación, pues:

Hoy como nunca estamos pasando por una magnífica coyuntura internacional que debe constituirse en el motor de los cambios y el desarrollo, pero esto sólo será posible en el marco de la unidad, el respeto a la Ley, el diálogo y la concertación. Por ello, invocamos a nuestros gobernantes, actores políticos, sociales y de sectores productivos a la serenidad y a extremar esfuerzos a fin de no dejar pasar esta gran oportunidad para el desarrollo de nuestro país y para introducir los cambios y ajustes que se necesitan, en un clima de paz social y de consolidación de nuestra nacionalidad. (La Razón, 03-12-2006, B4)

El reconocimiento del momento de la economía internacional no es aislado. En otras ocasiones, se llamó a las partes a mesurar sus demandas e intereses. Al gobierno, como hemos visto, se le pidió en varias ocasiones, no afectar el clima de inversiones, ni la seguridad jurídica. El ritmo de los negocios se convertirá en un freno también para la confrontación. De hecho, la negociación se va constituyendo en el único camino para salir de la crisis. Así, al

llamado de ASOBAN, se sumará Javier Artero, presidente de los Empresarios Privados de Cochabamba. Para este dirigente empresarial, con la confrontación lo que se ponía en riesgo era el auge económico. En tal sentido, instó al gobierno, oposición y sectores cívicos y sociales a reflexionar y a construir consensos. A pesar de que este dirigente empresarial reconoce que los empresarios cochabambinos apoyaron el paro de los dirigentes cívicos por la actitud del gobierno que ha asumido “posiciones totalitarias”, también le recuerda que lo apoyaron por el tema de los hidrocarburos. De este modo, llaman a la construcción de escenarios de diálogo, manifestando que la economía estaba en un momento que califica de *espectacular*. En esta misma dirección, el dirigente gremial expresa la creencia de que la economía continuaría así durante todo el año y advierte: “pero si sólo pensamos en la economía y no vemos la seguridad jurídica, entonces estaremos hablando de una buena economía, pero de un país que no es el que queremos. Tenemos que tener un país donde se respete la libertad democrática, donde haya seguridad jurídica y donde podamos discrepar con las ideas de los gobiernos de turno”. Como empresario, pide que se respeten las dos terceras partes para la toma de decisiones en la ANC. (La Razón, 03-12-2006, B4)

El enfrentamiento generado por la decisión del gobierno sobre el mecanismo de aprobación de decisiones en la ANC, llegó incluso a que el presidente de la CAINCO, hiciera una huelga de hambre en La Paz, junto con otros dirigente y líderes sociales. La huelga, fue disuelta por las autoridades del gobierno, lo que generó más tensiones aún con el empresariado cruceño. Este sector del empresariado llegó a pedir, de hecho, que se invocara la carta democrática, para impedir que el gobierno siguiera “atropellando” los derechos humanos. En esta solicitud, acusaron al MAS de querer imponer una visión distorsionada del país, y estar sentando las bases para un totalitarismo en Bolivia (La Razón, 08-12-2006). La oposición a la conducción de la ANC, por parte del MAS y a la imposición sobre la resistencia a las autonomías departamentales, fue creciendo y sumando voluntades de distintos sectores empresariales. Si al principio fueron particularmente los empresarios del oriente, poco a poco otros grupos empresariales cuestionaran al gobierno por quiere hacer una constitución a su medida. Para mediados de 2007, la CEPB, emitió un comunicado en el que le piden al gobierno reorientar su forma de gobernar y le piden, puntualmente, no fomentar la división el país, al tiempo que critican la falta de consenso en los procesos de construcción del plan económico. “Queremos un diálogo constructivo y de unión; no queremos un debate destructivo y de división como el que usted propone, le dijo Roberto Mustafá a Morales en un comunicado firmado, además, por las nueve federaciones empresariales del país

<http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20070629/privados-piden-dialogo-constructivo-union>).

Ahora bien, no fue únicamente a partir de comunicados que las élites empresariales buscaron afectar las transformaciones políticas impulsadas por el MAS. También, desde la CAINCO, se desarrollaron acciones conducentes a ganar reconocimiento y protagonismo a nivel nacional, justo en el marco de la ANC. Siendo presidente de esta institución Gabriel Dabdoub, buscó genera alianzas con pequeños empresarios del occidente boliviano, particularmente de la ciudad de El Alto. Así también a partir de su programa “Visión país”, intentó la vinculación de otros sectores empresariales, no únicamente grandes y medianos. Estableció contactos con empresarios de El Alto y otras organizaciones como las Federaciones de Jóvenes, para “Cambiar la errónea interpretación de que CAINCO ‘lideraba’ un bloque opositor al occidente boliviano. En una entrevista realizada a un empresario de El Alto, éste afirmó que “... esas mesas de diálogo aproximaron a los bolivianos y vimos que nuestros problemas son afines y debemos enfrentar la pobreza”. Su liderazgo a nivel nacional, de hecho, condujo a que fuera elegido luego como presidente de la CEPB, y buscara darle a esta institución mayor legitimidad en sectores medios y populares, entre 2007-y 2008. Esto no significó, sin embargo, que los empresarios dejaran de cuestionar las políticas del gobierno. Por el contrario, participaron activamente, como hemos visto, en la búsqueda de orientar la toma de decisiones por parte de los constituyentes. Para esto, constituyeron un comité “técnico” de apoyo a los assembleístas en la capital del país cuando apenas estaban por iniciar las discusiones (La Razón, 01-08-2006). Así mismo, para buscar mayor presencia en estos escenarios, los empresarios participaron, individualmente en la contienda electoral para la ANC. Distintos partidos albergaron a líderes empresariales y permitieron que un número importante de estos lograran escaños en estas elecciones. Sin embargo, no hubo unidad de criterio en esta participación (La Prensa, 22-08-2006). Esto evidencia una participación inorgánica y desarticulada que, a la postre beneficiará al proyecto político del MAS y podrán sacar adelante una buena parte de las políticas que se proponen¹⁶⁰.

¹⁶⁰ 14 empresarios participaron en la ANC, bajo el manto de los Partidos Podemos y del MNR. “Dos fueron dirigentes del sector y el resto independientes. Regionalmente provenían de Tarija, Santa Cruz, Beni y La Paz. Entre estos hubo ganaderos, productores de almendras, cañeros, empresarios mineros y gente vinculada al sistema financiero” Pese a esto, la CEPB, “negó” haber buscado acercamientos con sus similares”. También participaron pequeños empresarios. Estos estuvieron bajo las toldas del MAS y de Podemos. El 75 % de la representación en la ANC, estuvo vinculada con distintos sectores sociales, tales como Dirigente vecinales provinciales, ONG, activistas sociales, evangélicos, gremiales, uniformados, mineros, pueblos originarios, obreros (La Prensa, 22-08-2006)

Como vemos, estos primeros años de mandato, están repletos de intensa actividad política que busca determinar los rumbos de la sociedad boliviana. La presión de los empresarios a través de distintas estrategias, fue respondida de manera reiterativa también por parte de organizaciones y movimiento sociales afines al gobierno. Varias de estas organizaciones también abrieron “oficinas” e hicieron presencia en las distintas sedes en las que se discutió y se construyó la nueva constitución boliviana (La Prensa, 11-08-2006; La Razón, 11-08-2006)

Los años siguientes estarán cargados de polarización y confrontaciones de distinto tipo. En el año 2007, la conflictividad girará alrededor de tres temas centrales. En primer lugar, por las políticas implementadas por el gobierno orientadas al control de la inflación a través de la prohibición de la exportación de algunos productos claves para la economía del oriente boliviano (aceite, arroz, azúcar, principalmente). En segundo lugar, por la acusación de parte del gobierno a algunos empresarios de conspiradores y realizar actividades ilegales. En tercer lugar, por la radicalización de las posiciones en torno a la construcción de la nueva constitución y la defensa de las autonomías departamentales que, en 2007, sumarán al departamento de Cochabamba bajo el liderazgo del Manfred Reyes Villa. En estos conflictos, los agentes empresariales de élite serán protagonistas, pues acompañan, financian, promueven o facilitan la movilización de los prefectos de los departamentos del oriente. En el desarrollo de la conflictividad, además, las élites empresariales de la CEPB, darán un giro importante, al nombrar, a fines de año, a Gabriel Dabdoub como su presidente, buscando articular el posicionamiento de las élites empresariales del oriente boliviano.

Veamos por partes el desarrollo de estos conflictos, pues nos sirve de base para entender cómo las disputas por la reconfiguración del estado y la reorientación de la sociedad condujeron a la constitución de la hegemonía del MAS a partir de 2009. Como hemos mencionado ya, uno de los temas de centrales alrededor del cual giraron los conflictos en estos primeros años fue, la política de tierras de Evo Morales, ante la cual, particularmente los líderes de la CAO, llegaron a afirmar que, ante cualquier intento de confiscar o promover el avasallamiento de tierras, estos responderían con “todo lo que fuera necesario”

([http://www.financiero.com/industria/bolivia-empresarios-contra-proyecto-reversion-](http://www.financiero.com/industria/bolivia-empresarios-contra-proyecto-reversion-tierras.asp)

[tierras.asp](http://www.financiero.com/industria/bolivia-empresarios-contra-proyecto-reversion-tierras.asp)) Pese a esto, el gobierno terminó por emitir una nueva ley de tierras que daba privilegios a indígenas y campesinos y limitaba la grandes propiedades en el mes de noviembre del año anterior. A finales de diciembre de 2006, el gobierno promulgó la Ley 3545, modificatoria de la ley de reforma agraria, lo que despertó duras recriminaciones de

parte de distintos actores sociales y políticos a finales de ese año. En este marco, el año 2006 termina con un grado de polarización mayor.

El año 2007, de hecho, iniciará con fuertes enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del gobierno. A esto se sumará que el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa se sumará al bloque de prefectos defensores de la autonomía. Esta sumatoria del bloque económico empresarial será respondida con violencia por simpatizantes del gobierno. Los sindicatos cocaleros se movilizarán hacia la ciudad y exigirán la renuncia del mandatario departamental. Este año Bolivia vivirá la radicalización de las posiciones. El gobierno avanzará en la implementación de una reforma agraria que no gusta a los empresarios latifundistas. Para enfrentar la inflación tomará medidas en contra de exportadores a quienes acusa de llevar a cabo una “guerra económica”. Prohibirá la exportación de azúcar, aceite y lácteos. A mediados de año las presiones sobre los asambleístas crecen de parte y parte. El gobierno tomará la decisión de trasladar la sede de la Asamblea Nacional Constituyente a un cuartel militar (el Liceo Militar Edmundo Andrade de Sucre) ante el rechazo de la oposición. Allí los simpatizantes del MAS, aprobarán lo que los opositores denominarán como una constitución ilegítima. Las críticas a esta decisión provinieron de distintos componentes del bloque opositor, incluidos los empresarios. Por su parte los prefectos de la CONADE, convocaron a una reunión urgente para discutir alternativas que bloquearan las decisiones del gobierno. En la reunión advirtieron desataría una constitución aprobada a través de la imposición. A las voces de los prefectos se sumaron las de los partidos opositores como Podemos, UN, y otros y las cabezas de CAINCO y la CEPB (La prensa, 27-11-2007). Todos anunciaron que no acatarían una constitución que calificaron de ilegal. Desde esta plataforma, además, convocaron movilizaciones en los departamentos del oriente y Cochabamba (La Opinión, 28-11-2007)

Como mecanismo de presión el gobierno elimina un subsidio al combustible diésel, clave en distintos procesos productivos de las economías orientales (La opinión, 28-11-2007). Los disturbios callejeros a lo largo del año dejarán varios muertos de parte y parte. En fin, una serie de conflictos por la orientación del estado y la sociedad se desarrollarán en lo que parece una ecuación de suma cero. El año 2007, se constituye así en uno de los más intensos momentos de confrontación. No hay día que no se presenten confrontaciones y disputas por los temas centrales que convocan a las partes, desde las que se disputa la orientación de la sociedad no sólo en sus marcos normativos, sino en sus visiones de “lo nacional”, y lo identitario.

Este año, además terminará con un hecho importante del lado de las reorganizaciones empresariales. Pese a las denuncias contra el líder de la CAINCO, por supuestamente participar de complots contra el gobierno, bajo su liderazgo, este bloque no obstante buscará tener una mayor relevancia política. Desde finales de 2005, ante un ambiente que da el triunfo a Evo Morales, la FEpsc, había decidido volver a la CEPB. A finales de 2007, Gabriel Dabdoub, que había presidido la CAINCO por tres periodos consecutivos logrará la presidencia “por consenso” absoluto de la CEPB, para el periodo 2008-2009 (La Razón, 30-11-2007). A lo largo de 2007, Dabdoub se había caracterizado por ser un duro opositor del gobierno de Morales y había cuestionado casi todas las medidas tomadas por este, restando también importancia a algunos éxitos en materia económica. Este, de hecho, había sido un eje de articulación de las élites empresariales del oriente al trabajar en conjunto con la CAO, la ANAPO, y el Comité Pro-Santa Cruz en la defensa de las autonomías y en las convocatorias a las movilizaciones en contra del gobierno de Evo Morales.

Además de lo anterior, como hemos visto, este líder empresarial había impulsado la articulación de otros sectores económicos más allá de las fronteras de los departamentos de la media Luna. Había desarrollado actividades clave para presionar a los assembleístas, montando una “oficina” cerca de los lugares en los que la ANC se reunía para “asesorar” a los assembleístas en distintos temas económicos. Su nombramiento como presidente de la más importante organización empresarial boliviana, con la que, como hemos visto el gobierno mantenía contacto permanente, puede verse como parte de la estrategia de las élites orientales para “jugar” a la concertación y la confrontación, buscando disminuir el poder que el gobierno había acumulado a través del control de las instituciones del estado y de la ANC.

En este contexto, la radicalización de algunas organizaciones cruceñas tuvo que ver también con los líderes políticos que allí se posicionaron. A comienzos de 2007, Branko Martinovic, que venía de la FEpsc, asumió la presidencia del Comité Cívico de Santa Cruz. Desde la presidencia del Comité estableció como prioridades de su gestión luchar por la autonomía y por la nueva constitución. A su juicio, no debía olvidarse que “en una constitución mala, que no garantiza derechos de las personas, de nada nos sirve la autonomía. Si no está claro cuáles son nuestros derechos y los límites del poder de un Gobierno, estamos entrando a una monarquía o al fascismo”. Para influenciar en la constituyente, se propuso buscar relación con los assembleístas de la “Brigada Parlamentaria” de todos los partidos y con la Cainco (El Deber, 25-02-2007). Este dirigente cruceño será acusado por parte de funcionarios del gobierno de hacer ilegalmente de cerca de 14.000 hectáreas. Su participación en distintos

escenarios de confrontación serán claves para el desarrollo de las tensiones. Ante las acusaciones de ocupación ilegal de miles de hectáreas, el bloque empresarial responderá con el pago de páginas en los principales diarios del país defendiendo la honorabilidad del empresario (El Deber, 07-09-2007)

Pero el gobierno fue más allá en el enfrentamiento con las élites cruceñas. Además de acusar de apropiación ilegal de tierras a la familia de Marinkovic, también acusó a los empresarios y particularmente al líder del Comité Pro-Santa Cruz de liderar una “guerra económica”. En una declaración pública, Morales afirmó que “Algunas familias dicen en Santa Cruz: ‘a este indio hay que descartarlo políticamente. Y con ocultamiento, con especulación es como se va a descartar a ese indio. Una vez desgastado vamos a tumbar al indio’. Ése es su Padrenuestro de cada día” (La Razón, 16-11-2007). A esto agregó, en el contexto de la prohibición de la exportación de algunos productos claves de la canasta familiar, que tomaría más medidas para impedir que siguieran afectando a las familias bolivianas incrementando de manera injustificada los precios del aceite, el azúcar y otros productos básicos y que prefirieran exportar, antes que cubrir el mercado interno. Morales acusó de manera directa a Marinkovic de ocultar el aceite para afectar su precio y deslegitimar su gobierno (La Razón, 16-11-2007)¹⁶¹.

Ahora, como hemos visto, no las tensiones estructurales y sus expresiones personales no se produjeron sólo ante la figura de Branko Marinkovic (de quién tendremos que hablar más adelante), sino que se produjeron también con el líder de la CAINCO, Gabriel Dabdoub. En el mismo mes de noviembre, una foto del empresario fue publicada por el gobierno. En esta foto aparecía junto con un delincuente colombiano (Jhon Jairo Banegas) que Morales calificó de “paramilitar” y con el embajador de los Estados Unidos. La foto fue hecha pública en el contexto de la XVII Cumbre Iberoamericana efectuada en Chile. El Gobierno pidió explicaciones tanto al Embajador como al dirigente empresarial. Los dos negaron cualquier vínculo directo con el delincuente colombiano (La Prensa, 07-11-2007) Gobierno de Colombia emitió un comunicado en el que se descartan acusaciones o condenas en contra de Banegas. Pese a esto, el gobierno llamó al embajador de los estados unidos a la cancillería para que explicara el asunto.

¹⁶¹ A las denuncias del gobierno del supuesto ocultamiento de la producción para afectar los precios en el mercado nacional, se sumaron denuncias por la manipulación de los precios de la carne. En este caso, se mencionaron los nombres de Wálter Kuljis, Luis Ernesto Áñez y Osvaldo Monasterio, quienes no sólo eran propietarios de grandes cantidades de cabezas de ganado, sino que además eran propietarios o accionistas de los más importantes frigoríficos de Santa Cruz y proveedores de carne para el occidente boliviano (El Diario, 22-11-2007).

Retomando los conflictos por las medidas del gobierno de prohibir la exportación de productos de la canasta básica, los empresarios sumaron a los transportadores quienes realizaron algunas protestas y bloqueos. Sin embargo, el gobierno logró negociar pronto con los transformadores disminuyendo el potencial desestabilizador y de esta convocatoria del bloque opositor.

Pese a todos los frentes e resistencia contra la nueva Constitución boliviana, el 2007 el gobierno logró imponer buena parte de sus apuestas ante las denuncias y críticas de los empresarios y del bloque político liderado por Podemos, UN y buena parte del MNR. Los empresarios habían presentado desde abril de este año sus propuestas a la asamblea en las que resalta un cambio significativo en su otrora defensa (selectiva) de las políticas neoliberales. En esta propuesta, los otrora defensores del neoliberalismo, bajaron el tono de esta defensa y afirmaron buscar un “libre mercado”, pero con “rostro social”. Además de esto, en su propuesta a los constituyentes, la CAINCO, defendió las autonomías votadas el 2 de julio del año anterior, al tiempo que pidió “(...) permitir que las autoridades departamentales de Santa Cruz, Beni; Pando y Tarija sean elegidas por voto directo, para que administren las competencias otorgadas por la nueva Constitución, con capacidades legislativas a través de un consejo o asamblea departamental”.

En relación con el tipo de Estado que los empresarios deseaban en el contexto de las discusiones sobre la nueva constitución el mes siguiente reiteraron que este debía contemplar políticas favorables al mercado, también con políticas sociales. En la defensa de sus propuestas a los constituyentes, propuso alejarse de los extremos. Así, expresó que “En este momento hay un debate entre dos modelos de Estado: Un neosocialismo y un neoliberalismo. Se trata de dos extremos, una izquierda extrema y una derecha extrema. No aceptamos esto. El empresario alerta del peligro de establecer un debate entre los extremos. Eso significa mirar a la izquierda y a la derecha sin buscar el bienestar de los bolivianos. Si alguna de las dos posiciones prospera conllevará al atraso para el país”. El discurso de las autonomías desde la Cainco, ha cambiado sustancialmente. Ya no se defiende únicamente las autonomías de las prefecturas departamentales, sino también se reconoce las de otras instancias de gobierno. Esto evidencia un giro importante en el discurso, así como también en las críticas al neoliberalismo. Sin embargo, da prioridad a las autonomías departamentales. Para el reconocimiento de los indígenas, esto debería hacerse desde los departamentos, más que desde el Estado Central. (La Prensa, 16-05-2007)

Este año, representa un periodo decisivo en el desarrollo de las tensiones entre los dos bloques de poder. Por un lado, el gobierno avanza en la implementación de políticas de control de la inflación que conducen a enfrentamientos con los empresarios del oriente, avanza en la implementación de las políticas de tierras, y en el proceso constituyente en medio de múltiples tensiones, pero, también en el campo empresarial, estos logran mayores niveles de articulación. De hecho, a finales de este año, como hemos mencionado, se produce un reacomodo de las fuerzas que dirigen a la CEPB, al nombrarse, por unanimidad a Dabdoub. Este proceso vivió en junio de este año, un importante momento pues la mayor parte de las organizaciones empresariales se reunieron para discutir la difícil situación que el país estaba viviendo y luego de un desafío que Evo Morales les había lanzado para trabar por el país y para debatir sobre el futuro del mismo.

En la reunión de los empresarios, aceptan el debate y producen una declaración conjunta en la que rechazaron el proyecto de estado plurinacional y defendieron las autonomías departamentales. Al mismo tiempo criticaron las políticas económicas, la generación de un ambiente de violencia. Llaman demagógica la política de tierras, califican de ineficiente la gestión de las empresas estatales, exigen respeto y autonomía para la ANC, reiteran la necesidad de seguridad jurídica; piden una constitución que no imponga reformas radicales del Estado. Exhortan al gobierno a cambiar de rumbo su ejercicio de lo contrario advierten mayores niveles de violencia (La Prensa, 27-06-2006)

Los meses de agosto a noviembre de este año, fueron marcados por la intensa confrontación. Sin embargo, terminando el segundo año del gobierno, con la mediación del vicepresidente, se convocó a un diálogo para discutir autonomías y proceso constituyente, sin que se logaran muchos avances. El llamado al diálogo fue también hecho por otras organizaciones e instituciones sociales como la iglesia, la COB, entre otros. Desde comienzos de diciembre se estas organizaciones convocaron tanto al presidente como a los gobernadores limar sus asperezas y buscar escenarios de concertación que pusieran fin a la violencia (El Diario, 14-12-2007). Este llamado al diálogo de fines de año tiene efectos a comienzos de 2008. Bajo la representación de los prefectos del oriente, las élites económicas y políticas negocian un acuerdo con Evo Morales, sobre el problema de la expropiación de latifundios y sobre el texto de la constitución. Estas negociaciones terminarán llevando al establecimiento de un pacto entre el gobierno y las élites regionales, sobre autonomías, propiedad privada, inversiones públicas y privadas y, en general, sobre el nuevo modelo económico y estructura política del país. A partir de este pacto, se normalizarán las relaciones entre empresarios y el gobierno.

Acusando al gobierno de haber cortado progresivamente los canales de diálogo, desde mediados de 2006, no obstante, también desde la CAINCO, se manifestó la voluntad de dialogar (La Razón, 16-12-2007)

El 2007, terminó así, con las posibilidades abiertas para retomar la construcción de escenarios de concertación, pero en medio de la desconfianza, las advertencias y los vaticinios de parte de los empresarios de los efectos negativos que tendría para el país, la persistencia del gobierno de continuar por el rumbo de la confrontación. Advirtieron incrementos en los precios de los productos, mayores confrontaciones y perjuicios para todos los sectores (La Patria, 22-12-2007; Correo del Sur, 22-12-2007).

El año 2008, será así un escenario en el que se mantendrá la confrontación y la concertación. Los pedidos de diálogo entre las partes, finalmente se materializan a comienzos de este año. Allí los 9 prefectos se reúnen con el gobierno para buscar salidas a la grave crisis social y política que estaba atravesando el país. En este diálogo, las posiciones parecen reconciliarse. Sin embargo, todavía de pasar mucha agua bajo el río para que pueda superarse el “empate catastrófico”. La misma agenda de diálogo tuvo muchos problemas para concertarse. Los primeros días del año, las posturas parecían irreconciliables. El día 7 de enero, a pesar de estas dificultades, el encuentro se produce y por más de 6 horas el gobierno dialoga con el bloque opositor y con los demás prefectos. En el primero de varios encuentros apenas se delinearón los temas a discutir. En un tira y afloje que durará todo el año, las partes terminarán disminuyendo sus expectativas y al final, los progresivos éxitos electorales, sumado a algunas tensiones al interior del bloque opositor permitirán estabilizar las relaciones.

Sin embargo, en 2008, los niveles de violencia se intensificaron. generando, en medio de los intensos enfrentamientos, varios muertos y heridos. En el departamento de Pando, de hecho, fueron asesinadas 20 personas que habían ocupado un terreno reclamándolo como baldío. Allí, un grupo armado llegó y asesinó a estas personas (Clacso, 2009).

Desde el bloque opositor se llevaron a cabo varias estrategias para intentar frenar las políticas del gobierno. En el campo del poder político, es necesario tener en cuenta que, pese a que para la cámara baja el MAS tenía mayorías, durante su primer gobierno no logró constituir mayorías en el senado. Allí, Podemos, muy articulado con las élites empresariales del oriente, junto con la UN, del empresario Samuel Doria Medina y el MNR, buscarán frenar el desarrollo legislativo logran de hecho producir importantes disidencias en el gobierno (La Razón, 02-01-2008). En este caso, como parcialmente en Ecuador, se puede evidenciar una

articulación, entre poder económico y poder político. Particularmente en los partidos Podemos encontramos una importante representación de sectores de élite empresariales. Como parte de la disputa por el poder legislativo, a partir de Poder Democrático y Social (Podemos), se integró a empresarios para ganar votación en Santa Cruz. Oscar Ortiz, fue miembro de este partido (ya desaparecido) y, además, líder empresarial de CAINCO y de la Federación de Empresarios. A comienzos de este año, Podemos y en Unidad Nacional se articularon los líderes político-empresariales, para hacer oposición a Evo Morales. Esta articulación les sirvió para controlar la presidencia del Senado (Ver: La Razón, 02-01-2008). Pese al triunfo, Ortiz se mostró inicialmente conciliador, afirmando que bajo su liderazgo se buscaría el debate democrático “pero también el diálogo... consenso y finalmente... concertación”, pues “eso es la democracia, es buscar equilibrio, es respetar la libertad y el derecho que tenemos cada uno”. (La razón, 19-01-2008).

Así, la resistencia regional no sólo suma, como en el año anterior a Cochabamba, sino que dentro del mismo poder legislativo el gobierno tendrá que enfrentar duros escollos para su gestión. En este año, las disputas por la nueva Constitución Política del Estado continuaran, así como las disputas autonómicas y una fuerte movilización callejera de parte y parte. En este marco, el gobierno enfrenta duras dificultades, pero dentro del campo del poder político-empresarial también se vivirán duras afrentas que, desde el marco internacional debilitarán sus posiciones en este año. Así, la élite empresarial, pese a sus pretensiones de deslegitimar al gobierno, al que acusaron frecuentemente de autoritario o incluso, dictatorial, recibieron un duro golpe a comienzos del año 2008, cuando el Secretario General de la OEA, manifestó que la democracia boliviana “no estaba amenazada y que la nueva Constitución Política del Estado... respetaba los derechos fundamentales de las personas. Gabriel Dabdoub, criticó el posicionamiento el funcionario de la OEA, y consideró que con esto se abría “un espacio de desconfinar, cuando dentro del equilibrio de la democracia vemos que de acuerdo a intereses personales y oscuros, se dice lo que sea”. A esto agregó que “Ahora no conocemos cuál es la realidad, cuando Insulza recibe a los prefectos y les da la razón, o cuando viene a Bolivia y se reúne con el Presidente y dice que está garantizada la democracia, y sin siquiera realizar un análisis de la nueva Constitución, dice que no muestra actos de incongruencia e irregularidades, cuando se han detectado 23 puntos ilegales, e incluso los ministros han admitido que existen ilegalidades”. Con base en esto, puso en duda la credibilidad de Insulza y de la OEA y de hecho llegaron a denunciar su mandato en la OEA, como fruto de la imposición de Chávez. (La Opinión, 26-01-2008).

Las críticas a la postura de Insulza, además de las declaraciones de Dabdoub, se materializaron en acciones de protesta contra el funcionario en el Aeropuerto de Santa Cruz. Jorge Quiroga, así mismo expresó su rechazo y pidió a Insulza no inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia y pidió declaraciones sobre los reclamos fronterizos de Bolivia ante Chile y Perú, a lo que agregó que “Lo que ya es inaceptable es el descaro del Secretario General (...) de venir a Bolivia, bajarse del avión y decir que todo está bien, que todo está conforme a la democracia y al Estado de Derecho” El Prefecto y empresario de Santa Cruz, Rubén Costas se sumó a las críticas a Insulza y lo abortó en el Aeropuerto, cuando se alistaba para salir de Bolivia, para entregarle una carta en la que denunciaba las violaciones de derechos humanos del epate del gobierno y los aspectos de la nueva constitución que ponían en riesgo a la democracia boliviana (La Prensa, 26-01-2008).

Este escenario muestra otra de las dificultades que enfrentaron las élites económicas y empresariales en la búsqueda de dar legitimidad a sus reclamos. Sin embargo, este es año fue, como mencionamos también, un momento en el que representantes del empresariado cruceño se hicieron a la presidencia de la CEPB. Gabriel Dabdoub, proveniente de la CAINCO, asumió este cargo a finales del mes de febrero, con el temor de algunos líderes empresariales de que se usara esta posición para hacer oposición y romper diálogos con el gobierno. Esto se puede inferir de las declaraciones de Roberto Mustafá, a su salida del cargo, cuando sugirió a Dabdoub “que evite una posición de confrontación con el Gobierno, y que no intente cortar la relación con este, con el objeto de mejorar las relaciones entre públicos y privados y lograr la recuperación económica del país”. Ante esto, el Dabdoub precisó que no iba como “opositor”. No obstante, en este primer año la posición del empresario estuvo muy cercana a las posiciones de las élites empresariales de la media luna, así como de los prefectos de esta región del país (El Deber, 28-02-2008) Como titular de la CEPB, el cruceño buscó darle mayor anclaje social y político a la dirigencia empresarial, buscando, como lo había hecho desde la CAINCO, acercamientos con empresarios medianos y pequeños.

A finales de febrero, pese a las negociaciones con los prefectos, en el congreso se aprobaron “referéndums dirimitorios” a partir de los cuales se consulta a la ciudadanía sobre el problema del latifundio y se buscaba superar un escollo en el seno de la ANC, por las dificultades para aprobar este artículo al no contar con las mayorías. La medida genera el rechazo al unísono de las cúpulas empresariales de todo el país. A través de comunicados públicos se acusa al gobierno de prácticas dictatoriales. Casi todas las asociaciones empresariales pagaron pautas en los principales diarios del país, en la que, bajo el título de “duro golpe a la democracia”

(01-03-2008), o “Se asesinó la democracia en el país (La opinión, 01-03-2008), desde la CAINCO y la CEPB, se condenó la decisión impuesta por el bloque oficialista en el congreso de la república el día 28 de febrero. Estas páginas pagadas por los empresarios, fueron respondidas también por líderes de movimientos sociales quienes pautaron también una declaración pública en defensa del gobierno y de la nueva constitución. Se acusó de que “algunos empresarios se han sumado al golpe de Toto Quiroga, de Branco Marinkovic y del Senador Oscar Ortiz. Por eso los tres utilizan las mismas palabras y expresiones. Hablan de ‘golpe a la democracia’ y de ‘ex gobierno democrático’ para justificar sus futuras acciones”. En la declaración dirigieron también sus críticas a la Cainco y otras organizaciones que habían pagado por sus publicaciones en distintos diarios del país y denunciaban al gobierno de Evo Morales. Les exigieron a los empresarios “no hablar por el pueblo boliviano en esas declaraciones pagas en los diarios”. Pues

(...) estas solicitadas no son escritas para los bolivianos. Todos los bolivianos sabemos que la CAINCO miente cuando dice: ‘todos los bolivianos hemos sufrido con las heridas de las dictaduras’, cuando es público que varios de sus miembros fueron colaboradores de la dictadura de Banzer y también del régimen de Sánchez de Lozada. Estas solicitadas están dirigidas para el extranjero, para intentar aislar al primer mandatario indígena y así facilitar su Golpe de Estado.

Denunciaron así cómo estarían preparando el golpe”.

El camino del golpe es claro: 1) mostrar que no hay estado derecho en Bolivia: "la democracia ha muerto", 2) provocar conflictos por el alza de precios 3) buscar aislar al gobierno a nivel internacional 4) provocar enfrentamiento y caos a través del referéndum autonómico que es ilegal y anticonstitucional porque la actual constitución no contempla las autonomías, y 5) buscar una sucesión constitucional

Finalizaron defendiendo el referéndum aprobatorio de la Nueva Constitución y declarando el respaldo al gobierno: “Convocamos a todo el pueblo de Bolivia a cerrar filas en defensa del proceso democrático, la unidad del país y el primer gobierno indígena encabezado por el hermano Evo Morales Ayma” (La Prensa, 02-03-2008)

En este mismo mes, se da un combate por la representación de la estabilidad o la inestabilidad económica. Los empresarios cruceños venían denunciando (generando) los peligros de la gestión económica del gobierno en distintos frentes. En este mes el gobierno impuso restricciones para la exportación de aceite mientras los cruceños, con sus autoridades, pretendieron desconocer la institucionalidad, amenazando con crear sus propias aduanas y

garantizar la exportación. El gobierno tuvo que amenazar con usar a las fuerzas armadas de policía, para vigilar (La Prensa, 21-03-2008)

El conflicto por la prohibición de la exportación de aceite escaló y las dos posturas establecieron condiciones para dialogar. Los empresarios pidieron la derogatoria del decreto 29480, que había establecido esta prohibición. DE su parte, el gobierno, en voz del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintan, afirmó que “Hay posibilidades de iniciar un diálogo. Ojalá los empresarios que producen aceite tengan la predisposición a rebajar los precios del aceite, porque no es posible que en Bolivia estemos pasando 16 bolivianos por litro de aceite cuando en Brasil cuesta 10 bolivianos... No es posible exportar aceite castigando la demanda de los bolivianos”. (Los Tiempos, 25-03-2008)

Frete a lo que las élites de Santa Cruz denominaron “guerra económica”, libraron una campaña política que incluyó protestas, declaraciones públicas y proclamas cuasi-jurías en las que se desconoce el poder del gobierno. Un ejemplo de esto, que además se disputa el orden autonómico, es la pauta publicitaria paga por varias organizaciones de empresarios, en la que solicitan “al Prefecto del Departamento que, en el marco de las disposiciones del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, el Consejo Departamental dicte las normas legales necesarias para facilitar el proceso de exportación de todos los productos por el territorio del Departamento de Santa Cruz”. Esto al tiempo que exigen, como requisito para el dialogo que el gobierno derogue los decretos supremos. Así establecieron que no asistirían “a ninguna reunión con las autoridades del Gobierno del Mas y solicitar el >Prefecto del Departamento que no participe de ningún encuentro de diálogo, mientras no se abroguen los Decretos Supremos No. 29640 y 29680 y se restituya el IDH a las regiones”. Finalizaron el comunicado anunciando la creación de “una comisión permanente de movilización de emergencia para coordinar todas las acciones que emanan de este congreso y cíe los distintos sectores”. Firmaron: CAINCO, CAO, CADEX, COD, Cámara de transporte del Oriente, APIA, FEPSC, Congreso Extraordinario de la Cadena Agro productiva, Santa Cruz, 25 de marzo de 2008. (La razón, 23-03-2008)

Para comienzos de abril se abrió una grieta en las articulaciones impulsadas por las élites cruceñas. Los transportadores, que habían previsto paro y bloqueos, para el 1 y 2 de este mes, suspendieron la convocatoria, argumentando que, tras reuniones con delegados del gobierno había “predisposición de dialogar y ahora tenemos una agenda definida, pero si esto no se soluciona hasta el miércoles, nos vamos a las movilizaciones”. Por su parte, los empresarios Cruceños convocaron movilizaciones, dando “tolerancia” a los trabajadores para asistir a las

movilizaciones. Los cruceños de este modo, montaron una estructura para configurar un estado descentralizado en el que, asuntos de competencia del estado central, como las exportaciones no dependieran e las determinaciones del gobierno. Al respecto, Rubén Costas, la creación de la Dirección Departamental de Sanidad Agroalimentaria, era el primer paso para que los agroindustriales cruceños tengan la posibilidad de exportar cualquier producto de manera descentralizada sin depender del Gobierno central en un plazo no lejano, dentro de un régimen autonómico, es decir, posterior al 4 de mayo”. Al mismo tiempo afirmó que la configuración de las instituciones era “una respuesta al Gobierno por el golpe duro que ha dado al sector agro-productor y exportador, y además forma parte del proyecto de autonomía que viene en proceso desde hace dos años...”. Para frenar el alza de los precios del aceite, por su parte, el gobierno creó una planta procesadora de soya, para abastecer el mercado nacional y presionar la baja de los precios. (Correo del sur, 01-04-2008)

Emulando el discurso popular de las guerras del gas y del agua, las élites cruceñas que se opusieron a las restricciones del gobierno para exportar aceite y otros productos básicos, llamaron a sus protestas la “guerra del aceite” y la juntaron con las luchas por la autonomía. (El Deber, 02-04-2008). Al respecto, desde la CEPB, Dabdoub, criticó las medias del gobierno, afirmando que la política contamina la economía y genera muchas pérdidas. Esto estaba llevando a que empresas extranjeras estuvieran al borde del colapso por no poder acopiar más soya. Con esto, busca presionar al gobierno para que negocie con los empresarios del oriente y que elimine el veto a las exportaciones de aceite y otros productos alimenticios. Para mediados de este mes, nuevamente la CAINCO, convocó movilizaciones en contra de las restricciones del gobierno. Las pérdidas ya son millonarias, afirmaron ese momento, . En estas manifestaciones volvieron a participar los transportistas y los arroceros. Una de las empresas más grandes de Cochabamba (FINO), cerró, por la imposibilidad d producir aceite. (La patria, 15-04-2008).

Sin embargo, el gobierno no dio su brazo a torcer y ante la continuación de las demandas de los empresarios, amenazó con nacionalizar las aceiteras que dejaran de producir. Sin embargo, el Ministro de Hacienda, Luis Arce, manifestó también que estaban evaluando la suspensión del decreto que prohibía la exportación de aceite. Los transportadores, en este caso, se manifestaron en contra del presidente, criticaron su política de exportación de gas a Argentina y Brasil con precios favorables, y no poder abastecer las necesidades nacionales. La prohibición de exportación, los afectaba, pues no tenían que transportar en sus camiones. Finalmente, la marcha se produjo el 15 de abril, con consignas como “exportar o morir”,

“Basta de abusos” y “sí a la autonomía”. El gobierno respondió con la amenaza de quitar el subsidio al diésel para la producción agroindustrial de Santa Cruz. La CEPB, se sumó a las protestas y amenazas al gobierno, radicalizando la posición de los empresarios.

En la marcha contra las medidas del gobierno, que tienen un trasfondo de lucha por el tipo de estado, economía y la sociedad que los dos bloques apuestan por construir o establecer, se hace un balance desastroso de la economía boliviana. Manifiestan que el gobierno está desgastado. (El Deber, 17-04-2008) La visión de los empresarios, se aleja de la realidad o presentan un balance en el que sólo se oyen ellos. Las cifras del Banco Mundial, establecieron el crecimiento de la economía boliviana, en 6.1% para 2008, superando la cifra de 2007, que había sido de 4.6. Esto, pese a la profunda crisis internacional que ya se estaba evidenciando. Para 2009, el crecimiento, si bien se contrajo un poco, estuvo lejos de la contracción que otros países experimentaron en 2009. Así, mientras la economía boliviana tuvo cifras positivas de 3.1%, economías como la chilena (-1.1) , la colombiana (1.1) o la ecuatoriana, tuvieron crecimientos negativos 0.6. (así: Ver. Crecimiento del PIB (% anual) - Bolivia | Data (bancomundial.org)

Para el 18 de abril, sin embargo, ya se habían calmado un poco las aguas. Las presiones del gobierno disminuyeron también la beligerancia de los empresarios liderados por CAINCO, la CAO Y CADEX,. En este momento, el gobierno convoca a los empresarios a dialogar sobre la posibilidad de eliminar la restricción e exportar gas, pero ya había logrado su cometido. El precio del litro de aceite a granel ya estaba en 11 bolivianos en todo el país (Opinión, 18-04-2008). El tono disminuye en este contexto de enfrentamiento entre el gobierno y los aceiteros, liderados por la CAINCO, la CAO y otras. Lo que se viene es el referéndum de aprobación o negación de las autonomías.

Por otro lado, como parte de las estrategias de legitimación que Dabdoub como cabeza de la CEPB, en un escenario de conflictividad creciente con el gobierno, impulsó desde el ente gremial la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la patronal top boliviana. Afirmó, al respecto, que se trataba de una estrategia de inclusión y de darle primacía a la economía y no a la política como estaba sucediendo en Bolivia (La razón, 15-04-2008) El líder empresarial, además, convocó a una convención nacional de empresarios para determinar formas de presión contra el gobierno por sus medidas económicas. Gabriel Dabdoub, confirmó el encuentro que sostendrán los empresarios privados para analizar las últimas disposiciones del Poder Ejecutivo que, consideran que tienen más contenido político que económico. (El País, 16-04-2008). Sin embargo, la “economía” de los empresarios es su

política y ellos mismos estaban en este plano, más que en el económico. Se pronunciaron en medio del conflicto, a favor del referéndum autonómico; pronunciamiento que derivó de convocatorias realizadas por Dabdoub, para articular al empresariado nacional desde la CEPB. Algunos empresarios en este escenario de radicalización llegaron a pedir el enjuiciamiento del presidente por traición a la patria. Esto fue impulsado por el presidente de la FEPSA, Pedro Yovhío, (El Mundo, 17-04-2018) Desde esta mirada compararon las medidas de Evo Morales con las tomadas en el marco del gobierno de la UDP, a comienzos de los años 80, que llevaron la hiperinflación. El mensaje que se da es que esas medidas de controlar los precios ya se habían tomado y no habían resultado positivas. Todo lo contrario, en vez de frenar la inflación, habían conducido a llevarla a cifras absurdas. El empresario pronosticó una inflación que bordearía el 20%, resultado de las medidas que pretendían frenarla. A pesar de las críticas a las medidas del gobierno, llamó al diálogo y la concertación, (El Diario, 24-04-2008) Finalmente, como la evidencia mostró, pese a tener una inflación comparativamente alta, apenas superó en 10.1% la inflación del año anterior. Del lado del gobierno, se agendaron investigaciones en contra de aceiteras para determinar si hubo manipulación de precios. (La razón, 25-08-2008)

El conflicto por las autonomías, el control de exportaciones y las disputas por la nueva constitución continuaron a lo largo del año, entre la confrontación y la concertación. Sin embargo, dos hechos acaecerán este año que significarán una ruptura trascendental en las relaciones entre el gobierno y ellos empresarios. En primer, en el oriente boliviano, el ala más radical con participación en distintas organizaciones empresariales (CAINCO, CAO, ANAPO), y en el Comité cívico Pro Santa Cruz, se vio envuelta en un complot para asesinar al presidente y al vicepresidente. En este complot, algunos empresarios y líderes cívicos, habrían financiado un grupo terrorista, con la finalidad de asesinar a los “enemigos” del “modelo cruceño” El 20 de junio de 2008 la policía allanó un hotel en el que se encontraban miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y ciudadanos extranjeros. Estas personas tenían armas largas y munición suficiente para atentar contra el presidente. El desenlace de este hecho, fue el progresivo enjuiciamiento de miembros de la CAINCO, la CAO, el CCPSC, La Unión Juvenil Cruceñista, las Federaciones de Juntas Vecinales, entre otras organizaciones. El mismo presidente de la CAINCO, se vio involucrado en este proceso que condujo, como efecto, no obstante, a la toma de distancia de las dirigencias de las organizaciones empresariales de los líderes más radicales que se articularon alrededor del Comité cívico Pro Santa Cruz (Crabtree, J y Chaplin, A, 2013)

El segundo hecho relevante es que (aunque inicialmente al hecho anterior no se le dio importancia y muchos de los implicados acusaron al gobierno de “persecución política”, exiliándose algunos, mientras otros fueron detenidos), la dirigencia empresarial continuó quemando sus cartuchos en la radicalización en contra de las políticas del gobierno. Desde mediados de 2008, intentaron promover la revocatoria del mandato de Evo Morales e intentaron constituir un “frente común” con distintos movimientos políticos para sacar del poder al presidente. En este frente común se articularon los miembros de la CONALDE, y las organizaciones empresariales. Algunas medidas del gobierno, de hecho, desembocaron en intentos de desconocer la institucionalidad y amenazas de tomarse las aduanas.

Específicamente la prohibición de alimentos productos de la canasta básica que el gobierno venía acusando de causantes de la inflación. Con la orientación de los prefectos rebeldes, de hecho, también se intentó tomar el control de las plantas de diésel y bloquear al occidente boliviano en términos de acceso a productos del oriente. (La razón, 04-09-2008)

Estas acciones de los empresarios fueron respondidas de manera también airada y beligerante por parte de las organizaciones y movimientos sociales afines al partido de gobierno. En el mes de septiembre, como de costumbre se estaba promocionando la realización de la Feria de Exposiciones de Santa Cruz, Expocruz. Estos movimientos amenazaron con realizar un cerco a la feria y a la ciudad en su conjunto (La razón, 05-09-2008). Pese al cerco, que efectivamente se dio, la feria se realizó desde el de este mes. Esto contribuyó no obstante a radicalizar las posiciones. El gobierno, como hemos visto, manifestó que este año fue decisivo, pues el nivel de confrontación y beligerancia de los actores había roto los límites de la cordura. Sin embargo, en las contiendas electorales, Evo Morales resultó victorioso y logró no sólo aprobar su constitución, sino vencer en el referéndum revocatorio que los líderes de la oposición convocaron y realizaron. Además, el año terminó con unos niveles de crecimiento económico que deslegitimaron los discursos del empresariado que había llegado a decir que Bolivia estaba al borde de la recesión (El Deber, 17-04-2008)

Ahora bien, los triunfos de Evo Morales en 2009, no significaron, por supuesto la pacificación total del país, ni la imposición unívoca de una estructura estatal. El gobierno tuvo que reconocer también demandas autonómicas de los departamentos del oriente y generar mecanismos de diálogo para concertar políticas vinculadas con las exportaciones de aceite. Sin embargo, también desarrolló estrategias para no depender exclusivamente de los proveedores privados, proyectando y creando la EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción

de Alimentos). Pese a esto, el poder del MAS y el Liderazgo de Evo Morales se fortaleció este año.

Un tercer elemento que habría que añadir y que contribuyó al cambio de la correlación de fuerzas o, en términos de García Linera, a dirimir el “empate catastrófico”, estuvo vinculado con el mantenimiento y, de hecho, fortalecimiento de la capacidad articuladora del MAS y de Evo Morales. Electoralmente en los años siguientes, fortalecerá su legitimidad y su presencia en las otrora “regiones enemigas”. Así, el año 2008, termina dándole a Morales y al MAS, importantes réditos, que continuarán durante los siguientes años. Entre 2009-2014, la economía boliviana vivirá, como hemos antes, importantes niveles de crecimiento de su PIB, y, en el campo político un proceso de marginalización de los opositores más radicales.

A partir de lo anterior, puede decirse que a partir del año 2009, viene el proceso de consolidación del poder de Evo Morales, gracias a la superación progresiva del “empate catastrófico”. Sin embargo, esto no quiere decir que la conflictividad desaparezca. Ningún poder, ningún proyecto hegemónico elimina la conflictividad. Sólo que esta puede llegar a estabilizarse y, al hacerlo, se disminuyen los potenciales contrahegemónicos de los adversarios. Esto es precisamente lo que pasa en Bolivia a partir de 2009. En este año, las fuerzas más radicales de la oposición cruceña progresivamente quedarán marginalizadas. Las élites de la CAINCO y la CEPB, continuarán haciendo críticas a la gestión gubernamental, en aspectos puntuales, pero, como veremos, tendrán las cifras de la economía en contra, y mayores dificultades para deslegitimar políticamente al gobierno, por sus éxitos electorales, y por su capacidad de sumar a cada vez más grupos de poder regional y local.

Como puede verse, en el caso boliviano, las dinámicas de confrontación y conflicto condujeron a la negociación de los más importantes temas de la estructura del Estado y de la definición de las políticas del nuevo gobierno. Esto es muy distinto al caso ecuatoriano, donde el gobierno de Correa pudo, en buena medida imponer, en un ambiente de mayor fragmentación política, sus decisiones y orientaciones frente a la nueva Constitución, como frente a la construcción e implementación de las políticas económicas.

7.3. Elites empresariales en la consolidación de la hegemonía del MAS y Evo Morales ¿hacia la articulación hegemónica?

Pese a lo anterior, las críticas de los empresarios frente a la Constitución, finalmente negociada entre las élites económicas y políticas del oriente y aprobada por una mayoría considerable de los electores, la CEPB, se opuso a la Nueva Carta, por considerar que esta impondría un “modelo estatista”. Así mismo aseguró que contrario a lo que debía hacer la

nueva constitución, que era llevar a Bolivia con un “rumbo cierto hacia el progreso y el bienestar colectivo. El contenido de la constitución del MAS destruye esa esperanza”, esto pues, a ojos de la CEPB, no había “cabida para ambigüedades, la existencia misma de la patria está en riesgo”. La nueva Constitución, para la dirigencia de la CEPB, mostraba “sospechosas similitudes literales con las constituciones de otros países que tienen gobiernos autoritarios”. Para la cúpula del empresariado boliviano, la nueva constitución era una imposición del gobierno que lejos de contribuir a luchar contra el racismo, lo fortalecía y “su disfraz autonomista no hace otra cosa que desviar la atención sobre el criterio centralista, que es propio del totalitarismo”¹⁶². Los calificativos al nuevo texto de la constitución política del estado, que se producen a mediados de enero de 2009, no impidieron que, a fines del mismo mes, los empresarios decidieran apoyar el nuevo texto de la constitución. Así, bajo el título de “Declaración de Oruro”, Gabriel Dabdoub, presidente de la CEPB, manifestó su disposición a dialogar con el gobierno. En esta declaración, el dirigente empresarial manifestó que: “queremos concertar porque somos los generadores de empleo y queremos invertir para lograr el desarrollo económico y social del país para desterrar la pobreza, pero para ello tenemos que fijar las reglas que permitan dar una vigencia plena a la nueva constitución”.

¿Qué Pasó en el camino? ¿Cómo se logró que los empresarios, que habían rechazado la constitución por los visos “totalitarios” que tenía, hayan dado el salto en tan poco tiempo? Dos elementos, como vimos en el apartado anterior, pudieron estar en la base de estos cambios en las actitudes que son manifestaciones también de cambios en la correlación de fuerzas. En primer lugar, está el hecho de que en la primera mitad del año 2009, el caso de la captura de terroristas que estarían planeando el asesinato de Evo Morales y su vicepresidente a mediados del año anterior tendrá una visibilidad mediática muy significativa. En este proceso, una muy importante cantidad de líderes políticos, cívicos y empresarios entrarán en las listas de acusados como autores intelectuales, financiadores o facilitadores del complot contra el gobierno. A mediados de este año, ya se empiezan a hacer evidentes los desgastes del ala más radical y la moderación de los más moderados críticos del gobierno. Sumado a esto, las reivindicaciones de los sectores más radicales de que el caso Rósza (como se denominó al proceso de sindicación y captura de algunos de los implicados en el fallido

¹⁶² Para seguir estas declaraciones puede verse:

<http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20090115/breves-nacionales>;

<http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20090116/patronal-boliviana-rechaza-proyecto-constitucional-que-ira-referendo>,

magnicidio), de que se trataba de “persecución política” no tuvo efectos. Los líderes del Comité Pro Santa Cruz llamaron a marchas en defensa de los implicados, pero la participación fue muy poco significativa, lo que, lejos de fortalecer a estas posturas terminó por debilitarlas aún más. (Cambio, 30-07-2009) Algunos medios de comunicación de diarios importantes como Los Tiempos de Cochabamba, La Razón de La Paz, o el mismo El Deber, de Santa Cruz contribuyeron con este proceso de deslegitimación de los sectores más reaccionarios. En una editorial de Los Tiempos, se llegó a afirmar que lo que estaba sucediendo en Santa Cruz era el enfrentamiento entre dos logias los “Caballeros del Oriente y los “Toborochi”. No obstante, más que entre logias, afirma, el conflicto estaría dado entre “Halcones y palomas... Se califica como ‘halcones’ a quienes prefieren la mano dura, la negación de los problemas y la confrontación. Desconfían de la política y la diplomacia y son proclives a recurrir a las acciones de hecho, a las vías de la violencia. Para ellos, los oponentes más que rivales son enemigos. Las ‘palomas’, por el contrario, se incluyen a la concertación... Están más dispuestos a negociar haciendo las concesiones que eso implica, y priorizan las vías legales y pacíficas para hacer frente a sus rivales”. Así este enfrentamiento no tendría que ver, de hecho, con proyectos de país (uno democrático y otro autoritario), sino con conflictos por el poder regional y local entre grupos de poder edificados sobre “logias secretas”.

Ahora, la división venía desde el año anterior. En medio de las más intensas confrontaciones de 2008, había circulado en Internet, una lista de “serviles al Gobierno del MAS, la que se incluía a empresarios, profesionales, analistas, autoridades y periodistas”. Otros sectores, particularmente provenientes de la academia manifestaron su rechazo ante los calificativos de parte del ala radical. Otras organizaciones sociales donde se articularon los más reaccionarios de las élites cruceñas fueron la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz y al Unión Juvenil Cruceñista. Sin embargo, estos llamados a desconocer al poder presidencial que tenían algo de eco el año anterior, ya no tienen la misma capacidad de movilización (El Deber, 14-09-2009). Ya son otros los aires que se respiran. Los contundentes triunfos electorales y el manejo económico que evitó que la crisis económica golpeará más profundo a la sociedad y al empresariado boliviano, hicieron pensar a estos últimos en los costos de mantener la resistencia. Las grietas al interior del bloque oriental de poder, de hecho, se profundizarán por algunos eventos de 2009. Uno de estos fue la invitación que el presidente de la CAINCO, hiciera al presidente Morales, luego de dos años, para participar en el acto inaugural, de la Feria Exposición de Santa Cruz. Esta invitación despertó el rechazo del ala más reaccionaria de las élites orientales aglutinadas en Santa Cruz. Eduardo Paz, presidente de CAINCO,

mereció el calificativo de “traidor”, por parte de Luis Núñez, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Rodolfo Landívar, de las Juntas Vecinales de SC, se sumó a las críticas a Eduardo Paz por la invitación a Morales. Este calificó la invitación de un acto “deplorable... sabiendo que persigue y humilla a los cruceños”, pero rechazó la idea de una lista negra de “traidores”. Esta división entre cruceños se da en un contexto preelectoral donde, nuevamente, Evo Morales saldrá fortalecido. Esta fragmentación del bloque político empresarial, estará acompañada de rupturas en el campo político. En este último, el partido Podemos, que había sido escenario de la articulación en el senado de la oposición, se rompe y Oscar Ortiz, Político y empresario de Santa Cruz, rompe con el partido y busca su propio proyecto. Además de las dificultades generadas por la división al interior de las élites, la oposición no logrará constituir liderazgos con proyección nacional capaces disputar el poder electoral del MAS. Los sectores empresariales se distanciarán más de las contiendas políticas. Sin embargo, particularmente desde la oposición se acercan a las candidaturas de Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina, por encarnar la “oposición”. Intentando sumar votos del oriente, este último formó binomio con Gabriel Helving y se articuló con el partido creado por Oscar Ortiz, luego de que este rompiera con Podemos (La Razón, 07-09-2009).

El rechazo a la invitación de Evo Morales a la feria fue incluso caricaturizado por sectores de opinión. Algunos columnistas llegaron a calificar la oposición a la invitación de Evo Morales a la feria de “*encendidas y hasta disparatadas*”. Uno de los disparates dichos por los miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz, afirma una editorial de El Deber fue “convocar y organizar grupos que salgan a marchar contra ‘los empresarios traidores’... Una asamblea cívica (continúa la editorial) a realizarse en las próximas horas, someterá a debate el asunto y podría emitir cuando menos un voto de repudio a los ‘traidores’ de Santa Cruz...” Pero los “disparates”; como los calificaron desde El deber fueron más allá. El 13 de septiembre, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, amenazó con renunciar a su cargo si no se retiraba la invitación al presidente. Pese a que la presión del Comité generó discusiones al interior de la CAINCO, los miembros del directorio avalaron la invitación que hiciera Eduardo Paz a Evo Morales. En medios de estas discusiones se evidencia que parte de la ruptura entre las alas moderadas y radicales, se explica por el caso de terrorismo. A partir de este caso, de hecho, se generó división de algunas familias y parte de los implicados, si no fueron condenados, fueron sometidos a juicios muy publicitados. Algunos de estos se refugiaron en Estados Unidos, en Brasil o en Uruguay. La Anapo y el Alcalde de Santa Cruz, por su parte manifestaron su respaldo a la invitación de Evo Morales a la Feria. Recordaron estos que, en medio de los

enfrentamientos del primer año, el entonces presidente de la CAINCO, Gabriel Dabdoub, había invitado al presidente (El Deber, 14-09-2009). Con esto, la división al interior del bloque político-empresarial es cada vez más evidente.

La estrategia del gobierno, por su parte fue avanzando, no sólo al, de alguna manera contribuir con la división de los cruceños, sino en el campo político. Electoralmente sumó organizaciones en Beni, Tarija, y Santa Cruz

El movimiento al Socialismo... selló alianzas con agrupaciones ciudadanas de Beni, Santa Cruz y Tarija para asegurar su votación en la ‘media luna’ en las elecciones del 6 de diciembre. Las agrupaciones Santa Cruz Somos Todos, Cambio Beni, Autonomía Vecinal (Trinidad) y autonomía y Seguridad (Tarija) lograron acuerdos con el partido de Evo Morales y serán protagonistas en la campaña oficialista. Algunos de estos frentes tienen candidatos en las listas del MAS. El oficialismo nunca ganó en estos tres departamentos y en los referendos revocatorios y Constituyente tuvo dificultades para efectuar actividades proselitistas. Así, esta sería la *“primera vez que logra alianzas con organizaciones urbanas que no forman parte de los sindicatos y federaciones que son parte del partido”*.

Además de esto a postura del gobierno fue la de quitarle valor a las declaraciones de los más radicales, y buscar consolidar el “acercamiento” con el ala moderada, afirmando que las declaraciones de los cívicos *“de ningún modo representa el sentimiento de la cruceñidad”*.

Otro elemento que se suma a este proceso de cambio en la correlación de fuerzas es el protagonismo que ganará uno de los líderes empresariales que servirá de puente entre el gobierno y los empresarios más adelante desde la CEPB. Nos referimos al dirigente empresarial Daniel Sánchez quien, en medio de la división del bloque oriental, cuestionó las declaraciones del Presidente del CCPSC. Este dirigente afirmó que:

(...) los cívicos tienen que comprender que la feria es un espacio que no es político, que es un espacio donde se muestra la producción de los bolivianos y si los cívicos no entienden eso están mezclando política con la economía, están haciendo lo mismo que cualquier otro político que no identifica que la economía es una cosa y la política otra”. Pero fue más lejos, “Yo quisiera preguntarle al señor Núñez (Presidente del CCPSC) cuántos empleos ha creado él y cuántos empleos han creado los empresarios privados de su departamento (Cambio, 16-09-2009)

Pero, incluso, desde el partido de Samuel Doria Medina, se rechazaron las declaraciones y se explicó que se trataba de un enfrentamiento entre las logias de los *“Toborocho y los caballeros del oriente”*, que buscaban quedarse con el poder local total de Santa Cruz. Así mismo,

Alejandro Colanzi, de este partido manifestó que se trataba de “maniobras para favorecer a Guido Nayar, quién es una de las personas investigadas en el caso de terrorismo-separatismo que quiso implanta Eduardo Rózsa en Bolivia” (Cambio, 16-09-2009).

Pese a las voces de rechazo a las declaraciones de los líderes del CCPSC, estos recibieron el respaldo de la Asamblea de la Cruceñidad, al tiempo que “pidió al Gobierno una amnistía general para los perseguidos, exiliados y detenidos políticos”. En la declaración, además se defiende a quien fuera presidente de la FEPSC y luego del CCPSC, Branko Marinkovic. Desde la Asamblea, además, e anunció el viaje de Luis Núñez a Ginebra, “para denunciar ante las organizaciones de derechos humanos la violación de las garantías constitucionales (entre ellas la libertad de expresión y la de prensa) en Bolivia por el Gobierno de Morales. (La Prensa, 16-09-2009).

Las declaraciones del CCPSC, fueron usadas por líder políticos del MAS, quienes muy en sintonía con las declaraciones del empresario Daniel Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, días antes para acusar al comité de no haber dado nada nunca a Santa Cruz y defender a los empresarios “que cada año organizan la Feria y son ellos los que mandan en esta importante muestra, que es escenario local, nacional e internacional”. (La Estrella del Oriente 16-09-2009). En este marco, tal vez el único que defendió como “legítimas” las posiciones de los “Cívicos”, fue Gabriel Dabdoub, presidente de la CEPB, quien todavía en el lado más a la derecha, afirmó que se trataba de una “posición que se debe respetar”. Sin embargo, manifestó también que era “momento de llamar a la cordura a todos y unirnos para acercarnos”. Desde el campo político “los senadores Jorge Aguilera (Santa Cruz) Paulo Bravo (Pando) y Roger Pinto (Pando) condenaron las ‘posiciones radicales’ y opinaron que Expocruz debería abrir sus puertas a Morales y a todos los bolivianos”. Ante estos rechazos, los cívicos arreciaron en sus declaraciones. “El segundo vicepresidente del Comité... Nicolás Ribera, afirmó que no cambiarían de opinión y anunció que “el presidente Núñez se pondrá en la puerta para no permitir el acceso del presidente Morales”.

Ahora bien, argumentando motivos de seguridad, el evento de inauguración al que estaba invitado Morales terminó cancelarse (La Estrella del Oriente, 17-09-2009) , manteniendo la invitación al primer mandatario para asistir a toda la vería. Algunos analistas interpretaron las posiciones del comité como un intento de rearticular a la ultraderecha cruceña, pero también abre las posibilidades para el nacimiento de una derecha democrática. (Cambio, 17-09-2009). Ante la cancelación del acto protocolario de apertura, Evo Morales comunicó que no asistiría. Expresó al respecto que ““Para que vamos a perjudicar, para que vamos hacer conflicto”, con

lo que restó importancia a su presencia, frente a la relevancia del evento. Sin embargo, parece ser que la razón más importante fue que el evento se cruzaba con la participación de Morales en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (Opinión, 17-09-2009).

Con todo lo anterior, lo que es evidente es que a fines de 2009, buena parte del empresariado cruceño ha bajado las banderas de la confrontación y se acerca cada vez más a la concertación con el gobierno de Morales, para resolver, inicialmente problemas puntuales, pero en el camino, para buscar incidir en el gobierno, más desde la conciliación que desde la imposición. Esto lo podemos ver cuando constatamos que distintas organizaciones empresariales progresivamente se reunieron con el gobierno:

(...) La dirigencia de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), fue la primera en reunirse con Morales, quien les entregó \$us 5 millones para construir defensivos. Después. La CAINCO, invitó a Primer Mandatario a la Inauguración de la Fedexpocruz 2009. Y, ayer, fue la directiva de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se reunió con el ministro de Obras Públicas, Waler Delgadillo, para solicitar la liberación de las exportaciones de sus productos estocados, créditos y diésel para la siembra de la época (La Razón, 09-10-2009)

Sobre la reunión, el presidente de la CAO informó que venían trabajando con el gobierno en temas puntuales”. El tema que preocupa a los empresarios es que viene una nueva cosecha y tiene productos en stock, que no han podido comercializar en el mercado nacional y tiene posibilidades de exportarlos. Además, se requieren inversiones en protección de cultivos que demandan del gobierno (La Razón, 09-10-2009).

De este modo, las “alianzas” entre el gobierno y los empresarios cruceños se hicieron cada vez más visibles. A finales de noviembre de 2009, se llegó a afirmar que la única “entidad” cruceña “no perforada” por el MAS era el CCPSC. Además de los empresarios, se mencionan acuerdos con los “unionistas”, las barras bravas, “universitarios, ex funcionarios prefecturales” y, finalmente, con los agropecuarios. Algo que venía cocinándose desde septiembre de este año. Pero no se trata, como en septiembre, de acuerdos sobre la recuperación de la producción. En este momento se habla de que, con la mediación varios operadores del MAS

La Federación de Agropecuarios del Norte del Departamento de Santa Cruz se unió al partido oficialista para realizar campaña por la reelección del presidente Evo Morales. Montañaño (diputada del Más), afirmó a La Prensa que”, Muchos de ellos son gente que no ha estado inscrita en ningún partido, tampoco es militante del MAS, pero se suma al proceso de cambio.

A principios de año vimos, por ejemplo, cómo ANAPO (asociación Nacional de Productores de Oleaginosas) se reunió con el presidente... se hicieron mesas de trabajo y se resolvieron muchos proyectos. (La Prensa, 05-11-2009)

Además de estas alianzas, Morales, se reunió con la CAINCO, LA CAO, y con algunos banqueros. Los Cívicos denunciaron que varios empresarios venían teniendo reuniones secretas con García Linera, una de estas en la casa del empresario Carlos Kempff, a la que habría asistido, además, Juan Carlos Sánchez de la empresa Ferrotodo; Carlos Futchner, médico; Pablo Bedoya, del Banco Nacional de Bolivia, Mario Kempff, de la firma Dima, y Joaquín Aguirre, de la Compañía Puerto Aguirre. El mismo vicepresidente habría sostenido reuniones con “directivos de Saguapac y la cooperativa rural de Electrificación (CREE)”. Las denuncias de los cívicos se hacen desde el punto de vista moral, condenando a aquellos que consideran traidores. Lo que es visible, no obstante, es que, efectivamente el gobierno desarrolló un proceso de negociaciones con distintas organizaciones empresariales, así como con empresarios individuales para sumar fuerzas en su proyecto político. Estas negociaciones, parece, algunas fueron secretas, pero contribuyeron a articular al empresariado que, como se verá estará cada vez más cerca de la concertación y de la construcción de apuestas comunes. Pese a que mantendrá, en momentos específicos, una postura crítica, frente a medidas como los incrementos salariales o de impuestos, la frontalidad de estas posiciones será cada vez menor.

Además de lo anterior, el caso judicial de acusación de terrorismo a varios dirigentes políticos y empresariales del oriente, se habría constituido en un mecanismo de presión a estos para bajar sus armas y generar o aceptar escenarios de negociación. Esto contribuyó a la fragmentación del bloque oriental de poder. Además, también habría servido este mismo caso para disminuir el potencial opositor de la CEPB, en la medida en que su dirigencia verá menores posibilidades de presionar frontalmente al gobierno por la reorientación de las políticas económicas y sociales.

La combinación de estrategia política de presión judicial, la deslegitimación mediática de las alas más radicales de la oposición y el incremento de la capacidad de articulación del gobierno se habrían constituido en bases claves de la consolidación del poder del MAS y del gobierno de Evo Morales. Pero otra clave estuvo en la estrategia de negociar y confrontar. Cuando el adversario está más debilitado, el gobierno profundizó los llamados a la concordia y la conciliación. Desde comienzos de 2009, Morales convocó a todos los sectores a dialogar y concertar “como la única forma de alcanzar la inclusión productiva y social de todos,

debiendo ampliar esta convocatoria a trabajadores, grupos sociales y productivos del país”, manifestaron los empresarios en la “Declaración de Oruro”. A pesar de la mayor radicalidad que el líder Cruceño, Gabriel Dabdoub, manifestó a lo largo de este año, los empresarios, habían propuesto al gobierno “una alianza público-privada para enfrentar la crisis y para aportar y apoyar al crecimiento económico y social del país”. En tal sentido, esta declaración recuerda que los empresarios le habían presentado un documento al presidente con lo que consideraban 22 prioridades económicas, en el documento titulado “libertad, inclusión y Trabajo”, (CEPB, 2011: 87).

A finales de este año, el poder electoral del gobierno se consolida y aquello que se había propuesto, de articular la iniciativa privada y la pública para el “bien de la economía”, comienza a materializarse. Con el triunfo reeleccionista de Evo Morales, sumado a la gestión económica de la crisis, al finalizar el año 2009, no habrá muchas opciones para los empresarios más que “trabajar junto al gobierno” y construir agendas comunes en materia económica. Luego de reconocer este triunfo, de hecho, los empresarios “*aceptan la convocatoria del gobierno*”, para dialogar sobre el futuro del país. Eduardo Paz, presidente de la CAINCO, llegó a expresar en este escenario que “cuando los sectores gremiales y productivos trabajan con sus gobiernos en sus diferentes instancias (central, departamental y municipal) se tienen buenos resultados. “Si los sectores productivos privados y públicos trabajamos en conjunto con una agenda de producción, se hacen más exitosos y más eficientes”. La expresión fue menos emotiva para la presidenta de la CEPB, que mantuvo la línea de demandar “seguridad jurídica”. Pese a estas posturas, veremos a continuación que se tendieron puentes de diálogo para el agenciamiento de la inversión y el desarrollo de varios proyectos económicos. (Cambio, 08-12-2009). En este contexto La articulación productiva con los agropecuarios del oriente se fortaleció a partir de el desarrollo de empresas estatales como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Esto, pues la empresa no se constituyó para competir con las empresas privadas sino para apoyarlas. Para su gerente, se trataba del trabajo articulado a partir del fortalecimiento de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de alimentos (La Razón, 13-12-2009). En la búsqueda de trabajo articulado a fines de 2009, los empresarios de distintas organizaciones se reunieron para discutir propuestas para el gobierno. Allí participaron los presidentes de la CEPB, la CAINCO, la CNI entre otra Parte de lo que motiva a los empresarios, además de todo lo anterior, es que prevén un escenario internacional favorable durante los próximos años, luego de la caída sostenida de 2008 y 2009, En un clima de estabilidad política, además, se esperan mayores niveles de

crecimiento. Los banqueros se sumaron a la idea del cambio Las proyecciones para 2010 y los años siguientes los llevaron a afirmar que tenían recursos disponibles para ampliar sus carteras de créditos para inversiones. Finalmente, el futuro presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, se sumó a las declaraciones sobre buenas perspectivas para la economía boliviana. Sin embargo, pronosticó que el crecimiento iba a depender de las condiciones que el gobierno estableciera para la inversión privada. (El Deber, 20-12-2009).

A partir de la pacificación parcial de los empresarios empezaron reconocer la importancia de la inversión pública para dinamizar la economía boliviana. El año 2009, fue el de más profunda caída de las economías latinoamericanas. Sin embargo, la economía boliviana en este año tuvo un crecimiento superior al 3.5% (Cambio, 26-12-2009). Así, la otrora más radical opositora del gobierno tuvo que reconocer que el año 2009, había sido positivo en comparación con otros países de la región y “favorable para el sector empresarial de Bolivia... A pesar de la crisis internacional, e tuvo un crecimiento positivo. En ese contexto, Bolivia a sido el país que tuvo el mayor crecimiento de la región”, afirmó Eduardo Paz, presidente de la CAINCO (La Patria, 27-12-2012).

La ampliación del poder del MAS en el país se hizo sentir sobre todo en los departamentos del oriente. Como vimos, en 2009, se establecieron alianzas con movimientos políticos de esta región. Pero no sólo se trató de escenarios locales de pueblos y ciudades intermedias En la misma Santa Cruz, el poder del MAS creció en las elecciones del año anterior. Allí se estableció una alianza entre uno de los candidatos más opcionados para ganar la alcaldía, Roberto Fernández, y militantes del MAS. La consolidación del poder presidencial lograda por el MAS, el año 2009, se va a ampliar con el fortalecimiento del poder a nivel regional. El MÁS, presentó este año, candidatos a las gobernaciones de los 9 departamentos, así como a las alcaldías y concejos de distintas ciudades. La militancia que este partido configuró, aseguró también una mayor articulación de los candidatos. (El diario, 10-01-2010). En el balance que Evo Morales presentó sobre sus cuatro primeros años de gobierno, destacó el crecimiento de la economía. Algo que llama la atención es que, en los años de más álgida confrontación, se lograron importantes aumentos del PIB. Esto, particularmente en 2008, cuando la economía boliviana creció un 6.15%. Acusó en su discurso a los Oligarcas y “algunos empresarios” de haber generado altos índices de inflación”, pero también agradeció porque a partir de esto, nació la Empresa de Apoyo a La Producción” que, como vimos se convirtió en un motor de articulación de las élites agropecuarias (Cambio, 23-01-2010). A esto se sumó que Tal como la denominó un analista “la división cruceña”, llevó a que las

mismas élites empresariales nucleadas en la CAINCO, pidieran despolitizar la economía¹⁶³. (Correo del Sur, 11-01-2010)

Pero no sólo el gobierno hizo balances de su gestión en los anteriores 4 años. También lo hizo quien durante 2008 y 2009 presidió la CEPB, Gabriel Dabdoub. Allí, expresó que en su gestión había defendido la propiedad privada y la libertad económica, además de vincular a todos los sectores económicos a la organización empresarial y no solo a los grandes empresarios, sino también a los medianos y pequeños. Sobre las relaciones con el gobierno, “arrastre popular” del mandatario, pero también le pidió más humildad, al tiempo que afirmó que “Morales es una persona con fuertes arranques hormonales y eso no lleva a una relación de diálogo. Es lo que debe cambiar para generar un mayor espacio de tolerancia. Sin embargo, en su balance, Dabdoub, ratificó la idea de que el ente empresarial era eminentemente técnico y su única preocupación es la economía del país. Así, cualquier decisión que contraríe su visión es considerada como “ideológica” u “hormonal”. A la pregunta por los aciertos del gobierno, el entrevistado opta por no reconocer nada, sino por señalar las fallas: “hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor, hemos perdido oportunidades cuando la coyuntura internacional nos reflejaba un crecimiento importante”. Sin embargo, reconoce que “Como positivo se puede señalar que el Ejecutivo fue prudente en generar ingresos en las Reservas Internacionales y lo que se debe hacer de acá en adelante es no malgastar estos recursos sino cuidarlos de forma adecuada. Pone en duda, además las cifras del gobierno sobre crecimiento económico, con casi todos los indicadores negativos. (El Deber, 24-01-2010)

En este momento de balances, la prensa consultó a varios presidentes de organizaciones empresariales, quienes manifestaron que el gobierno debía materializar “coordinada, planificada y consensuadamente el modelo económico plural, social y comunitario; dejando atrás la prioridad política”. La mayor parte de los líderes empresariales hicieron énfasis en la necesidad de mantener canales de diálogo y un trabajo articulado y “despolitizado” del empresariado con el gobierno. Sobre el peso de lo público y lo privado, Daniel Sánchez, en este momento presidente de la CNI, afirmó que “pueden existir y coexistir diferentes tipos e empresas... lo importante es que las empresas sean eficientes. Este empresario, agregó que

¹⁶³ Al menos tres factores contribuyeron a la marginalización de las orientaciones más radicales, al menos temporalmente, de la oposición al MAS. En primer lugar, los triunfos electorales; en segundo lugar, el crecimiento económico y la capacidad del gobierno de sortear las crisis a través de unas políticas económicas bastante conservadoras al comienzo, pero con un potencial anticíclico determinante; en tercer lugar, la incapacidad de las mismas élites radicalizadas de no poder medir sus fuerzas y los intentos de algunos sectores de estas élites de buscar medidas aventuradas, como el intento de asesinato del presidente y del vicepresidente. Esto condujo a su aislamiento.

“se debía privilegiar la empresa, sin importar quién o quienes detenten la propiedad... Si el Estado quiere hacer empresa que lo haga. Lo importante es que la empresa sea eficiente y dé a la sociedad bienes y servicios producidos con calidad y precio justo”. (La Razón, 24-01-2010)

La relación con Daniel Sánchez, quien fuera luego presidente de la CEPB, y antes de la CNI, fue, desde esta última más cordial con el gobierno. Esto lo reconoce Sánchez, cuando comenta que “Si bien el diálogo público-privado no ha sido muy fluido, nuestro sector mantuvo cierto diálogo con el Gobierno, pero no ha sido lo amplio que hubiéramos querido. Sin embargo, hemos mantenido uno provechoso en los temas de suministros de gas con la autoridad del sector. Seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para mantener y profundizar”. Para viabilizar los intereses del sector, Sánchez comenta que harán lobby “propositivo” (La Razón, 24-01-2010)

A diferencia de la CEPB, incluso la CAINCO, reconocieron los logros del gobierno y llamaron al diálogo y al trabajo articulado para crecer por encima del 7% para “aliviar la pobreza e industrializar al país”. Para lograr ese objetivo, los empresarios demandaron inversiones por encima del 25% del PIB, en un contexto de recuperación de la economía mundial. Este crecimiento, además, debería, desde CAINCO, fortalecer el sector productivo más allá de lo extractivo, al tiempo que consolidar y ampliar mercados (Cambio, 27-01-2010).

Desde el punto de vista económico, Las cifras que en este momento podía mostrar el gobierno eran muy relevantes. El PIB Per cápita se ha multiplicado, en Bolivia, entre 2006, por 2.91, es decir, casi tres veces en doce años. En 2010, ya se reconocía este importante crecimiento. Solo entre 2006 y 2009, este PIB, se había incrementado en un 44%.. Esto hacía muy difícil la oposición por parte del Bloque oriental de poder. Esto, además en un marco de estabilidad macroeconómica y de generación de superávit fiscales por primera vez en 66 años, a partir de 2006. En 2006, este fue de 4.5; al año siguiente fue de 1.7%, en 2008, de 3.2 y en 2009, en un momento de contracción fuerte de la economía mundial y nacional, logró un pequeño superávit del 0.1%. Pese a las críticas de los primeros años, Arce Catacora logró controlar la inflación, obteniendo la más baja en 45 años, del 0.26. Uno de los rubros más importantes fue el de las reservas internacionales que, pasaron de 1714 millones de dólares a 8.580 millones, es decir, se multiplicaron por 5 en 4 años. En recaudo tributario de origen petrolero se duplicó en este primer gobierno, pasando de 15.881 millones de bolivianos a 30.571 millones de bolivianos. Desde la perspectiva de Luis Arce, lo más importante es que en este primer gobierno se “sentaron las bases para el nuevo modelo económico con la creación y apoyo a

las nuevas empresas estatales, así como la priorización de la inversión pública antes que el gasto corriente. En este marco se creó el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) que canaliza créditos en bolivianos a los medianos, pequeños y micro productores. La reducción de la deuda externa, destaca también la gestión económica. En 2005, la deuda externa era de \$us 4.942 millones y bajó a \$us 2.585 millones en 2009. (La Patria, 25-01-2010). En este marco, los argumentos de la oposición perdieron progresivamente legitimidad y sus líderes capacidad de articulación contrahegemónica. El gobierno enfrentará, en adelante muchas dificultades, incluso importantes disidencias en sus filas. Sin embargo, logró consolidar un poder muy significativo en un país históricamente racista y excluyente. Las elites empresariales no tuvieron muchas más opciones que articularse, muchas instrumentalmente, a las nuevas apuestas políticas y proyectos económicos.

En este nuevo marco de llamados a la articulación y al trabajo conjunto, y de reconocimiento del poder conquistado y reconquistado por Evo Morales y el MAS, las mismas élites empresariales vivirán proceso de reconfiguración de su orientación y de sus dirigencias, que terminaron por marginalizar, como hemos argumentado, a las alas más radicales. En la nueva orientación de las élites empresariales se evidencia un cambio sustancial en la perspectiva frente a la idea del socialismo para Bolivia. Uno de los líderes empresariales que abrirá las puertas para hacer una lectura menos apasionada de la lucha contra el socialismo fue el Empresario Daniel Sánchez. Desde su paso por la CNI, Sánchez se mostró cercano al gobierno y a su gestión. De hecho, incorpora la idea de construir una economía inclusiva *“articulada y fortalecida que permita el desarrollo de la economía nacional”*. Con el ministro Luis Arce Catacora, compartió la idea de que en los primeros años de gobierno de Evo Morales se habían establecido “las bases del futuro del país” que debían “consolidarse con más inversiones y la renovación de la tecnología utilizada por la industria nacional, con la finalidad de incrementar la producción, primero para el abastecimiento del consumo interno y luego para la exportación”. Esta postura está en sintonía con las políticas del MAS, de priorizar el mercado interno y luego exportar. Pero este líder empresarial fue más allá de esta posición. En una entrevista concedida por el, en este momento presidente de la CNI, expresó su complacencia ante los cambios en el gabinete de ministros, al tiempo que manifestó que los anteriores también “Han abierto sus puertas, y creemos que con las actuales autoridades vamos a poder consolidar todo lo que hemos avanzado e involucra al crecimiento del sector privado. Daniel Sánchez hizo en este momento una lectura esperanzadora de la recuperación de la economía mundial y, ante esta recuperación había que producir más; consideró

importante en tal sentido “que todos nos pongamos a trabajar; nosotros hacemos inversión, comercio, infraestructura, banca, y el Gobierno que haga lo que tiene que hacer, que es forjar el país”. Sobre la posición que debía asumir el empresariado, frente a la oposición de este al gobierno, Sánchez manifestó que:

El empresariado tiene que hacer lo que tiene que hacer, y es hacer empresa. Si de políticas hablamos, serían económicas, no de políticas partidarias que vayan a confundirse con una tendencia ideológica. El empresario tiene que hacer industria, comercio, tiene que exportar, producir, y para ello siempre es necesario tener en claro que la gestión de los dirigentes empresariales tiene que ir encaminadas a no mezclar las cosas (...) debemos ser un catalizador de las inversiones, de las buenas prácticas, de mejores condiciones de empleo para nuestra gente y que ayude a salir al país de la pobreza.

Desde esta postura Criticó a la autoridad financiera por las dificultades burocráticas para acceder a créditos, pero valoró positivo que estos tuvieran bajas tasas de interés. Sobre la polarización, expresó que, pese a las dificultades, se han generado mecanismos de comunicación. Reconoció que “Muchos temas se han politizado, pero se ha estado avanzando y esto es un proceso de construcción. Mientras sigamos vamos a tropezar seguramente con algunas dificultades, lo que no hay que perder es la paciencia ni la esperanza”. A renglón seguido, expresó su posición frente a la construcción del socialismo. “Los discursos del propio presidente (...) y del vicepresidente (...) hablan de socialismo, pero también hablan de inversión, un socialismo moderno; esperemos que nos encaminemos a ese socialismo moderno, que es el que nos ayudaría a todos a vivir bien, pacíficamente, y a desarrollarnos como país”. El líder empresarial recomienda ahora fortalecer la gestión económica, sobre la política. Esto, porque en los primeros 4 años, había que hacerlo, pero es hora de hacer otras cosas. Finalmente, recomendó consolidar mercados y, con estados unidos “buscar mecanismos... que nos permitan comerciar de manera más equitativa, justa y democrática”. (Cambio, 26-01-2010)

Con esto, varios elementos hay que resaltar. En primer lugar, la claridad política del empresario que incluso entiende que la confrontación política no podía eludirse, pues “era lo que había que hacer”. También muestra su postura frente a lo que viene, que es la consolidación de la economía boliviana, a través del fortalecimiento de su aparato productivo. En tercer lugar, y tal vez más importante aún que los anteriores elementos es que la idea del “neosocialismo”, del que había hablado antes y en total rechazo Gabriel Dabdoub, tiene otra lectura, no sólo por parte de uno de los líderes empresariales más importantes de Bolivia en el

segundo gobierno de Evo Morales, quien, de hecho, llegará a ocupar la presidencia de la CEPB, por tres periodos completos, sino de la misma CEPB, todavía presidida a comienzos de 2010, por Gabriel Dabdoub. Así, en un documento titulado “Las ideologías en el siglo XX, que la CEPB pautó en el periódico La Razón, el 3 de febrero de 2010, Gabriel Dabdoub, en este momento todavía presidente de organización empresarial cúpula de Bolivia, expone su mirada sobre las diferencias entre la izquierda y la derecha. En este documento muestra cómo en la cuna del capitalismo, en los Estados Unidos, ante la crisis económica el gobierno de Obama había aplicado un paquete de medidas reformistas, incluso “estatistas”, salvando bancos, pero también mejorando los sistemas de salud, desde el Estado. Para el dirigente empresarial, en otros países como España, el presidente Zapatero, perteneciente al partido socialista, desarrollaba políticas más ajustadas a la ortodoxia del libre mercado. Incluso en Uruguay expone el dirigente empresarial, “Mujica... epígono de la izquierda, anunció que seguirá a su antecesor, más ligado al libre mercado que al socialismo”. En este marco, declara: *“En Bolivia, por último, Evo Morales está ante el enorme desafío de mostrar que el socialismo no es sólo una palabra... una mala palabra. Por lo pronto, los empresarios, como Gabriel Dabdoub, la miran ya con ojos menos negativos”* (CEPB, 2011. 91). Así, en el marco de la consolidación del poder del MAS, bajo el liderazgo de Evo Morales, no sólo desde el liderazgo de Daniel Sánchez, sino de sectores otrora radicales de oposición como los líderes de la Cainco, ahora liderando la CEPB, se expresa que ya el socialismo no es una amenaza o que, incluso, puede ser el camino para Bolivia. Así, desde el punto de vista “técnico” y no ideológico, el empresariado empezó a considerar que el socialismo no era tan malo. En entrevista concedida por Dabdoub al Diario la Razón, a finales de Enero de 2010, Dabdoub hace un balance de sus relaciones con el gobierno. En relación con el gobierno socialista, Dabdoub afirmó que

(...) si el estado Socialista, y en esa visión cree y respeta al sector empresarial, como han hecho países vecinos, que les ha permitido generar empleo e inversiones. por eso, decía que el empresario no tiene ideología, esta nueva generación puede mirar a la izquierda, a la derecha y hacia adelante, pero sabe que convive. Si ese es el socialismo que se nos plantea y se reconoce a la propiedad privada, facilita la generación de empleo... hay empleos. Chile es un país socialista que ha estado 20 años en esa línea; hoy está con la derecha. Brasil es otro ejemplo. En ese marco, el rol de todos tiene que ser proactivo. Es fundamental el accionar del empresariado en buscar condiciones para poder generar inversiones.

En el nuevo gobierno, y con los cambios en el gabinete ministerial que estableció Evo Morales, distintos actores resaltaron un clima favorable dentro del empresariado que ahora se

muestra cada vez más dispuesto al trabajo conjunto y articulado con el gobierno y menos a la confrontación. En este nuevo marco de las relaciones de cordialidad y reconocimiento entre empresarios y gobierno, los comerciantes de la Cámara Nacional de Comercio, entregaron propuestas de nuevo Código. Allí, se incorpora la diversidad de actores económicos”.

Estatales, privados, campesinos, comunitario, social cooperativo, personales naturales y jurídicas no comerciales”: Establecen tipos de sociedades: Sociedad anónima mixta, sociedad anónima estatal, sociedades comerciales, empresas unipersonales de responsabilidad ilimitada y limitada”, lo que implica también la incorporación de aquello que ha venido hablando el gobierno desde el inicio y es de la construcción de una economía plural, que reconoce distintos tipos de agentes económicos y distintas formas de organizar y hacer la economía, cuya articulación debía buscarse.

Dicho lo anterior, podemos decir que lo descrito y analizado hasta el momento contribuye a entender estos cambios en los discursos de los empresarios. Permiten entender que el mismo socialismo se vea con ojos “menos negativos”. Permite entender también que incluso los mismos estatutos de la CEPB, cambian a partir de 2010. A partir de este año, Esta institución experimentó una transformación interna interesante y muy relevante, frente al nuevo escenario de confrontación por la hegemonía, Así, en la memoria anual de 2008 a 2010, publicada en 2011 (CEPB), dentro del componente “objetivos de la institución”, se agregaron nuevas finalidades para la organización empresarial, en relación con memorias anteriores. Ahora, además de promover la libre empresa, el libre comercio, etc. Los empresarios buscarían también: "Promover relaciones y mantener diálogo con todos los sectores del país" y "promover las relaciones entre los sectores empresarial y laboral, para buscar el equilibrio social". Estas dos nuevas funciones, orientadas a la articulación de intereses, ahora con la idea del "equilibrio social" se complementaron con el posicionamiento de la CEPB, en la búsqueda de "Coordinar los intereses y propósitos comunes del sector privado en general e intervenir, a solicitud expresa de cualquier afiliado en la solución de sus problemas y en las discrepancias que pudieran suscitarse entre las entidades que la conforman, sin que ello signifique limitación de sus autonomías". Así mismo la CEPB, buscaría "fomentar el perfeccionamiento de las técnicas de dirección, administración y productividad, así como estimular la capacitación y el adiestramiento en todos los niveles de la actividad empresarial". Finalmente, se incluyó el objetivo de "recopilar y difundir entre sus miembros y la opinión pública información relativa a la economía en general y a la actividad privada en particular".

De este modo, la dirigencia empresarial ya no sólo está interesada por la política económica, sino, además, por la política social y la idea del "interés general" se menciona con mayor énfasis. En esta misma memoria, que estuvo para la responsabilidad de Gabriel Dabdoub, se hace un balance muy relevante sobre el significado del gobierno de Evo Morales, en sus primeros cuatro años de gobierno. En el documento, Dabdoub, quien plantea haber llegado a presidir la CEPB, en el "momento más álgido de los cambios que, sin hacer juicios de valor, nos colocaron a todos en situaciones especiales", afirma que

Al final, apreciados empresarios, no estamos hablando sólo de un cambio de Gobierno. El Presidente Evo Morales y su partido el MAS no están en el poder sólo porque obtuvieron un porcentaje determinado de votos. Están allí porque el sistema anterior había fracasado al no tener la capacidad de resolver los problemas de los bolivianos y las bolivianas. Había, por lo tanto, un vacío y los movimientos sociales y sus líderes lo llenaron.

Frente a éste nuevo gobierno, Dabdoub continúa "En ese contexto, desde la Confederación, hicimos lo que teníamos que hacer: convertimos en una referencia, un interlocutor válido que, sin dejar de lado nuestras más profundas convicciones, pueda representar a un sector que, nadie lo puede negar, es el más dinámico y más importante de la economía: el sector empresarial". (CEPB, 2011:25).

El juicio sobre el hecho de que no se trataba sólo de un nuevo gobierno, sino de un nuevo sistema que sustituye al anterior, muestra un cambio profundo también en la posición de la dirigencia empresarial boliviana. En una entrevista realizada en el mes de abril de 2014, el mismo dirigente empresarial, en ese momento presidente de la Federación de empresarios de Santa Cruz, expuso que, durante su mandato, en la CEPB, había contribuido a generar ambientes de diálogo y concertación con el gobierno. Que, de hecho, había sentado las bases para el entendimiento entre los empresarios privados y el gobierno de Evo Morales. Efectivamente, en el documento que el dirigente gremial preparó para lo que sería su último año en la CEPB, publicado precisamente en el informe citado, expone, bajo el dicente título "*no hay pacto entre convencidos*" que los empresarios siempre han sostenido que la democracia se fortalece con equilibrio de poderes:

... cuando se escucha al otro, al que discrepa. No estamos hablando de democracia cuando los pactos se hacen entre convencidos". Y agrega "Por eso, como presidente de los Empresarios privados de Bolivia, nunca dejé de asistir a una convocatoria del gobierno. Nunca cerré el diálogo y, por el contrario, nuestra institución ha sido anfitriona de debates pluralistas sobre temas tan importantes como las pensiones de los trabajadores o de los decretos gubernamentales

sobre temas sensibles a todos y todas las bolivianos. Aquí estuvieron, aquí los recibimos y aquí deben seguir viniendo para conversar, para debatir, para establecer compromisos... Para salir adelante porque Bolivia es más importante que los intereses particulares. (CEPB, 2011)

Bajo este marco, los años siguientes van a mostrar la consolidación de la hegemonía del gobierno de Evo Morales. Un gobierno que, combinando demostraciones de fuerza con un constante diálogo con los adversarios, logró frenar las aspiraciones de las élites empresariales, tanto del oriente boliviano, como las representadas por la CEPB, en los primeros años de las disputas por la hegemonía. Ahora bien, esto también significó que el gobierno moderara sus propios proyectos y aspiraciones, sobre la manera de conducir al estado y la economía. Con base en esta mutua moderación de aspiraciones, fue creciente la articulación entre los empresarios y el gobierno, particularmente a partir de 2010. Pero todavía quedaban problemas por resolver. Las políticas laborales del gobierno, así como la restricción al comercio exterior que este impuso para asegurar abastecimiento de productos claves como el azúcar y el aceite generaron una buena cantidad de conflictos entre las élites empresariales y el gobierno. El gobierno justificó estas restricciones, como un mecanismo para el control de la inflación, que fue uno de los problemas que tuvo que afrontar, en sus primeros años de mandato.

Por otro lado, a partir del año 2010, un nuevo dirigente ocupará la presidencia del ente gremial top boliviano, el industrial cochabambino Daniel Sánchez. Bajo el liderazgo de este industrial cochabambino, que había presidido antes la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, se consolidará la articulación entre los empresarios y el gobierno. Así, cuando se hace el seguimiento de las relaciones entre empresarios y gobierno a través de la prensa, se encuentra cómo a partir de la reelección de Evo Morales, el 6 de diciembre de 2009, en la presidencia de la república, las dinámicas del conflicto cambian sustancialmente. De hecho, a partir de este momento, se puede evidenciar un nuevo ambiente de cordialidad, diálogo y acuerdos entre los empresarios y el gobierno.

¿Por qué esto no se presentó en el caso ecuatoriano? Las dinámicas propias de cada caso llevan a plantear que, sólo el reconocimiento de la institucionalidad y la representatividad de las instituciones sirva de base para la configuración de pactos, aún entre actores que tiene perspectivas contradictorias, como en el caso boliviano. Por el contrario, en Ecuador, la relación, como hemos examinado en extenso, fue más bien de mutuo desconocimiento y descalificación, sin posibilidades de articulación.

En el caso boliviano, lo que se configura a partir del 2009, con la reiteración del respaldo popular al gobierno de Evo Morales y su equipo más cercano, se fortalecerá en los años 2010 y 2011. En estos dos años, se producirá, en tal sentido, no sólo la consolidación del poder del MAS en el parlamento y de Evo Morales en el ejecutivo, sino la profundización de la articulación entre la CEPB y, cada vez más las organizaciones empresariales del oriente, Como la CAINCO y la FEPSC, y el gobierno. Esto nuevamente, es contrario a lo que pasa en el caso ecuatoriano, donde las iniciativas legislativas, que afectaban al capital, fueron vistas como imposiciones del gobierno, más que el resultado del diálogo (o con un diálogo más bien pragmático, como el que sirvió para la construcción del Código de la producción en 2011).

En el caso boliviano, la memoria anual, del año 2011, de la CEPB, destaca, su participación en varias iniciativas legislativas, como positiva, así: "Ley de telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (promulgada el 8 de agosto de 2011), la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado de la gestión 2011 (Promulgada el 9 de septiembre de 2011), y las resoluciones Normativas de Directorio de Servicios de Impuestos Nacionales...". En este documento, se destaca *la* participación del empresariado en la construcción "del Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, elaborado por el Ministerio de Justicia; así como en la definición de los Lineamientos Generales del Nuevo Código Procesal del Trabajo redactado por técnicos del Ministerio de Justicia y el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, presentado por el Ministerio de Gobierno". Se destaca especialmente la participación de la UAL de la CEPB, en la construcción de un proyecto para una Nueva Ley de Inversiones que el gobierno tiene previsto abordar en la gestión de 2012¹⁶⁴.

El año 2011, muestra así la consolidación de las buenas relaciones entre el empresariado y el gobierno de Evo Morales. Así lo confirma el documento Memoria Anual, de 2011, al comentar que "Después de varios años en los que el Gobierno no escuchó el criterio del sector privado, fue importante la participación de los empresarios en el Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio", convocado por el presidente del Estado, Evo

¹⁶⁴ Efectivamente, esta Ley de Inversiones, que puede ser el equivalente al Código de la producción que impulsó el gobierno e Rafael Correa en 2010 y que se hizo efectivo en 2011, pese a que no fue, como se esperaba, promulgada en 2012, si se hizo en 2014. El evento de lanzamiento de esta ley, fue un acto simbólico, por otro lado, que contó con la presencia del CEPB, como de la FEPSC y otras organizaciones empresariales. Pero no sólo los empresarios participaron en el lanzamiento de la ley. Esta, como otras de trascendencia para el sector privado boliviano (una ley de arbitraje, por ejemplo), fueron lanzadas con la participación de indígenas, con los tradicionales y combativos "ponchos rojos". Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=TXVSwLWHMCS>, para el evento de lanzamiento de la Ley de conciliación y arbitraje, en 2015, ver: <https://www.youtube.com/watch?v=WUHBmjVtf8o>,

Morales y que tuvo como objetivo fundamental la concertación de una Agenda Económica, Productiva y Social a ser aplicada en los siguientes años. La Labor de acercamiento a autoridades estatales desarrollada por los ejecutivos de la CEPB, apoyada por la labor técnica de la UAL, cumplió el objetivo de dar a conocer el criterio del empresariado privado respecto de los temas económicos y normativos relevantes para el sector y para la sociedad en su conjunto (CEPB, 2012: 12). La participación en la CEPB, en el Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Proceso de Cambio", no fue la única vez en la que la CEPB, se reunió con el gobierno. Lo hizo también en enero, febrero y agosto de 2011: "Los dirigentes de la CEPB mantuvieron reuniones con el presidente Morales en el Palacio junto a sus más altos colaboradores. El vicepresidente Álvaro García Linera fue invitado en dos oportunidades al Consejo Directivo de la Institución; lo propio ocurrió con varios ministros y ejecutivos de instituciones estatales, así como con los presidentes de las Cámaras legislativas" (CEPB, 2012: 17)

Ante el nuevo escenario de diálogo entre el empresariado boliviano y el gobierno de Evo Morales, la CEPB, construyó un documento titulado

Pacto Nacional por la Producción, la Inversión y el Empleo: para un crecimiento sostenido, con equidad y menor pobreza". En este plantean cinco puntos centrales: "i) desarrollo de la industria nacional; ii) Seguridad alimentaria; iii) expansión de la minería; iv) seguridad energética e hidrocarburos; v) infraestructura in transporte.

También se propuso la conformación de un Consejo Económico y Social como mecanismo permanente de concertación y coordinación entre el gobierno, empresarios, productores y trabajadores" (CEPB, 2012: Pág. 20)

El encuentro de Cochabamba, en el que participaron empresarios y organizaciones sociales se muestra por parte de la CEPB, con algo de desconfianza todavía, frente a la cantidad de iniciativas legislativas y de demandas sociales que en este se presentaron. No obstante, se destaca como positivo el encuentro, en la medida en se amplió la pluralidad de actores y dejó de ser sólo una "*cumbre social*". Frente a la puesta en marcha del Consejo Económico, Productivo, Laboral y Social", este también es un escenario de encuentro para que empresarios se junten con campesinos, empleados, campesinos y pequeños productores, así como el mismo gobierno. Para la CEPB:

Este organismo podría ser la instancia que acometa la tarea que faltó en la Cumbre: consensuar un conjunto de prioridades de política económica y trazar una ruta crítica, incluyendo el tratamiento de algunas leyes económicas, comenzando por la Ley de Inversiones

por la cual apuesta fuertemente el sector privado, en procura de encontrar un ambiente de mayor certeza y seguridad jurídica. Mucho dependerá de la funcionalidad que pueda lograr este nuevo organismo en sus funciones de asesoramiento al Gobierno Nacional, tal como fue definido por el Presidente Morales y, sobre todo, de la voluntad política gubernamental que acompañe y respalde sus actividades". (CEPB, 2012: 22)

De este modo, la apertura al diálogo por parte del gobierno y el empresariado es celebrado por la CEPB como un espacio para:

Acordar una agenda económica y productiva que sustente un proceso de crecimiento sostenido, socialmente inclusivo y equitativo, con el compromiso activo y mancomunado del Estado, los empresarios, los productores y trabajadores; ii) Definir un conjunto de políticas estratégicas para articular los esfuerzos y recursos públicos y privados, dinamizando el proceso de inversión y creación de empleo, así como para impulsar el potencial productivo y las oportunidades económicas del país. iii), identificar medidas inmediatas, prácticas y efectivas para hacer frente a las amenazas y riesgos de la crisis financiera internacional y precautelar un entorno económico de estabilidad y crecimiento para los bolivianos" CEPB, 2012: 23)

Ahora bien, en este proceso de acercamiento y consolidación también de las buenas relaciones entre el gobierno de Evo Morales y los Empresarios liderados por la CEPB, como decíamos antes, también se fueron sumando los empresarios del Oriente, sobre todo desde el año 2011. En el año, 2010, de hecho, los empresarios Cruceños todavía mostraban cuestionamientos al modelo económico establecido en la CPE, que se definió en 2009. El principal problema que se veía en este, aún en contra de los elogios que la economía boliviana había recibido en el orden internacional, era el de la sostenibilidad. Esto, debido a lo que consideraban problemas estructurales, como el contrabando, la burocracia ineficiente, la corrupción, la informalidad, entre otros. Esto requería, para la FEPSA, mejorar el clima de inversión privada y mejorar la inversión pública, así como fortalecer la coordinación entre las instancias estatales (FEPSA, 2010). Para el año 2011, por el contrario, se había avanzado mucho en el reconocimiento de los éxitos económicos del gobierno. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo, 2006, que fue tan criticado en su momento por las élites empresariales, fue visto ahora como un aporte clave para la diversificación de la matriz productiva y de la articulación público-privada (FEPSA, 2011).

Un tema en el que van insistiendo cada vez más los empresarios, tanto de Santa Cruz, como de la CEPB, es el de la articulación público-privada, de ahí que se haya buscado concertar, no sólo las políticas económicas sino leyes para promover esta articulación. Contrario al caso del

Ecuador, la construcción de estos documentos, no se hace por la vía de la consulta, o de la participación consultiva y a partir de la participación de un empresariado, muy fragmentado, o con canales muy enmarañados, sino a través del trabajo en equipo. Esto lo destacan, los empresarios bolivianos, a partir de 2011.

De este modo, a partir de este año, de hecho, las publicaciones de la FEPSC, se concentran en la promoción de esta articulación público- privada. Si los empresarios, a partir de estas articulaciones, lograron insertarse mejor en las utilidades que el crecimiento de la economía boliviana venía teniendo, desde 2005, incluso, el gobierno vio esto como una posibilidad de mantener este mismo crecimiento, a través de la generación de compromisos de inversión de parte de los empresarios privados, como veremos más adelante.

Un elemento clave, para entender este mejoramiento de las relaciones entre el gobierno y los empresarios, fue la apertura al diálogo constante, no meramente retórico, sino a través de la generación de compromisos entre los actores y a través de la generación de anclajes institucionales. En tal sentido, en 2011, como consecuencia de una reunión entre Evo Morales y Daniel Sánchez, el 5 de febrero de este año, se produjo la creación del Consejo Consultivo que trabajará sobre el desarrollo agroindustrial del país, la sustitución de importaciones, entre otros temas. A partir de esto, el gobierno se compromete a trabajar en desarrollo de logística y transportes para facilitar el desarrollo económico. Desde este año, efectivamente, las inversiones estatales en materia de infraestructura de transportes y comunicaciones han venido avanzando considerablemente. Lo mismo ha hecho la inversión privada, pese a que, a partir de 2014, se empezó a producir un estancamiento de esta (CEPB, 2013, Fundación Milenio, 2016).

De este modo, los compromisos de parte de la empresa privada se concretaron a partir de 2012. En este año, Daniel Sánchez, máximo dirigente de la CEPB, se mostró entusiasta ante el crecimiento de las inversiones nacionales y ante la creación del Consejo Económico, Social, Productivo y Laboral, impulsado por el gobierno. Afirmó que estas relaciones que favorecen el consenso y el trabajo conjunto deben fortalecerse, para continuar con el crecimiento de las inversiones de los empresarios nacionales y extranjeros. Del mismo modo, expresó que se debía trabajar en una ley de inversiones que favoreciera el trabajo integrado de los distintos actores (<http://www.boliviav.net/2012/01/empresarios-incrementaran-inversiones.html>).

Tal como sucedió con la CEPB, los empresarios de la CINCO, en 2012, desarrollaron acercamientos con miras a fortalecer la producción nacional. Resultado del Primer Encuentro Pluricultural por la Productividad y de la agenda de este, Álvaro García Linera, se reúne con representantes de la CEPB y CAINCO, para buscar alternativas que permitan el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno. En esta ocasión, el gobierno se compromete a disminuir trámites y fortalecer el crédito de inversión. Puntualmente, lo que se busca de estos encuentros es “mayor inversión, mayores fuentes de empleo y dinamizar la economía”. Sobre las reuniones con CAINCO, el presidente de esta organización manifestó que:

(...) los puntos abordados con García Linera se refieren a proyectos de desarrollo para potenciar los valles cruceños a partir de un convenio que la Cainco presentó el año pasado con la mancomunidad de municipios de esa región.

“Otro tema tiene que ver con el planteamiento de una ley de simplificación de trámites para la constitución de nuevas empresas de manera de formalizar a los micro y pequeños empresarios que hoy por hoy por los altos costos y casi imposibles trámites y el tiempo que toma desanima”, complementó el Presidente de Cainco (Hoy Bolivia, 14-02-2012, en:

<http://www.fmbolivia.net/noticia41853-gobierno-empresarios-y-cainco-analizan-alternativas-para-fortalecer-actividad-productiva.html>)

Por supuesto, los cambios en las relaciones entre el gobierno y los empresarios a partir de 2009-2010, no significarán, como hemos dicho, la eliminación de algunos sectores que mantendrán a lo largo del segundo y el tercer mandato de Evo Morales, una posición radical de confrontación y de negación del poder del MAS y del presidente. Lejos de esto, mantendrán la crítica constante y también a búsqueda de alternativas políticas y de movilización. Solo que esto lo harán desde el lugar de la resistencia, sin que logren constituir un proyecto realmente contrahegemónico que desafíe por ahora el proyecto del MAS. Este logró reconfigurar la institucionalidad Estatal y el lugar de la política en la gestión económica. Como hemos dicho, en una combinación de concertación con confrontación y con una gestión económica eficiente, en términos de mantener niveles de crecimiento sostenidos, aunque no radicalmente transformadora de las estructuras de la dependencia de la economía boliviana, el MAS, logró constituir un gobierno legítimo y con fuerte capacidad de articulación.

La posición del empresariado, tanto de Santa Cruz (CAO, CAINCO, ANAPO, principalmente), como el articulado por la CEPB) ante las dificultades del campo político de constituir un bloque contrahegemónico capa de disputar el poder al gobierno, se mantendrá

entre la crítica y la concertación. Usando su poder estructural, buscarán limitar la profundidad de las reformas económicas del gobierno y presionarán la construcción concertada de leyes de inversiones, de arbitraje, de bancos, entre otras. Desde la crítica, cuestionarán permanentemente la “inseguridad jurídica”, como uno de los factores explicativos de las relativamente bajas tasas de inversión extranjera directa y de inversión nacional. Desde la concertación, sin embargo, participarán en la redacción de dichas leyes, a lo largo de 2012-2016, principalmente. Esta redacción, no estuvo exenta de conflictos y de interpelaciones por parte de los agentes privados, Por el contrario, buscarán siempre abrir espacios para la liberalización del mercado y la limitación de las capacidades reguladoras del Estado. Defenderán en todo momento esta liberación del mercado (particularmente de exportaciones, que el gobierno había restringido desde 2008), siempre y cuando no pusiera en riesgo sus ingresos. En tal sentido, se opusieron al establecimiento de relaciones comerciales, pues eran mercados con los que no podían competir. Así, a pesar de los pedidos de “leyes más flexibles” y más incentivos al libre comercio, ante acuerdos comerciales con potenciales competidores, piden protección y denuncian riesgos para el sector productivo nacional. Particularmente desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, advirtió sobre los impactos negativos que tendría el ingreso de Bolivia al Mercosur, pues los países que constituyen este mercado eran “netos productores de cárnicos”, lo que afectaría la producción nacional. Se verían afectados también los productores de trigo, soya, algodón, azúcar, pues estos tendrían alta tecnología y más productividad. En esta posición fue más conciso el presidente de la CAO, El presidente de la CAO, fue más preciso, al afirmar que: “el sector productivo agroalimentario no está en condiciones de competir con los países vecinos porque son estados que cuentan con biotecnología, grandes inversiones y tecnología... Nosotros aún estamos debatiendo la incorporación del uso de la biotecnología, cuando en los países vecinos ya vienen implementando desde hace años”. (La Razón, 27-07-2015). Así, la “libertad de mercado”, que los empresarios promulgaban se restringía, demandando acuerdos con “mercados complementarios” y con potenciales competidores”.

A partir de esta postura instrumental del discurso del “libre mercado”, el gobierno también buscará comprometer a los empresarios para la inversión de recursos en la economía, lo que no pocas veces fue respondido, con la demanda de los empresarios de, en contraprestación, generar mayores garantías para estas inversiones. Pese a las diferencias en enfoque, un elemento central de las relaciones que se establecen entre el empresariado y el gobierno, le permitieron a este último, aislar, al menos temporalmente a las fracciones más reaccionarias

de las élites. Estas, denunciarán persecución política y acusarán, varias veces de traidores a los empresarios que se acercaron al gobierno para la construcción conjunta de políticas y planes de desarrollo regional y nacional. El caso de terrorismo, del que antes hablamos le sirvió al gobierno, por varios años, para disminuir el potencial destabilizador de estas fracciones más reaccionarias. Sin embargo, como hemos mencionado ya, a partir de los intentos de Evo Morales por mantenerse en el poder, más allá de los límites impuestos por la CPE, fortalecieron la oposición de estas fracciones y de otros sectores que empezaron a ver bloqueadas sus posibilidades de participar del gobierno. Algunos sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), y otros movimientos y organizaciones sociales se harán, a partir de 2011, también fuertes opositores del gobierno. Algunos de estos en situaciones coyunturales, pero otros, se configurarán como oposición disidente. Desde 2011, algunos proyectos de desarrollo de infraestructura hacia el oriente, resultado de hecho, de compromisos con empresarios de esta región, una fuerte tensión se generará. Movimientos indígenas, sobre todo se opondrán a la construcción de una carretera que, a ojos del gobierno busca integrar mejor la economía del país, pero que para los indígenas afecta territorios sagrados (Torres, 2012) Estas tensiones restaron legitimidad al gobierno, pero no lograron disminuir su capital político y su capacidad de gestión económica y política.

Además de lo anterior, a partir de 2014, los intentos de Evo Morales de mantenerse en el poder, más allá de 2019, conducirán a darle nuevamente alas y capacidad de movilización al ala más radical y reaccionaria del oriente boliviano. En 2016, Evo Morales experimenta su primera gran derrota electoral, pues al someter a referéndum un cambio constitucional que muchos sectores rechazaban y que buscaba darle a Morales la posibilidad de reelegirse nuevamente, la ciudadanía dijo no, el 21 de febrero de éste año. Esto abre nuevos espacios de confrontación que afectarán duramente la estabilidad política del país, pues muchos sectores afectados por la hegemonía del MAS, encontrarán en esto, el combustible suficiente para movilizar a la ciudadanía en contra de un gobierno al que vuelven a llamar “dictatorial” y autoritario. (Stefanoni, 2016). Con todo esto, el buen clima construido para las inversiones, los acuerdos con las principales organizaciones empresariales también se vieron amenazado y allí tendrán cabida, nuevamente aquellos que, desde 2006, han querido sacar a Evo Morales del Poder. Pese a todo esto, todavía le queda un margen muy importante al gobierno, para mantener la hegemonía, sostenido, sobre todo, sobre su capacidad de producir un poder estructural e instrumental para el Estado, no visto en la historia de Bolivia.

Con la derrota de Evo Morales en 2016, se abrirán nuevos frentes de conflicto. La misma hegemonía del más se verá amenazada los años siguientes. El bloque más radical sumará voces de rechazo a un gobierno que, nuevamente empieza a ser acusado de autoritario. Algunos bloques empresariales del oriente, vinculados con la producción agropecuaria, tendrán más argumentos para exigir cambios en las políticas comerciales del gobierno.

Conclusiones. Las élites en las luchas por la hegemonía en Ecuador y Bolivia

¿Cómo evaluar y comprender lo que ha sido el desarrollo de las relaciones entre las élites empresariales y los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales? Como hemos planteado en este trabajo, las relaciones entre los empresarios y los gobiernos dependen tanto de factores estructurales, como coyunturales, así como de la capacidad y características de los actores en las disputas por la hegemonía. Dentro de los primeros factores, habría que considerar que los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, están condicionados por las estructuras de los sistemas políticos que sirvieron de escenario para su constitución como alternativa y este condicionamiento, ha definido en buena medida lo que ha sido el devenir de estos.

En el caso boliviano, varios elementos hay que resaltar de este proceso. En primer lugar, la importancia estructural-institucional, así como simbólica que tiene para la sociedad boliviana la figura del Estado como espacio desde el cual se pueden gestionar y tramitar las demandas, intereses y proyectos de los actores sociales y políticos. Esta importancia, como argumentamos, no es “natural”, pese a que, en las sociedades modernas en general, la figura del Estado se ha convertido, como lo planteó Bourdieu (2005), en la depositaria tanto del poder de coerción (Weber), como en la depositaria del poder simbólico; de un poder simbólico al que se recurre en última instancia para resolver los conflictos y contradicciones sociales.

En el caso boliviano, el poder simbólico del Estado, como espacio a partir del cual los sectores populares pueden agenciar su propia historicidad, es el resultado de la Revolución nacionalista de los años 50. A partir de este momento, se cuestiona una estructura de poder precedente y se establece una nueva a partir de nuevos actores políticos. Este acontecimiento va a marcar los proyectos políticos de los actores que se constituyen a partir de la crisis del neoliberalismo, a finales de los años 90, pues la figura del Estado se convierte en parte de la disputa por la hegemonía de aquellos que, desde los años 80, habían establecido que el único proyecto viable para la sociedad y la economía boliviana era el libre mercado. Este movimiento contra hegemónico, que comienza a configurarse en los años 90, logra ir sumando voluntades colectivas y constituirse en alternativa de poder, cuando, precisamente las orientaciones neoliberales de la sociedad y la economía se están radicalizando, en los “segundos” gobiernos de Hugo Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada.

A través de las luchas y movimientos sociales, se construye un proyecto político que le apuesta a la ocupación del Estado, precisamente, para revertir la hegemonía neoliberal del

Estado y la sociedad. Una reversión que ya estaba, sin embargo, desarrollándose en los procesos organizativos de la sociedad boliviana subalterna.

Hay entonces, un proceso de construcción hegemónica que logra ocupar el Estado y, a partir del control de este, hegemonizar de hecho a uno de los actores claves de la hegemonía neoliberal: las élites empresariales bolivianas, en cabeza de sus más importantes organizaciones: La CEPB, la CAINCO y la FEPSC, principal, pero no exclusivamente. A pesar de las resistencias iniciales de estas élites, las mismas terminan articulándose, a través de pactos y alianzas político-económicas. Estas organizaciones viven, en su interior, unos procesos de transformación significativos, tanto en sus orientaciones ideológicas, como en sus proyecciones y estructuras institucionales, tal como se mostró en el capítulo 5 y luego en capítulo 7. Esto daría cuenta de que, efectivamente hay procesos de configuración de una nueva hegemonía y el proyecto de la “economía plural”, de la constitución de 2009, logra afectar las lecturas y acciones de estas élites empresariales.

Ahora bien, las transformaciones en la orientación de las organizaciones empresariales bolivianas, también se explican por la manera en que el empresariado nacional es afectado por las mismas reformas neoliberales que estas contribuyen a gestar e implementar. A comienzos del presente siglo, son frecuentes las críticas de las élites empresariales bolivianas al modelo implementado y, a la manera en que este fue implementado, privilegiando al capital transnacional, tal como se expuso en los capítulos 3 y 5. Esto habría favorecido una lectura distinta de los cambios propuestos e implementados por Evo Morales.

Un tercer elemento estructural, que ayuda a entender el desarrollo de las luchas por la hegemonía en la sociedad boliviana, es el hecho de que, en estas, la configuración de pactos, de proyectos nacionales populares, se ha establecido también como una alternativa desde la misma revolución nacionalista del 52. El mismo neoliberalismo, se estableció en un pacto de élites, pero que buscó, de cierta manera articular a los sectores populares. No obstante, las mismas restricciones del capitalismo neoliberal, en tanto elitario y excluyente habrían hecho que este pacto, no lograra el “consenso activo de los dominados” y, más bien, estos vieran las restricciones de este modelo de dominación neoliberal.

La coyuntura económica favorable a las exportaciones bolivianas, habrían servido también para que las élites flexibilizaran sus posiciones y demandas frente al gobierno de Evo Morales.

De este modo, el Estado se ha venido constituyendo nuevamente como el referente de la integración y articulación social, contra el mercado, al que se le acusa, precisamente de generar fragmentación. En tal sentido, se ha planteado como necesaria la subordinación (relativa) del mercado al Estado como representante de los intereses generales. Dentro de este marco, la crisis de legitimidad de los sistemas políticos instaurados a partir del retorno a la democracia, no sólo se han evidenciado a partir de la crítica a los mismos, sino a través de un sin número de movilizaciones y protestas sociales que hicieron tambalear y caer a presidentes elegidos popularmente, tanto en Bolivia como en Ecuador.

Ahora bien, el Estado como explicación de las relaciones entre élites empresariales y gobiernos, resulta insuficiente, si no se tienen en cuenta que este (sus funciones, orientaciones y regulaciones), es el resultado de la correlación de fuerzas entre los actores que disputan por la hegemonía. En el caso boliviano, la reconfiguración del Estado se da a partir de, primero un conflicto intenso, pero luego a partir de pactos hegemónicos entre las élites empresariales y el gobierno de los movimientos sociales, a través de los procesos descritos en el capítulo 7. Estos pactos y su sostenibilidad no pueden comprenderse si no se tiene en cuenta que se trata de sociedades complejas, en las que no hay una orientación de la política y lo político, sino múltiples. Así, los acuerdos entre el gobierno de Morales y las élites empresariales también han generado rupturas al interior de los movimientos y organizaciones sociales que acompañaron al MAS, desde el principio. De hecho, las políticas económicas y de desarrollo de la infraestructura para potenciar el crecimiento económico, condujeron, en el mismo año 2011, a fuertes tensiones entre ciertos sectores sociales y comunidades indígenas por la construcción de una carretera a través de áreas protegidas, para comunicar al oriente con el centro del país. Lo mismo ha sucedido con el énfasis que ha puesto el gobierno en la explotación de recursos mineros, como motor del desarrollo económico, entre otros temas.

De acuerdo con lo anterior, podría decirse, se produjo en estas sociedades un progresivo desplazamiento del poder de las élites económicas y de su capacidad de influencia en la toma de decisiones de los actores estatales, pues, en buena medida la estructura del poder que soportaba esta influencia o participación se vino abajo. Así mismo, en el marco de la crisis del neoliberalismo tanto en Ecuador, como en Bolivia, las élites fueron cuestionadas por su abierta participación como usufructuarias de las políticas económicas neoliberales, de la mayor concentración de la riqueza y de la ampliación de la desigualdad social y económica en estas sociedades. Así, después de un periodo de aproximadamente 5 o 6 años, entre finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio, se gestaron proyectos políticos que le dieron mayor

importancia al Estado y que, tal como lo dirían algunos teóricos de los años 80, han puesto a esta institución, nuevamente en el primer plano (Evans, Reuchemeyer, Scokpol, (2002 [1985])).

En éste contexto, se ha cuestionado la legitimidad de la dirección política por parte no sólo de los partidos políticos, sino de las estructuras económicas y sociales que soportaban su estructura de dominación (Blanco, 2013). Se ha impulsado la idea, en este nuevo contexto y pese al mantenimiento de la hegemonía global del neoliberalismo (Sassen, 2010), de la necesidad de reorientar la economía, la sociedad y la cultura, en la búsqueda de articular al mercado, desde una perspectiva solidaria, participativa e incluso revolucionaria. En este caso, el proceso boliviano, ha sido mucho más exitoso que el caso ecuatoriano, donde debido, nuevamente a factores tanto estructurales, coyunturales y personales, el agenciamiento de la reconfiguración del Estado terminó (en buena medida esto estaba ya en las características del “movimiento” que impulsa la Revolución Ciudadana) concentrándose en la figura de Rafael Correa.

Como se mencionó antes, luego de un periodo de intensa inestabilidad política en estas dos sociedades, que pusieron de manifiesto la profundidad de la crisis de legitimidad de las estructuras políticas instauradas durante el dominio (así sea relativo, para el caso ecuatoriano) neoliberal, llegaron al poder dos líderes políticos que, bajo la idea de una nueva revolución han reposicionado al Estado y han buscado nuevas relaciones con la sociedad en general y con las élites económicas en particular.

Estos nuevos gobiernos, han sido duramente cuestionados desde algunos sectores políticos, académicos y económicos, por la supuesta hiper concentración del poder que han establecido (Pachano, 2010, Basabe, 2009, 2010, Conaghan, 2008, Mayorga, 2009, Castañeda, 2007, Tovar, 2008). Se les ha calificado así de populistas, de reproducir el personalismo y el clientelismo; de debilitar las instituciones democráticas, etc.

Lo cierto es que, desde la llegada al poder de Evo Morales Ayma a comienzos de 2006 y de Rafael Correa a comienzos de 2007, se han establecido unas nuevas dinámicas y relaciones de poder. En estas dinámicas, puede evidenciarse no obstante algunos momentos, específicamente en la relación de estos gobiernos y de sus procesos de reforma del estado, con las élites económicas. En un primer momento, se viven momentos de dura confrontación pública, entre algunos líderes empresariales frente a los gobiernos de Morales y Correa. Acusaciones mutuas se hacen circular en los medios de comunicación, se cuestiona la

legalidad y legitimidad de algunas medidas impulsadas por los nuevos gobiernos, de no consultar con los “sectores representativos” de imponer medidas que contravenían y ponían en riesgo el futuro y estabilidad económica de los dos países, etc.

A pesar de estos cuestionamientos, como se ha mostrado en distintos escenarios, por parte de organismos internacionales, los dos gobiernos han mostrado índices de crecimiento económico sostenido, claro, gracias también a un contexto internacional, en el que las exportaciones tradicionales de los dos países han mostrado un crecimiento importante, tanto en las cantidades demandadas, como en precios internacionales de los mismos. Pese a los efectos positivos de las medidas económicas en términos de crecimiento económico, así como en términos de reducción de la pobreza, se ha llegado a decir, que los verdaderos beneficiarios de las políticas económicas y sociales han sido las élites tradicionales con las que, no obstante, han mantenido un enfrentamiento constante, aunque irregular también, como se verá más adelante (Machado, 2012, Acosta, 2016).

De hecho, para estas mismas críticas, lo que se pone en evidencia es el importantísimo crecimiento de las grandes fortunas en estos dos países, el incremento de las utilidades del sector comercial, financiero y exportador-importador, fundamentalmente en manos privadas todavía. Si bien se reconoce el incremento considerable del presupuesto de los dos estados, se cuestiona los impactos de estos crecimientos en un cambio de matriz productiva de los dos gobiernos proponen (Blanco, 2013, BID, 2018,). De este modo, pese a una disputa permanente, se cuestiona el neodesarrollismo de estos nuevos gobiernos y el fortalecimiento que esta nueva orientación económica ha conllevado para el sector privado y para las grandes fortunas. De hecho, esto parece ser aceptado por las mismas élites económicas, particularmente por parte grandes grupos económicos. Si bien estos cuestionan la manera en que se toman las decisiones, la falta de consulta y búsqueda de consenso, terminan por celebrar el excelente marco para los negocios que, al menos en el corto plazo estos gobiernos han generado o al menos no han obstaculizado en medio de un contexto internacional favorable para las exportaciones de estos dos países. Así, pese a un clima de confrontación, se han desarrollado formas de intervención e influencia de los empresarios que de alguna manera reproducen los esquemas de relaciones del periodo anterior. Esto, sobre todo en Ecuador.

En este sentido, es importante mencionar que, como algunos han notado ya, al menos en el caso boliviano (Wolf, 2016), se ha pasado de ese clima confrontacional a la búsqueda de consensos, para la orientación de las políticas económicas, con la participación de sectores sociales diversos (Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas, 2010). En el caso

Boliviano, por ejemplo, los términos de referencia entre uno de los líderes empresariales más emblemáticos de la última década, y al principio también más combativos frente al gobierno de Evo Morales, como es Gabriel Dabdoub, quien fuera presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz y actual presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, han cambiado notoriamente. Se ha pasado de la confrontación a la conciliación y concertación de políticas económicas, pese a que por momentos se esgrimió incluso la separación de los departamentos de la Media Luna. Algo que ha sido celebrado como parte del desarrollo de una nueva hegemonía por el vicepresidente García Linera (Blanco, 2014; García, 2011), pero que otros han cuestionado como subordinación de los intereses y proyectos de los movimientos indígenas y sociales bolivianos. En Bolivia, un elemento nos parece importante como fundamento de este cambio de orientación de las élites y este tránsito de la confrontación a la concertación. En este país, la institucionalidad empresarial fue reconocida desde el principio por parte del Gobierno de Evo Morales. Esto facilitó el encuentro directo permanente entre la dirigencia empresarial y el gobierno. Así mismo, resultado de la concertación y del diálogo, han venido creando nuevos escenarios institucionales para ampliar la deliberación y la construcción de consensos, sobre temas específicos; escenarios institucionales, regularmente abiertos a diversos actores sociales y no concentrados en la relación empresarios-estado.

En el caso Ecuatoriano, por el contrario, el desconocimiento mutuo y la configuración de escenarios para el trámite de demandas sectoriales, más que para la construcción de políticas económicas y comerciales globales, entre empresarios, gobierno y otros sectores sociales, ha generado, por una parte, una instrumentalización por parte de los grandes grupos económicos de las dádivas y ventajas del gobierno y, por otro, lado, el mantenimiento de la confrontación o desconfianza entre las más grandes cámaras de Industria y Comercio. Como se ha mencionado hasta el momento, el carácter tal vez más personalista del gobierno de Rafael Correa, que tal como lo mencionan algunos de sus críticos, reproduce el populismo personalista tradicional de la política ecuatoriana, lleva también a la reproducción de esquemas de relaciones entre élites económicas y Estado, fragmentadas y difusas. Unos ganan y otros pierden, en términos políticos, aunque en términos económicos la mayor parte de las élites económicas se vean beneficiadas.

En este marco, ¿El comportamiento de las élites empresariales depende de la actitud de los gobiernos en un momento determinado, como plantean algunas perspectivas teóricas? Lo que

se ha intentado mostrar aquí es que este comportamiento depende de la manera en que estas élites se configuren institucionalmente en cada país y esto depende, así mismo de las orientaciones hegemónicas, también en cada sociedad. Esto implica comprender que, más que el estudio de los actores aisladamente es necesario comprender el marco de acción en los cuales actúan y los condicionamientos estructurales y coyunturales de estos marcos de acción, así como de los conflictos en cada escenario por disputar la hegemonía. Tanto los actores estatales como los actores empresariales, no se configuran autónomamente, sino a partir de las relaciones de poder y dominación que establecen entre sí, los agentes concretos que forman a cada actor colectivo.

Así, si bien un actor social particular puede dotar a un espacio institucional como el Estado (o las asociaciones empresariales mismas), esto no depende de la mera voluntad de los actores, sino de la correlación de fuerzas y de la orientación que a esta correlación de fuerzas sean capaces de darle los actores sociales particulares. Esto es, precisamente en lo que consiste a nuestro juicio, la disputa por la hegemonía. Entre más capacidad de articulación desarrollen los actores sociales, tanto desde el punto de vista discursivo, como desde el punto de vista de la movilización de recursos (económicos, políticos, culturales) mayor será la posibilidad de que configure (o reproduzca) una formación social hegemónica. El caso de Bolivia, nuevamente, es un buen ejemplo de la manera en que, pese a las confrontaciones iniciales con las élites económicas y sus representantes organizados, las organizaciones gremiales de empresarios y pese también a las fracturas en el interior del MAS y sus aliados, este partido (¿movimiento?) ha logrado estabilizar unas relaciones y unas instituciones. Por el contrario, el carácter inorgánico de la Revolución Ciudadana, desde el principio y la falta de interés por parte del gobierno de configurar un proyecto hegemónico, condujo a su debilitamiento progresivo y a tener más problemas de sostenibilidad, incluso económica.

Así, asumimos que esta reconfiguración del Estado, es el resultado de varios elementos: a) estructuras institucionales (tanto en lo económico y político) que condicionan las relaciones entre Estados y élites empresariales; b) formas de ejercicio del poder por parte de los nuevos gobiernos (que implican la habilidad de interpretar el contexto de acción por parte de los distintos actores en conflicto, así como su capacidad de diálogo y búsqueda de articulación estratégica de múltiples intereses conflictivos). Esto implica fijarnos en los objetivos y estrategias de los actores y su habilidad para llevarlos a cabo, contando con la oposición o respaldo de distintos actores sociales. Nuestra lectura sobre la reconfiguración del Estado se edifica sobre el supuesto de que, como se explicará más adelante, las transformaciones

impulsadas por el neoliberalismo no desaparecieron al Estado, no lo ubicaron en el lugar de un “gran ausente”, sino que en estas, el Estado jugó un papel muy importante en las formas particulares como se aplicaron, selectiva y corporativamente las mismas reformas neoliberales (Evans, 2010, Sassen, 2010). Todas las reformas sociales impulsadas por los neoliberales, se hicieron, precisamente, desde el Estado y no fuera del mismo. Tuvieron que ocuparlo, para transformarlo y redelimitar sus funciones. Los nuevos proyectos hegemónicos o de transformación social y política, tendrán que ocupar también este escenario para redefinir su estructura y sus funciones. Con esto, intentamos definir los “límites de la revolución en el socialismo del siglo XXI”. No asumimos que los limitantes de una revolución social de izquierda, sean el resultado exclusivo de los modos en que las élites empresariales enfrentan a los gobiernos, sino que dada la orientación desarrollista o “neodesarrollista” de estos gobiernos, orientación entendida como la búsqueda de crecimiento económico, producción y consumo (Castoriadis, 1998, Escobar 1999) no obstante el énfasis en la búsqueda de igualdad social, terminan por favorecer la reproducción de formas desiguales de acumulación de capital; por reproducir la estructura sobre la cual se edifica el capitalismo: la desigualdad entre actores sociales y políticos.

Así, al buscar incrementar la producción de excedentes para la reconversión económica, por la vía de un mayor protagonismo estatal como actor político y económico terminan por conducir a procesos contradictorios. En el peor de los casos, la reproducción de una oligarquía empresarial rentista que demanda cada vez más beneficios sin contraprestación (como en el caso ecuatoriano). Allí, los grandes grupos económicos benefician de las políticas económicas del gobierno, sin incremento significativo de la inversión privada para el desarrollo industrial y económico sostenible en el largo plazo. Con esto, un proyecto colectivo nacional popular termina por ser inviable, en términos de la estabilidad el poder “estructural” del Estado. En el mejor de los casos, las reformas políticas y económicas, conducen a la reducción de los niveles de desigualdad, pero se dificulta su sostenibilidad en el largo plazo, debido a la falta de dinamismo económico (también debido a restricciones externas) y al uso consumista de los recursos que se producen en los periodos de auge económico; un uso consumista promovido por las élites económicas y sus asociaciones empresariales, pero también por los mismos discursos desarrollistas de los gobiernos de izquierda.

De este modo, es necesario tener en cuenta que históricamente tratamos con dos sociedades dependientes, con economías periféricas y deficitarias, con débiles desarrollos industriales (sobre todo en Bolivia) y con muchas carencias en términos sociales y frágil articulación

social y política (mayor en Ecuador, por supuesto). Esto hace que en el logro de tareas urgentes como la reducción de la pobreza y la desigualdad, que puede realizarse en el mediano plazo, como ha sucedido en las dos sociedades, las tareas de largo plazo que se proponen estos gobiernos que, al menos discursivamente buscarían la superación del neoliberalismo, encuentran límites estructurales. Dentro de éstos límites están: a) la dinámica de la relación público-privada que el capitalismo impuso y sigue imponiendo en el contexto internacional, caracterizada por la acumulación y concentración de capital en manos privadas; b) la intensificación de tensiones entre actores sociales y políticos de difícil resolución, derivados de procesos vinculados con las contradictorias formas apropiación e interpretación de las relaciones entre naturaleza y sociedad, en sociedades heterogéneas cultural y económicamente (Escobar, 1999) y; c) la configuración de modelos de organización social que suponen estas contradicciones, así como las tensiones entre capital y trabajo, como parte de la “naturaleza humana”. De este modo el impulso de un modelo de desarrollo “alternativo” o posneoliberal agenciados desde economías periféricas, deficitarias y dependientes, debe contar con estas estructuras y, de hecho, los actores sociales reconocen su importancia, lo que también condiciona las estrategias y la construcción de objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Referencias

- Acanda, Jorge L. 2002. Sociedad civil y hegemonía, Centro de investigación y desarrollo de la cultura cubana 'Juan Marinello', La Habana.
- Acosta, Alberto y Cajas G, J. 2016., "Ocaso y muerte de una revolución que al parecer nunca nació. Reflexiones a la sombra de una década desperdiciada", EN: *Ecuador Debate*, No. 98, Agosto. Quito-Ecuador, pp. 7-28
- Acosta, Alberto. 1996. *Ecuador. El bucaratismo en el poder*. Nueva Sociedad, 146, 6-16.
- Acosta, Alberto. Y Falconí, Fander, eds. 2005. *Asedios a lo imposible. Propuestas económicas en construcción*, Flacso Ecuador-ILDIS-Friedrich Ebert Stiftung, Quito.
- Adams, Julia. 1999. "Culture in Rational-Choice theories of State-formation" En: George Steinmetz, State/Culture. State-Formation after the Cultural Turn, Cornell University, Ithaca, pp. 98-122.
- Alba V, Carlos. Octubre, 2010. "Empresarios, política y sociedad en América Latina: El caso de México". En: *Política & sociedad*, Volumen, No. 17, pp. 13-68.
- Alba V. Calos. Enero-junio, 1996. "Los empresarios y el Estado durante el salinismo. En: *Foro internacional*, Vol. 36, No. ½ (143/144)), pp. 31-79
- Alenda, Stéphanie. Enero-Junio 2004. Bolivia: La erosión del pacto democrático. *Ecuador Debate*, 62, 119-135.
- Alexander, Malcolm. Sep. de 1982. "Business Elites, National Development, and problems of Comparative and World-System Approaches. A comment on Teichman's Study of Argentina and Canada. In. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique*, Vol. 15, No. pp. 589-595.
- Althusser, Louis. 1989. "Ideología y aparatos ideológicos del Estado (Notas para una investigación)" En: *La filosofía como arma de la revolución*, siglo XXI editores, México, pp. 102-151.
- Althusser, Louis. 1977. "El Marxismo no es historicismo y Acerca de Gramsci", En. Althusser et al, *Actualidad del pensamiento político de Gramsci*, Traducciones de Margarita Latorre, Marta Harnecker, Mariano Lisa, Joaquín Sempere y Francisco Fernández Buey, Ediciones Grijalbo, México, pp. 243-279.
- Ames, Barri; Pérez-Liñan y Selinson, Mitchel. 2004. *Elites, instituciones y el Público. Una Nueva Mirada a la democracia boliviana*. Bolivia: USAID.
- Anderson, Leslie (Review) November 1995. "Capitalist and Revolution in Nicaragua: Opposition and Accommodation, 1979-1993" (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994; By Rose J Spalding. In: *The Journal of Politics*, Vol. 57, No. 4 pp. 1209-1212.
- Antelo, Eduardo y Valverde, Francisco. 1991. *Determinantes De La Inversión Privada En Bolivia*. /, /, 1-39.. Disponible en: [Microsoft Word - art02.doc \(udape.gob.bo\)](#)
- Ardaya S., Gloria. 2009. "La crisis política en Bolivia" en *Umbrales*. Revista del Posgrado en Ciencias del Desarrollo. N° 19, CIDES-UMSA. Pp. 23-46.
- Arditi, Benjamín. 2010. "Post-hegemonía: La política por fuera del paradigma post-marxista habitual", En: Cairo Heriberto y Franzé Javier, *Política y Cultura*, Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 159-153.
- Arendt, Hannah. 2005. *La condición humana*, Traducción de Ramón Gil Novales, Paidós, Barcelona
- Arias, Custodio. 2006. "Ascenso y crisis del movimiento indígena ecuatoriano: 1990 -2006. En: *Investigaciones Sociales*, No. 7, Lima, Pp. 217 – 234.
- Arriola, Carlos y Galindo, Juan G. Oct-dic., 1984. "Los empresarios y el estado en México (1976-1982). En: *Foro internacional*, Vol., 25, No. 2 (98), pp. 118-137.
- Arteta, Gustavo. 2000. *Los Flujos de capital extranjero en el Ecuador: uso, destino y consecuencias*. Cuestiones Económicas, 16, 17-40.

- Arze C, Eduardo. 2002. *Bolivia. El programa del MNR y la revolución nacional. Del movimiento de reforma universitaria al ocaso del modelo neoliberal (1928-2002)*. Editorial Plural, La Paz.
- Assies, Williem. 2006., “La ‘media luna’ sobre Bolivia. Nación, Región Etnia y Clase social”, En: *América Latina Hoy*. No. 43, pp. 87-105.
- Balsá, Javier, 2006, “Las tres lógicas de la hegemonía”, en: *Revista Theomai*, No. 14, segundo semestre, pp. 16-36.
- Basabe S Simón. 2009. “Ecuador: Reforma Constitucional, Nuevos actores sociales y viejas prácticas partidistas”. En: *Revista de Ciencia Política*, Vol. 29, No. 2, pp. 381-406.
- Basabe S, Simón. 2010. “La democracia inconclusa. Derechos Fundamentales, Instituciones políticas y rendimientos gubernamentales en Ecuador (1979-2008)”, En: *Revista de ciencia política*, Vol. 30, No. 1, pp. 65-85
- Becker, Mark. 2011. “Pachakutik. Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador”. En: Chilcote, R., *Critical Currents in Latin American Perspectives*, Estados Unidos, 2011.
- Beckerman, Paul., Solimano, Andrés. 2002. *Crisis and Dollarization in Ecuador. Stability, Growth, and Social Equity*. The World Bank. Washington D.C. 2002.
- BID, 2018, *Evaluación del programa de País. Ecuador 2012-2018*, Oficina de Evaluación y Supervisión-BID, Nueva York.
- Blanco S, Jorge. 2013. “La Teoría y el Poder. Álvaro García Linera y la nueva utopía boliviana”, En: *Revista Republicana*, No.14, Enero-junio, pp. 211-240.
- Blanco S., Jorge. 2004. Globalización, Movimientos Sociales y Ciudadanía. En: "Diálogo de Saberes". *Revista del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas*, de la Universidad Libre. No. 20. Bogotá; Enero-Junio. Págs. 149-172
- Bobbio, Norberto. 1977. “Gramsci y la concepción de la sociedad civil”, En: Althusser et al, *Actualidad del pensamiento político de Gramsci*, Traducciones de Margarita Latorre, Marta Harnecker, Mariano Lisa, Joaquín Sempere y Francisco Fernández Buey, Ediciones Grijalbo, México, pp. 150-176.
- Bocco, Arnaldo. 1983. *Política económica y estilos de desarrollo en la fase de auge petrolero (1972-78)*. *Desarrollo Económico*, 22, 485-510.
- Bonilla, Adrian (editor). 2002. *Orfeo en el Infierno. Una Agenda de política Exterior Ecuatoriana*, FLACSO, CAF, Ministerio de relaciones Exteriores, Quito.
- Bourdieu, Pierre, 2011, *Las estrategias de reproducción social*, Traducción de Alicia Beatriz Gutiérrez, Siglo XXI Editores, Buenos Aires
- Bourdieu, Pierre. 1997. “Espíritu de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”, En: *Razones prácticas sobre la teoría de la acción*, Traducción de Thomas Kauf, Editorial Anagrama, Barcelona, pp. 81-125.
- Bourdieu, Pierre. 2005. “El misterio del ministerio: De las voluntades particulares a la voluntad general”, En: WACQUANT, Loïc, 2005, *El misterio del ministerio*, Gedisa, Barcelona, pp. 71-80.
- Bourdieu, Pierre. 2001. *¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y práctica de los grupos*, Editorial Desclée de Brouwer S.A., Madrid.
- Buci-Glucksmann, Christine. 1978. *Gramsci y el Estado. Hacia una teoría materialista de la filosofía*, Traducción de Juan Carlos Garavaglia, Siglo XXI editores, México.
- Burbano de Lara, Felipe. 2002. “Estrategias para sobrevivir a la crisis del Estado. Empresarios, política y partidos en Ecuador”, En: Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique: *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires; pp. 293-316, Disponible en:

- <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C09Burbano.pdf>, Fecha de Consulta: 16 de septiembre de 2012.
- Burbano de Lara, Felipe. 2009. "Las luchas autonómicas de Guayaquil y Santa Cruz. Una perspectiva comparada", En: Enrique Arceo y Eduardo Basualdo (comp.), *Los condicionantes de la crisis en América Latina. Inserción internacional y modalidades de acumulación*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2009, pp. 275-320.
- Burbano de Lara, Felipe. 2014. Movimientos regionales y autonomías políticas en Bolivia y Ecuador, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, Salamanca.
- Burneo, Diego y Oleas, Julio. 1996. Análisis Del Crecimiento En El Ecuador (1965-1994): Estabilidad Macroeconómica y Apertura Como Factores Coadyuvantes. Nota técnica, N° 28, Banco Central del Ecuador 1-28.
- Calderón, Fernando. 2007. "Bolivia. ¿El fin del enredo?, Oportunidad histórica: Cambio político y nuevo orden sociocultural", En: *Revista Nueva Sociedad*, No. 209, Mayo-Julio, Págs. 32-45.
- Canak, William., L., (Review). 1991. "Dominant Classes, Politics and the State in Latin America, En: *Journal of Latin America Studies and World Affairs*, Vol. 33, No. 1. Spring, 1991, pp. 149-159.
- Cardoso, Fernando H. 1968. "Empresarios industriales y desarrollo nacional en Brasil", En: *Desarrollo económico*, Vol. 8 No. 29 (Apr. – Jun., 1968), pp. 31-60.
- Carnoy, Martin. 1985., *State and Political Theory*, Princeton University Press, Princeton NJ.,
- Castañeda, Jorge., G. 2006. "Latin America's left turn", En: *Foreign Affairs*, May/June, 2006.
- Castillo, Carlos. 1967. "Elite y desarrollo en Colombia". En: *Revista mexicana de Sociología*, Vol. 29, NO. 4 (Oct.-Dec.). Pág. 871-893.
- Castoriadis, Cornelius. 1998. "Reflexiones sobre el desarrollo y la racionalidad", en Viviescas y Giraldo (Editores), *Colombia: El despertar de la modernidad*, Ediciones Foro Nacional Por Colombia, Bogotá, pp. 90-111
- Castoriadis, Cornelius. 2002. *Figuras de lo pensable (las encrucijadas del laberinto IV)*, Fondo de Cultura Económica, México D.F.
- Castoriadis, Cornelius. 2005. *Ciudadanos sin brújula*, Ediciones Coyoacán, México.
- CELA. 2003.. Los impactos del neoliberalismo. Una lectura desde la percepción y experiencia de los actores. Centro de Estudios Latinoamericanos, ABYA-YALA, Quito.
- Centeno, Miguel. 2002. *Blood and Debt: war and the nation-State in Latin America*. Pennsylvania: University Park, 2002.
- CEPB, 2007, *Memoria Anual 2006-2007*, CEPB, La Paz
- CEPB, 2011, *Memoria Anual*, Gestiones 2008-2009 y 2009-2010, CEPB, La paz
- CEPB, 2012, *Memoria anual 201*, CEPB, La Paz.
- CEPB, 2013, *Inversión y crecimiento en Bolivia: Desencuentros recurrentes*. Documento de Trabajo -UAL, La Paz.
- Ceruti, Mario, Ortega Isabel, y Palacios, Lylia. 2000. "Empresarios y empresas en el norte de México. Monterrey: Del estado oligárquico a la globalización". En: *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, No. 69, October 2000, pp. 3-27,
- Chávez, Patricia. 2007. "Los indígenas en el Poder", En: Gustavo Ayala y Luis Tapia (Comp.), *Amanecer en Bolivia. Los movimientos sociales y el cambio*, Ediciones La Tierra, Quito, pp. 87-108.
- Chávez, Patricia. 2012. "El proceso político boliviano: Dilemas y tensiones entre el Estado y los movimientos sociales", En: Daniel Pardo (Comp.) *¿Otros mundos posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad*, Fundación Rosa Luxemburgo-Universidad Nacional de Colombia, Medellín, pp. 59-72.

- Cohen, Jean L. y Arato, Andrew. 2002. *Sociedad Civil y Teoría Política*. Traducción de Roberto Reyes Mazzoni; Fondo de Cultura Económica, México.
- Conaghan, Catherine y Malloy, James. 1994. *Unsettling statecraft democracy and neoliberalism in the central Andes*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Conaghan, Catherine. 1988. *Restructuring Domination. Industrialist and the State in Ecuador*, Pittsburgh University Press, Pittsburgh.
- Conaghan, Catherine. 1992. The private sector and the public transcript: the political mobilization of business in Bolivia. Kellogg Institute. Working paper, No. 176, June.
- Conaghan, Catherine. 1995. *Políticos versus partidos. Discordia y desunión en el sistema de partidos ecuatoriano*, En: Mainwaring y Scully, *La construcción de instituciones democráticas. Sistema de partidos en América Latina*, CIE-PLAN, Santiago, pp. 219-259.
- Conaghan, Catherine., Malloy, James. y Abugatas, L. 1990. "Business and the 'Boys'. The politics of neoliberalism in the central Andes". In. *Latin American Research Review*, Vol., 25, No. 2 (1990). Pp. 3-30.
- Conaghan, Catherine., Malloy, James., y Wolfson Leandro. 1997. "Democracia y neoliberalismo en Perú, Ecuador y Bolivia", En: *Desarrollo económico*, Vol. 36 No. 144 (Jan.- Mar., 1997) Pp. 967-890.
- Correa, Rafael. 2002. "Reformas estructurales y crecimiento en América Latina: un análisis de sensibilidad". En: *Revista de la CEPAL*, 76.
- Cóspito, Giuseppe. 2000. "Estructura y superestructura. Un intento de lectura diacrónica", En: Kanoussi, Dora (comp.), *Gramsci en América. II conferencia internacional de estudios gramscianos*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Plaza y Valdés Editores, México, pp. 243-256.
- Cossio, Fernando. 2001. *Los Impactos Sociales de la Capitalización en Bolivia*. Lima Peru: Instituto internacional de Economía y Empresa.
- Costa B., Jimena. 2011. "Bolivia: el estado de la democracia en el proceso de Cambio", En: Enrique Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez P. (Comp.), *El momento político de América Latina*, Fundación Carolina-Siglo XXI, Madrid.
- Crabtree Jhon y Whitehead, Laurence. 2001. *Towards Democratic Viability The Bolivian Experience*. Palgrave Macmillan New York, USA:
- Cueva, Agustín. 1984. "El fetichismo de la hegemonía y el imperialismo", En: *Cuadernos Políticos*, No. 38. Ediciones Era, México, enero-marzo, pp. 31-39.
- Dávalos, Pablo 2016. *Alianza País o la reinvencción del poder. Siete ensayos sobre el posneoliberalismo en el Ecuador*, Ediciones Desde Abajo, Bogotá
- De La Torre, Carlos. Agosto, 2001. "Política y Economía en los Nuevos y Viejos Populismos" *Ecuador Debate*, 53, 73-86.
- Deheza, Ivana. 2012. "Bolivia 2011: Gobernando con el conflicto", En: *Revista de ciencia Política*, Vol. 32, No. 1, pp. 31-48.
- Deheza, Ivana. 2007. "Bolivia 2006: Reforma Estatal y Construcción del Poder", En: *Revista de Ciencia Política*, Edición Especial, pp. 43-57.
- Del Barco, Roberto. 2012. *Política industrial, la experiencia boliviana*. Ciencia Trópico, Vol. 36, 193-256.
- Del Campo, Esteban. 1978. "Crisis de la hegemonía oligárquica, clases populares y populismo en Ecuador" En: *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 40, No. 3, Estado y Clases Sociales en América Latina (1) (Jul. - Sep., 1978), pp. 1101-1118.
- Del Campo, Esteban. 1981. "Populismo en Ecuador (Notas complementarias)", En. *Ecuador Hoy*, Siglo XXI Editores, Bogotá, pp. 198-237.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. 1985 [1972]. *El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia*. Paidós, Barcelona.

- Dunkerley, James. 2003. "The Origins of the Bolivian Revolution in the Twentieth Century: Some Reflection", en Grindle and Domingo (Eds), *Proclaiming revolution. Bolivia in comparative perspective*, David Rockefeller Center- Harvar University Press, Uk, pp. 135-163.
- Durand, Francisco y Campodónico, Humberto. 2010.. *Poder Empresarial y sociedad Civil en Sudamérica. Entre el diálogo y el enfrentamiento*. Alop-Cedal-Desco-Oxfam, Lima,
- Egas, José M. 1979. El Ecuador y sus contradicciones desarrollistas. *Revista Mexicana de Sociología*, 41, 249-278.
- Escobar, Ana P. 2002. *La participación empresarial ecuatoriana en el proceso de integración andina. Caso: Cámara de Industriales de Pichincha*. Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
- Escobar, Arturo. 1999. *El Final del Salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*. ICANH/CEREC. Santa Fe de Bogotá.
- Escobar, Arturo. 2007. *La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas, Venezuela: edición Fundación Editorial el perro y la rana.
- Escobar, Silvia y Rojas, Bruno. 2010. *No hay derecho! Situación de los derechos laborales en Bolivia, 2009*. La Paz: CEDLA. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.
- Evans, Peter B., Rueschemeyer, Dietrich and Skocpol, Theda. 2002 [1985]. *Bringing the State Back*, Cambridge University Press, London,
- Evans, Peter. 2007. "El Estado como problema y como solución", En, Acuña, Carlos (Comp.) *Lecturas sobre el Estado y las Políticas públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual*, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Buenos Aires, pp., 17-54
- Fairfield, Tasha. 2015. *Private Wealth and Public Revenue in Latin America Business Power and Tax Politics*. New York, USA: Cambridge University Press.
- Farah, Ivone. 2004. *Rasgos de la pobreza en Bolivia y las políticas para reducirla*. En Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructuras, discursos y actores. (209-238). Buenos Aires: CLACSO.
- FEPSA, 2010, *La empresa privada cruceña en la coyuntura actual. Retos y líneas de acción*, Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Santa Cruz.
- FEPSA, 2011, *producir mas para distribuir mejor. Programa de Trabajo público-privada*, Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Santa Cruz, 2011.
- FEPSA, 2012, *El Empresariado cruceño en el desarrollo de Bolivia. Articulación público privada. Confianza para crecer*, Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Santa Cruz.
- Fernández, Álvaro. Comp., 2001. *La invención de la nación. Lecturas de identidad de Herder a Homi Bhabha*, Editorial Manantial, Buenos Aires.
- Fernández, Buey. 1977. Introducción, En: Fernández Buey (Comp) *Actualidad del pensamiento político de Gramsci*, Traducciones de Margarita Latorre, Marta Harnecker, Mariano Lisa, Joaquín Sempere y Francisco Fernandes Buey, Ediciones Grijalbo, México, pp. 7-35.
- Flores, Anselmo. 2006a. "Una inevitable (y exitosa) convivencia política: empresarios y gobiernos socialistas de Chile y España", En: Foro Internacional, Vol. 46, No. 4 (Oct-Dec), pp. 720-740. Accessed, 14/02/2012.
- Flores, Anselmo. 2006b. "¿Viejos actores, nueva relación?" *Empresarios e izquierda en América Latina*", En: La Chronique des Amériques, Avril No. 17.
- Fontana, Benedetto, 2001, "Gramsci y el Estado", en: Dora Kanoussi (Comp.), "Hegemonía, Estado y sociedad civil en la Globalización", Traducción de Cristina Ortega, Plaza y Valdés, México, pp. 15-38.

- Fornillo, Bruno. 2012. “¿Existe una reforma agraria en la Bolivia del Movimiento al Socialismo?”, En: *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*, No. 42, enero, pp. 153-166.
- Foro Nacional Por Colombia (1991). Antonio Gramsci y la realidad colombiana, Ediciones, Foro nacional por Colombia, Bogotá.
- Foucault, Michel. 1979. *Microfísica del poder*, Edición y traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, Ediciones de la Piqueta, Madrid,
- Foucault, Michel. 1979. *Microfísica del poder*, Edición y traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, Ediciones de la Piqueta, Madrid,
- Foucault, Michel. 1968. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Editorial Siglo XXI, Madrid, 1968.
- Freindemberg, Flavia. 2003. “Ecuador”, En: Alcántara M y Flavia Freindemberg (Coords.), *Partidos políticos de América Latina. Países Andinos*, FCE-Instituto Federal electoral, México, pp., 235-409.
- Frenkel, Alejandro. 2011. *Los actores de la derecha boliviana: tipos, fundamentos y lógicas de la acción política en el escenario nacional 2000-2008*. THEOMAI, 23, 205-215.
- Friedman, Jonathan. 2001. “Identidad cultural y proceso global”. Amorrortu editores. Buenos Aires, 2001.
- Fundación Milenio. 2016. *Informe Nacional de Coyuntura. La inversión privada en Bolivia ¿Quié hacer para impulsarla?*. Fundación Milenio, La Paz.
- Gaggero, Alejandro. 2005. “Instrumentalismo, hegemonía y autonomía relativa: el marxismo y el análisis de la relación entre el Estado y la burguesía”, En: “*II Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani*”, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires.
- García G. María. 2003. Politización y polarización de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la democracia. En: Espacio Abierto. Vol. 12. No.1. Enero-marzo de 2003. Asociación Venezolana de Sociología. Maracaibo.
- García L. Álvaro. 2009. *Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórica-abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal*. Clacso-Muela del diablo editores-Comuna, La Paz
- García L. Álvaro. 2010. El oenegismo, Enfermedad infantil del derechismo (O cómo la “reconducción” del proceso de cambio es la restauración del neoliberalismo). Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La paz, 2011.
- García L. Álvaro. 2005. “Democracia y Campo Político”, En: Álvaro García Linera, et al, *Democracia en Bolivia. Cinco análisis temáticos del segundo estudio nacional sobre democracia y valores democráticos*, Corte Nacional Electoral, La Paz, pp. 13-24.
- García L. Álvaro. 2007. “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y marxismo.” Cuadernos del pensamiento crítico Latinoamericano, No. 3, Buenos Aires, Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Diciembre.
- García L. Álvaro. 2008. *¿Cómo se derrotó al golpismo cívico-prefectural?* En: Encuentro internacional de solidaridad con Bolivia Santa Cruz, 23 de octubre de 2008.
- García L. Álvaro. 2009. *El estado plurinacional*. Discurso del ciudadano vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, en la escuela de Fortalecimiento y Formación Política “Evo Morales Ayma”. IV Seminario Taller “La nueva Bolivia”. La Paz, 10 de Marzo.
- García L. Álvaro. 2010 a. *La construcción del Estado*. Conferencia en la Universidad de Buenos Aires, con motivo del otorgamiento por parte de ésta universidad del Doctorado Honoris Causa a Álvaro García Linera. Buenos Aires, 8 de abril.

- García L. Álvaro, 2010 b. El socialismo comunitario. Un aporte de Bolivia al mundo. Entrevista al Vicepresidente del Estado Plurinacional. Ciudadano Álvaro García Linera, Programa “El pueblo es Noticia” Canal 7- Red Patria Nueva, 7 de febrero.
- García L. Álvaro, 2010c. “El estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación”. En: GARCÍA LINERA, Álvaro, et al, El estado, Campo de lucha. Clacso-Muela del diablo editores-Comuna, La paz, Págs. 7-40.
- García L. Álvaro. 2011 a. *Las tensiones creativas de la revolución. Quinta fase del proceso de Cambio*, Vicepresidencia del Estado, La Paz.
- García L. Álvaro. 2013. *Democracia, Estado, Nación*, Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz.
- García, Fernando y García O. Alberto. 2004. “Las lecturas de la democracia en Bolivia”, en: *Política*, No. 42, Universidad de Chile, otoño, pp. 325-339.
- García, Manuel. 2003. “Bolivia”, En: Alcántara, M y Flavia Freidenberg (Coord.), *Partidos Políticos de América Latina. Países Andinos*, FCE-Instituto Federal Electoral, México, pp. 33-148.
- Gastambide, Alex. 2010. El camino hacia la dolarización en Ecuador. Quito, Ecuador: FLACSO.
- Gates, Leslie. 2007. “The business of Anti-globalization politics: Lessons from venezuela’s 1998 presidential elections”, en: PRECHEL H (Ed) *Politics and globalization. Research in political sociology*. Vol. 15. Elsevier, Netherlands.
- Gates, Leslie. 2009. “Theorizing business power in the semi periphery: México 1970-2000. In. *Theory and society*, No. 38, Págs. 57-95, 2009.
- Gellner, Ernest. 1997. *Naciones y nacionalismo*, Alianza editorial, Madrid.
- Gerratama, Valentino, (1999). Prefacio a (Los cuadernos de la Cárcel, de Antonio Gramsci), Traducción de Ana María Palos, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, pp. 11-36
- Giocalone, Rita, Septiembre-Octubre 1997. “Asociaciones empresariales, integración y Estado en Colombia y Venezuela”; En: *Nueva Sociedad*, No. 151, pp. 155-167.
- Gilbert M, Joseph, y Nugent, Daniel. 2002. *Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno*. México: Ediciones Era: pp. 25-169.
- Goldstein, Philip. 2005. Post-Marxist Theory. An Introduction, State University of New York Press, New York.
- González P, Antonio. 2008. “La desigualdad en la Revolución Bolivariana. Una década de apuesta por la democratización del poder, la riqueza y la valoración del estatus”. En, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, , Vol. 14, No. 3 (Sep-Dic.), pp. 175-199.
- Gonzalo, Edward y Requejo, Fernán. 1998. “Democracia. Razones de un sueño que genera monstruos, En: CORTINA ADELA, *10 palabras claves en filosofía política*, Editorial Verbo Divino, Madrid, 1998
- Gorski, Philip. 1999. “*Calvinism and State-Formation in Early Modern Europe*”, En. George Steinmetz, *State/Culture. State-Formación after the Cultural Turn*, Cornel University, Ithaca, pp
- Gramsci, Antonio. 1980. *Notas sobre Maquiavelo, Sobre la Política y sobre el Estado Moderno*, Traducción y notas de José Arieó, Editorial Nueva Visión, Madrid, 1980.
- Gramsci, Antonio. 1999. *Cuadernos de la cárcel*, 6 Tomos. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana, Traducción de Ana María Palos, revisada por José Luis González, Ediciones Era, Puebla.
- Gray Molina, Gerardo. 2006. *La economía boliviana “Más allá del gas”*. En. *América Latina Hoy*, Ediciones Universidad de Salamanca, No. 43, Págs. 63-85.

- Grebe L., Horst. 2001. *The Private Sector and Democratization*. En: *Towards Democratic Viability*. The Bolivian Experience, pp. 160 – 178.
- Grindle, Merilee. 2003. “Shadowing the Past? Policy Reform in Bolivia, 1985-2002” En: Grindle and Domingo (Eds), *Proclaiming revolution. Bolivia in comparative perspective*, David Rockefeller Center- Harvar University Press, Uk, pp. 289-317.
- Habermas, Jürgen. 1981. *Historia y crítica de la opinión pública*. La transformación estructural de la vida pública. Versión Castellana de Antoni Doménech, con la colaboración de Rafael Grasa, Editorial Gustavo Gil, Madrid.
- Hegel, G.W.F. 1985. *Fenomenología del Espíritu*, Traducción de Wenceslao Roces con la colaboración de Ricardo Guerra, FCE, Madrid.
- Hellinger, Daniel. 2005. “When “No” Means “yes to Revolution”: Electoral politics in Bolivarian Venezuela”. In: *Latin American Perspectives*. Vol. 32, No. 3, Venezuelan Exceptionalism Revisited: New perspectives on politics an Society. May, 2005, pág. 8-32.
- Heneus, Carlos. 2001. “El comportamiento político de los empresarios en Chile”, En: *Revista perspectivas (Departamento de ingeniería industrial, Universidad de Chile)*, Vol., 4, No. 2, 2001, PP., 315-337.
- Heneus, Sebastian. 2011. Revisión conceptual en torno a las redes de directorio y de propiedad para una sociología de las élites económicas. En, Corning Papel O. 3, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales Universidad diego Portales, 2011.
- Heredia, Mariana. 2003. “Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: Estudio de los portavoces de la tierra y del capital”, En *Revista mexicana de sociología*, vol., 65, No. 1, (Enero-Marzo de 2003), pp. 77-115.
- Hey, Jeanne y Klak, Thomas. 1999. From Protectionism Towards Neoliberalism: Ecuador Across Four Administrations. En *Studies in Comparative International Developmen* (66-97).
- Hidalgo, Francisco. 2009. Reformismo social y disputa de hegemonía. Posneoliberalismo y escenarios políticos en el Ecuador. En: *Ciencia Política*, No. 8, pp. 53 - 68.
- Hidalgo, Francisco. 2002. Elecciones en Ecuador: Quiebra de los partidos políticos y presencia del movimiento indígena. En: *Ciencias Sociales*, 98, pp. 87 – 97.
- Hidalgo, Francisco. 2005. Los Movimientos indígenas y la lucha por la hegemonía: el caso de Ecuador. En edición digital: <http://www.herramienta.com.ar>
- Hobbes, Thomas. 1982. *El Leviatan. O la materia, forma y poder, de una República Eclesiástica y Civil*, Editorial Skla, Bogotá.
- Huneus, Carlos. 2001. El comportamiento político de los empresarios en Chile, En: *Revista Perspectivas (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile)*, vol. 4, N° 2, 2001 (pp. 315-33)
- Huneus, Sebastián. 2011. Revisión conceptual en torno a las redes de directorio y de propiedad para una sociología de las élites económicas" En: *Serie Working Papers ICSO-UDP*. N° 3
- Imbert P, Patricio y Morales F, Patricio. 2008. “Crony capitalism: El Empresariado como un actor de cambio hacia el neoliberalismo en Chile”, en : *Revista Pléyade*, No. 2, Segundo semestre.
- Kanoussi, Daniel. 2000. *Gramsci en América. II Conferencia internacional de Estudios Gramscianos*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Plaza y Valdés Editores, México.
- Kaplan, Marcos. 1983., "La Teoría del Estado en América Latina contemporánea: El caso del marxismo, en: *El Trimestre económico*, Vol. 50, No. 198(2), NUMERO ESPECIAL 50 aniversario (Abril-Junio), pp. 677-711

- Klein, Herbert. 2003. "Social Change in Bolivia since 1952", En: Grindle and Domingo (Eds), *proclaiming revolution. Bolivia in comparative perspective*, David Rockefeller Center- Harvar University Press, Uk, pp. 232-258.
- Knighth, Alan. 2003. "The domestic dynamics of de Mexican and Bolivian Revolution", En. : Grindle and Domingo (Eds), *Proclaiming revolution. Bolivia in comparative perspective*, David Rockefeller Center- Harvar University Press, Uk, pp. 54-90
- Kohl, Benjamin y Farthing, Linda. 2006. *Impasse in Bolivia: neoliberal hegemony and popular resistance*. New York: Zed Books.
- Lacabana, Miguel. 2006. "Petróleo y hegemonía en Venezuela. La construcción de un proyecto Nacional democrático-popular en el siglo XXI". En Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique, *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*; CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2006.
- Laclau, Ernesto. 1981. "Teorías marxistas del estado. Debates y perspectivas", en: LECHNER, Norbert, Ed., *Estado y política en América Latina*, Siglo XXI, Editores, México, pp. 25-60
- Laclau, Ernesto. 1981. "Teorías marxistas del estado. Debates y perspectivas", en: LECHNER, Norbert, Ed., *Estado y política en América Latina*, Siglo XXI, Editores, México, pp. 25-60
- Laclau, Ernesto. 2005. "La deriva populista y la izquierda latinoamericana", En: Nueva Sociedad, No. 205, pp. 56-61.
- Laclau, Ernesto. 2005. "La deriva populista y la izquierda latinoamericana", En: Nueva Sociedad, No. 205, pp. 56-61.
- Lander, Edgardo. 1994. *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia: ensayos sobre Venezuela y América Latina*. FACES, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 1994. p. 154.
- Larrea, Carlos. 2003. "Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador", en: *Ecuador Debate*, No. 60, diciembre, pp. 7-24.
- Larrea, Marcelo. 2007.. *Crisis en el Ecuador: de la pérdida de la justicia a la implosión política*. Cuadernos de trabajo. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana. Veracruz. 2007.
- Levi-Strauss, Claude. 1997. *El pensamiento salvaje*. Traducción de Francisco González Aramburo. Fondo de Cultura Económica, México,
- López M, Cecilia, Coord. 1997., *El impacto de la ayuda extranjera en América Latina* TM Editores-Fedesarrollo, Bogotá.
- López M, Margarita, Iñigo, Nicolás y Calveiro, Pilar. 2008. "Política de calle y contrahegemonía". En, Iñigo, Nicolás y Calveiro (Comp) *Luchas contra hegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*, Clacso, Buenos Aires, pp. 11-19.
- López M. Margarita y Lander, Edgardo. 2000. "Elecciones de 2000 en Venezuela. Implantación de una nueva hegemonía". En: Anuario social y Político de América Latina y el Caribe No. 4; Flacso/Nueva Sociedad, Caracas, 2000, Págs. 9-17.
- López M. Margarita. 2003. "Insurrecciones de 2002 en Venezuela. Causa e implicaciones". En: SEOANE, José, *Movimientos sociales y conflictos en América Latina*. CLACSO, Buenos Aires, 2003.
- López, Andrés. 2008. "Gran empresa, diversificación y desarrollo. Una mirada a la literatura recibida con una reflexión sobre el caso argentino". En: *Desarrollo Económico*, Vol. 48, No. 190/191 (Jul-Dec.), 2008). Pág. 341-379
- López-Alves, Fernando. 2003. En *La formación del Estado y la democracia en América Latina 1830-1910*. Editorial Norma, Bogotá, 2003.

- Lora, Carlos. 2005. "Bolivia: La construcción del Capitalismo Andino Amazónico o los límites de los movimientos sociales", En: *Política y Sociedad*, No. 43, VI época, Universidad de San Carlos de Guatemala, pp. 94-121
- Lucas Jhon. 1997. "The politics of Business Associations in the developing world". In: *The journal of Developing Areas*, Vol. 32, No. 1. (Autumn, 1997), pp. 71-96.
- Lujano, Cynthia. 2007. "Repensando la categoría de Estado en América Latina. Recuperación del pensamiento teórico latinoamericano, En: *Revista del centro andino de estudios internacionales*, No. 8, Quito.
- Luna, Matilde, y Tirado, Ricardo. 1993. "Los empresarios en el escenario del cambio. Trayectoria y tendencias de sus estrategias de acción colectiva". En. *Revista Mexicana de Sociología*, Vol., 55, No. 2, Abril-junio de 1993, PP., 243-271.
- Luna, Matilde, y Valdés, Francisco. 1990. "Perspectiva teóricas en el estudio del empresariado en México", En: *Revista Mexicana de sociología*, Vol. 52, No. 2, Abril-Junio, de 1990, pp. 3-17.
- Lyotard, Jean F. 1998. Respuesta a la pregunta ¿qué es lo postmoderno? En: Viviescas, Fernando y Giraldo I, Fabio, (Comps.) *Colombia el despertar de la modernidad*. Ediciones Foro Nacional por Colombia. Tercera edición, Bogotá, 1998. Págs. 32-43
- Lyotard, Jean, F (1987), *La Condición Postmoderna. Informe sobre el saber*. Traducción de Mariano Antolín Rato, Ediciones Catedra, Madrid.
- Machado, Decio. 2012. "Las élites económicas: Los verdaderos beneficiarios del gobierno de Rafael Correa", En. <http://www.vientosur.info/spip.php?article6299>. Recuperado, 3 de noviembre de 2014.
- Maldonado L, Guillermo, marzo-abril 1979. "La reforma agraria en el Ecuador, una lucha por la justicia". *Nueva Sociedad*, 41, 14-29.
- Mamami, Pablo. 2006. "Las estrategias del poder indígena", En: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30394>.
- Mamami, Pablo. 2007. "La Territorialidad del poder indígena. Microgobiernos barriales. La guerra del gas, el Alto-Bolivia", En. Gustavo Ayala y Luis Tapia (Comp.), *Amanecer en Bolivia. Los movimientos sociales y el cambio*, Ediciones La Tierra, Quito, pp. 71-86,
- Mann, Michael, 2007, "El poder autónomo del Estado. Sus orígenes, mecanismos y resultados", En, Acuña, Carlos, "Lecturas sobre el Estado y las Políticas públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Buenos Aires, pp. 295-318
- Mansilla H.C.F. 2007. *Problemas de la Autonomía en el Oriente Boliviano. La ideología de la Nación Camba en el espejo de las fuentes documentales*". Editorial El País, Santa Cruz de la Sierra.
- Mansilla, H.C.F. 1994. *La Empresa Privada Boliviana Y El Proceso De Democratización*. La Paz Bolivia: Fundación Milenio.
- Marchart, Oliver. 2009. *El pensamiento político postfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Marcuse, Herbert. 1993. *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Traducción de Antonio Elorza. Editorial Planeta-Agostin, Barcelona,
- Martín M., Fernando. 2009. *Estado y mercado en la historia de Ecuador Desde los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa*. Nueva Sociedad, 221, 120-136.
- Marx, Carlos. y Engels, Federico. 1980. *Obras Escogidas*, Tomo I., Editorial Progreso, Moscú.
- Marx, Carlos. 1973. *Introducción a la crítica de la economía política*, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1973.

- Marx, Carlos., (Eric J Hobsbawm, Ed.) (1999). "Formaciones económicas pre capitalistas" 19ª edición. Siglo XXI editores, Madrid
- Maya, Carlos, 1982, "El concepto de Estado en los cuadernos de la cárcel", En. Cuadernos políticos, no. 33, Julio-Septiembre, Pág. 7-19.
- Mayorga, René. 2003. "Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia", En: Jorge Lanzaro (Comp.), *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, Buenos Aires. CLACSO. Páginas 101-135.
- Mayorga, René. 2004. "La crisis del sistema de partidos políticos: causas y consecuencias. Caso Bolivia". En: Varios Autores, *Partidos políticos en la Región Andina: entre la crisis y el Cambio*, Ágora Democrática-IDEA, Lima. Páginas 27-49.
- Mayorga, René. 2009. "Sociedad Civil y Estado bajo un Populismo plebiscitario y autoritario", En: Cynthia J., Arnson et al., *La "Nueva Izquierda" en América Latina: Derechos Humanos, Participación Política y Sociedad Civil*, Woodrow Willson International Center for Scholar, Edición Digital, pp. 106-114.
- Méndez, C, Amparo. 1990. La democracia en el Ecuador: desafíos, dilemas y perspectivas. Documento de Trabajo, Flacso, Quito, pp, 189-217.
- Meneses B, Karla. (2014), "Evolución de las finanzas del Gobierno central del Ecuador: una perspectiva comparada", En: *Valor Agregado*. No. 2. UDLA, Diciembre, pp. 43-60.
- Mercado, Alejandro, Leitón, Jorge, J y Chacón, Marcelo. 2003. El crecimiento económico en Bolivia (1952-2003). En: *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, No. 5, Vol, 1, pp. 9-42.
- Meyer, Jhon W. 1999. "The Changing Cultural content of de Nation-State: A World Society Perspective " En: George Steinmetz (Ed) *State/Culture. State-Formation after the Cultural Turn*, Cornel University, Ithaca, pp 123-142
- Migdal, Joel. 2011. *Estados fuertes, Estados débiles*, Traducción de Liliana Andrade y Victoria Schusshei, Fondo de Cultura Económica, México
- Míguez, Pablo. 2010. "El debate contemporáneo sobre el Estado en la teoría marxista. Su relación con el desarrollo y la crisis del capitalismo", en: *Estudios Sociológicos*, Vol. XXVIII, No, 8, pp. 643-689.
- Miliband, Ralph, 1970, El Estado en la Sociedad Capitalista, Traducción de Francisco González Aramburu, Siglo XXI editores, México
- Mitchell, Timothy. 1999. "Society, Economy, and the State Effect", En: George Steinmetz, *State/Culture. State-Formation after the Cultural Turn*, Cornel University, Ithaca, pp. 76-97
- Mokvist, Uggla. 2010. "Bolivia: Un año de consolidación", En: *Revista de Ciencia Política*, Vol. 30, No. 2, pp. 191-211.
- Molyneux, Marleene., (2008). "The 'Neoliberal Turn' and the New Social Policy in Latin America: How Neoliberal, How New? Development and Change 39 (5): 775-797
- Moncada, José. 1981. "Perspectivas de evolución del ecuador hacia fines del presente siglo", En: *Ecuador Hoy*, Siglo XXI Editores, Bogotá, pp. 91-133.
- Moncada, José., (1974). *La evolución de la planificación en el Ecuador*. Nueva Sociedad, 13, 27-45.
- Montero, Cecilia. 1999. "Los empresarios como agentes políticos de Cambio institucional. Reflexiones a partir del caso chileno", En *Instituciones y desarrollo*, No. 3, 1999, Pág. 1- 11.
- Montero, Cecilia. Sep.-Oct 1997. "Relaciones Estado-empresarios en una economía global. El caso de Chile", En: *Nueva Sociedad*, No. 151, pp. 122-135.
- Montufar, César. 2000. *La reconstrucción neoliberal. Febres Cordero o la estatización del neoliberalismo en el ecuador, 1984-1988*, Ediciones Abya- Yala, Quito.

- Morales, Evo. 2017. "Mensaje del Presidente Evo Morales, Sesión de honor de la Asamblea Legislativa, 22 de enero de 2017", ATB digital, publicado el 23 de enero de 2017. Acceso en: <https://www.youtube.com/watch?v=EQDJv0yT8qU>
- Morales, Juan A. 2003. "The National Revolution and Its Legacy, En: Grindle and Domingo (Eds), proclaiming revolution. Bolivia in comparative perspective, David Rockefeller Center- Harvard University Press, Uk, pp. 213-231.
- Morales, Juan A. Sep-Oct 1992. "Cambios y consejos neoliberales en Bolivia", En: *Nueva sociedad*, No. 121, pp. 134-143.
- Mouffe, Chantal. 1998. "Hegemonía, política e ideología"; En, Julio Labastida Martín del Campo, Coord., *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, México, 1998 (1985). Siglo XXI Editores,, pág. 125-145
- Mouffe, Chantal y Ernesto Laclau. 2006. *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*, Versión española de Ernesto Laclau. Fondo de Cultura Económica, México, 2006
- Mouffe, Chantal. 1991. "Hegemonía e ideología en Gramsci", En. Foro Nacional por Colombia, Antonio Gramsci y la realidad colombiana, Foro nacional por Colombia, Bogotá, pp. 167-227.
- Mouffe, Chantal, (1998). "Hegemonía, política e ideología"; En, Julio Labastida Martín del Campo, Coord., *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, México, 1998 (1985). Siglo XXI Editores, pág. 125-145
- Mouffe, Chantal, (1999). *El retorno de lo Político. Comunidad, ciudadanía pluralismo, democracia radical*. Traducción de Marco Aurelio Galmarini, Paidós, Barcelona.
- Mouffe, Chantal. 2009. *En torno a lo político* (2009). Traducción de Soledad Laclau. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Mouffe, Chantal. Septiembre 1994. "La democracia radical ¿Moderna o posmoderna?" En: Revista Foro. No. 24 pp. 13-23.
- Múnera, Leopoldo, 1998, *Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1998*, IEPRI-UNAL, Bogotá
- Muñoz, P, Betilde, (2008). *Electoral Rules and the Transformation on Bolivian Politics. The Rise of Evo Morales*. Palgrave Macmillan, New York, 2008.
- Murillo, María O, Virginia y Vaishnav, Milan. 2010. "Electoral Revolution or democratic alternation? en: *Latin American Research Review*, Vol, 45 No. 3, 87-114).
- Núñez, Jorge. (Mayo-Junio 1985). Teoría y práctica de la pugna de poderes. NUEVA SOCIEDAD, Vol. 77, 75-80.
- O'Donnell, Guillermo. 1993. "Acerca del Estado, la Democratización y Algunos Problemas Conceptuales. Una Perspectiva Latinoamericana con Referencias a Países Poscomunistas", En: *Desarrollo Económico* 33 (130): 163-184.
- Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas, (2010), *boletín de Seguimiento a políticas de recursos Naturales*, No. 9.
- Oleas, Julio, (2001). "Del libertinaje financiero a la pérdida del signo monetario: Una visión macroeconómica", en: MARCONI, S., (Editor) *Macroeconomía y economía política en dolarización*, Abya-Yala/UPS/ILDIS/UASM, pp. 61-82,
- Oleas, Julio. 2013. *Ecuador. 1972-1999: del desarrollismo petrolero al ajuste estructural*, tesis doctoral, Universidad Andina Simón Bolívar,
- Oleas, Julio. 2017. *Ecuador 1980-1990: crisis, ajuste y cambio de régimen de desarrollo*. Am. Lat. Hist. Econ, 1, 210-242.
- Orellana, Lorgio. 2006. "Oligarquía capitalista, régimen de acumulación y crisis política en Bolivia", En: *Nómadas*, No. 25, pp. 261-272.

- Ortiz R., Alicia, enero-marzo. 2002. "El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: Órgano de acción política de la élite empresarial", En: *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 64, No. 1. Pág. 101-139.
- Ortuste, Gonzalo. 2009. *Cultura política de las élites en Bolivia (1982-2005)*. La Paz, Bolivia: Edición: FES y CIPCA.
- Oszlak, Oscar, 2007 [1978], "Formación Histórica del Estado en América Latina. Elementos metodológicos para su estudio", *Lecturas sobre el Estado y las Políticas públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual*, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Buenos Aires, pp., 115-142
- Pachano, Simón. 2003. "Ciudadanía e identidad". En: *Ciudadanía e identidad*. Antología. FLACSO, Quito, PP. 13-63.
- Pachano, Simón. 2011. *Calidad de la democracia e instituciones políticas en Bolivia, Ecuador y Perú*, Quito, Flacso, pp. 179-214.
- Pachano, Simón. 2006. "El peso de lo institucional: auge y caída del modelo boliviano", En: *América Latina Hoy*. 43. Páginas 15-30.
- Pachano, Simón. 2007. *La trama de Penélope. Procesos políticos e instituciones en Ecuador*. Idea, Aágora Democrática, Flacso, Quito.
- Pachano, Simón. 2010. "Ecuador: El Nuevo sistema político en funcionamiento", En: *Revista de Ciencias Política*, Vol. 30, No. 2, pp. 297-317.
- Páez C., Alexei. 1996. "Democracia y ajuste estructural en Ecuador. Del orden mundial a los actores sociales", En: Gaitán P., Peñaranda, R y Pizarro, E., *Democracia y reestructuración económica en América Latina*, IEPRI-CEREC, Bogotá, pp. 282-294
- Paguay R., Joaquín. 1992. *Restricciones macroeconómicas al crecimiento. Simulación de sus efectos a partir de un modelo de tres brechas*, Tesis de Maestría, FLACSO. Quito.
- Paguay, Joaquín. 1992. *Restricciones Macroeconomicas Al Crecimiento: Simulacion De Sus Efectos A Partir De Un Modelo De Tres Brechas*. Quito: Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales FLACSO Sede ECUADOR.
- Pallares, Amalia. 2002.. *From Peasant Struggles to Indian Resistance The Ecuadorian Andes in the Late Twentieth Century*. USA: University of Oklahoma Press: Norman.
- Pastor, Carlos. 2016. *Los Grupos Económicos en el Ecuador*. Ecuador. Quito: Ediciones La Tierra.
- Paz y Miño, Juan. 2006. "Las elecciones presidenciales del Ecuador en 2006 y la Propuesta de Asamblea Constituyente", Taller De Historia Económica, Octubre-Noviembre. Edición digital en: <http://the.pazymino.com/Elecciones2006.pdf>
- Paz y Miño, Juan. 2008. "Ecuador: Cámaras de la producción y empresarios entre 1979 Y 2006. *Economía y Política*. No. 2, 1-13.
- Paz y Miño, Juan. 2015. *Historia de los impuestos en Ecuador. Visión sobre el régimen impositivo en la historia económica nacional*, SRI-CEF-PUCE, Quito
- Pease G, Henry. 1999. *Electores, partidos y representantes. Sistema Electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno en el Perú*, PUCP, Lima, pp. 21-38.
- Petras, James y Veltmeyer, Henry (2005). *Social Movements in Latin America. Neoliberalism and Popular Resistance*, Poligrave-Macmillan, Basingstoke.
- Petras, James, y Veltmeyer, Henry. 2009. *What's Left In Latin America?* USA: ASHGATE.
- Pfaller, Alfred y Stanzick, Karl. 1975. La adaptación de la empresa privada a la Integración Andina: Algunas sugerencias. *Nueva sociedad*, No. 17, 28-43.
- Pfaller, Alfred, (1981), "Estrategia de revolución del Ecuador hacia fines del presente siglo", En: *Ecuador Hoy*, Siglo XXI Editores, Bogotá, pp. 134-165
- Polanyi, Karl, 1989, *La gran transformación. Crítica del liberalismo económico*. Traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, Ediciones La Piqueta, Madrid.

- Polet, François. 2009. La Bolivia de Evo ¿Democracia, indigenista y socialista? En. POLET, François, (Coord.). *La Bolivia de Evo ¿Democracia, indigenista y socialista?* Editorial Popular, Madrid.
- Portantiero, Juan Carlos. 1999. Los usos de Gramsci, Editorial Grijalbo, Buenos Aires.
- Portelli, Huges. 1977. Gramsci y el bloque histórico, Traducción de María Braun, Siglo XXI editores, Mexico.
- Grey Postero, Nancy. 2007. *Now we are citizens. Indigenous politics in posmulticultural Bolivia*, Stanford University Press, Stanford, California.
- Poulantzas, Nicos. 1973. *Hegemonía y dominación en el Estado moderno*, Traducción de María T. Poyrazián, Siglo XXI editores, Buenos aires.
- Poulantzas, Nicos. 1987 (1978). Estado, poder y socialismo, Siglo XXI editores, Séptima edición, México.
- Prado, Fernando, Seleme A, Claudia y Peña, Claudia. 2007. *Poder y élites en Santa Cruz. Tres visiones sobre un mismo tema*, Cordaid-Cedure; Colección Ciencias Sociales, Santra Cruz de la Sierra, 2007.
- Parandekar, Suhas, Vos, Rob y Winkler Donald. 2002, “Ecuador: Crisis, poverty, and Social Protection”, en: Beckernan, Paul and Solimano, Andrés, Eds., “*Crisis and Dollarization in Ecuador*, The World Bank, Washington D.C, pp. 127-176.
- Ramírez G, Franklin, Stefanoni, Pablo. 2006. “La política de los movimientos sociales en Bolivia. Diálogo con Álvaro García Linera”. En: *Íconos, Revista de ciencias sociales*, No. 25, Mayo, Quito, Págs. 91-107.
- Ramírez, Franklin. 2003. El paso del movimiento indio y Pachakutik por el poder. En: *Osal* No. 11, agosto 2003.
- Rea, Carmen. 2016. *Complementando racionalidades: la nueva pequeña burguesía aymara en Bolivia*. Revista Mexicana de Sociología, 78, 375-407.
- Rettberg, Angelika. 2002. “Empresarios y política en Colombia: Un estudio de caso del gobierno Samper (1994-1998). En: *Revista de Estudios Sociales*, Junio, No. 012, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2002, pp. 54-67.
- Rettberg, Angelika. 2005. “Business versus Business? Grupos and organized Business in Colombia, In, *Latin American Politics and Society*, Vol. 47, No. 1, Pág. 31-54.
- Rodríguez C, Antonio. 2010. *El ‘proceso de cambio’ como catarsis colectiva. La recomposición de roles y actorías en el Estado, organizaciones sociales y ONG en Bolivia*. Centro Mainumby Ñakurutú, Edición digital en: <http://www.mainumby.org.bo/eventos/conversatorios-2/conversatorio1/>. Fecha de consulta, 20 de marzo de 2013.
- Romero A, Pedro. 2007. Crisis Bancaria En Ecuador: Causas Y Posibles Soluciones. /, 1-35.
- Roseberry, William. 1993. “Beyond the Agrarian Question in Latin America,” En *Confronting Historical Paradigms*. Fred Cooper et al (eds.). Wisconsin: University of Wisconsin Press: pp. 318-370.
- Roseberry, William. 1994. *Anthropologies and Histories. Essays in culture, History and Political Economy*, Rutgers University Press, pp. 1-14; 30-54.
- Rosnes, Ane .2010. *Las luchas por el poder en tiempos de cambio. Análisis del Comité cívico Pro Santa Cruz y su oposición al gobierno central Boliviano, 2006-2010*, Tesis de Maestría, universidad de Bergen.
- Rueda L, María T. 1993. “Los empresarios en la redefinición del proyecto nacional”, En: *Sociológica, Revista del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana*, Año, 8, No. 21
- Sader, Emir. 2005. *La revolución democrática en Bolivia*. *Archivo de Chile*. Disponible en: colum_sader00025.pdf (archivochile.com)

- Samaniego, Pablo. 2001. "La política fiscal en la dolarización: una reflexión", En: Marconi, S., (Editor) *Macroeconomía y economía política en dolarización*, Abya-Yala/UPS/ILDIS/UASM, pp. 207-226
- Sanjinés, Ricardo. 2006.. *Biografía de la empresa privada boliviana*, Confederación de Empresarios privados de Bolivia, Tres tomos, La Paz, 2006.
- Sanjinés, Ricardo. 2010. *Cámara Nacional de Comercio. Una historia de 120 años. Volumen 2, Revolución, Dictadura y Democracia*, Editorial. Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, La Paz.
- Santos A., Eduardo (1989). La pobreza en el Ecuador. *Revista de la CEPAL*, 38, 121-132.
- Sassen, Saskia. 2010. *Territorio, autoridad y derechos. De los ensambles medievales a los ensambles globales*. Traducción de María Victoria Rodil, Editorial Katz, Buenos Aires,
- Schejtman, Alexander et al. 2006. *Bolivia: Cambios radicales en el modelo institucional y persistencia del estancamiento y la pobreza*. Marzo, edición digital.
- Ross Schneider, Ben y Wolfson, Leandro. 1999. "Las relaciones entre el estado y las empresas y sus consecuencias para el desarrollo. Una revisión de la literatura reciente". En: *Desarrollo económico*, Vol. 39, No. 153, Abril, junio, 1999, PP., 45-75.
- Schneider, Alejandro, Junio 2016. "Economía, política y conflictividad minera durante las presidencias de Evo Morales en Bolivia (2006-2016)", En: *Perfiles Económicos*, No. 1, pp, 83-118.
- Ross Schneider, Ben. 1995. "La burguesía desarticulada de Brasil", En: *Revista mexicana de sociología*, Vol. 57, No. 4. Reforma económica y empresariado en América Latina (Octubre-diciembre. pp. 135-153.
- Ross Schneider, Ben R y Wolfson, Leandro. (2005. "La organización de los intereses económicos y las coaliciones políticas en el proceso de la reforma de mercado en América Latina, En: *Desarrollo económico*, Vol., 45, No. 179 (oct.-dec), Pág. 349-372.
- Ross Schneider, Ben R (1998). "The State and Collective Action: Business politics in Latin America. Paper prepared for delivery at the meeting of the Latin American Studies Association, Chicago, IL, September 1998b
- Ross Schneider, Ben. 2002. "Why is Mexican Business so Organized? In: *Latin American Research Review*, Vol. 37, No. 1. (2002), pp. 77-118
- Ross Schneider, Ben. 2004. *Business Politics and the State in Twentieth-Century Latin America*. Cambridge University Press.
- Schneider, Ben R. 2010. "Crises and Institutional Origins: Business Associations in Latin America: In: DONER, Richard F., *Explaining institutional innovation. Case Studies from Latin America and East Asia*. Social, Science Research Council, 2010
- Schneider, Ben R (Review). 1998. "Elusive Synergy: Business-government relations and development embedded Autonomy: State and industrial transformation by Peter Evans; The State and capital in Chile: business elites, Technocrats, and market Economics by Eduardo Silva; Big Business and Wealth of Nations by Alfred Chandler; Franco Amatori: Takahashi Hikino", In: *Comparative Politics*, Vol. 31, No. 1 (Oct., 1998 a), pp 101-122.
- Sevares, Julio. 2007. Modelos de desarrollo asiático: lecciones para América Latina. *Estudios*, 20, 219-236.
- Solimano, Andrés. 2002), "Crisis and Dollarization: An Overview, En: Beckerman P y Solimano, A. Eds., *Crisis and Dollarization in Ecuador. Stability, Growth, and Social Equity*. The World Bank. Washington D.C., pp. 1-16
- Soruco, Ximena; Plata Wilfredo y Medeiros, Gustavo. 2008. *Los Barones del oriente, El Poder en Santa Cruz, Ayer y Hoy*, Fundación Tierra, Santa Cruz, 2008.

- Spalding, Rose. 1991. Capitalist and Revolution: State-private sector relation in Revolutionary Nicaragua (1979-1990). (Preliminary draft). Paper prepared for the XVI International Congress of the Latin American Studies Association, Washington, D.C., April 4-5, 1991.
- Spalding, Rose. 1994. Capitalist and revolution, Working Paper, No. 202, March 1994, Kellogg's Institute.
- Stefanoni, Pablo. 2006. *El nacionalismo indígena en el poder*. Osal, Año VI, No. 19, Buenos Aires, Julio.
- Stefanoni, Pablo. 2008. "Prefacio". En: García Linera, Álvaro, ed *La potencia Plebeya, Acción Colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. Clacso-Prometeo Libros, La Paz, 2008.
- Stefanoni, Pablo; Ramírez, Franklin y Svampa, Maristela. 2009. *Las vías de emancipación. Conversaciones con Álvaro García Linera*, Editorial Ocean Sur, México.
- Steinmetz, George (1999). "Introduction" , Culture and the State. En: Steinmetz, George (comp.): State/culture. State-formation after the cultural Turn. Cornell University Press, USA.
- Svampa, Maristela y Steanoni, Pablo, Coords. 2007. *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, Clacso libros, Osal, Editorial, El Colectivo, Buenos Aires.
- Svampa, Maristela y Stefanoni, Pablo (2009). *Entrevista a Álvaro García Linera. "Evo simboliza la ruptura de un imaginario restringido a la subalternidad de los indígenas"*. En: POLET, François, (Coord.). *La Bolivia de Evo ¿Democracia, indigenista y socialista?*. Editorial Popular, Madrid.
- Svampa, Maristela. 2009. "Bolivia, Entre el despliegue de la matriz comunitaria y la actualización de lo nacional-popular". En: POLET, François, (Coord.). *La Bolivia de Evo ¿Democracia, indigenista y socialista?* Editorial Popular, Madrid.. Págs. 55-77.
- Tapia, Luis. 2009-a. *La coyuntura de la autonomía relativa del estado. Comuna Muela del Diablo* CLACSO: La Paz.
- Tapia, Luis. 2009-b. "Representación, participación y democratización en las relaciones Estado-Sociedad civil en Bolivia", En: Cynthia J., Arnson et al., *La "Nueva Izquierda" en América Latina: Derechos Humanos, Participación Política y Sociedad Civil*, Woodrow Willson International Center for Scholar, Edición Digital, pp.115-128.
- Thwaites, Mabel. 1994. "La Noción Gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo" En: Edgardo Logiúdice y Leandro Ferreyra, Gramsci mirando al sur, Ediciones Kohen y Asociados Internacional, Buenos Aires
- Thomson, Sinclair. 2003. Revolutionary Memory in Bolivia: Anticolonial and National Projects from 1781 to 1952", en Grindle and Domingo (Eds), *Proclaiming revolution. Bolivia in comparative perspective*, David Rockefeller Center- Harvar University Press, Uk, pp 117-134.
- Torrico, Erick. 2007. *La narrativa periodística desorganizadora: La prensa en la crisis de hegemonía en Bolivia*. Revista Académica De La Federación Latinoamericana De Facultades De Comunicación Social, 75, 1-7.
- Touraine, Alain .1989. *América Latina, Política y Sociedad*, Editorial Espasa-Calape, Madrid.
- Tovar M, Jesús. 2008. "Tres corrientes y un dilema de la izquierda latinoamericana", En: *Metapolítica*, No. 57.
- Tsolakis, Andreas. 2009. *Globalization and the reform of de Bolivian State. 1985-2005*, Ph.D Thesis, University of Warwick,
- Unda, Mario. 2005. "Región Andina. Quito en abril : los forajidos derrotan al coronel". En: *OSAL : Observatorio Social de América Latina*. Año 6 no. 16 (jun. 2005-). Buenos Aires

- Unda, Mario. 2006. "Ecuador: Un momento de definiciones", En: *OSAL*, No. 109, Año VI, No. 21, Septiembre-diciembre, Buenos Aires
- Uribe, Pedro. 1976. *Estructura de la desigualdad del ingreso en América latina*. El Colegio de México, 10, 68-92.
- Valdés Francisco. 1988) "Los empresarios, la política y el Estado". En: *Cuadernos políticos*, No. 53, Editorial Era, México, Enero-Abril, 1988, PP., 47-70.
- Valdés, Francisco. 1997. *Autonomía y legitimidad. Los empresarios, la política y el Estado en México*, Siglo XXI editores, México
- Valdés, Francisco y Luna, Matilde. 1990. "Perspectivas teóricas en el estudio de los empresarios en México", En: *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 52, No. 2, Abril-Junio, pp. 3-17.
- Vega, Fernando. 2013. "El carácter del Estado en la Revolución Ciudadana" En. Álvarez et al, *El correísmo al desnudo*, Montecristi Vive, Quito, pp. 102-119
- Verdesoto C, Luis. 2014. *Los actores y la producción de la democracia y la política en Ecuador. 1979-2011*, Abya Yala, Quito.
- Viguera, Aníbal. 1996. "Empresarios y acción política en América Latina. Una perspectiva comparada. En. Nueva sociedad, No. 143, Mayo-Junio 1996, pp. 174-189.
- Viguera, Aníbal. 1998. "Estado, empresarios y reformas económicas: En busca de una perspectiva analítica integradora". En: *Perfiles Latinoamericanos*, No. 12, junio de 1998. Pág. 9- 51.
- Villegas Q, Carlos. 2001. "De la crisis coyuntural a la crisis estructural", En: *Umbrales. Revista del Posgrado en Ciencias del Desarrollo*, No. 10, CIDES-UMSA, pp. 7-43.
- Vos, Rob (1985). *El Modelo De Desarrollo Y El Sector Agrícola En Ecuador, 1965-1982*. Fondo de Cultura Económica, 52, 1097-1140.
- Whitehead, Laurence 2003 "The Bolivian National Revolution: A comparison", en: Grindle and Domingo (Eds), *Proclaiming revolution. Bolivia in comparative perspective*, David Rockefeller Center- Harvar University Press, Uk, pp. 25-53
- Webber, Jeffery. 2010. "Carlos Mesa, Evo Morales, and a Divided Bolivia (2003 – 2005)", En: *Latin American Perspectives*, Vol 37, No 3, Pp. 51-61.
- Weber, Max. 2002. *Economía y sociedad. Un esbozo de sociología comprensiva*. Edición preparada por Johannes Winckelmann. Traducción de José Medina Echavarría, Juan Roura y otros. Fondo de Cultura Económica. Segunda Edición de la cuarta en alemán. Colombia.
- Weisbrot, Mark. 2007. *La economía boliviana en el primer año*, CEPR, Washington. Edición Digital.
- Weisbrot, Mark, Ray, Rebeca y Johnston, Jake., (2009). *Bolivia: La economía bajo el gobierno de Morales*, Centro de Investigaciones en Economía y política, Washington.
- Williams, James. 2005) *Understanding poststructuralism*, Acumen, London
- Wolf, Eric. 1993. *Europa y la gente sin historia*, Traducción de Agustín Bárcenas, Fondo de Cultura Económica, México,
- Wolf, Jonas. 2016 *Business Power and the Politics of Postneoliberalism: Relations Between Governments and Economic Elites in Bolivia and Ecuador*, in: *Latin American Politics and Society*, Vol, 58, No. 2. Pp. 124-147
- Yashar, Debora. 2008. "Política indígena en los países andinos: patrones cambiantes de reconocimiento, reforma y representación" y "La crisis de la representación democrática en los países andinos: un panorama general". En *La crisis de la representación democrática en los países andinos*. Bogotá: Norma: pp. 387-438.
- Ybarnegaray o, Jeny. 2011. "Bolivia: Del 'proceso de Cambio' a los cambios en el proceso. A propósito del conflicto en Torno al Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro

Sécure”, En: *Bolivian Studies Journal/Revista de Estudios Bolivianos*, Vol. 18. Pp. 70-114.

Younger Stephen. 1990. *La fuga del Capital en el Ecuador*. Banco Central del Ecuador, Cuestiones económicas, pp 49-87.

Zabaleta M, René. 1985. “El Estado en América Latina”, En. *Revista de Economía*, Facultad de Ciencias Económicas, UNAM, México

Prensa Digital

Confianza empresarial registra crecimiento; <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/confianza-empresarial-registra-crecimiento-294208.html> Publicado el 28/Abril/2008 | 00:00

Empresarios bolivianos: clima de inversión mejora.

<http://www.elpais.com.uy/120130/pecono-621627/economia/empresarios-bolivianos-clima-de-inversion-mejora/>

Tata encuentra al país como un lugar estratégico de crecimiento empresarial;

<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/tata-encuentra-al-pais-como-un-lugar-estrategico-de-crecimiento-empresarial-368265.html> ; Publicado el 17/Septiembre/2009 | 00:12

Periódicos y revistas Consultados

El Telégrafo, Ecuador: 2006-2014

El Universo, Ecuador: 2006-2014

El Comercio, Ecuador: 2006-2014

El Tiempo (Cuenca) Ecuador: 2006:2014

Revista Gestión, Ecuador: 2006-2014

Revista Vanguardia, Ecuador. 2006-2014

Revista Industrias, Ecuador, 2013-2016

El Deber, Bolivia, 2006-2008

La Razón, Bolivia, 2006-2009

La Opinión, Bolivia -2005-2012

Los Tiempos, Cochabamba-Bolivia, 2005-2015

Entrevistas

Gabriel Dabdoub, (Marzo de 2014). Comunicación personal. Confederación de Empresarios privados de Bolivia, CAINCO, Federación de empresarios privados Santa Cruz, Com. Entrevista, 2014, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Henry Kronfle, (Agosto 2013). Comunicación Personal, presidente Cámara de Industrias de Guayaquil, Quito-Ecuador

Diego Salgado, (2013). Cámara de Comercio De Quito, Asambleísta por CREO. Entrevista, 2013, Quito-Ecuador

Roberto Aspiazú (Agosto 2013), Comunicación Personal, Presidente Comité Empresarial ecuatoriano. Quito

Gabriela Calderón, Comunicación Personal, Columnista El Universo-Fundación El Cato, Entrevista, 2014

Pablo Dávila (Septiembre de 2013). Comunicación Personal, Cámara de Industrias de Pichincha, Entrevista, 2013

Blasco Peñaherrera Solah (Julio de 2014) Presidente Cámara de Comercio de Quito, 2014

Eduardo Cadena, (Junio de 2014, Comunicación personal. Presidente Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción del Ecuador,

Mario Yaffar de la Barra (2014) Comunicación Personal, Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, Entrevista, 2014

Rodolfo Baquerizo (Marzo de 2014), Comunicación Personal. Periodista, columnista y político de Guayaquil, Guayaquil

Luis Eduardo Echeverría “Lolo Echeverría” (Febrero, 2014) Comunicación Personal, Jefe de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Quito, Periodista. Quito.